escola de cultura de pau

alerta 2017!

Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz



Icaria editorial

Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2017!

Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz

Elaborado por:
Iván Navarro Milián
Josep Maria Royo Aspa
Jordi Urgell García
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

Prefacio de:
Margarita Arboix
Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona

Prólogo de:
Tom Woodhouse
Profesor Emérito de resolución de conflictos
Universidad de Bradford

ècp escola de cultura de pau

Este libro ha sido impreso en papel reciclado y libre de cloro

Informe finalizado en febrero de 2017.

Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB
Impresión: Ulzama, S.L.
Diseño: Lucas Wainer Mattosso

ISBN: 978-84-9888-787-7
Depósito legal: B 10421-2003

El presente informe ha sido elaborado por:
Iván Navarro Milián (conflictos armados, tensiones y procesos de paz), Josep Maria Royo Aspa (conflictos armados, tensiones y procesos de paz), Jordi Urgell García (conflictos armados, tensiones y procesos de paz), Pamela Urrutia Arestizábal (conflictos armados, tensiones, procesos de paz y género), Ana Villellas Ariño (conflictos armados, tensiones, procesos de paz y género) y María Villellas Ariño (género, conflictos armados, procesos de paz y tensiones).

Los contenidos de este informe pueden ser libremente reproducidos y difundidos, siempre que se cite adecuadamente. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau de la UAB y no refleja necesariamente la opinión de la ACCD.

Para citar este informe:
Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*
Barcelona: Icaria, 2017.

Escola de Cultura de Pau
Parc de Recerca, Edifici MRA,
Plaça del Coneixement,
Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra (España)
Tel: +34 93 586 88 48/ 93 586 88 42;
Fax: +34 93 581 32 94
Email: pr.conflictes.escolapau@uab.cat
Web: http://escolapau.uab.cat

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas 7

Prefacio de Margarita Arboix
Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona 9

Prólogo de Tom Woodhouse
Profesor Emérito de resolución de conflictos,
Universidad de Bradford 11

Resumen Ejecutivo 15

Capítulos

1. Conflictos armados 29
   1.1. Conflictos armados: definición 29
   1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2016 32
      1.2.1. Tendencias globales y regionales 32
      1.2.2. Impacto de los conflictos en la población civil 36
      1.2.3. Embargos de armas 40
   1.3. Conflictos armados: evolución anual 43
      1.3.1. África 43
         - África Occidental 43
         - Cuerno de África 46
         - Grandes Lagos y África Central 49
         - Magreb - Norte de África 58
      1.3.2. América 61
      1.3.3. Asia y Pacífico 62
         - Asia Meridional 62
         - Asia Oriental 67
         - Sudeste Asiático y Oceanía 68
      1.3.4. Europa 74
         - Europa Oriental 74
         - Rusia y Cáucaso 75
         - Sudeste de Europa 75
      1.3.5. Oriente Medio 77
         - Golfo 77
         - Mashreq 80

2. Tensiones 89
   2.1. Tensiones: definición 89
   2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2016 95
      2.2.1. Tendencias globales 95
      2.2.2. Tendencias regionales 97
   2.3. Tensiones: evolución anual 100
      2.3.1. África 100
         - África Austral 100
         - África Occidental 101
         - Cuerno de África 109
         - Grandes Lagos y África Central 115
         - Magreb - Norte de África 123
      2.3.2. América 125
         - América del Norte, Centroamérica y Caribe 125
         - América del Sur 130
      2.3.3. Asia y Pacífico 133
         - Asia Central 133
         - Asia Meridional 136
         - Asia Oriental 142
         - Sudeste Asiático y Oceanía 145
      2.3.4. Europa 146
         - Europa Oriental 146
         - Rusia y Cáucaso 148
         - Sudeste de Europa 152
      2.3.5. Oriente Medio 154
         - Golfo 154
         - Mashreq 160

3. Procesos de paz 167
   3.1. Procesos y negociaciones de paz: definiciones 167
   3.2. Procesos y negociaciones de paz: tendencias y panorámica general en 2016 170
   3.3. Procesos de paz: evolución anual 174
      3.3.1. África 174
         - África Austral 174
         - África Occidental 175
         - Cuerno de África 177
         - Grandes Lagos y África Central 179
         - Magreb - Norte de África 189
      3.3.2. América 191
      3.3.3. Asia y Pacífico 194
         - Asia Meridional 194
         - Sudeste Asiático y Oceanía 196
      3.3.4. Europa 203
         - Europa Occidental 203
         - Europa Oriental 204
         - Rusia y Cáucaso 206
         - Sudeste de Europa 209
      3.3.5. Oriente Medio 211
         - Golfo 211
         - Mashreq 213

4. Género, paz y seguridad 219
   4.1. Desigualdades de género 219
   4.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género 220
      4.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones 220
      4.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados 223

4.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado 224
4.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género 224
4.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad 224
4.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz 227
4.3.3. Iniciativas de la sociedad civil 230

5. Oportunidades de paz para 2017 233
5.1. La inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo de paz en Colombia 234
5.2. La reanudación de las conversaciones de paz entre el Gobierno de Filipinas y el NDF 236
5.3. Un proceso de paz inclusivo en Myanmar 238
5.4. ¿Una oportunidad para la construcción de confianza multinivel en Georgia? Mecanismos de prevención de incidentes y perspectiva de género 240
5.5. Las negociaciones internacionales en 2017 sobre la prohibición de las armas nucleares: oportunidad histórica para un tratado 242

6. Escenarios de riesgo para 2017 245
6.1. El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias 246
6.2. Libia: ante un escenario de inestabilidad crónica 248
6.3. Los múltiples frentes violentos y el aumento de la desestabilización en Nigeria 250
6.4. Colapso *de facto* del acuerdo de paz en Sudán del Sur 252
6.5. Afganistán, un conflicto enquistado 254
6.6. El incremento de la violencia y la creciente presencia de ISIS en Mindanao 256
6.7. La cuestión kurda en Turquía y la multiplicación de los frentes de guerra 258
6.8. Israel-Palestina: la agonía de la solución de dos Estados y el riesgo de mayor violencia a 50 años de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania 260
6.9. La retirada de países africanos de la CPI retroceso en términos de protección de los derechos humanos 262
6.10. Siria y el fracaso en la protección de civiles en contextos de conflicto armado 264

Glosario 267
Escola de Cultura de Pau 275

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1. Conflictos armados ____ 28
Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2016 ____ 30
Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2016 ____ 33
Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad ____ 35
Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados ____ 36
Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones ____ 36
Mapa 1.2. Número de personas desplazadas internas al finalizar 2015 ____ 39
Tabla 1.2. Embargos de armas de la ONU, UE, OSCE y la Liga Árabe en 2016 ____ 41

Mapa. 2.1. Tensiones ____ 88
Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2016 ____ 90
Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2016 ____ 96
Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones ____ 97

Mapa 3.1. Procesos y negociaciones de paz ____ 166
Tabla 3.1. Resumen de los procesos y las negociaciones de paz en 2016 ____ 168

Mapa 4.1. Desigualdades de género ____ 218
Tabla 4.1. Países en conflicto armado y tensión con niveles de discriminación de género altos o muy altos ____ 220
Cuadro 4.1. Actores armados y violencia sexual en conflictos ____ 221
Cuadro 4.2. La financiación de la agenda mujeres, paz y seguridad ____ 225

Mapa 5.1. Oportunidades de paz para 2017 ____ 233

Mapa 6.1. Escenarios de riesgo para 2017 ____ 245

Prefacio

Margarita Arboix
Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona

En la primera edición del informe *Alerta!*, publicado el año 2002, los autores destacaban, en los comentarios finales, el hecho de que la práctica de toma de decisiones sobre prevención de conflictos armados, transferencias de armas y cooperación internacional no solo debe basarse en los principios de fomento de la paz, la seguridad y la estabilidad, tantas veces invocados por los Estados miembros de la Unión Europea, sino que también es necesario emplear instrumentos concretos de seguimiento y de evaluación desarrollados por centros de investigación reconocidos internacionalmente.

Dicho y hecho, el informe *Alerta!* se ha convertido, a lo largo de 15 años, en un instrumento de análisis de referencia sobre conflictividad y procesos de paz a nivel global. A través del despliegue de una metodología adecuada, fruto de la experiencia de la Escola de Cultura de Pau, el informe nos ofrece periódicamente un análisis exhaustivo y actualizado de la situación de los conflictos en el mundo y permite identificar tendencias, señalar situaciones de riesgo y –lo que es aún más importante–, acercarnos experiencias exitosas que han conducido procesos de paz a buen puerto. Es por este motivo que, de entrada, quiero destacar que el conjunto de informes publicados no son sólo una fuente valiosa de conocimiento sobre conflictos, tensiones bélicas y vulneraciones de derechos humanos, sino que constituyen un compendio de buenas prácticas que, sin ninguna duda, pueden ayudar a afrontar procesos y negociaciones de paz.

He querido remarcar este hecho porque creo que hace falta reconocer la tarea docente e investigadora de la Escola de Cultura de Pau, pero también su voluntad de sensibilización y de participación activa en la resolución de conflictos.

Esta nueva edición del informe Alerta! consolida una iniciativa exitosa de un valor extraordinario que, desde el rigor académico, nos interpela y alienta a seguir trabajando en la difusión de los valores de la cultura de la paz

Una universidad como la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que reivindica el carácter público y el compromiso social como principios fundacionales, no puede olvidar nunca los valores de la solidaridad y la cooperación. Fruto de esta concepción de universidad socialmente responsable, la UAB siempre ha estado atenta y sensible a problemáticas sociales diversas y ha contribuido a paliar, en la medida de sus posibilidades, las consecuencias de crisis humanitarias, sociales y medioambientales mediante la creación de programas de cooperación específicos y programas de voluntariado. Las campañas de ayuda a los refugiados bosnios en Croacia en los años noventa, el apoyo del voluntariado de la UAB en la limpieza de las costas gallegas tras el derrame de fuel del Prestige en el año 2002, o la implicación en la acogida de personas refugiadas del conflicto sirio actual, son solo un ejemplo.

La transferencia a la sociedad de los conocimientos generados forma parte de lo que denominamos tercera misión de la universidad. Una misión que, juntamente con la tarea docente e investigadora, confiere a la universidad un papel clave a la hora de afrontar nuevos retos sociales y de dar respuesta a problemáticas actuales y futuras. En el caso de la UAB, estas misiones están estrechamente vinculadas a una sensibilidad especial por educar en valores cívicos y sociales inspirados, como muy bien expresan nuestros estatutos, en los principios de libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad.

Esta nueva edición del informe *Alerta!* consolida una iniciativa exitosa de un valor extraordinario que, desde el rigor académico, nos interpela y alienta a seguir trabajando en la difusión de los valores de la cultura de la paz.

Prólogo

Tom Woodhouse
Profesor Emérito de resolución de conflictos, Universidad de Bradford

Cada año desde la publicación de su primera edición en 2001, todas las personas preocupadas por la resolución de conflictos y la construcción de paz recurren al informe *Alerta!* como un recurso indispensable para orientar la investigación, la política y la acción. La publicación de la edición de 2017 es especialmente apreciada por razones que pocos de nosotros podíamos haber predecido incluso seis meses atrás. En primer lugar, en junio de 2016 se asistió a la decisión, tras un referéndum estatal, de que el Reino Unido inicie el proceso de salida de la Unión Europea. Aún está por ver el coste del *Brexit* en términos económicos, culturales, políticos y geopolíticos. Mientras la mayoría de analistas se han centrado en los costes económicos del *Brexit*, el impacto en relación a las amenazas a la paz y la seguridad es potencialmente más preocupante. No debería olvidarse que la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la paz en 2012 por contribuir al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa, por reconciliar Francia y Alemania, promover los derechos humanos y la democratización y por contribuir a través de los esfuerzos internacionales de pacificación a la resolución de los conflictos con base étnica en los Balcanes. Con todos sus defectos, la UE ha sido parte de un sistema de seguridad regional y global que ha aspirado al menos a garantizar la resolución pacífica de los conflictos, incluso si en un contexto turbulento y a menudo impredecible esto ha sido difícil de conseguir.

En la actualidad estamos entrando, aparentemente, en una era de formulación de políticas a través de Twitter, o noticias falsas mediante Facebook y otras plataformas de redes sociales: la era de la "posverdad"

La elección de Donald Trump a la presidencia estadounidense en noviembre de 2016, un resultado que también sorprendió a muchos en EEUU y en todo el mundo, ha incrementado los niveles de imprevisibilidad e incertidumbre en relación a la paz y seguridad internacional. Con su política de América Primero, proclamada enérgicamente y repetida a menudo, el presidente Trump y sus asesores, para bien o para mal, en la etapa inicial de su mandato aparentemente cuestionan los fundamentos del orden mundial liberal defendido por todos los presidentes americanos desde 1945. Sea lo que sea que ocurra en los próximos cuatro años, parece razonable pensar que los procesos de construcción de paz multilaterales, cooperativos y colectivos como los apoyados por *Alerta!* harán frente a nuevos retos y obstáculos. Uno de esos obstáculos – y habrá muchos otros– es la emergencia de un clima de discurso público demagógico, emotivo e irracional, que se ha presenciado tanto en el referéndum del Reino Unido sobre la UE como en la campaña presidencial de EEUU. En la actualidad estamos entrando, aparentemente, en una era de formulación de políticas a través de Twitter, o noticias falsas mediante Facebook y otras plataformas de redes sociales: la era de la "posverdad", como muchos analistas la han denominado.

Es por ello que la publicación *Alerta 2017!* no solo debe ser bienvenida, sino celebrada. Ahora más que nunca antes necesitamos debates argumentados, análisis sólidos, investigación fundamentada e incidencia lúcida y atractiva para un orden global inclusivo y cosmopolita basado en herramientas efectivas, técnicas y conocimiento de mantenimiento de la paz, pacificación y construcción de paz. *Alerta!* es una publicación insignia en este empeño. Su lista de escenarios de riesgo para 2017 muestra 10 de los retos, pero también algunos de los avances y éxitos –un gran avance por ejemplo lo constituye la inclusión de manera amplia de la perspectiva de género en el acuerdo de paz de Colombia. De hecho, si miramos hacia atrás ediciones pasadas del *Alerta!* entre 2011 y 2017, en las que se recogen oportunidades y éxitos, obtenemos un mensaje convincentemente positivo sobre la efectividad de los esfuerzos globales continuados de construcción de paz y prevención de conflictos. Algunos ejemplos breves de la larga lista de las publicaciones de *Alerta!* son suficientes. En 2011: paz duradera en el País Vasco; formación de ONU Mujeres, el nuevo organismo para la defensa de la equidad de género. En 2012: Myanmar: una oportunidad para las reformas democráticas y la transformación de los conflictos (materializada desde entonces). En 2013: la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Filipinas y el MILF (actualmente en implementación, con Irene Santiago, una incondicional constructora de paz y defensora del papel de las mujeres en el ámbito de la paz, los conflictos y la seguridad, que preside el Panel de Implementación); Colombia: hacia un acuerdo de paz con las guerrillas –ahora en implementación. En 2014: la Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, una propuesta feminista de construcción de paz y recuperación de la memoria (que ha cristalizado totalmente en la actualidad, como se ha informado sobre

esta cuestión en 2017); el proceso de paz en Mindanao: inclusividad y perspectiva de género. En 2015: la confluencia de esfuerzos globales contra el reclutamiento de menores. En 2016: la exploración de escenarios de paz en el sur de Tailandia; la transición a la democracia y la paz en Myanmar; y la perspectiva de género en los procesos de paz: inclusividad y sostenibilidad.

Lo remarcable sobre este historial de avances en la construcción de paz, del cual el resumen anterior constituye solo una pequeña muestra de lo que se ha logrado en años recientes, es lo efectiva que resulta la construcción de paz sostenible a lo largo del tiempo, incluso en los conflictos más violentos y complejos, así como la cantidad de personas que trabajan de forma inspiradora para hacerlo posible. Con su foco en la construcción de paz como un afán positivo, y con su seguimiento y análisis riguroso y meticuloso, *Alerta!* visibiliza y reconoce los resultados del trabajo de las personas constructoras de paz invisibles y poco reconocidas. Hay otra historia que explicar ahí, que merece la pena repetir y ensalzar para contrarrestar el retroceso amenazador hacia el nacionalismo neo-realista y a las políticas competitivas de suma-cero basadas en el interés propio, al que podríamos enfrentarnos. Esta es la realidad, basada en datos y en un análisis racional que los investigadores, políticos y activistas de la comunidad de paz y conflictos han proporcionado sobre muchas de las expectativas y pronósticos planteados por las personas fundadoras de este ámbito unos cincuenta años atrás.

Cuando los fundadores de este campo definieron las primeras agendas investigadoras, la idea era que si podíamos analizar mejor los conflictos, podríamos avanzar en su prevención. Era una declaración ambiciosa en la Guerra Fría nuclear de los años 1950. No obstante, en los últimos veinte o treinta años, la mayoría de gobiernos, organizaciones de seguridad regionales y una variedad de organizaciones internacionales desde la ONU hasta el Banco Mundial y la OSCE, han desarrollado políticas de construcción de paz minuciosas. La investigación sobre paz y conflictos ha cambiado radicalmente el lenguaje de la comunidad política, en el que "análisis de conflictos", "prevención de conflictos" y "resolución de conflictos" son términos que se han convertido en habituales en el discurso. Asimismo, Johan Galtung introdujo el término "construcción de paz" por primera vez en el lenguaje académico. Está ahora establecida entre las estrategias y objetivos de centenares de ONG, y la ONU tiene su propia Comisión de Consolidación de la Paz. John Paul Lederach, entre otros, introdujo el término "transformación de conflictos", que ahora es sinónimo de la transformación radical de cambio pacífico desde la base, lenguaje común usado por ONG en todo el mundo. Irene Santiago y muchas otras constructoras de paz feministas insistieron en la importancia de incluir a las mujeres en la consecución e implementación de acuerdos de paz. En la actualidad en *Alerta 2017!* vemos cómo este trabajo da sus frutos, no solo en publicaciones académicas sino también de manera tangible en los acuerdos de paz.

La investigación sobre paz y conflictos ha cambiado radicalmente el lenguaje de la comunidad política, en el que "análisis de conflictos", "prevención de conflictos" y "resolución de conflictos" se han convertido en términos habituales en el discurso

No es solo una cuestión de etiquetas o lenguaje. Durante décadas, centros de investigación como la Escola de Cultura de Pau de la UAB, que realiza esta publicación, han construido metodologías sofisticadas y bases de datos que colectivamente constituyen recursos sin parangón para la clase política y activistas. Resulta interesante y significativo que las bases de datos comienzan ahora a trazar respuestas no solo a la pregunta de por qué y dónde tienen lugar los conflictos, sino también a la pregunta crucial de qué es la paz y cómo y dónde se construye y se sostiene. Existe en la actualidad una gran cantidad de bases de datos –Uppsala Conflict Data Program, Global Peace Index y Peace Accords Matrix en Notre Dame son algunos ejemplos. En general estas bases de datos proporcionan otra lección y motivo de celebración cautelosa, sugiriendo que a lo largo del tiempo se ha producido una reducción cuantificable de la violencia. Podemos no estar todos de acuerdo con la tesis de Pinker de que la conquista de la violencia puede haber sido uno de los mayores logros del siglo XX, pero en el contexto actual podemos sostener con cierta credibilidad y razón que hay un legado de conocimiento que merece la pena preservar, promover y difundir. En síntesis, cuanta más investigación de paz, más paz.

Por supuesto no hay lugar para la complacencia. Una mirada a *Alerta 2017!* lo deja bien claro. Los diez escenarios de riesgo identificados por su escalada de conflicto (Nigeria, Etiopía, Libia, Afganistán, Sudán del Sur, Mindanao, Turquía, Iraq-Palestina, la retirada de países africanos de la CPI y la continuada tragedia del fracaso en la protección de víctimas civiles de la guerra civil en Siria) plantean retos considerables y requieren ideas nuevas y dedicación. Una preocupación constante para la comunidad investigadora de paz y activistas de paz a lo largo de la era moderna ha sido el hecho de que el nuevo conocimiento científico y tecnológico sea con frecuencia apropiado para hacer avanzar el poder militar de los Estados y la letalidad y efectividad de los sistemas militares en general. En los primeros años del siglo XXI el mismo fenómeno parece estar a punto de repetirse, ya que la capacidad masiva de procesamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se aplica en la revolución de los asuntos militares (RMA, por sus siglas en inglés), en la que los sistemas de armas guiadas de precisión y automatizadas amenazan con una nueva guerra automatizada.

En el ámbito de las ideas, se hizo referencia al inicio de este prólogo sobre la manipulación de las redes sociales por grupos poderosos hostiles y opuestos a las políticas

y valores de la construcción de paz multilateral y multinacional, a favor de los intereses particulares de los Estados nación en pos de sus intereses geoestratégicos comerciales y militares. Uno de los mayores retos para los constructores de paz es actuar en los espacios y capacidades en el mundo virtual de las redes sociales y de las comunicaciones globales conectadas en red. El mundo virtual del ciberespacio es controvertido y conflictivo, de manera muy similar al mundo "real", pero los retos son los mismos en el sentido de que las agendas emancipadoras de la construcción de paz aplican al ciberespacio igual que a la pacificación convencional. El ámbito de los estudios de paz y conflictos se ha visto radicalmente afectado por el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de tal manera que las distinciones tradicionales entre los niveles de actividad nacionales, internacionales y locales han sido erosionadas y se está construyendo la base para una alianza global de construcción de paz. Internet facilita un espacio excepcionalmente global y cosmopolita que los constructores de paz pueden usar como una herramienta potente con la que educar, hacer incidencia y resolver problemas. Existe además el reto –especialmente en los tiempos en que los logros de la construcción de paz están en peligro de retroceso– de ser imaginativos y creativos, en el pensamiento y la acción, como lo fueron los y las fundadoras de este campo, y cambiar el equilibrio de poder en el mundo virtual, como en el real, de la ciberguerra a la ciberpaz. La desinformación, la propaganda, las noticias falsas y las políticas de la posverdad son fuerzas peligrosas y de escalada, y aún más en el contexto airado de los conflictos internacionales. Uno de los objetivos de *Alerta!* es fortalecer las capacidades para la resolución pacífica de conflictos. Ya sea en el ámbito virtual del ciberespacio o en el ámbito real, el fin fundamental sigue siendo la responsabilidad absoluta de proporcionar análisis fundamentado e inteligente en pos de los objetivos de la construcción de paz.

Resumen ejecutivo

Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de cuatro ejes: conflictos armados, tensiones, procesos de paz y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2016 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes del informe *Alerta 2017!* son las siguientes:

- Durante 2016 se registraron 33 conflictos armados, de los cuales 32 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (13) y Asia (10), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).

- Trece conflictos armados registraron una intensidad elevada durante el año: Libia, región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán y Nilo Azul), Sudán del Sur, Afganistán, Pakistán, Turquía (sudeste), Egipto (Sinaí), Iraq, Siria, Yemen (al-houthistas). El porcentaje de casos de alta intensidad (40% del total de guerras en 2016) supuso un incremento respecto a años anteriores (31% en 2015, 33% en 2014).

- Una gran parte de los contextos de conflicto (46%) registró un empeoramiento durante 2016, con mayores niveles de violencia e inestabilidad que el año anterior. En un tercio de los casos se observaron niveles de violencia similares a los del año anterior, mientras que en un 21% se asistió a una disminución de la violencia.

- Más allá de la naturaleza multicausal de la conflictividad armada, la mayor parte de los conflictos –24 en total, equivalentes al 73%– tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos o al sistema político, social o ideológico del Estado. Asimismo, las aspiraciones de carácter identitario y/o demandas de autogobierno estuvieron presente como una de las causas principales en un 52% de los casos –17 conflictos–.

- Durante 2016, los conflictos armados continuaron causando gravísimos impactos en la población civil, además de destrucción de infraestructuras y repercusiones de largo plazo. Fue de especial gravedad el caso de Siria, con múltiples abusos cometidos a gran escala, que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra y/o contra la humanidad.

- Uno de los impactos de los conflictos armados continuó siendo el fenómeno de la violencia sexual. Durante 2016 se registraron episodios graves de violencia sexual en los conflictos de Sudán del Sur, Nigeria, Iraq, Siria y Myanmar, entre otros.

- Se constató un grave aumento del desplazamiento forzado a nivel global, con un incremento de más de un 50% en un período de cinco años, según denunció ACNUR en 2016. Los balances de 2016 señalaban la continuación de la tendencia de años anteriores (65,3 millones de desplazados al finalizar 2015, incluyendo 21,3 millones de personas refugiadas). La guerra en Siria mantuvo al país como principal país emisor de población refugiada a nivel mundial.

- Al finalizar el año 2016 se contabilizaron 34 embargos de armas dirigidos contra un total de 22 Estados y grupos armados no estatales, cuatro menos que el año anterior.

- Durante 2016 se contabilizaron 17 conflictos armados y 59 situaciones de tensión en las que ni la ONU ni otras organizaciones regionales establecieron embargos de armas.

- Durante 2016 se identificaron 87 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas tuvo lugar en África (34 casos), seguida de Asia (20 casos), Europa (14), Oriente Medio (11) y América (ocho).

- Las tensiones de mayor gravedad en 2016 fueron Angola (Cabinda); Etiopía; Etiopía (Oromiya); Kenya; Mozambique; Nigeria; RDC; Túnez; El Salvador; Bangladesh; RPD Corea-EEUU, Japón, Rep. de Corea; RPD Corea-Rep. de Corea; India (Assam); India (Manipur); India-Pakistán; Pakistán;

Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj); Turquía; Egipto; Israel-Siria-Líbano; y Líbano.

- En línea con años anteriores, algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (46 casos), más de una cuarta parte fueron tensiones internas internacionalizadas (25 casos) y casi una quinta parte fueron tensiones internacionales (16 casos).

- En cuanto a la evolución de las tensiones, algo más de la mitad de los casos no experimentó cambios significativos (45 casos), una tercera parte registró un deterioro con respecto a 2015 (29 casos) y en algo más de una séptima parte de los casos se produjo una cierta mejoría (13 casos).

- En línea con años anteriores, el 69% de los casos de tensión tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos o la oposición al sistema político, social o ideológico de los Estados, lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder.

- El informe Alerta analiza 38 procesos y negociaciones de paz que tuvieron lugar durante 2016, de los cuales 15 transcurrieron en África, ocho en Asia, siete en Europa, cinco en Oriente Medio y tres en América.

- En un importante número de procesos de paz los principales protagonistas de las negociaciones fueron los gobiernos de los respectivos países y actores armados.

- En lo que respecta a las terceras partes implicadas en procesos de paz y negociación, destacó el papel desempeñado por Naciones Unidas –tercera parte en 13 de los 38 procesos analizados, un tercio del total (34%)–, en especial en África y Oriente Medio. También cabe mencionar el rol de tercera parte que juegan organizaciones regionales en diversas áreas, en especial en África y Europa.

- Temas como el desarme de grupos armados, la entrega de arsenales, la reintegración de ex combatientes o la liberación de prisioneros estuvieron en la agenda de negociaciones y procesos de paz.

- El 74% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género.

- Naciones Unidas señaló que más del 70% de las víctimas de trata son mujeres y niñas y que numerosos grupos armados de oposición se implican en delitos de trata.

- La sociedad civil lamentó el escaso cumplimiento de los compromisos adquiridos el año anterior por los Gobiernos durante la revisión de alto nivel de la implementación de la resolución 1325 en materia de mujeres, paz y seguridad.

- Organizaciones de mujeres de Myanmar, Malí, Sudán del Sur y Siria, entre otros países, reivindicaron mayor participación y capacidad de incidencia en los procesos de paz.

- El acuerdo de paz firmado en Colombia por el Gobierno y las FARC incluyó un enfoque de género de manera transversal, convirtiéndolo en el acuerdo más avanzado en materia de igualdad firmado hasta la fecha.

- El informe *Alerta!* identifica cinco oportunidades de paz para 2017: la inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo de paz en Colombia; la reanudación de las conversaciones de paz entre el Gobierno de Filipinas y el NDF; la inclusividad en el proceso de paz en Myanmar; la reanudación de los mecanismos de prevención de incidentes y la introducción de la perspectiva de género en el proceso de diálogo en Georgia; y las negociaciones a nivel internacional que tendrán lugar en 2017 sobre la prohibición de las armas nucleares, que pueden ofrecer una oportunidad histórica para el establecimiento de un tratado en este ámbito.

- El informe destaca otros 10 escenarios de alerta de cara al 2017: el incremento de la tensión en Etiopía; la inestabilidad crónica en Libia, que ha agravado la situación en el país; los múltiples frentes violentos que afectan a Nigeria; las consecuencias del colapso *de facto* del acuerdo de paz en Sudán del Sur; el conflicto enquistado en Afganistán y sus graves impactos en la población civil; el incremento de la violencia y la creciente presencia de ISIS en la región filipina de Mindanao; el deterioro de la cuestión kurda en Turquía y la multiplicación de los frentes de guerra; la agonía de la solución de dos Estados para el conflicto palestino israelí y el riesgo de mayor violencia cuando se cumplen 50 años de la ocupación de Gaza y Cisjordania; la retirada de países africanos de la Corte Penal Internacional; y Siria como ejemplo del fracaso en la protección de civiles en contextos de conflicto armado.

Estructura

El informe consta de seis capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global –causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo aborda los procesos de paz, mientras que el cuarto analiza las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. El quinto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una

coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz durante el año entrante. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los seis capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado, tensión sociopolítica y procesos de negociación; los embargos de armas decretados por los principales organismos internacionales y el número y la localización de las personas desplazadas por situaciones de violencia.

Conflictos armados

En el primer capítulo (**Conflictos armados**)[1] se describe la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas de los conflictos armados activos durante el año, se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2016, los impactos de los conflictos en la población civil, y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional, como los embargos de armas.

Durante el año 2016 se registraron 33 conflictos armados, 32 de los cuales seguían activos al finalizar el año

A lo largo de 2016 se observó una ligera reducción en el número de conflictos armados respecto a años anteriores. Durante 2016 se contabilizó un total de 33 casos de conflictos armados a nivel mundial frente a 35 contextos en 2015, 36 en 2014 y 35 en 2013. De los 33 casos registrados en 2016 sólo 32 permanecían activos al finalizar el año, ya que la situación en China (Turquestán Oriental), que enfrenta al Gobierno chino con organizaciones uigures, dejó de ser considerada como un conflicto armado activo en 2016 ante la significativa reducción en los niveles de violencia en el último año. En comparación con los conflictos armados del año anterior, el caso de India (Assam) ya se identificó como "finalizado" al acabar 2015 –aunque continuó siendo considerado como un contexto de tensión durante 2016–,mientras que la conflictividad armada en la región de Mindanao, Filipinas, pasó a ser analizada como un solo contexto dada la creciente complejidad de la violencia y la mayor coordinación e interdependencia entre los grupos armados que operan en el territorio.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, la mayor parte se concentraron en África (13) y Asia (10), en línea con años anteriores. Del resto de casos, seis tuvieron lugar en Oriente Medio, tres en Europa y uno en América. En lo referente al escenario del conflicto y los actores involucrados, cabe destacar que en 2016 solo uno de los contextos fue catalogado como un conflicto armado internacional –Israel-Palestina–, otros cinco tuvieron un carácter eminentemente interno, y **la gran mayoría fueron internos internacionalizados (26 de los 33 casos, equivalentes a un 79%)**. En todo caso, cabe tener en cuenta que

Conflictos armados en 2016*

ÁFRICA (13)	ASIA (10)	ORIENTE MEDIO (6)
Argelia (AQMI) -1992-	Afganistán -2001-	Egipto (Sinaí) -2014-
Burundi -2015-	*China (Turquestán Oriental) -2014-*	Iraq -2003-
Etiopía (Ogadén) -2007-	Filipinas (NPA) -1969-	Israel-Palestina -2000-
Libia -2011-	Filipinas (Mindanao) -1991-***	Siria -2011-
Malí (norte) -2012-	India (Jammu y Cachemira) -1989-	Yemen (al-houthistas) -2004-
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-**	India (CPI-M) -1967-	Yemen (AQPA) - 2011-
RCA -2006-	Myanmar -1948-	**EUROPA (3)**
RDC (este) -1998-	Pakistán -2001-	Rusia (Daguestán) -2010-
RDC (este-ADF) -2014-	Pakistán (Baluchistán) -2005-	Turquía (sudeste) -1984-
Somalia -1988-	Tailandia (sur) -2004-	Ucrania -2014-
Sudán (Darfur) -2003-		**AMÉRICA (1)**
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-		Colombia -1964-
Sudán del Sur -2009-		

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado. En cursiva, los conflictos finalizados durante 2016.
**En ediciones anteriores del informe *Alerta!* este caso había sido identificado como "Nigeria (Boko Haram)" por la concentración de las acciones armadas de esta organización en Nigeria. A partir de 2016 el caso pasa a denominarse "región Lago Chad (Boko Haram)" dada la regionalización del conflicto armado a la región denominada Lago Chad, compartida por Nigeria, Chad, Níger y Camerún.
***En la anterior edición del informe *Alerta!* el conflicto armado en Mindanao se abordaba desde dos casos: Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf) y Filipinas (Mindanao-BIFF).

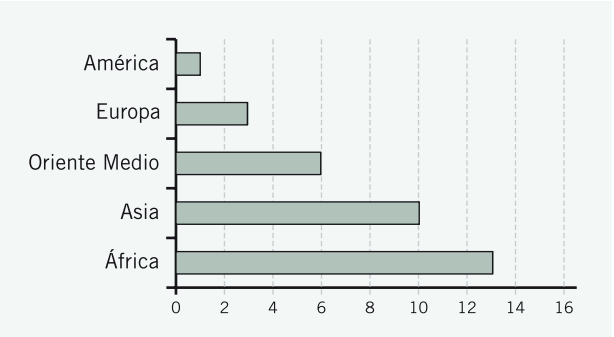
1. En este informe, se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o al control de los recursos o del territorio.

la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una dimensión internacional o influencia regional vinculada a factores como los flujos de personas refugiadas, el comercio de armas, la participación de combatientes extranjeros, el apoyo logístico o militar proporcionado por otros Estados a alguno de los bandos en pugna o a los intereses políticos o económicos de países vecinos al conflicto armado, por ejemplo, en lo referido a la explotación legal e ilegal de recursos.

La naturaleza multidimensional de los conflictos armados continuó siendo una constante. Como parte de ello, el 73% de los conflictos (24 casos) tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos o al sistema político, social o ideológico del Estado, lo que derivó en luchas por erosionar o acceder al poder. De esos casos, en 19 la búsqueda de un cambio de sistema fue un factor especialmente relevante, ya fueran conflictos con actores que defendían agendas de inspiración socialista (Colombia, India (CPI-M), Filipinas (NPA)), o disputas con actores armados de inspiración yihadista y que pretenden imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estas últimas organizaciones se encuentran las diversas filiales de al-Qaeda –como AQMI, que opera en Argelia, pero también en Libia y otros países del Sahel; o AQPA, en Yemen–; el grupo armado Estado Islámico (ISIS) y sus grupos afines –que le han declarado lealtad y aspiran a formar parte del pretendido califato–; además de organizaciones como Boko Haram en Nigeria, al-Shabaab en Somalia, Abu Sayyaf en Filipinas, grupos insurgentes que operan en la zona del norte del Cáucaso, en Rusia, o las milicias talibán que actúan en Pakistán y Afganistán. Asimismo, del total de 33 conflictos armados en 2016, el 52% (17 casos) tuvieron entre sus causas principales aspiraciones de carácter identitario y/o demandas de autogobierno, con una especial relevancia en contextos de Asia y Europa. Entre ellos cabe mencionar China (Turquestán Oriental), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Ucrania (este) y Turquía (sudeste).

Por otra parte, en materia de evolución de los conflictos armados a nivel global, durante 2016 una gran parte de los conflictos armados (46% de los casos) registró un empeoramiento durante 2016, con mayores niveles de violencia e inestabilidad que el año anterior. Algunos de esos contextos fueron Malí, Libia, Filipinas (Mindanao), Turquía (sudeste), Irán, Siria y Yemen. Un 21% asistió a una disminución de la violencia respecto al año anterior. Entre ellos, China (Turquestán Oriental), que dejó de ser considerado como un conflicto armado activo al finalizar el año, y Colombia, donde los avances en el proceso de paz permitieron una reducción en las dinámicas de violencia asociadas al conflicto. El 33% de los casos (11 conflictos) presentó una evolución similar a la de 2015.

Distribución regional del número de conflictos armados en 2016



En relación a la intensidad de los conflictos armados –valorada tanto por las repercusiones de las disputas en términos de letalidad como en los impactos de la violencia en la seguridad humana, la destrucción de infraestructuras y los desplazamientos forzados de población, entre otros factores–, el 40% de los casos (13 conflictos) tuvo una intensidad elevada. Se trata de un porcentaje que supone un aumento con respecto a años anteriores (31% en 2015, 33% en 2014**). Las guerras de intensidad elevada en 2016 fueron Libia, región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán y Nilo Azul), Sudán del Sur, Afganistán, Pakistán, Turquía (sudeste), Egipto (Sinaí), Iraq, Siria, Yemen (al-houthistas)**. En términos comparativos y en línea con los últimos años, Oriente Medio concentró la mayor proporción de conflictos armados de alta intensidad. Además, un 30% de los conflictos armados en 2016 tuvo una intensidad media y el restante 30% presentó una intensidad baja.

ACNUR constató el significativo aumento del desplazamiento forzado a nivel global, con un incremento de más de un 50% en un período de cinco años

Durante 2016, los conflictos armados continuaron provocando gravísimos impactos en la población civil, reflejados no solamente en los elevados niveles de letalidad, sino también en otros múltiples impactos por el uso de la violencia indiscriminada o deliberada contra población civil. Entre los casos especialmente graves en 2016, numerosos informes de ONG y de organismos de la ONU denunciaron múltiples abusos cometidos a gran escala en Siria, que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra y/o contra la humanidad. Asimismo, las consecuencias derivadas de la falta de distinción entre civiles y combatientes en el marco de los enfrentamientos y el uso de la violencia fueron especialmente patentes durante 2016 en acontecimientos ocurridos en contextos como Malí, región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, RCA, RDC, Sudán del Sur, Afganistán, India (CPI-M), Myanmar, Ucrania (este), Turquía (sudeste), Rusia (Daguestán), Yemen (al-houthistas), Iraq, Israel-Palestina y Siria. Otro de los impactos de los conflictos armados continuó siendo el fenómeno de la violencia sexual, aunque en muchas ocasiones menos visible e infra-denunciado. Durante el año, otro de los temas de especial preocupación fueron los ataques contra infraestructuras y personal médico en

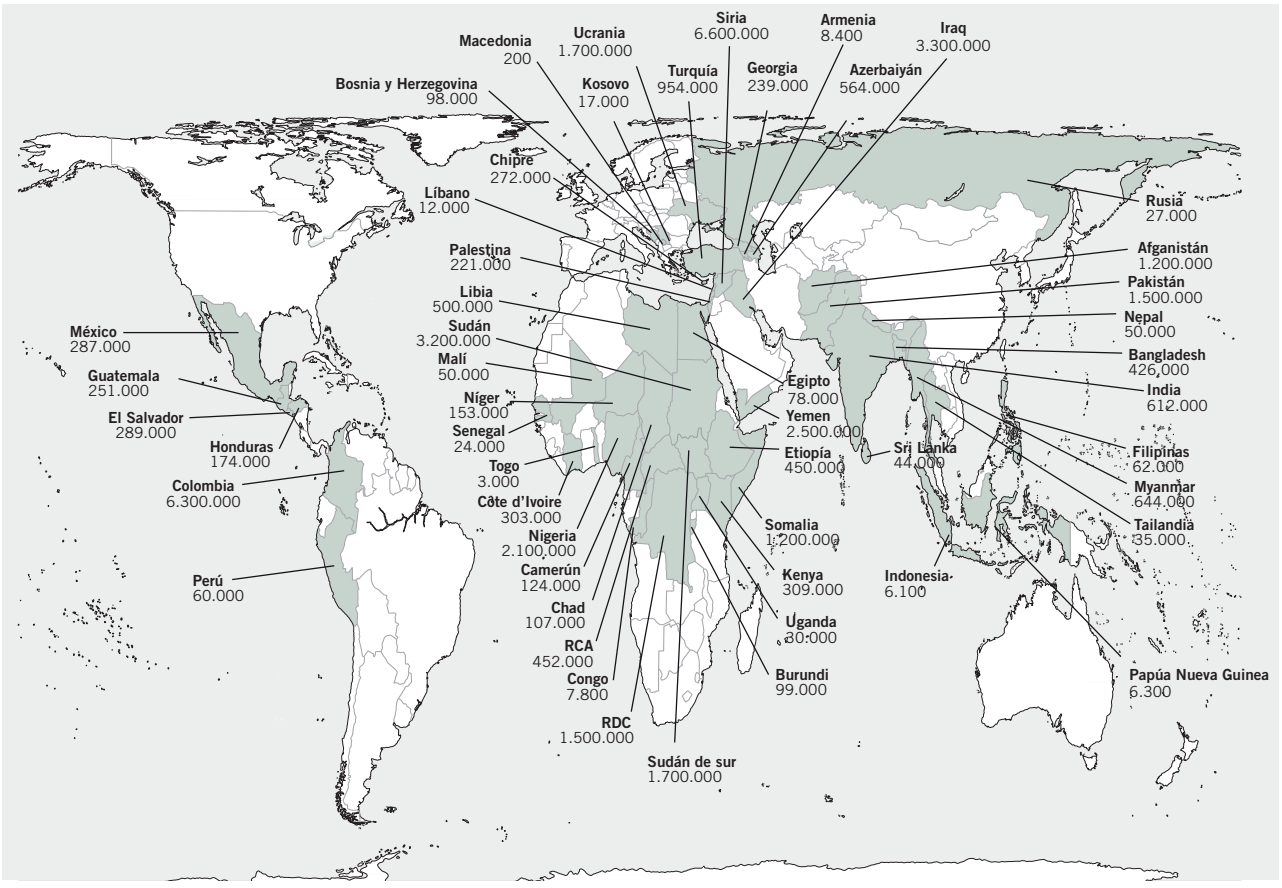
contextos de conflicto armado. Además, los conflictos armados siguieron teniendo severos impactos en las y los menores de edad, como resultado de secuestros, reclutamiento forzado y destrucción de infraestructuras civiles, entre otras prácticas.

La cifra de desplazamiento forzado continuó incrementándose de forma grave, siguiendo la tendencia de años previos. ACNUR constató un incremento del 50% en un periodo de cinco años (42,5 millones de personas desplazadas en 2011; 45,2 en 2012; 51,2 en 2013; 59,5 en 2014; y 65,3 en 2015). De los 65,3 millones de personas desplazadas en 2015, un total de 21,3 eran población refugiada, otros 40,8 millones estaban en situación de desplazamiento interno, y 3,2 eran solicitantes de asilo. Al finalizar el año 2016, los balances de ACNUR – que arrojan un balance parcial de la situación basándose en los datos correspondientes al primer semestre del año–, señalaban una continuación de las tendencias de incremento. La guerra de Siria situó de nuevo al país como principal emisor de población refugiada. Un total de 5,3 millones de personas había abandonado el país huyendo del conflicto (32% de la población refugiada global). Además de Siria, entre los principales países emisores de población refugiada se encontraban Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, RDC, RCA, Myanmar, Eritrea y Colombia.

En 17 de los 32 conflictos armados activos al finalizar 2016 y en 59 de las 87 tensiones no se habían establecido embargos de armas por parte de la ONU ni de otras organizaciones regionales

El informe también analiza uno de los principales instrumentos de los que dispone la comunidad internacional para intentar hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad: los embargos de armas, que constituyen una de las principales medidas coercitivas contempladas en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Al finalizar el año 2016 se contabilizaron **34 embargos de armas dirigidos contra un total de 22 Estados y grupos armados no estatales,** cuatro menos que el año anterior por el levantamiento de los embargos de armas que pesaban sobre Liberia y Côte d'Ivoire por parte de la ONU y de la UE. 11 de los 20 embargos establecidos por la UE respondían a la implementación de los embargos del Consejo de Seguridad de la ONU. Los nueve restantes correspondían a iniciativas europeas: Belarús, China, Egipto, Myanmar, Rusia, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Zimbabwe. De los 32 conflictos armados activos a finales de 2016, existían 17 casos en los que ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni la UE, ni la Liga Árabe ni la OSCE plantearon el establecimiento de un embargo de armas como medida sancionadora. Además, de las 87 situaciones de crisis sociopolíticas identificadas en el año 2016, existían 59 situaciones de tensión que tampoco

Número de personas desplazadas internas en 2015



Fuente: IDMC, *GRID 2016: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2016.

Embargos de armas de la ONU, UE, OSCE y la Liga Árabe en 2016

País*	Entrada en vigor	País	Entrada en vigor
Embargos vigentes decretados por Naciones Unidas (14)		**Embargos decretados por la UE (22)**	
Al-Qaeda y entidades e individuos asociados, milicias talibán **	2002	**Al-Qaeda y milicias talibán****	2002
Côte d'Ivoire	2004-2016	Belarús	2011
Corea, RPD	2006	**China**	1989
Eritrea	2009	Côte d'Ivoire	2004-2016
Irán	2006	Corea, RPD	2006
Iraq (FNG* desde 2004)**	1990	**Egipto**	2013
Líbano (FNG)	2006	Eritrea	2010
Liberia (FNG desde 2009)	1992-2016	Irán	2007
Libia	2011	**Iraq (FNG desde 2004)**	1990
RCA	2013	Líbano (FNG)	2006
RDC (FNG desde 2008)	2003	Liberia (FNG desde 2008)	2001-2016
Somalia (FNG desde 2007)	1992	**Libia**	2011
Sudán (Darfur) (FNG)	2004	**Myanmar**	1991
Yemen (FNG)	2015	**RCA**	2013
		RDC (FNG desde 2003)	1993
Embargos decretados por la Liga Árabe (1)		**Rusia**	2014
Siria	2011	**Siria**	2011
		Somalia	2002
Embargos decretados por la OSCE (1)		**Sudán**	1994
Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	1992	**Sudán del Sur**	2011
		Yemen (FNG)	2015
		Zimbabwe	2002

* En negrita, país o grupo en una situación de conflicto armado sujeto a embargo.
** Embargo no ligado a un país o territorio en concreto.
*** FNG: Fuerzas No Gubernamentales.
Fuente: Elaboración propia a partir de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y European Commission, Restrictive measures in force (Article 215 TFEU), publicado el 7 de julio de 2016, European Commission.

fueron objeto de embargos. Ello, pese a que en muchos casos, el carácter preventivo de la medida podría incidir en una reducción de la violencia.

Tensiones

En el segundo capítulo (**Tensiones**)[3] se analizan los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales y regionales. Durante 2016 se registraron 87 escenarios de tensión a nivel global. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas tuvo lugar en África, con 34 casos (39%), seguida de Asia, donde se registraron 20 casos (23%). Europa y Oriente Medio fueron escenarios de 14 y 11 casos cada una (16 y 13%), mientras en América se identificaron ocho (9%). Cabe destacar la existencia de ocho nuevos escenarios de tensión, con respecto a 2015. Entre ellos, en el continente americano los casos de El Salvador, Guatemala y Honduras. En Asia, los escenarios de India (Assam) –considerado como conflicto armado en años anteriores– y Kazajstán. Y en Europa, los casos de Armenia, Turquía y Ucrania-Rusia. Por otra parte, varias situaciones de crisis sociopolítica dejaron de considerarse como tales, ante la reducción de la tensión en los últimos años.

África y Asia fueron los continentes con mayor número de crisis sociopolíticas en 2016 (34 y 20, respectivamente)

Las situaciones de tensión tuvieron causas múltiples, con más de un factor principal en la gran mayoría de los casos. El análisis del panorama de crisis en 2016 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con años anteriores, el 69% de los casos tuvo entre sus causas principales **la oposición a las políticas internas**

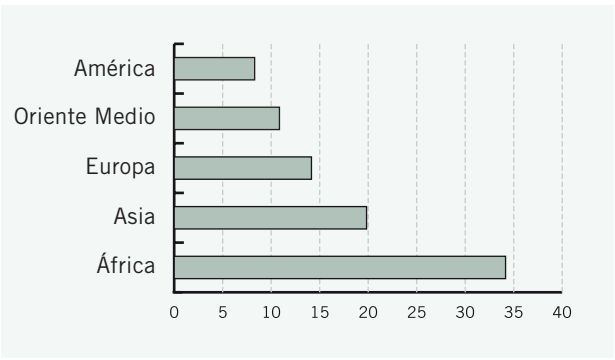
2. Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Resumen de la conflictividad global en 2016

Continente	Conflicto armado			Tensión			TOTAL
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	
África	*Libia* Región Lago Chad (Boko Haram) *Somalia* *Sudán (Darfur)* *Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)* *Sudán del Sur*	*Burundi* *RCA* RDC (este) RDC (este-ADF)	Argelia Etiopía (Ogadén) *Malí (norte)*	Angola (Cabinda) Etiopía Etiopía (Oromiya) Kenya *Mozambique* Nigeria *RDC* Túnez	Africa Central (LRA) Burkina Faso Congo, Rep. de Eritrea Eritrea – Etiopía Gambia Níger *Nigeria (Delta Níger)*	Chad Côte d'Ivoire Djibouti Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Lesotho Madagascar *Marruecos – Sáhara Occ.* RDC – Rwanda RDC – Uganda Rwanda *Senegal (Casamance)* Somalia (Somalilandia-Puntlandia) *Sudán* *Sudán – Sudán del Sur* Uganda Zimbabwe	
SUBTOTAL	**6**	**4**	**3**	**8**	**8**	**18**	**47**
América			*Colombia*	El Salvador	Haití México *Venezuela*	Bolivia Guatemala Honduras Perú	
SUBTOTAL			**1**	**1**	**3**	**4**	**9**
Asia y Pacífico	*Afganistán* Pakistán	Filipinas (Mindanao) India (CPI-M) *Myanmar* *Pakistán (Baluchistán)*	China (Turquestán Oriental)* *Filipinas (NPA)* India (Jammu y Cachemira) *Tailandia (sur)*	Bangladesh Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea Corea, RPD – Rep. de Corea India (Assam) *India (Manipur)* India – Pakistán Pakistán	China - Japón Tayikistán	China (Tíbet) *India (Nagalandia)* Indonesia (Aceh) Indonesia (Papúa Occ.) Kazajstán Kirguistán Nepal Sri Lanka Tailandia Tailandia – Camboya Uzbekistán	
SUBTOTAL	**2**	**4**	**4**	**7**	**2**	**11**	**30**
Europa	Turquía (sudeste)	*Ucrania*	Rusia (Daguestán)	*Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)* Turquía	Rusia (Chechenia) Ucrania - Rusia	Armenia Bosnia y Herzegovina *Chipre* *Georgia (Abjasia)* *Georgia (Osetia del Sur)* Macedonia *Moldova, Rep. de (Transdniestria)* Rusia (Ingushetia) Rusia (Kabardino-Balkaria) *Serbia – Kosovo*	
SUBTOTAL	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**10**	**17**
Oriente Medio	Egipto (Sinaí) Iraq Siria *Yemen (al-houthistas)*	Yemen (AQPA)	*Israel – Palestina*	Egipto Israel – Siria – Líbano Líbano	Arabia Saudita Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán) Yemen (sur)	Bahrein *Irán – EEUU, Israel* Iraq (Kurdistán) Palestina	
SUBTOTAL	**4**	**1**	**1**	**3**	**4**	**4**	**18**
TOTAL	**13**	**10**	**10**	**21**	**19**	**47**	**120**

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas. Con asterisco, los conflictos armados finalizados durante 2016.

Distribución regional del número de tensiones en 2016



o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos o la oposición al sistema político, social o ideológico de los Estados, lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder. Este factor de oposición al gobierno o sistema fue especialmente predominante en América (presente en todos los casos de tensión), África (74% de sus tensiones) y en Europa (71%), donde tuvo una presencia mayor que en años anteriores. En segundo lugar, cerca de la mitad de las tensiones (48%) tuvo como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias. Se superó esa media en el continente europeo (79%), Oriente Medio (55%) y Asia (55%). En tercer lugar, cabe destacar que en una tercera parte de los casos, el elemento de disputa por el control del territorio y/o recursos fue un factor especialmente relevante entre las causas principales, con mayor presencia en Asia (40%) y África (38%), si bien se trata de un elemento que alimenta de manera directa o indirecta, y en grados diversos, numerosas situaciones de tensión.

En línea con años anteriores, algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (46 casos o un 53%), más de una cuarta parte fueron tensiones internas internacionalizadas (25 casos o un 29%) y casi una quinta parte fueron tensiones internacionales (16 casos o un 18%). En cuanto a la evolución de las tensiones, algo más de la mitad de los casos no experimentó cambios significativos (45 casos o un 52%), una tercera parte registró un deterioro con respecto a 2015 (29 casos o un 33%) y en cerca de un 15% de los casos se produjo una cierta mejoría (13 casos).

En términos de intensidad de las tensiones, durante 2016 más de la mitad presentaron una intensidad baja (47 casos o 54%), mientras cerca de una cuarta parte fueron tensiones de alta intensidad (21 casos o 24%) y algo más de una quinta parte fueron escenarios de intensidad media (19 casos o 22%). Como en años anteriores, África y Asia fueron los continentes con mayor número de tensiones de alta intensidad, con ocho y siete casos respectivamente. **Las tensiones de mayor gravedad en 2016 fueron: Angola (Cabinda); Etiopía; Etiopía (Oromiya); Kenya; Mozambique; Nigeria; RDC; Túnez; El Salvador; Bangladesh; Corea, RPD–EEUU, Japón, Rep. de Corea; Corea RPD-Rep. de Corea; India (Assam); India (Manipur); India-Pakistán; Pakistán; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj); Turquía; Egipto; Israel-Siria-Líbano y Líbano.** Algunas de estas tensiones de alta intensidad fueron escenario de hechos de violencia con unos umbrales de letalidad superiores al centenar de víctimas mortales.

Procesos de paz

En el tercer capítulo (**Procesos de paz**)[3] se analizan la evolución de las negociaciones y procesos de paz analizados en el transcurso del año, así como tendencias globales y regionales. A lo largo del año 2016 se identificaron 38 procesos y negociaciones de paz a nivel mundial. El análisis de los diferentes contextos refleja una variedad de realidades y dinámicas, fruto de la diversa naturaleza de los conflictos armados y tensiones socio-políticas a las que están vinculadas las negociaciones y procesos de paz. Entre las tendencias, en materia de distribución geográfica, del total de negociaciones y procesos de paz identificados en 2016, la mayor parte se concentró en África –15 casos, equivalentes a un 40%–, seguido a una mayor distancia por Asia –ocho contextos que representan el 21%–, Europa –con siete casos que suponen el 18%–, Oriente Medio –cinco contextos que equivalen el 13%– y América –tres casos que representan el 8%.

En cuanto a los actores involucrados en la negociación, el análisis de los diversos contextos refleja que **en un importante número de casos los principales protagonistas de las negociaciones fueron los gobiernos de los respectivos países y actores armados**. Este fue el caso de contextos como por ejemplo el de Mozambique, Sudán del Sur, Colombia, Filipinas, Myanmar, India o Tailandia (sur). En otros casos, se observó una diversidad más amplia que abarcó a actores tanto políticos como armados en interlocución con las autoridades gubernamentales. En otros contextos los participantes en la negociación son principalmente los gobiernos y entidades que pretenden la secesión, buscan un nuevo estatus político y administrativo o que aspiran a ser Estados con pleno reconocimiento internacional. Los procesos de paz analizados en 2016 también incluyen otros casos especiales desde el punto de vista de los actores implicados en la negociación, como por ejemplo el caso de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

En lo que respecta a las **terceras partes implicadas en procesos de paz y negociación, cabe señalar el papel desempeñado por Naciones Unidas en un destacado número de contextos** –13 de los 38 procesos analizados, un tercio del total (34%)–, en especial en África y Oriente Medio. También cabe mencionar el rol de tercera parte que juegan organizaciones regionales en

3. Se entiende por procesos de paz todos aquellos esfuerzos políticos, diplomáticos y sociales destinados a resolver los conflictos y transformar sus causas de fondo mediante métodos pacíficos, especialmente a través de las negociaciones de paz. Se consideran negociaciones de paz los procesos de diálogo entre al menos dos partes enfrentadas en un conflicto, en los cuales las partes abordan sus diferencias en un marco concertado para poner fin a la violencia y encontrar una solución satisfactoria a sus demandas.

Procesos y negociaciones de paz en 2016

ÁFRICA (15)	ASIA (8)	EUROPA (7)
Burundi	Afganistán	Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)
Libia	Filipinas (MILF)	Chipre
Malí (norte)	Filipinas (MNLF)	España (País Vasco)
Marruecos – Sáhara Occidental	Filipinas (NDF)	Georgia (Abjasia, Osetia del Sur)
Mozambique	India (Assam)	Moldova (Transdniestria)
Nigeria (Delta del Níger)	India (Nagalandia)	Serbia – Kosovo
RCA	Myanmar	Ucrania
RDC	Tailandia (sur)	
Senegal (Casamance)		
Somalia	**ORIENTE MEDIO (5**	**AMÉRICA (3)**
Sudán		
Sudán (Darfur)	Irán (programa nuclear)	Colombia (ELN)
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	Israel-Palestina	Colombia (FARC-EP)
Sudán del Sur	Palestina	Venezuela
Sudán - Sudán del Sur	Siria	
	Yemen	

diversas áreas, en especial en África y Europa. De los 15 casos de negociaciones y procesos de paz identificados en el continente africano, en 11 de ellos había organizaciones regionales involucradas en la facilitación de los contactos entre los actores en conflicto, entre ellas la Unión Africana (UA), la Comunidad de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), la Comunidad de Estados de África del Este (EAC, por sus siglas en inglés), la Comunidad Económica de Estados del África Central (CEEAC, por sus siglas en francés), la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés).

Una valoración general de los **temas de la agenda de negociación** en los distintos casos, ya sea en fase inicial de discusión o incluso en períodos de implementación después de la suscripción de acuerdos globales o parciales, permite identificar algunos asuntos recurrentes en distintos contextos y escenarios geográficos, más allá de la singularidad propia de cada uno de los procesos. Temas como el desarme de grupos armados, la entrega de arsenales, la reintegración de ex combatientes o la liberación de prisioneros estuvieron en la agenda de negociaciones y procesos de paz. Cabe destacar que las cuestiones relativas a la declaración de treguas y altos el fuego, al respeto a compromisos de cese el fuego y a las negociaciones para el establecimiento de cese de hostilidades de largo plazo también constituyen un tema clave y recurrente que estuvo presente en diversos contextos a lo largo de 2016.

Con respecto a **la integración de la dimensión de género en los procesos de paz**, cabe destacar la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, el más avanzado en materia de igualdad de género hasta la fecha. Cabe mencionar también que en algunos de los casos analizados en 2016 hubo un reclamo explícito por una mayor participación de mujeres en las negociaciones, como por ejemplo en Myanmar, Chipre o en Siria.

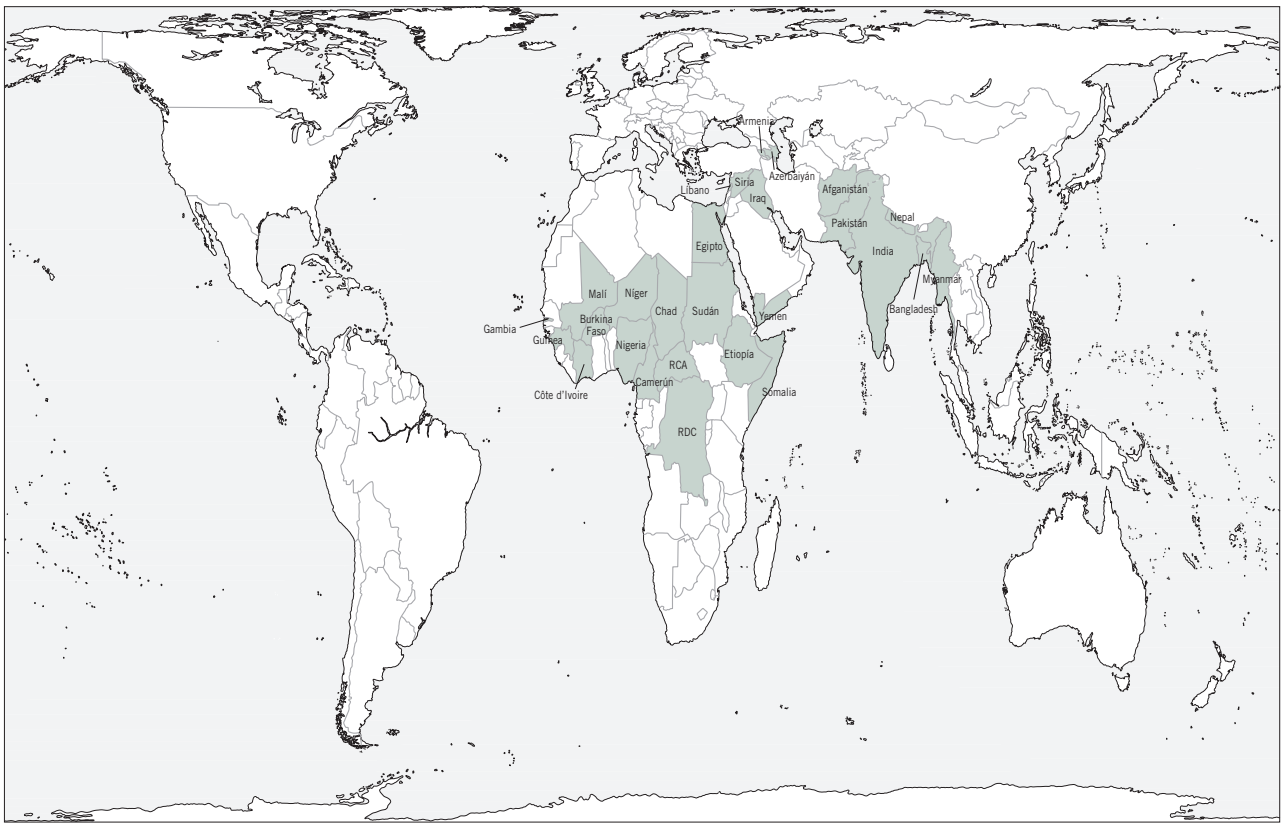
Género, paz y seguridad

En el cuarto capítulo (**Género, paz y seguridad**) se analizan las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.[4] El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

De acuerdo con el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI por sus siglas en inglés), los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 38 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este indicador con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **20 de los 32 conflictos armados que continuaban activos al finalizar 2016 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación y que cinco conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Argelia, Libia, Israel-Palestina, Rusia, Sudán del Sur–.** Así, el 74% de

4. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

Países en conflicto armado y/o tensión con graves desigualdades de género



los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género. Asimismo, en otros seis países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles medios (Burundi, Filipinas) y en otros con niveles bajos (Ucrania, Colombia, Tailandia y Turquía). En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 31 de las 87 tensiones activas durante el año 2016 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles altos o muy altos según el SIGI), lo que supone un 47% de las tensiones para las que existían datos.

20 de los 32 conflictos armados que continuaban activos al finalizar 2016 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género

La violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos durante el año 2016. Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes. El secretario general de la ONU presentó en el mes de abril el informe anual de seguimiento del impacto de la violencia sexual en los conflictos armados relativo al periodo de enero a diciembre de 2015, en el que se identifican actores armados responsables de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia de sexual. El informe también documenta los patrones y tendencias en la utilización de la violencia sexual en el marco de los conflictos de Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Darfur (Sudán), Siria, Yemen; de los casos de posconflicto de Bosnia y Herzegovina, Côte d'Ivoire, Nepal y Sri Lanka, además de la situación en Burundi y Nigeria. Durante 2016 se registraron numerosos casos de violencia sexual en diferentes lugares afectados por conflictos armados, tensiones sociopolíticas o en situación posbélica, como en los conflictos de Sudán del Sur, Nigeria, Iraq, Siria y Myanmar, entre otros. Entre estos casos, Naciones Unidas denunció el uso sistemático y generalizado de la violencia sexual en Sudán del Sur como una táctica por parte de las partes en conflicto contra la población civil, en particular las mujeres y las niñas. En relación a otras violencias de género en contexto de conflictos armados y tensión, se constató como numerosos grupos armados de oposición se implican en delitos de trata de personas. La resolución 2331 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la lucha contra la trata de personas en los contextos de conflicto armado, aprobada en 2016, subrayó los diversos impactos de género de este fenómeno, especialmente su vinculación con la explotación y el abuso sexual, así como con la violencia sexual en los conflictos armados y su posible contribución a la exacerbación de los conflictos armados. La nueva resolución señaló a los grupos armados ISIS, Boko Haram, Al-Shabab, LRA y al-Qaeda como responsables de actos de trata.

En el apartado de construcción de paz desde una perspectiva de género, cabe destacar que en 2016 se llevaron a cabo dos debates monográficos en el Consejo de Seguridad sobre la agenda mujeres, paz y seguridad. El primero de ellos relativo a la violencia sexual y los conflictos armados, centrado en la cuestión

Países en conflicto armado y tensión con niveles de discriminación de género altos o muy altos

	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación
Conflictos armados	Afganistán Camerún Etiopía India Iraq Myanmar Pakistán RCA	Chad Egipto Malí Níger Nigeria RDC Siria Somalia Sudán Yemen
Tensiones	Armenia Azerbaiyán Burkina Faso Côte d'Ivoire Etiopía Guinea India Iraq Líbano Nepal Pakistán	África Central (LRA) Bangladesh Chad Egipto Gambia Níger Nigeria RDC Siria Somalia Sudán Yemen

Fuente: Tabla elaborada a partir de los niveles de discriminación de género del SIGI (OCDE) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau. El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.

de la trata de personas vinculada a la violencia sexual en los conflictos. La sociedad civil resaltó nuevamente la importancia de entender la violencia sexual en los conflictos armados en un marco más amplio de violencias de género perpetradas tanto por actores militares como por civiles en un contexto de profundas desigualdades internacionales entre hombres y mujeres, agravadas por el armamentismo y el militarismo. También se celebró el debate abierto sobre mujeres, paz y seguridad y el Secretario General presentó su informe de evaluación de la implementación de la resolución 1325 un año después de la evaluación de alto nivel que tuvo lugar en octubre de 2015. El informe señaló avances, como el aumento de acuerdos de paz firmados que incluyeron provisiones específicamente de género, pero constató los numerosos retos pendientes. Desde la sociedad civil también se alertó sobre los retos pendientes para la implementación de la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad y se señaló un cumplimiento escaso y desigual de los compromisos adquiridos por los Gobiernos en materia de mujeres, paz y seguridad durante el 15º aniversario de la resolución 1325.

Varias negociaciones de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2016. Especialmente importante fue el caso de Colombia, donde tras varios años de negociaciones entre el Gobierno y las FARC se firmó un acuerdo de paz que incluyó múltiples referencias a la igualdad de género. El acuerdo fue considerado un hito en términos de la inclusión de la perspectiva de género en su articulado, fruto de un largo proceso negociador en el que también se produjeron avances muy importantes para garantizar la participación de las mujeres y los colectivos LGTBI, su capacidad de incidencia en las negociaciones y la inclusión de la dimensión de género en el acuerdo. Asimismo, **organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo, como en Chipre, Myanmar, Malí, Sudán del Sur y Siria, así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa**. Asimismo, múltiples iniciativas de organizaciones de mujeres denunciaron los impactos de los conflictos armados y la militarización y se movilizaron en defensa de sus derechos.

Oportunidades de Paz para 2017

En el quinto capítulo (**Oportunidades de Paz para 2017**), el informe identifica y analiza cinco escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz en el año 2017. Las oportunidades identificadas durante 2016 hacen referencia a diferentes regiones y temas.

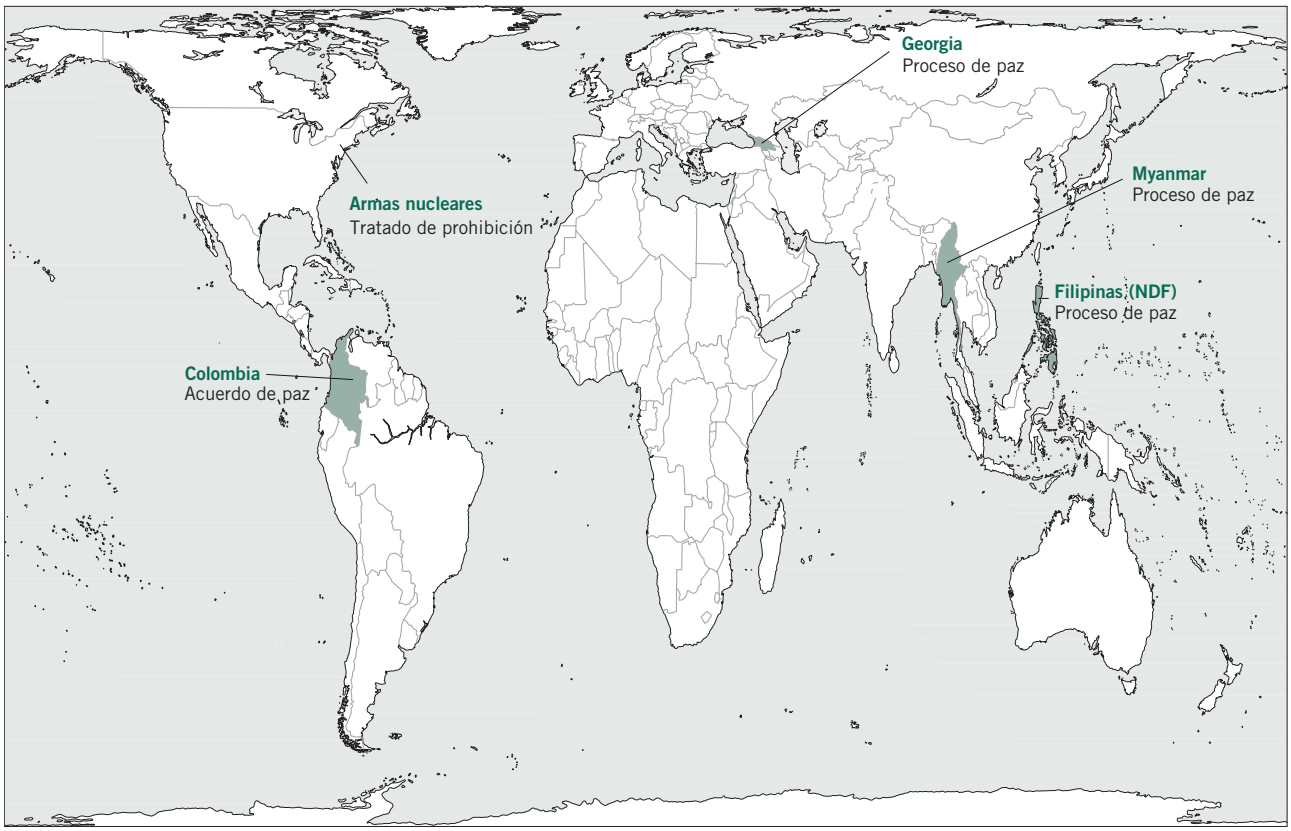
- **Colombia:** La inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las FARC representa una oportunidad única para avanzar en la construcción de una paz sostenible e inclusiva en Colombia, con la participación de las mujeres y la población LGTBI como actores claves en la implementación del acuerdo.

- **Filipinas (NDF):** La reanudación en 2016 de las conversaciones de paz entre el Gobierno y el National Democratic Front (NDF), movimiento político que representa a la guerrilla comunista New People's Army (NPA), y la voluntad de ambas partes de firmar un acuerdo de paz para mediados de 2017 es una oportunidad histórica para poner fin a uno de los conflictos más longevos de todo el mundo.

- **Myanmar:** El Gobierno birmano está ante la mejor oportunidad de las últimas décadas para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a un conflicto que dura casi setenta años. La legitimidad popular y democrática del nuevo Gobierno es el principal activo, ya que cuenta con un amplio respaldo nacional e internacional. No obstante, se deberán superar numerosos obstáculos para lograr que el proceso sea verdaderamente inclusivo.

- **Georgia:** La reanudación tras cuatro años de parálisis de uno de los mecanismos del proceso de paz, el Mecanismo de Prevención y Respuesta a Incidentes en torno a Abjasia y, por otra parte, la institucionalización de las consultas entre representantes georgianos involucrados en el proceso negociador formal y organizaciones locales de mujeres, suponen avances para la construcción de confianza multi-nivel, pese a los obstáculos políticos de las negociaciones formales

Oportunidades de paz para 2017



- **Armas nucleares:** El respaldo de más un centenar de Estados a la celebración de negociaciones en 2017 para lograr un tratado de prohibición de las armas nucleares, unido al creciente enfoque humanitario del tema y la presión de la sociedad civil internacional, abre una oportunidad histórica para estigmatizar el uso y posesión de armas nucleares y avanzar hacia un instrumento legal vinculante, pese al rechazo de los estados nucleares y aliados.

Escenarios de riesgo para 2017

En el sexto capítulo (**Escenarios de riesgo para 2017**), el informe identifica y analiza 10 escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2017.

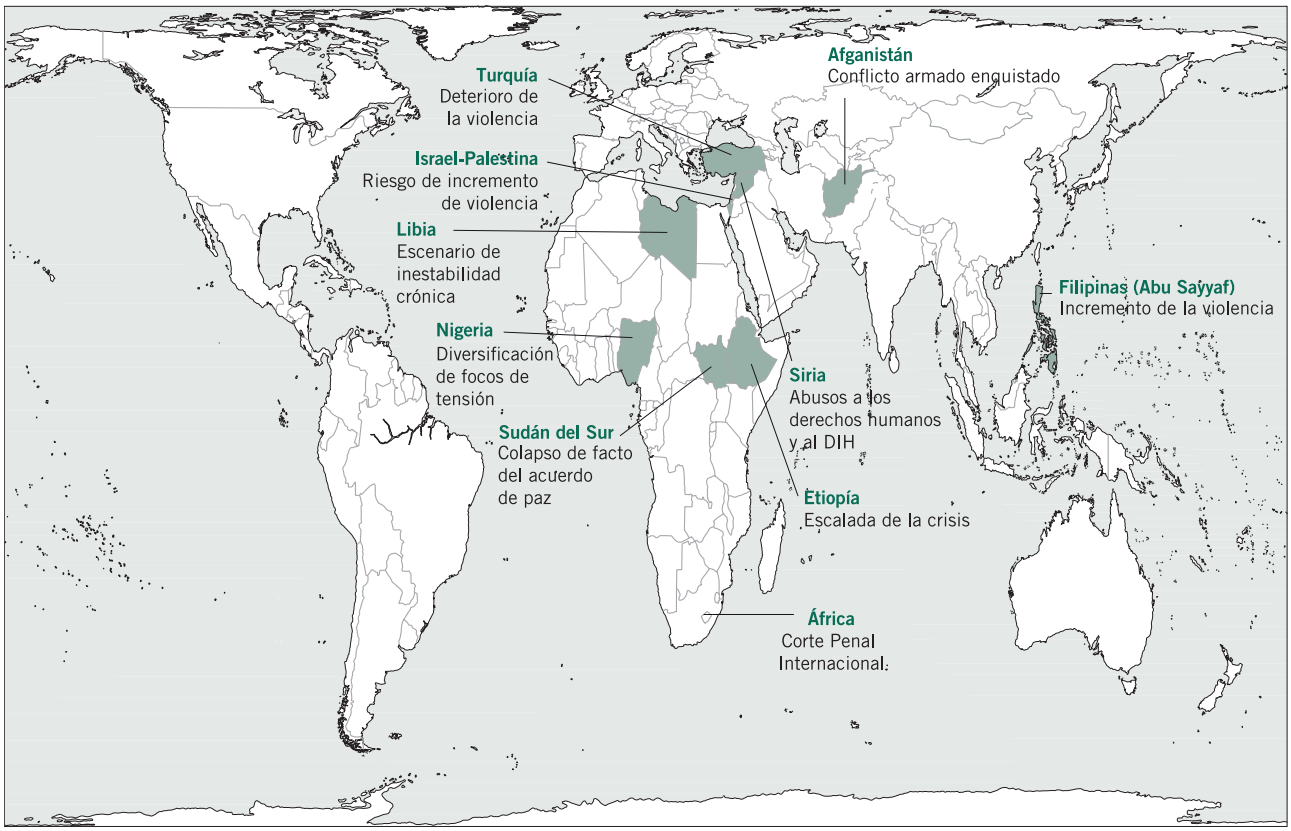
- **Etiopía:** El país está sufriendo la peor crisis política y social de los últimos años, con una oleada de protestas contra el régimen reprimidas con extrema dureza y que causaron centenares de víctimas mortales durante 2016. Las graves protestas ponen de manifiesto la fragilidad del contrato social entre las élites y la población del país, descontenta con años de corrupción, con un sistema político autoritario, por la exclusión de amplios franjas de población del supuesto milagro económico etíope, por lo que el decreto de estado de emergencia hace prever un agravamiento de la situación.

- **Libia:** Durante 2016 las dificultades para implementar el acuerdo de Skhirat confirmaron la fragilidad del pacto y pusieron en evidencia los múltiples retos de Libia, que podrían derivar un agravamiento de la situación en 2017. Entre ellos, una persistente polarización política, un panorama de seguridad caracterizado por un activo abanico de actores armados, una aproximación internacional condicionada por prioridades a menudo disonantes, y una situación de deterioro económico, humanitario y crónicas violaciones a los derechos humanos.

- **Nigeria:** La proliferación de tensiones políticas, movimientos armados y de la violencia intercomunitaria en varias regiones del país (norte, centro y sur) está generando una situación de grave deterioro de la seguridad en Nigeria que amenaza su estabilidad. El papel de las fuerzas de seguridad en la represión de grupos y comunidades opositoras y disidentes, ha sido un factor que ha contribuido significativamente a detonar el estallido de la violencia en varios puntos del país, contribuyendo a la radicalización de diferentes movimientos.

- **Sudán del Sur:** Un año después de la firma del acuerdo de paz, el futuro del proceso de paz se presenta más incierto y precario que nunca. El fracaso de la implementación de las cláusulas del acuerdo, las violaciones sistemáticas al alto el fuego, el incremento de la violencia contra la población civil y el colapso de facto del Gobierno de Transición, ponen de relieve los grandes retos que afronta el futuro inmediato del país.

Escenarios de riesgo para 2017



- **Afganistán:** El conflicto armado está fuertemente enquistado en el país quince años después de la invasión de EEUU y continúa generando gravísimos impactos en la población civil afgana. Nuevas dinámicas en el conflicto, la incipiente presencia de ISIS y el agravamiento de la crisis de desplazamiento forzado dificultan que a corto o medio plazo pueda lograrse una salida negociada. La crisis política que atraviesa el Gobierno obstaculiza todavía más que la situación en el país pueda mejorar.

- **Filipinas (Abu Sayyaf):** La proliferación y mayor coordinación de varios grupos islamistas en Mindanao; la posibilidad de que ISIS pueda estar extendiendo y consolidando su presencia en la isla como epicentro de sus actividades y proyecto en el Sudeste Asiático; y el incremento de las acciones armadas por parte de grupos que declaran su sintonía e incluso pertenencia a ISIS, como Abu Sayyaf o Estado Islámico de Lanao, podría suponer un incremento de la inseguridad en la región y afectar al proceso de paz con el MILF.

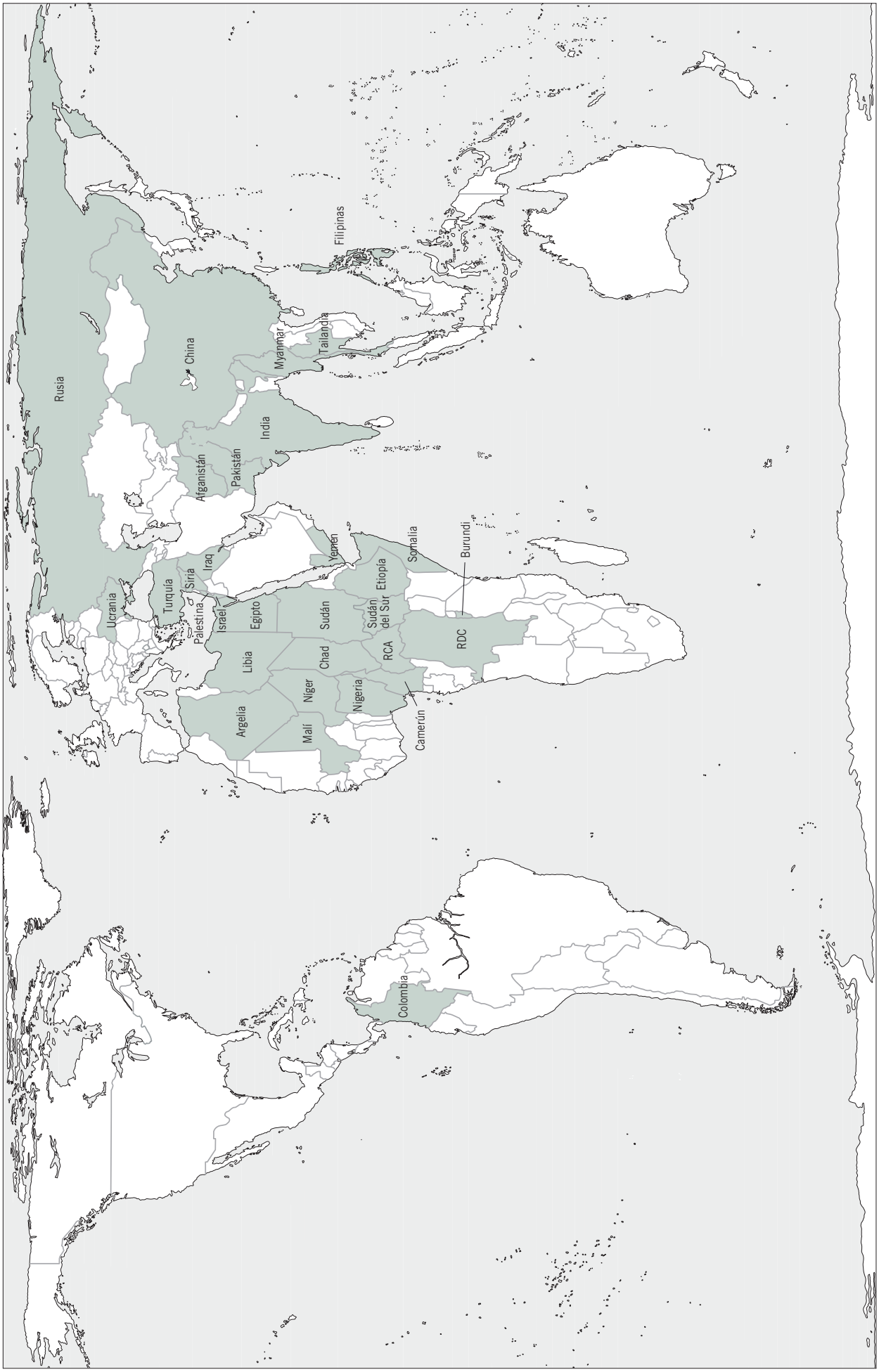
- **Turquía:** El fracaso del proceso de paz y la intensificación del conflicto en los planos bélico, político-social y regional, así como un escenario general en Turquía más complejo –marcado por los retos y consecuencias del intento fallido del golpe de Estado de 2016– apuntan a un deterioro en la situación de la cuestión kurda, de mayor violencia y militarización y de brecha entre el Estado y el movimiento kurdo.

- **Israel-Palestina:** El 50º aniversario de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania puede convertirse en un marco favorable para nuevas tensiones y violencia, teniendo en cuenta la ultra-derechización del Gobierno israelí, las señales de creciente frustración en la población palestina con la ocupación y con el liderazgo político palestino, y las escasas expectativas de que iniciativas internacionales reactiven el proceso de paz, en un clima de escepticismo sobre la viabilidad de la fórmula de dos Estados.

- **Corte Penal Internacional:** La Corte Penal Internacional, que afronta numerosos retos, presiones y críticas, ha sido acusada de poner un excesivo énfasis en los casos africanos y, a finales de 2016, se enfrentaba a uno de los principales retos desde el inicio de su andadura: tres países africanos, Sudáfrica, Burundi y Gambia, anunciaron su retirada de la Corte. La culminación de esta decisión y su efecto dominó puede suponer un debilitamiento de la institución y un retroceso en términos de protección de los derechos humanos.

- **Siria:** La guerra de Siria se ha caracterizado por brutales niveles de violencia contra la población civil y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en un contexto de total impunidad y ante la impasibilidad de la comunidad internacional. Aunque no es el único caso, Siria también está sentando un simbólico y peligroso precedente y ha expuesto las debilidades del marco internacional para la protección de civiles en conflictos armados.

Mapa 1.1 **Conflictos armados**



1. Conflictos armados

- Durante 2016 se registraron 33 conflictos armados, de los cuales 32 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (13) y Asia (10), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- La misión de la ONU en Malí (MINUSMA) pasó a ser la operación de la ONU con más bajas mortales en la actualidad.
- En Nigeria, la estrategia militar de la fuerza regional (MNJTF) logró reducir significativamente la capacidad operativa de Boko Haram.
- Los enfrentamientos armados en Sudán del Sur persistieron a pesar de la firma del acuerdo de paz.
- Al-Shabaab incrementó sus acciones armadas durante 2016 con el objetivo de desestabilizar el proceso electoral en Somalia.
- La situación en Libia empeoró en 2016, en un contexto de profundización de la división política, persistentes focos de la violencia y continuas violaciones a los derechos humanos.
- El conflicto armado en Colombia descendió a su nivel mínimo de violencia en 52 años.
- El inicio del proceso de diálogo político en Myanmar con grupos insurgentes no logró poner fin al conflicto armado con los grupos no adheridos al acuerdo de alto el fuego.
- Aumentó la preocupación en Mindanao (Filipinas) por la creciente proliferación y coordinación de grupos armados y por la mayor presencia de ISIS.
- La guerra en Turquía entre el Estado y el PKK se deterioró gravemente, con violencia urbana y en zonas rurales y atentados de gran escala, a lo que se sumaron otros ejes de tensión en el país.
- El conflicto armado en Iraq provocó la muerte de más de 16.000 civiles en 2016.
- La situación en Yemen continuó deteriorándose a lo largo del año, con elevados niveles de violencia que tuvieron un devastador impacto en la población civil.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2016. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2016, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional, como el impacto de los conflictos en la población civil y los embargos de armas. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2016.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. **Resumen de los conflictos armados en 2016**

Conflicto[1] -inicio-	Tipología[2]	Actores principales[3]	Intensidad[4] / Evolución[5]
África			
Argelia -1992-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel	1
	Sistema		=
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados	2
	Gobierno		↑
Etiopía (Ogadén) -2007-	Interno internacionalizado	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales	1
	Autogobierno, Identidad		=
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad (Ejército Nacional de Libia), grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi, ISIS, AQMI, entre otros actores armados; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		↑
Malí (norte) -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, MLF, ANSIPRJ, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane), Chad	1
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Región Lago Chad (Boko Haram)[6] - 2011-	Interno internacionalizado	Boko Haram (BH), MNJTF (Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		↓
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias antibalaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA	2
	Gobierno, Recursos		↑

1. En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2016 con la del 2015, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2016 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
6. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* este caso había sido identificado como "Nigeria (Boko Haram)" por la concentración de las acciones armadas de esta organización en Nigeria. A partir de 2016 el caso pasa a denominarse "Región Lago Chad (Boko Haram)" dada la regionalización del conflicto armado a la región denominada Lago Chad, compartida por Nigeria, Chad, Níger y Camerún.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
África			
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias Mai-Mai, FDLR, M23 (ex CNDP), APCLS, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	2
	Sistema, Recursos		=
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Suport Forces (RSF), JEM, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID	3
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Suport Forces (RSF), Sudán del Sur	3
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLM/A-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), milicias comunitarias, Uganda, Sudán, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=
América			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, FARC-EP, ELN, grupos paramilitares	1
	Sistema		↓
Asia			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS	3
	Sistema		=
China (Turquestán Oriental) -2014-	Interno	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	↓
	Autogobierno, Sistema, Identidad		Fin
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		↓
Filipinas (Mindanao)[7] -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference	1
	Autogobierno, Identidad		↑
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	2
	Sistema		↑
Myanmar -1948-	Interno	Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, SSA-N KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, SSNPLO, KIO, ABSDF, AA, TNLA, HaY, MNDAA)	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	3
	Sistema		↓
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓

7. En la anterior edición del informe *Alerta!* el conflicto armado en Mindanao se abordaba desde dos casos: Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf) y Filipinas (Mindanao-BIFF).

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
Europa			
Rusia (Daguestán) -2010-	Interno	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema		=
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Ucrania -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	2
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		↓
Oriente Medio			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinai (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel	3
	Sistema		=
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán,Turquía, PKK	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis (vinculado a ISIS)	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), al-Shamia Front, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas	2
	Sistema		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;
↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2016

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados durante el año 2016 y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional, como el impacto de los conflictos en la población civil y los embargos de armas.

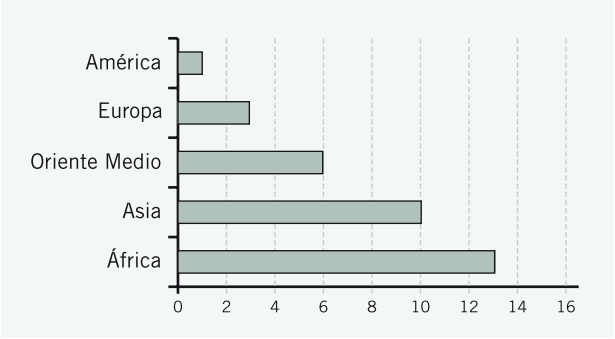
1.2.1 Tendencias globales y regionales

A lo largo de 2016 se observó una ligera reducción en el número de conflictos armados respecto a años anteriores. Durante 2016 se contabilizó un total de 33 casos de conflictos armados a nivel mundial frente a 35 contextos en 2015, 36 en 2014 y 35 en 2013. De los 33 casos registrados en 2016 sólo 32 permanecían activos al finalizar el año, ya que la situación en China (Turquestán Oriental), que enfrenta al Gobierno chino con organizaciones uigures, dejó de ser considerada como un conflicto armado activo en 2016 ante la significativa reducción en los niveles de violencia en el último año. En comparación con los conflictos armados del año anterior, el caso de India (Assam) ya se identificó como "finalizado" al acabar 2015 –aunque continuó siendo considerado como un contexto de tensión durante 2016–,[8] mientras que la conflictividad armada en la región de Mindanao, Filipinas, pasó a ser analizada como un solo contexto dada la creciente complejidad de la violencia y la mayor coordinación e interdependencia entre los grupos armados que operan en el territorio.[9] Respecto a la distribución geográfica de los conflictos armados, y siguiendo la tendencia de años previos, la mayor parte se concentró en África (13 casos) y Asia (10), seguidos de Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).

En cuanto a la relación entre el escenario de la contienda y los actores involucrados en la disputa,

8. Véase el resumen sobre India (Assam) en el capítulo 2 (Tensiones).
9. En la anterior edición del informe *Alerta!* el conflicto armado en Mindanao se abordaba desde dos casos: Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf) y Filipinas (Mindanao-BIFF).

Gráfico 1.1. **Distribución regional del número de conflictos armados en 2016**



durante 2016 se identificaron cinco conflictos armados de carácter interno; es decir, protagonizados por actores armados de un mismo Estado y que operaban dentro de las fronteras del mismo –China (Turquestán Oriental), Filipinas (NPA), India (CPI-M), Myanmar, Tailandia (sur) y Rusia (Daguestán). **Sólo un caso fue catalogado como internacional, el de Israel-Palestina, mientras que la gran mayoría –26 de los 33 casos, equivalentes a un 79%– fueron considerados como conflictos armados internos internacionalizados**. Es decir, alguna de las partes en liza era foránea, los grupos armados involucrados en la disputa tenían bases o lanzaban ataques desde países vecinos, o los enfrentamientos se extendían a otros Estados, entre otros elementos. Este elemento de internacionalización se hizo patente durante 2016 en la participación de terceros actores en diversos conflictos. Así, por ejemplo, en numerosos contextos se mantuvo el despliegue de misiones de la ONU –MINUSMA en Malí, MINUSCA en RCA, UNMISS en Sudán del Sur, UNAMID en Sudán, o MONUSCO en RDC– o de misiones de organizaciones regionales como la UA –AMISOM en Somalia–, ECOWAS –en Malí–, OTAN –en Afganistán y presencia en la región del Mar Negro, en el marco de la tensión con Rusia por Ucrania– o la UE –EUCAP, EUTM y EUNAVFOR en Somalia, EUFOR en RCA. Algunos Estados también desempeñaron un papel significativo en ofensivas militares fuera de sus fronteras, como por ejemplo las acciones de EEUU en la campaña contra ISIS en Libia y en los ataques contra posiciones de AQPA e ISIS en Yemen, las de Francia en el marco de la Operación Barkhane en Malí, o las intervenciones de Rusia e Irán en apoyo a las ofensivas del régimen de Bashar al-Assad en el conflicto en Siria. Algunas intervenciones foráneas en contextos de conflicto armado se canalizaron a través de coaliciones militares *ad hoc*. Entre ellas destacan, por ejemplo, la coalición internacional contra ISIS –creada en 2014, liderada por EEUU e integrada por más de 68 miembros (entre países y organizaciones)– que durante 2016 continuó con sus operaciones en Iraq y Siria; la coalición de países árabes que bajo el liderazgo de Arabia Saudita y con el apoyo de algunos países occidentales –EEUU, Reino Unido, entre otros– está involucrada desde 2015 en el conflicto armado en Yemen; o la fuerza militar conjunta regional configurada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún para dar respuesta a la amenaza de Boko Haram, que en los últimos años ha ampliado su alcance territorial más allá de las fronteras de Nigeria.

La mayor parte de los conflictos armados en 2016 se concentró en África (13 casos) y Asia (10), seguidos de Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno)

La gran mayoría de los conflictos armados fueron de carácter interno internacionalizado (79%)

El factor de internacionalización también se evidenció en las operaciones de diversos grupos armados más allá de los límites de sus países de origen. Junto a Boko Haram, cabe resaltar casos como el de AQMI –de origen argelino, pero con presencia también en los conflictos armados en Malí y Libia y en otros escenarios de tensión (Burkina Faso, Níger)[10]–, o el de ISIS, que además de mantener su principal base territorial en Iraq y Siria continuó reivindicando acciones en otros diversos países ya sea a través de células, comandos o simpatizantes que perpetraron diversas ofensivas durante 2016 –incluyendo en territorio europeo, como evidenciaron los atentados en Bruselas, Niza y Berlín–, o a través de acciones de filiales del grupo en numerosos contextos, sin que exista claridad en todos los casos sobre el nivel de coordinación y cooperación entre la organización central de ISIS y las diferentes facciones. Muchas de estas filiales continuaron operando durante 2016 en escenarios de conflicto armado –como en Afganistán, Argelia, Libia, Pakistán, Rusia, Turquía o Yemen– y también en contextos de tensión.[11] En algunos casos estas facciones han asumido el nombre de "provincias" (*wilayaat*) del presunto califato proclamado por ISIS –como en el caso de Provincia del Sinaí (Egipto) y Daguestán (Rusia)– o nombres específicos –como el Estado Islámico de Lanao (Filipinas). A nivel general, cabe destacar que la mayoría de los conflictos armados actuales tiene una dimensión internacional o regional vinculada también a otros factores, como el comercio de armas, la participación de combatientes extranjeros, el apoyo logístico, económico o militar proporcionado por otros países a alguno de los bandos en pugna, por los intereses políticos y/o económicos de Estados vecinos en el escenario del conflicto armado o los flujos de personas refugiadas.

En lo referente a las causas de la conflictividad armada a nivel global, el análisis de los diferentes contextos en 2016 confirma la naturaleza multidimensional del fenómeno. En línea con años anteriores, la mayor parte de los casos –24 en total, equivalentes al 73%– tuvo entre sus motivaciones principales **la oposición a las políticas domésticas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos o al sistema político, social o ideológico del**

10. Véase el resumen sobre estos casos en el capítulo 2 (Tensiones).
11. Véase el capítulo 2 (Tensiones).

Estado, lo que derivó en luchas por erosionar o acceder al poder. De los 24 casos en los que se observaron este tipo de causas, en 19 la búsqueda de un cambio de sistema fue un factor especialmente relevante. Esta dimensión se hizo especialmente visible en conflictos armados con presencia de grupos con una agenda ideológica de inspiración socialista, como en los casos del grupo armado CPI-M en India, el NPA en Filipinas o las FARC-EP y el ELN en Colombia, que se encuentran además entre los conflictos activos más longevos a nivel mundial. En estos dos últimos casos, durante 2016 los grupos armados estuvieron involucrados en conversaciones de paz con las autoridades –de carácter exploratorio en el caso del ELN– con el propósito de poner fin a la violencia. En contraste, en el primer caso –donde no hay negociaciones activas– se observó un repunte en las hostilidades entre el grupo armado de oposición naxalita y las autoridades indias.

La motivación de cambio de sistema también estuvo presente en los conflictos con participación de actores armados de inspiración yihadista y que pretenden imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estas organizaciones se encuentran las diversas filiales de al-Qaeda –como AQMI, que opera en Argelia, pero también en Libia y otros países del Sahel; o AQPA, en Yemen–; el grupo armado Estado Islámico (ISIS) y sus grupos afines –que le han declarado lealtad y aspiran a formar parte del pretendido califato–; además de organizaciones como Boko Haram en Nigeria, al-Shabaab en Somalia, Abu Sayyaf en Filipinas, grupos insurgentes que operan en la zona del norte del Cáucaso, en Rusia, o las milicias talibán que actúan en Pakistán y Afganistán. En muchos casos estos grupos han aprovechado las dinámicas de inestabilidad y debilitamiento del Estado, así como la competencia entre actores regionales, para expandir sus actividades y su radio de acción. Respecto a la oposición a las políticas de un determinado gobierno, este elemento estuvo presente en 10 de los 24 casos anteriormente mencionados. Este factor tuvo su expresión durante 2016 en forma de fuertes tensiones y violencia entre gobiernos y sectores de la oposición –como por ejemplo Burundi– y estuvo presente en escenarios en los que la disputa por el poder ha llevado a grupos armados y/o facciones políticas a asumir el control territorial de zonas concretas en las que reivindican su autoridad y legitimidad, como en RCA, Libia o Yemen (al-houthistas).

En materia de causas, y también siguiendo la tendencia de años previos, **otra serie de contextos de conflicto armado tuvo entre sus motivaciones aspiraciones de carácter identitario y/o demandas de autodeterminación o autogobierno.** Este factor estuvo presente en un 52% de los casos –17 conflictos–, y tuvo una especial relevancia en contextos de Asia y Europa. Entre ellos cabe mencionar China (Turquestán Oriental), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Ucrania (este) y Turquía (sudeste). Este último caso fue uno de los que vivió una de las peores escaladas de violencia durante 2016, fruto de la intensificación del conflicto armado entre el Estado turco y la insurgencia kurda del PKK. Este elemento de reivindicaciones identitarias y de autonomía también se observó en algunos conflictos armados en África –como en Etiopía (Ogadén), Malí (norte) o Sudán (Darfur y Kordofán Sur y Nilo Azul)– en contextos donde han existido problemas para reconocer o dar cabida a la pluralidad étnica y política, lo que ha derivado en el surgimiento de movimientos de contestación al poder central o de carácter secesionista. En Oriente Medio este factor fue especialmente relevante en el conflicto Israel-Palestina, pero también estuvo presente en otros casos, como Iraq o Siria, vinculado a la presencia de actores armados con agendas autonomistas (grupos kurdos). Cabe destacar que en muchos contextos la proliferación de actores armados y las complejas dinámicas de violencia han supuesto la coexistencia o interacción –en ocasiones una relación de cooperación y en otras de conflicto– entre actores armados con agendas de autogobierno o identitarias y otros con aspiraciones de cambio de sistema. Así, por ejemplo, durante 2016 combatientes de las milicias kurdas del PYD (YPG/YPJ) se enfrentaron a ISIS en el norte de Siria; mientras que en Filipinas el grupo armado MILF y la facción mayoritaria del MNLF decidieron cooperar con la campaña del Gobierno contra diversos grupos insurgentes de línea yihadista que operan en Mindanao y, en algunos casos, se enfrentaron directamente con miembros de Abu Sayyaf.

Finalmente, en cuanto a las causas de la conflictividad armada cabe mencionar que **otro grupo de casos tuvo entre sus principales motivaciones la lucha por el control de recursos y territorios.** Este factor se observó en nueve de los 33 casos de conflictos armados en 2016 –lo que representa un 27% del total–, aunque puede considerarse que este elemento fue una dimensión subyacente en muchos escenarios de conflicto a nivel global. La pugna por el control de recursos fue un rasgo presente en conflictos armados en el continente africano, como quedó en evidencia en 2016 en los enfrentamientos en Libia en las zonas del creciente petrolero; en el avance de grupos armados en la RCA hacia zonas clave para controlar la extracción de diamantes y los flujos de armas; o en las actividades de explotación y comercio ilegal de minerales para financiar a grupos armados en la RDC. Esta dimensión también estuvo presente en casos como el de Sudán (tanto en Darfur como en Kordofán y Nilo Azul) y en Sudán del Sur. Fuera de África, este factor también fue un elemento explicativo de las dinámicas de violencia en Pakistán (Baluchistán). Respecto a la dimensión de control de territorio, el caso más representativo fue el de Israel-Palestina, donde la persistente construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos no sólo fue denunciada en 2016 como una flagrante violación al derecho internacional por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, sino también como uno de los principales obstáculos para avanzar en la solución de dos Estados.

En materia de evolución de los conflictos armados a nivel global, durante 2016 siete de los 33 casos (21%) registraron una disminución de la violencia respecto al año anterior. Entre ellos, el ya mencionado caso de China (Turquestán Oriental), que dejó de ser considerado como

Cuadro 1.1. **Tendencias regionales en materia de conflictividad**

ÁFRICA	• El continente concentró el mayor número de conflictos armados, un total de 13, equivalentes al 39% de todos los casos a nivel global. Además, la mayor parte de los casos africanos fueron de intensidad elevada, seis de los 13, es decir, el 46% de los casos registrados en África: Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán y Nilo Azul) y Sudán del Sur. • La totalidad de casos de conflicto armado de la región fueron de carácter interno internacionalizado. En este contexto, cabe destacar, por ejemplo, la creciente internacionalización del conflicto armado protagonizado por Boko Haram, que inicialmente concentraba sus acciones armadas en Nigeria y que ha pasado a operar en la región de Lago Chad, compartida por Nigeria, Chad, Níger y Camerún. • Respecto a las causas de los conflictos, en la mayoría de casos estuvieron presentes factores de oposición a las políticas de los gobiernos o al sistema político, económico o ideológico del Estado (nueve casos o 69%). Otros siete contextos presentaron elementos vinculados a la lucha por el control de recursos y territorios (54%), y en otros seis demandas identitarias o de autodeterminación y autogobierno (46%). • En materia de evolución de los conflictos armados, durante 2016 la gran mayoría de casos presentó niveles de violencia similares o peores respecto al año anterior (seis casos respectivamente). Sólo en un contexto, en la Región Lago Chad (Boko Haram) se identificó un descenso de la violencia en comparación con 2015, aunque el caso siguió siendo uno de los más graves del continente, con un gran impacto en términos de muertes, crisis humanitaria y desplazamiento forzado.
AMÉRICA	• Albergó un único caso de conflicto armado, el de Colombia. En línea con lo ocurrido el año anterior, el contexto colombiano presentó una baja intensidad y una tendencia de descenso de la violencia, en el marco de la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP y el inicio de negociaciones exploratorias con el grupo armado ELN en 2016.
ASIA	• La región concentró el mayor número de conflictos armados de carácter interno a nivel mundial. La mitad de los casos en la región –China (Turquestán Oriental) Filipinas (NPA), India (CPI-M), Myanmar y Tailandia (sur)– fueron de carácter interno, mientras que los otros cinco tuvieron un carácter interno internacionalizado. • Siguiendo la tendencia de años previos, en 2016 Asia también se caracterizó por la mayor prevalencia de casos de conflicto armado vinculados a demandas identitarias o de autogobierno. Este factor de causalidad estuvo presente en seis de los diez contextos en la región. En cinco casos, el elemento de oposición al gobierno o al sistema del Estado fue una de las causas significativas, mientras que en un caso –Pakistán (Baluchistán)– la cuestión de los recursos jugó un papel especialmente destacado. • Asia fue escenario de dos conflictos de intensidad elevada durante 2016, Afganistán y Pakistán, que en línea con años previos presentaron elevados niveles de letalidad. No obstante, en términos comparativos, en el caso de Pakistán se redujeron los niveles de violencia respecto al año anterior. • La gran mayoría de conflictos armados presentaron una intensidad media (cuatro casos) o baja (cuatro), incluyendo el caso de China (Turquestán Oriental) que dejó de ser considerado conflicto armado activo al finalizar 2016 debido al descenso en los niveles de violencia. • La mitad de los casos del continente evolucionaron negativamente respecto al año anterior –Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M), Myanmar y Pakistán (Baluchistán).
EUROPA	• Se registraron tres casos de conflicto armado, uno de carácter interno –Rusia (Daguestán)– y dos de carácter interno internacionalizado –Turquía (sudeste) y Ucrania (este). Rusia fue escenario de la disputa en el primer caso y parte implicada en el caso del conflicto en Ucrania, ya que Moscú continuó dando apoyo a actores armados en la zona oriental de este último país. • En términos de causalidad, los conflictos armados en Europa presentaron una diversidad de motivaciones, aunque con una mayor presencia de factores vinculados a cuestiones identitarias o de autogobierno –presentes en los casos de Turquía (sudeste) y Ucrania (este). En este último caso también fue relevante el elemento de oposición a las políticas del gobierno, mientras que en Rusia (Daguestán) el principal factor subyacente en la dinámica del conflicto fue la aspiración a un cambio de sistema por parte de grupos armados de línea yihadista. • Turquía (sudeste) registró un incremento significativo de la violencia en 2016 y pasó a ser considerado de alta intensidad (frente a la intensidad media registrada el año anterior). Ucrania, en cambio, presentó una disminución de la violencia en comparación con 2015 y fue catalogado como conflicto armado de intensidad media en 2016. Rusia (Daguestán) se mantuvo como un contexto de baja intensidad, en línea con lo observado el año previo.
ORIENTE MEDIO	• En términos comparativos y en línea con los últimos años, la región concentró la mayor proporción de conflictos armados de alta intensidad. Cuatro de los seis casos de la zona (67%) –Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– presentaron unos elevados niveles de violencia con severos impactos en la población. • Los tres conflictos armados más graves de Oriente Medio –Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– registraron un aumento en los niveles de violencia en 2016, con serias repercusiones en términos de letalidad, pero también de impacto humanitario y desplazamiento forzado. Los otros tres contextos –Egipto (Sinaí), Israel-Palestina y Yemen (AQPA)– presentaron una evolución similar al año 2015, por lo que no se registró ningún caso en el que se observara un descenso de la violencia. • Todos los conflictos armados fueron de carácter interno internacionalizado a excepción del caso de Israel-Palestina, el único contexto calificado como conflicto armado internacional en la región y a nivel mundial. • La dimensión de internacionalización de los conflictos en esta región se hizo patente en la intervención de coaliciones militares internacionales y de terceros Estados en casos como los de Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas) y en la acción transfronteriza de diversos grupos armados. • En términos de causalidad, Oriente Medio también presentó una gran diversidad de factores, con una presencia destacada de casos –cinco de seis, lo que equivale a un 83%– donde fue relevante la aspiración a un cambio de sistema, en especial por parte de actores armados de inspiración yihadista.

Gráfico 1.2. **Intensidad de los conflictos armados**

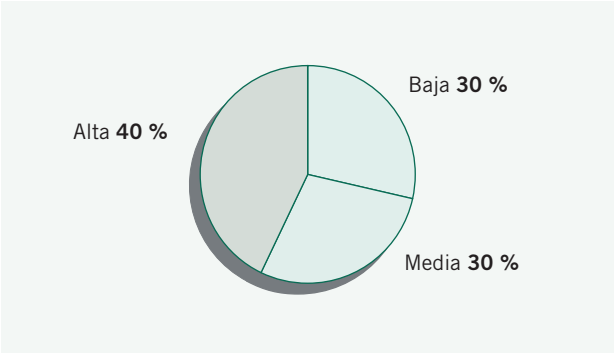
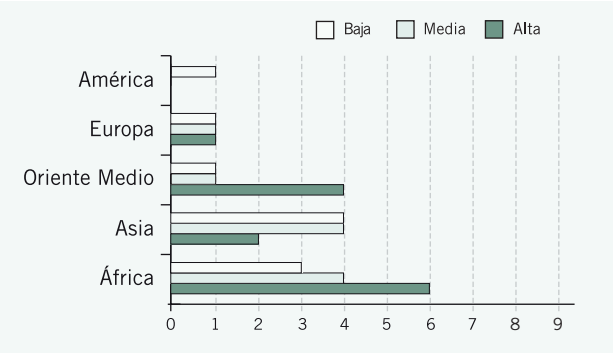


Gráfico 1.3. **Intensidad de los conflictos por regiones**



un conflicto armado activo, y el de Colombia, donde los avances en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP permitieron una reducción en las dinámicas de violencia asociadas al conflicto. Otro tercio de los contextos –11 casos, equivalentes al 33%– presentaron una evolución similar a la de 2015. La mayor parte de los conflictos armados –15 casos o el 46%– registró un empeoramiento durante 2016, con mayores niveles de violencia e inestabilidad que el año anterior. Algunos de los conflictos armados que se deterioraron significativamente en 2016 fueron los de Malí (norte) y Libia y en ambos casos fue –en parte– como consecuencia de las serias dificultades para implementar acuerdos suscritos el año 2015 con el propósito de reconducir el conflicto por la vía política.[12] Los niveles de violencia e inestabilidad también se incrementaron de manera notoria en casos como el de Filipinas (Mindanao) o el de Turquía (sudeste) y en los dos contextos esta evolución estuvo determinada, entre otros factores, por la mayor complejidad de las dinámicas de violencia. Otros tres contextos que se agravaron de manera importante en 2016 fueron los de Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas), escenarios caracterizados por el gran número de actores armados involucrados en la disputa –incluyendo coaliciones internacionales y terceros Estados– y por el gravísimo impacto de las hostilidades en la población civil.

La mayor parte de los conflictos armados –15 casos o el 46%– registró un empeoramiento durante 2016, con mayores niveles de violencia e inestabilidad que el año anterior

En lo que respecta a la intensidad de los conflictos armados –valorada tanto por las repercusiones de las disputas en términos de letalidad como en los impactos de la violencia en la seguridad humana, la destrucción de infraestructuras y los desplazamientos forzados de población, entre otros factores–, el panorama de conflictividad en 2016 constató una distribución similar entre casos de baja y media intensidad. Un 30% de los conflictos –10 casos– presentó una intensidad baja y otro 30% una mediana intensidad. La mayor parte de los conflictos armados en 2016 tuvieron una intensidad elevada –13 casos, equivalentes a un 40%–, cifra que representa un incremento de los casos graves respecto a años anteriores: 31% en 2015, 33% en 2014. **Los conflictos de intensidad elevada en 2016 fueron: Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán y Nilo Azul), Sudán del Sur, Afganistán, Pakistán, Turquía (sudeste), Egipto (Sinaí), Iraq, Siria, Yemen (al-houthistas)**. Como queda patente, la mayor parte de estos casos se concentró en África y Oriente Medio. Cabe destacar que en algunos de estos contextos las cifras de letalidad superaron con creces el millar de víctimas mortales anuales. Este fue el caso, por ejemplo, de Sudán del Sur, donde se registraron más de 3.000 muertes a causa del conflicto en 2016; el de Afganistán, donde se contabilizaron más de 9.000 personas fallecidas, incluyendo más de 5.000 miembros de las fuerzas de seguridad y casi 3.500 civiles; el de Iraq, donde el balance de fallecimientos entre la población civil en el último año ascendió a más de 16.000 personas; y especialmente el caso de Siria, donde algunas estimaciones apuntan a que entre 50.000 y 60.000 personas habrían perdido la vida en 2016 como consecuencia de las hostilidades.

1.2.2. Impacto de los conflictos en la población civil

Los conflictos armados a nivel mundial continuaron causando gravísimos impactos en la población civil, además de destrucción de infraestructuras y repercusiones de largo plazo. **Las consecuencias de la conflictividad armada global no se reflejaron solamente en los elevados niveles de letalidad entre civiles en algunos contextos de conflicto armado, sino también en otros múltiples impactos de la violencia utilizada de manera indiscriminada o, incluso, deliberadamente contra población civil**. Durante 2016 la situación en algunos escenarios de conflicto fue especialmente significativa en este ámbito, como por ejemplo en el caso de Siria. Numerosos informes de ONG y de organismos de la ONU denunciaron múltiples abusos cometidos a gran escala en este país, que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra y/o contra la humanidad. Entre ellos el asesinato de civiles desarmados y combatientes heridos, el uso de torturas y malos tratos, la muerte de millares de personas en centros de detención, secuestros y desapariciones, además de otras prácticas especialmente lesivas para la población civil, como los asedios, que

12. Véase el capítulo 3 (Procesos de paz).

sometieron a miles de personas a una situación de aislamiento, falta de alimentos y asistencia sanitaria. En estos contextos, el hambre y el acceso a otros recursos como el agua potable o a la electricidad fueron utilizados como armas de guerra. La situación en Siria –muchos de cuyos aspectos están presentes a diferente escala en otros conflictos armados– alentó debates y mensajes de alerta sobre la continua transgresión a las normas y principios del derecho internacional humanitario (DIH), leyes definidas justamente para regular los métodos y prácticas usadas en escenarios bélicos y para proteger a quienes no participan en las hostilidades.[13] Las consecuencias derivadas de esta falta de distinción entre civiles y combatientes en el marco de los enfrentamientos y el uso de la violencia fueron especialmente patentes durante 2016 en acontecimientos ocurridos en contextos como Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, RCA, RDC, Sudán del Sur, Afganistán, India (CPI-M), Myanmar, Ucrania (este), Turquía (sudeste), Rusia (Daguestán), Yemen (al-houthistas), Iraq, Israel-Palestina y Siria.[14]

En este contexto de desafío a las normas del DIH, **los ataques a infraestructuras de salud y personal médico en escenarios de conflicto armado fueron uno de los temas que motivaron especial preocupación en 2016**. El Consejo de Seguridad aprobó en mayo una resolución (2286), promovida por más de 80 Estados, en la que condena de manera contundente este tipo de ataques en situaciones de conflicto armado, exige el fin de la impunidad a los responsables de estas acciones y subraya las consecuencias de largo plazo que tienen este tipo de ofensivas en la población civil y en los sistemas de salud de los países afectados. La resolución recuerda que las partes contendientes tienen la obligación de respetar el DIH y sus compromisos bajo los convenios de Ginebra, que incluyen garantías sobre la seguridad y el libre acceso del personal médico y humanitario. Siria es uno de los casos donde las ofensivas contra infraestructuras de salud han sido más recurrentes, como han constatado los informes de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre Siria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de otras ONG –Amnistía Internacional denunció en 2016 que el régimen y Rusia estaban recurriendo a esta práctica como parte de su campaña bélica para recuperar el control de Alepo, por ejemplo–, pero no ha sido el único caso. En los últimos tres años la Cruz Roja contabilizó 2.400 ataques en 11 países y Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó sobre continuos ataques a hospitales en Afganistán, RCA, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen. MSF subrayó, además, que cuatro de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU estaban involucrados en coaliciones militares que han sido responsables de este tipo de ataques.

Los conflictos armados siguieron teniendo severos impactos en las y los menores de edad, como resultado de secuestros, reclutamiento forzado y destrucción de infraestructuras civiles, entre otras prácticas

Adicionalmente, los conflictos armados siguieron teniendo severas consecuencias en las y los menores de edad. Según un nuevo informe anual del secretario general de la ONU sobre la situación de los niños y niñas en contextos de conflicto armado –publicado en abril de 2016 y que cubre el período de enero a diciembre de 2015–, se constataron crecientes consecuencias graves en las y los menores de edad, relacionadas directamente con la denigración y la falta de cumplimiento del DIH y las leyes internacionales de derechos humanos en diversos escenarios.[15] El informe destaca particularmente algunos casos como el de Afganistán –que en 2015 presentó los mayores niveles de víctimas mortales entre menores de edad desde que existe un registro sistemático de bajas civiles (en 2009)–, Somalia –donde se documentó un aumento del 50% en los abusos a menores en comparación con el año anterior–, Sudán del Sur –donde menores padecieron especialmente durante las ofensivas militares contra fuerzas de la oposición–, o el de Siria –por el elevado número de niñas y niños fallecidos en el marco del conflicto. **En otros contextos se denunció el incremento en el reclutamiento de menores, como por ejemplo en Somalia o Yemen. En este último país, por ejemplo, la ONU constató que durante 2015 la cifra de menores reclutados por actores armados se había quintuplicado respecto al año anterior** –en su mayoría (72%) captados por los al-houthistas. El informe también confirma que el número de menores fallecidos o heridos a causa del incremento de la violencia en Yemen –en su mayoría niños (70%)– se había multiplicado por seis en comparación con 2014, en su mayor parte (60%) como consecuencia de ofensivas atribuidas a la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudita.

El informe también subraya los efectos en las y los menores de los persistentes ataques contra infraestructuras civiles como escuelas y hospitales, en muchos casos como consecuencia de ofensivas aéreas en zonas pobladas, y denuncia las acciones deliberadas de algunos actores armados para impedir el acceso de las niñas a la educación. Al igual que en el informe anterior, el secretario general de la ONU expresa su profunda inquietud por el aumento en el fenómeno de los secuestros a manos de grupos como al-Shabaab, Boko Haram, ISIS o el LRA, entre otros, y por la vulnerabilidad de las y los menores en situaciones de desplazamiento forzado, en especial de aquellos no acompañados. El análisis de los acontecimientos ocurridos en los distintos conflictos armados a lo largo de 2016 confirma la persistencia de muchas de las dinámicas que afectan a niños y niñas en conflictos armados. En clave positiva, el informe del secretario general de la ONU sobre niños y niñas en conflictos armados destaca el trabajo en campañas y planes de acción contra el reclutamiento

13. Véase "Siria y el fracaso en la protección de civiles en contextos de conflicto armado" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).
14. Véase el resumen anual sobre estos casos en este capítulo.
15. Asamblea General y Consejo de Seguridad de la ONU, *Children and armed conflicto. Report of the Secretary General*, A/70/836-S/2016/360, 20 de abril de 2016.

de menores en países como Afganistán, RDC, Myanmar y el compromiso suscrito por el Gobierno de Sudán en marzo de 2016 para poner fin y prevenir el reclutamiento y uso de menores por parte de sus fuerzas de seguridad. El documento también señala en positivo los avances vinculados al proceso de paz en Colombia. Las FARC-EP –que en 2015 ya se habían comprometido a frenar el reclutamiento de menores de 17 años y de separar a los menores de 15 de sus filas– asumieron un compromiso público a comienzos de 2016 para poner fin al reclutamiento de menores de 18 años. El informe de la ONU celebra además que la corte constitucional colombiana decidiera que los y las menores reclutados por todos los actores armados, incluyendo en fase de desmovilización, fueran considerados como víctimas y, por tanto, sujetos de derechos a la reparación y a un apoyo al proceso de reintegración. El acuerdo de paz firmado en diciembre de 2016 definió un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, entre las cuales identifica a las niñas y los niños como un grupo vulnerable del conflicto.

La ONU lamentó la persistencia de prácticas como las violaciones masivas y el uso deliberado de la violencia sexual en contextos de conflicto armado

Otro de los impactos de los conflictos armados continuó siendo el fenómeno de la violencia sexual, aunque en muchas ocasiones menos visible e infra-denunciado.[16] Como destaca el informe anual del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos –publicado en junio de 2016 y que analiza el período de enero a diciembre de 2015–, expertos en terreno estiman que por cada caso de violación denunciado en contextos de conflicto armado existen otros 10 ó 20 casos que no son documentados. **El informe de la ONU lamenta la persistencia de episodios de violaciones masivas en escenarios bélicos y señala que durante 2015 se documentaron abusos de este tipo en RDC (este), Sudán y Sudán del Sur.** Asimismo, señala el uso de las agresiones sexuales motivadas por la supuesta filiación política de las víctimas en casos como Burundi o como forma de castigo, como en el caso de mujeres cristianas violadas en represalia por su contacto con miembros de la comunidad musulmana en RCA. El texto de la ONU también alerta sobre el uso sistemático de la violencia sexual en otros contextos de conflicto, como Iraq o Siria y destaca su uso como "táctica terrorista" y como instrumento para perpetrar genocidio contra comunidades minoritarias por parte de grupos armados como ISIS. En este último caso, el uso de la violencia sexual se identifica como una práctica premeditada y estratégica para los fines de la organización. La oferta de mujeres como esposas temporales o esclavas sexuales ha actuado, por un lado, como un factor de atracción de combatientes extranjeros que se han sumado a las filas de ISIS y, por otro, como un elemento de expulsión de comunidades que se han visto forzadas a abandonar sus hogares para escapar de la amenaza del grupo armado.

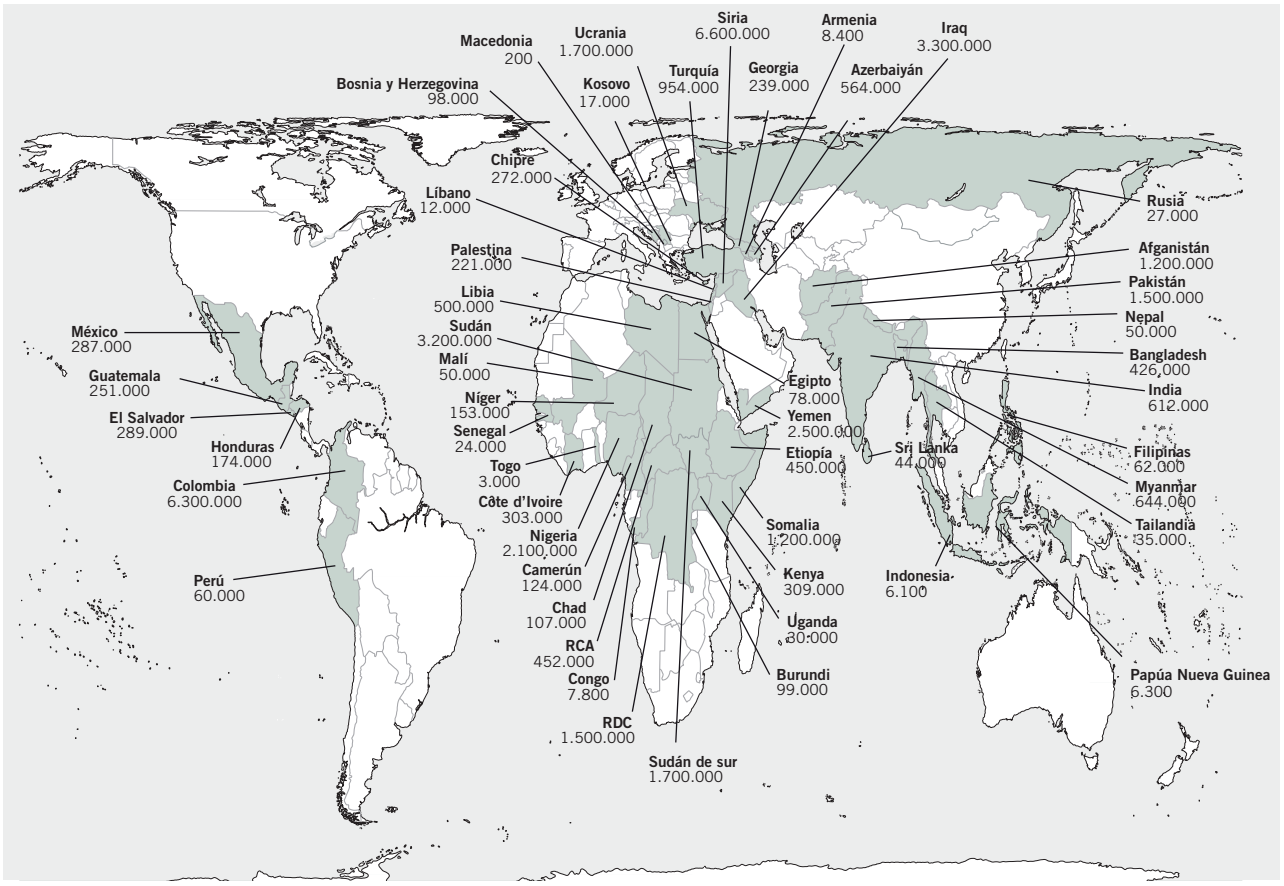
Cabe destacar que la violencia sexual también opera como una amenaza a las mujeres que afecta su movilidad y sus posibilidades de actuación en el ámbito público, convirtiéndose en un factor de control moral y social que pretende circunscribirlas a la esfera privada. **El análisis de la evolución de los conflictos armados a nivel mundial durante 2016 revela la continuidad de este fenómeno, con nuevos episodios de violencia sexual en casos como Burundi** –donde una comisión de investigación de la ONU denunció al Gobierno tras identificar un patrón sistemático de abusos a los derechos humanos, incluyendo violaciones–; **Libia** –con una alta incidencia de abusos contra la población migrante y refugiada que llegó al país norteafricano en su intento por alcanzar las costas europeas–; **Myanmar** –donde se identificó un patrón periódico de abusos a civiles, entre ellos asesinatos y violaciones–; **Ucrania (este)** –con denuncias de violencia sexual tanto en áreas bajo control del Gobierno como en manos de las fuerzas rebeldes–; **o Siria** –donde volvieron a registrarse acusaciones de uso de violencia sexual por distintos actores armados implicados en el conflicto.

Los masivos desplazamientos forzados de población fueron otro de los impactos más dramáticos e ilustrativos de los conflictos armados, con consecuencias de amplio alcance para las poblaciones civiles afectadas por múltiples formas de violencia. En los últimos años los balances de ACNUR han constatado el significativo aumento de las cifras de desplazamiento forzado a nivel global, con un incremento de más de un 50% en un período de cinco años. **Desde que en 2011 la agencia de la ONU anunciara un nuevo récord de 42,5 millones de personas desplazadas de manera forzosa los números no han dejado de aumentar de manera vertiginosa: 45,2 millones en 2012; 51,2 millones en 2013; 59,5 millones en 2014; y 65,3 millones al finalizar el año 2015**.[17] En este total de 65,3 millones de personas –una cifra superior a la población de Reino Unido y que si correspondiera a un país lo ubicaría en el puesto 21 de los más poblados del mundo– se incluyen 21,3 millones de personas refugiadas (16,1 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,2 millones de palestinos y palestinas registrados en la UNRWA), otras 40,8 millones de personas en situación de desplazamiento forzado interno y 3,2 millones de solicitantes de asilo.

De acuerdo a las cifras globales disponibles a principios de 2017, que presentan un balance parcial de 2016 basándose en datos relativos al primer semestre del año, estas tendencias se mantenían.[18] Así, por ejemplo, el número de personas refugiadas bajo mandato de ACNUR –excluyendo, por tanto, a la población palestina vinculada a la UNRWA– había pasado de 16,1 millones a finales

16. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).
17. UNHCR, *Global Trends: Forced Displacement in 2015*, 20 de junio de 2016.
18. ACNUR publica su informe anual a mediados de año, el 20 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Los datos que se presentan a continuación corresponden al informe parcial con datos relativos al primer semestre de 2016. UNHCR, Mid-Year Trends 2016, 17 de febrero de 2017.

Mapa 1.2. **Número de personas desplazadas internas al finalizar 2015**



Fuente: IDMC, *GRID 2016: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2016.

de 2015 a 16,5 millones a mediados de 2016. **Siria se mantuvo –con diferencia– como principal país emisor de población refugiada a nivel mundial.** Si a mediados de 2013 la población siria que había huido del conflicto armado en su país representaba un 17% de la población refugiada a nivel global, este porcentaje se había elevado hasta el 32% a mediados de 2016, ya que un total de 5,3 millones de personas había abandonado el país huyendo del conflicto. Además de Siria, entre los principales países emisores de población refugiada se encontraban Afganistán (2,7 millones de personas), Somalia (1,1 millones), Sudán del Sur (854.200), Sudán (639.000), RDC (536.100), RCA (473.300), Myanmar (451.100), Eritrea (435.600) y Colombia (339.200). La lista evidencia que la mayoría eran contextos africanos afectados por conflictos armados. Entre ellos cabe destacar el caso de Sudán del Sur, donde las dinámicas de violencia motivaron un significativo aumento de población refugiada, pasando de 102.700 personas a mediados de 2013 a 854.200 a mediados de 2016. Aunque la magnitud de la crisis es menor que la provocada por el conflicto armado en Siria, los flujos de población refugiada desde Sudán del Sur estaban focalizados en algunos de los países más empobrecidos a nivel mundial, como Etiopía, Sudán o Uganda. En términos generales, y en línea con lo observado en 2015, los países receptores de un mayor número de personas refugiadas a nivel mundial a mediados de 2016 eran Turquía (2,8 millones de personas), Pakistán (1,6 millones) y Líbano (1 millón), seguidos de Irán (978.100) y Etiopía (742.700). Si se considera el porcentaje de población refugiada respecto a la población del país receptor, Jordania –173 personas refugiadas por cada mil habitantes– y Líbano –89 personas refugiadas por cada mil habitantes– continuaron siendo los países con mayor proporción de personas refugiadas, en su gran mayoría procedentes de Siria.

Hasta mediados de 2016, los diez principales países emisores de población refugiada eran Siria, Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, RDC, RCA, Myanmar, Eritrea y Colombia

Cabe destacar que el informe de ACNUR también se hace eco de las repercusiones de la llegada de personas refugiadas a Europa. El fenómeno alcanzó especial notoriedad en 2015 y dejó en evidencia las contradicciones y profundas carencias en la respuesta de la UE, que apostó por una aproximación predominantemente securitaria en vez de un enfoque centrado en la protección y garantías a los derechos humanos. Según los datos de ACNUR, en 2015 más de un millón de personas arriesgaron sus vidas cruzando el Mediterráneo en busca de refugio, de las cuales un número importante procedían de países afectados por conflictos armados graves. Las principales nacionalidades de las personas que llegaron a las costas europeas fueron la siria, la afgana y la iraquí.

Del total de personas que llegaron a Europa, la gran mayoría –unas 850.000– lo hicieron a través de la ruta del Mar Egeo que conecta Turquía con Grecia. A lo largo de 2015, según los recuentos disponibles, un total de 3.771 personas murieron en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas. En 2016 se redujo el número de personas que apostaron por cruzar el Mediterráneo, pero las cifras de letalidad aumentaron. En octubre de 2016 ya se había superado el balance de 2015 y **al finalizar el año 2016 los datos de diferentes organizaciones indicaban un alarmante incremento en las muertes de personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo, alcanzando la cifra record de 5.000 víctimas mortales en un año**.[19] Es decir, un promedio de casi 14 muertes diarias en el Mar Mediterráneo. Tras los acuerdos de la UE con Turquía para bloquear los flujos de personas refugiadas en la zona oriental del Mediterráneo, la conocida como "ruta central" que conecta Libia con Italia se convirtió en la principal vía de tránsito y en la más letal.

Según IDMC, los conflictos armados en Yemen, Iraq y Siria motivaron más de la mitad de los nuevos desplazamientos forzados internos en 2015

En cuanto a los desplazamientos forzados de población de carácter interno –dentro de las fronteras del mismo Estado escenario de conflicto y violencia–, las cifras globales disponibles correspondientes a 2015 indicaban que al finalizar ese año había un total de 40,8 millones de personas en esta situación. **Según los balances de IDMC, el desplazamiento forzado interno producto de conflictos y violencia no ha cesado de aumentar desde 2003 y la cifra de 2015 –que duplica a la de personas refugiadas a nivel global– era la más alta desde que existen registros**.[20] A lo largo de 2015 más de 8,6 millones de personas se convirtieron en nuevas desplazadas como resultado de conflictos y violencia en un total de 28 países. Las guerras en Oriente Medio tuvieron una especial incidencia en este balance. Los datos de IDMC indican que en 2015 los conflictos en Yemen, Iraq y Siria supusieron 4,8 millones de nuevos desplazamientos, es decir, más de la mitad de todos los nuevos desplazamientos a nivel mundial. Yemen se ubicó a la cabeza de los nuevos desplazamientos ya que la intensificación de las hostilidades en el país forzó la huida de sus hogares de más de 2,5 millones de personas –casi el 10% de la población– en tan solo un año (que se sumaron a las 330.000 que ya vivían en una situación de desplazamiento interno crónico en provincias del norte). Fuera de esta región, conflictos como el de Ucrania, Sudán, RDC o Afganistán también motivaron importantes nuevos desplazamientos de población en 2015.

En lo que respecta a la cifra global, del total de 40,8 millones de personas desplazadas internas en el mundo al finalizar 2015, dos tercios –alrededor de 30 millones de personas– se ubicaban en tan solo una decena de países. Siria se situaba en primer lugar con 6,6 millones de personas desplazadas internas al finalizar 2015. Pese a ello, en este caso, se observó un descenso en el número de personas desplazadas internas –de 7,6 a 6,6 millones– en parte porque muchas de ellas decidieron cruzar las fronteras y buscar refugio fuera del país. Otros países que concentraron un número importante de población desplazada interna fueron Colombia, RDC, Iraq, Sudán y Yemen, entre otros. La evolución de los conflictos armados en 2016 parece indicar que las tendencias en materia de desplazamiento forzado interno continuarán la línea identificada por el IDMC y ACNUR, si se tiene en cuenta el impacto de los acontecimientos en algunos países como los enfrentamientos entre diversos grupos armados en RCA –que sólo en noviembre de 2016 forzaron a más de 11.000 personas a huir de sus hogares–; las consecuencias de la ofensiva militar del Gobierno de Sudán en Jebel Marra –que motivó una grave crisis de desplazamiento forzado en Darfur–; las repercusiones de los enfrentamientos y atentados en Afganistán –que agravaron la problemática situación de desplazamiento forzado en el país–; el deterioro de la situación en Yemen –donde se calculaba que la cifra de población desplazada interna había alcanzado los tres millones de personas al finalizar 2016–; los combates y los efectos de la dura campaña del régimen de Bashar al-Assad contra fuerzas de la oposición en Alepo –que forzaron a más de 100.000 personas a huir de la ciudad–, o la operación de la coalición internacional y el Gobierno iraquí contra ISIS en Mosul –que motivó importantes nuevos desplazamientos de civiles, elevando la cifra total de personas desplazadas internas en el país a más de 3,6 millones al finalizar 2016.[21]

1.2.3. Embargos de armas

En virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU puede adoptar medidas coercitivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, que van desde sanciones económicas o de otra índole hasta la intervención militar internacional.[22] El empleo de sanciones tiene por objeto ejercer presión sobre un Estado, entidad o individuo para que cumpla con los objetivos fijados por el Consejo de Seguridad sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza. Las sanciones pueden ser económicas y comerciales, en sentido amplio; o medidas más selectivas, como embargos de armas, prohibiciones de viajar, restricciones financieras o diplomáticas, o una combinación de ambas

19. UN News, "Mediterranean death toll in 2016 'worst we have seen' – UN refugee agency", *UN News*, 25 de octubre de 2016; Nick Cumming-Bruce, "Worst Annual Death Toll Ever: Mediterranean Claims 5,000 Migrants", *The New York Times*, 23 de diciembre de 2016.
20. IDMC, *GRID 2016: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2016.
21. Véase el resumen anual sobre los conflictos armados mencionados en este capítulo.
22. Para este fin existe el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tabla 1.2. **Embargos de armas de la ONU, UE, OSCE y la Liga Árabe en 2016**

País*	Entrada en vigor	País	Entrada en vigor
Embargos vigentes decretados por Naciones Unidas (14)		**Embargos decretados por la UE (22)**	
Al-Qaeda y entidades e individuos asociados, milicias talibán **	2002	**Al-Qaeda y milicias talibán****	2002
Côte d'Ivoire	2004-2016	Belarús	2011
Corea, RPD	2006	**China**	1989
Eritrea	2009	Côte d'Ivoire	2004-2016
Irán	2006	Corea, RPD	2006
Iraq (FNG* desde 2004)**	1990	**Egipto**	2013
Líbano (FNG)	2006	Eritrea	2010
Liberia (FNG desde 2009)	1992-2016	Irán	2007
Libia	2011	**Iraq (FNG desde 2004)**	1990
RCA	2013	Líbano (FNG)	2006
RDC (FNG desde 2008)	2003	Liberia (FNG desde 2008)	2001-2016
Somalia (FNG desde 2007)	1992	**Libia**	2011
Sudán (Darfur) (FNG)	2004	**Myanmar**	1991
Yemen (FNG)	2015	**RCA**	2013
		RDC (FNG desde 2003)	1993
Embargos decretados por la Liga Árabe (1)		**Rusia**	2014
Siria	2011	**Siria**	2011
		Somalia	2002
Embargos decretados por la OSCE (1)		**Sudán**	1994
Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	1992	**Sudán del Sur**	2011
		Yemen (FNG)	2015
		Zimbabwe	2002

* En negrita, país o grupo en una situación de conflicto armado sujeto a embargo.
** Embargo no ligado a un país o territorio en concreto.
*** FNG: Fuerzas No Gubernamentales.
Fuente: Elaboración propia a partir de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y European Commission, Restrictive measures in force (Article 215 TFEU), publicado el 7 de julio de 2016, European Commission.

cosas.[23] Los embargos de armas de Naciones Unidas son impuestos por resoluciones adoptadas en virtud del artículo 41 del Capítulo VII de la Carta. Al menos nueve de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben apoyar la resolución y ninguno de los miembros permanentes del Consejo (EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido) debe vetarla. Hay dos tipos de embargos del Consejo de Seguridad: los voluntarios y los obligatorios. Los Estados miembros de la ONU deben cumplir los embargos de armas obligatorios. Sin embargo, existen numerosos ejemplos de violaciones de los embargos de armas por parte de los Estados miembros. Los últimos ejemplos de que se tiene constancia corresponden a Eritrea,[24] en relación a las actividades militares de Arabia Saudita y EAU que estarían violando el embargo de armas que pesa sobre este país, e Irán, en relación a posibles transferencias de armas a países sometidos a embargo.[25]

23. Los mecanismos de sanciones y, en concreto, los embargos de armas, han sido utilizados de forma desigual desde la creación de Naciones Unidas. Entre 1945 y 1968 no fue sancionado ningún país. Entre 1968 y 1989 estos mecanismos solo fueron utilizados en dos contextos, vinculados al proceso de descolonización: en la antigua Rodhesia del Sur (actual Zimbabwe) entre 1968 y 1979 (debido a la inestabilidad interna); y en Sudáfrica entre 1977 y 1994 (por la intervención sudafricana en los países vecinos, la violencia e inestabilidad interna y el sistema de discriminación racial del Apartheid). Desde 1989, el Consejo de Seguridad de la ONU ha sancionado a 24 regímenes: la antigua Yugoslavia, Haití, Iraq, Angola, Sierra Leona, Somalia, Eritrea, Liberia, RDC, Côte d'Ivoire, Sudán (2), Líbano, Corea del Norte, Irán, Libia (2), Guinea-Bissau, RCA, Yemen, Sudán del Sur, así como contra ISIS, al-Qaeda y las milicias Talibán (2). El limitado uso de estos mecanismos durante la Guerra Fría se enmarcó, como otros instrumentos de Naciones Unidas, en la política de competencia entre bloques, por lo que el fin de este periodo supuso, como en otras áreas, un creciente activismo de la organización en este campo, facilitando la imposición de embargos de armas. Su uso también favoreció el fortalecimiento del papel de Naciones Unidas como garante de la paz y la seguridad internacionales. Además, los embargos de armas fueron progresivamente vistos como un tipo de sanciones más efectivas que las sanciones económicas, por centrarse en las élites de los Estados y en los grupos armados no estatales, limitando su impacto humanitario.
24. Véase Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, *Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado de conformidad con la resolución 2182 (2014) del Consejo de Seguridad: Eritrea*, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2016/920, 31 de octubre de 2016. Este informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, presentado en octubre de 2016, afirma que las actividades militares de Arabia Saudita y EAU en Eritrea estarían violando el embargo de armas que pesa sobre este país. Véase el resumen sobre Eritrea en el capítulo 2 (Tensiones).
25. Véase Consejo de Seguridad de la ONU, Segundo informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad, S/2016/1136, 30 de diciembre de 2016. En este informe se señala que Francia informó a la ONU de que, en marzo de 2016, se había incautado de un cargamento de armas en el Océano Índico septentrional, concluyendo que dicho cargamento procedía de Irán y estaba probablemente destinado a Somalia o al Yemen. Días después de la publicación del informe de la ONU, el secretario general de la ONU manifestaba su preocupación ante la confirmación de la posible violación del embargo de armas tras acceder a un informe confidencial que corroboraba los hechos presentados en el informe de diciembre. Véase Nicholls, Michelle, "U.N. chief concerned Iran may have violated arms embargo: report", Reuters, 8 de enero de 2017. El 24 de junio de 2016, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconoció en una entrevista televisiva que recibía todas sus armas y misiles de Irán, tal y como recogió el mismo informe de la ONU. Véase Goodenough, Patrick, "Terrorist Chief: 'As Long as Iran Has Money, We Will Have Money'", CNS, 27 de junio de 2016.

En este sentido, un informe publicado en 2016 por Small Arms Survey[26] destacaba los crecientes obstáculos organizacionales, operacionales y políticos al trabajo que realizan los expertos encargados de monitorear los embargos de armas de la ONU. Las entrevistas con expertos en armamento actuales y anteriores en los Comités de Expertos de la ONU revelan que el proceso de monitoreo está socavado por una coordinación desigual con las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU; el bloqueo a las investigaciones, al reclutamiento de expertos y al acceso a las zonas de investigación; plazos de investigación insuficientes; la interferencia política, represalias y presiones sobre los miembros de los Paneles de Expertos, entre las principales cuestiones. Estos expertos sostienen que, a pesar de estos desafíos, el monitoreo ayuda a prevenir las violaciones de los embargos de armas, debido a que se incrementan los costos de posibles violaciones de este mecanismo de sanción y probablemente evitan ciertos tipos de violaciones. No obstante, los participantes en el estudio remarcaron la necesidad de no medir el éxito de los Paneles de Expertos de la ONU estrictamente en términos de reducción de los flujos de armas, lo que sugiere que los paneles deberían funcionar junto con otras medidas, políticas y diplomáticas, para promover realmente la paz y la seguridad.

Cabe destacar que este apartado solo hace referencia a los embargos de armas impuestos o vigentes por organizaciones internacionales y no incluye los embargos y sanciones impuestos por Estados de forma unilateral. Además de la ONU, organizaciones como la Liga Árabe o la UE también han establecido embargos de armas vinculantes para sus Estados miembros en los últimos años, que en unos casos responden a la implementación de los embargos de armas que impone Naciones Unidas (como por ejemplo, el embargo de armas a RCA impuesto en 2013, o el embargo de armas a algunos de los actores involucrados en el conflicto en Yemen impuesto en abril de 2015 por parte de la ONU e implementado por parte de la UE en junio de ese año) y, en otros casos, corresponden a iniciativas propias de estas organizaciones, como es el caso de las medidas adoptadas contra Rusia en 2014 por parte de la UE. Los embargos de la UE se imponen mediante Posiciones Comunes adoptadas de forma unánime por el Consejo de la UE en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. En el caso de la organización OSCE los embargos son voluntarios. Otros organismos regionales, como la UA y ECOWAS, disponen de mecanismos similares, aunque en la actualidad no existe ningún embargo de armas establecido por estas organizaciones africanas.

En 17 de los 32 conflictos armados activos al finalizar 2016 y en 59 de las 87 tensiones no se habían establecido embargos de armas por parte de la ONU ni de otras organizaciones regionales

En definitiva, a finales de 2016 continuaban sometidos a un embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU **11 países y la organización al-Qaeda (y las entidades e individuos vinculados a ella, como las milicias talibán), dos menos respecto al año 2015, por el levantamiento de los embargos de armas que pesaban sobre Côte d'Ivoire, en abril, y Liberia, en mayo.** En abril el Consejo de Seguridad de la ONU tomó la decisión, mediante la resolución 2284, de levantar el embargo de armas que pesaba sobre **Côte d'Ivoire** desde el ciclo de violencia en las elecciones de 2010. En paralelo propuso una progresiva reducción y posible conclusión de la ONUCI a mediados de 2017, teniendo en cuenta la mejora de las condiciones de seguridad sobre el terreno desde el fin del conflicto armado y la capacidad del Gobierno para asumir la función de seguridad, aunque el mismo informe del secretario general de la ONU de marzo reconocía la persistencia de la fragilidad en el país.[27] En paralelo, el Consejo de Seguridad también aprobó el 25 de mayo la resolución 2288, por la que levantaba el embargo de armas que pesaba sobre **Liberia** como consecuencia del conflicto armado que padeció entre 1999 y 2003 y de la situación de inestabilidad de los años posteriores, debido a la mejora general de la estabilidad y a la consolidación de las instituciones estatales, aunque animó al Gobierno a establecer el marco adecuado para combatir el tráfico ilícito de armas y munición.

En seis de estos países (RDC, Iraq, Líbano, Somalia, Sudán y Yemen) los embargos de la ONU solo afectaban a actores armados no estatales, y no al Gobierno. En lo concerniente a la UE, al finalizar 2016 seguían **vigentes 20 embargos de armas establecidos por la UE sobre 19 países y sobre al-Qaeda y las milicias talibán**, este último embargo no vinculado a un país o territorio. Dos embargos, sobre Côte d'Ivoire y Liberia, fueron levantados en junio, en consonancia con las decisiones de la ONU tomadas en abril y mayo. En tres de estos países (RDC, Iraq y Líbano), además del que pesa sobre al-Qaeda y las milicias talibán, el embargo de la UE solo afectaba a actores no estatales. El caso de **Egipto** es paradigmático: existe un embargo de armas de la UE vigente sobre el país, pero en contraste con el resto de medidas restrictivas y sanciones establecidas por la UE relativas a la exportación de armas, el Consejo de la UE no estableció una decisión o regulación específica, por lo que el embargo de armas no es legalmente vinculante sino que es un compromiso político de los Estados miembros.[28] En consecuencia, diversos países están trasgrediendo dicho embargo de armas. Finalmente, la **Liga Árabe** mantuvo su embargo de

26. LeBrun, Emile, y Rigual, Christelle, *Monitoring UN Arms Embargoes. Observations from Panels of Experts*, Small Arms Survey, agosto de 2016.
27. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe especial del Secretario General sobre la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire*, S/2016/297, 31 de marzo de 2016. Véase el resumen sobre Côte d'Ivoire en el capítulo 2 (Tensiones).
28. Véase *EU arms embargo on Egypt,* SIPRI Database, 10 de enero de 2017, y European Commission, *Restrictive measures in force (Article 215 TFEU),* publicado el 7 de julio de 2016. Según SIPRI, desde 2014 diversos países miembros de la UE han suministrado significativas cantidades de armamento a Egipto y han firmado importantes contratos para futuras entregas, por lo que puede considerarse que este embargo está levantado o que se está incumpliendo sistemáticamente por no ser vinculante.

armas sobre **Siria** establecido en 2011 y la **OSCE** hizo lo propio respecto al embargo de armas de aplicación voluntaria que pesa sobre Armenia y Azerbaiyán en relación al contencioso de Nagorno-Karabaj.

En total, sumando los embargos establecidos por las diferentes organizaciones, al finalizar el año 2016 se contabilizaron **34 embargos de armas dirigidos contra un total de 22 Estados y grupos armados no estatales,**[29] cuatro menos que el año anterior por el levantamiento de los embargos de armas que pesaban sobre Liberia y Côte d'Ivoire por parte de la ONU y de la UE. 11 de los 20 embargos establecidos por la UE respondían a la implementación de los embargos del Consejo de Seguridad de la ONU.[30] Los nueve restantes correspondían a iniciativas europeas: Belarús, China, Egipto, Myanmar, Rusia, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Zimbabwe.[31] El embargo de armas que pesa sobre **China** se remonta a 1989,[32] como consecuencia de la violenta represión de las protestas en la plaza de Tiananmén, en Beijing, ya que el conflicto armado que afecta el Turquestán Oriental desde 2014 es posterior. No obstante, la interpretación de este embargo, tal y como destaca SIPRI, ha variado, y en particular el Reino Unido y Francia han llevado a cabo diferentes aproximaciones en su política comercial con China.

De los 22 Estados y grupos armados no estatales señalados por la ONU, la UE, la Liga Árabe y la OSCE, **13 hacían referencia a Estados cuyos territorios se ven afectados por conflictos armados y a actores presentes en esos mismos territorios activos a finales de 2016** (China, Egipto, Libia, Myanmar, RCA, Rusia, Siria, Sudán y Sudán del Sur y grupos armados en Iraq, Somalia, RDC y Yemen –en el caso de Sudán, RDC y Yemen, afectan a los dos conflictos que padecen cada uno de estos países–), es decir, **13 embargos que afectan a 16 situaciones de conflicto armado**. Cabría añadir **el embargo que pesa sobre al-Qaeda y las milicias talibán**, pero aunque gran parte de ambas organizaciones tienen sus bases y operan en Afganistán y Pakistán, el embargo de armas no corresponde a ningún territorio en concreto, según señala la resolución 1390.

Siete de los otros ocho restantes Estados sobre los que pesan embargos afrontaban situaciones de tensión de intensidad variable (Armenia-Azerbaiyán, Eritrea, Irán, Líbano, RPD Corea y Zimbabwe –la mayoría de estos países padecían diversos escenarios de tensión a la vez, que se veían afectados por un mismo embargo). El último caso es la situación en **Belarús**, país que continúa siendo objeto de un embargo de armas de la UE desde 2011 con motivo de la grave situación de derechos humanos imperante, el deterioro de la democracia y el imperio de la ley. **Así, de los 32 conflictos armados activos a finales de 2016, existían 17 casos en los que ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni la UE, ni la Liga Árabe ni la OSCE plantearon el establecimiento de un embargo de armas** como medida sancionadora. Además, de las 87 situaciones de crisis sociopolíticas identificadas en el año 2016, **existían 59 situaciones de tensión que tampoco fueron objeto de embargos.** Ello, pese a que en muchos casos, el carácter preventivo de la medida podría incidir en una reducción de la violencia.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Occidental

Malí (norte)	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, MLF, ANSIPRJ, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane), Chad
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:
La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país.

29. Entre éstos, existe un embargo de armas voluntario, impuesto por la OSCE sobre Armenia y Azerbaiyán en 1992.
30. En el caso de Sudán, la UE estableció el embargo para el conjunto del país en 1994 y el Consejo de Seguridad de la ONU para la región de Darfur en 2004, al que se ha añadido el embargo de armas a Sudán del Sur en el año 2011.
31. No están incluidos los países sobre los que pesan otro tipo de sanciones como congelación de fondos y otros recursos económicos, ni restricciones de entrada y prohibición de viajar de algunos de sus ciudadanos. European Commission, *Restrictive measures in force (Article 215 TFEU),* 7 de julio de 2016.
32. Véase *EU arms embargo on China,* SIPRI Database, 10 de enero de 2017, y European Commission, *Restrictive measures in force (Article 215 TFEU),* publicado el 7 de julio de 2016.

Las condiciones de seguridad en el norte del país se deterioraron significativamente durante el año, sobre todo a raíz de las continuas violaciones del cese el fuego previsto en el Acuerdo de Paz de Argelia entre los grupos vinculados a la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) y los grupos progubernamentales pertenecientes a la Plataforma. A su vez, los ataques y atentados realizados de manera permanente por las organizaciones armadas de corte yihadista, las cuales quedaron relegadas de la firma del acuerdo de paz, incrementaron la situación de inseguridad en el norte y centro del país e influyeron en la desestabilización regional registrándose atentados en Burkina Faso, Côte d´Ivoire o Níger. En total, el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) **registró durante el año 285 muertes provocadas por el conflicto armado en el país**.[33] En cuanto a cifras de desplazamiento forzado se refiere, **la población desplazada en el norte de Malí se redujo de los 62.000 registrados en enero a los 37.000 en el mes de octubre**, según datos de la Organización Internacional para la Migración (IOM, por su siglas en inglés),[34] registrándose a su vez tendencias positivas de retorno de personas que habían buscado refugio en países vecinos.

Las tensiones entre los grupos armados árabe-tuareg miembros de la CMA o de la Plataforma rebrotaron nuevamente durante el año, volviendo a poner en entredicho el acuerdo de paz alcanzado en junio del 2015.[35] Ya a finales de 2015 se habían producido duros enfrentamientos en la ciudad de Anefis entre miembros de la CMA y de la milicia progubernamental, Grupo de Autodefensa de los Imghad y los Aliados Tuareg (GATIA). La crisis de Anefis había dado paso a conversaciones bilaterales entre ambos grupos en octubre de 2015, logrando la firma de un acuerdo de respeto del alto el fuego. Sin embargo, durante el 2016 se volvieron a agudizar las tensiones, dando como resultado el estallido de diferentes brotes de violencia y la fragmentación de algunos grupos. El 21 y 22 de julio, un duro enfrentamiento registrado entre militantes de GATIA y la CMA dejó un balance de 20 muertos y más de 40 heridos. El 16 de septiembre, en otro enfrentamiento entre ambos grupos, resultaron muertos alrededor de una docena de combatientes. A su vez, desde el 18 al 26 de septiembre se registraron enfrentamientos por el control territorial de los pueblos fronterizos de Inekabawatane y Khalil. El 8 de octubre, **en un atentado con coche bomba, resultó muerto el jefe militar de la CMA y líder de la organización armada Alto Consejo para la Unidad de Azawad (HCUA)**. Paralelamente, la CMA inició un proceso interno de divisiones y fragmentaciones, generándose escisiones internas que dieron pie al surgimiento de la organización Congreso de Justicia de Azawad (CJA), encabezada por los líderes tuaregs Hamma Ag Mahmoud y el coronel Abass Ag Mohamed Ahmad, y al Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA). Las tensiones entre los grupos firmantes del Acuerdo de Paz debilitaron seriamente su implementación. Al respecto, no fue hasta a principios de octubre cuando se logró el establecimiento de las patrullas conjuntas previstas en el acuerdo, con miembros del operativo francés Barkhane, Fuerzas Armadas malienses y grupos rebeldes de la Plataforma patrullando el área de Ménaka-Ansongo, aunque sin participación de los miembros de la CMA.

La MINUSMA se ha convertido en la misión de la ONU más peligrosa en la actualidad, con 70 soldados asesinados desde 2012 en Malí

Por otro lado, los ataques de los grupos armados de corte yihadista se siguieron concentrando contra las fuerzas de seguridad malienses y contra la misión de la ONU en el país, MINUSMA. Durante el mes de febrero se registraron al menos nueve ataques que costaron la vida a unos 13 soldados malienses y a siete miembros de la MINUSMA, dejando a su vez numerosos heridos. En el que fue el peor atentado registrado en febrero, un ataque reivindicado por el grupo Ansar Dine contra la base de la MINUSMA en Kidal el día 12 dejó siete soldados guineanos fallecidos y alrededor de 30 heridos. El 12 de abril un ataque contra un vehículo de la operación Barkhane cerca de Amachach, región de Kidal, mató a tres soldados franceses. El 19 de mayo, en una emboscada perpetrada en la región de Kidal, reivindicada por Ansar Dine, perdieron la vida otros cinco soldados chadianos de la MINUSMA, y otros tres resultaron heridos. Ese mismo día, la organización yihadista Frente de Liberación de Macina (MLF) hizo público un video donde comunicó oficialmente la alianza con Ansar Dine, amenazando a Francia y sus aliados en la región. El 28 de mayo, en otra emboscada a un convoy de la MINUSMA en la región de Mopti, otros cinco cascos azules de origen togolés resultaron muertos. La MINUSMA también padeció otros ataques durante el mes de mayo donde resultaron heridos siete soldados. El 19 de junio, grupos yihadistas atacaron una base militar del Ejercito maliense en Nampala, región de Ségou, donde perdieron la vida 17 soldados y otras 35 personas resultaron heridas. La acción fue reivindicada por dos grupos diferentes: MLF y por el recientemente creado Alianza Nacional para la Protección de la Identidad Peul y la Restauración de la Justicia (ANSIPRJ). A raíz de estos acontecimientos el Gobierno decretó el estado de emergencia por 10 días, que posteriormente fue ampliado por el Parlamento hasta el 29 de marzo de 2017. El 5 y 7 de agosto, otro ataque contra la MINUSMA en Kidal, se saldó con un soldado muerto y otros seis heridos. Durante el mes de octubre, una emboscada contra un convoy de las Fuerzas Armadas malienses realizada el día 4 en Tombuctú, dejó un militar fallecido. Otro ataque posterior en Mopti, realizado por Ansar Dine, mató a cuatro soldados malienses. Posteriormente, tres soldados de la MINUSMA perdieron la vida en octubre en varios ataques registrados en Kidal, donde a su vez, y en otro ataque reivindicado por Ansar Dine contra las fuerzas

33. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016).
34. International Organization for Migration, "Displacement Tracking Matrix (DTM) Reports", 10 de noviembre de 2016.
35. Véase el resumen sobre Malí en el capítulo 3 (Procesos de paz).

francesas de la operación Barkhane, seis soldados resultaron heridos, según fuentes del Gobierno francés, aunque Ansar Dine comunicó que dos soldados franceses habían perdido la vida. En el mes de noviembre, al menos siete soldados malienses, un casco azul y cinco civiles murieron en diferentes ataques perpetrados por Ansar Dine o al-Mourabitoun. La MINUSMA sigue siendo la más peligrosa de todas las misiones de mantenimiento de la paz desplegadas por la ONU en la actualidad. A 31 de octubre, **la ONU reportó un total de 70 soldados asesinados en el país desde la puesta en marcha de la misión en el año 2012, 35 de ellos durante el 2016**. El mandato de la misión fue ampliado por el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el 30 de junio de 2017.

En relación con la desestabilización regional producida a consecuencia de atentados de organizaciones yihadistas que operan principalmente en Malí, durante el año se registraron diversos episodios violentos en países fronterizos, de los cuales destacaron los siguientes. Los días 15 y 16 de enero **Ouagadougou, capital burkinesa, sufrió un ataque coordinado por parte del grupo armado al-Mourabitoun, que dejó un balance de 28 personas muertas, alrededor de 50 personas heridas** y la liberación de unas 126 personas que habían sido tomadas como rehenes. Posteriormente, el 13 de abril, al-Mourabitoun perpetró otro ataque contra un complejo turístico en Côte d´Ivoire, en el que perdieron la vida al menos 14 civiles y dos soldados costamarfileños, además de haber dejado 33 personas heridas. El 6 y el 14 de octubre presuntos yihadistas malienses lanzaron varios ataques en el oeste de Níger, en la región de Tahoua, que costaron la vida a unos 24 miembros de los cuerpos de seguridad nigerinos. A mediados de diciembre, una docena de soldados de la unidad especial antiterrorista de Burkina Faso fueron asesinados en un ataque no reivindicado en el norte del país, en la frontera con Malí. Durante el año también se produjeron importantes acciones contrainsurgentes en el norte de Malí. Las fuerzas de seguridad malienses confirmaron el arresto el 10 de mayo de Yacouba Touré, jefe del grupo Ansar Dine. El 27 de julio se produjo el arresto del comandante regional de Ansar Dine, Mahmoud Barry, apodado "Abu Yehiya". En noviembre se detuvo en Gao al número dos de una facción de la organización Ansar Dine Attaher Ag Ihadou. A su vez, a finales de noviembre fuentes estadounidenses informaron de la supuesta muerte del líder del grupo armado al-Mourabitoun, el argelino Mokhtar Belmokhtar, quien habría muerto a consecuencia de un ataque aéreo francés, información no confirmada. El 22 de agosto, el miembro de Ansar Dine, Ahmad al-Faqi al-Mahdi[36] –acusado de crímenes de guerra por la destrucción de nueve mausoleos y una sección de la famosa mezquita Sidi Yahia de Tombuctú, en 2012– se declaró culpable en el juicio ante la Corte Penal Internacional, siendo condenado el 27 de septiembre a nueve años de prisión.

Región Lago Chad (Boko Haram)[37]	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Boko Haram (BH), MNJTF (Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:
La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa "la educación occidental es un pecado"– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se regionalizó, afectando también a los países fronterizos con el Lago Chad: Chad, Níger y Camerún.

Durante el 2016, sobre todo a partir de mediados de año, la estrategia militar de contención de la insurgencia de Boko Haram, desarrollada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún, a través de la implementación de la fuerza militar conjunta regional (MNJTF, por sus siglas en inglés) empezó a dar resultados militares. La MNJTF –que ha contado además con el apoyo logístico de la UE, EEUU, Francia y Reino Unido, así como con la participación en hostilidades de grupos de seguridad privada sudafricanos–, logró arrebatar importantes franjas de territorio a la insurgencia y redujo significativamente su capacidad e impacto en la región, principalmente en el norte de Nigeria. El 25 de diciembre de 2015 el presidente nigeriano Muhammadu Buhari ya había declarado, en base a los avances registrados en la lucha contra la insurgencia, que Nigeria "técnicamente" había ganado la guerra frente a Boko Haram.[38] Sin embargo, Boko Haram se ha ido adaptando a las nuevas condiciones, reduciendo su presencia territorial, y ampliando sus ofensivas dirigidas contra objetivos específicos, así como empleando ataques suicidas –generalmente a través de mujeres y menores– como métodos de guerra. Esta nueva coyuntura generó que Boko Haram, lejos de poder afirmar que ha sido derrotado, se haya transformado en una organización con un accionar similar al de los grupos yihadistas presentes en la región del Sahel, no vinculado al control efectivo de ningún área en

36. Véase "La retirada de países africanos de la CPI: retroceso en términos de protección de los derechos humanos" en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2017).
37. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* este caso había sido identificado como "Nigeria (Boko Haram)" por la concentración de las acciones armadas de esta organización en Nigeria. A partir de 2016 el caso pasa a denominarse "Región Lago Chad (Boko Haram)" dada la regionalización del conflicto armado a la región denominada Lago Chad, compartida por Nigeria, Chad, Níger y Camerún.
38. BBC, "Nigeria Boko Haram: Militants 'technically defeated – Buhari", *BBC*, 24 de diciembre de 2015.

particular y empleando técnicas de guerra basadas en la generación de terror y en estrategias de *hit and run*.

En el 2016, los datos referentes al número de bajas generadas por el conflicto dieron muestra de la reducción del impacto de la violencia, al menos en la región norte de Nigeria. Según datos registrados por el Nigeria Security Tracker (NST)[39], **el balance de muertes violentas producidas en Nigeria –relacionadas con el conflicto con Boko Haram– hasta el mes de diciembre, era de 549 civiles fallecidos, a las que habría que añadir 1.004 muertes en enfrentamientos directos entre Boko Haram y las fuerzas de seguridad.** Estos datos son muy significativos comparativamente hablando. En el año 2014, el Institute for Economics and Peace, en su informe *2015 Global Terrorism Index*, situaba a Boko Haram como el grupo armado más letal del año, con un balance de **6.644 muertes** –superando las 6.073 registradas por parte de ISIS[40]–. En el año 2015, y según el NST, el balance de muertes directas documentadas por la violencia de Boko Haram fue de **4.440 muertes**. Las cifras corroboran una tendencia significativa en cuanto a la reducción del número de víctimas mortales, hecho que ha sido atribuido al despliegue de la MNJTF. La estrategia militar de la MNJTF mejoró sus resultados a raíz de la mayor colaboración entre los gobiernos y las fuerzas de seguridad de los diferentes países implicados. Por un lado, se trabajó conjuntamente para tratar de cortar la base financiera de la organización en la región. A su vez, y si bien la MNJTF no es una fuerza integrada, sino de coordinación militar, Nigeria permitió durante el 2016 a los Ejércitos de Níger, Chad y Camerún, la entrada en su territorio para realizar acciones militares contra la insurgencia, permisos que también fueron replicados por el resto de países. Como ejemplo de esta mayor cooperación, durante el mes de junio, y a raíz del incremento de los ataques de Boko Haram en la región de Diffa, al sur de Níger, el Gobierno de Níger, presidido por Issoufou, solicitó a Chad el envío de 2.000 soldados de la misión regional, que se desplegaron en la ciudad de Bosso el 8 de junio. Posteriormente, el 17 de junio, tropas de Níger, Chad y Nigeria iniciaron la ofensiva para expulsar a la milicia de la región fronteriza entre Níger y Nigeria. Como parte del desgaste militar a Boko Haram, se generaron importantes divisiones internas en el movimiento a lo largo del año, llevando a pugnas por el control de la organización entre su líder Abubakar Shekau y el jeque Abou Musab al-Barnawi, ex portavoz del grupo, quien cuestionó el liderazgo y la estrategia militar de Shekau. El 3 de agosto, y a través de un comunicado publicado en una revista del grupo Estado Islámico (ISIS) –a quien Boko Haram juró lealtad en marzo de 2015– ISIS designó a al-Barnawi jefe de la organización. El hecho hizo que Shekau apareciera posteriormente en una grabación rechazando las informaciones sobre su reemplazo, y afirmando que seguía al frente de la organización, haciendo evidentes las divisiones internas.

La estrategia militar desarrollada por la MNJTF logró reducir significativamente la capacidad operativa de Boko Haram en la región Lago Chad

El conflicto armado en el norte de Nigeria también estuvo caracterizado por su impacto, así como por las denuncias de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. En septiembre, el subsecretario general de la ONU, Toby Lanzer, quien además dirige la división humanitaria de la ONU en la región del Sahel, alertó de que si la zona del Lago Chad afectada por el conflicto de Boko Haram no recibía más ayuda se podría convertir en la peor crisis humanitaria del mundo. La ONU había solicitado 739 millones de dólares para poder proporcionar la asistencia humanitaria necesaria, sin embargo, a finales de año había recibido alrededor de 197 millones de dólares. Según cifras de la ONU, más de seis millones de personas se encontraban en graves condiciones de inseguridad alimentaria, de las cuales 568.000 gravemente desnutridas. A su vez, alrededor de 2,8 millones de personas estaban desplazadas o refugiadas debido a la persistencia de la violencia y la inestabilidad en la zona.

Cuerno de África

Etiopía (Ogadén)	
Inicio:	2007
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:
Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de resistencia al poder central desde los años setenta. El grupo armado ONLF surgió en 1984 y opera en la región etíope de Ogadén, en el sureste del país, exigiendo un mayor grado de autonomía para la comunidad somalí que habita esta zona. En diversas ocasiones el ONLF ha llevado a cabo actividades insurgentes más allá de Ogadén, en colaboración con el grupo armado OLF, que exige al Gobierno una mayor autonomía de la región de Oromiya desde 1973. El Gobierno somalí ha apoyado al ONLF contra Etiopía, con quien se enfrentó por el control de la región entre 1977 y 1978, guerra en la que Etiopía derrotó a Somalia. El fin de la guerra entre Eritrea y Etiopía en el 2000 comportó el incremento de las operaciones del Gobierno para poner fin a la insurgencia en Ogadén y explotar sus recursos naturales. Tras las elecciones celebradas en el año 2005, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el ONLF se incrementaron, aunque en los últimos años la intensidad del conflicto ha disminuido.

El clima general de inseguridad y violencia que afectó al conjunto de Etiopía durante el último año, considerado

39. Council on Foreign Relations, *The Nigeria Security Tracker,* 12 de diciembre de 2016.
40. The Institute for Economics and Peace, *2015 Global Terrorism Index*, noviembre de 2015.

el peor en décadas, y que añadió un nuevo capítulo en octubre con el establecimiento del estado de emergencia, también vino acompañado de la persistencia de la violencia en la región de Ogadén **por parte del brazo armado del Ogaden National Liberation Front (ONLF) y del Oromo Liberation Front (OLF). Según el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),[41] habría causado la muerte de más de 200 personas, entre insurgentes, miembros de las Fuerzas Armadas etíopes, de la milicia progubernamental Liyu y de población civil de esta región somalí que forma parte de Etiopía. No obstante, esta cifra responde a informaciones procedentes de los medios de comunicación vinculados a la insurgencia, al movimiento de liberación de Ogadén o a medios independientes cuyas cifras no pueden ser contrastadas con fuentes oficiales.**

Los medios de comunicación nacionales e internacionales se ven sometidos a restricciones para acceder al territorio de Ogadén por parte del Gobierno etíope. Estas restricciones se han visto agravadas por las reformas legislativas que se han llevado a cabo en el país en los últimos años, como la contestada ley antiterrorista de 2009, utilizada como una herramienta para silenciar a la oposición y los medios. A esto se añadió en 2016 la Computer Crime Proclamation, que pretende hacer frente al crimen informático y limitar los ciberataques, pero que en realidad es una ley cuyo objetivo es censurar y controlar internet, según diversos analistas. Etiopía ocupó en 2014 y 2015 el cuarto lugar a nivel mundial –el segundo país africano tras Eritrea– como país más represor de los medios de comunicación, según la organización Committee to Protect Journalists (CPJ).[42] Este hecho no supuso una traba para que en junio Etiopía fuera escogida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para los próximos dos años ni tampoco para que pasara a ocupar la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de su historial de no cooperación con los mecanismos especiales de la organización internacional. Desde 2006 Etiopía ha rechazado la entrada de todos los relatores especiales de la ONU, a excepción del relator especial sobre Eritrea. A pesar de ello, el Gobierno etíope destacó que centenares de miembros del ONLF han sido capturados o se han rendido en los últimos años, insistiendo en que el conflicto armado está finalizado.[43] Sin embargo, uno de los comandantes del ONLF, Abdirahman Mahdi, destacó en una entrevista que el grupo armado estaba ampliando sus acciones armadas y que se había unido a otros grupos armados. En este sentido, en 2015 se tuvo constancia de la creación de un movimiento unitario de fuerzas con presencia dentro y fuera de Etiopía con el objetivo de coordinar sus actividades político-militares para poner fin al régimen etíope y garantizar el derecho a la autodeterminación, la People's Alliance for Freedom and Democracy (PAFD), que en marzo de 2016 celebró su primer congreso en Asmara (Eritrea).[44] Esta reunión también pone de manifiesto la tolerancia de Eritrea con los actores armados que operan en Etiopía.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:
El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU, y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y kenyanas presentes en el país) y las tropas gubernamentales se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

Durante el año continuaron los ataques, atentados suicidas y emboscadas por parte de al-Shabaab, que infligió pérdidas a la misión de la UA en Somalia (AMISOM) y al Ejército somalí. Durante el Ramadán, al-Shabaab, como en los últimos años, incrementó sus acciones armadas, llevando a cabo atentados con coches bomba contra instalaciones militares, de la AMISOM, edificios civiles gubernamentales y contra espacios civiles como hoteles y restaurantes, con el objetivo de desestabilizar y erosionar el proceso electoral que llevó a cabo el Gobierno Federal, y que culminó con la elección indirecta de un Parlamento Federal a finales de año. No obstante, el proceso sufrió graves acusaciones de corrupción.[45] Al-Shabaab fue expulsado de la capital en 2011, aunque el grupo ha continuado perpetrando

41. Armed Conflict Location & Event Data Project's, *Ethiopia,* November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2016.
42. Committee to Protect Journalists, "Ethiopian newspaper editor, bloggers caught in worsening crackdown", 17 de noviembre de 2016.
43. Stratford, Charles, "Ethiopia: Ex-ONLF rebels in Ogaden learn new skills", *al-Jazeera*, 31 de mayo de 2016.
44. Véase "El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias", en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2017).
45. Véase el resumen sobre Somalia en el capítulo 3 (Procesos de paz).

duros ataques en la ciudad. En este contexto, persistió el repliegue de al-Shabaab hacia el norte (produciéndose un incremento de los enfrentamientos en las regiones de Galmudug y Puntlandia, en el centro y noreste del país) tras la pérdida de feudos urbanos en el centro y sur del país, como consecuencia de las sucesivas ofensivas de los cuerpos de seguridad somalíes y de la AMISOM apoyados por las operaciones encubiertas de las fuerzas especiales estadounidenses. Sin embargo, las zonas rurales siguieron estando en manos de al-Shabaab o sometidas a la amenaza de su acción. Los cuerpos de seguridad tomaron el control de las localidades cedidas por al-Shabaab, pero les resultó imposible extender este control a todo el territorio. El proyecto **Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) contabilizó más de 5.550 víctimas mortales como consecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar durante el año 2016, de las cuales más del 60% se atribuían a los enfrentamientos entre al-Shabaab, AMISOM y las Fuerzas Armadas somalíes**, y el resto a milicias y señores de la guerra.[46]

Al-Shabaab incrementó sus acciones armadas durante 2016 con el objetivo de desestabilizar el proceso electoral en Somalia

EEUU continuó llevando a cabo la creación y entrenamiento de escuadrones y comandos contrainsurgentes como las unidades Gaashan (escudo), y la UE prolongó las dos misiones de entrenamiento marítimo y militar (EUCAP Somalia y EUTM Somalia), así como la misión militar de lucha contra la piratería EUNAVFOR Somalia hasta finales de 2018. En una de las principales acciones militares del año, en marzo las Fuerzas Especiales estadounidenses llevaron a cabo un ataque con aviones tripulados y no tripulados en el que ejecutaron hasta 150 sospechosos de formar parte de al-Shabaab en Raso Camp, a 120 millas al norte de Mogadiscio, donde el grupo yihadista estaba supuestamente construyendo una base de entrenamiento. Junto a ésta, entre las acciones más destacadas, cabe señalar el ataque en enero contra la base kenyata de la AMISOM en Cell Cadde Village (al sur de Garbahaarey, en Gedo) en el que murieron 180 combatientes y miembros de la misión; y el ataque en pleno mes de Ramadán en junio contra una base militar etíope de la AMISOM en Halgan, en Hiiraan, en el que murieron 248 personas según Sudan Tribune, entre los cuales 60 miembros etíopes de la AMISOM. En octubre se produjo otro ataque de al-Shabaab en Afmadhow, en Lower Juba, en el sur del país, que fue repelido por parte de las tropas de Kenya de la AMISOM. En el ataque murieron al menos 140 combatientes del grupo armado de los 500 que participaron en la operación militar, que pretendía derrotar las tropas locales de la región de Jubalandia.

En total, ACLED atribuye más de 250 víctimas mortales a las acciones perpetradas en Somalia por EEUU en 2016, con una creciente presencia militar en el país.[47] Entre 200 y 300 miembros de los cuerpos especiales de EEUU colaboraron con las Fuerzas Armadas somalíes y miembros de la AMISOM como Kenya y Uganda llevando a cabo una media docena de operaciones terrestres y ataques con drones al mes. Por otra parte, la mayoría de al-Shabaab siguió fiel a al-Qaeda mientras que una pequeña facción se sometió al patronazgo de ISIS, aunque existe una cierta controversia en esta cuestión. Diversos analistas destacan el hecho de que la mayoría de miembros del grupo armado son somalíes con una agenda local, y las acciones perpetradas en el extranjero se han limitado a Kenya por su presencia en el país, de ahí que al-Shabaab haya rechazado su vinculación a ISIS. El apoyo a ISIS en el seno de al-Shabaab respondía a un fenómeno reducido y vinculado a los combatientes extranjeros, ya que aunque puedan considerarse parte de una lucha o dinámica global, es su agenda local y su lucha contra la presencia de las tropas extranjeras la que aporta apoyos al grupo.[48] Diversas fuentes destacaron que otros actores locales estaban logrando una mayor preeminencia en las dinámicas de la violencia, ya que solo la mitad de las acciones armadas respondían a al-Shabaab y actores gubernamentales. Múltiples actores nacionales e internacionales están participando en la lucha contra al-Shabaab y las acciones violentas también involucraron a milicias de clanes y fuerzas regionales vinculadas a los nuevos estados federales. Este hecho se relacionaría con la contienda electoral y la competencia entre actores locales, regionales y nacionales en estas dinámicas de poder, que repercutirían en un incremento de la violencia hacia la población civil. Además, la descoordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad provocó nuevos avances de al-Shabaab. Etiopía decidió retirar sus tropas no encuadradas en la AMISOM sin que ni la AMISOM ni el Ejército somalí pudieran ocupar su espacio lo que provocó que al-Shabaab retomara el control de diversas localidades durante el año. El ministro de Comunicación etíope señaló que solo se habían retirado parte de las tropas etíopes no encuadradas en la misión de la UA, y dirigió la responsabilidad de esta decisión a la ausencia de apoyo internacional, tras la reciente decisión de la UE de recortar el apoyo económico a la presencia militar internacional en Somalia. Etiopía es uno de los principales países contribuyentes de tropas a la AMISOM. Diversos expertos advirtieron que esta retirada podría estar conectada con la situación a nivel interno de Etiopía como consecuencia de las protestas desencadenadas por los movimientos de la comunidad oromo, lo que habría provocado el retorno de estas tropas para sofocar la movilización social interna. Kenya también manifestó su intención de retirar sus tropas de la AMISOM en 2018.

46. Véase ACLED.
47. Mazzetti, Mark, Gettleman, Jeffrey, y Schmitt, Eric, "In Somalia, U.S. Escalates a Shadow War", *The New York Times*, 16 de octubre de 2016.
48. Gafey, Conor, "Why Al-Shabab is Not Joining ISIS", *Newsweek*, 22 de enero de 2016.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:
El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

El grave clima de violencia política que atraviesa el país inició su segundo año con la persistencia de la inestabilidad y los intentos frustrados a nivel regional de promover un diálogo político entre el Gobierno y la oposición.[49] Proliferaron las ejecuciones extrajudiciales de miembros de la oposición política y de la sociedad civil, asesinatos de funcionarios y cargos políticos, y grupos armados recientemente surgidos fueron más activos. Según el centro de investigación Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), las cifras de víctimas mortales como consecuencia de la violencia entre abril de 2015 y abril de 2016 serían mucho más elevadas de lo que señaló la ONU en marzo de este año. ACLED estima que fallecieron 1.155 personas mientras que la ONU reduce esa cifra a 474 víctimas mortales. Esta cifra se eleva a 1.560 personas para el conjunto de los dos años (2015 y 2016), según ACLED. La UA y el Consejo de Seguridad de la ONU intentaron intervenir para reconducir la situación y el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde a finales de julio a la creación de una misión policial de la ONU con un componente de 228 efectivos. Además, también instó al Gobierno a que, en coordinación con la Comisión de la UA, asegurara el despliegue de 100 observadores de derechos humanos de la UA y 100 expertos militares de la UA, e instó al Gobierno a que prestara su plena cooperación y acceso a fin de facilitar la ejecución de su mandato. Aunque el Gobierno ya había acordado aceptar la presencia de los observadores y los expertos de la UA, su despliegue estaba siendo lento. Se celebraron manifestaciones de rechazo a la presencia de la misión de la ONU que convocaron a miles de manifestantes ante la embajada francesa, país que propuso el borrador de la resolución, y ante la embajada de Rwanda, a la que acusan de entrenar a los rebeldes. No obstante, el embajador francés en Burundi, Gerrit Van Rossum, también se pronunció en contra de la resolución y participó en la manifestación. Se estima que unas 400.000 personas huyeron de sus lugares de origen, de las cuales 270.000 personas abandonaron el país. Burundi también rechazó en diciembre de 2015 el despliegue de la misión de la UA de 5.000 soldados y amenazó con el uso de la fuerza para evitar que esta misión penetrara en el país.

En septiembre la ONU publicó un informe que acusaba al Gobierno de graves violaciones de los derechos humanos, tras nueve meses de investigación.[50] La investigación verificó 564 ejecuciones desde abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría a un tercer mandato. La misión de investigación determinó que existen patrones sistemáticos de violaciones de los derechos humanos, arrestos masivos, violaciones, desapariciones, torturas y ejecuciones de miles de personas, e hizo un llamamiento a la comunidad internacional, en especial a la UA y al Consejo de Seguridad de la ONU, a hacer frente a la espiral de violencia que podría hundir en un conflicto armado la región entera. La mayoría de las víctimas eran personas opuestas (o percibidas como tales) al tercer mandato de Nkurunziza o miembros de los partidos de la oposición. A raíz de la investigación iniciada por la CPI a partir de indicios sobre un posible genocidio en el país, Burundi decidió en octubre su retirada de la CPI, que se hará efectiva en octubre de 2017.[51]

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias antibalaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA
Intensidad:	2
Evolución:	↑

49. Véase el resumen sobre Burundi en el capítulo 3 (Procesos de paz).
50. United Nations Independent Investigation in Burundi (UNIIB), *Burundi: UN investigation urges strong action in light of gross, widespread and systemic human rights violations*, OHCHR, 20 de septiembre de 2016.
51. Véase "La retirada de países africanos de la CPI: retroceso en términos de protección de los derechos humanos" en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2017).

Síntesis:
Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana ("anti balaka"). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada.

Durante el año se produjo un deterioro de la situación en el país. Aunque las elecciones legislativas del 30 de diciembre de 2015 fueron anuladas por las numerosas irregularidades detectadas, la segunda vuelta de las presidenciales tuvo lugar el 14 de febrero de 2016 coincidiendo con la primera vuelta de los comicios legislativos. El ex primer ministro Faustin-Archange Touadéra derrotó al ex primer ministro Anicet Georges Dologuélé. En abril asumió el poder y se puso fin a la fase de transición y a la estructura de mediación internacional vigente desde 2013. La creación de un Grupo de Apoyo Internacional en sustitución del Grupo de Contacto Internacional sobre la RCA simbolizó el nuevo marco para la colaboración internacional, al que se sumó China.[52] A pesar de los primeros logros del período posterior a la transición, como la puesta en marcha del programa nacional de desarme, desmovilización, repatriación y reintegración de grupos armados, el Gobierno no pudo hacer frente al deterioro de la situación de la seguridad observado desde junio. **Si bien la violencia entre las facciones ex-Séléka, por un lado, y entre las milicias antibalaka y las ex-Séléka, por el otro, en principio parecía localizada e impulsada por las luchas internas por el poder y la competencia por el territorio, tal y como señaló el Grupo de Expertos para la RCA,[53] los incidentes se agravaron y generalizaron en los meses de septiembre y octubre de 2016**. Amplias regiones del país siguieron bajo el completo control de los grupos armados, reacios a aceptar participar en el proceso de desarme. Los incidentes violentos ocurridos en Bangui y el interior del país están cada vez más interconectados y en las luchas se entremezclan las agendas políticas, según destacó el Grupo de Expertos. Un violento éxodo ocurrido el 12 de agosto de 2016 de milicias ex-Séléka del barrio PK5 de Bangui, que incluyó a Abdoulaye Hissène y a Haroun Gaye, objeto de sanciones, dio lugar a una persecución que fue dirigida por antibalakas, pero con el apoyo tácito de algunos políticos de Bangui. A mediados de septiembre, combatientes antibalaka de Bangui se desplazaron para enfrentarse a actores de la antigua coalición Séléka que cometían actos de violencia al sur de Kaga-Bandoro (en el interior del país), donde la violencia se intensificó a mediados de octubre cuando combatientes ex-Séléka atacaron el campamento de desplazados internos de la ciudad, causando al menos la muerte de 50 personas.[54] En ese mismo mes Francia culminó el fin de la Operación Sangaris y la retirada de casi todo el contingente militar. Un centenar de militares se integraron en la misión europea EUTM RCA.

Amplias regiones de la República Centroafricana siguieron bajo el completo control de los grupos armados, reacios a aceptar participar en el proceso de desarme

Esos actos de violencia en Kaga-Bandoro cometidos por facciones ex-Séléka y sus esfuerzos para reunificarse en Bria reactivaron a grupos antibalaka en Bangui, algunos de ellos impulsados por el regreso de Jean-Francis Bozizé, ex ministro de Defensa e hijo del ex presidente François Bozizé, objeto de sanciones. En octubre se celebró en Bria una reunión en la que participó Noureddine Adam, líder del Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC), que regresó en abril al país.[55] Adam, con base en Kaga-Bandoro, pretendía reunificar a los grupos de la antigua coalición Séléka, aunque no prosperó, ya que el grupo Mouvement Patritique por la Centrafrique (MPC) de Mahamat Al-Khatim y la Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) de Ali Darrassa se negaron a unir sus fuerzas

52. Véase el resumen sobre RCA en el capítulo 3 (Procesos de paz).
53. Grupo de Expertos sobre la RCA, "Informe final del Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana, cuyo mandato se prorrogó en la resolución 2262 (2016) del Consejo de Seguridad", Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana, S/2016/1032, 6 de diciembre de 2016.
54. Ngoulou, Fridolin, "Centrafrique: Kaga-Bandoro, future capitale de la République du Logone?", RJDH Centrafrique - Reseau des Journalistes por les Droits de l'Homme, 21 de octubre de 2016.
55. Vincent Duhem, "Centrafrique: que faire face au retour de Noureddine Adam?", *Jeune Afrique*, 10 de junio de 2016.

a Noureddine Adam, e incluso hubo informaciones de contactos entre el MPC y la UPC. Posteriormente el FPRC y la UPC se enfrentaron en Bria a finales de noviembre causando la muerte de 85 rebeldes y civiles y el desplazamiento forzado de 11.000 personas. La MINUSCA fue objeto de críticas por su incapacidad para contener a los grupos armados, y el Gobierno solicitó el levantamiento del embargo de armas para rearmar a las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) con el argumento de proteger a los civiles. En el centro del país, la UPC amplió aún más su zona de control, según el Grupo de Expertos, avanzando hacia el sur y el este desde su feudo en Bambari, para controlar importantes zonas de extracción de diamantes en torno a Nzako y rutas de tráfico de armas que entran en el país desde la RDC. Las diferentes milicias de autodefensa de Révolution et Justice estuvieron divididas en torno a su liderazgo. En el norte, el tráfico de armas, en beneficio del FPRC, atraviesa Am Dafok y Tissi, ciudad que se extiende a ambos lados de la frontera entre RCA y Chad. En el este de RCA, el grupo armado de origen ugandés LRA llevó a cabo numerosos secuestros de civiles.[56] Cerca de medio millón de personas seguían desplazadas en el interior del país al finalizar el año.

La situación política en Bangui, aunque por lo general en calma, se vio afectada por manifestaciones violentas el 24 de octubre. Posteriormente, el 28 de octubre, el presidente se reunió con representantes de la sociedad civil, los partidos políticos, el sector privado y la plataforma religiosa. En la reunión, el presidente hizo un llamamiento en favor del diálogo político y para que la ciudadanía reconociera que las fuerzas militares y de seguridad eran incapaces de desempeñar plenamente sus responsabilidades, y destacó la necesidad de una amplia reforma del sector de la seguridad. A finales de noviembre el partido político Kwa Na Kwa publicó una declaración del ex presidente François Bozizé en la que éste anunció su intención de regresar al país para entablar un diálogo inclusivo y lograr la reconciliación. Cabe destacar la celebración de la conferencia de donantes de Bruselas en la que se puso de manifiesto el compromiso de la comunidad internacional con el país, al prometerse 2.200 millones de dólares en apoyo del Plan Nacional para la Recuperación y la Consolidación de la Paz, lo que suponen alrededor del 70% de los fondos necesarios para los cinco años de duración del plan. Por otra parte, el 9 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley sobre la paridad de género para lograr una cuota del 35% para las mujeres en las estructuras de adopción de decisiones. Los días 28 y 29 de diciembre, aprobó el presupuesto nacional para 2017, que ascendía a 237.000 millones de francos CFA (384.518.280 dólares).

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias Mai-Mai, FDLR, M23 (ex CNDP), APCLS, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:
El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la deserción de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

En RDC (este) la insurgencia hutu rwandesa se debilitó ya que las FDLR vivieron tensiones internas que acabaron provocando la división del grupo y la creación de una escisión, el CNDR

La situación de violencia en el este del país se vio eclipsada por la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016, el aplazamiento *de facto* de las elecciones nacionales y la preocupación ante la posibilidad de que Kabila intentara mantenerse en el poder por un tercer mandato presidencial, en contra de lo previsto en la Constitución, lo que provocó un grave clima de tensión.[57] Así, la situación de inseguridad persistió en el este de la RDC aunque se redujo la intensidad de la violencia, según remarcaron algunos analistas. **Los diferentes grupos armados cometieron acciones periódicas de saqueo y ataques contra la población civil y las Fuerzas Armadas congoleses (FARDC), apoyadas por la MONUSCO, llevaron a cabo diversas operaciones para intentar desarticular las diferentes insurgencias**, lo que provocó desplazamientos de miles de personas durante el año. Tal y como señaló el último informe del secretario general de

56. Véase el resumen sobre África Central (LRA) en el capítulo 2 (Tensiones).
57. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones) y en el capítulo 3 (Procesos de paz).

la ONU sobre la misión en el país, la continuidad del apoyo de la MONUSCO a la RDC para hacer frente a la situación de inseguridad siguió siendo imprescindible. Además del conflicto armado con el grupo de origen ugandés ADF asentado en el territorio de Beni (zona norte de la provincia de Kivu Norte),[58] continuaron los ataques contra la población civil en la provincia nororiental de Ituri por parte del grupo armado Forces de la Résistance Patriotique de l'Ituri (FRPI), las actividades de las diferentes milicias Mai Mai en Kivu Norte y en Kivu Sur de saqueo y extorsión de la población civil así como las acciones de las FARDC y de la MONUSCO para frenar sus ataques, y las actividades del grupo armado de origen ugandés LRA en las provincias de Haut Uélé y Bas Uélé (noreste).

El grupo armado de origen rwandés Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) y sus aliados (las milicias Nyatura) también siguieron activos en las provincias de Kivu Norte y Sur, a pesar de la continuación de la Operación Sukola II, dirigida por las FARDC, para neutralizarlas, y prosiguieron los informes sobre ataques, secuestros y exacciones contra la población civil y exigencias de pago de tasas en las zonas mineras. **El grupo, sin embargo, se ha visto seriamente debilitado como consecuencia de tensiones internas (vinculadas, entre otras cuestiones, a las posturas en torno al registro biométrico de los refugiados rwandeses), que condujeron a su división.** Se escindió parte de su estructura de mando y combatientes en mayo tras la creación del Conseil National pour la Renovation et la Démocratie-Ubwiyunge (CNRD),[59] encabezado por el coronel y vicepresidente del grupo, Laurent Ndagijimana, alias Wilson Irategeka, y las FDLR, que siguen lideradas por Gaston Iyamuremye (alias Victor Byiringiro). Las FDLR, que anteriormente contaban con entre 1.400 y 1.600 combatientes, han perdido entre un tercio y la mitad de sus miembros tras la división, según destacó el Grupo de Expertos de la ONU, y se vieron casi exclusivamente limitadas al territorio de Rutshuru, en Kivu Norte.[60] El CNRD arrastró a unos 46 oficiales y a todo el sector operacional de Kivu Sur, aunque cuenta con presencia en Kivu Norte, y anunció que procedería a la repatriación de los refugiados rwandeses y los combatientes de la RDC, pero aún no ha adoptado medidas para ejecutar esos planes. Esta división responde a la presión militar ejercida y a una situación de estancamiento del conflicto y de agotamiento de las nuevas generaciones que han ido adoptando posturas más políticas y pragmáticas diferentes de la vieja guardia, como el alejamiento de una de las figuras más controvertidas, el general Mudacumura, buscado por crímenes de genocidio en Rwanda y crímenes de guerra en RDC. Aunque pretende desmarcarse de las FDLR, el grupo mantendría posiciones políticas similares, como es el retorno pactado y en condiciones dignas a Rwanda y el inicio de un diálogo político con Kigali, a lo que Rwanda se niega rotundamente. Según el Grupo de Expertos, Ndagijimana fue también uno de los principales impulsores del proceso de desarme voluntario de las FDLR en 2013-2014.[61] Dicha división desembocó en confrontaciones violentas entre ambas partes en el territorio de Rutshuru. Aunque los principales líderes de las FDLR objeto de sanciones, Mudacumura, Iyamuremye y Ntawunguka siguieron prófugos, varios oficiales fueron capturados durante el año. Entre marzo y noviembre murieron 99 combatientes de las FDLR, 137 fueron capturados y 419 desmovilizados.

Según diversas fuentes, tal y como destaca el informe del secretario general de la ONU de octubre, las tensiones entre comunidades siguen siendo una fuente de violencia cada vez mayor en Kivu Norte. La continua actividad de las FDLR, la mayor presencia de grupos opositores Mai Mai y las luchas de carácter intercomunitario agravaron la situación y contribuyeron a un deterioro general de las condiciones de seguridad y a más desplazamientos de población. En el territorio de Fizi, en Kivu Sur, también se produjeron enfrentamientos entre actores armados procedentes de Burundi (principalmente los sectores no desmovilizados de las FNL que se están reorganizando para llevar a cabo acciones en Burundi) y las FARDC. En los territorios de Fizi, Mwenga, Shabunda y Uvira, se produjeron enfrentamientos entre las FARDC y milicias Mai Mai como Raia Mutomboki. Cabe destacar la rendición en octubre del líder de la milicia Mai Mai Kata Katanga, Gédéon Kyungu Mutanga, junto con 129 de sus combatientes, entregando una cantidad considerable de armas. Parte del grupo se reintegró en las FARDC. El grupo ha sido responsable de numerosos ataques contra civiles durante los últimos años, y su dirigente fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y encarcelado antes de que se fugara en 2011. **El informe del Grupo de Expertos determinó en diciembre que el oro siguió siendo el mineral más utilizado para financiar a los actores armados y redes delictivas,** y prosiguió su explotación ilegal, comercio y tasación por parte de éstos, **tanto las FARDC como las insurgencias y milicias Mai Mai, a veces en colaboración con compañías privadas**. Un acontecimiento positivo fue el inicio de las investigaciones de la implicación en el comercio de recursos naturales de algunos oficiales militares congoleños que anteriormente habían sido mencionados en los informes del Grupo de Expertos en razón de dicha injerencia. Existen dificultades para lograr la plena aplicación de la diligencia debida en el sector del estaño, el tántalo y el tungsteno y sus impactos en el sector de la minería pueden llevar a efectos no deseados, según han señalado diversos analistas. Si bien los procesos de trazabilidad y certificación se están ampliando, los agentes armados han penetrado ocasionalmente en emplazamientos certificados como libres de conflicto.

58. Véase el resumen sobre RDC (este-ADF) en este capítulo.
59. RFI, "RDC-Rwanda: scission au sein des FDLR", *Radio France Internationale*, 3 de junio de 2016.
60. Grupo de Expertos sobre la RDC, "Informe de mitad de período del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) del Consejo de Seguridad", Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo, S/2016/1102, 28 de diciembre de 2016.
61. Véase *Alerta 2015! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, 2015, Barcelona, Icaria.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:
Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congoleses que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenya y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenya y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolesa, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

El conflicto armado en el este del país en el que participa el grupo armado de origen ugandés ADF continuó en paralelo a la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016 y el aplazamiento *de facto* de las elecciones nacionales y la preocupación ante la posibilidad de que Kabila intentara mantenerse en el poder por un tercer mandato, en contra de lo previsto en la Constitución.[62] El grupo armado de origen ugandés ADF continuó operando en el territorio de Beni, situado en la zona norte de la provincia de Kivu Norte, en el este del país, y reclutando a nacionales de la RDC, Rwanda y Uganda en 2016, y prosiguieron las matanzas de civiles por parte de las ADF. En consecuencia, se produjo una oleada de rechazo y protestas de la población civil ante la incapacidad gubernamental para controlar la situación. **Desde 2014 más de 650 personas han sido ejecutadas en la localidad de Beni y sus alrededores**. Según fuentes de la ONU, las ADF operaban en localidades dispares y con un grado limitado de mando y control centrales, aunque el líder máximo es el comandante Seka Baluku. La operación militar Sukola I, con el renovado apoyo de la MONUSCO y su brigada de intervención, ejerció presión durante el año sobre el grupo de Baluku, en particular mediante operaciones destinadas a despejar temporalmente su conjunto principal de bases, denominada Madina II. En mayo y octubre se capturaron diversas bases en Madina II, pero la posterior retirada de las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) de la zona provocó que en octubre las ADF regresaran a los campamentos. Las ADF siguieron reclutando, adiestrando y operando en la densa zona boscosa al este del eje de comunicación Eringeti-Beni-Butembo, creando una grave situación de inseguridad para los civiles en la zona.

Después de haber dado apoyo a las autoridades nacionales para lograr la derrota militar del M23 de marzo a noviembre de 2013, la MONUSCO, en particular su Brigada de Intervención, se ha centrado en las ADF en Kivu Norte, en apoyo de las FARDC. Las operaciones conjuntas de ambas fuerzas han causado un deterioro considerable a las actividades del grupo armado y han obligado a sus combatientes a recurrir a nuevas técnicas para evitar el enfrentamiento. Tras el acuerdo técnico firmado por el Gobierno y la MONUSCO el 28 de enero de 2016, el apoyo de la MONUSCO a las operaciones de las FARDC en el sector operacional Sukola I fue más allá de las contribuciones logísticas y de inteligencia observadas en 2015. La brigada de intervención y, en algunos casos, elementos de la brigada de Kivu Norte, participaron directamente en las operaciones, aportando contingentes y fuerzas especiales, artillería y activos aéreos. Aunque debilitadas, las ADF prosiguieron sus ataques brutales contra los civiles, las FARDC y la MONUSCO. La misión prestó apoyo a las operaciones de las FARDC atacando posiciones de las ADF con helicópteros de combate y fuego de artillería en varias ocasiones, lo que dio lugar a un número aún no determinado de bajas de las ADF. Se identificaron objetivos concretos mediante sistemas aéreos de vigilancia no tripulados, en coordinación con las FARDC, y las ADF tuvieron importantes pérdidas en su antiguo bastión conocido como el "triángulo", en la zona de Abyalose y cerca de Mayi-Moya. La MONUSCO se convirtió en objetivo de las ADF, sufriendo diversos ataques durante el año, como en agosto cuando la base de la MONUSCO en Semliki sufrió ataques con granadas. Como consecuencia de la continua presión ejercida por las operaciones, elementos de las ADF siguieron desplazándose hacia el norte, concretamente, hacia la provincia de Ituri. En agosto las ADF cometieron la peor masacre desde 2014, según destacó la población civil de la zona y los medios de comunicación locales. El grupo ejecutó a más de 50 personas, entre hombres, mujeres y menores, en la localidad de Rwangoma, en el territorio de Beni. El ataque tuvo lugar tres días después de la vista del presidente Joseph Kabila a Goma, la capital de Kivu Norte. El 4 de agosto Kabila se reunió con su homólogo ugandés, Yoweri Museveni, para discutir una estrategia de combate contra el grupo ADF. A raíz de este ataque, se produjeron protestas por parte de la población local y de la sociedad civil y la oposición política contra el Gobierno y la MONUSCO

62. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones) y en el capítulo 3 (Procesos de paz).

ante la incapacidad gubernamental para controlar la situación. El 17 de agosto se produjo una marcha de unas 2.000 personas desde Butembo a Beni donde los manifestantes se enfrentaron a la Policía. Los ataques dieron lugar a actos de venganza popular y a acciones de represalia de las FARDC contra civiles acusados de colaborar con el grupo armado.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, unidades paramilitares RSF, janjaweed, coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), otros grupos, UNAMID
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes *janjaweed*. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario.

El centro de investigación Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) registró **durante el año un total de 1.913 muertes producidas en el marco del conflicto armado en la región de Darfur**. Estas cifras, unidas a las registradas en el conflicto armado que se desarrolla en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul, con 1.612 muertos en 2016, mantienen –según los datos del ACLED– a Sudán como el cuarto país más conflictivo en el continente africano. Como viene siendo habitual en la región, los mayores enfrentamientos se registraron durante el primer semestre del año, concretamente en los meses de enero y febrero (517 muertos) y durante el mes de abril, donde se registraron 421 víctimas mortales, reduciéndose significativamente en el segundo semestre del año a causa de las restricciones a la movilidad que ocasiona la temporada de lluvias. A su vez, la reapertura de negociaciones y el decreto de cese al fuego también contribuyeron al descenso de los niveles de violencia.[63] El año empezó con la extensión del cese al fuego por parte del Gobierno en la región de Darfur, aunque ello no impidió la continuación de los combates entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas rebeldes del Movimiento de Liberación de Sudán Abdel Wahid al-Nur (SLA-AW), concentrándose en el área de Jebel Marra, en la región de Darfur Central. A finales del mes de enero, la misión híbrida de la ONU y la UA, la UNAMID, informó que cerca de 10.000 personas se habían visto obligadas a desplazarse como consecuencia del incremento de la violencia en Jebel Marra, cifras que siguieron aumentando considerablemente en los meses posteriores alcanzando los 102.700 desplazados internos a principios de marzo, y en octubre la horquilla se disparó hasta los 160.000-195.000, según diversas fuentes recogidas por OCHA.[64] A finales de año, datos recopilados por OCHA registraban en 97.481 personas los nuevos desplazamientos internos en Darfur, a los que habría que añadir otras 99.435 personas desplazadas en situación de verificación.[65] Según registros de ACLED, los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y rebeldes producidos en la primera parte del año en Jebel Marra alcanzaron un nivel no visto desde 1997.[66]

En el contexto de la ofensiva militar contra Jebel Marra, se celebró entre los días 11 y 13 de abril el referéndum en Darfur para decidir su división administrativa: mantener la actual fórmula de cinco estados o reunificarlos en uno solo. Los grupos armados rebeldes darfuríes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) y las facciones del Movimiento de Liberación de Sudán lideradas por Minni Minawi (SLA-MM) y Abdel Wahid al-Nur (SLA-AW) realizaron un llamamiento a boicotear el referéndum del Gobierno, lo que se saldó con una baja participación en el mismo. El día 23 de abril, la Comisión para el Referéndum en Darfur hizo públicos los resultados, los cuales mostraron una mayoría del 97,72% a favor de mantener la fórmula administrativa actual.[67] Un día después de la celebración del

63. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016). Véase el resumen sobre Sudán (Dafur) en el capítulo 3 (Procesos de paz)
64. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - UNOCHA Sudan, "Jebel Marra Crisis Fact Sheet", Issue 8, 1 octubre de 2016.
65. OCHA, "Sudan: 2016 New Displacements and Affected People in Darfur as of 31 december 2016", diciembre de 2016.
66. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) "Sudan – December 2016 Update", Real Time Analysis of Political Violence across Africa, enero de 2017.
67. Los datos presentados por el Gobierno dieron cuenta de 3.081.976 votos (97,72%) a favor de la actual división administrativa, frente a 71.920 votos (2,28%) a favor de la transformación de Darfur en una unidad territorial. El porcentaje de participación fue del 72,9%, de un censo de 3.535.281 personas. Según Naciones Unidas la población de Darfur se estima en 6,2 millones de personas.

referéndum, la coalición de movimientos armados de Sudán, el Frente Revolucionario de Sudán (SRF, por sus siglas en inglés), que integra a grupos de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, anunció su intención de decretar un cese al fuego durante seis meses en las tres zonas, e instó a los mediadores de la UA a discutir con el Gobierno la viabilidad de su implementación. La celebración del referéndum significó para el Gobierno de Sudán la conclusión de manera oficial de la hoja de ruta prevista en el Acuerdo de Paz de Doha, firmado en julio de 2011, que equivalía a afirmar el fin de la guerra en la región. En esa lógica de fin del conflicto, el Gobierno de Sudán anunció el 17 de junio un cese el fuego unilateral por cuatro meses en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul, no aplicable a Darfur, debido a que para el Gobierno ya no existía guerra en la zona, y a la vez presionó para la no renovación del mandato de la UNAMID, que concluía a finales de junio de 2016, debido a que su presencia ya no era necesaria en el supuesto nuevo escenario de postconflicto. Sin embargo, el 29 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo recomendaciones de informes de la ONU y la UA, decidió prorrogar por un año más el mandato de la misión, resolución que fue muy bien recibida por los movimientos armados de oposición en Darfur.

Durante el mes de julio, los combates se mantuvieron en Jebel Marra, y tan sólo el día 22, en un enfrentamiento entre el SLA-AW y las fuerzas de seguridad sudanesas, resultaron muertos 170 militares y cuatro rebeldes, ganando las fuerzas irregulares el control de Torentowra. Las hostilidades decrecieron significativamente durante el mes de agosto, y posteriormente, el 31 de octubre entró en vigor el cese al fuego unilateral decretado por un periodo de seis meses por parte de los grupos armados darfuríes SLA-MM y JEM facción Gibril. La UNAMID dio la bienvenida al cese de las hostilidades e invitó a la facción del SLA de Abdul Wahid al-Nur (SLA-AW) a unirse al cese al fuego para avanzar hacia la construcción de la paz en Darfur. En otro orden de aspectos, durante el mes de septiembre, la ONG Amnistía Internacional hizo público un informe en el que denunció el uso de ataques químicos por parte del Gobierno de Sudán en Darfur, específicamente en Jebel Marra, afectando a 171 comunidades.[68] Por medio de imágenes satelitales, testimonios de supervivientes y fotos, Amnistía Internacional documentó crímenes de guerra en al menos 30 ataques químicos producidos durante el año, estimando en 200 y 250 las personas que pudieron haber perdido la vida como resultado de la exposición a agentes químicos, muchas de ellas menores. Los ataques se produjeron como parte de la campaña militar contra el SLA-AW, aunque el Gobierno sudanés negó las acusaciones.

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Suport Forces (RSF), Sudán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

Al igual que en años precedentes y a la par de lo que sucede en el conflicto armado en Darfur, la violencia en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul varió en función de la temporada, siendo mucho más activa durante el primer semestre del año y reduciéndose con la llegada de la temporada de lluvias, que dificulta los desplazamientos, durante el segundo periodo del año. En esta lógica, los meses de febrero a abril, y según datos proporcionados por el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), fueron los más violentos, registrando un total de 1.172 víctimas mortales. El balance general de **víctimas mortales producidas durante el año en las regiones del Kordofán Sur y de Nilo Azul, ascendió a 1.612 personas,** que si bien son inferiores a las producidas en el conflicto de Darfur, donde se registraron 1.913 muertes, la tendencia en la región es de un aumento de la violencia.[69] De manera similar a lo acontecido en la vecina región de Darfur, la extensión por parte del Gobierno del cese al fuego a principios de año no tuvo efectos reales sobre el terreno, registrándose enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes del SPLM-N en las conocidas como las "Dos Áreas" (Kordofán Sur y Nilo Azul). El día 20 de febrero se produjo el peor acontecimiento del año, cuando en un enfrentamiento entre soldados y fuerzas del SPLM-N en Kilgo, Nilo Azul, 200 soldados perdieron la vida, según informaron fuentes rebeldes sin que el

La ofensiva militar sudanesa en Jebel Marra (Darfur) generó una grave crisis de desplazamiento forzado interno

68. Amnesty International, "Scorched Earth, Poisoned Air", septiembre de 2016.
69. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016).

Gobierno confirmara las bajas. En otro enfrentamiento registrado en Abri, Kordofán Sur, y también durante el mes de febrero, otros 60 soldados y siete rebeldes murieron. En total, ACLED registró **378 muertes solamente durante el mes de febrero**, **convirtiéndose en el segundo mes más mortífero del año, sólo por detrás de abril, que registró cerca de medio millar de fallecidos** en enfrentamientos armados. Precisamente durante el mes de abril, el día 24, la coalición de movimientos armados de Sudán, el Frente Revolucionario de Sudán (SRF, por sus siglas en inglés), que integra a grupos de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, anunció su voluntad de un cese al fuego por un periodo de seis meses, solicitando al equipo mediador de la UA discutir con el Gobierno su implementación. Si bien durante el mes de mayo persistieron los combates en la región, el 17 de junio el Gobierno anunció un cese al fuego unilateral por cuatro meses en Kordofán Sur y Nilo Azul, con la voluntad de permitir que los movimientos rebeldes que no son signatarios del Documento de Doha para la Paz, se unieran al proceso de paz en Sudán. Sin embargo, durante el mes de julio, el SPLM-N acusó al Gobierno de no respetar el cese al fuego. Los días 10 y 11 de agosto, Gobierno y rebeldes mantuvieron reuniones y trataron sin éxito de acordar una agenda para el cese de hostilidades. El 9 de septiembre, nuevamente el SPLM-N volvió a acusar al Ejército de violar el cese al fuego en Kordofán Sur. Sin acuerdos sobre puntos importantes, como la facilitación del acceso de la ayuda humanitaria, el 10 de octubre, una semana antes de concluir el periodo de cese al fuego decretado en junio, el Gobierno volvió a ampliarlo hasta finales de año, mientras se mantuvieron negociaciones bilaterales. Por otro lado, el 23 de noviembre, el SPLM-N firmó en Ginebra un Plan de Acción con las Naciones Unidas para poner fin y prevenir el reclutamiento y el uso de niños en conflicto. El SPLM-N ya se había convertido en el primer grupo armado no estatal firmante de la Ley de Protección Infantil en junio de 2015.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF,SSNLM, REMNASA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:
El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar, quien cuenta con el apoyo de algunos de estos militares y milicias desafectas.

A medida que avanzó el año el conflicto armado en Sudán del Sur se fue intensificando como consecuencia directa de la falta de compromisos en la implementación de las cláusulas previstas en el acuerdo de paz firmado por las partes en agosto de 2015.[70] Los datos presentados por el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) dan cuenta de **3.305 muertes registradas durante el 2016 en el país, de las cuales el 70,5% se debieron a enfrentamientos dominados por el conflicto armado entre el Gobierno y el SPLA-IO**, correspondiendo el resto a muertes en enfrentamientos producidos por milicias étnicas y comunales, principalmente de la milicia murle en el estado de Jonglei.[71] Ya desde principios de año, la fragilidad del acuerdo alcanzado se manifestó en diferentes episodios armados que violaban el alto al fuego acordado y que presagiaban la intensificación de las tensiones y la vuelta paulatina a las hostilidades. El decreto aprobado por el presidente Salva Kiir, sobre la nueva distribución administrativa del país, que pasaría de los diez estados a los 28, anunciado el 2 de octubre del 2015, aumentó el descontento y generó la emergencia nuevos actores armados que desconocieron el acuerdo de paz y se opusieron a la división administrativa decidida de forma unilateral.[72] Durante el mes de febrero, en uno de los acontecimientos más graves producido durante el primer semestre del año, un enfrentamiento entre grupos armados dinkas y shilluks en un campamento de protección de desplazados internos de la ONU en Malakal, costó la vida al menos a 30 personas y dejó otras 123 heridas. Diferentes organismos acusaron al Ejército de participar activamente en la masacre. Este hecho generó muchas

70. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 3 (Procesos de paz).
71. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016).
72. Escola de Cultura de Pau, "Sudán del Sur: un acuerdo de paz muy fràgil", Escenarios de riesgo para 2016, *Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz,* Icaria Editorial.

críticas a la misión de la ONU en el país, la UNMISS, por la falta de protección a la población civil. Durante el mes de junio, el portavoz del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU aceptó la responsabilidad del organismo por su falta de respuesta rápida durante la masacre. Posteriormente, el 25 de junio, se produjo otra gran crisis cuando un grupo armado atacó y capturó la ciudad de Wau, en el estado de Western Bahr el Ghazal. El ataque, que conllevó la declaración del estado de emergencia en la zona, dejó al menos 43 personas muertas y alrededor de 120.000 personas desplazadas. Si bien la autoría no quedó clara, un miembro de alto rango del SPLA-IO en Bahr al Ghazal admitió la participación de sus tropas contra las fuerzas gubernamentales al sur de la ciudad de Wau. El Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia del Cese al Fuego y Acuerdos de Transición sobre Seguridad (CTSAMM por sus siglas en inglés) acusó en diferentes ocasiones a las fuerzas del SPLA, leales al presidente Kiir, de no cooperar y bloquear a los equipos encargados de monitorear el cumplimiento del cese al fuego y la implementación de las medidas de seguridad. Paralelamente al mantenimiento de choques y hostilidades, se produjeron algunos avances en la implementación del acuerdo de paz. En febrero, se dio un paso importante cuando el presidente Salva Kiir nombró a Riek Machar, líder del SPLA-IO, primer vicepresidente del país. El Gobierno de Transición de Unidad Nacional (TGoNU), que debería de haberse formado a finales de noviembre de 2015, finalmente fue constituido el 28 de abril, dos días después de la llegada de Machar a la capital, Juba. Sin embargo, y a pesar de los avances en la implementación de estas importantes cláusulas del acuerdo de paz, las tensiones se mantuvieron y estallaron definitivamente durante el segundo semestre del año.

En el mes de julio se produjeron los peores hechos que conllevaron el aumento de la violencia y la vuelta al escenario de guerra. A principios de mes se desataron graves enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas leales a Salva Kiir, y las fuerzas del SPLA-IO del vicepresidente Riek Machar, en la capital del país, Juba. Los enfrentamientos –que comenzaron el día 7 frente al palacio presidencial y concluyeron el día 11, después de fuertes presiones de la IGAD, la ONU, la UA y EEUU– causaron, según el parte oficial facilitado por el ministro de Salud, un balance de alrededor de 270 muertos, entre ellos, 44 soldados, cinco policías y 190 combatientes supuestamente miembros del SPLA-IO. Además, 34 soldados del gobierno y 27 civiles resultaron heridos, aunque otras fuentes aumentaban el número de muertos hasta el medio millar. Entre los fallecidos también se encontraban cuatro soldados de la UNMISS (dos chinos y dos rwandeses). Machar y las fuerzas del SPLA-IO, que habían llegado a Juba unos meses antes, abandonaron la capital, afirmando que no volverían hasta que una fuerza regional se desplegase en ella para garantizar su protección. Ban Ki-moon, secretario general de ONU, solicitó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU la imposición de un embargo de armas, mientras que la IGAD exigió a ambos bandos que sus fuerzas armadas abandonasen Juba para ser reemplazadas por una fuerza regional de protección, medida que fue respaldada en cumbre extraordinaria de la UA celebrada en Kigali, donde el organismo acordó el despliegue de tropas regionales provenientes de Uganda, Kenya, Sudán, Rwanda y Etiopía. El 12 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU, si bien no impuso el embargo de armas, sí autorizó el despliegue de una fuerza de 4.000 efectivos, que se unirían a los ya 12.000 efectivos que componen la UNMISS, para garantizar la paz en la capital de Sudán del Sur, con la novedad de que en su mandato podrán hacer uso de la fuerza para protección de la población civil. El Gobierno de Salva Kiir se negó en un primer momento a su despliegue, pero en el mes de noviembre finalmente afirmó que lo aceptaría. Al finalizar el año, el 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad volvió a rechazar la aprobación de una resolución presentada por EEUU en la cual se solicitaba el embargo de armas al país, así como la aplicación de sanciones a algunos líderes sur sudaneses de ambos bandos: el ex primer vicepresidente, Riek Machar, el jefe del Ejército del SPLA, Paul Malong, y el ministro de Información, Michael Makuei.

Los enfrentamientos de julio en Juba acabaron con el recién creado Gobierno de Transición y Unidad Nacional en Sudán del Sur

La crisis de Juba también significó un paso atrás en la transición política. El 25 de julio, Salva Kiir destituyó a Machar como primer vicepresidente y lo sustituyó por el hasta el entonces ministro de Minería, Taban Deng Gai. Esta decisión dividió al SPLA-IO y generó nuevos enfrentamientos entre el SPLA y el SPLA-IO en diferentes partes del país, como los producidos en Leer, Wau, Ngo Baggari o Juba. A raíz de la crisis de julio, las rebeliones se extendieron a través del país. **Riek Machar emitió el 25 septiembre un comunicado desde Jartum, donde hizo un llamamiento al retorno de la guerra contra el Gobierno, declarando colapsado el Acuerdo de Paz.** Lam Akol, veterano disidente sur sudanés, declaró también la guerra al Gobierno a través de su organización National Democratic Movement. Otro movimiento armado, el South Sudan Democratic Movement-Cobra Faction (SSDM-CF), originario de la región de Greater Upper Nile, anunció la vuelta a la lucha armada, lo que auspició que más de 5.000 soldados del grupo étnico murle comandados por el general John Welarum en el estado de Borna, desertasen de las filas del Ejército nacional (SPLA) y se unieran a la insurgencia del SSDM-CF. La seguridad se deterioró significativamente en las regiones de Ecuatoria. Durante el mes de octubre, al menos 51 civiles fueron asesinados en varias emboscadas realizadas en carreteras, dirigidas contra población dinka, en respuesta a las agresiones del Gobierno en la región. El deterioro de la situación de seguridad en Sudán del Sur hizo que algunas voces, como la de Adama Dieng, asesor especial del secretario general de la ONU para

la prevención de genocidio, alertasen sobre el riesgo de amenaza de genocidio en el país, sobre todo en la región meridional de Ecuatoria. La ONU también alertó de que más del **10% de la población de Sudán del Sur, alrededor de 1,3 millones de personas, se han visto obligados a buscar refugio fuera del país por la violencia**, **mientras que otras 261.541 personas, sobre todo provenientes de la vecina Sudán, se encontraban refugiadas en Sudán del Sur. Además, alrededor de 1,83 millones más vivían desplazados dentro del país, de los cuales, 212.071 se encontraban en bases de mantenimiento de la paz de la ONU en noviembre de 2016**. También las agencias humanitarias informaron de que el 40% de los habitantes se encontraban en situación de inseguridad alimentaria crítica.[73]

Magreb - Norte de África

Argelia	
Inicio:	1992
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jun al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:
El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas desde comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de Liberación Nacional. La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del GIA y convertido en Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continúa cobrándose víctimas, aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha armada. En los últimos años el conflicto ha estado protagonizado principalmente por AQMI, que se convirtió en una organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a países del Sahel. Argelia, junto a Malí, Libia, Mauritania y Níger, entre otros, se han enfrentado a AQMI y otros grupos armados que operan en la zona, entre ellos el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y las organizaciones al-Mourabitoun (Firmantes de Sangre), Jund al-Khilafa (filial de ISIS) e ISIS.

Argelia continuó siendo escenario de un **conflicto armado de baja intensidad que se cobró la vida de cerca de 150 personas en 2016** y que se manifestó en diversos hechos de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad y grupos armados de línea yihadista (o personas sospechosas de pertenecer a estas organizaciones). Según el balance del Ejército argelino, hasta diciembre de 2016 se había logrado "neutralizar" a 350 presuntos combatientes, de los cuales 125 habían sido abatidos y otros 225 arrestados en distintas operaciones. Este balance oficial no incluye el número de bajas entre las fuerzas de seguridad. Según el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), la cifra total de fallecidos por este tipo de violencia en Argelia ascendería a 150 personas en casi un centenar de incidentes. Las cifras de mortalidad fueron, por tanto, similares a las de años anteriores, en los que también se contabilizaron en torno a un centenar de víctimas mortales. Los hechos de violencia se produjeron en diversas localidades, entre ellas varias provincias del norte como Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Skikda, Medea o Ain Defla, pero también en la provincia de El-Oued (centro-este, fronteriza con Túnez). Uno de los incidentes más destacados del año tuvo lugar en esta última región, en abril, cuando el Ejército dio muerte a 14 presuntos combatientes cerca de la localidad de Kouinine y confiscó un depósito de armas. Un hecho que no causó víctimas mortales, pero que despertó especial preocupación en las autoridades argelinas, fue el ataque a una planta de gas natural propiedad de la compañía británica British Petroleum, la noruega Statoil y la argelina Sonatrach en la localidad de Krechba, en la desértica región de Ain Salah (sur), en una acción reivindicada por al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Tras la experiencia de la toma de rehenes en la planta de In Amenas en 2013 –que acabó con la muerte de 70 personas– el Gobierno había reforzado la vigilancia de las plantas de petróleo y de gas y, después de la acción en Krechba, anunció nuevas medidas de seguridad, incluyendo el despliegue adicional de 5.000 soldados. En las semanas previas al ataque, AQMI había reivindicado otras acciones con numerosas víctimas mortales en Côte d'Ivoire y Burkina Faso,[74] confirmando que la organización mantiene sus objetivos en Argelia, pero también sus acciones de ámbito regional. A lo largo de 2016 también surgieron informaciones sobre la presencia de ISIS en el país y su pulso con AQMI. ISIS continuó lanzando amenazas contra Argelia y, según la prensa local, contaría con un centenar de seguidores en el país que tendrían la misión de reactivar la "Provincia de Argelia (wilayate Al-Djazair). Reportes indican que dos facciones de AQMI, Serriyat al-Ghuraba (célula operativa en Constantine) y Katiba al-Itissam (activa en la región de Skikda) abandonaron el grupo para unirse a ISIS. Pese a ello, algunos análisis subrayaron que ISIS no ha conseguido penetrar con fuerza en Argelia y que las perspectivas del grupo en el país han sufrido un declive desde el asesinato del líder de su filial, Jund al-Khilafa (Soldados del Califato), en diciembre de 2014.[75]

El 25 de septiembre Riek Machar comunicó la vuelta a la lucha armada y el colapso del acuerdo de paz en Sudán del Sur

73. OCHA, "South Sudan: Humanitarina Snapshot", noviembre de 2016.
74. Véase los resúmenes de Côte d'Ivoire y Burkina Faso en el capítulo 2 (Tensiones).
75. Ghanem-Yazbeck, Dalia, "Obstacles to ISIS expansion", *The Cipher Brief*, 1 de septiembre de 2016.

Ante las campañas contra ISIS en Libia y la actividad de AQMI en países del Sahel y el consiguiente temor de infiltración de combatientes a través de las fronteras, **Argelia optó en 2016 por intensificar su política de refuerzo de la seguridad en zonas limítrofes**. En abril las autoridades decidieron desplazar 20.000 efectivos de bases en el norte al sur del país y fuentes locales informaron sobre el refuerzo de la vigilancia en la frontera este de Argelia, tanto con Túnez como con Libia. En esta última frontera, de más de 1.000 kilómetros, se profundizó en la construcción de zanjas. Las zonas limítrofes con Malí, Níger y Libia han sido convertidas en áreas militares. En este contexto, durante el año diversos análisis resaltaron el fracaso del Comité del Estado Mayor Operacional Conjunto (CEMOC, por sus siglas en francés) entre Argelia, Níger, Mauritania y Malí. Impulsado por Argelia en 2010 y con base en la localidad argelina de Tamanrasset, el CEMOC debía servir como mecanismo de cooperación para coordinar los esfuerzos de gobiernos de la región para frenar la actividad de grupos yihadistas. Estaba previsto que se crearan patrullas conjuntas que no llegaron a configurarse y, según algunos observadores, la iniciativa argelina pretendía fundamentalmente disuadir a países occidentales de involucrarse más en el Sáhara y el Sahel. Ante la falta de respuesta de Argelia a los requerimientos de asistencia militar por parte de países de la región –Malí en 2012, Níger en 2013– y la percepción de falta de predictibilidad de Argel, los países del llamado G5 Sahel (Malí, Mauritania, Burkina Faso, Níger y Chad) decidieron lanzar su propia iniciativa de coordinación de seguridad para la región.[76] Finalmente, cabe destacar algunos hechos vinculados a la política interna del país. Durante 2016 se aprobaron una serie de reformas constitucionales que, entre otros temas, limita a dos los períodos presidenciales –Abdelaziz Bouteflika está en su cuarto mandato–, prohíbe que ciudadanos con doble nacionalidad opten a cargos públicos y reconoce el tamazigh como lengua oficial del Estado. Sectores críticos pusieron en duda el impacto de las reformas para reducir la influencia en el sistema político de las élites vinculadas al partido oficialista Frente de Liberación Nacional (FLN) y de las fuerzas de seguridad. A lo largo del año, además, continuaron las denuncias sobre detenciones de activistas durante manifestaciones pacíficas y medidas contra sectores disidentes. Uno de los casos de mayor repercusión fue la condena a dos años de prisión por insultos al presidente contra el periodista británico-argelino Mohamed Tamalt, quien murió en diciembre tras tres meses en huelga de hambre. Adicionalmente, cabe destacar que algunos análisis alertaron sobre el potencial de inestabilidad en el sur del país, donde se ha identificado un creciente resentimiento contra las autoridades. Los focos de contestación se han localizado principalmente en Ghardaia, In Salah y Ouargla y han estado vinculados a dinámicas etno-sectarias; movilizaciones por desacuerdos en la explotación de recursos; marginación y altos niveles de desempleo, respectivamente.[77]

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad (Ejército Nacional de Libia), grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi, ISIS, AQMI, entre otros actores armados; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la "liberación" de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y la conformación de dos parlamentos y dos gobiernos, en Tobruk y Trípoli, que cuentan con el apoyo de sendas coaliciones armadas. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto dificultados por este panorama de fragmentación y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de ISIS en el país norteafricano.

La situación en Libia continuó deteriorándose en 2016, en un contexto de **profundización de la división política, persistentes focos de la violencia vinculados a la actividad de una gran diversidad de actores armados** –que causaron más de un millar de víctimas mortales durante el año, según recuentos informales parciales–, **y de continuas violaciones a los derechos humanos en un clima de impunidad**. La evolución de los acontecimientos en el país estuvo marcada por los intentos de implementar el acuerdo de Skhirat, aprobado a finales de 2015 bajo los auspicios de la ONU. El principal objetivo del pacto era sortear la fragmentación política e institucional en Libia, que desde 2014 contaba con dos administraciones paralelas, una en Trípoli y otra en Tobruk/Bayda

76. Brahimi, Abdallah, "Algeria's Military Makeover", *Sada,* Carnegie Endowment for International Peace, 19 de abril de 2016. Véase también el resumen sobre Malí en este capítulo.
77. International Crisis Group, *Algeria's South: Trouble's Bellwether*, Middle East and North Africa Report no.171, ICG, 21 de noviembre de 2016.

(este). Con este propósito, el acuerdo planteó el establecimiento de un Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) que sería diseñado por un Consejo Presidencial encabezado por Fajez Sarraj, futuro primer ministro. El acuerdo, sin embargo, contó con un apoyo parcial desde el principio y en los meses siguientes el Consejo Presidencial enfrentó numerosos obstáculos en los intentos por asentar su autoridad y por conseguir la aprobación del gobierno de unidad, en medio de resistencias y amenazas de actores políticos y armados.[78] Prueba de ello es que durante los primeros meses del año el Consejo Presidencial tuvo que operar en Túnez ante el clima de inseguridad. No fue hasta finales de marzo que una parte del Consejo llegó a Trípoli por mar –el aeropuerto estaba bloqueado por fuerzas hostiles a las nuevas autoridades– y se instaló en una base naval. Al no disponer de cuerpos de seguridad unificados bajo su control, el Consejo optó por crear una nueva fuerza, la Guardia Presidencial, y por establecer acuerdos de colaboración con milicias de la zona oeste del país. Sarraj consiguió el respaldo de algunos actores de Trípoli y miembros del Congreso General Nacional (CGN) accedieron a integrar el nuevo Alto Consejo Consultivo definido en el acuerdo de Skhirat. No obstante, sectores vinculados al CGN, entre ellos Khalifa Ghweil, jefe del ex Gobierno de Salvación Nacional que había estado funcionando en Trípoli, mantuvieron una posición reticente. Ejemplo de ello fue el intento de golpe de Estado encabezado por Gwheil en octubre, que añadió confusión a la situación en el país. En el este de Libia la Cámara de Representantes (CdR) –reconocida en el acuerdo de Skhirat como el único cuerpo legislativo válido–, mantuvo su negativa a ratificar la propuesta de gobierno de unidad de Sarraj. Según diversos análisis, en el este del país se habrían impuesto las reticencias hacia la administración de Sarraj por sus vínculos con milicias de Misrata, el temor por las posibles influencias de sectores islamistas y las aprensiones sobre el establecimiento de un nuevo orden y autoridad centrado una vez más en Trípoli, en desmedro de las aspiraciones descentralizadoras de la zona oriental. El ex general Khalifa Hifter, líder del llamado Ejército Nacional de Libia y figura con ascendiente en el este del país, también influyó en la posición negativa de la CdR, en parte por sentirse marginado del acuerdo de Skhirat y de las disposiciones de seguridad y por su pulso con Mahdi al-Barghathi, antiguo lugarteniente designado ministro de Defensa en el Gobierno de Sarraj. Ante el bloqueo en la aprobación del gabinete, Sarraj optó por poner en marcha el GAN sin esperar la aprobación de la CdR. Así, a finales de año, el panorama político-institucional de Libia se caracterizaba por la fragmentación, con un gobierno de unidad con base en Trípoli con autoridad limitada, una administración vinculada a la CdR que se mantenía operativa en el este del país y múltiples desacuerdos sobre la implementación del acuerdo político. Diversos análisis apuntaban a que el panorama estaba aún más dividido que un año atrás.[79]

En este trasfondo de inestabilidad, **Libia continuó siendo escenario de múltiples focos de violencia, que a lo largo del año se centraron especialmente en Trípoli, Bengasi y Sirte** en forma de enfrentamientos, ataques suicidas y atentados. Entre los diversos hechos de violencia, cabe destacar al menos dos dinámicas. En primer lugar, las tensiones en la zona del creciente petrolero, escenario de acciones de ISIS durante el primer semestre y, posteriormente, de una campaña de las fuerzas de Hifter que en octubre le llevaron a asumir el control de las localidades de Ras Lanouf, Al-Sidra, Zuwaytina y Brega. Las hostilidades enfrentaron a las tropas de Hifter con el grupo armado Petroleum Facilities Guard que poco antes había llegado a un acuerdo con la administración de Sarraj. Diversos análisis coincidieron en que estos hechos suponían un cambio importante en el equilibrio de fuerzas entre los actores armados del este y oeste del país. En segundo lugar, la campaña armada contra ISIS en la ciudad de Sirte, en el marco de una operación denominada Bunyan al-Marsous (BAM) o "Estructura Sólida", que se extendió de mayo a diciembre. La ofensiva congregó a diversas milicias supuestamente leales al gobierno de Sarraj, aunque en términos operativos no hubo un comando de fuerzas unificado y los diversos grupos respondían a las órdenes de sus respectivos líderes. Milicias de Misrata tuvieron protagonismo en estas fuerzas, que a partir de agosto contaron con el apoyo formal de EEUU a través de una campaña aérea. Según estimaciones, en estos meses de enfrentamientos habrían fallecido más de 750 miembros de las milicias pro-gubernamentales. Se desconoce el número de bajas en las filas de ISIS, pero algunas fuentes oficiales situaban la cifra entre 1.800 y 2.000 combatientes. Si bien se consiguió el objetivo de expulsar a ISIS de la ciudad, diversos análisis subrayaron que la organización armada –que según algunos expertos contaba con entre 3.000 y 5.000 efectivos en el país antes del inicio de la campaña– mantenía capacidad para perpetrar acciones desde otros puntos de Libia o para reorganizarse en países vecinos, especialmente teniendo en cuenta su relación de colaboración con otros grupos armados próximos o filiales de ISIS en el norte de África. Según informes de la ONU, AQMI –y grupos próximos– había conseguido consolidar su presencia en el sur de Libia y continuaba usando el país como base logística para procurarse armas y municiones. Además de estas dinámicas, cabe destacar la implicación activa de

Aunque en diciembre se logró la expulsión de ISIS de Sirte, diversos análisis subrayaron que el grupo armado mantenía capacidad para reorganizarse en otros puntos de Libia o en países vecinos

78. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 3 (Procesos de paz).
79. Véase "Libia ante un escenario de inestabilidad crónica" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

actores foráneos durante 2016 en respaldo a actores de uno y otro bando. Es el caso de EEUU y su campaña aérea –denunciada por la CdR como una violación a la soberanía del país–, precedida por informaciones de prensa sobre despliegue de operativos de fuerzas especiales estadounidenses, italianos, británicos y franceses. Si bien en la mayoría de estos casos involucraba un apoyo a fuerzas próximas al Gobierno de Sarraj, que dio su visto bueno a la campaña, en el caso de Francia se identificó un respaldo encubierto a las fuerzas del general Hifter. La implicación francesa salió a la luz pública después de un incidente en el que murieron tres soldados galos en julio, tras el derribo de un helicóptero por parte de un nuevo grupo armado creado en 2016 autodenominado Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB) y adversario del general Hifter. El militar, a su vez, ha contado con el apoyo de Rusia, Egipto y EAU y ha sido crecientemente considerado como "el hombre de Moscú en Libia". Esta situación llevó a advertir a analistas sobre las consecuencias del respaldo externo a diversos actores armados en el país. Paralelamente, cabe destacar que Barack Obama aseguró en 2016 que Libia había sido su peor error en política exterior como presidente de EEUU por la falta de planificación tras la intervención occidental en 2011, liderada junto con Francia y Reino Unido y respaldada por la OTAN.

A este contexto político y de seguridad se suma el persistente clima de violaciones a los derechos humanos en el país. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) publicado en febrero alertó sobre el clima de impunidad en el país ante un conjunto de prácticas abusivas identificadas en el país desde 2014, que incluyen ejecuciones sumarias; ataques indiscriminados contra la población civil; torturas y malos tratos de manera sistemática en centros de detención; secuestros, desapariciones y detenciones arbitrarias; y abusos contra mujeres, activistas, periodistas y menores, incluyendo casos de reclutamiento forzado. **Informes de la UNSMIL sobre la situación a lo largo de 2016 confirmaron la continuidad de estos abusos e identificaron colectivos especialmente vulnerables, incluyendo la población migrante y refugiada en el país.** Según una investigación conjunta de la UNSMIL y OHCHR dada a conocer en diciembre de 2016, personas en esta condición son sometidas a extorsiones, trabajos forzados, violencia sexual y arrestos arbitrarios por parte de grupos armados, redes de trata y también de funcionarios libios. Pese a este escenario, Libia destacó en 2016 como una de las principales vías de tránsito hacia Europa. Al finalizar el año más de 3.000 personas habían muerto intentando cruzar el Mediterráneo por esta ruta central, en su mayoría procedentes de las costas de Libia.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FARC-EP, ELN, nuevos grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:
En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia.

El conflicto armado en Colombia que protagonizan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) contra el Estado, estuvo marcado por las negociaciones de paz en La Habana que dieron como resultado la firma de la paz tras más de 52 años de guerra civil.[80] Entre los aspectos más destacados del conflicto armado durante el año, las FARC-EP anunciaron el 10 de febrero que no reclutarían a menores de 18 años, una decisión que se produjo un año después de su compromiso de no aceptar en sus filas a menores de 17 años. Posteriormente, el 15 de mayo las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP en las conversaciones de La Habana firmaron el "acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención". Durante el 2016 se mantuvo vigente el desescalamiento bilateral de la violencia acordado por el Gobierno y las FARC-EP en junio de 2015. Así se logró que el conflicto armado cayera a su nivel mínimo en 52 años de violencia, en cuanto a número de víctimas, combatientes muertos y heridos, así como en el de acciones violentas registradas. Al acuerdo de desescalada de la violencia se le unió el 29 de agosto de 2016 el acuerdo de cese al fuego bilateral, que a partir de la firma del acuerdo de paz entre Gobierno y FARC-EP en diciembre se ha vuelto permanente. Sin embargo, a pesar de los importantes avances logrados en el país a través de las negociaciones

80. Véase el resumen sobre Colombia en capítulo 3 (Procesos de paz).

y acuerdos entre Gobierno y guerrilla de las FARC-EP, en 2016 se produjeron algunas escisiones en el seno de las fuerzas armadas irregulares a raíz de las negociaciones de paz. Aunque éstas son minoritarias, suponen un reto para la construcción de una paz estable y duradera. El 13 de diciembre, el Estado Mayor de las FARC-EP comunicó la expulsión de cinco jefes guerrilleros (Gentil Duarte, Euclides Mora, John Cuarenta, Giovanny Chuspas y Julián Chollo) por no seguir instrucciones en el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz. Los jefes expulsados pertenecían a los Frentes 1, 7 y 16, operativos en los departamentos centrales de Meta y Guaviare. A su vez, también se presentaron disidencias en diferentes frentes operativos en los departamentos de Vichada, Guainía, Chocó, Nariño, Antioquia o Caquetá. Según estimaciones realizadas por fuentes militares y especialistas, se estima que entre un 10 y un 30% de los guerrilleros de las FARC-EP no se sumarán a la desmovilización prevista en los Acuerdos.

En relación al conflicto armado que mantiene el Gobierno colombiano con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), durante el año se produjeron diferentes acercamientos entre las partes con el fin de iniciar conversaciones de paz formales, pero éstos no lograron pasar de la fase de diálogo exploratorio. El Gobierno exige a la guerrilla la liberación de las personas secuestradas, hecho que al finalizar el año no se había aún producido.[81] Aun así, "Iván Márquez", alias de Luciano Arango Marín, quien fungió como jefe negociador de las FARC-EP en las conversaciones de La Habana, subrayó que el ELN no se puede quedar fuera del proceso de paz porque "una paz sin el ELN sería una paz incompleta". El ELN mantuvo durante el año sus operaciones armadas en el país, sobre todo durante el mes de febrero cuando se registraron los niveles más altos de ataques de esta guerrilla desde el año 2010, debido a la conmemoración de los 50 años de la muerte de su histórico líder Camilo Torres. El grupo anunció un cese al fuego unilateral desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre para facilitar la participación en el plebiscito organizado para refrendar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Durante el segundo semestre del año se redujo el impacto de la violencia y todo hacía prever que a principios del 2017 se establecería el diálogo formal entre la guerrilla y el Gobierno.

Como parte del impacto inmediato que ha tenido en el país el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, y el inicio de las negociaciones en su fase exploratoria con el ELN, el 29 de diciembre, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, hizo público los datos nacionales relativos a la tasa de homicidios registrada en el país durante el 2016, la cual se situó en 24,4 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que significa la tasa más baja de los últimos 42 años. Según el Registro Único de Víctimas de la gubernamental Red Nacional de Información, durante el 2016 se registraron 301 víctimas mortales relacionadas con actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos, frente a las 1.058 del año 2015, las 3.290 registradas en 2014 o las 10.198 en 2012.[82]

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:
El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de los noventa. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014. Un contingente de unos 13.000 soldados permanecerá hasta diciembre de 2017 para formar y entrenar a las fuerzas afganas (bajo la misión "Resolute Support", mandato de la OTAN) y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo (3.000 soldados norteamericanos, misión "Freedom Sentinel").

La situación de violencia en Afganistán fue de enorme gravedad durante todo el año, consolidándose el deterioro que se produjo en 2015 tras la retirada parcial de las tropas internacionales desplegadas en el país con la invasión estadounidense de 2001. Según datos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, entre enero y agosto

81. Ibíd.
82. Red nacional de Información, Registro Único de Víctimas. Acto terrorista 2016. 01 de enero de 2017.

de 2016 murieron 5.523 miembros de las fuerzas de seguridad afganas y casi 10.000 resultaron heridos.[83] **Los enfrentamientos y atentados se repitieron durante todo el año, con un grave impacto sobre la población civil, contribuyendo a deteriorar también la crisis de desplazamiento forzado que atraviesa el país.** La misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA, registró un incremento del 3% en el número de víctimas civiles con respecto a 2015 (11.418 frente a 11.034), aunque se produjo un descenso en el número de víctimas mortales. Así, en 2016 se registraron 3.498 víctimas mortales civiles como consecuencia del conflicto armado –de las que 923 eran menores y 341 eran mujeres– y 7.920 personas resultaron heridas. Además, según cifras reveladas extraoficialmente por fuentes gubernamentales, entre marzo y agosto alrededor de 4.500 soldados y policías afganos habrían muerto y más de 8.000 habrían resultado heridos. El deterioro de la seguridad y la crisis humanitaria tuvieron lugar además en un contexto de grave crisis política.[84] La insurgencia talibán logró avances en el control territorial de algunas zonas del país, especialmente después de una importante ofensiva que tuvo lugar en el mes de agosto. En septiembre la insurgencia talibán logró el control del distrito de Janikhel, en la provincia de Paktia, después de intensos enfrentamientos en los que habrían muerto 30 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Cientos de insurgentes atacaron los edificios centrales de la sede del distrito y se hicieron con el control de este produciéndose también víctimas mortales en las filas talibanes. En ese mismo mes los talibanes lograron capturar el distrito de Dahan-e-Ghori en la provincia de Baghlan, y posteriormente el distrito de Khanabad, zona clave puesto que une las provincias de Kunduz y Takhar. No obstante, este distrito fue recuperado días después por las fuerzas de seguridad afganas. La insurgencia talibán intensificó también su ofensiva para avanzar hacia la capital de Helmand, Lashkar Gah, a pesar de los bombardeos aéreos estadounidenses, generando una importante crisis humanitaria y forzando a 30.000 personas a desplazarse de sus hogares en la provincia. En el mes de octubre un importante ataque talibán en las inmediaciones de la ciudad de Lashkar Gah, en la provincia de Helmand, causó la muerte de al menos 100 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Además, la insurgencia talibán consiguió recuperar el control sobre varias partes de la ciudad de Kunduz durante varios días en los que se produjeron enfrentamientos que obligaron a decenas de miles de personas a desplazarse.

Se consolidó el deterioro de la situación de Afganistán con intensos enfrentamientos y graves atentados que tuvieron un serio impacto en la población civil

Por otra parte, **se registraron importantes atentados, especialmente en Kabul, con un serio impacto en términos de víctimas mortales.** El atentado más grave del año, que tuvo lugar en julio, fue reivindicado por ISIS y causó la muerte a 80 personas e hirió a otras 230. Se trató de una doble explosión que estaba dirigida contra la minoría hazara (que profesa la confesión chií) y se produjo durante una protesta que había congregado a numerosas personas de esta minoría. Se trata del atentado más grave contra la minoría hazara en Kabul desde 2011 y el primero perpetrado por ISIS en la capital afgana, orquestado por un comandante de esta organización desde la provincia de Nangarhar.[85] En junio, el estallido de bombas al paso de un convoy de autobuses de la Policía en las afueras de Kabul causó la muerte a 33 personas, cuatro de ellas civiles. Días antes, un atentado suicida contra un autobús causó la muerte de 14 guardas de seguridad nepalíes que trabajaban en la embajada canadiense. En el mes de agosto, un atentado contra la Universidad Americana en Kabul causó la muerte de 12 personas, siete de ellas estudiantes de esta universidad, dejando heridas a otras 44. Las fuerzas de seguridad mataron a dos hombres sospechosos de ser los responsables del atentado. El 6 de septiembre se registraron en Kabul dos atentados de gravedad reivindicados por los talibanes. El primero de ellos tuvo lugar en la parte exterior del Ministerio de Defensa, con el estallido de dos bombas. La explosión de la primera bomba causó decenas de muertes y fue seguida por una segunda explosión, que ocasionó la muerte de diversos altos mandos de las fuerzas de seguridad afganas (dos generales, varios coroneles y numerosos soldados y policías) que se habían desplazado al lugar tras el primer atentado. 40 personas murieron en total, ya que numerosos civiles que se hallaban en la zona de mercado próxima a la sede del Ministerio de Defensa también fallecieron como consecuencia del doble atentado. Además, 110 personas resultaron heridas. Horas después la sede de la ONG CARE International fue atacada por hombres armados. En el tiroteo posterior murieron tres atacantes y seis personas más resultaron heridas.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, All Parties Hurriyat Conference, United Jihad Council
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:
El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que

83. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, *Quarterly Report to the United States Congress*, octubre de 2016.
84. Véase "Afganistán, un conflicto enquistado" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).
85. Para más información sobre la presencia de ISIS en el país véase nota anterior.

desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

La situación de seguridad en el estado indio de Jammu y Cachemira se deterioró notablemente a lo largo del año 2016. Según las cifras recopiladas por el South Asian Terrorism Portal, **267 personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos armados de oposición y las fuerzas de seguridad indias, así como por la violencia que se produjo en múltiples disturbios de protesta contra la acción de las fuerzas de seguridad,** frente a las 174 víctimas mortales de 2015. En el mes de abril, cuatro personas murieron durante los disturbios que se desencadenaron en varias ciudades del estado después de que se convocaran manifestaciones para protestar por un intento de agresión sexual contra una chica por parte de un soldado de las Fuerzas Armadas indias. En este mismo mes, dos dirigentes del grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen, Naseer Ahmad Pandit e Inamul Haq alias Waseem Malla, murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, en lo que fue calificado por éstas como un duro golpe al liderazgo del grupo. Miles de personas asistieron a los funerales de los insurgentes. Estas muertes y funerales de protesta fueron la antesala de los hechos más graves del año, que tuvieron lugar en julio con el asesinato por parte de las fuerzas de seguridad del conocido insurgente, también de Hizbul Mujahideen, Burhan Wani, cuando la vivienda en la que se escondía fue asediada por las fuerzas de seguridad indias. Wani, de 22 años, era considerado uno de los insurgentes más influyentes entre los jóvenes cachemires por su presencia en las redes sociales y se le atribuía el fortalecimiento de su organización armada en los últimos meses –superando a otras organizaciones como Lashkar-e-Toiba– y la mejora de la imagen de la insurgencia entre la población. Miles de personas asistieron a su funeral y en otros lugares del estado se llevaron a cabo homenajes fúnebres al insurgente. Durante los meses de julio y agosto se repitieron disturbios y protestas de forma continuada en los que murieron cerca de 80 personas. A pesar del toque de queda que impusieron las autoridades, las protestas se produjeron con una frecuencia casi diaria y miles de personas participaron en manifestaciones desafiando el toque de queda. Especialmente preocupante fue el elevadísimo número de heridos, más de 8.000, como consecuencia de los disturbios y de la grave represión policial. Las organizaciones de derechos humanos y profesionales sanitarios denunciaron que centenares de personas podrían quedar ciegas como consecuencia de las graves heridas provocadas por los disparos con perdigones por parte de la policía. Unas 5.000 personas resultaron heridas a consecuencia de estas balas. Además, se produjo la detención del líder independentista cachemir, Mirwaiz Umar Farooq, de la All Parties Hurriyet Conference, a quien se acusó de quebrantar su arresto domiciliario para participar en las protestas. Farooq había estado bajo arresto domiciliario durante dos meses por sus denuncias sobre la actuación de las fuerzas de seguridad indias en Cachemira. Las protestas causaron además la paralización de la vida económica del estado, con bancos, tiendas y colegios cerrados.

El conflicto en Cachemira se deterioró notablemente a lo largo del año con graves disturbios en los que murieron decenas de personas que protestaban por las muertes de insurgentes

En diciembre volvieron a repetirse las protestas de carácter masivo después de que dos insurgentes murieran tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que se prolongó durante casi dos días. Los insurgentes murieron tiroteados por las fuerzas de seguridad lo que llevó a la población de esta ciudad y localidades vecinas a iniciar protestas en las calles. Al menos una persona murió posteriormente en el transcurso de las masivas protestas contra el Gobierno indio, en las que decenas de personas resultaron heridas. Otro episodio de enorme gravedad lo constituyó el ataque insurgente que tuvo lugar en septiembre contra la base de las Fuerzas Armadas indias de Uri, situada en una zona cercana a la Línea de Control, frontera de facto con Pakistán. **Este ataque causó la muerte a 19 soldados indios y cuatro insurgentes cachemires y fue el más mortífero contra las fuerzas de seguridad indias en Cachemira en las últimas décadas.** El ataque fue atribuido al grupo armado de oposición con base en Pakistán, Jaish-e-Muhammad, y la India acusó al Gobierno pakistaní de estar detrás del atentado. En respuesta, se iniciaron una serie de ataques selectivos contra campamentos de la insurgencia en territorio pakistaní en la zona fronteriza, aunque Pakistán negó que estas operaciones tuvieran lugar.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:
El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en

honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad indias con el grupo armado de oposición naxalita CPI-M experimentó un repunte de la violencia a lo largo del año. De acuerdo con las cifras de mortalidad vinculadas al conflicto armado recopiladas por el South Asia Terrorism Portal (SATP), 430 personas murieron en diferentes estados de la India afectados por el conflicto, frente a las 251 del año 2015. Este último había sido el año en el que se registraron unas cifras de mortalidad más bajas desde que en el año 2010 se iniciara la operación contraterrorista Green Hunt por las fuerzas de seguridad indias. Según el SATP, la mayoría de las personas muertas en 2016 como consecuencia de la violencia fueron insurgentes (244), seguidas de civiles (120), y miembros de las fuerzas de seguridad (66). No obstante, estas cifras fueron puestas en cuestión repetidamente por el grupo armado, que afirmó que gran parte de las personas señaladas por el Gobierno como insurgentes eran civiles. De hecho, el Director General de la Policía del estado de Chhattisgarh –uno de los estados más afectados por la violencia–, que asumió el cargo en 2016, señaló que la práctica de matar a civiles y hacerlos pasar por insurgentes es algo que nunca debería haber sucedido y que había dado instrucciones para que no volviera a ocurrir. Los maoístas acusaron a las fuerzas de seguridad de la muerte de 90 personas durante los seis primeros meses del año en la zona de Bastar, en Chhattisgarh, en supuestos enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad que no fueron tales. Los estados afectados por la violencia según SATP fueron Chhattisgarh (207 víctimas mortales), Jharkhand (81), Odisha (72), Bihar (32), Maharashtra (23), Andhra Pradesh (10), Kerala (dos), Madhya Pradesh (dos) y Telangana (una). Las fuerzas de seguridad atribuyeron la reducción de la violencia en los últimos años –a pesar del repunte en términos de mortalidad de 2016)– a una mayor presencia policial en las zonas afectadas por el conflicto, a un elevado número de deserciones y rendiciones por parte de los insurgentes y a una mejor implementación de los programas de desarrollo implantados en las zonas afectadas por el conflicto armado.

Aunque los enfrentamientos se repitieron de forma constante, entre los hechos más graves del año cabe destacar el que tuvo lugar en el mes de junio en el distrito de Narayanpur, en Chhattisgarh, en el que según las fuerzas de seguridad murieron al menos 10 integrantes del grupo armado de oposición. En noviembre, otros seis insurgentes murieron en enfrentamientos en el distrito de Dantewada (uno de los más afectados por el conflicto) en este mismo estado y otros cinco insurgentes murieron después de que las fuerzas de seguridad llevaran a cabo una operación contra un campamento naxalita en el distrito de Narayanpur. En el estado Andhra Pradesh tuvo lugar el enfrentamiento más letal del año, en la zona fronteriza con el estado de Odisha, donde entre 18 y 24 insurgentes naxalitas murieron en una operación de las fuerzas de seguridad. Y en el estado de Bihar, 10 miembros del batallón de élite COBRA de la policía murieron como consecuencia de una explosión en el distrito de Aurangabad.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:
El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación Zarb-e Azb para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

Pakistán continuó afectado por elevados niveles de violencia durante todo el año, aunque éstos fueron sensiblemente inferiores a los de años anteriores. En 2016 se registraron un total de 2.610 muertes vinculadas a los diferentes conflictos y escenarios de tensión que tienen lugar en el país, en comparación con las 4.647 muertes en 2015 y las 11.596 muertes en 2014. Cabe

destacar que 1.277 de estas muertes se produjeron en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Punjab y en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA, por sus siglas en inglés), en su mayor parte vinculadas al conflicto armado que enfrenta a la insurgencia talibán con las fuerzas de seguridad pakistaníes. Las autoridades y fuerzas de seguridad atribuyeron esta reducción en las cifras de mortalidad al éxito de la política antiterrorista, especialmente a la operación militar Zarb-e-Azb, iniciada en 2014, y al Plan de Acción Nacional contra el terrorismo diseñado por el Gobierno después del atentado contra un colegio en Peshawar en diciembre de 2014. No obstante, a pesar de esta considerable reducción de la violencia, a lo largo de todo el año se repitieron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y diferentes organizaciones insurgentes y tuvieron lugar atentados con un grave impacto en términos de víctimas mortales y heridos. Además, a pesar de los anuncios gubernamentales, las fuerzas de seguridad no pudieron dar por cerrada la operación Zarb-e-Azb. El atentado más grave del año tuvo lugar en marzo en la ciudad de Lahore, capital de Punjab. Un atentado suicida con bomba en un parque causó la muerte de 72 personas, de los que en torno a 20 podrían ser menores, ya que el ataque tuvo lugar en las inmediaciones de una zona de juegos infantiles. El atentado fue reivindicado por la facción talibán Jamaat-ul-Ahrar, que señaló que el objetivo era la población cristiana que estaba celebrando la fiesta de la Pascua, aunque la mayoría de las víctimas profesaba la religión musulmana. Además, el grupo armado estaría tratando también de aprovechar el descontento popular tras la ejecución de Mumtaz Qadri, acusado de tirotear al gobernador de Punjab en 2011, por oponerse a la legislación anti blasfemia y defender a la minoría cristiana. Más de 100.000 personas asistieron al funeral de Qadri durante el que se produjeron disturbios. El Gobierno de Punjab anunció una operación de seguridad posterior al atentado liderada por la Policía, con apoyo militar, sin ceder a las presiones de quienes pedían que se otorgaran poderes adicionales al Ejército para llevar a cabo una operación militar de contrainsurgencia. El grupo armado Jamaat-ul-Ahrar se creó en 2014 integrado por diferentes facciones talibanes procedentes de cuatro de los siete distritos tribales de la frontera de Pakistán con Afganistán y está liderado por Omar Khalid Khorasani, comandante talibán con fuertes vínculos con al-Qaeda, que le habría proporcionado apoyo material y económico.

Aunque el conflicto armado en Pakistán siguió teniendo una elevada intensidad, se redujeron notablemente los niveles de violencia con respecto a años anteriores

En enero se había producido otro atentado de gravedad en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en la universidad de Bacha Khan. Más de 20 personas, en su mayoría estudiantes, murieron en un tiroteo protagonizado por cuatro hombres armados. El grupo armado talibán TTP negó estar detrás del atentado. En marzo, la explosión de una bomba en un autobús que transportaba funcionarios gubernamentales en la ciudad de Peshawar causó la muerte a 15 personas. Otras 30 resultaron heridas como consecuencia de la deflagración. En septiembre se produjeron varios atentados de consideración. El más grave tuvo lugar en la región tribal de Mohmand, donde al menos 29 personas murieron y otras 20 resultaron heridas como consecuencia del estallido de una bomba en una mezquita en el momento en que numerosas personas atendían las plegarias del viernes. El grupo armado Jamaat-ul-Ahrar reivindicó este atentado señalando que había buscado atacar a seguidores del Gobierno. En la ciudad de Mardan, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, 11 personas murieron en un atentado suicida contra un tribunal, reivindicado también por Jamaat-ul-Ahrar. Además, 20 personas más resultaron heridas como consecuencia de la deflagración, que se produjo cuando la policía trató de impedir el paso del atacante hacia el interior del recinto. En Peshawar, en un atentado suicida perpetrado por cuatro atacantes contra un recinto en el que residían alrededor de 100 trabajadores de la presa Warsak que profesan la religión cristiana, murieron todos los atacantes y tres personas más.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:
Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, si no miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto armado en la provincia de Baluchistán se mantuvo activo todo el año. Según las cifras de mortalidad vinculadas al conflicto armado recopiladas por el Center for Research and Security Studies de

Pakistán, a lo largo de 2016 se produjeron 805 muertes y 642 personas resultaron heridas. Esto representa un repunte con respecto a las cifras de 2015, cuando se registraron 719 muertes. A lo largo de todo el año se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las diferentes organizaciones insurgentes que operan en el territorio baluchi, así como ataques contra las infraestructuras. Por otra parte, las organizaciones de derechos humanos repitieron sus denuncias sobre las graves violaciones perpetradas en el marco del conflicto, especialmente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Entre los hechos más graves del año cabe destacar de forma especial los atentados de agosto y octubre en Quetta, capital de la provincia, y en noviembre en el distrito de Khuzdar. En el mes de agosto un atentado contra un hospital causó la muerte de 73 personas, en su mayoría abogados y periodistas, que estaban reunidas en el centro sanitario después de que el día anterior un prominente abogado de la ciudad hubiera sido asesinado a tiros. Más de 11 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión. En los meses previos se habían producido varios asesinatos de abogados también en la ciudad de Quetta. La agencia de noticias Amaq, vinculada al grupo armado ISIS, señaló que esta organización estaba detrás del atentado, aunque un portavoz del grupo armado de oposición TTP-JA, declaró haberlo cometido. Este grupo armado, facción de la insurgencia talibán, había mostrado su lealtad a ISIS pero posteriormente volvió a adherirse al movimiento talibán y no estaba clara cuál era su vinculación con ISIS. En octubre, un atentado contra una academia de Policía ocasionó la muerte a 62 personas, la mayoría cadetes de policía, y más de cien personas resultaron heridas. Un grupo de insurgentes atacó la academia en un asalto que duró varias horas y durante el que se enfrentaron a la Policía en un intenso tiroteo. Dos de los atacantes hicieron estallar cinturones con explosivos y un tercer asaltante murió tiroteado. Aunque algunas fuentes atribuyeron el atentado a ISIS, el grupo armado pakistaní LJ, asociado a la insurgencia talibán, lo había reivindicado previamente. Un portavoz del Gobierno baluchi señaló que el atentado había sido preparado en suelo afgano acusando a "agencias de inteligencia extranjeras". En noviembre, un atentado en el santuario sufí de Shah Noorani, en el distrito de Khuzdar, durante una celebración religiosa, causó la muerte a al menos 52 personas e hirió a más de 100 personas. El atentado fue reivindicado por ISIS.

Además de estos tres graves atentados, **a lo largo de todo el año se repitieron numerosos episodios de violencia.** En enero, una explosión en las cercanías de un centro de vacunación en Quetta causó la muerte de 16 personas (13 de ellas policías, que protegían a los equipos de vacunación) e hirió a una veintena de ellas. El grupo armado talibán TTP reivindicó el atentado, que sucedió durante el tercer día de la campaña de vacunación contra la polio en Baluchistán. En abril, 34 insurgentes murieron en el marco de una operación de las fuerzas de seguridad pakistaníes en el distrito de Kalat. Entre los insurgentes fallecidos estaba Abdul Nabi Bangulzai, líder del grupo armado de oposición United Baloch Army. Al anuncio por parte del gobierno baluchi de que desde el mes de diciembre las fuerzas de seguridad habían acabado con la vida de cerca de 100 insurgentes en diferentes operaciones de seguridad, respondió la organización de derechos humanos Voice of Baloch Missing Persons expresando su preocupación por el hecho de que podría tratarse de muertes que no se produjeron en combate, sino que por el contrario serían ejecuciones extrajudiciales bajo custodia, práctica habitual por parte de las fuerzas de seguridad pakistaníes en sus operaciones en la provincia. La organización denunció que en el mes de marzo las fuerzas de seguridad anunciaron la muerte de 12 insurgentes en una operación en la zona de Sibbi, y que sin embargo se trataba de civiles no armados que previamente habían sido detenidos. En octubre, en un atentado contra un tren en la población de Mach, al sur de Quetta, reivindicado por el grupo baluchi BLA, seis personas murieron y 19 resultaron heridas. El grupo armado señaló que el atentado tenía como objetivo a los militares pakistaníes que se desplazaban hacia Rawalpindi. Además, el líder del grupo armado BLF, Allah Nazar Baloch, solicitó apoyo internacional, incluyendo de India, para la causa baluchi y anunció ataques contra el proyecto del Corredor Económico China Pakistán, que tiene como objetivo unir el oeste de China con mar Arábigo en Pakistán con una red de carreteras, ferrocarriles y tuberías energéticas atravesando Baluchistán. La insurgencia baluchi calificó el proyecto de imperialista, y Frontier Works Organisation, la empresa pakistaní dirigida por el Ejército, señaló que en los últimos dos años 44 de sus trabajadores han sido asesinados y 100 han resultado heridos como consecuencia de atentados.

Asia Oriental

China (Turquestán Oriental)	
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social
Intensidad:	Fin
Evolución:	↓

Síntesis:
Xinjiang, también conocida como Turquestán Oriental o Uiguristán, es la región más occidental de China, alberga importantes yacimientos de hidrocarburos y ha estado habitada históricamente por la población uigur, mayoritariamente musulmana y con importantes vínculos culturales con países de Asia Central. Tras varias décadas de políticas de aculturación, explotación de los recursos naturales e intensa colonización demográfica, que ha alterado sustancialmente la estructura de la población y ha provocado tensiones comunitarias desde los años cincuenta, varios grupos armados secesionistas iniciaron acciones armadas contra el Gobierno chino, especialmente en los años noventa. Beijing considera terroristas a tales grupos, como ETIM o ETLO, y ha tratado de vincular su

estrategia contrainsurgente a la llamada lucha global contra el terrorismo. En 2008, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing, se registró un incremento de las acciones armadas de los grupos insurgentes, mientras que en 2009 se produjeron los enfrentamientos comunitarios más intensos de las últimas décadas. En los años siguientes la violencia se hizo más intensa, frecuente y compleja, por lo que el caso pasó a ser considerado conflicto armado.

A pesar de que algunas organizaciones acusan al Gobierno y a determinados medios afines de tratar de invisibilizar la situación política y el conflicto en Xinjiang, tanto los datos oficiales y las declaraciones del Gobierno como las noticias aparecidas en prensa sugieren una **drástica reducción de los niveles de violencia en Xinjiang respecto del año anterior**, en consonancia con la tendencia observada desde el año 2014. Por esta razón, este caso dejó de ser considerado como un conflicto armado activo al finalizar 2016. A partir de los hechos de violencia recogidos en medios de comunicación y centros especializados se estima que unas 200 personas murieron durante el año 2015, una cifra claramente inferior a las más de 340 víctimas mortales del año 2014. De hecho, a principios de 2015 el Uyghur Human Rights Project, un centro con sede en EEUU, señalaba que entre 656 y 715 personas fallecieron en Xinjiang por episodios de violencia política en los años 2013 y 2014. En cambio, en todo el 2016 el Gobierno solamente se hizo eco de tres incidentes con presunta participación de organizaciones uigures. A finales de diciembre, cinco personas murieron después de que un grupo de personas atacaran una oficina del Partido Comunista en el condado de Moyu, también conocido como Karakax. Días más tarde, en el marco del operativo policial y militar que estableció el Gobierno, otros tres presuntos insurgentes murieron. Según el Congreso Mundial Uigur, que mantiene que 20 personas fueron detenidas tras este incidente, el Gobierno no fue transparente en cuanto al número de víctimas mortales ni en cuanto a las motivaciones del ataque. Previamente, el 10 de septiembre cuatro personas murieron, incluyendo el subjefe de la Policía, después de que un artefacto explosivo estallara en la prefectura de Hotan. En paralelo a estos dos hechos, algunas organizaciones uigures denunciaron la situación de los derechos humanos en la región, la militarización de Xinjiang y las restricciones religiosas y culturales impuestas a la comunidad uigur, especialmente tras la entrada en vigor, el 1 de noviembre, de las nuevas normativas educativas en Xinjiang, y que contemplan entre otras cuestiones la prohibición de cualquier tipo de actividad religiosa en las escuelas. También en materia legislativa, cabe destacar la entrada en vigor de una nueva normativa, aprobada por la asamblea provincial de Xinjiang a finales de julio, que desarrolla la ley antiterrorista que entró en vigor el 1 de enero de 2016. Xinjiang es la primera provincia china que desarrolla reglamentariamente esta ley de ámbito nacional. La nueva normativa, que detalla mucho más que la ley estatal las definiciones de actos terroristas y los modos de prevenirlos o castigarlos, permite, entre otras cuestiones, la suspensión de manifestaciones u otros actos públicos de afluencia masiva o el cierre de escuelas, empresas o fábricas en las que se sospeche que se pueda producir o almacenar armamento.

Además de los episodios de violencia o represión que se registraron en Xinjiang, durante el año también cobraron notoriedad otros episodios de violencia ocurridos en terceros países que el Gobierno vinculó a grupos armados uigures. A finales de agosto, cinco personas de la embajada china en Bishkek (Kirguistán) resultaron heridas tras el estallido de un artefacto explosivo. Según informes de inteligencia de Kirguistán que trascendieron a la prensa, un miembro de ETIM, también conocido como Partido Islámico del Turkestán, fue el responsable de este atentado. En segundo lugar, algunas informaciones de prensa vincularon a personas de etnia uigur con el atentado de fin de año en Estambul, en el que 39 personas murieron y otras 69 resultaron heridas. Más de 30 personas fueron detenidas tras este atentado. En tercer lugar, cabe destacar el incremento de la tensión entre China y Pakistán después de que China acusara al Gobierno pakistaní de no poner fin a la presencia de grupos armados uigures en su territorio. En este sentido, el Gobierno chino ordenó la deportación de más de 100 estudiantes universitarios pakistaníes en Xinjiang tras la presunta implicación de algunos estudiantes pakistaníes en un atentado ocurrido en el mes de marzo. Previamente, en años anteriores, Beijing ya había deportado a estudiantes pakistaníes por distintos motivos. Además, a finales de año, tras los atentados de Moyu/Karakax, el Gobierno cerró la frontera entre Xinjiang y Pakistán. Previamente, en junio, ambos países llevaron a cabo la primera patrulla conjunta en la frontera entre Xinjiang y Cachemira. **En los últimos tiempos, el Gobierno chino ha expresado su preocupación por el alto número de uigures que reciben adiestramiento en Afganistán y Pakistán y que combaten en Siria**. Según Beijing, algunos de estos uigures podrían retornar a Xinjiang para reclutar a nuevos combatientes o para perpetrar actos de violencia. En junio, por ejemplo, un centro de investigación estadounidense estimó que entre mediados de 2013 y mediados de 2014 unos 100 uigures se habían unido a las filas del grupo armado Estado Islámico. Por otra parte, algunos analistas señalan que Beijing teme que el Gobierno de Turquía –país con lazos lingüísticos e históricos con la comunidad uigur– pueda facilitar el reclutamiento de personas uigures para la lucha contra el Gobierno sirio de Bashar al-Assad.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:
El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

Aunque no trascendieron cifras oficiales sobre el número de víctimas del conflicto armado que enfrenta al NPA con el Gobierno desde 1969, **los niveles de violencia se redujeron drásticamente respecto del año anterior, especialmente después del acuerdo de alto el fuego que el nuevo Gobierno de Rodrigo Duterte y el NPA firmaron a finales de agosto, coincidiendo con la reanudación de unas conversaciones de paz que se hallaban interrumpidas desde 2012**. A pesar de que el propio líder y fundador del Partido Comunista de Filipinas (PCF) y el NPA, Jose Maria Sison, declaró a finales de mayo su intención de mantener activas las hostilidades hasta el último día de las Administración de Benigno Aquino, ya desde poco después de la victoria de Rodrigo Duterte en las elecciones presidenciales del 9 de mayo se iniciaron los contactos directos entre el propio presidente y altos representantes del NDF –organización que agrupa a varios grupos de inspiración comunista y que negocia en nombre del PCF y el NPA–, de modo que las hostilidades disminuyeron en intensidad desde mediados de año. Más adelante, el 25 de julio, durante su primer mensaje sobre el estado de la nación, Rodrigo Duterte declaró un alto el fuego con el NDF como gesto de buena voluntad y para propiciar una atmósfera de confianza de cara a la primera ronda de conversaciones formales que deberían haberse llevado a cabo a finales de julio, pero que finalmente fueron pospuestas hasta finales de agosto. En el mencionado mensaje, Duterte también llamó al NDF a replicar el cese de hostilidades unilateral del Gobierno. Sin embargo, el NDF no ordenó dicha medida y además, según el Gobierno, fue el responsable de un ataque en el que un soldado murió y otros tres resultaron heridos. Ante la falta de respuesta al ultimátum dado por el Gobierno para que el NDF diera explicaciones sobre lo ocurrido, Duterte ordenó la finalización del alto el fuego el 30 de julio. A pesar de que tras el fin de la tregua por parte del Gobierno se incrementaron notablemente las hostilidades –a principios de agosto, por ejemplo, dos miembros del NPA y cinco soldados murieron y otros 12 militares resultaron heridos en la provincia de Compostela Valley–, a finales de agosto se reanudaron las negociaciones de paz oficiales en Oslo por primera vez en varios años y, entre otras cuestiones, ambas partes pactaron dos acuerdos unilaterales de alto el fuego indefinidos, los primeros de estas características en tres décadas. Previamente, tanto el Gobierno como el NPA habían acordado sendas treguas unilaterales mientras duraran las conversaciones en Oslo. Por su posible incidencia en la dinámica del conflicto, cabe destacar que el Gobierno liberó temporalmente a unos 20 prisioneros del NDF para que participaran en dichas negociaciones, entre los que se hallaban Benito Tiamzon y Wilma Austria, los dos principales líderes del NPA y el PCF en Filipinas y, según algunas fuentes, los máximos responsables de la estrategia militar del grupo.

A pesar de la clara disminución de los niveles de violencia en la segunda mitad del año, en numerosas ocasiones ambas partes se criticaron por violar el acuerdo de alto el fuego firmado en agosto y cruzaron numerosas acusaciones. Así, pocos días después de que el propio presidente instara al NPA a no utilizar minas antipersona, la cúpula del grupo hizo pública su orden de incrementar los ataques con explosivos detonados a distancia por considerar que este tipo de armamento no está prohibido por las Convenciones de Ginebra ni por el Tratado de Ottawa. Por otra parte, durante las elecciones presidenciales el Gobierno acusó al NPA de extorsionar a los candidatos para permitirles hacer campaña. Por su parte, el NPA acusó a las Fuerzas Armadas de cometer numerosas violaciones de derechos humanos en el marco de su política contrainsurgente y de aprovechar la campaña contra las drogas que inició Duterte tras llegar a la presidencia –y que a finales de año había provocado la muerte de miles de personas– para socavar el grupo y emprender operaciones militares y policiales en áreas de control o influencia del NPA. En la misma línea, a finales de diciembre, con motivo de la conmemoración del 48º aniversario de la creación del Partido Comunista de Filipinas –que congregó a unas 15.000 personas en la ciudad de Davao (de la que Duterte había sido alcalde durante muchos años)–, uno de los principales líderes del partido, Luis Jalandoni, advirtió que el NPA no dejará las armas aunque esté negociando con el Gobierno y que el Partido Comunista de Filipinas se verá obligado a poner fin a su tregua unilateral si el Gobierno sigue cometiendo violaciones de los derechos humanos y sigue violando su propia tregua desplegando efectivos militares en áreas en las que opera o controla el NPA. Finalmente, cabe destacar que ambas partes no lograron firmar un acuerdo bilateral indefinido, tal y como habían pactado durante la primera ronda de conversaciones formales en agosto, por el desacuerdo entre en NPA y el Gobierno sobre el número y los tempos de la liberación de presos políticos. A pesar de ello, el Gobierno asistió por primera vez a la mencionada conmemoración y, como ya es tradicional, decretó una tregua coincidiendo con las fechas navideñas.

Filipinas (Mindanao)[86]	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:
La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por vez primera un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

Durante el 2016 **la violencia se intensificó en Mindanao y el conflicto armado se tornó mucho más complejo por la mayor coordinación entre grupos armados islamistas, por la creciente presencia de ISIS en la región y por la posible interacción entre la campaña contrainsurgente del Gobierno y la campaña contra las drogas** emprendida por la nueva Administración de Rodrigo Duterte –que, según algunas fuentes, habría provocado la muerte de unas 6.000 personas solamente en la segunda mitad del año– después de que Manila acusara a algunos grupos armados de estar involucrados en el narcotráfico. En varios momentos del año el Gobierno reconoció la gravedad de la situación y, a principios de 2017, las Fuerzas Armadas declararon haber emprendido el mayor despliegue militar de su historia en Mindanao (con 22.500 tropas, 8.000 de ellas en Sulu, el principal bastión de Abu Sayyaf) y se comprometieron a derrotar en seis meses a ISIS y a los grupos a los que consideran actualmente las principales amenazas a la seguridad: Abu Sayyaf, BIFF, el grupo Maute y, en menor medida, Ansarul Khilafah Mindanao. Además de estos cuatro grupos que han tenido una mayor preponderancia durante el 2016, algunos analistas sostienen que recientemente ha habido hasta 16 organizaciones que han jurado lealtad y obediencia a ISIS. Cabe destacar que tanto el MILF, que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en 2014, como la facción mayoritaria del MNLF, que firmó un acuerdo de paz en 1996, se comprometieron en varias ocasiones a auxiliar al Gobierno en su lucha contra algunos de estos grupos. El MNLF, por ejemplo, sufrió varias bajas en distintos enfrentamientos con Abu Sayyaf en la provincia de Sulu en los meses de febrero, abril, agosto y septiembre. Por su parte, el MILF activó los mecanismos de coordinación con el Gobierno (como el Joint Peace and Security Team, el Ad-Hoc Joint Action Group o el Coordinating Committee for the Cessation of Hostilities) para facilitar las tareas de contrainsurgencia del Gobierno en algunos de sus bastiones históricos en los que operan varios de los mencionados grupos islamistas. En cuanto a ISIS, durante 2016 reivindicó por primera vez un atentado de envergadura –18 soldados murieron y más de 50 resultaron heridos en abril en la región de Basilan, lo que significó el incidente armado más letal para el Ejército desde 2011– y advirtió sobre su intención de incrementar su presencia y ataques en Filipinas. En este sentido, durante el año designó a un líder en la región –Isnilon Hapilon, un dirigente histórico de Abu Sayyaf que lideraba la facción del grupo en Basilan pero que en 2014 juró lealtad a ISIS y a finales de 2015 se escindió de Abu Sayyaf para crear o fortalecer la estructura de ISIS en Filipinas–. Además, ISIS advirtió que cuatro organizaciones armadas de Mindanao –Ansar al Shariah, Marakah al Ansar; Ansar al Kilafah y al Harakatul al Islamiyah– habían convergido bajo la autoridad de Hapilon; reconoció oficialmente la lealtad y obediencia hecha pública por numerosos grupos en Filipinas en los últimos años; anunció su intención de crear una provincia (*wilayat*) del califato en la región, declaró disponer de 10 batallones de combatientes en cinco localizaciones diferentes del país y aseguró haber provocado la muerte de 289 personas desde abril de 2015.

La violencia se intensificó en Mindanao y el conflicto armado se tornó mucho más complejo por la mayor coordinación entre grupos armados islamistas y por la creciente presencia de ISIS en la región

En cuanto a la actividad armada de grupos que han declarado su lealtad o incluso su pertenencia a ISIS, cabe destacar el **incremento de los ataques y los secuestros por parte de Abu Sayyaf**. A mediados de noviembre, el Gobierno declaró que unos 130 combatientes de Abu Sayyaf habían muerto y más de 100 habían sido detenidos desde principios de julio. Manila reconoció que solamente en los 100 primeros días de gobierno de

86. En la edición anterior del informe *Alerta!* el conflicto armado en Mindanao se abordaba desde dos casos: Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf) y Filipinas (Mindanao-BIFF).

Duterte había llevado a cabo 579 operaciones militares en Sulu y había librado 54 enfrentamientos directos con Abu Sayyaf. La determinación del Gobierno para erradicar a este grupo no solamente tiene que ver con el alto número de ataques que lleva a cabo, sino con el incremento sustancial de los secuestros. A pesar de que durante el 2016 Abu Sayyaf liberó a numerosas personas (obteniendo, según el Gobierno, más de siete millones de dólares en los siete primeros meses del año), a principios de 2017 el grupo seguía teniendo en su haber a 27 rehenes, dos terceras partes de los cuales extranjeros. Además, ante el incremento de los ataques de Abu Sayyaf a navíos que navegaban por el Mar de Célebes y el Mar de Sulu y ante la constatación de que Abu Sayyaf tiene una mayor capacidad de operar cada vez más lejos de las costas del archipiélago de Sulu, los Gobiernos de Filipinas, Malasia e Indonesia firmaron un acuerdo para incrementar la cooperación militar y fortalecer la seguridad de la región. En cuanto al BIFF, a pesar de que las Fuerzas Armadas habían señalado que la muerte en abril de 2015 de su líder y fundador, Ameril Umbra Kato, había provocado el debilitamiento y la fragmentación en pequeñas unidades por disputas entre varios de sus comandantes, lo cierto es que el grupo siguió llevando a cabo ataques frecuentes y de una cierta envergadura –como un ataque a principios de 2017 a la cárcel distrital de Cotobato Norte que provocó la fuga de 158 reos, la mayor de la historia del país–. Además, el BIFF siguió tejiendo alianzas con otros grupos locales, como el denominado grupo Maute, y ampliando sus capacidades militares, como así lo evidenciaría, según fuentes de inteligencia, la participación de unos 100 miembros del BIFF durante un mes y medio en un curso de fabricación y manipulación de artefactos explosivos. Se estima que el grupo dispone de entre 500 y 1.000 miembros, según las fuentes, y que como mínimo 80 combatientes murieron durante el año, especialmente en Maguindanao, su principal bastión. Cabe destacar que a finales de julio, una facción del BIFF declaró haber asumido el control del grupo en detrimento del actual líder y sustituto de Umbra Kato, Ismael Abubakar (alias Imam Bongos), por considerar que la actual cúpula se hallaba demasiado cercana a los postulados de ISIS, pero ello fue desmentido por el portavoz oficial del BIFF.

Uno de los grupos más activos militarmente y que generó mayor preocupación fue el autodenominado Estado Islámico de Lanao o Dawlah Islamiyah, al que el Gobierno se refiere como grupo Maute, por estar liderado por los hermanos Abdullah y Omar Maute. Ya hace algunos años el grupo había jurado su lealtad a ISIS y utilizaba su simbología y terminología, pero algunos de los hechos que le confirieron notoriedad durante el 2016 fueron su participación en un atentado en un mercado de la ciudad de Davao (Mindanao) en diciembre en el que 15 personas murieron y otras 70 resultaron heridas; la ocupación temporal de la ciudad de Butig, durante la que colgaron la bandera de ISIS en varios edificios; o el hecho de que el propio Duterte reconociera abiertamente los vínculos del grupo Maute con ISIS. Al finalizar el año el Gobierno declaró que más de 160 combatientes del grupo Maute habían sido abatidos durante 2016, especialmente en su principal feudo, Lanao el Sur, y a la vez advirtió que el grupo poseía la capacidad para perpetrar atentados en varias localidades de Mindanao y también en otras partes del país, como así lo atestiguarían la colocación de un artefacto explosivo en las cercanías de la embajada estadounidense en Manila –que finalmente no estalló– o el atentado con explosivos en diciembre en Leyte (provincia de Visayas Oriental), en la que 34 personas resultaron heridas. Finalmente, cabe destacar la muerte a principios de enero de 2017 del líder y fundador de Ansarul Khilafah Mindanao, Mohammad Jafaar Maguid –también conocido como Abu Shareefa al-Filibini o Tokboy–. Según el Gobierno, su muerte podría provocar el desmembramiento de Ansarul Khilafah Mindanao, una organización que ha jurado lealtad a ISIS, que según fuentes de inteligencia mantiene una estrecha colaboración con el BIFF y el grupo Maute y sobre la que pesan sospechas de haber participado en varios atentados con artefactos explosivos en 2016.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, SSA-N KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, SSNPLO, KIO, ABSDF, AA, TNLA, HaY, MNDAA)
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:
Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

El conflicto armado que enfrenta a diferentes grupos armados con las fuerzas de seguridad permaneció activo todo el año con continuos enfrentamientos en diferentes estados, tanto entre insurgentes y fuerzas de seguridad como entre diferentes grupos armados entre sí. A pesar del inicio del proceso de diálogo político con los grupos firmantes del acuerdo de alto el fuego, se repitieron enfrentamientos protagonizados

fundamentalmente por aquellos grupos armados que no se adhirieron al acuerdo de alto el fuego nacional firmado en 2015.[87] Los territorios más afectados por la violencia fueron el estado Shan, en el que se enfrentaron las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición SSA-N; el estado Kachin, que registró enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición KIA; el estado Rakhine, en el que hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición AA y el recién surgido grupo armado HaY; y el estado Kayin en el que se enfrentaron las fuerzas de seguridad gubernamentales, apoyadas por la guardia fronteriza, con una facción del grupo armado DKBA. Además, a lo largo de todo el año otros grupos armados como el TNLA y el MNDAA también protagonizaron choques violentos con las fuerzas de seguridad. El conflicto armado tuvo un grave impacto sobre la población local. Decenas de miles de personas se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares huyendo a otras zonas del país o buscando refugio en los países vecinos como China, Bangladesh o Tailandia. Además, el acceso de las organizaciones humanitarias a la población afectada por el conflicto estuvo severamente restringido en varios momentos del año, comprometiendo la seguridad alimentaria de amplios grupos de población. Organizaciones humanitarias señalaron que el bloqueo estaba siendo incluso más severo que los que se produjeron con el anterior Gobierno.

Durante meses las fuerzas de seguridad atacaron posiciones del KIA en los estados Kachin y Shan, tratando de recuperar el control de zonas administradas por el grupo mediante bombardeos y forzando el desplazmiento de miles de personas. Al finalizar el año se intensificaron los enfrentamientos con una gran ofensiva de las Fuerzas Armadas contra el KIA en el estado Kachin. En el estado Shan también fueron intensos los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la conocida como "Alianza del norte", integrada por los grupos armados KIA, TNLA, MNDAA y AA. En septiembre se produjeron graves enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la facción del grupo armado DKBA Na Ma Kyar, en el estado Karen, que llevaron a más de 3.000 personas a huir de sus hogares, refugiándose en Tailandia algunas de ellas. Los enfrentamientos tendrían como objetivo capturar al líder del grupo, Saw Saw Aung, e iniciar una ofensiva a gran escala contra la organización insurgente. Algunas fuentes han señalado que los enfrentamientos en esta zona tendrían como objetivo controlar territorio de zonas cercanas a las bases del grupo armado de oposición KNU (uno de los firmantes del acuerdo de alto el fuego nacional) y en las que estaría prevista la construcción de una presa, ahora encallada y a la que el KNU se opone. Además, desde el mes de febrero se registraron choques entre los grupos armados de oposición TNLA y SSA-S. En octubre el conflicto armado se expandió al estado Rakhine con la aparición de un nuevo grupo insurgente, HaY, cuyo objetivo era denunciar y poner fin a la persecución de la población rohingya en el estado. Un grupo de 250 insurgentes de HaY llevó a cabo varios ataques contra tres puestos policiales fronterizos el 9 de octubre, causando la muerte de nueve policías y de ocho insurgentes y haciéndose con una gran cantidad de armas y municiones. Como consecuencia de las operaciones de seguridad que se iniciaron tras el ataque otras 22 personas murieron, varias de ellas bajo custodia. Miles de personas se desplazaron como consecuencia de los operativos de seguridad y se produjo un grave incremento de la tensión entre las comunidades budista y musulmana. Numerosos hombres civiles se desplazaron de sus hogares temiendo ser acusados de insurgentes y las fuerzas de seguridad forzaron a más de 2.000 personas a abandonar sus poblaciones. En noviembre se registraron nuevos episodios de violencia, después de una nueva ofensiva insurgente en la que murió un alto mando militar, lo que desembocó en una operación de seguridad aérea que causó decenas de víctimas mortales civiles y forzó nuevos desplazamientos de población. Naciones Unidas señaló en diciembre que las denuncias sobre abusos contra la población civil, incluyendo asesinatos y violaciones, tenían un carácter diario.

La aparición del grupo insurgente rohingya HaY agravó la situación en el estado Rakhine de Myanmar

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:
El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Patani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

87. Véase el resumen sobre Myanmar en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Aunque el Gobierno no ofreció cifras oficiales sobre las tasas de mortalidad vinculadas al conflicto armado en el sur del país, algunos analistas señalaron que **los niveles de violencia siguieron disminuyendo en 2016, en sintonía con la tendencia que se observa desde el año 2009**. A mediados de año, un analista señaló que entre enero y julio la media de personas fallecidas cada mes era de alrededor de 12 y de 32 el número de personas heridas. Sin embargo, hubo meses en los que los niveles de violencia fueron superiores, como el mes de agosto, en el que 24 personas murieron y otras 73 resultaron heridas en los 137 episodios de violencia que se registraron. Para contextualizar la magnitud de estos datos, cabe tener en cuenta que a principios de 2016 el centro de investigación Deep South Watch señaló que el número de víctimas mortales en 2015 había sido de 246, una cifra claramente inferior a las 341 del año anterior y a las 456 del 2013. En 2015 el número de personas heridas a causa del conflicto armado también descendió de las 987 en 2013 a las 544 en 2015. Según este centro de investigación, **en los 12 años de conflicto armado, 6.543 personas han muerto (una media de 545 cada año) y 11.919 han resultado heridas (993 cada año) en los casi 15.400 episodios de violencia registrados** (una media de 1.281 al año, mientras que en 2015 se contabilizaron 674 episodios). En cuanto a las víctimas del conflicto, se estima que los patrones no se han alterado significativamente en los últimos años, siendo la población civil la más afectada. En 2016, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado suponían un 24% de las víctimas mortales y un 53% de las personas heridas. En varias ocasiones el Gobierno ha señalado que la disminución sostenida de los niveles de violencia se debe a su gestión del conflicto, tanto en el aspecto militar como en las políticas de desarrollo que ha impulsado en los últimos años, así como al proceso de diálogo en curso entre Bangkok y MARA Patani, una organización que incluye a los principales grupos insurgentes en el sur del país. Sin embargo, algunos analistas sostienen que la evolución de los niveles y patrones de violencia no solamente tienen que ver con la política contrainsurgente de Bangkok, sino también con decisiones racionales y estratégicas de los grupos insurgentes, como calcular qué niveles de violencia infligir para mantener la atención del Estado y a la vez no erosionar en exceso el apoyo social que puedan tener o bien replegarse estratégicamente en función de la coyuntura política (golpes de Estado, cambios de gobierno, protestas en Bangkok, evolución de las conversaciones de paz, etc.) o de cuestiones logísticas y de abastecimiento de material bélico.

En cuanto a los episodios de violencia más graves del año, cabe destacar los 15 ataques simultáneos que ocurrieron en las provincias de Yala y Narathiwat el 13 y 14 de marzo, coincidiendo con el 56º aniversario de la fundación del BRN –el grupo que según el Gobierno y la mayoría de analistas está detrás de la mayor parte de los episodios de violencia en las provincias sureñas de mayoría musulmana–; los ataques cometidos durante el Ramadán, en los que 32 personas murieron y otras 61 resultaron heridas; el estallido de una bomba en un mercado nocturno de Pattani a finales de octubre, en el que 21 personas resultaron heridas; un atentado con coche bomba en Pattani en el que 12 policías resultaron heridos; y, especialmente, los 12 ataques simultáneos con artefactos explosivos los días 11 y 12 de agosto en varios lugares considerados turísticos de ocho provincias del sur del país, en los que cuatro personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas. Previamente, los días 6 y 7 de agosto habían estallado 35 artefactos explosivos en el sur del país, aunque sin ocasionar víctimas mortales, mientras que a finales de mes una persona murió y otras 30 resultaron heridas tras el estallido de dos bombas en un hotel en la provincia de Pattani. Estos últimos atentados de mediados de agosto, los más graves desde el estallido de una bomba en Bangkok en agosto de 2015 que provocó la muerte de 20 personas, coincidieron con la celebración del cumpleaños de la reina, fecha señalada en Tailandia. El hecho de que la cadena consecutiva de atentados aconteciera solamente unos pocos días después de la aprobación en referéndum de la nueva Constitución impulsada por la Junta Militar hizo sospechar al Gobierno que algunos grupos opositores vinculados al ex primer ministro Thaksin Shinawatra pudieran tener algún tipo de relación con las explosiones, pero finalmente las autoridades tailandesas señalaron que el modus operandi y el tipo de armamento utilizado apuntaban a los grupos armados secesionistas que operan en el sur del país. Aunque ya había habido antecedentes en los que los grupos armados habían llevado a cabo ataques fuera de las tres provincias de mayoría musulmana (Yala, Pattani y Narathiwat) y Songhkla, como los atentados en un puesto policial en Phuket en diciembre de 2013 o en Koh Samui en 2015, algunos analistas apuntaron que **los atentados de agosto podrían evidenciar una intención de ampliar el radio de acción de la insurgencia y de atacar deliberadamente objetivos turísticos** (el turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país) para lograr mayor atención o mayores concesiones en la mesa de negociación por parte del Gobierno. Finalmente, cabe destacar que siguieron produciéndose denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en el sur del país, amparadas por leyes de excepcionalidad. En este sentido, en enero tres ONG denunciaron el uso de la tortura contra presuntos insurgentes. Por su parte, también a principios de año el Gobierno declaró estar investigando la existencia de vínculos de los grupos insurgentes con organizaciones foráneas, después de que presuntos miembros de Estado Islámico hubieran visitado la región para fomentar el extremismo religioso y la adhesión a ISIS.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Identidad, Autogobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:
Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víctor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

El conflicto armado en el este de Ucrania asistió a una clara reducción de la mortalidad y de los enfrentamientos, si bien continuó sin perspectivas de resolución.[88] En términos globales, entre enero y mediados de noviembre murieron más de 600 personas, incluyendo Fuerzas Armadas ucranianas, fuerzas de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y civiles, y hubo en torno a 2.000 heridos, en contraste con los más de 4.400 fallecidos y 11.000 heridos de 2015. Además, 82 de los fallecidos fueron civiles (227 civiles fallecidos en 2015). La cifra acumulada de víctimas combatientes y civiles desde el inicio de la guerra en abril de 2014 se eleva a 9.733 fallecidos –incluyendo en torno a 2.000 civiles– y 22.720 heridos, según los balances de la Oficina del ACNUDH de mediados de noviembre. Además, en 2016 se desplazaron internamente 106.000 personas, lo que sumado al desplazamiento interno previo supuso una cifra total de 1,7 millones de personas desplazadas internas, según cifras de mediados de 2016.[89] Durante el año se registraron hostilidades, especialmente en áreas de Donetsk y en menor medida de Lugansk, pese a los sucesivos altos el fuego.[90] La misión de la OSCE detectó en abril un incremento del uso de armamento pesado y la Oficina del ACNUDH alertó de graves violaciones del alto el fuego desde mediados de ese mes. Se asistió a una escalada entre junio y agosto, con un aumento de la violencia en torno a zonas residenciales en localidades como Avdiikvka y Mariinka. **El acercamiento de posiciones militares de las partes en conflicto generó alarmas, por los riesgos de la vuelta a una guerra de gran escala.** La consecución de una tregua que entró en vigor el 1 de septiembre con motivo del curso escolar, y de un acuerdo para la creación de diversas zonas desmilitarizadas contribuyeron a desescalar la situación.

Se asistió a una reducción significativa de la violencia y las víctimas mortales en la guerra en Ucrania, si bien el proceso de paz continuó sin avances

No obstante, la contienda empeoró de nuevo a partir de octubre, multiplicándose las violaciones del alto el fuego y el uso de armamento no permitido por los acuerdos de paz. Los bombardeos en noviembre se concentraron en áreas como el aeropuerto de Donetsk, Yasynuvata y Adviivka; zonas al norte y oeste de Horlivka; y en torno al eje estratégico de Debaltsevo y Svitlodarsk; zonas al este y noreste de Mariupol; y en el oeste de Lugansk. Como en 2015, **se alcanzó una tregua en diciembre, que entró en vigor el día 24, si bien se denunciaron incidentes en fechas posteriores.** Tanto en áreas bajo control del Gobierno como de las fuerzas rebeldes se registraron violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de violencia sexual en lugares de cruce entre ambos territorios. Por otra parte, medios de comunicación apuntaron a un supuesto incremento de discrepancias dentro de las filas de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. En paralelo, las fuerzas separatistas hicieron frente a diversas bajas de varios altos miembros, como Dmitry Kargayev, asesor del líder rebelde de Lugansk, y Arsen Pavlov (alias Motorola), uno de los líderes de Donetsk. Se informó también de intentos de asesinato de los líderes separatistas Alexander Zakharchenko (Donetsk) e Igor Plotnitsky (Lugansk). Las autoridades rebeldes acusaron a Ucrania de estar detrás de los incidentes. **El conflicto armado transcurrió en un contexto de crisis interna y tensión internacional entre Ucrania y Rusia relativa a Crimea, así como entre instituciones euroatlánticas (diversos gobiernos europeos, OTAN) y Rusia.**[91] Entre otras circunstancias, la OTAN aprobó en julio el despliegue de cuatro batallones en los países bálticos y Polonia y otras medidas en el Mar Negro, el mayor refuerzo de defensa colectiva desde el fin de la Guerra Fría; y Rusia desplegó en agosto en Crimea un sistema avanzado de defensa antimisiles.[92]

88. Véase el resumen sobre Ucrania en el capítulo 3 (Procesos de paz).
89. IDMC, *Ukraine*, Global Internal Displacement Database, IDMC.
90. Véase el resumen sobre Ucrania en el capítulo 3 (Procesos de paz).
91. Véase el resumen sobre Ucrania – Rusia en el capítulo 2 (Crisis socio-políticas).
92. Véase el resumen sobre Ucrania – Rusia en el capítulo 2 (Tensiones).

Rusia y Cáucaso

Rusia (Daguestán)	
Inicio:	2010
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:
Daguestán, la república más extensa, poblada y con mayor diversidad étnica del norte del Cáucaso, afronta desde finales de los años noventa un incremento de la conflictividad. La insurgencia armada de corte islamista salafista, que defiende la creación de un Estado islámico en el norte del Cáucaso, se enfrenta a las autoridades locales y federales, en un contexto de atentados periódicos y operaciones de contrainsurgencia. La oposición armada se ha articulado en torno a diversas estructuras, como la red de unidades armadas y de carácter islamista conocida como Sharia Jammat, y posteriormente a través de Vilayat Daguestán, ambas integradas en la insurgencia del norte del Cáucaso (Emirato Caucásico). A partir de finales de 2014 diversos comandantes de Daguestán y el norte del Cáucaso proclamaron su lealtad a ISIS, escindiéndose de Emirato Caucásico y estableciendo una rama caucásica vinculada a ISIS (Vilayat Kavkaz). Además, una parte de la insurgencia se ha desplazado a Siria e Iraq, uniéndose a diversos grupos armados. La violencia armada en Daguestán es resultado de un cúmulo de factores, incluyendo la regionalización de la insurgencia islamista procedente de Chechenia así como el clima local en Daguestán de violaciones de derechos humanos, a menudo enmarcadas en la "lucha contra el terrorismo". Todo ello en un contexto social y político frágil, de malestar social por los abusos de poder y la corrupción y los elevados índices de desempleo y pobreza, pese a la riqueza de recursos naturales. A ello se añaden tensiones interétnicas, rivalidades por el poder político y violencia de corte criminal.

La violencia vinculada al conflicto armado entre fuerzas armadas locales y federales y la insurgencia islamista en Daguestán se mantuvo en niveles reducidos. Así, en 2016 murieron en torno a 140 personas –según estimaciones de Caucasian Knot–, cifra ligeramente superior a la del año anterior (126 víctimas mortales en 2015), pero inferior a las de años previos (en torno a 200 en 2014, 340 en 2013, 405 en 2012).[93] La mayor parte de víctimas mortales fueron insurgentes (más de 110 insurgentes, frente a una veintena de integrantes de las fuerzas de seguridad, y menos de una decena de civiles). Se sucedieron los hechos de violencia, incluyendo ataques insurgentes en diversas localidades y operaciones contrainsurgentes. El grupo armado ISIS reivindicó diversos ataques, en línea con la adscripción reciente a ISIS de gran parte de la insurgencia del norte del Cáucaso. Entre los incidentes reivindicados por ISIS, cabe mencionar un ataque con coche bomba en el distrito de Derbent en febrero hirió a una docena de personas y causó varias víctimas mortales. Asimismo, en enfrentamientos en mayo, más de una quincena de policías resultaron heridos y varios policías e insurgentes murieron, hechos en los que ISIS se atribuyó participación. En diciembre **los servicios de seguridad rusos afirmaron haber matado al líder de la rama de ISIS en el Cáucaso, Rustam Aselderov** (alias Sheikh Abu Mohammad al-Qadari), y a varios insurgentes en una operación junto a la capital daguestaní, Makhachkala. Aselderov había proclamado su lealtad a ISIS en diciembre de 2014, y fue nombrado emir del norte del Cáucaso. Se le atribuyen atentados como un doble ataque que mató a 34 personas en la ciudad rusa de Volgograd en 2013, cometido bajo su militancia anterior en la insurgencia Emirato Cáucasico.

Por otra parte, durante el año **las autoridades continuaron con medidas de presión y hostigamiento contra sectores salafistas de la población civil**, acusados con frecuencia de pertenencia o colaboración con la insurgencia, sin fundamento legal, y sometidos a prácticas como detenciones e interrogatorios, arrestos masivos, registros de mezquitas y destrucción de propiedad, como denunciaron organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. Así lo alertó Human Rights Watch en su informe anual que hace referencia al periodo 2016.[94] Diversas organizaciones y activistas han denunciado también en los últimos años prácticas abusivas como falsos positivos (asesinatos de civiles varones jóvenes encubiertos como asesinatos de insurgentes) a manos de miembros de las fuerzas de seguridad. En 2016 se produjeron nuevas detenciones y acusaciones contra población civil salafista. Entre otros hechos, fue detenido en febrero un imam salafista en Derbent. Ese mismo mes el cierre de otra mezquita en Jasaviurt desencadenó protestas de varios miles de personas. A finales de octubre se detuvo a medio centenar de personas junto a una mezquita en la capital.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y

93. Caucasian Knot, *Infographics. The Statistics of the Number of Victims in the North Caucasian Federal District Regions for the Period of 6 years*, CK.
94. Human Rights Watch, *World Report 2017. Events of 2016*, HRW, 2017.

el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años 80 ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

Se deterioró gravemente el conflicto armado entre el Estado turco y la insurgencia kurda, a lo que se añadieron otros frentes de conflictividad en el país, como un intento de golpe de Estado militar y atentados de gran escala atribuidos a ISIS. En 2016 murieron a causa del conflicto al menos 1.830 personas, según datos de International Crisis Group (260 civiles, 777 combatientes del PKK, 654 miembros de las fuerzas de seguridad y 139 jóvenes sin afiliación clara).[95] Desde el reinicio de la guerra en julio de 2015, el total de muertes por el conflicto se eleva a 2.495 personas.[96] Durante 2016 continuaron las operaciones especiales militares y policiales en núcleos urbanos del sudeste de Turquía, ampliadas a nuevos distritos en febrero y marzo. La guerra urbana supuso un incremento marcado de víctimas mortales entre febrero y mayo, y el desplazamiento de decenas de miles de personas. El Estado turco desplegó 20.000 fuerzas de seguridad adicionales en el sudeste en marzo. Las autoridades anunciaron en junio el fin de las operaciones urbanas y el inicio de una fase de reconstrucción. El movimiento kurdo, por su parte, denunció la continuación de operaciones en diversos distritos, así como la política de demolición y expropiación forzosa de edificios en el sudeste y de destrucción de infraestructura, desplazamiento y bloqueo de ayuda humanitaria. **Ya desde mayo, y especialmente en la segunda mitad del año, se redujo la dimensión urbana de la guerra y recrudeció la violencia en áreas rurales**, con protagonismo de la rama militar del PKK (HPG). Continuaron los bombardeos del Ejército contra el PKK en el sudeste y norte de Iraq. Entre los múltiples hechos de violencia vinculados al PKK, 217 personas (incluyendo 60 civiles) resultaron heridas por la explosión de un coche bomba contra una comisaría en Elazig (provincia homónima) en agosto, en un ataque reivindicado por el PKK; otros 73 resultaron heridos en otro atentado con coche bomba contra un edificio policial en Ipekyolu (provincia de Van) en agosto; un ataque con camión bomba contra un puesto policial en Cizre en agosto mató a 11 policías e hirió a 78 personas, tras lo que el Gobierno declaró la guerra total contra el PKK; 53 personas resultaron heridas a causa de otro ataque con coche bomba contra un control policial junto a la sede del AKP en Van al inicio de la festividad musulmana de Eid al-Adha. Así, los ataques del PKK se dirigieron mayoritariamente contra objetivos policiales y militares, con impactos también en la población civil. El aumento de las acciones del PKK fue interpretado como una estrategia de aprovechar el vacío de seguridad tras el fallido golpe de Estado en Turquía en julio, al que siguieron purgas masivas en las fuerzas de seguridad.

La situación de conflictividad en Turquía asistió a una escalada, con un grave deterioro del conflicto armado Turquía-PKK, que causó más de un millar de víctimas mortales

El conflicto también escaló de la mano de los ataques de gran escala del grupo TAK (considerado una escisión del PKK por algunas fuentes, y un grupo vinculado al PKK por otras), con más de un centenar de víctimas mortales y más de medio millar de personas heridas. Los atentados del TAK en 2016 incluyeron un atentado en febrero contra un autobús militar en Ankara, con 29 muertos y 61 heridos; coche bomba en Ankara en marzo, con 36 muertes y más de un centenar de heridos; atentado contra la Gran Mezquita de Busra, con 13 personas heridas; atentado suicida en Estambul en junio contra un vehículo policial, con 12 muertes (incluyendo 5 civiles) y más de 30 heridos; ataque con bomba junto a una comisaría en Estambul en octubre, con 10 civiles heridos; atentado con coche bomba contra una comisaría en Diyarbakir en noviembre, con 11 muertes y más de un centenar de heridos; doble ataque con bomba junto al estadio de fútbol del club Besiktas en Estambul en diciembre, con 45 muertes y más de 150 heridos; atentado en la provincia de Kayseri (centro) contra un autobús que transportaba soldados de servicio, con 15 soldados muertos y 56 heridos. En paralelo, se produjeron también ataques de supuestos militantes del PKK contra objetivos políticos, con algunas víctimas mortales. También sedes del pro-kurdo HDP fueron objeto de ataques.

Por otra parte, **el conflicto en torno a la cuestión kurda también tuvo una plasmación de grave incremento de la persecución contra sectores no armados del movimiento kurdo**. Así, entre otros hechos, las autoridades turcas intervinieron 28 ayuntamientos en septiembre, reemplazando a alcaldes electos por funcionarios, acusándoles de desviar recursos al PKK; suspendió de su cargo a 11.000 profesores por supuestos vínculos con el grupo; y ordenó el cierre de más de 190 asociaciones, acusadas de los mismos cargos. Además, fueron detenidos los co-alcaldes de Diyarbakir (entre muchos otros alcaldes), los co-líderes

95. International Crisis Group, *Turkey's PKK Conflict: The Raising Toll*.
96. Ibid.

del partido pro-kurdo HDP y numerosos parlamentarios. El movimiento kurdo, cuyos representantes políticos llamaron al diálogo y al silencio de las armas en repetidas ocasiones durante el año, instaron a movilizaciones y "resistencia" en las calles contra las medidas de persecución política y social. El antagonismo militar y político-social entre el Estado y el movimiento se reflejó también en un nuevo plan del Gobierno anunciado en febrero, que descartó el diálogo con el PKK o sectores afines y se centró en cambio en la aniquilación del grupo y en el desmantelamiento de su tejido social. El PKK a su vez amenazó con extender la guerra por el territorio de Turquía y aumentar su intensidad y descartó negociaciones en las condiciones existentes. **El deterioro del conflicto entre Turquía y el PKK transcurrió además en un año convulso para Turquía, con múltiples frentes de conflictividad, incluyendo atentados de gran escala atribuidos a ISIS; el intento de golpe de Estado militar, atribuido al movimiento religioso Hizmet; y otros hechos de violencia política así como violaciones de derechos humanos.**[97] Las dinámicas del conflicto kurdo se vieron también fuertemente influidas por el contexto regional y la guerra en Siria. Turquía inició una intervención militar en su país vecino en agosto, con despliegue de tropas propias y apoyo a grupos armados, con el fin –entre otros objetivos– de frenar los avances del grupo kurdo YPG, vinculado al PKK, y se sumó a las iniciativas diplomáticas de Rusia, presionando para aislar a los actores kurdos sirios, aliados de EEUU. Ankara también desplegó fuerzas en Iraq e intentó implicarse en la ofensiva contra ISIS en Mosul, pese a la negativa de Bagdad. El PKK/KCK, por su parte, trató de consolidar su presencia en Siria e Iraq, de la mano de sus organizaciones regionales.[98]

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita,
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría chií, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha cobrado miles de víctimas mortales y ha provocado también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis han fracasado y las treguas suscritas en los últimos años se han roto sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. En un contexto de internacionalización, el conflicto ha ido adquiriendo tintes sectarios y una dimensión regional.

La situación en Yemen continuó deteriorándose a lo largo del año, con **elevados niveles de violencia que tuvieron un devastador impacto en la población civil.** Según estimaciones de la ONU, el conflicto armado que desde marzo de 2015 enfrenta principalmente a los al-houthistas en alianza con las fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh con las tropas del Gobierno yemení de Abdo Rabbo Mansour Hadi apoyadas por una coalición internacional liderada por Arabia Saudita había causado la muerte de al menos 10.000 personas hasta finales de 2016 (de las cuales unas 6.000 habrían fallecido el año anterior). Se trata, según ha reconocido la agencia humanitaria de la ONU, de estimaciones a la baja a partir de las informaciones procedentes de los centros de salud que han podido continuar documentando las víctimas de la guerra, en un contexto de grave destrucción de las infraestructuras sanitarias producto de las hostilidades. El conflicto armado tuvo otras graves consecuencias, como un **aumento en los niveles de desplazamiento forzado interno –más de tres millones de personas a finales de 2016–, un incremento de las necesidades de ayuda humanitaria –un total de 19 millones de personas, equivalentes a un 80% de la población del país, requería asistencia a finales de año– y un empeoramiento en los niveles de desnutrición**, en un país dependiente en un 90% de la importación de alimentos y con graves problemas de escasez de agua. Según datos de OCHA, medio millón de niños y niñas padecían desnutrición severa y se estima que unos 10.000 menores han muerto de enfermedades prevenibles desde marzo de 2015. Desde principios de 2016 y en diversas ocasiones a lo largo del año, Arabia Saudita fue señalada –entre otros por un panel de expertos de la ONU y otras investigaciones– por su responsabilidad en ataques sistemáticos a civiles en

97. Véase el resumen sobre Turquía en el capítulo 2 (Tensiones).
98. Véase el resumen sobre Siria e Iraq en este capítulo y sobre Iraq (Kurdistán) en el capítulo 2 (Tensiones).

la guerra de Yemen. Según un informe de Yemen Data Project dado a conocer en septiembre, uno de cada tres ataques de la coalición internacional liderada por Riad había tenido como objetivos blancos civiles, entre ellos escuelas, hospitales, mezquitas, mercados, zonas residenciales y otras infraestructuras. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también encontró indicios creíbles sobre el uso de bombas de dispersión por las fuerzas de la coalición.[99] La ONU y organizaciones de derechos humanos también denunciaron a las fuerzas al-houthistas por abusos como ataques indiscriminados en áreas civiles, uso de minas y agresiones con francotiradores. Asimismo, a lo largo de 2016 se intensificaron las denuncias sobre el reclutamiento de menores soldados en el marco del conflicto armado. De los 559 casos documentados entre julio de 2015 y mayo de 2016, la mayoría habían sido reclutados por los Comités Populares vinculados a las fuerzas al-houthistas.

Desde marzo de 2015 y hasta finales de 2016, el conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Hadi, apoyado por Arabia Saudita, había causado al menos 10.000 víctimas mortales

En el plano militar, no se produjeron cambios significativos en los frentes de combate**. Durante el primer semestre las hostilidades transcurrieron en paralelo a los intentos por encauzar las negociaciones de paz auspiciadas por la ONU**.[100] El cese el fuego que había sido acordado a finales de diciembre de 2015 tras una ronda de conversaciones en Suiza no fue respetado por las partes y derivó en una escalada de enfrentamientos a principios de año. En los meses siguientes un nuevo acuerdo de tregua permitió el inicio de negociaciones en Kuwait, en abril, así como algunos intercambios de prisioneros entre las fuerzas al-houthistas y Arabia Saudita. No obstante, los combates persistieron y fueron especialmente intensos en algunas zonas, como Taiz, ciudad asediada por las fuerzas al-houthistas desde 2015. Adicionalmente, se produjeron enfrentamientos y ofensivas en la capital, Sanaa, en Maarib, Nihm, Lahj, Shabwa y Hajjah. En esta última provincia se produjo uno de los episodios más cruentos del año, cuando dos ataques aéreos de la coalición saudí en un mercado provocaron la muerte de 120 civiles, incluyendo 22 menores, en marzo. El segundo semestre estuvo marcado por un aumento de la violencia tras la ruptura de las negociaciones, en agosto. La coalición liderada por Riad retomó sus ofensivas aéreas contra Sanaa y otras áreas del norte del país, mientras que las fuerzas al-houthistas intensificaron sus ataques contra Arabia Saudita, que afectaron principalmente las zonas fronterizas causando más de un centenar de víctimas saudíes hasta finales de 2016. En este contexto, en octubre, un nuevo ataque aéreo de la coalición saudita perpetrado contra un funeral en Sanaa causó la muerte a más de 140 personas y dejó heridas a otras 600. La ofensiva se produjo durante la ceremonia fúnebre del padre de un ministro del bando al-houthista, provocó numerosas bajas entre representantes políticos, militares y tribales y llevó a analistas a advertir sobre su impacto en los esfuerzos por reactivar las negociaciones. Tras la ofensiva los al-houthistas lanzaron dos misiles contra territorio saudí, uno de los cuales alcanzó la base militar de Taif ubicada a más de 500 kilómetros de la frontera. En este contexto, EEUU lanzó su primer ataque sobre territorios controlados por los al-houthistas que destruyó tres radares en la costa yemení después de un presunto ataque fallido contra un barco estadounidense apostado en el Mar Rojo. No obstante, los al-houthistas negaron tener responsabilidad en este ataque y acusaron a EEUU de utilizarlo como excusa. Washington descartó tener la intención de implicarse de manera más directa en este conflicto. A finales de año, las hostilidades se centraban en Taiz, Hodeida y los alrededores de Sanaa. Los al-houthistas mantenían el control de la capital, la zona norte del país y la mayor parte de la costa del Mar Rojo. El resto del país se encontraba bajo el control nominal del Gobierno de Hadi, con sede en Adén (sur). No obstante, la zona meridional se vio afectada por una intensa actividad de grupos como AQPA e ISIS, que durante el año se enfrentaron a las fuerzas de Hadi y protagonizaron múltiples ataques contra las fuerzas de seguridad.[101]

Cabe destacar que tras la consternación causada por el ataque saudí al funeral en Sanaa –que Arabia Saudita atribuyó a una información errónea que identificó el sitio como un objetivo militar– volvieron a intensificarse las críticas a la cooperación occidental con la coalición liderada por Riad. Tras la ofensiva, EEUU advirtió que su cooperación con el reino no suponía un "cheque en blanco" y que revisaría su asistencia militar y logística a la coalición. Pese a los flagrantes indicios de violaciones al derecho internacional humanitario y el elevado número de víctimas civiles en el conflicto yemení, EEUU y varios países europeos –entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania o España– continuaron proveyendo armas, apoyo logístico y/o de inteligencia a Arabia Saudita o pretendían continuar proporcionando arsenales al país, que incrementó en un 275% sus compras de armas en el período 2011-2015, según los datos de SIPRI. Sólo EEUU había vendido cerca de 22.200 millones de dólares en armas a Riad desde el inicio de la campaña militar en marzo de 2015. Paralelamente, continuaron las versiones sobre el presunto apoyo iraní a los al-houthistas –incluyendo informaciones sobre provisión de armas– sin que pudiera confirmarse con claridad su alcance. Cabe destacar también que los intentos por forzar una investigación independiente de los abusos contra civiles en Yemen se vieron obstaculizados. El Gobierno holandés solicitó una

99. Human Rights Council, Situation of human rights in Yemen: Report of the UN High Commissioner for Human Rights, A/HRC/33/38, 4 de agosto de 2016.
100. Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 3 (Procesos de paz).
101. Véase el resumen sobre Yemen (AQPA) en este capítulo.

acción en esta línea en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fue bloqueada por Reino Unido y derivó en una propuesta menos ambiciosa presentada por Eslovaquia en nombre de la UE. Arabia Saudita también presionó para ser excluida de una lista de países que violan los derechos de los menores después de que un informe de la ONU determinara que la coalición liderada por Riad era responsable del 60% de las muertes de niños y niñas en el conflicto yemení.

Yemen (AQPA)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:
Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, en los últimos años el Gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para dedicar esfuerzos a la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh, AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. A partir de 2011 grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica)y desde mediados de 2014 AQPA se vio crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que avanzaron posiciones desde el norte de Yemen. AQPA ha aprovechado el clima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 –en el marco del conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi– y se ha enfrentado a ambos bandos. Este escenario también ha favorecido el ascenso de ISIS, que ha comenzado a reivindicar diversas acciones en el país.

Siguiendo la tendencia del año anterior, a lo largo de 2016 **AQPA y también la reciente filial de ISIS en Yemen continuaron aprovechando el clima general de caos y violencia en el país para persistir en sus acciones, principalmente en la zona sur y este.**[102] Si en 2015 se produjeron diversos enfrentamientos con las fuerzas al-houthistas que intentaban avanzar a esta región del país, en 2016 se registraron combates con fuerzas anti al-houthistas vinculadas al Gobierno de Hadi instalado en Adén, así como numerosas ofensivas y ataques explosivos contra miembros de las fuerzas de seguridad y reclutas. Durante el primer trimestre del año se observó una expansión de la actividad de estos grupos. ISIS reivindicó varios ataques suicidas, uno de los cuales dejó 13 reclutas fallecidos en febrero y otro dejó 26 personas muertas en un puesto de control en marzo. Paralelamente, AQPA capturó varias ciudades en las provincias de Shebwa y Abyan y protagonizó combates con fuerzas pro-gubernamentales en áreas como Mansoura. En este contexto, algunas informaciones y análisis advirtieron que AQPA controlaba unos 600 kilómetros de costa y estaba intentando configurar una especie de mini-Estado en Mukalla, un puerto de medio millón de habitantes ubicado en el sureste del país y capital de la provincia de Hadramaut. Los combatientes de AQPA aprovecharon el repliegue de las fuerzas de seguridad de Mukalla tras la intensificación del conflicto entre el Gobierno de Hadi y los al-houthistas en 2015 para tomar el control de esta localidad, donde abolieron impuestos, pusieron en marcha actividades de propaganda sobre acciones del grupo para reconstruir carreteras y abastecer a hospitales en las áreas bajo su control, y asumieron algunas actividades económicas vinculadas al contrabando y la provisión de combustible.[103] No obstante, **en abril las fuerzas pro-Hadi con apoyo de la coalición y, en particular, de tropas de Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzaron una ofensiva y retomaron el control de Mukalla y sus alrededores**. En este sentido, algunos análisis destacaron que en el seno de la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudita se estaba dando un reparto de funciones, con Riad focalizado en el norte –principalmente en la provincia de Maarib y en áreas a lo largo de la frontera– y EAU centrado en el sur, intentando ayudar a que las fuerzas de Hadi consoliden presencia y control en la zona meridional del país.[104] Además de este papel significativo de las fuerzas de EAU, que también participaron en la detención de sospechosos de pertenecer o tener vínculos con AQPA, cabe mencionar que EEUU continuó teniendo también un rol destacado en este conflicto a través de sus ofensivas aéreas. A lo largo de 2016 se informó de diversos ataques con aviones no tripulados que causaron decenas de muertes. Una de estas ofensivas provocó la muerte a 54 presuntos milicianos de AQPA en Mukalla, en marzo; un nuevo ataque en la localidad de Zinjibar habría causado la muerte de tres dirigentes de la filial de al-Qaeda en Yemen, en abril; y otra ofensiva aérea en la provincia de Shebwa habría dejado otros 13 milicianos fallecidos, en agosto. A finales de año, EEUU informó que había dado muerte a otros 28 combatientes de AQPA en un total de nueve ataques entre septiembre y diciembre de 2016. Algunas ofensivas estadounidenses también tuvieron como objetivo células de ISIS.

102. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en este capítulo.
103. Yara Bayoumi, Noah Browning y Mohamed Ghobari, "How Saudi Arabia's war in Yemen has made al-Qaeda stronger and richer", Reuters Special Report, 8 de abril de 2016.
104. Adam Baron, *Yemen's forgotten war: How Europe can lay the foundations for peace,* European Council on Foreign Relations, diciembre de 2016.

Pese a estas acciones, ISIS y AQPA se mantuvieron activos durante todo el año y reivindicaron numerosas ofensivas en Mukalla y en Adén. AQPA reclamó la autoría de ataques contra fuerzas gubernamentales en el este de Mukalla en mayo y de dos ataques suicidas contra puestos militares que causaron 11 fallecidos en esta ciudad en julio. ISIS reivindicó una serie de cruentas acciones: un ataque con coche bomba que mató a 40 reclutas del Ejército en Adén en mayo; varios atentados suicidas que dejaron al menos 42 víctimas mortales en Mukalla en junio; otro ataque suicida contra la sede de una milicia progubernamental que resultó en 60 personas fallecidas en Adén en agosto; y otras dos ofensivas en esta ciudad que habrían dejado un centenar de soldados muertos en diciembre. Aunque el balance de la letalidad de este conflicto es difícil de precisar, en parte por la falta de información sistemática y contrastada y por la superposición de dinámicas de violencia en el país, estimaciones parciales y preliminares indican que la cifra anual superaría las 400 víctimas mortales. La situación de inestabilidad en esta zona del país también evidenció las dificultades del Gobierno de Hadi para mantener la seguridad en las áreas nominalmente bajo su control. En este contexto, International Crisis Group destacó que AQPA –y en menor medida la emergente filial de ISIS en Yemen–, se ha convertido en el actor que ha sacado más ventaja de la grave situación de inestabilidad en el país. El think tank subrayó que AQPA estaba en una posición más fuerte que nunca y que está apostando por una estrategia pragmática, forjando alianzas con sectores suníes e involucrándose en actividades de contrabando, frente a una filial de ISIS que con sus tácticas más brutales estaba teniendo menos éxito en la captación de reclutas o el control de territorios.[105]

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:
La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El Sinaí siguió siendo **escenario de continuos hechos de violencia a lo largo de 2016, principalmente en localidades de la zona norte de esta región, como Sheikh Zuweid, Rafah y El-Arish**, aunque también se registraron episodios en otras áreas del territorio egipcio como El Cairo, Giza, o Hurghade (en la costa del Mar Rojo). La violencia se concretó en forma de ataques, tiroteos, detonaciones de artefactos explosivos, emboscadas, ofensivas en zonas turísticas, enfrentamientos y operaciones terrestres y aéreas de las fuerzas de seguridad en el marco de su campaña "Martyr's Right", iniciada en 2015. Las acciones de grupos armados fueron reivindicadas mayoritariamente por la filial de ISIS en la región, el ex grupo Ansar Beit al-Maqdis rebautizado como Provincia del Sinaí. No obstante, algunas acciones también fueron reclamadas por otras organizaciones como Ajnad Misr, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam (estos dos últimos anunciaron su existencia en 2016). La filial de ISIS fue la más activa, con un promedio de 39 ataques reivindicados cada mes entre enero y septiembre, según los datos recopilados por el Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP). Estas cifras representan un aumento respecto a 2015, cuando se contabilizó un promedio de 21 ataques mensuales. El balance de víctimas de las hostilidades es complejo de precisar debido a la ausencia de una cobertura informativa independiente del conflicto y las dificultades para contrastar las cifras aportadas por las autoridades. **Según balances no oficiales a partir de informaciones de prensa, la cifra de fallecidos por el conflicto en 2016 superaría las 650 personas**. Según los datos de TIMEP, desde el inicio de la operación Martyr's Right en septiembre de 2015 y hasta el primer trimestre de 2016 las autoridades habían dado muerte a más de un millar de presuntos "terroristas", de los cuales unos 400 habrían fallecido entre enero y marzo de 2016. Entre el segundo y tercer trimestre de 2016 las fuerzas egipcias habrían dado muerte a otros 1.500 combatientes. No obstante, el TIMEP apuntó que estas cifras parecen incongruentes con los datos sobre el contingente de ISIS en Sinaí que, según estimaciones

105. International Crisis Group, *Yemen's al-Qaeda: Expanding the Base*, Middle East Report no.174, 2 de febrero de 2017.

de EEUU e Israel oscilaría entre los 600 y el millar de combatientes –la BBC elevaba esta cifra a entre 1.000 y 1.500 efectivos. En este sentido, se ha apuntado que no está claro si las autoridades egipcias están apuntando en sus operaciones más allá de los milicianos activos del grupo, si están inflando las cifras de bajas en el conflicto o si el grupo armado es capaz de reemplazar rápidamente a los combatientes fallecidos. Cabe destacar también que a lo largo de 2016 se informó de diversas bajas entre población civil en el marco del conflicto, ya sea por encontrarse en medio de enfrentamientos, por incidentes con explosivos o como consecuencia de asesinatos por su presunta colaboración con el Ejército o por su filiación religiosa, como en el caso del asesinato de dos sacerdotes en junio y julio o la decapitación de un clérigo sufí en noviembre. En esta línea, uno de los episodios más destacados del año fue el atentado con bomba en una iglesia copta en El Cairo en diciembre, en una acción reivindicada por ISIS que causó la muerte a 25 personas.

Entre otros hechos relevantes del año destacan el ataque con mortero contra policías en El Arish que dejó 15 efectivos fallecidos en marzo y que llevó al presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, a convocar una reunión de seguridad de emergencia para coordinar las acciones del Ejército y la Policía. En agosto, las autoridades aseguraron haber dado muerte al presunto líder del grupo Provincia del Sinaí, Abu Duaa al-Ansari, en un ataque aéreo en el norte del Sinaí en el que habrían muerto también otros 45 milicianos. Según informaciones de prensa, al-Ansari era sospechoso de estar involucrado en el atentado contra el avión ruso que cubría la ruta de Sharm el-Sheikh a Moscú y que causó 224 víctimas mortales en octubre de 2015. En esta línea, cabe destacar la caída en mayo de un avión de Egyptair que cubría la ruta París-El Cairo y que resultó en la muerte de 66 personas. Las investigaciones no descartaban un atentado y hacia finales de año algunos indicios apuntaban al hallazgo de explosivos. Durante el último trimestre se intensificaron los ataques contra policías y soldados. Una de las ofensivas, reivindicada por ISIS, acabó con la muerte de 12 militares en un puesto de control en Bir-al-Abd, en el primer ataque de envergadura ocurrido en la parte central de la provincia del Sinaí. Asimismo, se informó del asesinato o intento de asesinato de varios altos cargos militares. En este contexto, a lo largo del año el Gobierno egipcio fue renovando periódicamente el estado de emergencia en el Sinaí. Asimismo, la procuraduría general presentó en noviembre cargos contra 292 presuntos milicianos de ISIS acusados de formar 22 células. De este grupo, 151 se encontraban en custodia. Adicionalmente, cabe destacar que a lo largo de 2016 ISIS continuó con sus intentos de explotar la frustración y las divisiones en el seno de los Hermanos Musulmanes (HM) en un contexto de intensa represión por parte del régimen.[106] El grupo emitió videos de propaganda dirigidos a jóvenes de los HM en los que los interpeló para que rechacen los medios pacíficos y se unan a combatir en sus filas.[107]

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU; Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, Iraq continuó siendo escenario de elevadísimos niveles de violencia que se cobraron la vida de miles de personas en 2016, en el marco de un conflicto armado que enfrentó principalmente al grupo armado ISIS con un conjunto de fuerzas integrado por tropas gubernamentales, milicias chiíes apoyadas por Irán, milicias suníes, combatientes kurdos (peshmergas) y la coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU. Los hechos de violencia tuvieron lugar en distintos puntos del país, pero se concentraron en las provincias de Badgad, Anbar y Nínive, y se materializaron en ataques suicidas, detonación de artefactos explosivos, enfrentamientos entre los diversos actores en pugna y ataques aéreos, entre otros episodios, con un gran impacto en la población civil**. Según la organización**

106. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).
107. Mostafa Hashem, "The Great Brotherhood Divide", *Sada*, 2 de marzo de 2016.

Iraq Body Count (IBC), la cifra total de civiles fallecidos a causa de la violencia en el país ascendió a 16.361 personas en 2016, es decir, un promedio de alrededor de 1.300 civiles fallecidos cada mes. Este balance de mortalidad de civiles en 2016 es ligeramente inferior al de 2015 y 2014 –cuando se contabilizaron 17.578 y 20.218, respectivamente–, pero es posible que las cifras definitivas de 2016 sean superiores. La tendencia de los últimos tres años evidencia una intensificación sustancial de la violencia en Iraq en comparación con los años 2010-2012 (con un promedio de entre 4.100 y 4.600 víctimas anuales) y también con 2013, cuando se registraron 9.852 civiles fallecidos. Otros balances, como el de la misión de la ONU en Iraq (UNAMI) arrojan cifras más conservadoras, con un total de 6.878 civiles muertos y 12.388 heridos en 2016. No obstante, la propia misión reconoce que sus números deben ser considerados como un "mínimo absoluto" dada su incapacidad para verificar los informes sobre numerosas muertes y su imposibilidad de obtener información relativa a algunos de los principales escenarios de las hostilidades. Cabe destacar, además, que a las cifras de muertes entre la población civil se debe añadir el número de fallecidos entre los diversos actores armados, mucho más difícil de calcular, pero que se estima en miles de personas. Según IBC, desde el inicio del conflicto armado en Iraq en 2003 y hasta 2016 habrían muerto un total de 280.000 personas, incluyendo combatientes, pero la gran mayoría –entre 170.000 y 190.000– serían civiles. Según el desglose de datos del año de IBC, hasta noviembre de 2016 un 77% de los civiles fallecidos eran hombres, 11% mujeres y 12% menores de edad. La principal causa de muerte de civiles fueron las ejecuciones (7.170) y un segundo factor los ataques aéreos y fuego de artillería (2.854).

La violencia en Iraq agravó la crisis humanitaria en el país y a finales de 2016 un total de 3,6 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado

En el plano militar, **la evolución del conflicto en Iraq durante 2016 se caracterizó por las campañas de las fuerzas gubernamentales para expulsar a ISIS de Falluja, durante el primer semestre, y de Mosul, en la segunda mitad del año**, ofensivas que fueron duramente resistidas por el grupo armado. La campaña para recuperar el control de Falluja, ubicada a tan solo 50 kilómetros de Bagdad y en manos de ISIS desde 2014, se inició a mediados de mayo. ISIS reaccionó lanzando una serie de contraataques y desplegando escuadrones de la muerte con la orden de ejecutar a cualquier persona que intentara huir o rendirse a las fuerzas gubernamentales. La ofensiva aérea y los combates provocaron numerosas bajas y generaron preocupación por el destino de la población atrapada en la ciudad y sus graves carencias humanitarias. A finales de junio las autoridades iraquíes anunciaron que Falluja había sido liberada, aunque la localidad continuó siendo escenario de ataques esporádicos a lo largo del año. Ante un escenario de retroceso de las áreas bajo su control territorial, ISIS optó por intensificar su estrategia de atentados, principalmente en la capital iraquí y contra objetivos sensibles para la comunidad chií. Así, a principios de julio, el grupo armado reivindicó el mayor ataque sobre Bagdad desde el inicio de la guerra en 2003, con un devastador atentado con coche bomba en una concurrida calle comercial del distrito de Kerrada, de mayoría chií, que causó la muerte a 324 personas. En los meses siguientes, las fuerzas gubernamentales avanzaron posiciones en el norte, rumbo a Mosul, y se libraron combates en zonas aledañas. La previsión de hostilidades en esta zona llevó a decenas de miles de personas a huir de sus hogares. El 17 de octubre, el Gobierno iraquí anunció oficialmente el inicio de la campaña para recapturar Mosul, la segunda ciudad del país y clave para ISIS tanto por su valor simbólico –desde esta localidad el líder del grupo armado anunció la instauración del "califato" de ISIS– y estratégico –la pérdida de esta ciudad afectaría las rutas de suministro desde Iraq a las zonas controladas por ISIS en Siria. El grupo armado prohibió a la población abandonar Mosul y desplazó a unas 1.500 familias de áreas vecinas hasta la ciudad, ejecutó a decenas de personas acusadas de traición o colaboración con las fuerzas iraquíes, sembró minas e incendió plantas químicas en los alrededores de la ciudad, utilizó a menores de edad con cinturones de explosivos en las zonas de penetración de las fuerzas gubernamentales y lanzó ataques contra otras localidades, como Kirkuk, en un intento por evitar la concentración de tropas en Mosul. Los peshmergas, milicias suníes y chiíes y tropas iraquíes con apoyo de la coalición internacional rodearon la ciudad y accedieron a algunos barrios en los meses siguientes. Las Unidades de Movilización Popular (UMP) chiíes –a las que se reconoció estatus legal dentro de las fuerzas iraquíes a finales de noviembre– tuvieron un rol decisivo en el control de Tal Afar, al oeste de Mosul, clave en la ruta de conexión con Siria. A finales de año, sin embargo, las fuerzas pro-gubernamentales no habían conseguido expulsar a ISIS de Mosul y según estimaciones de la UNAMI sólo en el primer mes de la campaña habían muerto casi 2.000 soldados iraquíes. En este contexto EEUU continuó incrementando su contingente en Iraq y en septiembre de 2016 ya contaba con 4.460 efectivos en el país. Cabe destacar que la campaña en Mosul también alentó tensiones entre Turquía e Iraq, ante la insistencia de Ankara de participar en la ofensiva y la negativa de Bagdad, que denunció la presencia de fuerzas turcas en Bashiqa, cerca de Mosul, como una violación a su soberanía.[108]

108. Mostafa Hashem, "The Great Brotherhood Divide", *Sada*, 2 de marzo de 2016.

La violencia en Iraq **intensificó la crisis humanitaria, con un aumento en los niveles de desplazamiento forzado. Según cifras de la ONU, a diciembre de 2016 más de 3,6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares y 2,4 millones enfrentaban una situación de inseguridad alimentaria**. Agencias de la ONU y ONG internacionales denunciaron abusos de los actores armados, entre los que destacan las acusaciones a ISIS por genocidio y crímenes de guerra contra la población yazidí –a finales de 2016 se estimaba que el grupo mantenía cautivas a unas 1.900 personas, en su mayoría yazidíes– y por uso de menores en sus acciones, entre otras. Asimismo se alertó sobre acciones de venganza o represalia contra población suní por parte de milicias chiíes en zonas como Diyala o Falluja. Adicionalmente, cabe destacar que en paralelo a la evolución del conflicto armado Iraq atravesó una delicada situación política interna durante 2016, caracterizada por tensiones, pulsos de poder y expresiones de descontento popular ante la corrupción, el inmovilismo político y la peor crisis económica desde 2003. El clérigo Muqtada al-Sadr alentó movilizaciones populares contra la corrupción y las cuotas sectarias en política que llevaron a la instauración del estado de emergencia en Bagdad, en abril, después de que los manifestantes penetraran en la fortificada "zona verde" de la capital iraquí. El primer ministro Haider al-Abadi enfrentó numerosas dificultades para promover un cambio de gabinete y votos de no confianza a dos de sus ministros, en el marco de una pugna creciente con el ex primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki. Finalmente, cabe mencionar que la responsabilidad occidental en la deriva del conflicto iraquí volvió a ocupar el centro de la atención en julio tras la publicación del informe Chilcot en Reino Unido, resultado de una investigación independiente que concluyó que diversos riesgos de la intervención en Iraq –como una lucha interna en el país, inestabilidad regional o una mayor actividad de al-Qaeda– habían sido explícitamente identificados antes de la invasión.

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional[109]
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis (vinculado a ISIS)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:
El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinicia en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclama el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexiona Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

El conflicto palestino israelí registró niveles de violencia similares a los del año anterior, con **periódicos incidentes que según datos de la ONU provocaron la muerte de más de 120 personas durante 2016 –109 palestinos y 13 israelíes– y que, según las cifras disponibles hasta el mes de octubre, habían dejado heridas a otras 3.329 personas –3.166 de origen palestino y 163 israelíes**. El balance de fallecidos por el conflicto es ligeramente inferior al de 2015, cuando se contabilizó un total de casi 200 víctimas mortales –169 palestinas y 25 israelíes–, mientras que la cifra de personas heridas fue significativamente menor a la observada el año anterior, en el que se registraron 15.781 personas heridas (15.477 palestinas y 304 israelíes). A lo largo del año, la violencia se materializó en una serie de ataques palestinos contra civiles y fuerzas de seguridad israelíes y acciones de las fuerzas israelíes contra población palestina, enfrentamientos en Cisjordania y Jerusalén, además de algunos episodios de intercambio de fuego en Gaza.

La serie de ataques palestinos, algunos con armas blancas o en forma de atropellos deliberados, que se intensificaron a partir de octubre de 2015, fueron catalogados como parte de una "tercera intifada" –también bautizada como "intifada de los cuchillos"– y se caracterizaron por ser acciones individuales protagonizadas en su mayoría por jóvenes. Entre octubre de 2015 y marzo de 2016 se habían producido más de 300 incidentes de este tipo. Las fuerzas de seguridad israelíes respondieron a estos ataques ejecutando a muchos de los agresores, en algunos casos a pesar de que ya no representaban una amenaza. Entre los episodios más destacados cabe mencionar como una jornada especialmente cruenta el 14 de febrero, cuando las fuerzas israelíes dispararon y dieron muerte a cinco palestinos –tres

109. A pesar de que "Palestina" (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como "internacional" y no como "interno" por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

de ellos adolescentes– mientras intentaban perpetrar ataques. A principios de junio, cuatro israelíes murieron y seis resultaron heridos después de que dos atacantes palestinos abrieran fuego en una zona comercial de Tel Aviv. Durante el año también se produjeron víctimas mortales durante operaciones de rastreo y redadas de las fuerzas israelíes en los territorios ocupados y en algunos enfrentamientos en Cisjordania. En Gaza los principales hechos de violencia se produjeron en junio tras el descubrimiento de túneles desde la Franja a Israel, lo que derivó en bombardeos de las fuerzas israelíes contra objetivos de Hamas –la escalada se aplacó tras la mediación de Egipto– y durante el segundo semestre tras el lanzamiento de proyectiles por parte del grupo Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis –que habría declarado lealtad a ISIS–, lo que motivó nuevos ataques israelíes sobre Gaza.

Cabe destacar que estas dinámicas de violencia se produjeron en un trasfondo de creciente frustración de la población palestina, de derechización del Gobierno israelí y de algunos intentos por reactivar negociaciones de paz tendientes a la solución de dos Estados.[110] En este contexto, a mediados de año el Cuarteto para Oriente Medio –integrado por EEUU, Rusia, la UE y la ONU– publicó su primer informe sobre el conflicto en el que identificó las principales amenazas para conseguir una solución pactada. Entre ellas señaló tres tendencias especialmente preocupantes. En primer lugar, la violencia continua, los ataques contra civiles y la incitación a la violencia. En segundo lugar, la incesante política de construcción de asentamientos israelíes –su número se ha más que doblado desde el inicio del proceso de Oslo y ha llevado a la presencia de 570.000 colonos en Cisjordania y Jerusalén–, la designación de zonas de uso exclusivo de Israel –70% de la "zona C" ha sido apropiado unilateralmente– y los obstáculos para el desarrollo palestino. Por último, la delicada situación de seguridad y humanitaria en Gaza, además de la falta de un liderazgo palestino unificado. Pese a las críticas, trascendió que Israel quedó conforme con el documento, que no constituye un mandato ni incluye referencias a las fronteras de 1967. La dirigencia palestina, en cambio, expresó su disconformidad con el informe y se mostró más proclive a la iniciativa promovida por Francia durante 2016, más en línea con la estrategia de la AP de internacionalización del conflicto.[111] El Gobierno israelí rechazó participar en la iniciativa francesa –defendiendo negociaciones bilaterales– y profundizó en algunas políticas especialmente polémicas.

Convertido en el Gobierno más derechista de la historia de Israel –en especial tras la incorporación al gabinete del ultraderechista Avigdor Lieberman, líder del partido Yisrael Beitenu (Israel es Nuestro Hogar), como ministro de Defensa en mayo–, la administración de Netanyahu anunció planes para ampliar el muro de separación e intensificó su política de demoliciones de viviendas palestinas. **Según datos de la ONU a diciembre de 2016, las autoridades israelíes habían demolido o incautado 1.089 viviendas palestinas, provocando el desplazamiento forzado de 1.593 personas, las cifras más elevadas desde que OCHA comenzó a hacer seguimiento a este tema en 2009**. Adicionalmente, miembros del gabinete promovieron una controvertida iniciativa que pretende legalizar retrospectivamente decenas de asentamientos no autorizados construidos en terrenos privados palestinos –todos los asentamientos israelíes en los territorios ocupados son ilegales según la ley internacional, pero Israel distingue entre los autorizados y los que no, según su propia legislación. Hasta finales de año la normativa había conseguido superar dos votaciones en la Knesset.

En este contexto, **el Gobierno israelí sufrió un revés al finalizar 2016 tras la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución (2334) que denuncia los asentamientos israelíes como una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo para la solución de dos Estados** y reafirma que no se aceptarán modificaciones a las fronteras previas a 1967 sin que sean resultado de negociaciones. La aprobación de la resolución por el Consejo –la primera sobre el conflicto desde 2009 y sobre los asentamientos desde 1980– fue posible por la abstención de EEUU, que tradicionalmente había vetado este tipo de iniciativas y que en esta ocasión optó por la abstención, en el marco de una creciente tensión entre el Gobierno de Barack Obama y el de Netanyahu. No obstante, el Gobierno israelí se mantenía a la expectativa de la llegada al poder de Donald Trump, que anunció su decisión de adoptar una serie de medidas favorables a los intereses israelíes, entre ellas un cambio de la sede de la embajada estadounidense a Jerusalén. La victoria de Trump en EEUU también alentó a diversos miembros del gabinete israelí a apostar públicamente por aprovechar la nueva coyuntura para pensar en un futuro sin perspectivas de un Estado palestino.

Al finalizar 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que denuncia los asentamientos israelíes como una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo para la solución de dos Estados

110. Véase "Israel-Palestina: la agonía de la solución de dos Estados y el riesgo de mayor violencia a 50 años de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).
111. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias PYD/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), al-Shamia Front, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:
Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del establishment, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa se ha complejizado y ha adquirido una creciente dimensión regional e internacional.

La guerra en Siria continuó agravándose en 2016 y siguió caracterizándose por la multiplicidad de actores armados involucrados, la proyección de intereses regionales e internacionales en el conflicto y elevadísimos niveles de violencia que tuvieron un especial impacto en la población civil durante el año. Según estimaciones del Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), entre **unas 50.000 y 60.000 personas habrían muerto producto de las hostilidades en 2016, de las cuales unas 13.000 serían civiles. Los datos de la Syrian Network for Human Rights (SNHR) elevan esta última cifra a casi 17.000, entre las cuales contabilizan a casi 4.000 menores y 2.500 mujeres.**[112] A lo largo de 2016 numerosos informes de la ONU y de organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron los sistemáticos abusos a las leyes internacionales de derechos humanos y al derecho humanitario en Siria, escenario de ataques indiscriminados, pero también deliberados, contra la población civil.[113] Informes de la Comisión Internacional Independiente sobre Siria y de Amnistía Internacional documentaron las sistemáticas y masivas muertes de personas en centros de detención controlados por el régimen –casi 18.000 desde 2011, según datos de Amnistía– y alertaron también sobre las ejecuciones sumarias de civiles a manos de otros actores armados, como ISIS, Frente al-Nusra, al-Shamia Front y Ahrar al-Sham.[114] Como en años anteriores, también se denunciaron torturas, uso de la violencia sexual, secuestros y desapariciones. Según cifras de la SNHR, más de 5.000 personas pasaron a estar en situación de desaparición forzada sólo en 2016, elevando la cifra total de personas desaparecidas desde 2011 a no menos de 76.000. Dos fenómenos que se intensificaron de manera significativa durante 2016 fueron los ataques contra infraestructuras de salud y los asedios. El régimen fue denunciado por usar la destrucción de hospitales y centros médicos como una estrategia en sus ofensivas en zonas controladas por la oposición y como principal responsable de los asedios –también perpetrados por otros actores armados–, que afectaron a un número creciente de población. Según cifras de la ONU a finales de 2016, el número de personas viviendo bajo asedio se había más que duplicado en un plazo de seis meses, pasando de 468.700 a un millón de personas en noviembre, con los consiguientes problemas de acceso a servicios y para la cobertura de necesidades básicas. Adicionalmente, fueron constantes las denuncias de actores humanitarios sobre los obstáculos de acceso de la ayuda y prácticas como la remoción de medicinas de los convoyes de asistencia. El conflicto armado continuó motivando además masivos desplazamientos de población dentro y fuera del país. A finales de 2016 la cifra de personas refugiadas de origen sirio superaba los 4,8 millones, otras 6,3 se encontraban en situación de desplazamiento forzado interno y 13,5 millones –más de la mitad de la población– requerían asistencia humanitaria.

A lo largo de 2016 numerosos informes de la ONU y de organizaciones internacionales de denunciaron los sistemáticos abusos a las leyes internacionales de derechos humanos y al derecho humanitario en Siria, escenario de ataques indiscriminados contra la poblacion civil

En cuanto a la evolución del conflicto armado y los frentes de batalla, durante 2016 continuaron registrándose enfrentamientos en diversos puntos del país, pero la campaña más decisiva se libró en Alepo durante el segundo semestre y culminó con la victoria de las fuerzas del régimen en diciembre.

112. Syrian Network for Human Rights, *The Yearly Report for 2016*, SNHR, 18 de enero de 2017.
113. Véase "Siria y el fracaso en la protección de civiles en contextos de conflicto armado" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).
114. Véanse los informes de OHCR, *Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic*, 3 de febrero de 2016 y de Amnesty International, *'It breaks the human': Torture, disease and death in Syria's prisons*, AI, 18 de agosto de 2016 y *Syria: Abductions, torture and summary killings at the hands of armed groups*, AI, 5 de julio de 2016.

En los primeros meses del año se registró una ligera disminución en los niveles de violencia, en medio de nuevos intentos por promover negociaciones para poner fin al conflicto y por declarar una tregua.[115] A finales de febrero, en una iniciativa promovida por EEUU y Rusia, se puso en marcha un cese de hostilidades entre el régimen y actores armados de oposición, excluyendo grupos armados yihadistas como ISIS o el Frente al-Nusra (grupo que hasta 2016 se reconocía como filial de al-Qaeda en Siria pero que decidió marcar distancia con esta organización y rebautizarse como Jabhat Fateh al-Sham). Sin embargo, la reducción de los niveles de violencia duró tan solo unas semanas y a partir de abril se registró un incremento significativo de los enfrentamientos en áreas como Idlib, Damasco, Deraa, Homs, Hasakah y, en especial, Alepo. Aunque se activaron algunas iniciativas diplomáticas para intentar restablecer el cese de hostilidades, los hechos de violencia continuaron y, en junio, el presidente Bashar al-Assad anunció en tono desafiante que pretendía tomar el control de la totalidad de Siria, manifestando así su confianza en imponerse por la vía militar con el apoyo decisivo de Rusia e Irán. A partir de entonces se hizo evidente que **Alepo, bastión de las fuerzas rebeldes y con un alto peso simbólico, pasaba a convertirse en el principal objetivo de la guerra. La ciudad se convirtió en escenario de cruentos enfrentamientos, intensos bombardeos y bloqueos que derivaron en que más de 275.000 personas quedaran atrapadas en la zona este de la ciudad, controlada por la oposición**. En septiembre, un breve y fallido intento por restablecer un cese el fuego en el país fue el preludio de una intensificación de la violencia en el último trimestre. El acuerdo promovido por EEUU y Rusia –que también incluía disposiciones para el acceso de ayuda humanitaria y el establecimiento de un mecanismo de cooperación militar entre Washington y Moscú en la lucha contra ISIS y Frente al-Nusra– quedó desactivado rápidamente tras nuevos hechos de violencia. Primero, por las tensiones que generó un ataque estadounidense en la zona de Deir al-Zor que causó la muerte a 62 soldados sirios –Washington calificó el incidente como un error– y, luego, por un ataque aéreo atribuido a las fuerzas sirias y rusas contra un convoy humanitario de la ONU y la Media Luna Roja que provocó la muerte a otras 18 personas. En este contexto, la campaña del régimen contra Alepo se intensificó (se estima que sólo en la última semana de septiembre murieron más de 400 personas). Tras una intensa campaña aérea y el avance de fuerzas terrestres –apoyadas por Rusia, Irán, Hezbollah–, el régimen decretó a mediados de diciembre que había asumido el control total de la ciudad de Alepo. La ONU denunció asesinatos perpetrados por milicias pro-gubernamentales en su avance hacia la ciudad, desapariciones de personas que cruzaron a las zonas controladas por el régimen y retención de personas en la zona este por parte de grupos armados opositores. La ofensiva provocó el desplazamiento forzado de 116.000 personas, 80.000 de las cuales pasaron a zonas controladas por el Gobierno y otras 36.000 –entre combatientes y civiles– fueron trasladadas durante la segunda quincena de diciembre a otras zonas de la provincia de Alepo y de la provincia de Idlib, en manos de la oposición. Todo a partir de un acuerdo promovido por Rusia y Turquía que a partir del 30 de diciembre derivó en la puesta en marcha de un nuevo cese el fuego, refrendado de manera unánime por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (2336), aunque persistían los interrogantes sobre su viabilidad y las perspectivas de nuevas negociaciones. Analistas advertían sobre las dificultades de los grupos armados opositores para revertir las ganancias militares del régimen.

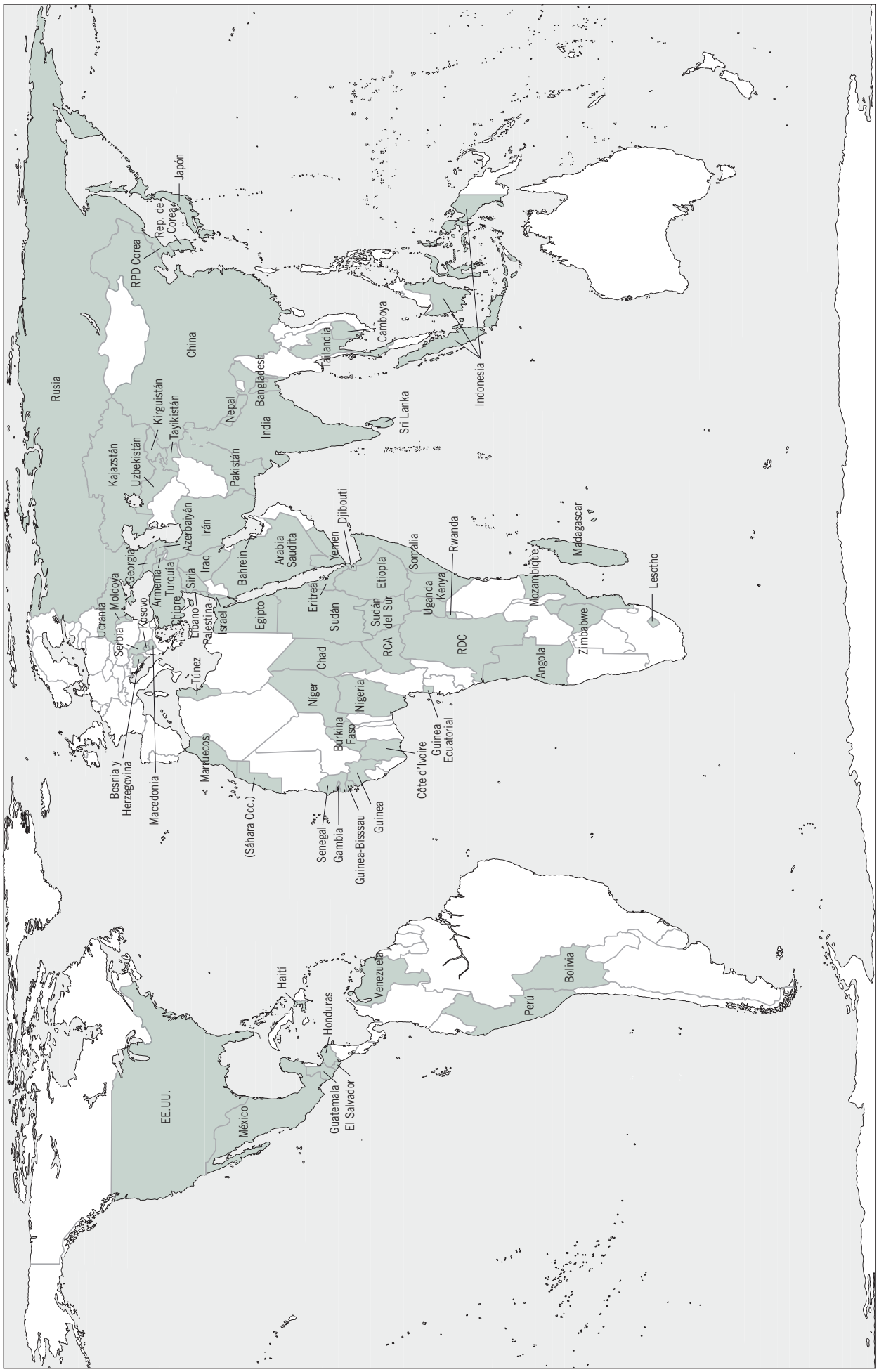
Alepo se convirtió en el principal escenario de la guerra de Siria y 275.000 personas quedaron atrapadas en la zona este de la ciudad, controlada por la oposición

Este acuerdo auspiciado por Ankara y Moscú fue posible, en parte, por el cambio de prioridades en lo que respecta a Siria por parte de Turquía, que en los últimos años ha dado apoyo a grupos de la oposición siria y que durante 2016 restableció relaciones con Rusia y optó por una aproximación pragmática orientada a bloquear la expansión y consolidación de grupos próximos al PKK, como las YPG.[116] Durante el primer semestre Turquía lanzó varias acciones armadas contra las milicias kurdas YPG y en agosto intervino en Siria con una ofensiva aérea y terrestre oficialmente para atacar a ISIS, pero sobre todo para frenar los avances de las YPG en el norte de Siria. EEUU –respaldo clave de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) encabezadas por el YPG– acabó presionando a las fuerzas kurdas para que se replegaran al este del río Éufrates, línea roja para Turquía. **En lo relativo a ISIS, cabe destacar que durante 2016 el grupo armado logró mantener su bastión en Raqqa, reivindicó ataques suicidas en localidades como Jablah y Tartus –que provocaron la muerte a 160 personas en mayo– y protagonizó intensos enfrentamientos con las FDS en zonas como Manjib**, al norte de la provincia de Alepo. En esta zona las hostilidades forzaron el desplazamiento de cientos de familias, en medio de una ofensiva que contó con el apoyo de la coalición internacional contra ISIS. En este contexto, activistas denunciaron que dos ataques aéreos de EEUU en julio habían provocado la muerte de un centenar de civiles. En noviembre, EEUU informó que sus fuerzas habían lanzado 5.362 ataques aéreos contra ISIS en Siria y reconoció que 64 civiles habían muerto a causa de ataques estadounidenses contra presuntos objetivos de ISIS

115. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 3 (Procesos de paz).
116. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

en Iraq y Siria entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016 (esta cifra excluye las víctimas de los hechos de Manjib, que se encontraban bajo investigación). Pese a las operaciones contra ISIS, cabe mencionar que el grupo consiguió retomar Palmira en diciembre, nueve meses después de haber sido expulsado de la ciudad por fuerzas rusas y tropas del régimen. Finalmente, cabe destacar que a mediados de año la ONU también responsabilizó al régimen de Damasco y a ISIS por el uso de armas químicas en 2014 y 2015, según el resultado de la investigación de un equipo internacional de expertos.

Mapa 2.1. **Tensiones**



2. Tensiones

- Durante 2016 se registraron 87 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (34) y Asia (20), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Europa (14), Oriente Medio (11) y América (ocho).
- Los niveles de violencia política en Mozambique aumentaron de manera significativa, convirtiéndose en los más elevados desde los episodios registrados durante el año 2013.
- La oposición política venció en las elecciones presidenciales en Gambia y acabó con 22 años en el poder del mandatario Yahya Jammeh.
- En Nigeria, el aumento de las tensiones en Biafra, Delta del Níger, Kaduna y la región del "Middle Belt" deterioraron gravemente la situación de seguridad y estabilidad.
- Etiopía sufrió un grave deterioro de la situación como consecuencia de la represión gubernamental de las amplias protestas y movilizaciones sociales que causó la muerte de centenares de personas.
- Diversos hechos de violencia en Túnez provocaron la muerte de casi un centenar de personas, la mayoría de ellas en un incidente protagonizado por ISIS y fuerzas de seguridad en una ciudad próxima a Libia.
- La violencia en la región centroamericana del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) agravó la crisis de desplazamiento forzado.
- Bangladesh fue escenario de una grave tensión con múltiples asesinatos de activistas seculares y atentados por parte de grupos armados islamistas.
- Las relaciones entre India y Pakistán se deterioraron notablemente, con graves enfrentamientos diplomáticos y militares, incluyendo el intercambio de fuego en la frontera que separa a los dos países.
- La tensión en la península coreana se incrementó después de que Corea del Norte llevara a cabo dos ensayos nucleares y lanzara numerosos misiles balísticos.
- Turquía hizo frente a múltiples focos de tensión, incluyendo atentados atribuidos a ISIS y un golpe de Estado fallido, al que siguieron purgas masivas.
- En Egipto organizaciones de derechos humanos continuaron denunciando medidas de acoso contra sectores disidentes y la desaparición de cientos de personas tras ser detenidas.
- Líbano siguió viéndose afectado por las dinámicas del conflicto armado en Siria y fue escenario de diversos episodios de violencia, mayoritariamente en zonas fronterizas.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2016. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2016. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2016.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. **Resumen de las tensiones en 2016**

Tensión[1]	Tipología [2]	Actores principales	Intensidad[3] / Evolución[4]
África[5]			
África Central (LRA)	Internacional	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congolesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka	2
	Recursos		=
Angola (Cabinda)	Interna	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo	3
	Autogobierno, Recursos		↑
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel	2
	Gobierno		=
Chad	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Congo, Rep. del	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Côte d'Ivoire	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	1
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
Djibouti	Interna	Gobierno, grupo armado FRUD, oposición política y social (coalición UAD/USN)	1
	Gobierno		↑
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	2
	Territorio		↑
Etiopía	Interna	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		↑
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	2
	Gobierno		↑
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	1
	Gobierno		=
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		=
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2016 con la del año 2015 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2016 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.
5. Las situaciones de tensión relativas a Camerún, Chad y Níger presentes en el 2016 debidas a la inestabilidad generada por el conflicto armado de Boko Haram se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Lago Chad (Boko Haram).

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
África			
Kenya	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Lesotho	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, oposición política	1
	Gobierno		↓
Madagascar	Interna	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas	1
	Gobierno, Recursos		=
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional[6]	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Mozambique	Interna	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO	3
	Gobierno		↑
Níger	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados internos y externos (región del Sahel)	2
	Gobierno, Sistema		↑
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	2
	Identidad, Recursos		↑
RDC	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
RDC – Rwanda[7]	Internacional	Gobiernos de RDC, Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda[8]	Internacional	Gobiernos de RDC y Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		=
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, grupo armado MFDC y sus diferentes facciones	1
	Autogobierno		=
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	1
	Territorio		=
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Sudán, Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		↓
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	3
	Gobierno, Sistema		=
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑

6. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como "internacional" y no como "interna" por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.
7. Esta denominación hace referencia a la tensión internacional RDC-Rwanda-Uganda aparecida en ediciones anteriores del informe *Alerta!* Aunque comparten características similares, en el informe *Alerta 2016* se analizan de forma separada RDC-Rwanda y RDC-Uganda.
8. Ibid.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
África			
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
América			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales, colectivos indígenas)	1
	Gobierno, Autogobierno, Recursos		=
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, Fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, 18 Revolucionarios, 18 Sureños)	3
	Gobierno		=
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		=
Haití	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares	2
	Gobierno		=
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	1
	Gobierno		=
México	Interna	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.	2
	Sistema, Gobierno		↑
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	1
	Gobierno, Recursos		↓
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Asia			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islami, JMB)	3
	Gobierno		=
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet y en provincias y países limítrofes	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China – Japón	Internacional	China, Japón	2
	Territorio, Recursos		↑
Corea, RPD –EEUU, Japón, Rep. de Corea[9]	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	3
	Gobierno		↑
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	3
	Sistema		=
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(IKS), KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	3
	Autogobierno, Identidad		=
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	3
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↑

9. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
Asia			
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Indonesia (Aceh)	Interna	Gobierno indonesio, Gobierno regional de Aceh, oposición política	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Kazajstán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		↑
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Nepal	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	3
	Gobierno, Sistema		↓
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Tailandia – Camboya	Internacional	Tailandia, Camboya	1
	Territorio		=
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		=
Europa			
Armenia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Chipre	Interna internacionalizada	Gobierno de Chipre, Gobierno de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Macedonia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
Europa			
Moldova, Rep. de (Transdniestria)	Interna internacionalizada	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdniestria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Rusia (Chechenia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados de oposición	2
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Rusia (Ingushetia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Ingushetia, grupos armados de oposición	1
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓
Rusia (Kabardino-Balkaria)	Interna	Gobierno ruso, Gobierno de la República de Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición	1
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓
Serbia – Kosovo	Internacional[10]	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	3
	Gobierno, Sistema		↑
Ucrania – Rusia	Internacional	Gobierno de Ucrania, Gobierno de Rusia, oposición política y social de Crimea, EEUU, OTAN, UE	2
	Gobierno, Territorio, Autogobierno, Identidad		↑
Oriente Medio			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	2
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		=
Irán – EEUU, Israel[11]	Internacional	Irán, EEUU, Israel	1
	Sistema, Gobierno		=
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Israel – Siria –Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)	3
	Sistema, Recursos, Territorio		↓
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS	3
	Gobierno, Sistema		=
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

10. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera "internacional" ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.
11. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad / Evolución
Oriente Medio			
Yemen (sur)	Interna	Gobierno, grupos de oposición secesionistas y autonomistas del sur (entre ellos el Movimiento del Sur /Al-Hiraak al-Janoubi)	2
	Autogobierno, Recursos, Territorio		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; =: sin cambios.
Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2016

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2016, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2016 se identificaron 87 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas tuvo lugar en África, con 34 casos (39%), seguida de Asia, donde se registraron 20 casos (23%). Europa y Oriente Medio fueron escenarios de 14 y 11 casos cada una (16 y 13%), mientras en América se identificaron ocho (9%). Cabe destacar la existencia de ocho nuevos escenarios de tensión, con respecto a 2015. Entre ellos, en el continente americano los casos de El Salvador, Guatemala y Honduras. En Asia, los escenarios de India (Assam) –considerado como conflicto armado en años anteriores– y Kazajstán. Y en Europa, los casos de Armenia, Turquía y Ucrania-Rusia. Por otra parte, varias situaciones de crisis sociopolítica dejaron de considerarse como tales, ante la reducción de la tensión en los últimos años.

África y Asia fueron los continentes con mayor número de crisis sociopolíticas en 2016 (34 y 20, respectivamente)

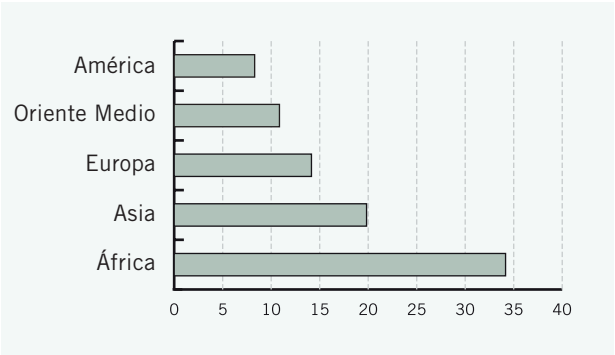
Las situaciones de tensión tuvieron causas múltiples, con más de un factor principal en la gran mayoría de los casos. El análisis del panorama de crisis en 2016 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con años anteriores, el 69% de los casos tuvo entre sus causas principales **la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** o la oposición al sistema político, social o ideológico de los Estados, lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder. Este factor de oposición al gobierno o sistema fue especialmente predominante en América (presente en todos los casos de tensión), África (74% de sus tensiones) y en Europa (71%), donde tuvo una presencia mayor que en años anteriores. En segundo lugar, cerca de la mitad de las tensiones (48%) tuvo como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias. Se superó esa media en el continente europeo (79%), Oriente Medio (55%) y Asia (55%). En tercer lugar, cabe destacar que en una tercera parte de los casos, el elemento de disputa por el control del territorio y/o recursos fue un factor especialmente relevante entre las causas principales, con mayor presencia en Asia (40%) y África (38%), si bien se trata de un elemento que alimenta de manera directa o indirecta, y en grados diversos, numerosas situaciones de tensión.

En línea con años anteriores, algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (46 casos o un 53%), más de una cuarta parte fueron tensiones internas internacionalizadas (25 casos o un 29%) y casi una quinta parte fueron tensiones internacionales (16 casos o un 18%). En cuanto a la evolución de las tensiones, algo más de la mitad de los casos no experimentó cambios significativos (45 casos o un 52%), una tercera parte registró un deterioro con respecto a 2015 (29 casos o un 33%) y en cerca de un 15% de los casos se produjo una cierta mejoría (13 casos).

En términos de intensidad de las tensiones, durante 2016 más de la mitad presentaron una intensidad baja (47 casos o 54%), mientras cerca de una cuarta parte fueron tensiones de alta intensidad (21 casos o 24%) y algo más de una quinta parte fueron escenarios de intensidad media (19 casos o 22%). Como en años anteriores, África y Asia fueron los continentes con mayor número de tensiones de alta intensidad, con ocho y siete casos respectivamente. **Las tensiones de mayor gravedad en 2016 fueron: Angola (Cabinda); Etiopía; Etiopía (Oromiya); Kenya; Mozambique; Nigeria; RDC; Túnez; El Salvador; Bangladesh; RPD Corea–EEUU, Japón, Rep. de Corea; RPD Corea-Rep. de Corea; India (Assam); India (Manipur); India-Pakistán; Pakistán; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj); Turquía; Egipto; Israel-Siria-Líbano y Líbano.**

Algunas de estas tensiones de alta intensidad fueron escenario de hechos de violencia con unos umbrales de letalidad superiores al centenar de víctimas mortales. Además, algunas tensiones que durante 2015 habían experimentado niveles medios de intensidad, en 2016 sufrieron niveles elevados. Fue el caso en África de Angola (Cabinda), donde el grupo armado FLEC-FAC anunció la vuelta a las hostilidades y donde se registraron los peores incidentes en años; Etiopía, con

Gráfico 2.1. **Distribución regional del número de tensiones en 2016**



las mayores movilizaciones antigubernamentales de la última década y extrema dureza en la represión de las protestas, con más de medio millar de fallecidos (un millar según algunas fuentes); Etiopía (Oromiya), epicentro de la crisis que padeció el país, que se sumó a dinámicas locales de violencia anteriores; Mozambique, con los niveles de violencia política más elevados desde 2013, principalmente en las provincias cuyo control reclama el grupo opositor RENAMO; y RDC, escenario de una grave crisis política y social en torno a la expiración del mandato del presidente, Joseph Kabila, con decenas de víctimas mortales en las movilizaciones. En Asia, se incrementó notablemente la tensión en torno al programa armamentístico de Corea del Norte, con nuevos ensayos nucleares por Pyongyang, el lanzamiento de nuevos misiles balísticos y alertas sobre los avances tecnológicos del programa atómico. En Europa, Turquía hizo frente a una grave crisis de múltiples dimensiones, que incluyó atentados de gran escala atribuidos a ISIS y un intento fallido de golpe de Estado militar.

Durante 2016 se registraron 21 casos de tensiones de alta intensidad, la mayor parte de las cuales tuvieron lugar en África y Asia

Además de la letalidad, **las situaciones de tensión tuvieron otros impactos graves en seguridad humana. Entre ellos, se produjeron nuevos desplazamientos forzados de población, así como impactos específicos de las tensiones sobre población desplazada y refugiada**. Cabe destacar casos como el de Mozambique, principalmente a causa de las operaciones militares para desarmar a las milicias de RENAMO, con más de 11.000 personas desplazadas, si bien a finales de año las cifras se redujeron; Eritrea, país de origen de 38.791 personas que según Frontex cruzaron el Mediterráneo en 2015, si bien la cifra fue inferior a las 46.000 de 2014; la "región del Triángulo Norte" centroamericana (El Salvador, Guatemala y Honduras), donde se produjo un incremento del desplazamiento forzado, con especial impacto en jóvenes, mujeres y población LGTBI; India-Pakistán, donde el aumento de la tensión en 2016 llevó al desplazamiento de miles de civiles residentes en torno a la frontera, en operaciones de evacuación; Kenya, donde el anuncio del Gobierno de sus planes de cerrar el campo de refugiados de Dadaab –que en diciembre de 2016 acogía en torno a 275.000 personas– generó numerosas llamadas de alerta humanitarias, si bien finalmente el Gobierno decidió posponer su cierre; y Líbano, donde se produjeron ataques contra población refugiada siria en respuesta a unas ofensivas suicidas atribuidas a ISIS.

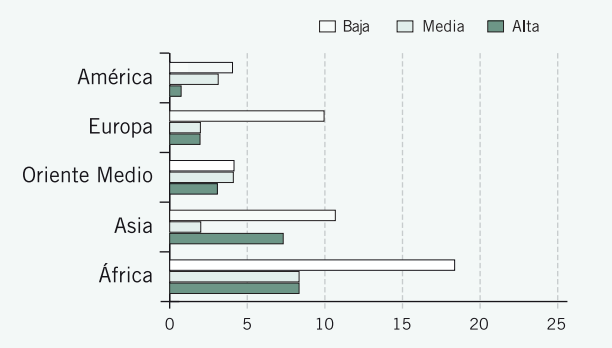
Las crisis de 2016 incluyeron otros hechos de violencia específica contra civiles. Entre ellos, secuestros temporales o continuados, como los cometidos por el LRA en el triángulo entre la RCA, RDC y Sudán del Sur (729 en 2016); asesinatos selectivos contra activistas, como defensores medioambientalistas en Honduras, con más de una decena en 2016 en ese país, o de activistas seculares y de minorías en Bangladesh; las graves cifras de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y prácticas de tortura en México, vinculadas a impunidad en la "lucha contra el narcotráfico"; o la persecución de colectivos profesionales específicos, como periodistas en numerosos países (entre ellos Turquía, el país con más periodistas encarcelados en 2016, con 81; seguido de China, con 38; Egipto, con 25; Eritrea, 17; y Etiopía, 16), entre otros. Además de impactos específicos, la violencia mediante atentados terroristas tuvo impactos indiscriminados sobre la población civil en diversas crisis sociopolíticas. Fue el caso de escenarios como Bangladesh, Turquía y Líbano, entre otros, con graves atentados en 2016, incluyendo ataques suicidas en lugares con gran densidad de civiles. Asimismo, la estrategia contra el terrorismo en muchas de las crisis sociopolíticas de 2016 tuvo graves impactos sobre la población civil organizada, a través del uso abusivo de legislación antiterrorista. Fue el caso, entre otros, de Egipto, donde se denunció la instrumentalización de políticas de "seguridad nacional" en la persecución de sectores disidentes, con el uso de prácticas de tortura, desapariciones, muertes en prisión, entre otras violaciones de derechos humanos; Turquía, donde se llevaron a cabo purgas masivas al amparo de la legislación de emergencia y antiterrorista, con denuncias de vulneraciones de derechos humanos; Bangladesh, donde se alertó de las tácticas de la Policía en la lucha antiterrorista; e Irán, donde se denunció persecución contra población sunní –incluyendo ejecución de presos kurdos– al amparo de la lucha contra ISIS. Asimismo, las tensiones se vieron influidas por dinámicas e impactos de género, que incluyeron el uso de violencia sexual y de género.[12]

Por otra parte, **las crisis sociopolíticas durante 2016 incluyeron entre sus elementos aspectos relativos a procesos de justicia transicional**. Entre los hechos acurridos durante el año, cabe destacar el inicio a finales de enero del proceso judicial en la Corte Penal Internacional contra el ex presidente de Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo y el antiguo ministro de juventud Charles

12. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

Blé Goudé, acusados de crímenes contra la humanidad por la violencia postelectoral a finales de 2010 y principios de 2011. Mientras, en Sri Lanka se creó una oficina de personas desaparecidas para investigar casos de desapariciones forzadas. No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil señalaron que la medida parecía encaminada a servir de contrapeso a la exigencia de la comunidad internacional, incluida la ONU, de un proceso de justicia transicional con implicación internacional. Por otra parte, se acercaba el final del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que cerrará en 2017 tras más de dos décadas de existencia, si bien el trabajo en torno a casos inacabados será continuado por el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MICT, por sus siglas en inglés).

Gráfico 2.2. **Intensidad de las tensiones por regiones**



2.2.2. Tendencias regionales

Las crisis sociopolíticas tuvieron graves impactos sobre la población civil en 2016 y se denunciaron medidas abusivas al amparo de legislaciones antiterroristas

Como en años previos, **en 2016 el continente africano continuó siendo el principal escenario de crisis sociopolíticas a nivel global.** Un 39% del total de contextos de tensión se produjeron en África (34 de los 87 casos). La mitad de las tensiones en África tuvo intensidad baja (18 casos), cerca de una cuarta parte una intensidad media (ocho casos) y una cifra similar una intensidad elevada (ocho casos). **Angola (Cabinda), Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenya, Mozambique, Nigeria, RDC y Túnez constituyeron los ocho escenarios de mayor gravedad en África.** Al mismo tiempo, cabe destacar que cerca de la mitad de las crisis sociopolíticas en África experimentaron un deterioro (16 casos) y un número equivalente evolucionaron sin cambios significativos, mientras solo en dos casos se identificó una mejoría (Sudán–Sudán del Sur y Lesotho). En relación a estos últimos, además de la reducción de la tensión en Lesotho, cabe destacar la decisión del régimen sudanés de reabrir las fronteras con su país vecino, cerradas desde 2011, año de la independencia de Sudán del Sur. La reapertura se interpretó como un paso histórico para la normalización de las relaciones entre ambos países y se dio en el marco del proceso de diálogo y medidas de confianza entre ambos.

Por otra parte, la mayoría de las tensiones en África fueron de carácter interno (21 casos, o un 62%). El 20% fueron tensiones de carácter interno internacionalizado (siete casos), con elementos de internacionalización que incluyeron la participación de actores armados foráneos, regionales o internacionales (como en Kenya –con acciones del grupo armado islamista de Somalia al-Shabaab y creciente presencia de ISIS–, Burkina Faso –donde se registró un aumento de actividades armadas de grupos yihadistas regionales–, Côte d'Ivoire –con la perpetración del primer atentado yihadista en el país, por al-Morabitoun–, Níger –con acciones armadas de grupos yihadistas externos– y Túnez –con una ofensiva de ISIS contra edificios de la Policía y Guardia Nacional, entre otros hechos de violencia de grupos de adscripción regional o internacional–) y el papel activo de actores locales en la diáspora (como en Rwanda), entre otros. Asimismo, el 18% fueron tensiones internacionales (seis casos): África Central (LRA), Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Rwanda, RDC-Uganda y Sudán-Sudán del Sur. Cabe destacar que la tensión entre Eritrea y Etiopía asistió a una de las más graves confrontaciones desde el fin de la guerra entre ambos países (1998-2000), con un enfrentamiento militar en territorio eritreo; y que en el caso de Marruecos–Sáhara Occidental se asistió al despliegue militar marroquí en la "buffer zone" próxima a la frontera con Mauritania, lo que elevó la tensión con el Frente POLISARIO.

En cuanto a las causas de fondo de las tensiones, en el continente africano se observó la prevalencia de disputas en torno a la oposición a las políticas de los respectivos gobiernos y/o sistemas. Este elemento estuvo presente en un 74% de los casos (25 contextos), porcentaje similar al del año anterior. Durante el año, esa incompatibilidad se materializó de diversas maneras, incluyendo **tensiones en torno a elecciones**. Así, entre las tensiones electorales, cabe destacar la grave crisis en Gambia, en medio de demandas de reforma electoral y represión de movilizaciones, no aceptación de los resultados por el presidente derrotado, despliegue de tropas de ECOWAS y resolución de la crisis tras una intensa mediación regional; el clima de tensión en las legislativas de Côte d'Ivoire; la tensión política en torno a las elecciones presidenciales en Níger, Djibouti, Chad y Uganda; y el incremento de tensiones en Kenya en torno a la proximidad de las elecciones de 2017, entre otros casos. También **destacaron las tensiones relativas a controversias en torno a límites de mandatos presidenciales en contextos con procesos electorales**, como los casos, entre otros, de RDC, con una grave crisis en 2016 por la expiración del mandato del presidente a finales de año y el aplazamiento de las elecciones; y de República de Congo, que asistió a un aumento de violencia en torno a unos comicios en que el presidente obtuvo un tercer mandato tras la anulación el año anterior del límite de periodos en el poder. También sobresalieron durante el año las **confrontaciones entre el Estado y sectores de oposición social y**

política. Fue el caso, entre otros, de Nigeria, con graves tensiones entre el Estado y el Movimiento Islámico de Nigeria –que pasó a ser calificado como grupo insurgente– y varios centenares de muertos en enfrentamientos entre el Ejército y seguidores del movimiento, en medio de alertas por los riesgos de repetición de un escenario como el relativo a Boko Haram. Cabe destacar también el caso de Etopía, ante la represión de las mayores movilizaciones antigubernamentales acontecidas en el país en la última década; el de Eritrea, donde continuó la grave crisis de derechos humanos; o el de Túnez, con la más grave convulsión social desde la revuelta que provocó la caída del régimen de Zine El Abidine Ben Ali en 2011.

El 74% de las tensiones en África tenía entre sus causas principales la oposición a los respectivos gobiernos o Estados

Asimismo, además de la oposición a los gobiernos o Estados, otras causas significativas durante el año en África fueron las luchas por el control de los recursos o el territorio (presente en un 38% de los casos o 13 escenarios) y las demandas identitarias y/o de autogobierno (otro 38% de los casos o 13 contextos). En relación a los recursos y territorio, continuó durante 2016 la violencia por fricciones comunitarias entre grupos pastoralistas y comunidades agrícolas en el centro de Nigeria, con al menos medio millar de víctimas mortales; y emergió de nuevo la violencia en la región petrolífera del Delta del Níger, alcanzando su punto más álgido desde 2009, año de la firma de la amnistía con los grupos en la región. En lo relativo a tensiones con dimensión identitaria o de autogobierno, sobresalió el caso de Angola (Cabinda), donde el grupo armado FLEC-FAC anunció la vuelta a las hostilidades y donde se registraron los enfrentamientos armados más graves en años. También tuvieron una presencia relevante durante el año las tensiones en Nigeria entre el Estado y movimientos secesionistas de la región sureña de Biafra, reactivadas en 2015 y que continuaron durante 2016.

En relación a las tensiones **en Asia, el continente se caracterizó por una gran heterogeneidad en cuanto a la tipología de las crisis sociopolíticas**. El 45% de las disputas en Asia tuvo carácter interno, mientras el 30% fueron de naturaleza interna internacionalizada y un 25% de carácter internacional. **Las tensiones internacionales incluyeron los casos de China-Japón; RPD Corea–EEUU, Japón, Rep. de Corea; RPD Corea-Rep. de Corea; India-Pakistán; y Tailandia-Camboya.** En términos de intensidad, un 55% de los casos fueron tensiones de baja intensidad (11 escenarios), mientras el 10% (dos casos) fueron de intensidad media y el restante 35% (siete casos) fueron de alta intensidad. Estas últimas incluyeron los contextos de Bangladesh; RPD Corea –EEUU, Japón, Rep. de Corea; RPD Corea-Rep. de Corea; India (Assam); India (Manipur); India-Pakistán y Pakistán. En conjunto, **los casos de alta intensidad en Asia supusieron una tercera parte de las tensiones de mayor gravedad en todo el mundo**.

Las tensiones de alta intensidad en Asia constituyeron un tercio de las tensiones globales de mayor gravedad en 2016

En lo que respecta a la evolución, el 50% de los casos no experimentaron cambios relevantes durante 2016, mientras que en un 25% se produjo un deterioro de la tensión y en otro 25% se asistió a una mejora de la situación de la conflictividad. Fue especialmente preocupante el deterioro experimentado en varias de las tensiones de carácter internacional. Entre ellas, la escalada de tensión entre India y Pakistán se materializó en enfrentamientos de gravedad y episodios de violencia en la Línea de Control y se vio influida por graves incidentes en Jammu y Cachemira, incluyendo el ataque más mortífero en décadas contra las fuerzas indias en Cachemira. También se deterioró gravemente la tensión política y militar entre China y Japón, así como las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Corea del Sur, con nuevos ensayos nucleares aún si no se produjeron incidentes militares. En clave positiva, cabe destacar la evolución en Nepal, donde la situación mejoró tras el deterioro y disturbios violentos de 2015 en protesta por los planes de reorganización territorial. Así, durante el año se levantó el bloqueo que impedía el abastecimiento de bienes esenciales, aliviando la grave situación humanitaria, y permitiendo el repliegue de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, en lo referente a las causas de las crisis sociopolíticas, el factor predominante en el continente asiático fue la dimensión de demandas identitarias y de autogobierno, presente como uno de los factores principales en un 55% de las tensiones (11 casos). Cabe destacar también que el 50% de las crisis sociopolíticas tenían entre sus factores principales la oposición al gobierno o sistema del país, en línea con años anteriores. Además, en un 40% de los casos, la lucha por el control del territorio y/o de los recursos fue una de las principales causas de la disputa.

América registró ocho tensiones durante el 2016 (un 9% del total global). Todas las tensiones identificadas en el continente americano tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas gubernamentales, lo que tuvo plasmación durante el año en forma de tensión entre sectores de poder (como en Venezuela, entre Presidencia y el nuevo Legislativo); grave represión de activistas (como en Honduras, señalado en 2016 como el país más peligroso para defensores medioambientales y uno de los más peligrosos para activistas de derechos humanos; o en México, con una grave crisis de derechos humanos, vinculada en parte a la impunidad en torno a la llamada "guerra contra el narcotráfico"); tensiones electorales y constitucionales (como en Perú, en torno a los comicios presidenciales, y en Bolivia, en torno a un referéndum constitucional que finalmente resultó en la no ampliación del límite

de mandatos presidenciales). Cabe señalar también que en una cuarta parte de las tensiones la lucha por los recursos y/o el territorio también fue un factor relevante entre las principales causas de las disputas. Por otra parte, los escenarios de tensión tuvieron intensidades diversas, incluyendo cuatro casos de baja intensidad (Bolivia, Guatemala, Honduras, Perú), tres casos de intensidad media (Haití, México y Venezuela) y un caso de alta intensidad (El Salvador). **En relación a este último caso, El Salvador continuó siendo el país con la tasa de homicidios más alta fuera de zona de guerra, con 5.278 homicidios en 2016, y la tasa de feminicidios también más elevada del mundo,** a lo que se sumaron muertes de presuntos pandilleros a manos de fuerzas de seguridad en un contexto de grave incremento de dicha violencia entre Estado y pandillas.

Las tensiones en el continente americano tuvieron un componente mayoritario de oposición a las políticas gubernamentales

Las tensiones en América fueron internas en su mayoría (siete de los ocho casos), mientras que la crisis sociopolítica en Haití continuó caracterizándose por su dimensión internacionalizada, estrechamente vinculada a la presencia de la misión de la ONU en el país, MINUSTAH. Cabe destacar también que durante 2016 los Gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala acordaron poner en marcha una fuerza regional con componente militar y policial para combatir a las bandas criminales y el narcotráfico en la llamada "región del Triángulo Norte", que entró en funcionamiento con el nombre de "Fuerza Trinacional contra el Crimen Organizado". Por otra parte, cabe mencionar que aunque no se identificaron contextos de tensión dentro de su territorio, EEUU se vio involucrado en tensiones internacionales fuera del continente americano, tanto en Asia como en Oriente Medio. Así, entre otras, EEUU fue un actor relevante en la tensión internacional en torno al programa nuclear norcoreano, en la disputa sobre el programa atómico iraní, y en la tensión entre Ucrania y Rusia.

En Europa, las dos tensiones de mayor intensidad, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) y Turquía, fueron escenario de una grave escalada en 2016

En cuanto a Europa, la región registró el 16% (14 casos) de las tensiones a nivel global, si bien en su inmensa mayoría fueron tensiones de baja intensidad (72% o 10 de sus 14 casos). Un 14% de las tensiones (dos casos) fueron tensiones de intensidad media. Otro 14% (dos casos) fueron situaciones de alta intensidad, que además revistieron especial gravedad durante el año. Estos dos últimos incluyeron, en primer lugar, la disputa entre Armenia y Azerbaiyán en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, que fue escenario en 2016 de la crisis violenta más grave desde el fin de la guerra en 1994, con choques durante el año que causaron entre un centenar y dos centenares de víctimas mortales; y, en segundo lugar, la crisis en Turquía, de naturaleza múltiple, y que incluyó un intento fallido de golpe de Estado –con 265 víctimas mortales y en torno a 2.200 heridos– y una serie de atentados de gran escala atribuidos a ISIS, con centenares de víctimas mortales. En cambio, la zona del Norte del Cáucaso, escenario otros años de tensiones de alta intensidad asistió a niveles bajos de conflictividad, excepto en el caso de Chechenia, que continuó afectada por la grave crisis de derechos humanos que asola a la república y que asistió a un aumento de las víctimas mortales relativas al conflicto entre el régimen y la insurgencia islamista.

En cuanto a las causas, la mayoría de las tensiones en Europa tenía entre sus causas principales la disputa en torno a demandas identitarias y/o de autogobierno, cuestión presente en un 79% de los casos (11 de las 14). Cabe señalar al respecto, la intentona en la región de Osetia del Sur de celebrar un referéndum relativo a una unión a Rusia, que finalmente fue aplazado. No obstante, a esa causa histórica de autogobierno en el continente europeo, se añade el factor vinculado a las disputas en torno a las políticas gubernamentales o la oposición al sistema, creciente en los últimos años y que en 2016 fue un factor principal en el 71% de los casos (10 tensiones). Fue especialmente relevante en casos como el de Turquía, pero también estuvo presente de forma destacada en forma de dinámicas de tensión localizada en casos tradicionalmente vinculados a disputas de autogobierno como Georgia (Abjasia) y Serbia–Kosovo o en nuevos escenarios de 2016, como Armenia. Por otra parte, el 43% de las tensiones (seis casos) fueron de carácter interno internacionalizado, el 36% (cinco casos) fueron tensiones internas, y el 21% (tres casos) fueron tensiones internacionales. Éstas incluyeron los casos de Serbia-Kosovo, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) y Ucrania-Rusia. De esas tres, los dos últimos casos experimentaron un nivel de intensidad elevado y una evolución negativa durante el año, generando numerosas alertas por el alcance internacional y posibles repercusiones. Así, cabe destacar que Rusia y Ucrania incrementaron la militarización en torno a Crimea y que dentro de la península anexionada por Rusia se agravó la crisis de derechos humanos y la persecución de la minoría tártara, con la prohibición de su órgano de representación (Mejlis), designado organización extremista. No solo evolucionaron de manera negativa esos dos casos durante el año. Un 36% de las tensiones (cinco casos) registraron un deterioro durante el año, otro 36% no experimentó cambios significativos, y un 28% (cuatro casos) asistió a una reducción de los niveles de tensión.

Por último**, en lo que respecta a la situación en Oriente Medio, la región registró 11 tensiones, un 13% de las crisis sociopolíticas en el mundo**, incluyendo el 14%

de las tensiones globales de intensidad elevada, frente al 38% de África o el 33% de Asia. Continuó siendo **la segunda región con mayor porcentaje de tensiones elevadas con respecto al cómputo total de tensiones por región.** Así, el 28% de las crisis en Oriente Medio fueron de gran intensidad: Egipto; Israel-Siria-Líbano; y Líbano, en línea con el año anterior. En relación a estos casos, cabe destacar que Egipto albergó durante el año las protestas más multitudinarias desde 2013, mientras continuó la grave crisis de derechos humanos que afecta al país, con múltiples denuncias de abusos, persecución y acoso a activistas y sectores disidentes. Líbano se vio afectado por múltiples elementos, como las consecuencias de la guerra en Siria –incluyendo ofensivas suicidas atribuidas a ISIS– y tensiones con Arabia Saudita. En lo que respecta a Israel-Siria-Líbano, la tensión persistió en niveles elevados, aunque se redujo la violencia con respecto a años anteriores. Además, un 36% (cuatro casos) fueron tensiones de intensidad media y otro 36% de intensidad baja. La inmensa mayoría de las tensiones en la región presentaron una situación similar a la del año anterior. Un caso, el relativo a la cuestión kurda en el noroeste de Irán se deterioró, con un incremento de víctimas mortales por hechos de violencia. Por primera vez en casi dos décadas se produjeron enfrentamientos entre tropas iraníes y el PDKI. Solo una tensión experimentó menor violencia que en 2015, el ya mencionado caso de Líbano, que –pese a la reducción en comparación con el año anterior– mantuvo niveles elevados de conflictividad.

La situación en la zona se caracterizó por su complejidad en cuanto a las causas de las disputas. **Un 64% de las tensiones (siete casos) tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno o al sistema.** En ese sentido, el quinto aniversario de las revueltas en la región de 2011 motivó manifestaciones durante el año, como en Bahrein. En un 55% de las crisis (seis casos) el factor de demandas identitarias y/o de autogobierno fue también una de las causas principales. Asimismo, como en otras regiones, también la dimensión de disputa por los recursos y/o territorio fue una de las causas principales (en 27% de los casos), si bien este factor alimentó en diverso grado muchas situaciones. Por otra parte, el 46% de las tensiones (cinco casos) fueron de carácter interno internacionalizado. Entre los elementos de internacionalización se cuentan la presencia de grupos de adscripción regional o internacional (como ISIS en Líbano; AQPA en Arabia Saudita) o grupos locales con bases en el exterior o que lanzan ataques desde el exterior (PJAK y PDKI en Irán, entre otros) o la implicación de gobiernos externos. Además, cabe señalar la repercusión que tuvo sobre la región durante el año la tensa relación entre dos potencias clave en la zona, Arabia Saudita e Irán, agravada en 2016. La decisión de Riad de ejecutar a un destacado clérigo chií, Nimr al-Nimr –entre otros 47 condenados por delitos de terrorismo– generó manifestaciones y tensiones en varios países, como Bahrein, Líbano e Iraq e incidentes violentos en el propio Irán, motivando una grave crisis diplomática y riesgos de más desestabilización en la región. Otro 36% de las tensiones fueron internas (cuatro casos) y el 18% (dos casos) fueron internacionales. Las tensiones internacionales en Oriente Medio abarcaban el caso de la disputa entre Irán y EEUU e Israel –entre otros actores– en torno al programa nuclear iraní, de enorme relevancia simbólica y material en la región, y que pese a la firma del acuerdo nuclear en 2015 asistió a algunos incidentes en 2016; y el caso de Israel-Siria-Líbano, afectado por las dinámicas bélicas regionales. Asimismo, hacia finales de año planeaba la incertidumbre sobre la región por las posibles repercusiones para las tensiones en Oriente Medio de la elección del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Austral

Mozambique	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO

Síntesis:
El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista FRELIMO condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado RENAMO, apoyado por las minorías blancas gobernantes en Rhodesia (antigua Zimbabue) y la Sudáfrica del apartheid, en el contexto de la Guerra Fría. Además, el país se vio afectado por una grave hambruna y una pésima gestión económica. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de guerra, un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico aunque con elevados niveles de desigualdad en el país. El líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, ha sido incapaz de convertir su partido en una plataforma organizada y estructurada con aspiraciones de alcanzar el poder y desde las primeras elecciones en 1994 hasta la actualidad, ha ido perdiendo cuota de poder político en detrimento de FRELIMO y otros partidos, como el MDM (escisión de RENAMO). En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas por un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de reformas, principalmente la reforma de la comisión electoral nacional y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992.

Las tensiones entre el Gobierno mozambiqueño y el principal grupo opositor RENAMO se intensificaron durante el año. El origen de la tensión deriva de la crisis surgida tras las elecciones presidenciales y legislativas de 2014 y la demanda del grupo opositor de gobernar en las seis provincias del centro y norte del país donde obtuvieron la mayoría de votos en los comicios: Manica, Sofala, Tete, Zambezia, Nampula y Niassa. **Durante el 2016, los niveles de violencia política aumentaron de manera significativa, convirtiéndose en los más elevados desde los episodios de violencia que padeció el país en el año 2013**. Desde el mes de enero y hasta octubre, y según datos del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), **se registraron 68 eventos de violencia política en diez provincias del país**, **frente a los 19 registrados durante el 2015 en seis provincias. Al finalizar el año, entre 77 y 110 personas habrían perdido la vida en diferentes incidentes violentos en el país relacionados con el conflicto.**[13] La mayoría de los actos de violencia se concentraron en las seis provincias que RENAMO demanda y tuvieron que ver con bloqueos de carreteras y emboscadas realizadas por las milicias de RENAMO, principalmente contra población civil, así como enfrentamientos directos con las Fuerzas Armadas. Durante el primer cuatrimestre del año se registró el mayor número de incidentes y víctimas mortales en el país. En el que fue el peor episodio registrado durante el año, los días 10 y 12 de abril, en un enfrentamiento directo en las provincias de Manica y Sofala, se reportaron al menos veinte combatientes de RENAMO y un soldado muertos. Ese mismo mes, campesinos del distrito de Gorongosa, provincia de Sofala y principal base de RENAMO, informaron del hallazgo de una fosa común con más de 100 cuerpos, aunque posteriormente la cifra varió, situándola algunos medios en alrededor de 15. Si bien las autoridades mozambiqueñas negaron la existencia de la fosa, la Comisión de Derechos Humanos de Mozambique informó de la apertura de una investigación para esclarecer los hechos, sobre los cuales se especula sobre su posible vinculación con la violencia desatada en octubre de 2015. Los enfrentamientos armados entre los militantes de RENAMO y las fuerzas de seguridad continuaron a lo largo del año, dificultando los intentos de mediación abiertos en el país para resolver la crisis.[14]

Los niveles de violencia política en Mozambique aumentaron de manera significativa en 2016, convirtiéndose en los más elevados desde los episodios registrados en el año 2013

La escalada de tensión en el país también se tradujo en un aumento de los desplazamientos forzados de población debido a la violencia. Las ONG Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras denunciaron que el origen principal del desplazamiento forzoso se debió a las operaciones militares del Ejército mozambiqueño destinadas a desarmar a las milicias de RENAMO iniciadas en octubre de 2015 en la provincia de Tete, así como a la intensificación de la violencia en Sofala y Zambezia. A raíz de estos hechos, a principios de 2016 ACNUR informó de un aumento significativo de personas que huían de los intensos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes, buscando refugio en Malawi. Durante el mes de febrero, los datos de ACNUR recogieron 6.000 refugiados mozambiqueños en Malawi, en la aldea de Kapise, que ascendieron a 11.500 durante el mes de marzo. A finalizar el año, las cifras se habían reducido sustancialmente, registrando en el campo de refugiados de Kapise 2.300 personas, según datos presentados por la organización Freedom House. Paralelamente, a la situación de inestabilidad política en el país se le añadió la inestabilidad económica y financiera generada a partir de la revelación de que el Gobierno de Mozambique no había informado de una deuda y préstamos por más de 1.000 millones de dólares frente al Credit Suisse y al banco ruso VTB. Estos hechos generaron que el FMI, el Banco Mundial y Reino Unido, suspendieran durante el mes de abril los préstamos de ayuda al país. Posteriormente, y tras una nueva revelación del no pago de otra deuda que ascendía a 1.400 millones de dólares, el grupo de donantes Programme Aid Partners también suspendió la ayuda financiera al país.

África Occidental

Burkina Faso	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel

Síntesis:
Burkina Faso, antigua colonia francesa, se ha enfrentado desde su independencia en 1960 a diversos golpes militares y numerosos retos socioeconómicos, en un país sin salida al mar y vulnerable a la volatilidad de los precios globales de materias como el algodón. La etapa bajo la presidencia de Blaise Compaoré, quien tomó el poder mediante golpe militar en 1987 y que ganó sucesivas elecciones, afrontó progresivamente numerosos ejes de tensión, vinculados al déficit de derechos humanos, a las alegaciones de participación del país en conflictos de países vecinos, al alza de precios y deterioro del nivel de vida de la población y a las críticas a los intentos del presidente por perpetuarse en el poder. En 2011 se incrementaron las protestas y se produjeron diversos motines militares, generándose una grave crisis de desconfianza entre el Gobierno y sectores diversos. A finales de 2014 Compaoré abandonó el poder tras amplias protestas ciudadanas contra los planes del presidente de eliminar los límites

13. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016).
14. Véase el resumen sobre Mozambique en el capítulo 3 (Procesos de paz).

a su mandato presidencial y tras la toma de poder del Ejército. Ante el rechazo social al golpe militar, se dio paso a un proceso de transición bajo liderazgos compartidos, incluyendo las Fuerzas Armadas. A finales de 2015, y tras la celebración de elecciones, el país cerró el periodo transicional y devolvió las instituciones a la ciudadanía.

El año en Burkina Faso estuvo marcado por el inicio de la primera legislatura del nuevo Gobierno post transición que logró estabilizar el país, así como por las diferentes causas judiciales que se mantuvieron abiertas contra los responsables de la represión del antiguo régimen, y por los ataques provenientes de grupos armados de corte yihadista que operan en la región del Sahel. En este sentido, **si bien la situación política nacional mejoró sustancialmente en relación al año 2015, la situación de seguridad se agravó debido a un mayor registro de actividades armadas generadas por grupos yihadistas regionales**. Tras su triunfo en las elecciones presidenciales celebradas el 29 de noviembre de 2015, Roch Marc Christian Kaboré, candidato del partido Movimiento Popular para el Congreso (MPP), se convirtió en el nuevo presidente nacional, jurando el cargo el 29 de diciembre de 2015. **Con su llegada se inició una nueva etapa en el país, cerrando el período de transición iniciado con la caída de Blaise Compaoré a finales de 2014.** El 7 de enero, Kaboré designó nuevo primer ministro a Paul Kaba Thiega, quien fue ratificado posteriormente por la Asamblea Nacional, conformando de esta forma el nuevo Gobierno burkinés. De manera paralela a la constitución de las nuevas estructuras ejecutiva y legislativa, el Estado prosiguió con las causas pendientes provenientes de la represión generada por el antiguo régimen. Luc-Adolphe Tiao, quien fuera ex primer ministro en la etapa de Compaoré, fue arrestado el 16 de septiembre después de su retorno del exilio en Côte d'Ivoire el 9 de septiembre, siendo acusado por su responsabilidad en los hechos represivos producidos contra el levantamiento ciudadano de octubre de 2014. Por otro lado, y en lo referente a la situación de tensión que aún permanece en el país relativa al intento de golpe de Estado fallido de 2015 por miembros del Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP) –hoy ilegalizado–, durante el año se produjeron algunos episodios destacables. A principios de año se reportó que miembros de la disuelta guardia presidencial asaltaron un depósito de armas en Yimdi, a las afueras de la capital, siendo posteriormente detenidos. El 23 de enero, Eddie Komboigo, presidente del partido del expresidente Compaoré, Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP), fue arrestado a su regreso al país acusado de complicidad en el golpe, siendo liberado en mayo a la espera de juicio. Paralelamente, el tribunal militar creado para juzgar el golpe de Estado fallido emitió en enero una orden de arresto contra el presidente de la Asamblea Nacional de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, acusado de participar en el mismo, lo que generó malestar en el país vecino que se negó a extraditarle. Sin embargo, en abril la Corte Suprema de Burkina Faso, amparándose en razones procedimentales, ordenó la cancelación de las órdenes de arresto de los sospechosos de participar en el golpe, incluido Soro, así como también de las personas sospechosas del asesinato del ex presidente Thomas Sankara en 1987, incluida la que pesaba sobre el expresidente Compaoré, exiliado en Côte d'Ivoire y cuyo Gobierno le concedió la ciudadanía el 22 de febrero para evitar una posible extradición a Burkina Faso. Esta situación generó que el Gobierno destituyese al juez instructor del caso, nombrando un nuevo magistrado que reabrió las órdenes de detención. A su vez, en septiembre el Gobierno anunció que el ex general Yacouba Isaac Zida, ex primer ministro en el Gobierno de transición encabezado por Michel Kafando, y quien abandonó el país en febrero, será procesado por deserción. Posteriormente, el 21 de octubre, y tras un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad burkinesas y ex miembros del RSP producido a principios del mes, donde murieron dos ex guardias presidenciales y fueron detenidos otros 14, el Gobierno denunció que se planeaba un nuevo intento de golpe de Estado. Finalmente, durante el mes de octubre, el partido CDP y otros grupos vinculados con el antiguo régimen formaron un nuevo grupo opositor, denominado Coalición por la Democracia y la Reconciliación Nacional (CODER).

Un comando armado vinculado con AQMI atacó en enero la capital burkinesa causando al menos 30 muertos

Por otro lado, y en lo que respecta a la violencia producida en el país por organizaciones armadas de corte yihadista que operan en la región del Sahel, durante el año se registraron diferentes incidentes que agravaron la situación de seguridad nacional. **En el peor episodio del año, el 15 de enero la capital burkinesa, Ouagadougou** –que hasta el momento no había sufrido ningún atentado–, **padeció un ataque reivindicado por el grupo yihadista de origen argelino al-Mourabitoun, vinculado con AQMI**. Un comando armado atacó durante horas varias instalaciones turísticas en el centro de la capital, dejando un balance de al menos 30 personas muertas –la mayoría ciudadanos extranjeros, entre quienes se encontraba la fotógrafa franco-marroquí Leila Alaoui– y alrededor de 50 personas heridas. Unas 126 personas fueron tomadas como rehenes en uno de los hoteles atacados y posteriormente liberadas. Tras el ataque una pareja australiana fue secuestrada en la ciudad norteña de Djibo, cercana a la frontera con Malí, por otro grupo armado vinculado a AQMI, Ansar Dine, de origen maliense. Tras los atentados el Gobierno aumentó los esfuerzos regionales y desplegó una operación conjunta con las fuerzas malienses en la frontera entre el 22 de febrero y el 6 de marzo. El grupo regional de combate al terrorismo denominado G-5 Sahel group, conformado por Burkina Faso, Mauritania, Malí, Níger y Chad, reforzó su cooperación y recomendó a sus miembros crear fuerzas de intervención rápida. A su vez, a mediados de junio **se dio a conocer en la zona el grupo autodenominado Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS, por sus siglas en inglés) –dirigido por Aduan Walid al-Saharawi, quien fuera uno de los comandantes de al-Mourabitoun–** adjudicándose

diferentes ataques en el país. A finales de año, en un ataque registrado en la frontera entre Burkina Faso y Níger, un grupo armado atacó a las fuerzas de seguridad burkinesas en la gendarmería de Nassoumbou, matando a 12 soldados.

Côte d'Ivoire	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI

Síntesis:
La discriminación política, económica y social hacia los marfileños originarios del norte del país se encuentra en la base de la grave crisis iniciada en el país en los años ochenta. Con un primer conflicto en 2002 y la reactivación de la violencia armada en 2010 tras las elecciones presidenciales, la estabilidad en el país continúa en ciernes. La conclusión de los enfrentamientos en abril de 2011 y la creación de un nuevo Gobierno, con el presidente Alassane Ouattara (de origen norteño) al frente del país, abrieron las expectativas para el cambio. La justicia y reparación a las víctimas, la transformación de leyes discriminatorias, la resolución de las disputas en torno a la propiedad de tierras y la reforma del sector de seguridad, son algunos de los grandes retos que enfrenta el país. La presencia de gran número de armas ligeras, la persistencia de la violencia en el oeste y la inestable frontera con Liberia, donde permanecen grupos de mercenarios, ponen en peligro una paz frágil.

El inicio de la segunda legislatura de Alassane Ouattara estuvo marcada por el primer atentado yihadista registrado en el país. El 13 de marzo, el grupo armado al-Morabitoun, vinculado a la red de al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) atacó un complejo turístico hotelero situado en la zona costera Grand Bassam. En el ataque perdieron la vida al menos 14 civiles (entre ellos cuatro europeos) y dos soldados marfileños y otras 33 personas resultaron heridas. El Gobierno informó también de la muerte de tres de los seis asaltantes a manos de las fuerzas de seguridad. En el momento del atentado Côte d'Ivoire se encontraba en alerta después de los ataques producidos contra instalaciones turísticas en Bamako y Ougadougou,[15] debido a que el país fue considerado un objetivo de los movimientos yihadistas por su papel en la guerra de Malí y la cobertura dada a la operación francesa Barkhane. En el plano de política interna, el año estuvo marcado por la reforma constitucional y las elecciones legislativas celebradas a finales de año. En el marco de la reforma de la Carta Magna, el 6 de octubre, y después de meses de redacción por parte de un grupo de expertos designado por el presidente Ouattara, éste presentó al Parlamento el proyecto de la nueva Constitución, que incluyó medidas como la creación de la figura de vicepresidente, la formación de un Senado compuesto por antiguos cargos públicos, o la anulación del decreto que obliga a que los progenitores de cualquier candidato presidencial hayan nacido en el país. **Tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del borrador de la nueva Constitución, ésta se sometió a referéndum el 30 de octubre, siendo ratificada por el 93,42% de los votos, aunque la oposición no aceptó los resultados** ni la cifra oficial de participación, que el Gobierno situó en el 42,42% del sufragio. Luego del referéndum, el país celebró las elecciones legislativas el 18 de diciembre. Los comicios, que estuvieron envueltos en un clima de tensión entre el Gobierno y la oposición, dieron la victoria con mayoría absoluta –167 escaños de los 254– a la coalición gobernante Rally of Houphouëtists for Democracy and Peace (RHDP). Por otro lado, a finales de enero se inició el proceso judicial en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el ex presidente Laurent Gbagbo y el antiguo Ministro de la Juventud, Charles Blé Goudé, acusados de crímenes contra la humanidad por la violencia postelectoral desatada a finales de 2010 y principios de 2011 que dejó un balance de unas 3.000 víctimas mortales. La CPI también reclamó a Côte d'Ivoire la extradición de Simone Gbagbo, ex primera dama, para ser juzgada por los mismos crímenes, pero las autoridades marfileñas negaron la entrega, para que fuera juzgada en el país. Simone había sido condenada en 2015 a 20 años de cárcel, siendo considerada culpable de amenazar la seguridad del país, responsable de alterar el orden público y de organizar a grupos armados. El 31 de mayo se inició en Abidjan, capital nacional, el juicio contra ella bajo acusaciones de crímenes contra la humanidad. Posteriormente, y ante la negativa de Simone de comparecer en el mismo, el juicio continuó en su ausencia durante el resto de la vista. A su vez, el 18 de febrero, un tribunal nacional condenó a cadena perpetua a los militares Anselme Séka Yapo, Brunot Dogbo Blé y Séry Daleba, por el asesinato del ex líder de la junta y ex presidente, Robert Gueï, durante el golpe de Estado fallido de 2002. Finalmente, y en lo concerniente a la Misión de la ONU en el país (UNOCI), durante el mes de abril el Consejo de Seguridad de la ONU decidió retirar las sanciones que pesaban sobre Côte d'Ivoire, y anunció el cierre de la misión de paz para el 30 de junio del 2017. El Consejo de Seguridad adoptó la resolución aseverando que la UNOCI –que cuenta con 4.000 tropas en la actualidad– cumplió con su mandato, luego de haber sido creada en el año 2004 para apoyar al país tras el fin de su guerra civil, y de ser posteriormente adaptada para responder a la crisis que se vivió en 2010.

Gambia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política

15. Véase el resumen sobre Burkina Faso en este capítulo.

Síntesis:
Yahya Jammeh ascendió al poder tras un golpe de Estado en 1994, derrocando al hasta entonces presidente Dawda Jawara, quien llevaba en el poder desde la proclamación de la independencia en 1965. Dos años después del golpe, el país volvió al gobierno civil y Jammeh abandonó el cargo militar fundando el partido político Alianza para la Reorientación y la Construcción Patriótica (APRC), con el que ganó las elecciones presidenciales de 1996. Desde ese momento, Jammeh se ha mantenido en el poder, ganando en otras tres elecciones presidenciales diferentes (2001, 2006, 2011) –que no han estado exentas de acusaciones de fraude–, y consolidando un régimen basado en políticas autoritarias y represivas contra la oposición.

Durante todo el año aumentaron en Gambia las tensiones políticas generadas por las demandas populares de reforma del sistema electoral y mayor libertad de expresión, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad gambianas. Los partidos opositores iniciaron el año solicitando al Gobierno la reforma del sistema electoral antes de las elecciones previstas para diciembre de 2016, lo que fue rechazado durante el mes de enero en el Parlamento debido a la mayoría de escaños del partido de Gobierno, la Alianza para la Reorientación y la Construcción Patriótica (APRC, por sus siglas en inglés). Una manifestación pacífica celebrada a mediados de abril en demanda de reforma electoral y libertad de expresión fue disuelta por las fuerzas de seguridad. Se detuvo a unas 50 personas, entre ellas a destacados miembros del partido opositor, Partido Democrático Unido (UDP), como Fatoumata Jawara, Ousainou Darboe o Solo Sandeng. Este último posteriormente murió bajo custodia policial. La muerte de Sandeng generó más protestas ciudadanas que fueron respondidas con mayor represión por parte de las fuerzas de seguridad –que detuvieron a nuevos líderes de la oposición–, así como con respuestas judiciales desproporcionadas. Otro miembro del UDP, Solo Krummah, fue arrestado en el mes de mayo, ingresando posteriormente en el hospital debido a lesiones producidas bajo custodia policial, falleciendo el día 20 de agosto. Tanto las Naciones Unidas como el Gobierno de EEUU solicitaron al Gobierno presidido por Yahya Jammeh una investigación independiente sobre ambas muertes. Durante el mes de junio, el presidente Jammeh atribuyó al grupo étnico mayoritario en el país, mandinka, estar detrás de las movilizaciones y protestas populares, acusándolos de enemigos y amenazando con "matarlos uno por uno", declaraciones que fueron duramente condenadas por el consejero especial de las Naciones Unidas sobre el genocidio.

En medio de este clima de protestas y tensión, los siete partidos opositores presentaron durante el mes de septiembre a sus candidatos a las elecciones presidenciales previstas para el 1 de diciembre. El 14 de octubre, los siete partidos anunciaron que presentarían un único candidato para poder competir con Jammeh. Adama Barrow, quien había sido elegido el candidato del UDP luego de la detención y encarcelación de su líder Ousainou Darboe, fue designado candidato opositor. Finalmente, **el 1 de diciembre se celebraron las elecciones presidenciales en el país, las cuales dieron la victoria a Barrow con el 43,3% de los votos, frente al 39,6% que obtuvo el presidente Jammeh**. En un primer momento, Jammeh, quien llevaba 22 años en el poder, aceptó los resultados de los comicios, pero posteriormente acusó a la comisión electoral de no haber realizado el escrutinio de los sufragios correctamente, negándose a reconocer los resultados y demandando la celebración de nuevas elecciones. Esta situación generó una profunda crisis política en el país, que hizo que organismos como la UA, la ECOWAS o la ONU interviniesen instando a Jammeh a aceptar la derrota electoral y a respetar la democracia. El 13 de diciembre, una comisión de alto nivel de la ECOWAS encabezada por Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de Liberia, y por Muhammadu Buhari, presidente nigeriano, se reunió por separado con Jammeh y con Barrow en Banjul, capital gambiana, sin lograr acuerdos. Ese mismo día las fuerzas de seguridad gambianas tomaron la sede de la Comisión Electoral en Gambia. El 17 de diciembre, en la cumbre de Jefes de Estado de la ECOWAS celebrada en Abuja, Nigeria, ésta reconoció oficialmente la victoria de Barrow. La ECOWAS nombró a Buhari y a John Dramani Mahama, presidente saliente de Ghana, coordinadores del equipo de mediación, y comunicó que las fuerzas regionales se encontraban en alerta ante una negativa de Jammeh de entregar el poder el 19 de enero, fecha en la que concluía su mandato. El 31 de diciembre, **Jammeh declaró que el despliegue de las fuerzas de la ECOWAS en el país sería una "declaración de guerra" y se negó a reconocer su derrota**. Finalmente, el 19 de enero de 2017, Adama **Barrow tuvo que ser investido presidente en la embajada de Gambia en Senegal, mientras en el país entraban las tropas de la ECOWAS ante la negativa de Jammeh de abandonar el poder**. Tras intensos días de negociación, Jammeh cedió y se exilió en Guinea Ecuatorial, vía Conakry, concluyendo de esta forma sus 22 años de poder en el país.

La negativa del presidente de Gambia Yahya Jammeh a reconocer el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales generó una crisis que fue resuelta tras la intervención de la ECOWAS

Guinea-Bissau	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, redes internacionales de narcotráfico

Síntesis:
La historia de Guinea-Bissau desde su independencia de Portugal en 1974 incluye una sucesión de guerras civiles

y golpes de Estado que han impedido al país alcanzar la estabilidad política además de abortar cualquier intento de funcionamiento democrático. La gran influencia de las Fuerzas Armadas sobre la realidad política del país y los enfrentamientos entre partidos que representan a diferentes grupos étnicos suponen un gran obstáculo para el logro de la paz. La ruptura del pacto de estabilidad firmado en 2007 entre los principales partidos políticos fue, una vez más, una oportunidad perdida para poner fin a la dinámica violenta que domina la vida política. El impacto cada vez mayor de las redes del narcotráfico internacional en África Occidental se había convertido en un factor añadido a la crisis. El asesinato del presidente, Joao Bernardo Vieira, en marzo de 2009 supuso el inicio de una nueva época de inestabilidad. En abril de 2012 el Ejército perpetró un nuevo golpe de Estado tras una primera ronda en las elecciones legislativas en las que ganó el candidato del PAIGC, que ocupaba el poder, y que fue cuestionada por parte de la oposición, pese al respaldo de los observadores internacionales. Tras el golpe se inició un nuevo proceso de transición.

La crisis política en el país, producto de la confrontación por la designación del cargo de primer ministro entre el presidente, José Mario Vaz, y la facción dominante del partido de Gobierno, el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), se mantuvo durante todo el año. Desde agosto de 2015, momento en el que estalló la crisis debido al cese por Vaz del entonces primer ministro, Domingos Simoes Pereira, y hasta finales de 2016, el país tuvo cinco primeros ministros sin lograr resolver la disputa. Tras la destitución de Pereira, el presidente Vaz nombró a Baciro Djá nuevo primer ministro, desatando la crisis política que obligó al presidente a destituir a Djá en septiembre de 2015, y a nombrar a Carlos Correira, propuesto por la facción dominante del PAIGC, como cabeza del Gobierno. Sin embargo, este movimiento no logró detener la crisis debido a las desavenencias entre el presidente y el nuevo primer ministro. Después de meses de disputas que impidieron la conformación de un nuevo Gobierno, el 12 de mayo el presidente Vaz disolvió el Gobierno y encargó al partido en el poder (PAIGC) la formación de un nuevo gabinete. La decisión generó momentos de tensión cuando las fuerzas de seguridad impidieron a los ministros la entrada a sus oficinas. Frente a la oposición de la facción principal del PAIGC, el 26 de mayo Vaz creó un "gobierno de iniciativa presidencial" con el apoyo del Partido de la Renovación Social (PRS) y de 15 diputados disidentes del PAIGC, y nombró nuevamente a Baciro Djá como primer ministro. El bloque principal del partido opositor PAIGC en el Congreso rechazó la nominación de Djá e hizo un llamamiento a la movilización ciudadana que conllevó enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. ECOWAS y el Consejo de Seguridad de la ONU manifestaron su preocupación por la situación política e hicieron un llamamiento al diálogo. El Consejo de Seguridad se dirigió también a las Fuerzas Armadas y de seguridad del país para que éstas no interfirieran en la situación política. En medio de este clima de tensión, ECOWAS anunció el 4 de junio la prolongación del mandato de su misión militar en el país (ECOMIB) hasta junio de 2017. Posteriormente, los días 14 y 15 de agosto, y bajo la mediación del organismo regional, se produjo una primera reunión para reanudar el diálogo político y tratar de resolver la crisis entre el primer ministro, el presidente y los principales dirigentes políticos de los partidos PAIGC, PRS y União para un Mudança (UM). El 10 de septiembre el equipo de mediadores de ECOWAS visitó el país y logró que el Gobierno y la oposición acordaran un plan de seis puntos para resolver la crisis, el cual incluyó la celebración de un diálogo inclusivo, la formación de un gobierno consensuado y la búsqueda de reformas constitucionales y electorales. Entre el 11 y 14 de octubre se celebró en Conakry, capital de la vecina Guinea, otra reunión entre todas las fuerzas políticas donde se discutió la puesta en marcha de los seis puntos planteados anteriormente. El diálogo finalizó con la firma del Acuerdo de Conakry el 14 de octubre, en el que se estableció la elección por consenso de un nuevo primer ministro que se mantendrá en el cargo hasta las elecciones legislativas de 2018. El acuerdo también incorporó a la cámara parlamentaria a los 15 diputados disidentes del PAIGC que habían sido suspendidos. Posteriormente, el presidente Vaz disolvió el Gobierno de Djá el 14 de noviembre y nombró al ex consejero presidencial Umaro Sissoco Embalo, nuevo primer ministro. Sin embargo, la facción dominante del PAIGC rechazó su nombramiento, denunciando que su designación rompía con el pacto de Conakry. Sissoco anunció el 12 de diciembre la formación de un nuevo ejecutivo frente a la oposición del PAIGC, lo que mantuvo la crisis política abierta al finalizar el año.

Desde agosto de 2015 y hasta finales de 2016 Guinea-Bissau tuvo cinco primeros ministros sin lograr resolver la estabilidad política

Níger	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados internos y externos (región del Sahel)

Síntesis:
En el año 2009 un golpe de Estado acabó con el Gobierno de Mamadou Tandja, después de que éste iniciara una serie de reformas constitucionales para mantenerse en el poder. Posteriormente, las elecciones de enero y marzo de 2011 restauraron el sistema democrático en el país después de que la Junta Militar cumpliera con el calendario establecido para el retorno del poder a la sociedad civil. Pese a la normalización de la situación en el país persiste la inestabilidad generada por la presencia de células del grupo armado argelino AQMI y otros grupos armados que operan en la región de Sahel.

La situación política nacional estuvo marcada por la celebración de las elecciones presidenciales y las tensiones entre el Gobierno y la oposición, así como por

el aumento de la inestabilidad en materia de seguridad en diferentes regiones fronterizas debido a las acciones armadas de grupos yihadistas externos. El 21 de febrero se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país en un clima caracterizado por la tensión y las manifestaciones de los grupos opositores. A los comicios concurrieron un total de 15 candidaturas, incluida la de Hama Amadou, quien se encuentra en prisión desde su regreso del exilio en 2015. La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) publicó los resultados de los comicios días después, dando la victoria con el 48,45% de los votos al presidente Mahamadou Issoufou, mientras que Hama Amadou, principal candidato de la oposición, obtuvo el 17,76%. La oposición se negó a reconocer los resultados y boicoteó la segunda vuelta electoral, celebrada el 20 de marzo, lo que facilitó la reelección del presidente Issoufou con el 92,49% de los votos. En este clima de tensión, Issoufou solicitó a la oposición la apertura de una mesa de diálogo nacional, a la que se sumó sin muchas expectativas la coalición opositora COPA. El presidente había prometido la conformación de un Gobierno de unidad nacional, sin embargo, el Gobierno presentado el 11 de abril estuvo compuesto principalmente por miembros del partido gobernante, el Partido Nigeriano por la Democracia y el Socialismo (PNDS). Días después, el 17 de abril, la oposición dio por finalizado el boicot que mantenían a las instituciones del país y se mantuvo en el Consejo Nacional para el Diálogo Político (CNDP). A finales de año se pospusieron las elecciones locales previstas para enero de 2017, para tratar, según el Gobierno, de armonizar la ley electoral, hecho que supuso el boicot al CNDP de la oposición, que afirmó que el aplazamiento de los comicios era ilegal.

Por otro lado, **durante el año se mantuvo el clima de inseguridad en varias regiones fronterizas del país debido a ataques provenientes de grupos armados de corte yihadista**. La región sureña de Diffa, fronteriza con Nigeria, siguió padeciendo los ataques de la insurgencia nigeriana de Boko Haram[16] cuya mayor ofensiva se registró durante el mes de junio en un ataque que mató a 26 soldados nigerinos en la ciudad de Bosso, obligando al Gobierno nigerino a solicitar ayuda y la intervención de tropas de la fuerza militar regional (MNJTF). El incremento de los ataques de Boko Haram obligó al Gobierno a extender el estado de emergencia en la región, el cual había sido decretado el año anterior. Por otro lado, la zonas fronterizas con Burkina Faso y Malí, al oeste del país, también sufrieron durante diversos momentos del año la presión de diferentes movimientos armados vinculados con al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y otros grupos de corte yihadista. En el que fue el peor ataque de esta naturaleza, un grupo proveniente de Malí atacó el 6 de octubre una posición del Ejército en Tazalit, región de Tahoua, matando a 22 soldados. Durante ese mes, el autoproclamado Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS, por sus siglas en inglés) realizó sin éxito una acción de liberación de una prisión cerca de Niamey. El deterioro de la seguridad en el país hizo que Alemania –cuya canciller Angela Merkel se encontraba de visita de Estado en Níger durante el mes de octubre– anunciara un fondo de 27 millones de euros en apoyo a la lucha antiterrorista en el país y se comprometiera al envío de tropas a Níger para apoyar a la Misión de la ONU en Malí (MUNUSMA). A su vez, durante septiembre, el grupo armado Movimiento por la Justicia y la Rehabilitación del Níger, oriundo del noreste del país, amenazó con recurrir a las armas para defender los derechos de la minoría tebu y proteger el medio ambiente debido a la gestión del Gobierno de los yacimientos petrolíferos en la región.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB

Síntesis:
Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

Las tensiones políticas en el país proliferaron durante el año en varias regiones (norte, centro y sur) y, conjuntamente con las crisis procedentes de la guerra de Boko Haram[17] y del reinicio de la violencia en la región del Delta del Níger, contribuyeron a generar un grave deterioro de la situación de seguridad y estabilidad en Nigeria.[18] Durante el 2016 aumentaron las tensiones derivadas de las reclamaciones secesionistas en la región de Biafra; se agudizó el enfrentamiento entre el Estado nigeriano y el Movimiento Islámico de Nigeria (IMN, por sus siglas en inglés), de orientación chií, en los estados norteños de Kaduna, Kano y Bauchi; y se

16. Véase el resumen sobre región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
17. Véase el resumen sobre región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
18. Véase "Nigeria: Múltiples frentes violentos aumentan la desestabilización en el país" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

mantuvieron –aunque con menor intensidad que en el año 2014– los enfrentamientos intercomunitarios entre grupos pastoralistas y agricultores en la región central del país conocida como "Middle Belt" ("cinturón medio", debido a que hace alusión a la franja central que atraviesa el país de este a oeste). A su vez, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad nigerianas, que han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales, incrementaron la respuesta violenta y profundizaron las crisis abiertas. Por otro lado, la crisis económica que atravesó el país durante el 2016, debido a la caída del precio del petróleo y la reducción de su capacidad productiva por la inseguridad en el Delta del Níger,[19] aunada a la depreciación de su moneda nacional, agravó la situación de inestabilidad nacional.

En la región sureña de Biafra las tensiones entre el Estado y los movimientos pro secesionistas, Indigenous People of Biafra (IPOB) y Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (MASSOB), que se habían reiniciado en agosto de 2015, se mantuvieron a lo largo del año debido en gran parte a la detención y encarcelación del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, el 14 de octubre de 2015. En enero, en un enfrentamiento entre miembros del IPOB con las fuerzas de seguridad en Aba, estado de Abia, se reportaron 18 manifestantes muertos, 30 heridos y 26 arrestados. Posteriormente, en el que fue el peor episodio del año en la región, el 30 de mayo, a raíz de la conmemoración del 49º aniversario de la declaración de la República de Biafra, Amnistía Internacional reportó que al menos 60 personas fueron asesinadas a tiros y otras 70 resultaron heridas. La ONG, en un informe hecho público en noviembre, denunció cómo las fuerzas de seguridad nigerianas, encabezadas por el Ejército, desarrollaron una campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales contra el movimiento pro-Biafra IPOB, que costó la vida de al menos 150 manifestantes pacíficos en la parte sureste del país entre agosto de 2015 y agosto de 2016. Fuentes militares negaron las acusaciones realizadas por Amnistía Internacional, describiendo las denuncias como infundadas. Por otro lado, a final de año se dio a conocer un fallo judicial por el que el juicio contra Kanu, el líder del IPOB que será juzgado conjuntamente con Chidiebere Onwudiwe, Benjamin Madubugwu y David Nwawuisi, será realizado en secreto. El dirigente biafreño está acusado de sedición, incitación del odio étnico y traición, cargos que le podrían acarrear la pena de muerte. La decisión de la jueza del Tribunal Supremo Federal de Abuja, Binta Nyako, fue duramente condenada por la Organización de Libertades Civiles (CLO), el MASSOB y por el Grupo de Reflexión Igbo, entre otros, por permitir la opacidad.

Aumentaron las tensiones en la región histórica de Biafra entre el Gobierno y los movimientos secesionistas

En lo referente a las tensiones que mantiene el Estado con el Movimiento Islámico de Nigeria (IMN), a lo largo del año la situación siguió empeorando a raíz de la detención del líder del IMN, Shaykh Ibrahim El-Zakzaky, producida después de los duros enfrentamientos registrados durante el mes de diciembre del 2015. En esa ocasión, se produjo en el estado de Kaduna un supuesto intento de asesinato del jefe del Ejército nigeriano, general Tukur Buratai, que conllevó enfrentamientos entre el Ejército y los seguidores del IMN –musulmanes chiíes–, que dejaron un balance de alrededor de 300 personas muertas y la detención de El-Zakzaky, quien continuó en prisión. El líder espiritual islámico de Nigeria, el sultán de Sokoto, denunció el uso de la violencia contra los seguidores del IMN y la detención de El-Zakzaky, y advirtió que este tipo de acciones y represión por parte del Ejército podría provocar una nueva insurgencia en el país. A lo largo del año, se mantuvieron las movilizaciones de protesta y se registraron algunos incidentes violentos en los estados norteños. En noviembre se produjo otro enfrentamiento directo entre seguidores del IMN y la Policía en el estado de Kano, en una marcha organizada por los musulmanes chiíes, que dejó un policía y 19 manifestantes muertos. Ese mismo día, se reportó la muerte de otros 134 miembros del movimiento en diferentes focos de violencia registrados en las ciudades de Funtua, Kaduna y Sokoto. A principios de diciembre el gobernador del estado de Kaduna, Nasiru El-Rufa'i, declaró oficialmente al IMN grupo insurgente, lo que conllevó la condena de la organización nigeriana Muslim Rights Concern, advirtiendo que la declaración entraba en una peligrosa dimensión, recordando a las autoridades de Kaduna que deberían de aprender de la historia del estallido de la violencia de Boko Haram a raíz de la represión gubernamental, en una clara advertencia de cómo esta declaración puede generar la radicalización y movilización de los seguidores del IMN. La declaración realizada por el estado de Kaduna se realizó tras darse a conocer la orden del Tribunal Supremo que obligó al Gobierno federal a liberar al líder del IMN, Ibrahim El-Zakzaky, en un plazo de 45 días, así como a pagar una multa por detención ilegal.

Finalmente, y en otro de los graves escenarios de tensión presentes en el país, **durante el año se siguieron registrando continuos ataques derivados de fricciones comunitarias y enfrentamientos entre grupos pastoralistas y asentamientos agrícolas, sobre todo producidos en la región central del país conocida como "Middle Belt"** entre grupos nómadas pastoralistas hausa-fulani y comunidades agrícolas. En el mes de febrero se registraron más de cien muertos en un enfrentamiento entre pastores fulani y comunidades locales del área de Agatu, estado de Benue, que desembocó en el decreto de apertura de una investigación oficial para determinar lo ocurrido. Durante el mes de abril, en tres ataques diferentes registrados en los estados de Taraba, Benue y Enugu, entre 88 y 102 personas perdieron la vida.

19. Véase el resumen sobre Nigeria (Delta del Níger) en este capítulo.

En junio, supuestos pastores fulani mataron a unas 59 personas en el área de Logo, estado de Benue. En el mes de agosto se registraron diferentes episodios de violencia comunal y religiosa en los estados de Kaduna, Kwara, Níger e Imo, que reportaron al menos 47 muertos. En octubre, en un ataque perpetrado supuestamente por pastores fulani en la ciudad de Godogodo, estado de Kaduna, entre los días 15 y 16, al menos 20 personas murieron y, posteriormente, otros 14 fulani fueron asesinados un día después por una turba en la ciudad de Kaduna en represalia. El 21 de noviembre otras 155 personas fueron asesinadas en un ataque realizado por supuestos ladrones de ganado en el estado de Zamfara. A su vez, el 13 de noviembre, cinco aldeas en Kaura, Kaduna, fueron atacadas dejando un balance de al menos 43 muertos.

Nigeria (Delta Níger)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada

Síntesis:
La inestabilidad en el Delta del Níger es fruto de la pérdida de los medios de vida de la población debido a la actividad petrolera en la zona. La falta de compensaciones económicas, desarrollo y la marginalización de las comunidades llevó a exigir una mayor participación en los beneficios obtenidos por la explotación del petróleo. Desde los años noventa, surgieron formaciones armadas que propiciaron ataques contra instalaciones petroleras y puestos militares, además del secuestro de trabajadores. La respuesta del Gobierno fue militar, con la presencia permanente de las fuerzas especiales en la región del Delta, acusadas de cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. En 2009 el Gobierno decretó una ley de amnistía para todos los grupos armados que decidieran dejar la lucha armada. El ofrecimiento de programas de reinserción animó a los líderes de muchas de estas formaciones a deponer las armas, lo que generó una reducción pronunciada de la violencia armada en la zona. Sin embargo, el estancamiento de los proyectos de reinserción y desarrollo prometidos por el Gobierno ha vuelto a propiciar el retorno a la lucha armada por algunos actores.

La violencia volvió a emerger durante el 2016 en la región sureña del Delta del Níger –conformada por los estados de Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, Imo, Ondo y Rivers–, representando el punto más álgido desde el año 2009, momento en el cual se firmó la amnistía en la región y se iniciaron los programas de reinserción y desarrollo. Con la llegada del presidente Buhari al poder, en mayo de 2015, el Gobierno declaró su intención de reducir los fondos de los programas de DDR impulsados en el Delta, se puso fin a los contratos de seguridad con ex militantes, se abrieron investigaciones contra líderes regionales por fraude, se recortó el presupuesto del programa de amnistía en un 70% y se canceló la construcción de la universidad marítima. Estos hechos, aunados a los pocos avances en la reducción de los agravios y las desigualdades en la zona (mala redistribución de los ingresos del petróleo, falta de desarrollo de infraestructuras, pocas oportunidades de empleo, entre otros) desembocaron en el repunte de la violencia a inicios de año, que tuvo en el segundo trimestre del año sus momentos de mayor conflictividad y violencia.

A mediados del mes de enero se registraron los primeros ataques contra intereses petrolíferos en la región, con sabotajes a varios oleoductos y gaseoductos en el área de Warri, estado de Delta. En respuesta, el Gobierno anunció la ampliación hasta 2017 del programa de amnistía, el cual estaba previsto que finalizase en diciembre de 2015. El día 3 de febrero, el grupo armado Niger Delta Avengers (NDA) proclamó su formación, reivindicó los ataques producidos durante el mes de enero y prosiguió con nuevas acciones de sabotajes. En el segundo trimestre del año, y frente al deterioro de la situación de seguridad en la región, el presidente Buhari anunció la planificación de una fuerza multinacional para patrullar el Golfo de Guinea y hacer frente a la piratería y ataques contra las instalaciones petrolíferas. A su vez, en mayo el Gobierno declaró que emplearía toda la fuerza para contener la violencia del NDA y otros grupos armados en la región, debido al fuerte impacto en la producción de petróleo, que se redujo a la más baja en dos décadas, y que también tuvo un impacto negativo en el suministro eléctrico nacional. El NDA realizó diferentes ataques contra instalaciones operadas por Chevron, Shell, Nigeria Agip Oil Company (NAOC) y Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) en los estados de Delta y Bayelsa. Además en mayo un nuevo grupo armado hizo su aparición en la región, el Red Egbesu Water Lions (REWL), con vínculos con el movimiento secesionista biafreño, demandando al Gobierno la excarcelación de Nnamdi Kanu, líder del IPOB. Los ataques producidos contra instalaciones petrolíferas redujeron durante el mes de junio la producción de crudo y de energía eléctrica a la mitad, según anunció la compañía petrolífera de propiedad estatal, NNPC. El 6 de junio, el Gobierno ofreció la apertura de negociaciones a los diferentes grupos armados, pero el NDA lo rechazó dos días después. El Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND), antiguo grupo armado del Delta, exhortó el 12 de junio al NDA a realizar un cese al fuego y unirse a la mesa de negociación con ellos y el Gobierno Federal. Sin embargo la violencia prevaleció y el NDA se atribuyó al menos 14 ataques entre el 1 y el 24 de julio en los estados de Delta, Rivers, Bayelsa y Akwa Ibom. El 20 de agosto, y tras meses negándose a la negociación con el Gobierno, el NDA anunció un alto el fuego unilateral para dar una oportunidad a la apertura de negociaciones, apoyando la designación de Edwin Clark, histórico y veterano líder ijaw, para encabezar las negociaciones con las autoridades. Sin embargo, un mes

después, el 23 de septiembre, el NDA rompió el alto el fuego con un ataque contra un oleoducto en Bonny, estado de Rivers. La ruptura de la tregua generó que tanto el MEND, como el líder del foro consultivo Pan-Niger Delta Coastal States Stakeholders Consultative Forum, (PANDEF), Edwin Clark, condenaran duramente la renovación de las hostilidades. El 29 de septiembre el grupo armado denominado Niger Delta Greenland Justice Mandate (NDGJM) reivindicó un atentado contra un oleoducto en el estado del Delta. A su vez, ese mes también hizo su reaparición otra organización armada, Iduwini Volunteers Force (IWF) ubicada en el área de Ekeremor, estado de Bayelsa. En este contexto, el Gobierno nigeriano puso en marcha una operación militar denominada Operación Sonrisa de Cocodrilo, desplegando a al menos 3.000 soldados. El 17 de septiembre el Ejército nigeriano informó que hasta la fecha la operación había matado a 23 militantes y destruido 38 campamentos insurgentes en el Delta del Níger. En octubre la violencia disminuyó, mientras se observaron diferentes indicios sobre el reinicio de las negociaciones. El último trimestre del año se inició con conversaciones informales entre el Gobierno y líderes del PANDEF, aunque persistieron los ataques a oleoductos en los estados de Bayelsa y Delta. Los grupos armados NDA y NDGJM condicionaron su participación en la mesa de negociación a la retirada de las tropas gubernamentales de la región. La organización rebelde IWF condicionó el logro de la paz a la desviación directa del 13% de los ingresos petrolíferos a las comunidades, en vez de ir al Gobierno estatal. A finalizar el año, las conversaciones informales se mantenían en la zona.

Cuerno de África

Djibouti	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado FRUD, oposición política y social (coalición UAD/USN)

Síntesis:
Djibouti es un pequeño país del Cuerno de África que logró la independencia de Francia en 1977. Creado artificialmente por el colonialismo, en base a razones estratégicas, el nuevo Estado depende de su puerto como principal recurso a través del cual Etiopía canaliza gran parte de su comercio exterior. Su situación es también estratégica para el control del tráfico marítimo en el Mar Rojo y su proximidad a Somalia es un acicate para el establecimiento de misiones militares para controlar desde Djibouti las acciones de piratería en las aguas somalíes, así como para disponer de una presencia militar en el continente africano. El sistema político está controlado por el Rassemblement Populaire pour le Progrès (RPP) y funciona como un sistema de partido único. La oposición política está permitida desde 2002, aunque boicoteó las elecciones de 2005 y 2008 por la ausencia de libertad de expresión y las presiones gubernamentales. Agrupada en la coalición Union pour l'Alternance Démocratique (UAD), se presentó a las elecciones de 2013 en el marco de una nueva coalición, la Union pour la Salut National (USN), pero rechazó los resultados oficiales que le atribuían 10 de los 65 escaños del Parlamento –nunca se publicaron los resultados definitivos– lo que provocó una grave crisis política, resuelta con el acuerdo del 30 de diciembre de 2014 bajo presión de EEUU y la UE. Por otra parte, en los años noventa tuvo lugar una guerra civil liderada por el grupo armado Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie (FRUD), surgido de la comunidad afar, marginada de las instituciones políticas, controladas por sectores procedentes del subclan somalí issa. En 1994 el núcleo mayoritario del FRUD alcanzó un acuerdo de paz, pero algunos sectores minoritarios de la coalición armada han permanecido activos desde entonces.

En **Djibouti, la primera parte del año se vio marcada por la celebración de las elecciones presidenciales el 8 de abril, que el presidente Ismail Omar Guelleh (68 años), en el poder desde 1999, volvió a ganar**, lo que supone su cuarto mandato y en principio, según declaró él mismo, el último. Guelleh se impuso con el 87% de los votos en la primera vuelta. Las elecciones fueron criticadas por la oposición y los grupos de defensa de los derechos humanos, que señalaron la existencia de interferencias durante el registro de votantes, la falta de independencia de la comisión electoral, las pocas garantías de seguridad de las urnas, la intimidación y brutalidad por parte de la Policía y la parcialidad de los medios de comunicación controlados por el Gobierno. Guelleh competía contra cinco candidatos, pero otros tres partidos opositores boicotearon las elecciones. Guelleh había manifestado previamente su voluntad de no competir por un nuevo mandato. Su principal rival era Omar Elmi Kaireh, un líder de la independencia del país, en representación de la coalición Union pour le Salut National (USN), que consiguió el 7% de los votos. Una cuarta parte de la población, 180.000 personas, podía votar. La UA destacó algunas irregularidades pero acabó declarando los resultados creíbles, y el proceso libre y transparente. Cabe destacar, por otra parte, que el Grupo de Supervisión de la ONU para Somalia y Eritrea presentó su informe anual en octubre en el que remarcó que había encontrado más pruebas no corroboradas de apoyo de Eritrea al grupo insurgente yibutiano FRUD,[20] que siguió cometiendo ataques de baja intensidad en el norte de Djibouti durante el último año. Así, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, el movimiento siguió socavando la normalización de las relaciones entre Djibouti y Eritrea y, por lo tanto, siguió obstaculizando la aplicación de la resolución 1862 (2009).

Países como China y Arabia Saudita anunciaron la construcción de nuevas bases militares en el país en 2016.[21] **Djibouti ya es la base de operaciones militares de EEUU, Francia y Japón.** Ambos países

20. Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, *Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado de conformidad con la resolución 2182 (2014) del Consejo de Seguridad: Eritrea*, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2016/920, 31 de octubre de 2016.
21. Braude, Joseph, "Why China and Saudi Arabia Are Building Bases in Djibouti", *The Huffington Post*, 26 de septiembre de 2016.

tienen importantes negocios e inversiones económicas en el país. El 21 de enero el Ministerio de Exteriores chino anunció la firma de un acuerdo con Djibouti para acoger su primera base militar de ultramar, más allá de las que dispone en el mar del Sur de la China. Posteriormente, en marzo, Arabia Saudita declaró que también estaba negociando la construcción de una base militar en el país, que será una realidad en los próximos meses.

La Comisión de Investigación de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea señaló que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en el país

Eritrea	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos

Síntesis:
El régimen de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, antigua insurgencia que contribuyó a la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía en 1991, ha gobernado el país con un marcado autoritarismo y ha silenciado y reprimido a la oposición política. El Gobierno, liderado por la vieja guardia de la época de la independencia, se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, respeto por las minorías étnicas, un mayor grado de autogobierno, reivindican el árabe como lengua oficial, el fin de la marginación del islam en el país y el freno a la imposición cultural de la comunidad tigray, o tigrinyización, que lleva a cabo el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ, por sus siglas en inglés), que controla todos los mecanismos de poder. Esta situación, además de la política de Eritrea en la región del Cuerno de África, ha llevado al país a un creciente aislacionismo. En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, restricción de vuelos y congelación de bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo al grupo armado somalí al-Shabaab.

Durante el año 2016 miles de personas continuaron arriesgando sus vidas al huir de Eritrea. Según la agencia de la UE de control de fronteras Frontex, 38.791 personas de origen eritreo cruzaron el Mediterráneo en 2015, en su mayoría llegando a Italia, cifra inferior a la del 2014, cuando se alcanzaron las 46.000 personas. La Comisión de Investigación de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea elaboró su segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.[22] El documento, presentado el 9 de mayo, determinó que no se había producido ninguna mejora respecto al anterior informe de junio de 2015. **La Comisión tiene motivos razonables para creer que, desde 1991, se han cometido crímenes de lesa humanidad en Eritrea**, concretamente delitos de esclavitud, encarcelación, desaparición forzada, tortura, otros actos inhumanos, persecución, violación y asesinato. La comisión concluyó que, sin una reforma jurídica e institucional profunda, Eritrea no estará en condiciones de garantizar la rendición de cuentas por esos delitos y violaciones. Además, recomendó que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera la situación de Eritrea al Fiscal de la Corte Penal Internacional, a los efectos de su examen, y que los Estados Miembros de la ONU cumplan su obligación de enjuiciar y extraditar a cualquier persona sospechosa de delitos internacionales que se encuentre en su territorio. En diciembre el Parlamento europeo, de la mano del parlamentario dublinés Brian Hayes, acogió una conferencia para discutir el futuro de Eritrea en la que participó el ministro de Información eritreo, Yemane Gebremeskel, con el objetivo de promover el diálogo entre el país y la UE,[23] así como representantes diplomáticos y embajadores de diversos países europeos, incluyendo Irlanda, Reino Unido, Alemania, Suecia y representantes de la ONU. El acto fue tachado por algunos analistas como el último ejemplo de los **intentos de la UE para hacer frente a la denominada crisis de refugio alcanzando acuerdos con regímenes represivos, como Eritrea y Sudán, para que frenen los flujos migratorios**.[24]

En paralelo, cabe destacar el informe sobre Eritrea del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado en octubre.[25] En su tercer mandato consecutivo, **el Grupo de Supervisión no encontró pruebas contundentes que demostraran el supuesto apoyo de Eritrea al grupo islamista somalí al-Shabaab**. Sin embargo, el Grupo ha seguido encontrando pruebas sistemáticas del apoyo de Eritrea a los grupos armados que operan en Etiopía y Djibouti. El Grupo también informó en 2015 de la relación estratégica militar entre Eritrea con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU), en virtud de la cual la coalición árabe estaría utilizando su territorio para llevar a cabo acciones militares contra Yemen. Eritrea impulsó la construcción de una base militar permanente en el aeropuerto internacional de Assab y la construcción de un nuevo puerto marítimo permanente adyacente a éste, lo que indica que podría haber apoyo externo para el desarrollo de la infraestructura que podría beneficiar al Ejército eritreo.

22. Consejo de Derechos Humanos, *Informe de la comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea*, Asamblea General de la ONU, A/HRC/32/47, 9 de mayo de 2016.
23. Plaut, Martin, "Why do EU leaders still think they can engage with Eritrea's regime?", *The Guardian*, 13 de diciembre de 2016.
24. Rankin, Jennifer y Patrick Kingsley, "EU considering working with Sudan and Eritrea to stem migration", *The Guardian*, 6 de junio de 2016.
25. Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, *Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado de conformidad con la resolución 2182 (2014) del Consejo de Seguridad: Eritrea*, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2016/920, 31 de octubre de 2016.

Además, el Grupo documentó la presencia en Eritrea, ya sea para instrucción o tránsito, de personal armado y equipo militar y naval conexo de diversos Estados, además de Arabia Saudita y EAU. Según el Grupo de Supervisión, las condiciones actuales del embargo de armas no permiten esas actividades, ni están incluidas en las condiciones de sus posibles exenciones, lo que supondría una violación del embargo de armas. Debido a la constante falta de transparencia de los ingresos y gastos gubernamentales y a la negativa a cooperar con el Grupo de Supervisión sobre esas cuestiones, el Grupo ha registrado pocos avances para determinar en qué medida ingresos del Gobierno de Eritrea se han canalizado a grupos armados dedicados a desestabilizar la región o a realizar actividades que constituyen una violación del embargo de armas.

Eritrea – Etiopía	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	Eritrea, Etiopía

Síntesis:
En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera entre ambos países no quedó claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la misión UNMEE para supervisarlo y en diciembre firmaron el acuerdo de paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada aldea fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etiopía) a Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que cumpliera el dictamen, lo que forzó la retirada de la UNMEE en 2008. Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía, por lo que la situación continúa estancada desde entonces.

Durante el año se produjo **una de las principales confrontaciones más graves desde el fin del conflicto armado entre Eritrea y Etiopía que tuvo lugar entre 1998 y 2000**. El incidente fronterizo tuvo lugar el 12 de junio, cuando se produjo un **enfrentamiento militar entre los Ejércitos de ambos países en los alrededores de la localidad de Tserona, en territorio eritreo**. Ambos se acusaron mutuamente de haber iniciado el intercambio de artillería pesada, que habría causado numerosas bajas en el adversario, según declararon ambos países, aunque se desconoce el número de víctimas. Etiopía afirmó que había lanzado un claro mensaje de alerta a Eritrea ya que, según Etiopía, Eritrea no esperaba la respuesta militar que las fuerzas etíopes llevaron a cabo. Esta confrontación puso de manifiesto la volatilidad de la situación. Ambos países de forma periódica se acusan de apoyar a grupos insurgentes para desestabilizar y/o derrocar al otro Gobierno, legado de los años de guerra fratricida. Eritrea, sometida a sanciones de la ONU, ha señalado que la comunidad internacional ha fracasado en presionar a Etiopía para que acepte la resolución sobre la demarcación fronteriza, favorable a los intereses eritreos, mientras que Etiopía afirmó que deseba llevar a cabo conversaciones sobre la implementación de la demarcación. Días después del enfrentamiento, Eritrea anunció que se produjeron nuevos intercambios de artillería pesada cerca de Bure, en Assab, al sureste de Eritrea, lo que fue negado por Etiopía. Según destacaron numerosas fuentes, el reinicio de este conflicto podría tener graves consecuencias para el Cuerno de África y empeorar la situación de crisis humanitaria de la región, afectada por la sequía.

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:
El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la

capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión.

El país sufrió un grave deterioro de la situación en 2016. El año estuvo plagado de protestas contra el régimen, que fueron reprimidas con extrema dureza por parte de los cuerpos de seguridad y que habrían causado más de 500 víctimas mortales, aunque algunas fuentes elevan esa cifra a un millar de víctimas mortales.[26] **Esta es la mayor movilización antigubernamental de la última década**, según han destacado numerosos analistas. El Gobierno contribuyó al deterioro de la situación con la represión de las protestas, a las que se sumaron los agravios acumulados entre las diferentes comunidades del país y que tienen sus raíces en el devenir autoritario del Estado desde 1991.[27] Persistió el rechazo y las fuertes protestas contra el Plan de Desarrollo Integrado de Addis Abeba y de la Zona Colindante Especial de Oromiya (Addis Abeba Master Plan), que fueron reprimidas con dureza causando decenas de víctimas, lo que provocó el abandono del Plan por parte del Gobierno en enero de 2016. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales ya ascendía a 140, según Human Rights Watch, organización que en junio de 2016 elevó a 400 las víctimas mortales de la represión gubernamental.[28] Las protestas se extendieron a otras regiones del país, principalmente a la región de Amhara, y posteriormente a la comunidad afar. El detonante de la expansión de las protestas a Amhara tuvo lugar en la localidad de Gondar (noroeste), en julio, como consecuencia de la decisión del Gobierno de intentar detener al líder de la comunidad wolkayit (región de Tigray) acusado de asesinato, secuestro y colaboración con el régimen eritreo. La comunidad wolkayit pretendía que el distrito Wolkayit pasara a formar parte de la región de Amhara, ya que en 1994 este distrito fue transferido a la región de Tigray. Esta decisión gubernamental desencadenó importantes protestas en la vecina región de Amhara, que se ampliaron y se sumaron a las de otras zonas, como Oromiya y Ogadén, regiones y comunidades que se ven marginadas y alienadas del poder. Las protestas y el estallido de violencia se focalizó en parte contra la comunidad tigray. Miembros de esta comunidad, minoritaria en el conjunto del país, tienen en su poder el control del Gobierno, la economía y las Fuerzas Armadas. El partido TPLF constituye el núcleo de la coalición en el poder, desde donde se le acusa de haber favorecido a la comunidad tigray en detrimento del resto.

Ante esta situación, el Gobierno decretó en octubre el estado de emergencia por un periodo de seis meses para intentar aplacar las protestas, aunque analistas señalaron que esta medida no hizo sino oficializar un estado de la cuestión en el país y dar cobertura legal al régimen para exonerarle de ejecuciones extrajudiciales, arrestos masivos y persecución y silenciamiento de la prensa. Lejos de reducirse, la violencia aumentó, convirtiendo el mes de octubre en el más violento desde que se iniciaran las protestas en Oromiya en noviembre de 2015. Hasta ese momento los países occidentales habían evitado las críticas a su principal aliado en la lucha contra el grupo armado islamista al-Shabaab en el cuerno de África, pero progresivamente EEUU, Alemania y la ONU plantearon la necesidad de abrir investigaciones sobre el excesivo uso de la fuerza en el país africano. Las protestas también afectaron a intereses occidentales, vistos como aliados del Gobierno. El Gobierno interrumpió en diversas ocasiones durante el año el acceso a internet, dado el uso de las redes sociales por parte de los movimientos sociales y la oposición política. La mayoría de protestas durante el año fueron pacíficas, sin embargo, la represión indiscriminada, el cierre de medios de comunicación, la presión y detención de periodistas y opositores políticos amenazaba con contribuir a un incremento de la violencia e incluso el surgimiento de una oposición armada que se una o reciba apoyo de otras insurgencias ya existentes en el país, según destacaron diversos analistas. Aunque el Gobierno hizo alguna concesión limitada a la oposición, como la remodelación del Gobierno, el clima de tensión siguió siendo muy elevado. **Entre octubre y diciembre, fuentes oficiales señalaron que unas 11.000 personas habían sido detenidas en Oromiya, Amhara y Addis Abeba, regiones donde se concentraron las protestas**. Entre los arrestados destacan líderes de pequeños partidos opositores, periodistas y al menos dos blogueros. En noviembre las autoridades anunciaron la liberación de unos 2.000 detenidos tras haber participado en un programa de "reeducación". **El 30 de noviembre fue arrestado el presidente del partido opositor Oromo Federalist Congress, Merera Gudina**, líder opositor y activista pacifista, tras haber participado en un acto en el Parlamento Europeo en Bruselas a principios de noviembre para denunciar la situación que padece el país, acto en el que participó junto al atleta Feyisa Lilesa y al líder activista opositor Berhanu Nega, que dirige el partido ilegalizado Ginbot 7, sentenciado a muerte *in absentia*. Fuentes oficiales acusaron a Gudina de haberse reunido con Nega durante su estancia en Bélgica. Su detención fue duramente criticada dentro y fuera de Etiopía, incluyendo por organismos internacionales. El 21 de diciembre el Gobierno liberó a otras 4.000 personas de las que todavía permanecían arrestadas.

Desde el establecimiento del estado de emergencia en octubre el Gobierno etíope ha arrestado a 11.000 personas

26. Véase Armed Conflict Location & Event Dataset (ACLED), Ethiopia – November 2016 Update.
27. Véase "El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).
28. Human Rights Watch, ""Such a Brutal Crackdown:" Killings and Arrests in Response to Ethiopia's Oromo Protests", *Human Rights Watch*, junio de 2016.

Etiopía (Oromiya)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO

Síntesis:
Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de rechazo del poder central desde los años setenta. El oromo OLF surge entre 1973 y 1974 en la región etíope de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participan junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, el OLF se desmarca en 1992 del Gobierno de transición liderado por el partido TPLF de Meles Zenawi, que controla la coalición en el poder, el Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), y desde entonces inicia la lucha armada contra el Gobierno central y contra otros movimientos políticos oromos progubernamentales exigiendo la independencia de la comunidad oromo. En diversas ocasiones ha colaborado con el ONLF de Ogadén en acciones contra el Gobierno central.

La región de Oromiya fue el epicentro de la crisis que padeció Etiopía durante 2016. El año estuvo plagado de protestas contra el régimen que fueron reprimidas con extrema dureza por parte de los cuerpos de seguridad y que habrían causado más de 500 víctimas mortales durante el último año en todo el país, incluyendo Oromiya, según confirmó el propio Gobierno, aunque algunas fuentes elevan esa cifra a un millar de víctimas mortales.[29] Tras las duras protestas estudiantiles, el Gobierno en enero de 2016 retiró los planes de desarrollo de la capital, Addis Abeba, y de la Zona Colindante Especial de Oromiya (Addis Abeba Master Plan). Este plan preveía la expansión de la capital a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, que pasarían a formar parte de Addis Abeba. El Master Plan pretendía organizar el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad, aunque suscitó numerosas críticas por su impacto en la región de Oromiya y por la marginación del pueblo oromo en su diseño.[30]

Esta situación que afectó al conjunto de Etiopía, incluida la región de Oromiya, se sumó a los brotes esporádicos de actividad insurgente que tienen lugar periódicamente en Oromiya, y que el Gobierno no reporta ni incluye en las cifras de víctimas mortales producto de las movilizaciones sociales y la represión gubernamental subsiguiente. Entre estas acciones, cabe destacar que el brazo armado del Oromo Liberation Front (OLF) señaló que el 17 de julio había llevado a cabo nuevas acciones militares contra las fuerzas de seguridad etíopes que se suman a las operaciones perpetradas entre el 20 y 23 de junio, en las que supuestamente murieron 27 soldados en las áreas de El Kere, Goro y Haro Dibe. No obstante, estas informaciones no pudieron ser corroboradas. Por otra parte, a mediados de octubre las Fuerzas Armadas etíopes penetraron en territorio de Kenya en persecución de combatientes del OLF en Golole, cerca de la localidad de Sololo, en el condado de Marsabit, causando decenas de muertes en las filas del grupo armado, y la muerte de un civil, informaciones confirmadas por la administración local. Se estima que un destacamento de 100 soldados etíopes participó en el operativo, que llevó a cabo diversos interrogatorios a la población civil en Golole. A su vez, las Fuerzas Armadas de Kenya fueron desplegadas en Sololo tras el ataque perpetrado por las Fuerzas etíopes para determinar el alcance de los hechos.

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS

Síntesis:
La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga, se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007 aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenya en Somalia, que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí

29. Véase Armed Conflict Location & Event Dataset (ACLED), Ethiopia – November 2016 Update.
30. Véase el resumen sobre Etiopía en este mismo capítulo y "El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias", en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

al-Shabaab en Kenya, y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le ha sumado desde 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

El país se vio afectado por graves **dinámicas de tensión y violencia**, destacando la creciente tensión y movilización política vinculada a la proximidad de las **elecciones en 2017**, las acciones del grupo armado islamista **al-Shabaab, las operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, la creciente presencia de ISIS** en el país y los continuos enfrentamientos de carácter intercomunitario. En primer lugar, al-Shabaab continuó llevando a cabo ataques insurgentes en el noreste de Kenya, en concreto en la zona fronteriza entre Somalia y Kenya (los condados de Mandera, Wajir y Garissa) y en la zona costera de Kenya (condado de Lamu y en Mombasa), que causaron decenas de víctimas mortales y que llevaron al Gobierno a establecer en octubre el toque de queda hasta diciembre en el condado de Mandera, decisión que a finales de año fue prolongada hasta finales de marzo de 2017. Vinculado al conflicto con Somalia, **Kenya anunció en mayo su intención de cerrar y reubicar a la población del campo de refugiados de Dadaab en noviembre**, por cuestiones de seguridad, denunciando que el campo se había convertido en un refugio y centro de reclutamiento de al-Shabaab. Dadaab, que en realidad son cinco campos, es uno de los mayores y más antiguos del mundo y ha llegado a acoger más de medio millón de personas desde principios de los noventa, aunque en la actualidad la cifra se ha reducido a unas 275.000 personas.[31] Este anuncio generó una enorme preocupación y críticas por parte de la comunidad internacional. En diciembre Kenya anunció que posponía la decisión por seis meses y que continuaría fomentando el retorno voluntario junto con ACNUR. Algunas fuentes señalaron que Kenya había estado forzando el retorno en condiciones de inseguridad, lo que fue desmentido por el Gobierno. En paralelo, durante el año **se produjeron algunos arrestos de diversos militantes que pusieron de manifiesto la creciente presencia del grupo armado islamista ISIS en el Cuerno de África, y en especial en Kenya**. Según fuentes gubernamentales, ISIS estuvo reclutando y radicalizando a jóvenes para combatir en el extranjero, en Libia y Siria, lo que incrementó la preocupación de los servicios de seguridad e inteligencia del país. Los servicios de inteligencia estimaban que alrededor de un centenar de personas se habían unido a ISIS en Libia y Siria, por lo que se temía que a su regreso al país pudieran cometer ataques contra objetivos de Kenya y extranjeros, en un país que ya estaba sufriendo regularmente ataques y acciones armadas por combatientes que habían regresado de Somalia tras haber formado parte de al-Shabaab.

En segundo lugar, el clima de tensión política y movilización social fue en aumento durante todo el año, sobre todo a partir de abril, debido a las crecientes protestas y manifestaciones convocadas por la oposición política ante la proximidad de las elecciones generales de 2017. El foco de tensión entre el Gobierno y la coalición en el poder, la Jubilee Coalition, por una parte, y la oposición política liderada por la Coalition for Reform and Democracy (CORD), por otra parte, fue la necesidad de reformar la Comisión de Fronteras y Electoral Independiente (IEBC, por siglas en inglés). El líder de la CORD, Raila Odinga, y el resto de la oposición, calificaron de parcial la gestión de la IEBC y la responsabilizaron de su derrota en las elecciones de 2013. **En agosto la IEBC aceptó la dimisión tras meses de presiones por parte de la oposición política**. En diciembre los líderes opositores de CORD, Raila Odinga, y de Amani National Congress (ANC), Musalia Dudavadi, anunciaron la formación de una coalición para competir en las elecciones presidenciales de 2017. El 12 de diciembre el presidente Uhuru Kenyatta acusó a Estados y ONG financiadas por Occidente de interferir en el proceso electoral. Las manifestaciones fueron reprimidas con violencia por parte de los cuerpos de seguridad, provocando la muerte de decenas de personas durante el año. En este sentido, fue preocupante el incremento del número de muertes a manos de la Policía según desveló la base de datos Deadly Force,[32] la más importante y exhaustiva base de datos sobre muertes a manos de la Policía en el país, configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos. A 30 de noviembre de 2016, el número de víctimas mortales a manos de la Policía se elevó a 180 personas, rebasando ampliamente la cifra total anual de 2015, que ascendió a 141 personas, lo que supone un 21,7% más respecto a ese año. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos condenaron las muertes a manos de la Policía que podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales ya que como mínimo resultaron controvertidas y podrían haber sido manipuladas. El Gobierno manifestó que no se podía juzgar a todo el cuerpo de Policía por casos aislados de uso excesivo de la fuerza. Por último, cabe destacar los diferentes enfrentamientos entre milicias vinculadas a diferentes comunidades durante todo el año, por cuestiones de robos de ganado, represalias por ataques previos y usos y propiedad de la tierra, entre las principales cuestiones.

31. Véase UNHCR, Dadaab Refugee Camps, Kenya UNHCR Dadaab Bi-Weekly Update, 16 a 31 de diciembre de 2016.
32. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto, de Nation Newsplex, proyecto del rotativo kenyano Daily Nation, busca registrar todas las muertes resultantes de operaciones policiales en Kenya, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado.

Grandes Lagos y África Central

África Central (LRA)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Recursos Internacional
Actores:	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congolesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka

Síntesis:
El LRA nació en 1986, movido por el mesianismo religioso de su líder, Joseph Kony, con el objetivo de derrocar al Gobierno de Uganda, instaurar un régimen basado en los Diez Mandamientos de la Biblia y sacar de la marginación a la región norte de este país. La violencia y la inseguridad causada por los ataques del LRA contra la población civil, el secuestro de menores para engrosar sus filas (alrededor de 25.000 desde el inicio del conflicto) y los enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas (junto a las milicias de autodefensa) han provocado la muerte de unas 200.000 personas y el desplazamiento forzado de alrededor de dos millones en el momento más álgido del conflicto. La creciente presión militar ejercida por las Fuerzas Armadas ugandesas forzó al grupo a refugiarse primero en el sur de Sudán, posteriormente en RDC, y finalmente en RCA. Así, el LRA fue ampliando sus actividades a los países vecinos donde estableció sus bases, por la incapacidad para frenarle en RDC y RCA, y por la complicidad de Sudán. Entre 2006 y 2008 se celebró un proceso de paz que consiguió establecer un cese de hostilidades, aunque fracasó y en diciembre de 2008 los Ejércitos ugandés, congolés y sursudanés llevaron a cabo una ofensiva contra el LRA, lo que provocó la disgregación del grupo hacia el noreste de RDC, el sureste de RCA y el suroeste de Sudán del Sur, donde continuó su ofensiva. En noviembre de 2011 la UA autorizó la creación de una fuerza regional transfronteriza compuesta por contingentes militares de estos tres países que se desplegó en septiembre de 2012 y que cuenta con el apoyo logístico de EEUU. La reducción sostenida de la violencia en los últimos años ha provocado que deje de ser considerado conflicto armado a principios de 2015.

Durante el año persistieron las actividades del grupo armado LRA y las operaciones militares para desarticular al grupo en el triángulo formado entre la RCA, RDC y Sudán del Sur. Las zonas más afectadas fueron el este de RCA (Haut Kotto, Mbomou y Haut Mbomou) y la zona fronteriza entre RDC y Sudán del Sur del lado congolés, hasta el parque nacional de Garamba, en RDC. **Según el proyecto LRA Crisis Tracker se produjeron alrededor de 200 incidentes violentos durante el año, en los que murieron 22 civiles y fueron secuestrados temporalmente o permanentemente 729 personas**.[33] En el este de RCA, el LRA llevó a cabo numerosos secuestros de civiles. Las actividades comerciales del grupo en Kafia Kingi (región rica en minerales en el estado de Lol, en Sudán del Sur, donde confluyen las fronteras de Sudán, Sudán del Sur y RCA) sufrieron un golpe en enero de 2016, cuando varios combatientes fueron expulsados tras una pelea con comerciantes locales. El grupo sigue saqueando oro y diamantes y cazando furtivamente fauna silvestre, como también hacen grupos rivales de cazadores furtivos sudaneses. El Parque Nacional de Garamba, en RDC, continuó siendo la principal fuente de tráfico de marfil del grupo, aunque la caza furtiva de elefantes, en general, perdió importancia como fuente de financiación para el LRA, según fuentes de la ONU.

En Bas Uélé y Haut Uélé, en el noreste de RDC, se registró desde abril un aumento de la actividad del LRA, según destacó la ONU,[34] principalmente debido a la infiltración de presuntos elementos del LRA de Sudán del Sur y RCA que huyeron de esos países a causa de la presión ejercida por las operaciones militares emprendidas en el marco de la Iniciativa de Cooperación Regional de la UA para la Eliminación del LRA. No obstante, en agosto fuentes de las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) que forman parte de la Iniciativa manifestaron que iniciarían en breve la retirada de su participación en la misión por la falta de apoyos y recursos internacionales. En el Parque Nacional de Garamba miembros del LRA y cazadores furtivos llevaron a cabo una serie de emboscadas en las que murieron al menos cinco miembros de las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC). El 1 de octubre presuntos elementos del LRA atacaron a efectivos de las FARDC en Nasumba, causando la muerte de dos soldados e hiriendo a cuatro, mientras que las FARDC mataron a cuatro de los agresores, según los informes. El 26 de noviembre, presuntos elementos del LRA saquearon las aldeas de Bakungangba y Katinga situadas en el eje Doruma-Gangala-Nabodio, desde donde también secuestraron a 50 civiles. Elementos del Gobierno de Sudán del Sur y de la oposición cruzaron la frontera hacia la RDC y el número de refugiados aumentó de manera significativa. Las FARDC detuvieron a milicianos de Sudán del Sur que habían cruzado la frontera y entrado en el país. La MONUSCO desplegó una base avanzada en Doruma para vigilar mejor la situación en la zona, lo que puso de manifiesto la volatilidad de la situación.

Angola (Cabinda)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo

Síntesis:
Tras la independencia de Angola de Portugal en 1975, el enclave de Cabinda, separado geográficamente del resto del territorio angolano, quedó incorporado a Angola en el tratado de independencia, el cual contó con la firma de los principales

33. Véase Invisible Children – Resolve, *LRA Crisis Tracker*, 10 de enero de 2017.
34. Consejo de Seguridad de la ONU, "Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo", S/2016/833 de 3 de octubre de 2016.

movimientos para la independencia del país (MPLA, UNITA y FNLA), pero no con el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC). Desde ese momento, el FLEC, quien ya había luchado contra la ocupación extranjera de Portugal, ha mantenido la lucha armada contra el Estado angolano por la independencia del enclave. En el año 2002, y tras el final de la guerra civil post colonial, el movimiento secesionista había quedado bastante reducido, manteniéndose la violencia de manera esporádica. En el 2006 una sección del FLEC y el Gobierno firmaron un alto el fuego a cambio de una repartición mayor de los ingresos petrolíferos para Cabinda –región que produce más de la mitad del crudo nacional– que fue rechazado por la facción del FLEC-FAC (Fuerzas Armadas de Cabinda) comandada por N´Zita Tiago, que ha mantenido las reclamaciones secesionistas.

La tensión política volvió a rebrotar con mayor intensidad en el enclave de Cabinda durante el año, luego de que el grupo armado Frente de Liberación del Enclave de Cabinda – Fuerzas Armadas de Cabinda (FLEC-FAC) anunciase el 18 de febrero la vuelta a las hostilidades debido a la negativa del Gobierno a retomar las conversaciones de paz. En este nuevo contexto, **durante el año se registraron los peores incidentes en la región en años, produciéndose diferentes enfrentamientos armados entre el FLEC-FAC y las Fuerzas Armadas angolanas**. En total, y según los datos registrados por el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), se produjeron alrededor de 84 muertes durante el 2016.[35] Sin embargo, un recuento a partir de fuentes de prensa eleva el número de fallecidos a unos 185 muertos en los diferentes enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas de seguridad nacionales. La dificultad para contabilizar el número de bajas reales producidas en los enfrentamientos residió principalmente en las diferencias entre el número de bajas reportadas por el movimiento armado secesionista –quien ha reivindicado numerosas bajas en las Fuerzas Armadas–, y las confirmadas por el Gobierno de Angola, quien ha negado en numerosas ocasiones que la situación de seguridad en el enclave empeorase durante el año. En el que fue probablemente el peor mes del año, marzo, se produjeron diferentes emboscadas del FLEC-FAC a convoyes militares que dejaron un balance estimado de entre 30 y 50 víctimas mortales. Las emboscadas se mantuvieron durante el mes de abril, mientras el partido de oposición Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) –antigua insurgencia– solicitó el 4 de abril un foro nacional para lograr la paz y reconciliación. Sin lograr la apertura del diálogo, el 3 de junio se produjo el fallecimiento del histórico líder del FLEC, Nzita Tiago, de 88 años, quien fue remplazado en el cargo por su hijo Emmanuel Nzita. Tras la muerte de Nzita Tiago el FLEC-FAC intensificó sus actividades, reportando más de 50 muertes de militares angolanos durante los meses de junio a septiembre, sin que éstas fueran confirmadas por las autoridades. Durante los últimos meses del año también se contabilizaron diferentes incidentes armados, sobre todo emboscadas, que habrían dejado otra veintena de víctimas mortales. Por otro lado, el presidente José Eduardo Dos Santos, quien lleva en el poder desde 1979, anunció el 11 de marzo que no se presentará a las elecciones de 2017, lo que generó numerosas especulaciones sobre su sucesión. Su partido, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), en su congreso celebrado a mediados de agosto, reeligió a Dos Santos como líder del partido, y nombró a su hija Welwitschia, y a su hijo, José Filomeno, nuevos miembros del Comité Central del MPLA. Posteriormente, el día 2 de diciembre, el Comité decretó que Dos Santos no será su candidato para las próximas elecciones presidenciales, confirmando el anuncio del presidente.

En la región de Cabinda, Angola, se registraron los peores enfrentamientos armados en años

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas *janjaweed*. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria.

A la crisis política y social que azota el país vinculada a la crisis económica como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, y a las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad,[36] se le añadió el proceso electoral. La primera parte del año se vio marcada por la campaña y la celebración de las elecciones presidenciales el 10 de abril, que fueron ganadas nuevamente por el presidente Idriss Déby con el 59,9% de

35. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED 2016.
36. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

los votos frente a su rival más directo, Saleh Kebzabo, que consiguió el 12,7% de los votos, por lo que Idriss Déby evitó una segunda vuelta. 12 candidatos compitieron contra Déby y la participación se elevó al 71%. La oposición señaló que las elecciones se vieron inmersas en un fraude masivo. Durante la campaña electoral se produjeron numerosas movilizaciones y las protestas fueron reprimidas por parte de los cuerpos de seguridad. Ocho de los 13 candidatos, entre ellos Kebzabo, afirmaron que no reconocían los resultados publicados por la comisión electoral (CENI) debido a que se había constatado la manipulación y tráfico de papeletas y de carnets de votantes, la desaparición de centenares de urnas y, por último, tal y como relató la agencia AP, la desaparición de alrededor de 60 soldados que habían intentado votar contra Déby. Desde febrero, las manifestaciones habían sido prohibidas, coincidiendo con el caso de la violación de una joven por parte de hijos de altos cargos del régimen. Cuatro líderes de la sociedad civil fueron condenados a cuatro meses de prisión a principios de abril por promover protestas antigubernamentales. La oposición alcanzó sólidos resultados en los barrios pobres de la capital y en el populoso sur del país. El Gobierno estableció un fuerte despliegue militar en la capital, N'Djamena, de cara al anuncio de los resultados. La misión de observación de la UA declaró las elecciones libres y trasparentes aunque constató algunas anomalías. Durante la jornada electoral se bloqueó el acceso a internet y los teléfonos móviles no podían enviar mensajes de texto. Idriss Déby, en el poder desde 1990, inauguró su quinto mandato el 8 de agosto en medio de un clima de tensión y rechazo por parte de la oposición política. Diversos líderes de la región (los presidentes de Níger, Nigeria, Sudán, Malí, Burkina Faso, Mauritania) estuvieron presentes en la ceremonia. **Tras las elecciones, continuaron las protestas, huelgas y movilizaciones por parte de los estudiantes, la oposición política y la sociedad civil en contra de las medidas de austeridad promovidas por el Gobierno**. Los cuerpos de seguridad dispersaron las manifestaciones opositoras prohibidas en la capital, N'Djamena, el 6 y 7 de agosto, en las que resultó muerto un manifestante. Cabe destacar la formación el 26 de julio del Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONAC), que agrupó a 31 partidos políticos opositores.

Idriss Déby, en el poder en Chad desde 1990, inauguró su quinto mandato el 8 de agosto en medio de un clima de tensión y rechazo por parte de la oposición política

El presidente francés, François Hollande, recibió la visita de Déby el 20 de agosto, y le reafirmó su compromiso de apoyo para combatir a los grupos armados calificados de terroristas y la promoción del desarrollo del Lago Chad. A finales de diciembre el primer ministro francés y su ministro de Defensa devolvieron la visita a Déby y le expresaron su apoyo en la lucha antiterrorista en N'Djamena. Chad se ha convertido en el principal baluarte en el centro de África contra la insurgencia islamista, y el cuartel general de la fuerza multinacional regional que combate la insurgencia islamista de Boko Haram tiene su base en Chad. Asimismo, Chad es la base de las operaciones francesas en África. En este sentido, el Parlamento chadiano prolongó el 25 de abril por otros seis meses el estado de emergencia en la región del Lago Chad, escenario de operaciones militares contra Boko Haram.

Congo, Rep. del	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
Desde su independencia de Francia en 1960, el país se ha visto sometido a un clima de inestabilidad y violencia política. Denis Sassou-Nguesso lo gobernó desde 1979 –a través de un golpe de Estado militar– hasta 1992, etapa de régimen de partido único de ideología marxista-leninista. Tras el colapso del bloque comunista y de la Unión Soviética, y por presiones de su principal aliado, Francia, inició la transición a la democracia, estableciendo un sistema multipartidista que celebró elecciones en 1992 en las que fue Sassou-Nguesso derrotado por Pascal Lissouba. El país ha sido víctima de diversos conflictos armados (1993-1994, 1997-1999). Entre junio de 1997 y diciembre de 1999 se desencadenó una guerra civil entre las fuerzas de los dos candidatos a la presidencia, Nguesso y Lissouba. En paralelo al conflicto político entre Lissouba y Sassou-Nguesso, también jugaron un papel determinante los intereses franceses en el petróleo congolés. Brazzaville resultó destruida por la guerra y la multitud de milicias que competían por el poder. Entre ellas, las milicias Ninjas leales a Frédéric Bintsamou (pastor Ntoumi) y al líder político Bernard Kolélas, primer ministro tras el acuerdo de paz que puso fin al conflicto entre 1993 y 1994; las milicias Cocoyes, del presidente derrocado Lissouba; y las Cobras, del presidente golpista Nguesso. El apoyo de Francia a Nguesso fue un factor crucial en esta guerra, que terminó con la invasión de las tropas de Angola y el retorno de Nguesso al poder, el cual continúa en el cargo hasta la actualidad. Los Ninjas del reverendo Ntoumi siguieron activos en su feudo, la región de Pool, y se enfrentaron a Nguesso entre 2002 y 2003. Los intentos de Nguesso de reformar la Constitución para facilitar su permanencia en el poder, provocaron importantes movilizaciones en su contra protagonizadas por el movimiento #Sassoufit, creado en 2014, en referencia al lema de las movilizaciones.

El país se encuentra inmerso en un ciclo de inestabilidad y movilización política y social desde que el Gobierno promovió la reforma constitucional en octubre de 2015 que levantaba el límite de dos mandatos presidenciales, lo que permitió al presidente, Denis Sassou-Nguesso (72 años), presentarse a un nuevo mandato presidencial en marzo de 2016. Históricamente Sassou-Nguesso ha recibido numerosas críticas por nepotismo, recortar la democracia y las libertades en el país, y sus Gobiernos se han visto plagados de casos de corrupción. No

obstante, obtuvo la victoria en las elecciones del 20 de marzo en primera vuelta con el 60% de los votos, ampliando sus 32 años en el poder. El recuento oficial dio a Guy Brice Parfait Kolélas un resultado del 15% de los votos y el tercer candidato, el general Jean-Marie Michel Mokoko, obtuvo poco más del 14%. Los dos principales candidatos opositores rechazaron los resultados parciales publicados por la comisión electoral que le daban el 67% de los votos a Nguesso, cifra que posteriormente se redujo al 60%, tal y como reveló el ministro del Interior al anunciar los resultados definitivos. La jornada electoral transcurrió en un clima de alta tensión y algún tiroteo esporádico y bloqueo de las comunicaciones entre el 20 y el 23 de marzo (internet y mensajes de telefonía móvil) para evitar que los candidatos opositores pudieran publicar sus propios resultados. Los cuerpos de seguridad patrullaron la capital para intentar sofocar posibles protestas. Los candidatos opositores calificaron de fraudulentas las elecciones e hicieron un llamamiento para promover una campaña de desobediencia civil. Además, se convocó una manifestación que tuvo un importante seguimiento en el sur de la capital, feudo opositor, aunque no tuvo ningún seguimiento en el norte de Brazzaville, donde Sassou-Nguesso tiene un importante apoyo.

Tras las elecciones en la República del Congo se fue intensificando la violencia y el Gobierno reprimió con dureza las protestas, produciéndose enfrentamientos e intercambios de disparos en la capital

Tras las elecciones se fue intensificando la violencia y el Gobierno reprimió con dureza las protestas, produciéndose enfrentamientos e intercambios de disparos en la capital, Brazzaville, tras el anuncio del Tribunal Constitucional ratificando los resultados electorales el 4 de abril. Algunos edificios gubernamentales fueron atacados e incendiados. El Gobierno responsabilizó a los antiguos miembros de las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi de los enfrentamientos y ataques a edificios gubernamentales, militares y policiales,[37] y los cuerpos de seguridad congoleses bloquearon el acceso a la zona sur de la capital, feudo de la oposición. El Gobierno anunció una investigación para determinar posibles vínculos entre la ofensiva y los candidatos opositores. El Gobierno no reveló si se produjeron víctimas en los enfrentamientos, aunque miles de personas huyeron del sur de la capital hacia las zonas del norte, más seguras. **Los enfrentamientos recordaron a los residentes de la capital la ola de violencia de 1997 cuando Denis Sassou-Nguesso retornó al poder tras meses de guerra de guerrillas en la ciudad entre milicias rivales**, entre ellas las mismas milicias Ninjas lideradas por el que fue primer ministro, Bernard Kolélas, padre del actual candidato Guy Brice Parfait Kolélas, y por el Pastor Ntoumi. Sin embargo, Parfait Kolélas negó tener ningún tipo de relación con el grupo. No obstante, Ntoumi manifestó su apoyo al candidato Guy Brice Parfait Kolélas, derrotado en las elecciones. Nguesso configuró en mayo su nuevo Gobierno, nombrando como nuevo primer ministro al antiguo líder opositor Clement Mouamba, antiguo ministro de Finanzas del presidente Pascal Lissouba (1992-1993). Mouamba era miembro del opositor partido Pan-African Union for Social Democracy (UPADS) pero fue expulsado del partido en 2015 por formar parte de las conversaciones que facilitaron la celebración del referéndum constitucional que permitió extender el mandato de Nguesso y presentarse a las elecciones de marzo.

A partir de septiembre se produjo una nueva escalada de la violencia y de acciones por parte de las milicias Ninjas en la región de Pool, donde se desplazaron 13.000 personas desde abril. En una de las acciones más destacadas, el 5 de octubre las milicias Ninjas afirmaron haber dado muerte a 12 miembros de los cuerpos de seguridad y a 11 civiles en la última semana de septiembre. De acuerdo con fuentes policiales, al menos 14 personas murieron como consecuencia de un ataque a un tren en la localidad de Mindouli, en la región de Pool, aunque representantes de Ntoumi desvincularon a la milicia de esta acción. Posteriormente, en diciembre un vehículo militar sufrió un nuevo ataque, en el que murieron dos personas. Ntoumi afirmó que sus jóvenes habían retomado las armas como consecuencia de las elecciones fraudulentas de marzo y en respuesta a la violencia gubernamental que se intensificó desde la reelección de Nguesso. Ntoumi, que seguía en búsqueda y captura por parte de las autoridades congolesas, responsabilizó al presidente Sassou-Nguesso por el deterioro de la situación de seguridad. Ntoumi hizo un llamamiento para el establecimiento de un diálogo mediado por la comunidad internacional.

RDC	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada "primera guerra mundial africana".[38] La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A partir de junio de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia: Azarias Ruberwa del RCD-Goma y Jean-Pierre Bemba del MLC. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en diciembre de 2005. Entre julio y octubre de 2006 se celebraron elecciones legislativas y

37. Benn, Margaux, y Caroline Chauvetjune, "Political Violence Roils the Republic of Congo", *The New York Times*, 2 de junio de 2016.
38. Véase la síntesis de RDC (este) y RDC (este - ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, y Jean-Pierre Bemba resultó segundo, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno en el año 2007 no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad.

El país se vio afectado por una grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016 y el aplazamiento de facto de las elecciones nacionales y la preocupación ante la posibilidad de que Kabila intentara mantenerse en el poder por un tercer mandato presidencial, en contra de lo previsto en la Constitución. Esta cuestión provocó un grave clima de tensión ante la posibilidad de que se revirtieran los avances alcanzados en los últimos años en la transición política que atraviesa el país. Esta situación se tradujo en un incremento de las movilizaciones por parte de la oposición durante el año, que fueron reprimidas con excesiva dureza, causando decenas de víctimas mortales durante el año, movilizaciones de los sectores progubernamentales, y reducción del espacio político. Ante esto, durante el año se llevaron a cabo diferentes iniciativas políticas encaminadas a promover el diálogo entre los partidos políticos y la sociedad civil, lo que resultó en un acuerdo a finales de año.

El Gobierno congolés y la oposición acordaron el 31 de diciembre que Kabila permaneciese en el poder hasta la celebración de las elecciones de diciembre de 2017 sin posibilidad de presentarse

El año se inició con un creciente clima de violencia política y bloqueo institucional en relación al diálogo político promovido por el Gobierno, lo que sumado a los retrasos e incumplimiento del calendario electoral establecido en febrero de 2015, hacían ya técnicamente imposible la celebración de las elecciones antes de diciembre de 2016. Front Citoyen 2016, amplia coalición opositora creada en diciembre de 2015 cuyo principal objetivo era la celebración de las elecciones presidenciales en 2016, en enero inició protestas para exigir el fin del mandato del presidente Kabila a su término en diciembre de 2016, en especial la celebración de una serie de movilizaciones coincidiendo con la conmemoración de la Marche des Chrétiens, la histórica movilización del 16 de febrero de 1992 que terminó con un baño de sangre por la represión gubernamental y que perdura en la memoria del país. A su vez, la plataforma opositora G7 (grupo de siete partidos políticos surgidos de la coalición gobernante) hizo un llamamiento para la celebración de las elecciones en el marco establecido por la Constitución y con apoyo económico internacional. El anuncio de la Conferencia Episcopal (CENCO) de cancelar su participación en la Marche des Chrétiens y el anuncio por parte del partido gubernamental PPRD de convocar una marcha por la paz el 16 de febrero, hizo temer un estallido de violencia, lo que culminó con la cancelación de las movilizaciones y la celebración de una huelga general. El panel de Sabios de la UA escogió en enero a uno de sus miembros, Eden Kodjo, antiguo primer ministro de Togo, para que celebrara consultas en apoyo del diálogo político en el país. El anuncio a finales de enero de que el Gobierno actualizaría el censo de votantes encendió las alarmas en el seno de la oposición ante un seguro retraso de las elecciones, por el tiempo necesario para llevarlo a cabo, hecho que se constató en marzo cuando la Comisión Electoral (CENI) afirmó que no podría organizar las elecciones legislativas y presidenciales en noviembre debido a la extensa actualización de la lista de votantes. Esta decisión fue enviada al Tribunal Constitucional quien la ratificó en mayo, cuando dictaminó que el presidente podría legalmente permanecer en su cargo en diciembre si las elecciones no podían celebrarse. En abril la UA nombró oficialmente a Edem Kodjo como facilitador del diálogo político nacional, aunque la oposición se negó a participar. No fue hasta junio cuando se empezó a desbloquear la situación. **Ese mes la oposición política celebró una reunión en Bruselas en la que decidieron la formación de una coalición política con el objetivo de unirse en la oposición a un tercer mandato, llamada Rassemblement** (o Rally, en inglés). La coalición incluye el partido Union pour la Démocratie et le Progrès Sociale (UDPS), liderado por el histórico opositor Étienne Tshisekedi, la Oposición Dinámica, y el G7, que recientemente había escogido al antiguo gobernador de Katanga, Moise Katumbi, como su candidato presidencial. Los miembros de Rassemblement rechazaron el diálogo propuesto por Joseph Kabila pero hicieron un llamamiento para que la ONU, la UE, la UA, la Organización Internacional de la Francofonía y EEUU apoyaran al facilitador propuesto por la UA, Edem Kodjo. Posteriormente, el 9 y 10 de julio se celebró una reunión en Bruselas en la que participaron los líderes opositores, entre ellos Étienne Tshisekedi, y representantes de la UA, ONU, UE, en la que finalmente la oposición política reconoció la necesidad de llevar a cabo un diálogo nacional entre los actores políticos gubernamentales y progubernamentales y la oposición política.

El 27 de julio se produjo el celebrado retorno de Tshisekedi envuelto del apoyo de miles de simpatizantes tras dos años fuera del país por enfermedad. El 31 de julio el UDPS organizó una manifestación que aglutinó a decenas de miles de personas en Kinshasa. En paralelo, el 29 de julio, decenas de miles de partidarios de Kabila se manifestaron en Kinshasa en apoyo a su presidente. El 31 de julio se inició el registro de votantes, y el 20 de agosto la CENI afirmó que las elecciones no podrían celebrarse antes de julio de 2017. En paralelo, el 4 de julio se había celebrado en Addis Abeba la primera reunión del grupo internacional de apoyo al proceso de RDC, y entre el 1 de septiembre y el 18 de octubre se celebró el Diálogo Nacional, con la participación de algunos sectores pero no contó con la participación de la coalición opositora Rassemblement.[39] Durante el mes de septiembre se produjeron fuertes

39. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 3 (Procesos de paz).

movilizaciones en diversos lugares del país, en especial en la capital, Kinshasa, en contra del diálogo. Las principales movilizaciones tuvieron lugar el 19 y 20 de septiembre, en las que se produjo la muerte de decenas de personas como consecuencia de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la población civil. La oposición elevó la cifra a más de 50 víctimas mortales. Además, fueron incendiados los cuarteles generales de tres de los partidos opositores más importantes, el UDPS, las FONUS y el partido lumumbista (MLP). **El 18 de octubre se alcanzó un acuerdo, que prolongaba el mandato presidencial de Kabila hasta abril de 2018, cuando se celebrarían las elecciones, y fijaba la transferencia del poder para el 9 de mayo.** Según el acuerdo, se debería formar un nuevo Gobierno con una figura opositora en el cargo de primer ministro. Rassemblement boicoteó el acuerdo y acusó a Edem Kodjo de parcialidad en favor de los intereses del presidente congolés. Dicho acuerdo fue celebrado por la comunidad internacional, pero la UE amenazó con sanciones para frenar el clima de violencia y señaló la necesidad de promover el diálogo para celebrar las elecciones a ser posible en 2017. La CENCO, que inicialmente había participado en el diálogo pero se había ausentado tras los hechos del 19-20 septiembre, anunció que lo rechazaba porque debería incluir explícitamente que Kabila no competiría por un tercer mandato. Octubre y noviembre transcurrieron en medio de un clima de movilización social, violencia y caos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en paralelo a los llamamientos al diálogo por parte de la CENCO. **El 17 de diciembre, dos días antes de que culminara el mandato presidencial y bajo un elevado clima de tensión y movilizaciones por todo el país, se inició una nueva ronda de consultas entre el Gobierno y toda la oposición, que alcanzó un acuerdo el 31 de diciembre.** Según el acuerdo, el presidente permanecía en el cargo hasta la celebración de las elecciones presidenciales en diciembre de 2017 pero se comprometía a no presentarse.[40] Por otra parte, cabe destacar el brote de violencia que se desencadenó en Kasai Central en septiembre tras la muerte del líder comunitario Kamwina Nsapu en agosto y la posterior represión y uso excesivo de la fuerza ejercida por el poder central en la zona, que ha causado hasta diciembre más de un centenar de víctimas mortales y ha originado la creación de una rebelión que ha tomado el nombre del líder ejecutado.

Sudán	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce una duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que fueron acalladas por los aparatos de seguridad.

Además de los conflictos armados que permanecen activos en varias zonas del país, que registraron durante el 2016 un total de 3.495 víctimas mortales en alrededor de 1.088 episodios de violencia en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul según datos del centro Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)[41] situando a Sudán como el cuarto país africano en niveles de conflictividad armada,[42] en el territorio nacional también permanecieron activas tensiones políticas entre el Gobierno y grupos opositores que se manifestaron sobre todo en la capital, Jartum. Durante el año el país registró numerosas protestas que fueron reprimidas por las autoridades sudanesas, en donde resaltaron los episodios de movilizaciones y huelgas producidas por la introducción por parte del Gobierno de medidas destinadas a reducir los subsidios a los combustibles en el mes de noviembre. La medida generó movilizaciones sociales y llamamientos a la desobediencia civil en el país durante el 27 y 29 de noviembre y posteriormente el 19 de diciembre. La convocatoria de protestas de finales de noviembre se saldó con la represión y la dispersión por parte de la policía de las diferentes manifestaciones y con la detención de decenas de opositores, entre ellos 27 miembros del partido opositor Popular Congress Party (PCP). La segunda convocatoria de huelga civil, prevista para el 19 de diciembre, se realizó en medio de una campaña de miedo orquestada desde el Gobierno, quien ordenó la realización de detenciones masivas de opositores días antes de la convocatoria. En ambas convocatorias la acción del Gobierno se dirigió también hacia la censura y el control de los medios de comunicación, siendo confiscadas desde el inicio de las acciones de desobediencia civil en el país a mediados de noviembre, cerca de 28 ediciones de periódicos (entre ellos medios como El Jareeda, El Ayam, El Tayyar, Asoiga o El Ahram el Yoom) así como varios periodistas fueron detenidos y golpeados por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Sudán (NISS). De manera particular, diferentes ediciones del periódico El Jareeda fueron confiscadas por agentes de seguridad en nueve

40. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 3 (Procesos de paz).
41. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) "Sudan – December 2016 Update", enero de 2016.
42. Véase los resumenes de Sudán (Darfur) y Sudán (Kordofan Sur y Nilo Azul) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

ocasiones desde noviembre. Estos hechos generaron un llamamiento de la Red de Periodistas de Sudán para proteger la libertad de prensa y el día 7 de diciembre miembros de la troika de Sudán (Noruega, Reino Unido y EEUU), así como la UE y Canadá, realizaron una declaración conjunta expresando su preocupación por la oleada de detenciones y restricciones de prensa en el país. En otro orden de aspectos, el histórico líder opositor del Popular Congress Party (PCP), Hassan al-Turabi, falleció el 5 de marzo, siendo reemplazado por Ibrahim al-Sanusi.

Sudán – Sudán del Sur	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Recursos, Identidad Internacional
Actores:	Sudán, Sudán del Sur

Síntesis:
El 9 de julio de 2011 Sudán del Sur declaró su independencia como colofón del proceso de paz iniciado con la firma del Acuerdo de Paz Global en 2005. Sin embargo, la creación del nuevo Estado no puso fin a las desavenencias entre Khartoum y Juba debido a la multiplicidad de asuntos pendientes de resolución entre ambos Gobiernos. Entre los principales obstáculos para la estabilidad se encuentra la disputa por el enclave petrolero de Abyei y la delimitación final de la frontera entre ambos Estados así como la falta de acuerdo en torno a la explotación de los recursos petroleros (con yacimientos en Sudán del Sur pero con oleoductos para su exportación en Sudán). Las acusaciones mutuas respecto al apoyo de movimientos insurgentes en el país vecino han contribuido a desestabilizar más la situación y amenazar la convivencia pacífica de ambos países.

Las tensiones entre los Gobiernos de Sudán y Sudán del Sur se distendieron a principios de año con la decisión tomada el 27 de enero de 2016 por parte del ejecutivo sudanés presidido por Omar al-Bashir, de reabrir las fronteras con Sudán del Sur, las cuales permanecían cerradas desde junio de 2011, un mes antes de la declaración formal de independencia de Sudán del Sur. La decisión fue leída como un paso histórico para la normalización de las relaciones entre ambos vecinos. Días antes de esta histórica medida, el Gobierno de Sudán hizo otro gesto reduciendo las tasas para el tránsito de petróleo desde Sudán del Sur, a lo que el ejecutivo sur sudanés presidido por Salva Kiir, respondió con la orden de retirada del Ejército de la Zona Fronteriza Desmilitarizada Segura (SDBZ por sus siglas en inglés) y su reubicación a unos 8 kilómetros de distancia. Ambos hechos se relacionaron con los avances en las reuniones mantenidas en octubre del 2015 en Addis Abeba por la Comisión de Fronteras Conjunta (JBC) entre Sudán y Sudán del Sur, bajo los auspicios del Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), con el fin de resolver las diferentes situaciones fronterizas relativas a Abyei, 14-Mile área, Joudat Al-Fakhar, Jebel al-Migainais, Kaka y el enclave de Kafia Kingi, lo que equivale a un 20% de la frontera compartida entre ambos países que está pendiente de delimitar. Sin embargo, a mediados de marzo el Consejo de Ministros de Sudán amenazó con revertir la decisión de la reapertura fronteriza, así como con procesar a cualquier ciudadano sur sudanés que se encontrase en el país sin permiso –lo que afectaría a las miles de personas refugiadas que huyen del conflicto armado en Sudan del Sur– si el Gobierno de Sudán del Sur no retiraba sus tropas de la frontera como había decretado a finales de enero, y si éste no dejaba de apoyar y cobijar a los grupos rebeldes sudaneses. En este clima de tensión y acusaciones mutuas de apoyar a grupos rebeldes opositores, el 6 de junio delegaciones de ambos gobiernos se reunieron en Jartum comprometiéndose a retirar las tropas de la SDBZ, y también pactaron dejar de apoyar a grupos rebeldes hostiles entre sí. Durante el mes de agosto el nuevo primer vicepresidente sur sudanés, Taban Deng Gai, visitó Jartum y se comprometió nuevamente a expulsar a las insurgencias sudanesas del país. Sin embargo, el 18 de septiembre, Sudán volvió a amenazar con cerrar su frontera si Juba no cumplía con su compromiso de expulsar a los grupos insurgentes. A finales de septiembre, y durante cuatro días, ambos países se reunieron en el marco de la JBC en Addis Abeba, acordando las dos partes un documento para la demarcación fronteriza, estableciendo los términos de referencia, el presupuesto para la demarcación y el plan de trabajo de la JBC. A principios de noviembre, las tropas sur sudanesas se retiraron de sus posiciones en la frontera en cumplimiento con el Acuerdo de Cooperación de 2012. A finales de mes, y coincidiendo con la cumbre árabe-africana en la capital de Guinea Ecuatorial, los presidentes sudanés y sur sudanés mantuvieron una reunión bilateral donde acordaron la reapertura de la frontera y la aplicación del Acuerdo de Cooperación de 2012, pactando a su vez el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como comprometiéndose nuevamente a no apoyar a ningún grupo rebelde de ambos países. El Gobierno de Sudán del Sur acogió con satisfacción la decisión de las autoridades sudanesas de no conceder la entrada a Jartum al líder rebelde y ex primer vicepresidente Riek Machar, quien se tuvo que exiliar provisionalmente en Sudáfrica.

En enero de 2016 el Gobierno sudanés tomó la decisión histórica de reabrir las fronteras con Sudán del Sur que permanecían cerradas desde la independencia en 2011

En cuanto a la situación de desplazamiento forzoso y cifras de acogida de personas refugiadas en ambos países, a fecha del 15 de noviembre de 2016, **ACNUR reportó un total de 263.245 refugiados sur sudaneses en territorio de Sudán** (de los cuales 184.272 son menores, según UNICEF) distribuidos en los distintos estados: Nilo Blanco (109.996), Jartum (35.707), Kordofán Occidental (26.386), Kordofán Sur (21.735), Kordofán Norte (1.689), Nilo Azul (3.661), Darfur Oriental (55.957),

Darfur Meridional (5.430) y Darfur del Norte (2.684).[43] Por otro lado, de las 262.560 personas refugiadas que Sudán del Sur acogió a finales de 2016, **241.510 eran de origen sudanés, desplazadas por los conflictos armados en Kordofan Sur, Nilo Azul y Darfur.**[44]

Uganda	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
El presidente Yoweri Museveni ocupa el poder desde 1986, cuando al mando de un movimiento insurgente consiguió la toma del poder al derrocar al Gobierno de Tito Okello. Desde entonces ha gobernado Uganda de forma autoritaria, con todo el poder concentrado en sus manos y en su partido, el NRM (el Movimiento). En las elecciones presidenciales de 2001, Museveni venció a su principal opositor, Kizza Besigye, ex coronel del NRM, en medio de acusaciones de fraude. En un referéndum celebrado en julio de 2005, los ugandeses votaron en favor de un regreso al sistema multipartidista. Tras una enmienda a la Constitución en 2005, para aumentar el límite existente de dos mandatos consecutivos a tres, Museveni finalmente ganó las elecciones de 2006, en medio de serias acusaciones de fraude. Fueron las primeras elecciones multipartidistas desde la llegada de Museveni al poder en 1986. En las elecciones presidenciales de febrero de 2011 Museveni volvió a imponerse a su eterno contrincante y antiguo aliado, Kizza Besigye, en medio de nuevas acusaciones de fraude, lo que generó una escalada de la tensión social y de la represión gubernamental contra las demandas de cambio democrático y las protestas contra el incremento del coste de la vida. En paralelo, la intervención militar de Uganda en Somalia incrementó las amenazas del grupo armado somalí al-Shabaab hacia Uganda. Finalmente, diversas zonas del país se ven afectadas por periódicas disputas intercomunitarias y agravios instrumentalizados en periodo electoral.

El año se vio marcado por el clima de tensión derivado de la celebración en febrero de las elecciones presidenciales y legislativas en Uganda que dieron nuevamente la victoria al presidente Yoweri Museveni y a su partido, el National Resistance Movement (NRM), en el poder desde 1986, así como por la escalada del conflicto en la región de Rwenzori. Museveni consiguió vencer y obtuvo un nuevo mandato de cinco años al frente del país. El NRM consiguió una amplia victoria, obteniendo más de dos tercios de los 426 escaños del Parlamento. No obstante, al menos 17 ministros perdieron sus escaños en las elecciones, y la comisión electoral señaló que el principal partido opositor, el Forum for Democratic Change (FDC) consiguió 40 escaños, y el Democratic Party otros 15 escaños. Las elecciones fueron calificadas de caóticas y sembradas de numerosas irregularidades, según diversos observadores internacionales, y calificadas de fraudulentas por la oposición. Además, se vieron afectadas por un elevado clima de violencia y excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, y enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente y el líder opositor, Kizza Besigye. El propio presidente de la Comisión Electoral, Badru Kiggundu, que ha presidido la comisión en las dos últimas elecciones presidenciales, pidió disculpas por los significativos problemas que los votantes encontraron para ejercer su voto en la capital, Kampala, y en el vecino distrito de Wakiso, feudos de la oposición. Tras el anuncio de los resultados, se produjeron numerosos incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad, y al menos 10.000 personas se desplazaron en el distrito Bundibugyo (oeste de Uganda) como consecuencia de la violencia postelectoral, que causó nueve víctimas mortales y cuatro heridos. Enfrentamientos entre partidarios y opositores de Museveni tuvieron lugar en los distritos de Wakiso y Masindi, causando decenas de heridos. Kizza Besigye fue detenido y sometido a arresto domiciliario decenas de veces durante el año. Museveni fue investido el 12 de mayo. Más de una decena de jefes de Estado, entre los cuales cabe destacar a Uhuru Kenyatta (Kenya) y Omar al-Bashir (Sudán), estuvieron presentes en la ceremonia, que supone su quinta investidura consecutiva y el inicio de su cuarta década en el poder. No obstante, las delegaciones occidentales de diplomáticos de EEUU, países de la UE y Canadá que participaron en la sesión de investidura abandonaron la ceremonia en protesta por los comentarios de desprecio realizados por Yoweri Museveni contra la Corte Penal Internacional (CPI).

La disputa electoral en Uganda también atizó la violencia política y los conflictos intercomunitarios larvados en la región de Rwenzori, fronteriza con RDC

En paralelo, la disputa electoral también atizó la violencia política y los conflictos intercomunitarios latentes en la región de Rwenzori, en el reino Rwenzururu. En el oeste del país, junto a la frontera congolesa, habían estallado en 2009 diversos conflictos a raíz del reconocimiento por parte del Gobierno hacia Charles Wesley Mumbere como nuevo rey del reino Obusinga bwa Rwenzururu (OBR). Su nombramiento no fue bien recibido por las comunidades basongora y banyabindi en Kasese ni tampoco por los bawisi y bamba en el distrito de Bundibugyo, que exigieron la creación de sus propios reinos separados del reino bakonzo, la comunidad mayoritaria. El reino Rwenzururu fue establecido en 1962 como resultado del movimiento secesionista de las comunidades bamba y bakonzo, liderada por el padre de Mumbere, Isaya Mukirane, quien fue reconocido como el rey de la región, conflicto que dio origen al grupo armado NALU, que posteriormente se unió a las ADF en RDC.[45] Tal y como han señalado diversos analistas, el reconocimiento del reino y la división en distritos de la zona es resultado de la política de patronazgo del Gobierno, por la cual el Estado

43. OCHA, "Sudan Humanitarian Bulletin", No. 1, 26 de diciembre de 2016 – 8 de enero de 2017.
44. UNHCR, "Factsheet- South Sudan", diciembre de 2016.
45. Véase la síntesis del conflicto sobre RDC (este-ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

y los recursos son utilizados para consolidar el poder del régimen, en una zona que vota mayoritariamente a la oposición política, por lo que la creación del reino contribuyó a exacerbar nuevas tensiones y no resultó en la compra de votos que preveía el Gobierno.[46] En julio de 2014 se produjeron enfrentamientos que causaron 100 víctimas mortales. En marzo de 2016 murieron 50 milicianos de la guardia real como consecuencia de los enfrentamientos entre la milicia del rey Mumbere y los cuerpos de seguridad del Estado, que atacaron el palacio del rey Mumbere, y otros 139 miembros de la guardia presidencial fueron arrestados. A finales de noviembre se produjeron nuevos enfrentamientos en el distrito de Kasese que causaron la muerte de 126 personas, entre miembros de la guardia real, policías y civiles, además de 149 detenidos. El reino desmintió que estuviera promoviendo la creación de un Estado independiente o que haya creado una milicia paralela a la guardia real. Tras los enfrentamientos el rey Mumbere fue detenido y se enfrentó a acusaciones de terrorismo, robo e intento de asesinato ante un tribunal en diciembre.

Magreb - Norte de África

Marruecos – Sáhara Occidental	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional[47]
Actores:	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO

Síntesis:
Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio –la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)– y lanzó una campaña armada contra Marruecos. Las partes aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, MINURSO, supervisa el cese el fuego y se encarga de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

El conflicto en torno al Sáhara Occidental escaló en 2016, en un año caracterizado por los desencuentros entre el Gobierno de Marruecos y la ONU, por cambios en la dirigencia del Frente POLISARIO tras la muerte de su líder histórico y, a partir del segundo semestre, por la tensa proximidad de tropas marroquíes y saharauis en una zona cercana a la frontera con Mauritania. Las tensiones entre Rabat y la ONU se intensificaron a finales del primer trimestre en el marco de la visita del secretario general de la organización internacional a los campos de refugiados saharauis en el sur de Argelia. Las declaraciones de Ban Ki-moon refiriéndose a la "ocupación" del Sáhara Occidental despertaron una airada reacción de Marruecos, que acusó al diplomático de falta de neutralidad y exigió clarificaciones públicas sobre su posición. El secretario general de la ONU insistió en que sus palabras no pretendían ser hostiles a Rabat ni suponían un cambio de posición del organismo. No obstante, el incidente –calificado como la peor crisis entre Marruecos y la ONU desde el establecimiento del cese el fuego a instancias de la organización– motivó **multitudinarias protestas de miles de personas en la capital marroquí y derivó en la expulsión de la mayor parte del componente civil de la misión de la ONU para el Sáhara Occidental, MINURSO**, además de la suspensión de la aportación económica marroquí para su funcionamiento y el cierre de la oficina de enlace militar. Un total de 84 funcionarios de la MINURSO y de la Unión Africana (UA) se vieron obligados a abandonar la zona en un plazo de tres días, lo que llevó a la ONU a advertir que las capacidades de la misión –incluyendo las del componente militar– quedaban seriamente comprometidas por la decisión marroquí. En este contexto, a mediados de abril se hizo público un nuevo informe del secretario general de la ONU sobre la situación en el Sáhara Occidental en el que se subrayaba que el mandato de la misión había quedado de facto alterado y que se requería recuperar el contingente. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó renovar por un año más el mandato de la MINURSO e hizo un llamamiento al retorno del componente político de la misión. En este contexto, Rabat autorizó en junio el regreso de un grupo reducido de 25 civiles a la oficina de la MINURSO en El Aaiún. **Esta escalada diplomática coincidió con la muerte del líder del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, el 31 de mayo después de cuatro décadas al mando de la organización**. El dirigente, que también ostentaba el cargo de presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), fue sucedido por Brahim Ghali, otro de los fundadores del grupo y que fue el único candidato en la asamblea extraordinaria de delegados del Frente POLISARIO celebrada en el campo de refugiados de Dakhla 40 días después de la muerte de Abdelaziz.

En este nuevo escenario, durante el segundo semestre la atención estuvo centrada en la zona suroccidental del territorio en disputa, en un área próxima a la frontera con Mauritania considerada como "buffer zone" (zona neutral o tierra de nadie), más allá del muro de arena que habitualmente demarca el área bajo control marroquí.

46. Titeca, Kristof y Anna Reuss, "There is new violence in Western Uganda. Here's why", *The Washington Post*, 29 de noviembre de 2016.
47. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como "internacional" y no como "interna" por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

Marruecos desplegó a personal militar en este territorio, Guerguerat, en una acción que fue denunciada a mediados de agosto por el Frente POLISARIO como una violación del cese el fuego vigente entre las partes desde 1991. La dirigencia saharaui llamó a la ONU a intervenir ante esta acción, que Rabat justificó como parte de una operación civil, estratégica y limitada en el tiempo destinada a frenar las actividades de contrabando en la zona y construir una carretera. En este escenario, el Frente POLISARIO decidió desplegar también unidades armadas en la zona, lo que llevó a la ONU a manifestar su preocupación por la proximidad de las tropas de ambos bandos, que permanecían separadas por solo unos metros. A finales de año la tensión se mantenía en esta zona, donde la MINURSO desplegó un número limitado de cascos azules desarmados para vigilar la situación. Paralelamente, cabe destacar que durante la segunda mitad del año Marruecos oficializó su iniciativa diplomática tendiente a conseguir la reincorporación del país en la UA después de más de tres décadas. Rabat abandonó la organización regional –en concreto, su predecesora, Organización para la Unidad Africana– después de que la institución aceptara la incorporación de la RASD en 1984. Marruecos ha intensificado sus relaciones con numerosos países del continente en los últimos años –especialmente en el plano económico–, razón por la cual esperaba apoyo a su petición. Diversos análisis destacaron que Rabat no ha disimulado su intención de aislar y eventualmente expulsar a la RASD de la organización regional, la única donde se le reconoce una legitimidad de Estado. En materia de derechos humanos, cabe mencionar que algunos informes –entre ellos el del secretario general de la ONU, publicado en abril, y el de HRW, dado a conocer a principios de 2017– continuaron denunciando las medidas de las autoridades marroquíes para prevenir reuniones y manifestaciones de activistas saharauis, restringir el trabajo de organizaciones de derechos humanos y limitar el acceso de medios de comunicación, ONG y delegaciones extranjeras para verificar la situación de derechos humanos en el Sáhara Occidental.

En marzo Marruecos expulsó a la mayor parte del componente civil de la MINURSO tras declaraciones del secretario general de la ONU sobre la "ocupación" del Sáhara Occidental

Túnez	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS

Síntesis:
Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS.

La situación en Túnez siguió afectada en 2016 por la actividad de grupos armados, en medio de un clima interno caracterizado por dificultades políticas, sociales y económicas. Los diversos hechos de violencia se cobraron cerca de un centenar de víctimas mortales durante el año, una cifra similar a la de 2015 cuando se contabilizaron 120 personas fallecidas, aunque las dinámicas de violencia fueron diferentes. Si 2015 estuvo marcado principalmente por tres grandes ataques reivindicados por ISIS –en el Museo del Bardo, en una zona costera y contra un bus de la guardia presidencial en la capital– que fueron perpetrados por un número reducido de atacantes, **el episodio más significativo de 2016 fue una ofensiva de ISIS contra edificios de la Policía y la Guardia Nacional en la que participaron decenas de miembros del grupo armado en marzo en la localidad de Ben Guerdane, ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera con Libia.** Este ataque sin precedentes –por el número de efectivos, el objetivo y el tipo de armamento utilizado– habría pretendido el control de territorio y la proclamación de una nueva "provincia", y fue acompañado de llamamientos a la población –de 60.000 habitantes– a sublevarse ante las autoridades. Los enfrentamientos entre los miembros de ISIS y las fuerzas tunecinas se cobraron la vida de 40 atacantes, 13 efectivos de seguridad y siete civiles en el primer día de hostilidades, el 7 de marzo, y otra decena de integrantes del grupo armado murieron en operaciones en la zona en los días siguientes. Esta acción de ISIS se produjo semanas después de que un ataque aéreo estadounidense contra posiciones del grupo en Libia causara la muerte de decenas de militantes, en su mayoría de nacionalidad tunecina. Tras los hechos de Ben Guerdane, el Gobierno de Túnez mantuvo cerrada la frontera con Libia durante dos semanas y a lo largo del año expresó su preocupación por las consecuencias de la inestabilidad en el país vecino.[48] Túnez ha construido también una barrera de 200 kilómetros,

48. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 1 (Conflictos armados).

que cubre la mitad de su frontera con Libia, en un intento por evitar la infiltración de militantes. Además del incidente de Ben Guerdane, a lo largo del año –y al igual que en 2015–, también se produjeron hechos de violencia en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad contra presuntos militantes y de choques entre militares o policías con miembros de grupos armados. En este contexto, las autoridades renovaron periódicamente el estado de emergencia, vigente en el país desde noviembre de 2015. Según fuentes oficiales, más de 160 células yihadistas habrían sido desarticuladas durante 2016. Sin embargo, grupos próximos a AQMI –como Oqba Ibn Nafaa– y a ISIS –como Jund al-Khilafa– continuaban presentes en áreas montañosas próximas a la frontera con Argelia.[49] Asimismo, cabe destacar que de acuerdo a estimaciones de diversas fuentes, entre 3.000 y 6.000 nacionales tunecinos se habrían sumado a las filas de ISIS en Siria, Iraq o Libia. Cifras oficiales dadas a conocer a finales de año indican que unos 800 habrían retornado a Túnez y estarían detenidos, bajo arresto domiciliario o vigilancia. Pese a ello, existía preocupación por la posibilidad de que perpetraran ataques en el país. A esto se suma que ciudadanos tunecinos acometieron graves acciones en Europa en 2016 en nombre de ISIS, incluyendo el ataque con camión en Niza, Francia, que dejó 84 víctimas mortales en julio y una ofensiva similar contra un mercado navideño en Berlín, Alemania, que acabó con la vida de 11 personas en diciembre.

El episodio de violencia más significativo de 2016 en Túnez fue la ofensiva de decenas de miembros de ISIS en Ben Guerdane, en marzo, que dejó más de 70 muertes en varios días de combates

Cabe destacar que en paralelo a los retos en materia de seguridad, **Túnez enfrentó un complicado escenario interno, caracterizado a principios de año por la más grave convulsión social desde la revuelta que derivó en la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Alí a principios de 2011**. En enero se produjeron masivas movilizaciones por las condiciones económicas del país, que se extendieron desde la localidad de Kasserine hacia otras localidades como Sfax, Susa y la capital tunecina. Las manifestaciones se activaron tras la muerte de un joven desempleado que decidió subirse a un poste durante una protesta y murió electrocutado. Durante varios días se produjeron enfrentamientos con la Policía, lanzamientos de artefactos explosivos, ataques a comisarías y saqueos a tiendas y comercios que dejaron más de 200 personas heridas, lo que llevó a las autoridades a decretar toque de queda durante dos semanas. La situación forzó al Gobierno a un profundo cambio de gabinete, condicionado además por la crisis política en el partido del presidente Beji Caid Essebsi. La fractura en Nidaa Tounes se produjo por disensos internos respecto al rol del hijo del mandatario, Hafedh Caid Essebsi, en la organización y derivó en el abandono del partido de una veintena de parlamentarios. Nidaa Tounes perdió así su lugar como principal partido en el Parlamento, que pasó a ser ostentado por los islamistas de Ennahda. Este último se mantuvo en la coalición gubernamental. Los meses siguientes se caracterizaron por nuevas protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos y heridos –entre ellas, manifestaciones de desempleados en la isla de Kerkennah y en la capital–, críticas a la gestión del primer ministro Habib Essid –en particular por su gestión de la crisis económica, condicionada en parte por la severa caída del estratégico sector turístico y con tasas de desempleo juvenil de entre 30% y 40%–, y por los intentos de conformar un gobierno de unidad. Tras recibir un voto de no confianza del Parlamento, Essib se vio forzado a abandonar el cargo en agosto y fue sucedido por Youssef Chahed, hasta entonces ministro de Asuntos Locales. El dirigente, de 41 años, nombró un gabinete con mayor presencia de mujeres y jóvenes. Durante el último trimestre, sin embargo, continuaron registrándose protestas y movilizaciones de personas desempleadas y sindicatos y el nuevo Gobierno fue acusado de carecer de una estrategia efectiva para luchar contra la amenaza yihadista. Finalmente, cabe destacar que durante 2016 la Instancia por la Verdad y la Dignidad (IVD) continuó su trabajo de investigación de los abusos y crímenes cometidos en el país desde 1955, un año antes de la independencia de Túnez, hasta 2013. En los últimos tres años la IVD, dirigida por la activista Sihem Bensedrine, ha recopilado los testimonios de 11.000 personas. A finales de 2016 tuvieron lugar las primeras audiencias públicas y televisadas de víctimas de represión. Algunos sectores tunecinos cuestionaron la capacidad y autoridad de la IVD para investigar las miles de denuncias recibidas sobre abusos a los derechos humanos y casos de corrupción.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

El Salvador	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición, sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, 18 Revolucionarios, 18 Sureños)

Síntesis:
El conflicto armado en El Salvador (1980-1992), que llegó a su fin con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992, dejó un balance de alrededor de

49. International Crisis Group, *Jihadist Violence in Tunisia: The Urgent Need for a National Strategy*, Middle East and North Africa Briefing no.50, 22 de junio de 2016.

75.000 muertes. Tras la guerra, la consolidación de la paz ha atravesado numerosas dificultades en un país marcado por los altos niveles de pobreza, desigualdad y violencia, donde las pandillas o maras han proliferado colocando al país entre con los índices de homicidios más elevados del mundo. Durante el año 2015, el año más violento de la historia reciente del país, se registraron 6.671 asesinatos, datos que superaron de media las victimas mortales durante el conflicto armado. La violencia de las pandillas, especialmente la producida por las facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13, aunado a la política de seguridad del Gobierno y a la falta de protección de la población por parte del Estado, ha generado una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Durante el periodo de Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que consiguió reducir los asesinatos de los 4.382 a los 1.050 al año. La tregua se rompio con la llegada de Sánchez Cerén a la presidencia en el año 2015, quien le declaró la guerra a las pandillas, las cuales fueron declaradas grupos terroristas por la Sala de lo Constitucional.

El año estuvo marcado por la implementación de las "medidas extraordinarias" de seguridad decretadas para combatir a las pandillas por parte del ejecutivo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presidido por Salvador Sánchez Cerén, las cuales fueron muy controvertidas, siendo señaladas por diferentes organismos por no respetar los derechos humanos. Las medidas, que vinieron a reforzar la campaña "de mano de hierro" que mantiene el Gobierno de Cerén contra las pandillas desde enero de 2015, consistieron en el incremento del número de efectivos policiales y militares destinados a combatir exclusivamente a las pandillas (Fuerzas de Intervención y Recuperación del Territorio, FIRT), y fueron puestas en marcha a principios de abril, luego del aumento de la violencia en el primer trimestre del año. A finalizar el año, los datos presentados por el Gobierno dieron cuenta de una reducción del número de homicidios registrados en el país, pasando de los 6.671 registrados en el 2015 –**cifra record de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando en más de 10 puntos las condiciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera epidémicas, que colocaron a El Salvador como el país con la tasa más alta de violencia del mundo fuera de zona de guerra**– a los 5.278 registrados durante el 2016, lo que supone una reducción de 1.393 muertes según las cifras oficiales. Sin embargo, a estos datos habría que sumarles las muertes de presuntos pandilleros a manos de las fuerzas de seguridad. Según datos recopilados por el medio local El Faro, la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas mataron a 693 presuntos miembros de las pandillas en 20 meses (desde enero de 2015 a agosto de 2016). A su vez, en el mismo período se reportó la muerte de 24 policías y soldados.

El Salvador fue considerado en el año 2015 el país más violento del mundo fuera de zona de guerra

Estos datos, según expresaron voces expertas, apuntan a indicios de presencia de ejecuciones sumarias.[50] Por otro lado, la organización Small Arms Survey había señalado en un informe presentado en el año 2012 que **el país poseía la tasa de feminicidios más alta del mundo con 12 asesinatos por cada 100.000** en el quinquenio 2004-2009.[51] Las cifras aumentaron en el año 2015, pasando la tasa a representar 18.6. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) presentó en agosto un informe en donde analizó el impacto de la violencia en el incremento del desplazamiento forzado en el país, alertando que los colectivos más vulnerables a la violencia siguen siendo las mujeres, los jóvenes y el colectivo LGBTI.[52] El informe denunció el impacto humanitario que la violencia estaba generando en el país, así como la pasividad del Estado salvadoreño en la defensa y protección de la población. ACNUR también se sumó a las denuncias sobre la vulneración de los derechos de estas personas a la hora de solicitar refugio en terceros países, afirmando que todos estos colectivos en riesgo pueden estar necesitados de protección internacional de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Amnistía Internacional incidió en la denuncia destacando en un informe la vulneración de los derechos de las personas desplazadas de la violencia, solicitando la protección de las leyes internacionales para las personas refugiadas –debido al aumento en el número de deportaciones desde México y EEUU–, así como la implementación de políticas internas de protección de las personas retornadas por las deportaciones, debido a que no existen mecanismos de protección efectiva.[53]

En este difícil escenario, y de manera más específica sobre lo acontecido en el año, durante el primer trimestre se produjo un aumento de la violencia que derivó en la propuesta del Ejecutivo salvadoreño de decretar el estado de emergencia en los territorios más afectados, así como se anunció el lanzamiento del plan de seguridad "El Salvador Seguro". Según el jefe del Estado, Salvador Sánchez Cerén, estas medidas buscaron disminuir el número de muertes violentas, las cuales habían aumentado en el primer trimestre del año un 107% respecto al mismo período del año anterior, registrándose más de 1.630 asesinatos desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo. Las medidas incluidas en el plan contemplaron el incremento de efectivos policiales y militares y el aumento de la seguridad en las cárceles, así como también la desmasificación de los centros penitenciarios. Las medidas del ejecutivo produjeron las reacciones de las principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones de la mara Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños)

50. Valencia, R. "Casi que Guardia Nacional Civil", *El Faro*, 3 de octubre de 2016.
51. Alvazzi, A. *Femicide: A Global Problem*. Small Arms Survey. Ginebra, Suiza. 2012.
52. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) "Informe de Registro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre Desplazamiento Forzado", El Salvador, agosto de 2016, p.11.
53. Amnistía Internacional, "¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados", octubre de 2016.

quienes se comprometieron a contener la violencia a cambio de que el Gobierno renunciara a las medidas extraordinarias. El presidente Sánchez Cerén rechazó el ofrecimiento y anunció su intención de seguir con el plan. A finales de marzo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró el estado de emergencia en siete centros penitenciarios del país, al tiempo que se trasladó a los cabecillas de las pandillas hacia el penal de Quezaltepeque, donde los reos fueron sometidos a un mayor control, aislamiento y cese de comunicación. El endurecimiento de las condiciones carcelarias fue acompañado de un incremento de las operaciones policiales y militares contra las pandillas. Durante las primeras semanas de noviembre se produjo una importante secuencia de asesinatos de miembros de cuerpos de seguridad por parte de presuntos pandilleros. Diez policías y tres soldados fueron asesinados por pandilleros presuntamente vinculados a la MS-13, lo que generó una ofensiva de las fuerzas de seguridad contra los territorios controlados por la pandilla. El incremento de la inseguridad a nivel nacional y la crisis humanitaria (aumento del desplazamiento forzoso y de las deportaciones) provocó que los Gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala acordaran durante el mes de agosto la puesta en marcha de una fuerza regional para combatir las bandas criminales y el narcotráfico en la conocida como la región del "Triángulo Norte", presentando de manera oficial el 15 de noviembre la denominada "Fuerza Trinacional contra el Crimen Organizado". A finales de año, en un comunicado de la MS-13, ésta solicitó al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo público con todos los actores nacionales (Gobierno, oposición, pandillas, organizaciones de derechos humanos) para detener la crisis de violencia y frenar la escalada bélica antes de que derivase en guerra. En su propuesta, la pandilla más numerosa del país, puso sobre la mesa de diálogo la posibilidad de que sus pandilleros se pudieran desmovilizar e incluso, la propia desarticulación de la pandilla, ambos elementos novedosos que no habían sido objeto de negociación en la conocida como La Tregua (2012-2014) debido a la negativa de las pandillas. El vocero de la presidencia, Eugenio Chicas, manifestó que el Gobierno estudiaría la propuesta, aún y expresando que la Sala de la Constitucional había establecido, en una resolución de agosto de 2015, que las pandillas son grupos terroristas, por lo que el Estado no puede llegar a acuerdos con ellas, lo que dificulta la apertura de negociaciones.

Haití	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares

Síntesis:
Tras la salida del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país, fueron desplegadas consecutivamente una Fuerza Multinacional Provisional y una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH) para auxiliar al Gobierno provisional a restablecer el orden y la seguridad. Aunque se han registrado avances hacia una mayor estabilidad política, social y económica, todavía persisten varios problemas, como las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra la MINUSTAH, las altas tasas de delincuencia, el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas, las exigencias de grupos de antiguos militares para reinstaurar las Fuerzas Armadas o los altos niveles de corrupción, pobreza y exclusión social.

La celebración de los comicios presidenciales y legislativos se vio nuevamente postergada en diferentes ocasiones a lo largo del año, manteniendo abierta la crisis política en el país iniciada desde finales de 2014. Haití inició el 2016 con fuertes movilizaciones populares que demandaron la dimisión del presidente Michel Martelly, y con la oposición política exigiendo la anulación de todo el proceso electoral por considerar un fraude masivo la primera vuelta electoral celebrada el 25 de octubre de 2015. En este clima, y bajo la justificación del deterioro de la situación de seguridad, el Consejo Electoral Provisional (CEP) anunció la suspensión indefinida de la segunda vuelta de los comicios que estaban previstos para celebrarse el 24 de enero –que ya habían sido aplazados en dos ocasiones durante el 2015–. El 5 de febrero, las dos cámaras parlamentarias haitianas, con el objetivo de reducir la crisis, firmaron un acuerdo que estipulaba que el Parlamento elegiría al presidente interino por un periodo de cuatro meses; se fijaba el 24 de abril como fecha para la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales; y se acordaba un período de cinco años de legislatura para el futuro nuevo presidente. Martelly renunció a la presidencia el 7 de febrero, y el día 14 el Parlamento eligió a Jocelerme Privert presidente interino por un periodo de cuatro meses (que finalmente se extendió hasta acabar el año). Posteriormente, Privert nombró el 15 de marzo a Fritz Alphonse nuevo primer ministro. La formación del nuevo Ejecutivo no logró reducir la crispación y los desacuerdos políticos, y obligó nuevamente al renovado CEP, presidido por Léopold Berlanger, a anunciar el 5 de abril la cancelación de los comicios previstos para finales de mes. Privert anunció una nueva fecha electoral para finales de octubre y procedió a la instalación de la Comisión de Evaluación y de Verificación Electoral (CIEVE), cuya misión prevista era la de restablecer la confianza de los actores políticos en el proceso electoral. El 30 de mayo, la CIEVE recomendó la cancelación de los resultados de los comicios de octubre de 2015, debido a la detección de fraudes e irregularidades, y propuso su repetición. La CEP aprobó la medida y decretó la repetición de la primera vuelta el día 9 de octubre, y el 8 de enero de 2017 como fecha para la celebración de la segunda vuelta electoral. Los diferentes candidatos presidenciales, incluidos Jovenel Moïse, candidato del partido de Gobierno Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), y

Jude Celestin, principal figura de la oposición y candidato de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana (Lapeh), se comprometieron a respetar la nueva hoja de ruta propuesta por la CEP. Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, mostró su preocupación por las constantes postergaciones de los comicios, y reafirmó el compromiso de las Naciones Unidas de prestar su pleno apoyo al pueblo haitiano en el cumplimiento de sus aspiraciones democráticas, solicitando a todos los actores haitianos que garantizaran el pronto retorno al orden constitucional. La ONU también reconoció a finales de año su responsabilidad en el brote de cólera del 2010 que mató a alrededor de 10.000 personas, el cual fue originado desde el contingente de cascos azules nepalíes de la MINUSTAH. El mandato de la misión de la ONU en el país fue ampliado en el mes de octubre por el Consejo de Seguridad hasta el 15 de abril de 2017.

El paso del huracán Mattew el 4 de octubre, que dejó un balance de más de 500 muertos y una importante crisis humanitaria, obligó una vez más a retrasar las fechas de las elecciones presidenciales y legislativas. La primera vuelta de las presidenciales se celebró finalmente el 20 de noviembre, y contó con el despliegue de 130 expertos y observadores de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Jovenel Moïse obtuvo la victoria en la primera vuelta, donde ningún partido obtuvo mayoría absoluta. La segunda vuelta de los comicios presidenciales, de la cual debe salir electo el nuevo presidente haitiano, está prevista que se celebre el 29 de enero de 2017.

Honduras	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:
En 2009 la tensión política y social en Honduras se incrementó notablemente tras anunciar el presidente, Manuel Zelaya, su intención de convocar un referéndum para reformar la Constitución y poder presentarse a un nuevo mandato, una medida que generó un amplio rechazo entre determinados sectores sociales y políticos que le acusaban de haberse alejado de las posiciones mayoritarias en su propio partido y de haberse aproximado en exceso a los Gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en especial a Venezuela. A finales de junio de 2009, la destitución por la fuerza de Zelaya por parte del Ejército provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya. Éste regresó sorpresivamente a Honduras en septiembre de 2009, poco antes de la celebración de elecciones presidenciales, pero no pudo concurrir a los comicios y tuvo que refugiarse en la embajada brasileña y partir hacia República Dominicana en enero de 2010. Tras varios meses de protestas por parte de organizaciones que condenaban el golpe de Estado y exigían el retorno de Zelaya, éste regresó a Honduras a mediados de 2011.

Global Witness denunció que Honduras se ha convertido en el 2016 en el país del mundo más peligroso para las personas defensoras del medioambiente, habiendo registrado 123 activistas de la tierra y el medio ambiente asesinados en el país desde el golpe de Estado de 2009, siendo otros muchos amenazados, atacados o encarcelados. **Tan sólo en el año 2016, la ONG registró 13 asesinatos de activistas medioambientales**.[54] En el que fue el asesinato que mayor transcendencia mediática tuvo, el 3 de marzo varios hombres armados asesinaron en su domicilio en La Esperanza a la activista medioambientalista Berta Cáceres, líder de la organización Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en un ataque en el que también resultó herido Gustavo Castro, director de la organización mexicana Otros Mundos Chiapas. Cáceres había sido premiada en abril de 2015 con el galardón ecologista Goldman, por su defensa contra la construcción de la presa hidroeléctrica sobre el rio Gualcarque en Agua Zarca, que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas. La líder indígena lenca contaba desde 2009 con medidas cautelares de protección facilitadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quien exigió al Gobierno una respuesta por la falta de protección de la activista. Berta Cáceres había presentado 33 denuncias de amenazas contra su vida a la Policía, sin que ninguna fuera investigada. Su asesinato causó una gran conmoción e indignación en el país, generando muchas voces de solidaridad y de condena al mismo por parte de diferentes grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, destacando organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Amigos de la Tierra, Vía Campesina o Global Witness, quienes exigieron al Gobierno hondureño una investigación independiente para esclarecer los hechos, así como medidas para proteger a activistas hondureños. Posteriormente, el 15 de marzo se reportó un nuevo asesinato de otro dirigente del COPINH, Nelson García, en el municipio de Rio Lindo, departamento de Cortés. El 18 de octubre, otros dos activistas hondureños por el derecho a la tierra, José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, fueron asesinados en Tocoa, en el departamento de Colón. Ambos activistas también contaban con medidas cautelares de protección facilitadas por la CIDH. Al finalizar el año, seis personas habían sido detenidas acusadas de participar en el asesinato de Cáceres, entre ellas, un mayor del Ejército y el gerente de asuntos sociales y ambientales de la empresa DESA, contratada para construir la represa en Agua Zarca.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió a Honduras como "uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos". Así mismo, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), entre 2014 y mayo de 2016 fueron asesinados 21 periodistas. Amnistía Internacional, en su informe anual sobre la situación de los derechos

54. Global Witness, "Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta", enero de 2017.

humanos en el mundo, también denunció la violencia e intimidación a la que son sometidos por parte de agentes del Estado y delincuentes, diferentes colectivos hondureños, tales como las personas defensoras de los Derechos Humanos, periodistas, funcionarios de la administración de Justicia, miembros del colectivo LGBTI, así como dirigentes indígenas, campesinos y afrodescendientes inmersos en conflictos de tierras. Human Rights Watch, quien también coincidió en señalar la extrema vulneración de los colectivos señalados, recalcó en su Informe Mundial 2017 el problema crónico que padece el país en materia de criminalidad, impunidad en las violaciones a los derechos humanos, abusos y corrupción policial.[55] Honduras posee una las tasas de homicidios más altas del mundo, en gran parte como producto de la violencia criminal y de las maras o pandillas, que la llevó a encabezar la lista de países sin situación de guerra más violentos del mundo en el año 2014. Amnistía Internacional reportó en octubre un aumento del 37% en la tasa de homicidios desde el año 2008, aunque ha disminuido en los dos últimos años. Esta inseguridad generó un incremento del 106% de casos de desplazamiento forzados a finales de 2015.[56] ACNUR proyectó que desde el año 2004 hasta finales de 2016 se habrían desplazado internamente de manera forzosa alrededor de 190.000 personas a causa de la inseguridad y la violencia. Debido a esta situación, los Gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala acordaron en agosto poner en marcha una fuerza regional para combatir las bandas criminales y el narcotráfico en la conocida como la región del "Triángulo Norte". El 15 de noviembre se presentó oficialmente la "Fuerza Trinacional contra el Crimen Organizado".

La ONG Global Witness registró 13 asesinatos de activistas medioambientales en Honduras durante el año

México	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.

Síntesis:
El régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México durante más de 70 años (1929-2000) consolidando un Estado basado en la corrupción, la impunidad y la represión hacia los movimientos opositores. El 1 de enero de 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá, que simbolizaba el éxito de las políticas neoliberales impulsadas bajo el Gobierno presidido por Carlos Salinas de Gortari. Ese mismo día, desde el sureño estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se dio a conocer como movimiento social y armado denunciando la pobreza y exclusión del Estado mexicano hacia a los pueblos indígenas. Tras 12 días de combates, se iniciaron conversaciones de paz bajo mediación del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, que concluyeron con la firma de los Acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996. El acuerdo de paz quedó sin embargo en papel mojado y desde ese momento se ha mantenido un conflicto de baja intensidad en la zona contra las comunidades zapatistas en resistencia. Posteriormente otros movimientos insurgentes surgieron en los estados vecinos de Guerrero y Oaxaca, entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. A la par, la situación de tensión política y social en México también ha estado acompañada por luchas y movilizaciones de diferentes sectores, como organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicatos de maestros y maestras, trabajadores del sector eléctrico, entre otros. En el año 2000 el PRI perdió el poder a manos del Partido de Acción Nacional (PAN), quien en 2006, y bajo la presidencia de Felipe Calderón, declara la guerra al narcotráfico, iniciándose un conflicto cuya violencia ha salpicado a toda la sociedad. Durante el Gobierno posterior de Enrique Peña Nieto (PRI), quien logró la presidencia en el año 2012, las denuncias de violaciones de derechos humanos –ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas o torturas– han sido recurrentes en el marco de las acciones de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado que sacude el país.

La ola de violencia que sacude el país desde hace una década, en gran parte relacionada con la "narcoviolencia" y la respuesta gubernamental frente a ésta, ha registrado más de 160.000 homicidios dolosos,[57] que han situado a México entre los tres países más mortíferos a nivel mundial en los últimos dos años, sólo por detrás de Iraq y Siria.[58] El escenario de violencia ha ido acompañado de un deterioro y de graves violaciones a los derechos humanos en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó durante el mes de marzo un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el cual alertó de la grave crisis de violaciones a los derechos humanos en el territorio, debido en parte a las consecuencias de la impunidad que persisten desde el inicio de la llamada "guerra contra el narcotráfico" en el 2006. En el informe, la CIDH puso énfasis en la grave situación que atraviesa el país en materia de desapariciones forzadas –26.798 casos reportados–, ejecuciones extrajudiciales y tortura –2.420 investigaciones abiertas– así como la situación de inseguridad ciudadana, el desplazamiento forzado de población, las dificultades de acceso a la justicia e impunidad y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia nacional. La CIDH señaló que México alcanzó niveles de violencia alarmantes y recomendó

55. Human Rights Watch, "Informe Mundial 2017. Honduras: Eventos de 2016", enero de 2017.
56. Amnistía Internacional, "¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados", octubre de 2016.
57. Secretaria de Gobernación, "Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2016", Centro Nacional de Información, México D.F., abril de 2016.
58. International Institute for Strategic Studies, "Armed Conflict Survey 2015", IISS, 2015.

al Estado mexicano medidas para tratar de romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Esta situación deviene de la controvertida estrategia de la guerra contra las drogas en el país, basada en la utilización del cuerpo militar para funciones de seguridad interna, que cumplió una década después del lanzamiento realizado en el año 2006 durante la legislatura de Felipe Calderón. Su despliegue no logró reducir la tasa de homicidios y la inseguridad en el país, y generó muchas críticas por la violación de derechos, a la par que suscitó importantes preocupaciones constitucionales, ya que según el artículo 16 de la Carta Magna, el Ejército tiene restringido sus funciones domésticas en tiempos de paz. Bajo la legislatura del actual presidente, Enrique Peña Nieto, se duplicó el número de soldados en roles de Policía en el país, pasando de los 1.680 en 2012 a los 3.386 en 2016, sin que ello haya significado mejoras en la seguridad pública. Según las estadísticas oficiales de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), el número total de homicidios de enero hasta octubre de 2016 fue de 17.063, superior a los registrados en el año 2015, con 17.034, o los 15.653 registrados en el año 2014.[59] De hecho, los datos presentados en el informe Índice Global de Paz 2016, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, registraban cerca de 33.000 muertes en México en el año 2015, cifra mayor que las presentes en países en conflicto armado como Irak y Afganistán.[60] Durante el mes de marzo, el propio director de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, se manifestó crítico frente a la política de militarización de la seguridad ciudadana, mostrándose contrario a la utilización del Ejército para combatir el narcotráfico, al no ser su función. A su vez, y desde el inicio del despliegue del Ejército, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH) recibió más de 9.000 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o uso de la tortura, así como elementos castrenses se vieron involucrados en algunos de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en la última década en el país, como el caso de Ayotzinapa.[61] El deterioro de la situación de los derechos humanos generó que el Departamento de Estado de EEUU retuviera durante el año el 15% de los fondos reservados para las fuerzas de seguridad mexicanas en el marco de la Iniciativa Mérida, en cuyos términos se establece que el 15% de los fondos está condicionado a la mejora de la situación de derechos humanos en el país. Si bien el monto retenido fue muy limitado (5 millones de dólares), analistas locales remarcaron el golpe simbólico que representó para la administración de Peña Nieto. Al finalizar el año, la Cámara de Diputados discutió una nueva legislación, el proyecto de Ley de Seguridad Interna, el cual propone ampliar y regular la participación del Ejército mexicano en la guerra contra el narcotráfico.

Por otro lado, y en lo que respecta al caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, estado de Guerrero –producida en septiembre de 2014–, en el mes de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), compuesto por cinco expertos internacionales nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó su misión de investigación sin lograr el objetivo de hallar a los 43 estudiantes normalistas, debido a que el Gobierno mexicano no apoyó la solicitud de prórroga del GIEI. El Grupo Interdisciplinario presentó el 24 de abril su informe final[62] donde se ratificó en sus críticas al Estado mexicano por la gestión realizada sobre el caso, así como denunció los obstáculos que las autoridades les pusieron para realizar la investigación, volviendo a descartar la hipótesis oficial de la incineración de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula. Los expertos del GIEI encontraron vínculos entre las corporaciones policiacas de los diferentes municipios involucrados, y lamentaron la falta de solidaridad por parte de las fuerzas de seguridad para con las víctimas, acusándolos de haber realizado un ataque masivo e indiscriminado contra la población civil. En el informe también se denunció las torturas a la mayoría de detenidos en el caso para obtener sus declaraciones auto inculpatorias. A su vez, se instó a las autoridades mexicanas a indagar todo lo relacionado con el quinto autobús –desaparecido de la versión oficial–, que podría ser la clave del caso, abriendo una nueva línea de investigación relacionada con el tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, EEUU, que hasta ahora fue bloqueada por las autoridades.

América del Sur

Bolivia	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales, colectivos indígenas)

Síntesis:
A finales de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se exilió en EEUU después de que la represión de varias protestas antigubernamentales provocara, en los

59. Secretaria de Gobernación, Estadísticas relativas a la Incidencia delictiva del Fuero Común. [Consultado el 30/11/2016]
60. Institute for Economics and Peace, "Global Peace Index 2016", IEP report 39, junio de 2016.
61. Human Rights Watch (2016) "Informe Mundial 2016. México. Eventos de 2015".
62. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, "Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas", GIEI, abril de 2016.

meses de febrero y octubre, más de 100 muertes. Tras un periodo de incertidumbre en el que dos presidentes asumieron el poder de forma interina, Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005, convirtiéndose en el primer mandatario indígena del país. Sin embargo, su acción de Gobierno, especialmente la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos o la aprobación de una nueva Constitución, se vio obstaculizada por la férrea oposición por parte de varios partidos políticos y de las regiones orientales del país que, lideradas por el departamento de Santa Cruz, exigen mayor autonomía. En paralelo a lucha política entre el Gobierno y la oposición, en los últimos años Bolivia ha enfrentado uno de los mayores índices de conflictividad social de todo el continente, con movilizaciones de distinto signo vinculadas a demandas laborales sectoriales, a la actividad de las empresas extractivas o a los derechos de los pueblos indígenas.

El año en Bolivia estuvo marcado por la celebración del referéndum constitucional celebrado el 21 de febrero, en el cual se decidía si el presidente del país, Evo Morales, podía volver a ser candidato presidencial en las elecciones de 2019. La Constitución boliviana establece que un presidente sólo se puede reelegir en dos ocasiones sucesivas, de ahí que el Gobierno convocase el referéndum para cambiar el artículo constitucional y ampliarlo a tres mandatos consecutivos. Sin embargo, tal y como confirmó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, el referéndum dio la victoria al "No", que se impuso con el 51,30% de los votos (2.682.517) frente al 48,70% del "Sí" (2.546.135), con una diferencia de 136.382 votos. La participación fue de un 84,45%, con un total de 5.228.652 votos sobre un padrón de poco más de 6,5 millones de electores. El ajustado triunfo del "No" significó la primera derrota electoral de Evo Morales en los diez años que lleva en el poder. Morales gobierna Bolivia desde el año 2006, asumiendo su segundo mandato en 2010 y el tercero en 2015. Morales se pudo presentar a la reelección en el año 2014, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que avaló que su primer mandato (2006-2010) no contaba, debido a la refundación del país como Estado Plurinacional en 2009. El Presidente Morales concluirá su mandato en enero del 2020 y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), declaró que se presentará a los comicios del 2019 con otro candidato.

En otro orden de asuntos, el conflicto que mantiene el ejecutivo de Morales con el sector minero vivió el peor episodio del año durante el mes de agosto, momento en el cual los cooperativistas mineros de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) iniciaron protestas exigiendo la anulación de la ley que permite la formación de sindicatos al interior de las cooperativas. Entre las diversas protestas se procedió al bloqueo de carreteras. El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, que se desplazó a negociar la suspensión del bloqueo con los manifestantes, fue tomado como rehén el 25 de agosto en una carretera de la localidad de Panduro, a unos 180 kilómetros de La Paz. Horas más tarde fue torturado y asesinado por los mineros que lo retenían. A su vez, en los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en los bloqueos en Cochabamba (centro) y el altiplano (oeste) también perdieron la vida tres mineros por disparos de la Policía, mientras un cuarto falleció mientras manipulaba explosivos. El asesinato de Illanes se saldó con la encarcelación de al menos seis mineros, entre ellos, el presidente de Fencomin, Carlos Mamani, y el vicepresidente de esa organización, Agustín Choque.

Perú	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Síntesis:
En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

Durante el año la actividad armada de los grupos remanentes de Sendero Luminoso en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fue muy reducida. La mayor acción de la organización maoísta en 2016 se produjo el 16 de abril, en vísperas de la primera vuelta de los comicios presidenciales, cuando una emboscada cometida contra una patrulla militar por un comando de la organización armada se saldó con la muerte de 10 personas, entre ellos ocho militares y dos civiles, además de cinco personas heridas. Durante el resto del año apenas se produjeron incidentes relacionados con actividades armadas de grupos opositores. Sin embargo, el día 11 de octubre entró en vigor la declaración de estado de emergencia decretado por el Gobierno en la región del VRAEM durante un periodo de dos meses que, según informó el Ministerio de Defensa, tuvo como objetivo el despliegue de soldados en el área para combatir lo que denominaron "narcoterrorismo", referido a la presencia de organizaciones armadas como Sendero Luminoso, el narcotráfico y otras actividades ilícitas. El estado

de emergencia sirvió para proveer las bases legales al Ejército peruano para renovar la participación militar en el área, después de la decisión de la administración anterior (Ollanta Humala) de desmilitarizar la lucha contra las drogas en el VRAEM.

Por otro lado, el año también estuvo marcado por el desarrollo de los comicios presidenciales. El economista Pedro Pablo Kuczynski, luego de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori, hija mayor del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), se convirtió en el nuevo presidente peruano. Según los datos facilitados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Kuczynski se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 7 de junio, con un margen muy ajustado, obteniendo el 50,12% de los votos (8.591.802) frente al 49,87% (8.549.205) de su rival Keiko Fujimori, lo que significó una ventaja de tan sólo 42.597 votos. La participación registrada fue del 80% del censo electoral, en un país en el que el voto es obligatorio. Los comicios determinaron también que el partido fujimorista Fuerza Popular (FP) obtuvo la mayoría de escaños en el Parlamento (73), seguido del partido de izquierdas Frente Amplio (FA) (20) y en tercer lugar el partido de Kuczynski, Peruanos por el Kambio (PPK) (18), lo que obligará al ejecutivo a gobernar en coalición. Una de las primera medidas tomadas por el nuevo ejecutivo fue la de iniciar la refundación de las fuerzas policiales, despidiendo a casi la mitad de los generales, tras denuncias de abusos y corrupción y una creciente inseguridad ciudadana.

Finalmente, y en otro orden de aspectos, antes de que Kuczynski asumiera el cargo, y aún con Ollanta Humala en la presidencia nacional, el ex presidente Alberto Fujimori solicitó el 23 de julio el indulto presidencial. Fujimori cumple en la actualidad, y desde el año 2009, una condenada de 25 años de prisión por graves violaciones de los derechos humanos, secuestro agravado y asesinato, cometidos por el grupo militar encubierto "Colina" en la zona de Barrios Altos y tiene además otras sentencias por delitos de corrupción. Tras la negativa de Humala de indultar al exmandatario, y la postura contraria también del presidente Kuczynski, Fujimori desistió de mantener la petición de indulto presidencial y evaluaba recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por otro lado, y vinculado con el período de la guerra sucia contra grupos opositores de izquierda desarrollada bajo el fujimorismo, el 7 de septiembre se conoció la sentencia que condenó al ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, y al exjefe de las Fuerzas Armadas de Perú, Nicolás Hermosa Ríos, a 22 años de cárcel por la desaparición forzada de tres personas en 1993. La sentencia también ordenó la captura del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 15 años de prisión. Los tres fueron declarados responsables de la desaparición forzada del profesor Justiniano Najarro Rúa y los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo en los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIE), que Montesinos dirigió en la sombra durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori.

Venezuela	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
Tras la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 se produjeron numerosas movilizaciones y enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno y de la llamada Revolución Bolivariana, especialmente durante periodos electorales y durante el intento golpe de Estado del año 2002. Sin embargo, la actual crisis política y social que atraviesa el país se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 por cáncer. Tras hacer pública su enfermedad en 2011, Chávez tuvo que abandonar sus funciones en varias ocasiones para recibir tratamiento médico, provocando según algunos analistas un claro debilitamiento del Gobierno. A pesar de ello, Chávez ganó las elecciones presidenciales de 2012. Tras la muerte de Chávez, la oposición calificó de fraude constitucional la toma de posesión del cargo del hasta entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, por considerar que el puesto correspondía al presidente del Parlamento. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios Gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. Tras la validación de resultados por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la oposición impugnó las elecciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la segunda mitad del 2013 se produjeron numerosas movilizaciones de partidarios y detractores del Gobierno y se produjeron varios episodios de violencia. La dinámica de polarización social continuó a principios de 2014 y la violencia se incrementó tras unas protestas estudiantiles iniciadas en el mes de febrero.

La abrumadora victoria electoral conseguida por la oposición venezolana en las elecciones legislativas celebradas en diciembre de 2015, las cuales le otorgaron el control de la Asamblea Nacional (Parlamento),[63] marcó un **año caracterizado por el incremento de la tensión política entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y el nuevo poder Legislativo en manos opositoras.** A la crisis política se le sumó el deterioro progresivo de la situación económica y social, debido a la contracción de la economía, al incremento de la tasa de inflación anual en torno al mil por ciento, la disminución de los ingresos estatales debido al bajo precio del petróleo, y un grave

63. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo el 67,07% de los votos, (112 diputados de la Asamblea Nacional) y el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró el 32,93% del respaldo popular (55 diputados)

desabastecimiento de productos básicos que hizo que el Gobierno decretase la situación de emergencia nacional. Tras la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional (AN), el 5 de enero, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a 21 partidos de la oposición, planteó diferentes fórmulas para acabar con la presidencia de Maduro y evitar que cumpla su periodo de gobierno, previsto para finalizar en enero de 2019. Las medidas fueron desde la realización de un referéndum revocatorio, hasta la reforma constitucional para la renovación de los poderes del Estado, pasando por una enmienda constitucional que reduzca el mandato presidencial de seis a cuatro años. El Gobierno respondió a las propuestas de la AN con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), argumentando que las decisiones de la cámara estaban sujetas a su aprobación por parte del máximo organismo judicial, bajo control gubernamental. En el mes de marzo la AN aprobó la enmienda constitucional para la reducción del período de mandato presidencial, y también la ley de amnistía para lograr la liberación de lo que la oposición considera presos políticos. Sin embargo, ambas iniciativas fueron revocadas posteriormente por el TSJ. En marzo la MUD presentó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud del referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, y a finales de abril empezó la recolección de firmas, presentando durante el mes de mayo ante el CNE 1.850.000 firmas. Como respuesta, el presidente Maduro decretó el Estado de Excepción y Emergencia Económica, por medio del cual se suspendieron las garantías constitucionales por un periodo inicial de 60 días. La medida fue desconocida por la AN por considerarla inconstitucional. Sin embargo, días después, el TSJ de Venezuela declaró la "constitucionalidad" del decreto presidencial. A principios de junio, la CNE invalidó un tercio de las firmas presentadas por la oposición para la realización del referéndum revocatorio, aunque aun así las firmas válidas siguieron constituyendo mucho más del requerido 20% del electorado. En septiembre, la CNE comunicó que el referéndum, en caso de producirse, no se realizaría antes del primer trimestre del 2017, lo cual salvaguardaba al Gobierno, y exigió a la oposición la presentación del 20% de las firmas, no sólo del electorado nacional, sino también de cada uno de los 23 estados del país, lo que fue denunciado por la oposición como inconstitucional. Posteriormente, en una resolución muy controvertida, cinco tribunales regionales emitieron una sentencia de fraude en la recolección de las firmas que llevó a la suspensión indefinida del referéndum por parte del CNE, incrementándose el clima de crispación política. Los partidos opositores calificaron el hecho como un golpe de Estado y plantearon nuevas acciones contra el Gobierno de Maduro: aumentaron las movilizaciones sociales, iniciaron un procedimiento contra el presidente en la AN y solicitaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que invocase la Carta Democrática Interamericana ante la "crisis institucional y humanitaria", cuya última consecuencia es la suspensión del país de su pertenencia a la OEA.

En paralelo al clima de tensión política en el país, durante el año se pusieron en marcha diferentes intentos de mediación para buscar soluciones a la crisis. Inicialmente la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), envió un equipo de mediación encabezado por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con los exmandatarios de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández, al que posteriormente se unió el Vaticano, siendo representado por Monseñor Emil Paul Tscherrig. La mediación logró establecer un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición que consiguió, el 12 de noviembre, una declaración conjunta denominada "Convivir en paz", en la que ambas partes se comprometieron a cumplir con la Constitución del país, y expresaron su compromiso con una convivencia pacífica y sin violencia. Al finalizar el año, y con muchos altibajos en las negociaciones, el proceso de mediación seguía abierto.[64]

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Kazajstán	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales

Síntesis:
Desde su independencia de la URSS en 1991, Kazajstán ha experimentado un crecimiento económico significativo en paralelo a una evolución política y social mayoritariamente estable. Sus extensos recursos minerales y energéticos han sido motor de su economía, mientras se ha asistido a la consolidación del nuevo Estado-nación –con algo más de la mitad de población kazaja y diversas minorías, principalmente la rusa¬. Entre los principales retos que afronta el país en el siglo XXI se incluye los riesgos de conflictividad social vinculada al déficit democrático y a las políticas con tendencias autoritarias de un régimen bajo el control rígido de su presidente Nursultan Nazarbayev, en el poder desde 1989. Además, existe un riesgo creciente de incidentes de violencia vinculados a grupos armados locales y regionales de inspiración islamista.

Se incrementó la tensión en el país, en contraste con años anteriores, de la mano de una mayor conflictividad social así como de las supuestas amenazas procedentes de organizaciones y sectores armados, con varios ataques durante el año que causaron más de una treintena de víctimas mortales. En el ámbito de seguridad, un ataque atribuido en algunos medios a sectores afines a ISIS en junio en la localidad de Aktobe (noroeste) causó la muerte de más de una veintena de personas, principalmente atacantes (tres soldados, tres civiles y 19 atacantes), según fuentes policiales. Además, otros

64. Véase el resumen sobre Venezuela en el capítulo 3 (Procesos de paz)

cinco supuestos atacantes murieron por un operativo de las fuerzas de seguridad en días posteriores, a lo que se sumaron diversas detenciones. Según informaciones de prensa, el grupo atacó primero un establecimiento de venta de armas y asaltó después de un autobús, con el que atacaron la sede de una unidad militar. No obstante, por parte de las autoridades apenas trascendió información sobre los hechos. Algunos medios apuntaron a un ataque con escasa capacidad organizativa y poca financiación y a que no había suficientes evidencias sobre algún tipo de red vinculado a ISIS detrás del ataque. A su vez, otro ataque en julio en Almaty por parte de un hombre armado resultó en 4 policías y dos civiles muertos y 17 heridos, tres de los cuales murieron posteriormente. Hubo versiones diferentes sobre la naturaleza del ataque. El Comité de seguridad nacional apuntó a un móvil de radicalización salafista. Por otra parte, durante el año decenas de personas fueron detenidas y sentenciadas a prisión con cargos de terrorismo, incluyendo una treintena de personas en relación al ataque de Aktobe. A finales de diciembre, una quincena de personas fueron detenidas acusadas de pertenencia al grupo Tafkir wal-Hijra. En los últimos años diversos análisis han alertado sobre ciertos riesgos a la estabilidad procedentes de algunos grupos islamistas sobre los que, sin embargo, habría trascendido poca información.[65] Por otra parte, se produjeron protestas sociales en diversos momentos del año, sobre todo en abril y mayo, contra enmiendas al código agrario –sobre el que finalmente se impuso una moratoria–, así como huelgas de envergadura en el sector de la minería. Se denunciaron detenciones y enjuiciamiento de manifestantes, activistas y periodistas. El incremento de la conflictividad se produjo en un contexto de declive económico en el país. Algunos análisis calificaron las olas de protestas como un grado de movilizaciones sin precedentes.[66] Por otra parte, el país celebró elecciones parlamentarias, en relación a las cuales la OSCE identificó irregularidades y errores de procedimiento graves, señalando también que el marco legal del país restringe derechos políticos y civiles fundamentales.

Kirguistán	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán

Síntesis:
Desde su emergencia como Estado independiente en agosto de 1991, la ex república soviética de Kirguistán ha atravesado diversos periodos de inestabilidad y conflicto sociopolítico. La etapa presidencial de Askar Akayev (1991-2005), que comenzó con un impulso reformador, derivó progresivamente en autoritarismo y corrupción. En marzo de 2005, una serie de manifestaciones que denunciaban fraude en las elecciones de ese año derivaron en una revuelta social que forzó la caída del régimen. Las promesas de cambio del nuevo presidente, Kurmanbek Bakiyev, fueron rápidamente diluidas, dando paso a un modelo de presidencialismo autoritario, corrupto y nepotista, especialmente a partir de finales de 2007. Todo ello en un contexto de dificultades económicas para la población, tensiones latentes entre el norte y sur del país y exclusión de las minorías étnicas de los ámbitos de decisión política. Cinco años después, en abril de 2010, una nueva revuelta popular desembocó en el derrocamiento del régimen, con enfrentamientos que causaron 85 muertos y cientos de heridos, a la que siguió en junio una ola de violencia con dimensión interétnica, con más de 400 víctimas mortales. Otros ejes de tensión en Kirguistán están vinculados a la presencia de grupos armados regionales de corte islamista en el Valle de Fergana (área entre Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán) y a las disputas fronterizas con países vecinos.

Kirguistán continuó haciendo frente a diversos focos de tensión, incluyendo en el ámbito político-social, de seguridad, derechos humanos y relaciones con los países vecinos. En clave política-social, en febrero y marzo se produjeron movilizaciones en localidades del sur del país, en protesta contra recortes a prestaciones y subidas de tarifas eléctricas. Se sumaron también movilizaciones en demanda de la dimisión del Gobierno, protagonizadas por sectores políticos del sur, incluyendo la recién creada Fuerza de Oposición Unida (UOF, por sus siglas en inglés), que aglutina a sectores cercanos a los ex presidentes Akáyev y Bakíyev. El Comité de Seguridad Nacional denunció planes de derrocar al Gobierno y de toma de poder por sectores opositores. Entre marzo y mayo se detuvo a diversos líderes y miembros de organizaciones políticas opositoras. Así, en mayo se detuvo en la capital, Biskek, al líder del movimiento Parlamento Popular y ex ministro, Bekbolot Talgarbekov, y a otros dos de sus líderes, el ex juez Marat Sultanov y el ex candidato presidencial Torobay Kolubáyev, acusados de preparar una toma violenta del país y de desestabilizar la situación política, en un contexto previo a las movilizaciones que organizaban para ese mes en la capital. También en clave política aumentaron las tensiones en la segunda mitad del año en torno a la propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente, Almazbek Atambáyev, pese a la moratoria vigente que impide cambios constitucionales antes de 2020. Los cambios contemplan un incremento de poderes para la figura del primer ministro –en parte en detrimento de competencias presidenciales– y la eliminación de la prioridad de los tratados internacionales de derechos humanos sobre otros tratados internacionales, entre otras cuestiones. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa emitió una opinión conjunta que señalaba que algunos de los cambios generaban preocupación respecto a principios

65. International Crisis Group, *Kazakhstan: Waiting for Change*, Crisis Group Asia Report N°250, 30 de septiembre de 2013.
66. Deirdre Tynan, "Kazakhstan's Protests Postponed – But for How Long?", *International Crisis Group*, Commentary / Europe & Central Asia, 12 de mayo de 2016.

democráticos clave, en especial el estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial, y que tenían el riesgo potencial de violar ciertos derechos humanos y libertades fundamentales.[67] El Gobierno colapsó en octubre por la salida del partido del presidente, el SDP, de la coalición gubernamental ante el rechazo de la propuesta de cambios constitucionales en el seno de la coalición. En noviembre se formó una nueva coalición, integrada de nuevo por el SDP y otras formaciones, y el referéndum fue aprobado en diciembre por cerca del 80% de los votos y una participación del 42%. Previamente, en abril había dimitido el primer ministro en medio de acusaciones de corrupción.

Por otra parte, en relación a la situación de seguridad, continuaron las alertas sobre riesgos de seguridad procedentes de organizaciones armadas en el conjunto de Asia Central. Uno de los hechos más significativos fue un atentado suicida con coche bomba en agosto contra la embajada china en la capital, Biskek, en el cual resultaron heridos tres trabajadores. Los servicios de seguridad identificaron al atacante como un ciudadano de la comunidad uigur con pasaporte tayiko y miembro de ETIM, grupo armado secesionista musulmán de la región de Xinjiang (oeste de China) al que el Gobierno chino acusa de vínculos con ISIS.[68] Asimismo, circuló un video de la organización armada Frente al-Nusra, que combate en Siria, con críticas al Gobierno kirguizo. Además, las embajadas de EEUU y Reino Unido emitieron alertas por riesgos de ataques terroristas, en sus primeros llamamientos de este tipo. A su vez, durante el año las autoridades detuvieron a decenas de personas acusadas de pertenencia a grupos ilegales, entre ellas una quincena de mujeres supuestamente integrantes de la organización no armada Hizb ut-Tahir. Por otra parte, el relator especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos expresó en febrero su profunda preocupación por el aumento de ataques verbales, intimidación y acoso contra grupos de la sociedad civil. Asimismo, como en años anteriores hubo focos de conflicto relativos a tensiones fronterizas. Así, **en agosto aumentó la tensión entre el Gobierno kirguizo y el uzbeko en torno a una zona montañosa en disputa por los dos países, la zona de Unkur-Too**. Varios ciudadanos kirguizos fueron detenidos, acusados de entrada ilegal en Uzbekistán y el Gobierno uzbeko movilizó fuerzas policiales y de frontera, afirmando su soberanía sobre la zona. En respuesta, Kirguistán desplegó fuerzas y ordenó revisar los acuerdos fronterizos internacionales con Uzbekistán. Finalmente, en septiembre y octubre ambos ejecutivos procedieron a desescalar la tensión, retirando tropas y a través de otras medidas de confianza, como visitas mutuas en octubre. Diversos medios apuntaron a la supuesta voluntad del presidente en funciones uzbeko, Shavkat Mirziyaev –en el cargo tras la muerte en septiembre de Islam Karimov–, de mejorar las relaciones con los países vecinos.

Tayikistán	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:
La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del país) contra las fuerzas gubernamentales herederas del régimen soviético (norte y sur). El acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la presencia de algunos señores de la guerra y ex combatientes opositores no desmovilizados en algunas zonas del país, el autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, las tensiones con sus vecinas Uzbekistán y Kirguistán, la inestabilidad asociada a su frontera con Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados islamistas.

Continuó la situación de fragilidad en relación a diversos ejes de conflictividad, incluyendo el incremento de alertas en torno a la frontera con Afganistán, con ejercicios militares masivos; y la represión interna, completándose el desmantelamiento del marco de coexistencia política y poder compartido de los acuerdos de paz de 1997. Ante el deterioro de la situación en el noreste de Afganistán, se incrementaron las alertas por los riesgos de impactos en Tayikistán, que incrementó en junio el número de tropas y puestos militares en torno a la frontera por las percibidas amenazas de insurgentes y actores de corte criminal armados. Se produjeron incidentes en marzo en la frontera, entre guardias fronterizos y supuestos talibanes, con al menos un soldado tayiko fallecido. Además, Tayikistán y Rusia llevaron a cabo ejercicios militares de gran escala en marzo a lo largo de la frontera, con varias decenas de miles de tropas

Los cambios constitucionales aprobados en referéndum en Tayikistán prohíben la existencia de partidos de base religiosa, lo que consolidó el desmantelamiento del marco político de los acuerdos de paz de 1997

67. Venice Commission y OSCE/ODIHR, *Joint opinion on the draft law "on Introduction of amendments and changes to the Constitution"*, Venice Commission Opinion No. 863 /2016, CDL-AD(2016)025, 19 de octubre de 2016.
68. Véase el resumen sobre China (Xinjiang) en este capítulo.

y reservistas. Tayikistán realizó ejercicios militares durante el año también con la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo (abril) y con China (octubre), orientados a la lucha antiterrorista y riesgos relativos a la frontera afgana. No obstante, algunos análisis pusieron en cuestión o relativizaron la supuesta expansión de ISIS en el norte de Afganistán y los riesgos consiguientes para Tayikistán. Asimismo, un comunicado de las milicias talibanas afganas en julio señaló que no permitirían a otros grupos utilizar su territorio para interferir en asuntos internos de países vecinos centroasiáticos y que ellos mismos tampoco tenían esa intención. Por otra parte, el Gobierno tayiko cifró en un millar el número de personas de Tayikistán que se habrían unido a ISIS en Siria e Iraq, de las cuales unas sesenta ya habrían regresado al país.

Por otra parte, **continuó la situación de conflictividad interna por la persecución de las autoridades al opositor Partido del Renacimiento Islámico (PRI)**, actor clave del conflicto armado de los años noventa y de los acuerdos de paz de 1997. La represión de los últimos años contra esta organización –agravada en 2015 con su designación como organización terrorista– culminó en 2016, de la mano de cambios constitucionales significativos. Así, las enmiendas aprobadas en referéndum en mayo incluyen la prohibición de partidos de base religiosa. El PRI era el único partido musulmán legal en los países centroasiáticos ex soviéticos. Además, durante el año continuaron los juicios contra líderes y miembros del PRI, acusados de intentar derribar el régimen. A la persecución del partido y el desmantelamiento que supone de los acuerdos de 1997, se añaden otras consecuencias derivadas de los cambios constitucionales. Así, éstos suponen la eliminación de la restricción en el número de mandatos presidenciales para el actual presidente, Emomali Rahmon, por su condición de "Líder de la nación". Además, se redujo la edad requerida para optar a la presidencia, de 35 años a 30, lo que fue interpretado en algunos análisis como una medida encaminada a favorecer la posible candidatura del hijo del presidente, Rustam Emomali, en los comicios de 2020. Por otra parte, continuaron las denuncias y alertas sobre las violaciones de derechos humanos, presentadas en diversos foros, incluyendo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Asia Meridional

Bangladesh	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (AL), oposición política (partidos BNP y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)

Síntesis:
Desde la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971 tras su secesión de Pakistán en un conflicto armado que ocasionó tres millones de muertes, el país ha vivido una complicada situación política. Las elecciones de 1991 dieron paso a la democracia tras una sucesión de gobiernos militares autoritarios que dominaron el país desde la independencia. Los dos principales partidos, BNP y AL, se han sucedido desde entonces en el poder después de diferentes elecciones, siempre contestadas por la formación perdedora, dando lugar a gobiernos que no han dado respuesta a los principales retos del país como la pobreza, la corrupción o la baja calidad de la democracia, y que han respondido a intereses partidistas. En 2008, la AL accedió al poder después de un periodo de dos años dominado por un Gobierno interino militar que trató de poner fin sin éxito a la crisis política que había sumido al país en una situación de violencia en los meses previos y que llevó incluso al encarcelamiento de las líderes de los dos partidos. La convocatoria de elecciones para 2014 en un contexto político muy frágil y con una fuerte oposición del BNP a las reformas emprendidas por la AL, como la eliminación del Gobierno interino para supervisar los procesos electorales, derivaron en una grave y violenta crisis política durante el año 2013. En paralelo, el establecimiento en 2010 de un Tribunal para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971, instrumentalizado por el Ejecutivo para acabar con la oposición islamista, en particular el partido Jamaat-e-Islami, agravó la situación en el país.

Bangladesh vivió una situación de grave tensión política y violencia a lo largo de todo el año que tuvo diversos focos: los asesinatos de activistas seculares y atentados por parte de grupos islamistas extremistas; los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición política, con diversas manifestaciones de violencia; y finalmente la actuación del Tribunal para Crímenes Internacionales. El primero de los focos de tensión giró en torno a la acción de varios grupos armados de oposición islamistas que perpetraron asesinatos selectivos de activistas seculares en diferentes momentos del año. Entre los asesinatos que más repercusión generaron cabe destacar el de un estudiante que había profesado de forma abierta su ateísmo a través de las redes sociales y cuya ejecución en el mes de mayo fue reivindicada por el grupo armado de oposición Ansar al-Islam, vinculado a al-Qaeda, señalando que se trataba de una operación de castigo contra la blasfemia. Tras su asesinato, centenares de personas llevaron a cabo una manifestación de protesta en la capital de Bangladesh denunciando la impunidad y los asesinatos de activistas ateos en el país. Posteriormente, un profesor universitario y activista cultural fue asesinado en un atentado reivindicado por ISIS. Posteriormente se organizó una manifestación de protesta en la universidad en la que trabajaba. Días después, fueron asesinados dos activistas por los derechos de la población LGTBI y fue gravemente herido el guarda de seguridad del edificio en el que se hallaba la sede de la revista en la que trabajaban, única publicación dirigida a la comunidad LGTBI de Bangladesh. Estos asesinatos también fueron reivindicados por Ansar al-Islam. Con anterioridad a estos asesinatos del mes de abril seis activistas seculares habían sido asesinados de forma similar. Desde febrero de 2015 se han producido más

de 30 asesinatos de miembros de minorías religiosas, académicos y activistas, de los que el grupo armado ISIS ha reivindicado 21. No obstante, el Gobierno ha negado en repetidas ocasiones que ISIS tenga presencia en el país, aunque el Ejecutivo sí destacó los vínculos de la oposición política con los asesinatos por parte de las organizaciones armadas islamistas, acusaciones que la oposición siempre ha negado. En la operación policial que se abrió tras los asesinatos, más de 8.000 personas fueron detenidas, algunas de ellas integrantes del partido político islamista Jamaat-e-Islami. También resultaron muertas varias personas en diferentes tiroteos con la Policía, lo que llevó a las organizaciones de derechos humanos a denunciar las tácticas de la Policía. En julio tuvo lugar el hecho de violencia más grave de todo el año, cuando se produjo un atentado en una cafetería de Dhaka que causó la muerte de 23 personas –dos policías y el resto extranjeras– y que fue reivindicado por ISIS. Un grupo de hombres armados asaltó la cafetería, muy frecuentada por extranjeros, y tomó como rehenes a las personas que estaban en el interior, liberando posteriormente a las personas que sabían recitar el Corán. La mayoría de las personas asesinadas murieron acuchilladas. Las fuerzas de seguridad iniciaron una operación tras la toma de rehenes y señalaron que habían tiroteado a seis atacantes. Las autoridades bangladeshíes, que niegan que ISIS tenga presencia en el país, apuntaron al grupo JMB (una de las principales insurgencias que operan en el país), del que las autoridades señalan que no tiene vínculos con ISIS, pero que sí se ha adherido a esta organización. A finales de julio, nueve hombres armados murieron durante una operación de las fuerzas de seguridad en Dhaka vinculada al atentado. Días después de este atentado un grupo de hombres armados llevó a cabo otro ataque durante la celebración del fin del Ramadán en Sholakia, ciudad donde se congregaban 200.000 personas con motivo de esta festividad religiosa. Cuatro personas – dos policías, una mujer y uno de los atacantes – murieron y diez policías resultaron heridos.

En lo que respecta al segundo foco de tensión, durante todo el año se repitieron las manifestaciones por parte de la oposición y el Gobierno acentuó la represión, con miles de detenciones, sobre todo de militantes del principal partido de la oposición, el BNP. En el mes de marzo, en el marco de las elecciones locales se produjeron al menos 11 muertes como consecuencia de la violencia electoral, aunque el BNP cifró en 22 los fallecidos y denunció el fraude generalizado en los comicios. Además, prosiguieron los procesos judiciales contra la líder de la oposición y ex primera ministra, Begum Khaleda Zia, acusada de corrupción. Finalmente, el Tribunal para Crímenes Internacionales prosiguió su tarea de enjuiciamiento de los responsables de crímenes de guerra durante el conflicto armado por la independencia de 1971. En mayo, se produjeron importantes protestas en varias ciudades del país y enfrentamientos entre manifestantes y policía después de la ejecución del líder del partido político islamista Jamaat-e-Islami, Motiur Rahman Nizami, acusado de haber intervenido en la masacre de intelectuales durante el conflicto de 1971. 20 personas fueron detenidas después de las protestas. Organizaciones de derechos humanos y Gobiernos como los de Turquía y Pakistán condenaron la ejecución de Nizami, que es el quinto líder de esta organización en ser ejecutado desde 2013 tras ser condenado por el Tribunal Internacional. Algunos medios señalaron que el Gobierno bangladeshí se estaría planteando la ilegalización de Jamaat-e-Islami.

India (Assam)	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB-IKS, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT

Síntesis:
El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de Assam de la colonización india y establecer un Estado soberano. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la violencia y que se interrumpirá en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen bodo, como el NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria asamesa. Desde 2011 se ha producido una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos armados han entregado las armas o iniciado conversaciones con el Gobierno.

El estado indio de Assam continuó afectado por la violencia armada y a lo largo de todo el año **se registraron de forma esporádica atentados y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los diferentes grupos armados de oposición que operan en el estado.** Aunque según los datos ofrecidos por el South Asia Terrorism Portal la cifra de víctimas mortales como consecuencia de la violencia fue ligeramente superior a la registrada el año anterior –86 muertes en 2016 y 59 en 2015–, estuvo muy lejos de las 305 víctimas mortales que se registraron en 2014. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo múltiples operaciones de contrainsurgencia durante todo el año y anunciaron decenas de detenciones de integrantes de los grupos armados insurgentes activos en Assam. No obstante, estos grupos denunciaron que algunos de los acusados de formar parte de los grupos armados no eran insurgentes, sino civiles. Además, se repitieron las denuncias por parte de la población local acerca de las continuas extorsiones por parte de los diferentes grupos armados. La fuerzas de seguridad concentraron su acción contra el grupo armado NDFB-IKS, responsable de la masacre que tuvo lugar en

2014 en el Bodoland Territorial Area District cuando 45 personas musulmanas bengalí hablantes murieron tiroteadas y 70 casas fueron incendiadas. Este grupo fue también protagonista del episodio de violencia más grave de 2016, en el que 14 personas murieron tiroteadas y 15 resultaron heridas después de que hombres armados supuestamente integrantes del NDFB-IKS abrieran fuego en un mercado en el distrito de Kokrajhar, uno de los más afectados por la violencia. Días después, tres miembros de este grupo armado murieron durante una operación de las fuerzas de seguridad indias en el distrito de Sonitpur. En paralelo, el grupo armado ULFA-I (facción contraria a las negociaciones de paz con el Gobierno indio) también protagonizó diferentes episodios de violencia. En el mes de febrero un insurgente de este grupo murió junto a otros tres integrantes del grupo armado naga NSCN-K en una operación de las fuerzas de seguridad en la zona fronteriza con el estado de Arunachal Pradesh. En abril, las fuerzas de seguridad indias acusaron al grupo armado de ser el responsable de un atentado en el distrito de Goalpara en el que murieron tres personas y otras 25 resultaron heridas tras la explosión de una granada. Días después un policía y un integrante del grupo armado murieron en un enfrentamiento armado en este mismo distrito. En noviembre tres soldados murieron durante un choque armado con integrantes del ULFA-I en el distrito de Tinsukia. Finalmente, se registraron enfrentamientos de forma esporádica con los grupos armados de oposición NSLA, UPLA y KPLT en los que resultaron muertos tanto insurgentes como miembros de las fuerzas de seguridad, según informó la prensa local.

India (Manipur)	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)

Síntesis:
La tensión que enfrenta al Gobierno con los diferentes grupos armados que operan en el estado de Manipur y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgen varios grupos armados, algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, que permanecerán activos a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcará el desarrollo de la conflictividad en Manipur, y serán constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El empobrecimiento económico del estado y el aislamiento con respecto al resto del país han contribuido decisivamente a consolidar un sentimiento de agravio en la población de Manipur. En los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la violencia armada.

El estado indio de **Manipur** continuó afectado por la violencia durante todo el año, aunque **se registró una reducción tanto en el número de episodios violentos como de personas fallecidas como consecuencia de la violencia armada.** A lo largo de 2016 se registraron 51 atentados con bomba y un total de 33 personas murieron como consecuencia de atentados o en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición que operan en el estado. Así pues, se consolida la tendencia en la reducción progresiva en el número de atentados que se constata desde el año 2013, en el que se registraron 76 frente a 107 en 2012. Desde entonces se ha registrado una reducción de forma ininterrumpida. En lo que respecta a los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos insurgentes, en abril tres personas –un miembro de las Fuerzas Armadas indias, un insurgente y un civil– murieron como consecuencia de un enfrentamiento en el distrito de Tamenglong entre el grupo armado de oposición ZUF. En mayo seis miembros de las fuerzas de seguridad indias murieron tras ser atacados por insurgentes pertenecientes a la CorCom, plataforma que agrupa a varios grupos insurgentes que operan en el estado –KCP, KYKL, PREPAK, PREPAK (Pro), RPF y UNLF–. No obstante, los episodios de mayor tensión se vivieron en los meses de noviembre y diciembre, tras la decisión del Gobierno de crear siete nuevos distritos en el estado, dividiendo los nueve ya existentes. Esta decisión acrecentó las tensiones entre las diferentes comunidades étnicas que viven en el estado, especialmente entre la población meitei (mayoritaria) y la población naga. La creación de los nuevos distritos fue percibida como una maniobra del ministro jefe del estado y rechazada por las organizaciones naga, que convocaron un bloqueo de las dos principales carreteras del estado, generando un importante impacto económico y dando lugar a disturbios y enfrentamientos. Además, tres policías murieron y ocho resultaron heridos en dos ataques atribuidos al grupo armado de oposición naga NSCN-IM, que habitualmente opera en el estado de Nagalandia y que se opuso también a la nueva división territorial. Dos importantes líderes sociales naga fueron detenidos, incrementando la tensión y el descontento. El bloqueo se extendió durante los meses de noviembre y diciembre provocando desabastecimiento en los bienes básicos, así como una importante subida de precios. En respuesta al bloqueo convocado por las organizaciones naga, diferentes grupos de población meitei promovieron también otro bloqueo en las carreteras que dan acceso a los distritos habitados mayoritariamente por población naga. Decenas de camiones fueron incendiados.

La decisión gubernamental de crear nuevos distritos en el estado indio de Manipur acrecentó las tensiones intercomunitarias dando lugar a disturbios y enfrentamientos

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:
La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

La relación entre India y Pakistán sufrió un notable deterioro a lo largo del año y se registraron diversos enfrentamientos diplomáticos de gravedad así como episodios de violencia en la Línea de Control, frontera de facto que separa a ambos países, y atentados. Además, el incremento de la violencia en el estado indio de Jammu y Cachemira tuvo una repercusión directa en la relación entre ambos Gobiernos.[69] El año comenzó con un atentado contra la base aérea india de Pathankot el 2 de enero que se saldó con la muerte de seis insurgentes y siete soldados. El atentado fue reivindicado por la coalición de grupos armados United Yihad Council, pero el Gobierno indio responsabilizó directamente a Pakistán del ataque, lo que llevó a la cancelación de un encuentro previsto entre los secretarios de Estado de ambos países. Este incidente y la posterior respuesta diplomática marcaron el tono de las relaciones el resto del año, con repetidas acusaciones por parte de la India a Pakistán de estar detrás de diferentes episodios de violencia y la congelación de las relaciones diplomáticas de alto nivel. No obstante, el Gobierno indio accedió a que un equipo pakistaní se desplazara a territorio indio para investigar el atentado de Pathankot y celebró también las detenciones practicadas por Pakistán de más de una decena de miembros del grupo armado JeM, a quien se responsabilizó de forma directa del atentado. La detención en el mes de marzo de un ciudadano indio en la provincia pakistaní de Baluchistán, acusado de espionaje, llevó a la suspensión del proceso de diálogo entre India y Pakistán, aunque a finales de abril los dos ministros de Exteriores se reunieron durante la celebración de una cumbre regional asiática en Delhi. El deterioro del conflicto armado en Jammu y Cachemira desde el mes de julio elevó la tensión entre los Gobiernos indio y pakistaní con acusaciones mutuas de terrorismo. No obstante, **la tensión llegó a su máximo epicentro en septiembre como consecuencia de un ataque contra una base de las Fuerzas Armadas indias de Uri que causó la muerte de 19 soldados indios y cuatro insurgentes cachemires, el más mortífero contra las fuerzas de seguridad indias en Cachemira en las últimas décadas.** India señaló que el Gobierno pakistaní era cómplice directo del atentado y anunció que no asistiría a la cumbre de la Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional (SAARC) prevista para noviembre en Pakistán, boicot al que se sumaron Bangladesh, Afganistán y Bután. Además, anunció que suspendía las conversaciones de la Comisión sobre las Aguas del Indus a lo que Pakistán respondió señalando que consideraría un acto de guerra que la India se retirara de este tratado. En los últimos meses del año se repitieron los intercambios de fuego en la frontera, con algunos episodios graves como la muerte de nueve civiles en Pakistán después de que el autobús en el que viajaban fuera alcanzado por artillería india. Tanto India como Pakistán desplazaron a miles de civiles residentes en las inmediaciones de la frontera en operaciones de evacuación. Además, varios diplomáticos fueron expulsados de los dos países en el marco de múltiples acusaciones mutuas de espionaje.

Nepal	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles

Síntesis:
En 1996 se inició un conflicto armado que durante una década enfrentó al Gobierno nepalí con el brazo armado del partido maoísta CPN-M, el People's Liberation Army (PLA), que buscaba derrocar la monarquía e instaurar una república maoísta, en un país afectado por la ausencia de democracia, la pobreza, el feudalismo y la desigualdad. Tras diez años de conflicto armado y un autogolpe de Estado por el que el rey asumió todos los poderes del Estado en 2005, a finales de abril de 2006 el rey Gyanendra decretó la reapertura del Parlamento después de varias semanas de intensas protestas sociales que costaron la vida a una veintena de personas. Las protestas, que llevaron al derrocamiento del rey, fueron organizadas por una coalición de los siete principales partidos democráticos de oposición y los maoístas. Tras la caída de la monarquía éstos declararon unilateralmente un alto el fuego secundado por el Gobierno provisional. En noviembre de 2006 se firmó un acuerdo de paz que ponía fin al conflicto armado y posteriormente se proclamó la república. En el año 2008 se estableció una Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna nepalí, aunque las

69. Véase el resumen sobre India (Jammu y Cachemira) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

sucesivas crisis políticas y la falta de acuerdo sobre aspectos clave del proceso de paz como la descentralización territorial han desembocado en un estancamiento de este proceso.

La situación de tensión mejoró notablemente en Nepal después de que las protestas contra la nueva Constitución aprobada en 2015 y que derivaron en disturbios violentos cesaran en el mes de febrero. Después de que en enero se produjera la muerte de tres personas madhesi en enfrentamientos con la policía, en febrero se levantó el bloqueo de carreteras promovido por las organizaciones madhesi en protesta por la reorganización territorial promovida por la Constitución y que se había prolongado durante cinco meses. El levantamiento del bloqueo que impedía el abastecimiento de bienes esenciales procedentes de la India alivió la grave situación humanitaria que había generado y permitió un repliegue de gran parte de las fuerzas de seguridad que se habían desplegado durante el apogeo de las protestas contra la nueva Constitución. No obstante, tras el levantamiento del bloqueo, las negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones madhesis opuestas a la reorganización territorial constitucional permanecieron bloqueadas durante varios meses. Finalmente, en el mes de julio el primer ministro KP Oli dimitió después de que se presentara en el Parlamento una moción de confianza. En agosto fue nombrado para el cargo Pushpa Kamal Dahal, antiguo dirigente del grupo armado de oposición maoísta CPN –época en la que era conocido por su alias Prachanda– y que ya ostentó el cargo entre 2008 y 2009, después de que en 2006 finalizara el conflicto armado en el país. El nuevo primer ministro se comprometió a abordar las demandas de los grupos madhesi, janajati y tharu y en noviembre el Gobierno acordaba una propuesta de reforma de la Constitución para acoger las demandas de los partidos madhesis. Esta reforma incluía cuestiones como nuevas delimitaciones de las provincias, para crear una nueva provincia adicional únicamente integrada por distritos de la zona de Terai (mayoritariamente habitada por población madhesi), que parte de la representación en la cámara alta estuviera vinculada a los porcentajes de población, así como el otorgamiento de la nacionalidad a las mujeres no nepalíes casadas con un nepalí, aunque no en el caso de los hombres no nepalíes casados con mujeres nepalíes. Un elevado número de hombres madhesis están casados con mujeres no nepalíes. En paralelo a la cuestión de la reforma constitucional se discutió en torno a posibles fechas para la celebración de elecciones locales sin que al finalizar 2016 se hubiera alcanzado un acuerdo al respeto. La oposición al Gobierno era partidaria de la celebración de elecciones locales previamente a la implementación de las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno, mientras que las organizaciones madhesis sostenían la necesidad de poner en marcha las reformas constitucionales para que las elecciones locales se celebraran con la nueva organización territorial ya aplicada.

Pakistán

Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos

Síntesis:
En 1999 un golpe de Estado perpetrado por el General Pervez Musharraf puso fin al Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, que evitó una convicción exiliándose a Arabia Saudí. El golpe de Estado le valió al nuevo régimen militar el aislamiento internacional, que acabó tras los atentados de septiembre de 2001, cuando Musharraf se convirtió en el principal aliado de EEUU en la región en la persecución de al-Qaeda. La perpetuación de Musharraf en el poder, la ostentación simultánea de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas, los ataques al poder judicial, la impopularidad de la alianza con EEUU en un periodo de aumento del antiamericanismo, la crisis económica y medioambiental, o la creciente presencia de grupos terroristas en otras zonas del país (más allá de las áreas tribales), con el consecuente aumento de la inseguridad, son algunos de los elementos que han explicado durante años la frágil situación política del país. En 2008 Musharraf dimitió como presidente tras las elecciones legislativas, con gran parte del Parlamento en su contra. Asif Ali Zardari del PPP fue votado para sucederle en la presidencia. A pesar del retorno de la democracia al país, y de vivir hitos históricos como el primer traspaso de un Gobierno (PPP) que finaliza su legislatura de cinco años de forma pacífica al siguiente Gobierno electo (Liga Musulmana de Nawaz), Pakistán sigue siendo un país inestable.

Pakistán continuó viviendo un clima de tensión política y violencia a lo largo de todo el año, que tuvo diversos focos**. La ciudad de Karachi continuó afectada por elevadas tasas de violencia y numerosos asesinatos selectivos, aunque se registró un notable descenso en el número de muertes violentas.** Según los datos recopilados por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, en 2016 se registraron 476 muertes violentas lo que representó un descenso de más del 50%, ya que en 2015 se habían producido 1.040 muertes violentas. El distrito de Karachi fue el más afectado por la violencia de todo el país, por encima de otros afectados por conflictos armados como Quetta, Waziristán Norte o la Khyber Agency, entre otros. De hecho, según este mismo centro, la provincia de Sindh, de la que Karachi es capital, registró el tercer mayor número de muertes de carácter sectario de todo el país. Entre los asesinatos registrados durante el año cabe destacar el del defensor de derechos humanos y activista contra el extremismo religioso, Khurram Zaki, tiroteado en la ciudad. **En lo que respecta a esta violencia de carácter sectario, cabe destacar que en el mes de febrero se llevó a cabo la ejecución de Mumtaz Qadri, condenado a pena de muerte por el asesinato del gobernador de Punjab Salman Taseer en 2011.** Taseer se significó por su oposición a la legislación contra la blasfemia y su defensa de una mujer cristiana condenada a pena de muerte acusada de profanar el Corán. Tras la ejecución de

Qadri se registraron protestas en varias ciudades del país, que no recibieron cobertura mediática por orden expresa de las autoridades. Se temía que la ejecución pudiera desencadenar graves disturbios violentos en todo el país, ya que Qadri era considerado un héroe por amplios sectores religiosos del país y los críticos con las leyes contra la blasfemia han sido objeto de amenazas y asesinatos.

Por otra parte, se registraron protestas contra el Gobierno protagonizadas por los seguidores de Imran Khan, que derivaron en enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, como ya sucediera en 2014. Durante la comparecencia del primer ministro Nawaz Sharif ante el Tribunal Supremo para aclarar las informaciones aparecidas acerca de la implicación de familiares directos en el escándalo de los papeles de Panamá, Sharif negó ser titular de ninguna compañía offshore en Panamá. El caso fue presentado ante este tribunal por el partido PTI, que encabeza Khan. 1.800 de sus seguidores fueron arrestados en los días siguientes, en los que se produjeron disturbios después de que se les prohibiera manifestarse en las calles de Islamabad y Rawalpindi y se impusiera un veto de dos meses a las manifestaciones en la capital. Las manifestaciones que tuvieron lugar en emplazamientos autorizados de la periferia fueron reprimidas con gases lacrimógenos. Por otra parte, cabe destacar la decisión del servicio de inteligencia del país, ISI, de llevar a cabo reuniones en las cuatro provincias para trasladar a los servicios desplegados el mensaje de que los servicios de inteligencia militares no deberán interferir cuando se lleven a cabo acciones de carácter legal contra los grupos insurgentes. Según reveló el diario Dawn, esta decisión sin precedentes se tomó después de que en una reunión en la oficina del primer ministro con autoridades militares y civiles para abordar el creciente aislamiento internacional del país, el ministro jefe de Punjab acusara al ISI de interferir siempre que integrantes de determinados grupos eran arrestados para ponerlos en libertad. La prensa señaló que se trataba de unas declaraciones orquestadas por el propio Sharif, para quien el aislamiento diplomático del país por la complacencia con los grupos terroristas, es una amenaza real.

Sri Lanka	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social tamil

Síntesis:
En 1983 el grupo armado de oposición independentista tamil LTTE inició el conflicto armado que asoló Sri Lanka durante casi tres décadas. El proceso de creciente marginación de la población tamil por parte del Gobierno, integrado fundamentalmente por las elites cingalesas, tras la descolonización de la isla en 1948 llevó al grupo armado a reclamar la creación de un Estado tamil independiente por la vía armada. Desde 1983, cada una de las fases en las que se desarrolló el conflicto finalizó con un proceso de paz fallido. En 2002 se iniciaron negociaciones de paz con mediación noruega, después de la firma de un acuerdo de alto el fuego, el fracaso de las cuales llevó a la reanudación con gran virulencia del conflicto armado en 2006. En mayo de 2009 las Fuerzas Armadas vencieron militarmente al LTTE y recuperaron todo el territorio del país tras dar muerte al líder del grupo armado, Velupillai Prabhakaran. Desde entonces miles de tamiles han permanecido desplazados y no se han adoptado medidas para avanzar en la reconciliación. Además, el Gobierno se ha negado a investigar los crímenes de guerra del conflicto armado, negando la comisión de este tipo de delitos.

En Sri Lanka, las reformas iniciadas en 2015 tras la conformación de un nuevo Gobierno se ralentizaron poniendo de manifiesto la limitada voluntad política del Ejecutivo para cumplir con las exigencias en materia de derechos humanos y reformas democráticas planteadas por la comunidad internacional y la sociedad civil. Además, persistieron las denuncias de graves violaciones de derechos humanos y de falta de garantías democráticas. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas señaló que la práctica de la tortura era común en Sri Lanka y que se ejercía de manera rutinaria por parte de la Policía. Naciones Unidas y defensores de derechos humanos también expresaron su preocupación por el borrador legislativo sobre contraterrorismo por contener serias restricciones a la libertad de expresión, sobre todo en lo relativo a la integridad territorial de Sri Lanka. La elaboración de una nueva Constitución se postergó en varias ocasiones y el año concluyó sin que ésta se hubiese iniciado, a pesar del impulso que representaron las reformas constitucionales aprobadas por el nuevo Gobierno en 2015. Además, se produjeron graves casos de corrupción que conllevaron la detención de varios familiares directos del antiguo presidente Mahinda Rajapakse y que involucraron a colaboradores cercanos del actual primer ministro Ranil Wickremesinghe. En lo que respecta a las medidas adoptadas para investigar los crímenes cometidos durante la última fase del conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado LTTE y que concluyó en 2009, cabe destacar que en agosto se aprobó la creación de la Oficina de Personas Desaparecidas para investigar los casos de desapariciones forzadas. El Gobierno accedió a las demandas de establecer oficinas locales en las zonas del norte y el este que resultaron afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos señalaron que la creación de esta oficina pretendía servir de contrapeso ante la comunidad internacional por la decisión de presidente y primer ministro de que la investigación sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado tuviera únicamente un carácter interno sin implicación internacional, tal y como ha exigido Naciones Unidas en repetidas ocasiones. Tanto el presidente Sirisena como el primer ministro descartaron la presencia de jueces

Las reformas iniciadas en Sri Lanka en 2015 se ralentizaron notablemente comprometiendo los avances en derechos humanos y lucha contra la impunidad

extranjeros en este tribunal como reclamaban también las asociaciones de víctimas. Además, no se constató ningún avance en la desmilitarización del norte y del este de la isla.

Asia Oriental

China – Japón	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Territorio, Recursos Internacional
Actores:	China, Japón

Síntesis:
La disputa entre China y Japón (y, en menor medida, Taiwán) por la soberanía y la administración de las islas Senkaku/Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente) en el Mar de China Oriental se remonta a principios de los años setenta, cuando EEUU, que había administrado las islas desde 1945, cedió el control de éstas a Japón. La disputa por las islas Senkaku/Diaoyu, que tienen un alto valor geoestratégico y que se estima podrían albergar enormes reservas de hidrocarburos, se enmarca en las conflictivas relaciones históricas que han mantenido China y Japón desde el primer tercio del siglo XX a raíz de la invasión japonesa de China en los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial. La declaración unilateral en 2013 por parte de China de una nueva Zona de Identificación de Defensa Aérea que incluía a las islas en disputa, así como las acciones unilaterales de ambas partes que antecedieron y siguieron a dicha declaración por parte de Beijing, incrementaron significativamente la tensión bilateral y regional en torno a un contencioso histórico que se había gestionado de manera relativamente pacífica desde principios de los años setenta pero que, según varios analistas, contiene el potencial para provocar algún incidente militar entre ambos países e incluso para desestabilizar la región.

A pesar de que se produjeron algunos encuentros al más alto nivel y se reanudaron las conversaciones sobre el establecimiento de mecanismos de cooperación aérea y naval, **durante el año se incrementó la tensión política y militar por la soberanía de las islas Senkaku/Diaoyu, por los numerosos incidentes alrededor de las mismas, por la nueva estrategia de seguridad nacional japonesa, por el rol de EEUU en la región o por el incremento de las actividades de prospección y perforación petrolífera en aguas en disputa en el Mar de la China Oriental**. Respecto a esta última cuestión, Japón elevó numerosas protestas diplomáticas ante Beijing por considerar que China estaba violando un acuerdo de 2008 que exhortaba a ambos países a cooperar en la exploración y explotación de las reservas de gas y petróleo en las aguas cercanas a las islas Senkaku/Diaoyu. Por su parte, China rechazó todas las acusaciones de desarrollo unilateral en la región y afirmó que todas las estructuras y actividades de prospección petrolífera se concentran en aguas que no están en disputa. En este sentido, a principios de año el partido gubernamental japonés instó al Ejecutivo a buscar un arbitraje internacional respecto de las actividades de China en el Mar de la China Oriental. Por otra parte, se registró un notable incremento de la tensión política y militar acerca de la disputa que ambos países mantienen en las islas Senkaku/Diaoyu. Como en años anteriores, China siguió reivindicando su soberanía y reclamó su derecho a llevar a cabo actividades de patrullaje y pesca o bien de instalar radares en las aguas que las rodean. En este sentido, medios de comunicación japoneses señalaron a finales de año que durante el 2016 más de 120 embarcaciones chinas se adentraron en las aguas territoriales de las islas Senkaku/Diaoyu. Para tener una perspectiva comparativa, en 2008 solamente se registraron dos incursiones, mientras que en 2012 (año en el que se incrementó drásticamente la tensión, después de que el Gobierno japonés comprara algunos de los islotes de las Senkaku/Diaoyu) y 2013 se produjeron 188 incursiones. Según los mencionados medios de comunicación, 2016 fue el primer año en el que se sobrepasaron las 100 incursiones. De igual modo, a principios de agosto el Gobierno japonés hizo público un comunicado en el que sostenía que durante los primeros días de agosto se incrementó sustancialmente el número de guardacostas chinos con presencia en las aguas en disputa y que hasta 230 barcos pesqueros chinos escoltados por seis guardacostas chinos se habían adentrado en las mencionadas aguas. En la misma línea, a finales de junio, el Gobierno japonés señaló que el número de aviones militares japoneses que despegaron ante la cercanía de aviones chinos aproximándose a su espacio aéreo fue de 199 entre abril y junio, una cifra un 80% superior a la del mismo periodo del año pasado e incluso superior a la del trimestre anterior, en la que ya había sido alta. A modos de ejemplo, cabe tomar en consideración que, según Tokio, en 2015 se interceptaron 571 aeronaves chinas.

Por su parte, China se defendió de las acusaciones por parte de Japón alegando que muchas de las mencionadas aeronaves realizaban ejercicios militares normales y tareas de vigilancia de la Zona de Identificación de Defensa Aérea que proclamó unilateralmente China en 2012 y que provocó las protestas de varios países en la región. Uno de los principales problemas que han tenido ambos países desde el año 2012 es que las denominadas Zonas de Identificación de Defensa Aérea se solapan, lo cual ha ocasionado numerosos desencuentros. Además, China también criticó el anuncio hecho por Japón a principios de año sobre su intención de incrementar sus medios de vigilancia y protección en la región de las islas Senkaku/Diaoyu, así como la promulgación de una nueva ley de seguridad nacional, que expande el rol y las funciones de las Fuerzas Armadas japonesas. Por otra parte, la tensión acerca de esta disputa se acrecentó nuevamente después de que China expresara su malestar y preocupación por la intención del Gobierno japonés de que la UNESCO declare patrimonio de la humanidad las islas Amami-Ryukyu. Aunque Tokio ha señalado que las islas Senkaku/Diaoyu no están incluidas en la propuesta que debe presentar formalmente en febrero de 2017 para que su posible designación se haga efectiva en 2018, Beijing considera que ello puede afectar negativamente la gestión y resolución del contencioso que mantiene con

Japón. Finalmente, cabe destacar que **se incrementó la tensión entre China y EEUU por varios motivos**. En primer lugar, por el anuncio a mediados de septiembre por parte de la ministra de Defensa de Japón sobre su intención de iniciar operaciones conjuntas de patrullaje y entrenamiento con EEUU en el Mar de la China Oriental. Algunos medios de comunicación chinos reaccionaron a dichas declaraciones anticipando posibles respuestas por parte de Beijing, como la declaración de una Zona de Identificación de Defensa Aérea en las islas Spratly. Pocos días antes de estas declaraciones por parte de la ministra de Defensa japonesa, habían iniciado los ejercicios militares conjuntos en el Mar de la China Oriental que cada año llevan a cabo China y Rusia. En segundo lugar, por las acusaciones de Beijing a Washington de llevar a cabo vuelos de reconocimiento en áreas costeras chinas. De hecho, en junio EEUU acusó a China de haber interceptado a un avión estadounidense que sobrevolaba espacio aéreo internacional en el Mar de la China Oriental. En tercer lugar, porque en varias ocasiones durante el año el Gobierno estadounidense manifestó su intención de respetar el tratado de defensa bilateral con Japón para defender la soberanía japonesa en caso de agresión contra su territorio, en clara alusión a las islas Senkaku/Diaoyu. Dicho compromiso fue reiterado a principios de año por el nuevo secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, después de que algunos medios de comunicación japoneses mostraron su preocupación por el futuro de las relaciones bilaterales entre EEUU y Japón por la ambigüedad con la que el entonces candidato presidencial Donald Trump se refirió al pacto de defensa bilateral o por la advertencia a Japón y Corea del Sur por su escasa contribución a los varios gastos de defensa, como el estacionamiento de soldados estadounidenses en la región.

Las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Corea del Sur se deterioraron drásticamente a raíz de los dos ensayos nucleares y del lanzamiento de numerosos misiles balísticos llevados a cabo por Pyongyang

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Sistema Internacional
Actores:	RPD Corea, Rep. de Corea

Síntesis:
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera de facto en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

A diferencia del año pasado, **no se registraron incidentes militares destacables entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero las relaciones diplomáticas entre ambos países se deterioraron drásticamente a raíz de los dos ensayos nucleares y del lanzamiento de numerosos misiles balísticos llevados a cabo por Corea del Norte**. En efecto, al día siguiente de que Pyongyang declarara haber llevado a cabo un ensayo con una bomba de hidrógeno a principios de enero, el Gobierno surcoreano cesó los proyectos de cooperación transfronteriza, reanudó la propaganda antigubernamental con altavoces desde la frontera (el año pasado se utilizó esta misma estrategia por vez primera en los últimos 11 años) y limitó la entrada al complejo industrial de Kaesong (situado en Corea del Norte, cerca de la frontera), símbolo de los escasos proyectos de cooperación entre ambos países. Al mes siguiente, después de que Corea del Norte lanzara un cohete de largo alcance (aunque Pyongyang afirmara de que se trataba de la puesta en órbita de un satélite), Seúl ordenó el cierre de dicho complejo, alegando que la mayor parte de los beneficios del mismo alimentaban el programa armamentístico de Corea del Norte. En respuesta, Pyongyang ordenó la expulsión de todos los ciudadanos surcoreanos del país, congeló los activos de las empresas surcoreanas y amenazó con militarizar el complejo industrial de Kaesong y con cortar las líneas de teléfono directo con Corea del Sur. Además, poco después del mencionado lanzamiento de un cohete, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur lanzaron varios disparos de advertencia contra un navío norcoreano que, según Seúl, había sobrepasado la Northern Limit Line (NLL), que hace las funciones de frontera marítima de facto entre ambos países en el Mar Amarillo (la demarcación fronteriza marítima reivindicada por Corea del Norte está situada algo más al sur que la NLL). La tensión entre ambos países volvió a agudizarse en el mes de marzo, después de que EEUU y Corea del Sur iniciaran unos nuevos ejercicios militares conjuntos, los mayores que jamás habían realizado. Pyongyang declaró nulos todos los acuerdos bilaterales en materia económica, instó al Consejo de Seguridad a abordar dichos ejercicios militares e incrementó notablemente el lanzamiento de misiles balísticos. Poco después, Corea

del Sur declaró que la península coreana se hallaba en un estado de semi guerra y bloqueó numerosas webs y redes sociales de Corea del Norte. En esta misma línea, en el mes de junio el Gobierno de Corea del Sur denunció que Corea del Norte había llevado a cabo un ataque informático contra decenas de miles de ordenadores de empresas y agencias públicas surcoreanas.

Por otra parte, **las relaciones entre ambos países también se vieron afectadas por el anuncio de EEUU y Corea del Sur sobre su intención de instalar para finales de 2017 un nuevo sistema de escudos antimisiles en territorio surcoreano**, anuncio que también criticaron los Gobiernos de China y Rusia. En este sentido, cabe destacar que a principios de año trascendió a la prensa un presunto ofrecimiento de diálogo de Corea del Norte a EEUU acerca de la posibilidad de sustituir el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea con un tratado de paz. Sin embargo, EEUU rechazó tal ofrecimiento por la negativa de Pyongyang a incluir en las conversaciones su programa nuclear. Según analistas, EEUU habría modificado levemente su posición respecto al diálogo con Pyongyang pues si bien hasta el momento había exigido a Corea del Norte avances en la desnuclearización del país antes de entablar cualquier diálogo, en esta ocasión no pidió pasos previos sino inclusión del tema en la agenda de las conversaciones. En la misma línea, en mayo el Gobierno de Corea del Sur también habría rechazado un ofrecimiento por parte de Pyongyang de reanudar conversaciones militares, también por la negativa del Gobierno a abordar el programa nuclear norcoreano. Por tanto, así como el año anterior se registraron varios incidentes militares pero a la vez se llevaron a cabo numerosas medidas de fomento de la confianza y se mantuvieron abiertos varios canales de comunicación, durante 2016 el diálogo entre ambos países fue prácticamente inexistente.

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

Síntesis:
La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado "eje del mal". Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

La tensión acerca del programa armamentístico de Corea del Norte se incrementó notablemente respecto de los años anteriores por los dos ensayos nucleares llevados a cabo por Pyongyang durante el año; por el lanzamiento de numerosos misiles balísticos –más de 20, según algunas fuentes– o por los distintos informes que alertan sobre los avances tecnológicos del programa nuclear norcoreano. En efecto, a principios de marzo el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución (2270), impulsada por EEUU y China, que ampliaba las sanciones contra Corea del Norte por haber llevado a cabo un ensayo nuclear con una bomba de hidrógeno en enero –a pesar de que algunas voces científicas cuestionaran de que efectivamente se tratara de una bomba de hidrógeno– y por haber puesto un órbita un satélite que, según varios países, en realidad era un cohete que doblaba la capacidad de carga de los anteriores cohetes testados y tenía un alcance de unos 12.000 kilómetros. Además de la aprobación de la resolución, EEUU impuso nuevas sanciones unilaterales a Corea del Norte e inició, juntamente con Corea del Sur, los mayores ejercicios militares de los últimos tiempos. Por su parte, Seúl puso fin a la cooperación transfronteriza y ordenó el cierre del complejo industrial de Kaesong por considerar que las ganancias que generaba eran reinvertidas en el programa armamentístico norcoreano. En plena escalada de la tensión militar y diplomática que se produjo en el primer semestre del año, Corea del Norte disparó misiles de corto, medio y largo alcance en varias ocasiones –provocando una enérgica condena por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y de su secretario general– y canceló todos los programas de cooperación en materia económica con Corea del Sur. Además, el líder norcoreano declaró que la península coreana se hallaba en un estado de semi guerra, instó a su Gobierno a seguir llevando a cabo ensayos nucleares, y anunció haber logrado la miniaturización de las cabezas nucleares para ser adosadas a misiles balísticos, uno de los principales temores de la comunidad internacional. En la misma línea, el propio Kim Jong-un declaró durante el 7º Congreso del Partido de los Trabajadores que se celebró en mayo (el primero en 36 años) que el programa nuclear norcoreano proseguiría. Algunos analistas señalan que actualmente Corea del Norte dispone de entre 12 y 20 cabezas nucleares y que en los siguientes cinco años podrían alcanzar las entre 50 y 100. Además, según estos mismos expertos, Pyongyang dispone actualmente de entre 200 y 320 misiles balísticos Nodong de medio alcance (con capacidad para impactar cualquier ciudad japonesa y las bases militares de EEUU en la región), varios misiles Musudan de largo alcance (con capacidad para impactar en Alaska y en Guam, isla en la que EEUU tiene una importante

base militar) y está desarrollando algunos misiles de largo alcance que podrían alcanzar determinadas partes de la costa oeste de EEUU. En este sentido, en el mes de junio la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) advirtió que varias imágenes por satélite sugerían que el complejo nuclear de Yongbyon, el mayor del país, se había reactivado, por lo que urgió al Gobierno norcoreano a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la propia AIEA. Más tarde, en el mes de agosto, el Gobierno norcoreano reconoció haber reanudado la producción de plutonio, lo cual contraviene varias resoluciones de Naciones Unidas.

En la segunda mitad del año, la tensión se mantuvo en niveles altos por la imposición de nuevas sanciones a Corea del Norte por parte de EEUU y la UE, por el frecuente lanzamiento de misiles por parte de Pyongyang, por el anuncio de los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur de instalar en territorio surcoreano un nuevo sistema de antimisiles para finales de 2017 y, especialmente, por la **aprobación de una nueva resolución de condena por parte del Consejo de Seguridad en el mes de noviembre, después de que a principios de septiembre Corea del Norte llevara un nuevo ensayo nuclear, el segundo de Kim Jong-un y el quinto en los últimos años.** Dicho ensayo, el mayor de los que han tenido lugar hasta el momento –provocó un sismo de 5,3 en la escala de Richter– provocó la condena por parte de la comunidad internacional, incluida China, pues según algunos analistas demostraría que Pyongyang ya dispone de la capacidad para construir bombas nucleares de la potencia de las que se lanzaron sobre Hiroshima en 1945. Tras este ensayo, el Gobierno de EEUU ordenó que varios de sus bombarderos sobrevolaran la llamada Zona Desmilitarizada, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, siendo la ocasión en la que aviones estadounidenses han sobrevolado más cerca del espacio aéreo norcoreano. Además, EEUU y China decidieron incrementar su cooperación para lograr que Corea del Norte no siguiera violando resoluciones en materia de no proliferación nuclear. En este sentido, a finales de noviembre, el Consejo de Seguridad aprobó, nuevamente por unanimidad, una resolución en la que condenaba el programa nuclear norcoreano e imponía nuevas sanciones. Además de estas medidas, los Gobiernos de Corea del Sur y de Japón anunciaron nuevas sanciones unilaterales. Por su parte, China declaró que se opone a las sanciones unilaterales y advirtió sobre la necesidad de calibrar las consecuencias humanitarias de las mismas. Cabe señalar que previamente el Consejo de Seguridad de la ONU ya había condenado y considerado una grave violación de sus obligaciones internacionales el lanzamiento de tres misiles de medio alcance por parte de Corea del Norte, uno de los cuales había caído en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Japón, lo cual fue considerado una amenaza grave por parte del Gobierno japonés. Como reacción a la nueva resolución por parte del Consejo de Seguridad, a principios de diciembre Corea del Norte llevó a cabo ejercicios militares de gran envergadura y simuló atacar objetivos norcoreanos, incluyendo la residencia presidencial. A finales de año, durante un discurso dirigido a la población norcoreana, Kim Jong-un declaró que Corea del Norte está en las fases finales de testar un misil balístico intercontinental y advirtió a EEUU que abandone la política hostil hacia Corea del Norte que ha seguido Washington en los últimos años. A pesar de que hasta el momento Pyongyang no ha testado con éxito ningún misil balístico intercontinental, las afirmaciones de Kim Jong-un provocaron una cierta alarma internacional y motivaron la inmediata respuesta del presidente electo de EEUU, Donald Trump, negando la posibilidad de que un misil norcoreano pudiera impactar partes del territorio estadounidense.

Sudeste Asiático y Oceanía

Tailandia	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
Aunque ya desde la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 numerosos sectores denunciaron su estilo autoritario, su campaña contra el narcotráfico (en la que murieron más de 2.000 personas) o su aproximación militarista al conflicto en el sur, la crisis sociopolítica que ha padecido Tailandia en los últimos años escaló en 2006. Ese año, tras hacerse público un caso de corrupción, se registraron masivas movilizaciones para exigir la renuncia de Thaksin Shinawatra hasta que, en el mes de septiembre, una junta militar llevó a cabo un golpe de Estado que le obligó a exiliarse. A pesar de que en agosto de 2007 fue aprobada en referéndum una nueva Constitución, el nuevo Gobierno no logró disminuir la polarización política y social en el país. Así, un partido leal a Thaksin Shinawatra ganó los comicios de diciembre de 2007. Sin embargo, durante el año 2008 los numerosos actos de violencia y las movilizaciones masivas en contra del Gobierno convocadas por la Alianza Popular para la Democracias (movimiento conocido como "camisas amarillas") provocaron la renuncia de dos primeros ministros y la llegada al poder en diciembre de 2008 de Abhisit Vejjajiva, opositor a Thaksin Shinawatra. Desde entonces, se producen de forma periódica manifestaciones multitudinarias del Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (movimiento conocido como "camisas rojas", que apoya el retorno del ex primer ministro Thaksin Shinawatra) para exigir la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Como en el año anterior, **no se registraron actos de violencia significativos ni movilizaciones o protestas de consideración, aunque persistieron las críticas por parte de ONG, gobiernos e incluso organismos internacionales como Naciones Unidas por la precaria situación de los derechos humanos, por los presuntos intentos de la Junta Militar –también conocida como Consejo Nacional para la Paz y el Orden (CNPO)– de perpetuarse en el poder y por las políticas de control y represión de la oposición por parte del Ejecutivo**. Cabe destacar que el 7 de

agosto se aprobó en referéndum la nueva Constitución, redactada por un organismo designado por el CNPO, con una participación del 59% y un porcentaje de apoyo a la nueva Carta Magna del 61%. La mayor parte de provincias sureñas, junto con Bangkok, votaron a favor de la nueva Constitución, mientras que un buen número de provincias del norte y nordeste del país lo hicieron en contra. Además, en dicho referéndum se aprobó (con un 58% a favor) que el Senado eligiera, conjuntamente con la Cámara de Representantes, al primer ministro. El comité encargado de la redacción de la Constitución incluyó finalmente la petición del CNPO de establecer un Senado de 250 miembros designados por el Consejo en un período de cinco años tras las elecciones que deberán elegir al nuevo Gobierno en Tailandia. Según el propio CNPO, esta medida es necesaria para preservar la paz y la seguridad durante la transición de la Junta Militar a un Gobierno civil. En varias ocasiones el CNPO había anunciado su intención de convocar estas elecciones durante el 2017, pero dejó la puerta abierta a posponerlas si para entonces no estaban listas todas las leyes necesarias para su celebración. En este sentido, el actual primer ministro, Prayuth Chan-ocha, que en repetidas ocasiones había manifestado su voluntad de no perpetuarse en el cargo, declaró tras la aprobación de la nueva Constitución que se abría a postularse para el cargo si no había otra persona más cualificada. Cabe destacar que pocos días después de la celebración del referéndum, se produjeron una cadena de atentados en 17 localidades de siete provincias del país. Previamente, el día antes de la celebración del referéndum, también hubo tres explosiones en el sur del país. Si bien al principio hubo algunas voces que vincularon estos atentados con la situación política del país y el proceso de aprobación de la nueva Constitución, las autoridades finalmente responsabilizaron a grupos armados que operan en el sur del país. El año pasado, también en el mes de agosto, 20 personas murieron –dos terceras partes extranjeras– y más de 120 resultaron heridas tras el estallido de un artefacto explosivo en Bangkok, considerado por el Gobierno y varios medios de comunicación como el peor atentado de la historia del país.

Durante el año, pero especialmente durante los meses anteriores al mencionado referéndum constitucional, partidos de la oposición, organizaciones de los derechos humanos e incluso gobiernos u organismos internacionales como Naciones Unidas criticaron las medidas ejecutivas y legislativas destinadas a reprimir a los sectores críticos con el Gobierno, a restringir la libertad de expresión y a impedir un debate con garantías democráticas. Así, **durante el año se endurecieron las penas contra numerosas personas que fueron detenidas por criticar a la Junta Militar**. En los días anteriores al referéndum, 23 embajadores denunciaron la falta de debate sobre los contenidos de la nueva Constitución, y 117 líderes de organizaciones políticas y sociales instaron al Gobierno a permitir comentarios críticos con este texto. Es especialmente significativo que los ex primeros ministros Thaksin Shinawatra y Abhisit Vejjajiva, en polos opuestos del espectro político, criticaran tanto los contenidos como el proceso de aprobación de la nueva Constitución. En los días previos al referéndum, el Gobierno cerró una treintena de centros "anti-fraude" que habían sido establecidos por el Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (conocidos popularmente como camisas rojas) para supervisar la votación y además estableció sus propios "centros de paz" en todo el país, oficialmente para garantizar la normalidad en la jornada de votación, pero, según algunas voces opositoras, para condicionar el voto de la población. También en los días previos al referéndum, el CNPO ordenó el cierre de varios medios de comunicación críticos con el Gobierno. Ante esta situación, no se produjeron ni autorizaron movilizaciones sociales ni protestas. Las más significativas del año fueron las que se produjeron en mayo, coincidiendo con el segundo aniversario del golpe de Estado contra Yingluck Shinawatra, en las que unas 200 personas se manifestaron en Bangkok. Finalmente, cabe destacar que a mediados de octubre murió el rey Bhumidol Adulayej, que tras 70 años en el trono fue sustituido por su hijo Maha Vajilalongkorn, que juró el cargo a finales de año como Rama con el primer encargo de ratificar la nueva Constitución.

2.3.4. Europa

Europa Oriental

Moldova (Transdniestria)	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdniestria, Rusia

Síntesis:
Transdniestria, un territorio de 4.000 km^2 y medio millón de habitantes, de mayoría de población eslava, legalmente bajo soberanía de Moldova y en la práctica independiente, es escenario desde los años noventa de un conflicto no resuelto en torno a su estatus. El conflicto emergió en la etapa final de la URSS, cuando se incrementaron los temores en Transdniestria sobre una posible unificación entre una Moldova independiente y Rumanía. La región se declaró independiente de Moldova, que a su vez proclamó su independencia en 1991. Hubo escalada de incidentes que derivaron en un conflicto armado en 1992. Se alcanzó un acuerdo de alto el fuego ese mismo año, que puso fin a la guerra de varios meses. Las tropas rusas presentes en Transdniestria desde la etapa soviética pasaron a ser tropas de mantenimiento de la paz, mientras Moldova reclamó en años sucesivos su salida. Desde el fin de la guerra las partes negocian de manera intermitente para resolver el conflicto. El conflicto armado iniciado en Ucrania en 2014, país fronterizo con Transdniestria, aumentó las alarmas por los posibles impactos en Moldova y su conflicto no resuelto.

Se redujo la tensión entre Moldova y Transdniestria en relación al año anterior, en que se había asistido a denuncias de militarización y medidas de hostilidad,

en parte por contagio del conflicto vecino en Ucrania. Como elemento positivo, se reanudaron en junio las negociaciones formales de paz, tras dos años de estancamiento en el formato 5+2.[70] Por otra parte, tanto Moldova como Transdniestria acogieron elecciones presidenciales, sin reconocimiento internacional en el caso de la entidad independiente *de facto*. En relación a Moldova, el país celebró entre octubre y diciembre las primeras elecciones presidenciales directas, tras un dictamen del Tribunal Constitucional de abril que cambió la elección parlamentaria por la elección popular directa (sistema en vigor hasta el año 2000). La elección del pro-ruso Igor Dodon como nuevo presidente de Moldova –en la segunda ronda de las elecciones, producidas en noviembre– generó interrogantes sobre sus consecuencias tanto para el conflicto de Transdniestria como en la situación general de Moldova. La elección de una figura pro-rusa en la presidencia moldova se produce en un contexto de tensiones políticas y sociales internas entre Gobierno y oposición, y entre sectores de la población y la case política, así como de tensión regional entre las instituciones euroatlánticas y Rusia. Asimismo, en las elecciones de Transdniestria, celebradas en diciembre, resultó ganador el presidente del Parlamento, el también pro-ruso Vadim Krasnoselsky.

Por otra parte, en clave interna, continuaron a principios de 2016 las protestas a las que asistió el país en 2015, con nuevas movilizaciones contra la corrupción política y contra el Gobierno, en demanda de elecciones anticipadas y en el contexto de vacío institucional, tras la caída del Gobierno a finales de 2015 a causa de una moción de censura. La designación por el presidente en enero de un nuevo primer ministro considerado cercano al oligarca Vladimir "Vlad" Plahotniuc generó nuevas protestas, incluyendo intentos de irrupción en el Parlamento, con choques con la Policía. El nuevo gobierno designado reafirmó su orientación pro-UE. En una de las protestas en febrero se produjo un lanzamiento de granada contra la sede del Banco Central. Hubo protestas en diversos momentos en meses siguientes, en demanda de elecciones anticipadas. La elección en noviembre del presidente Dodon abrió un nuevo escenario político, con riesgos de antagonismo entre Gobierno y Presidencia y un trasfondo político y social fragmentado.

Ucrania – Rusia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Territorio, Autogobierno, Identidad Internacional
Actores:	Gobierno de Ucrania, Gobierno de Rusia, oposición política y social de Crimea, EEUU, OTAN, UE

Síntesis:
Rusia y Ucrania –territorio históricamente disputado por poderes rivales, anexionada por Rusia a finales del siglo XVIII e integrada en 1922 en la URSS como república socialista soviética– han mantenido relaciones ambivalentes desde la independencia de Ucrania en 1991. Éstas han estado influidas por el interés ruso en mantener bajo su órbita de influencia a Ucrania, vasto territorio de 603 550 km2 y 45 millones de personas, al oeste de Rusia y país importador y de tránsito de hidrocarburos rusos. Diferentes regímenes ucranianos han priorizado relaciones de cooperación o de distancia con respecto al Kremlin y, en paralelo, de menor o mayor cercanía a poderes euroatlánticos, como EEUU, la UE y la OTAN. La decisión de no ratificar el acuerdo de asociación con la UE por el presidente ucraniano pro-ruso Victor Yanukovich en 2013, –en medio de presiones rusas y de un contexto de hostilidades entre poderes occidentales y Rusia– y las consiguientes protestas antigubernamentales derivaron en una grave crisis y la caída del régimen de Yanukóvich en febrero de 2014. Su salida fue seguida de la toma militar por fuerzas rusas de la península de Crimea –territorio de mayoría de población rusa (58%) y minorías significativas ucraniana (24%) y tártara (12%), históricamente bajo control ruso (imperial y soviético) y transferido por la URSS a Ucrania en 1954, con estatus de autonomía desde 1996, y que acoge la flota naval rusa del Mar Negro. La región de Crimea y la ciudad de Sebastopol se unieron a Rusia tras un referéndum celebrado en un contexto militarizado y sin garantías internacionales. Desde entonces organizaciones de derechos humanos han denunciado persecución contra la comunidad tártara y voces independientes, forzando al exilio a activistas y opositores. La toma de Crimea fue seguida del estallido de una guerra entre fuerzas ucranianas y milicias apoyadas por Rusia en el este de Ucrania. La tensión entre Ucrania y Rusia en torno a Crimea y a sus políticas de vecindad y el conflicto internacional que rodea a la tensión continúan activos.

Se incrementó la tensión entre Ucrania y Rusia en torno a la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, con acusaciones mutuas de provocaciones y medidas de militarización, en paralelo a la continuación del conflicto en el este de Ucrania entre las Fuerzas Armadas ucranianas y fuerzas insurgentes apoyadas por Rusia.[71] El Gobierno ruso denunció en agosto diversos intentos de atentados terroristas y sabotaje dentro de Crimea por actores ucranianos bajo órdenes de los servicios de inteligencia ucranianos. Según Rusia, en sendos choques con dichos actores murieron dos miembros de las fuerzas de seguridad rusas, y se practicaron detenciones. Ucrania lo descalificó como alegaciones falsas. El incremento de tensión a mediados de año también fue de la mano de medidas de militarización por ambos gobiernos. **Rusia reforzó su sistema de defensa antiaérea en Crimea**, mediante misiles S-400 Triumf, de largo y medio alcance. Además, llevó a cabo maniobras militares en Crimea entre finales de agosto y comienzos de septiembre, como parte de sus ejercicios militares de gran escala "Kavkaz-2016", en el sur de Rusia y Crimea. Por su parte, el Gobierno ucraniano puso a sus tropas en situación de máxima alerta terrorista junto a la frontera con Crimea –igual que en Donetsk y Lugansk,

70. Véase el resumen sobre Moldova (Transdniestria) en el capítulo 3 (Procesos de paz).
71. Véase el resumen sobre Ucrania (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

escenario del conflicto armado–; a lo que se unió un segundo nivel de alerta en otras zonas de Ucrania. La tensión militar entre Rusia y Ucrania en torno a Crimea se enmarcó también en el pulso político y militar entre las instituciones euroatlánticas (gobiernos occidentales, UE, OTAN) y Rusia. Entre otras circunstancias, la OTAN aprobó en julio el despliegue de cuatro batallones en los países bálticos y Polonia y otras medidas en el mar Negro, el mayor refuerzo de defensa colectiva desde el fin de la Guerra Fría. A finales de año se incrementó de nuevo la tensión, con nuevas acusaciones por parte de Rusia de intentos de sabotaje en la península de Crimea, negadas por Ucrania, y varias detenciones en noviembre de personas acusadas de formar parte de un grupo terrorista vinculado al Ministerio de Defensa. Las autoridades ucranianas detuvieron ese mes a tres soldados rusos junto a la frontera con Ucrania. Además, Ucrania anunció en noviembre su intención de llevar a cabo maniobras militares con lanzamiento de misiles antiaéreos de medio alcance sobre las aguas del mar Negro, junto a Crimea. Rusia amenazó con derribar los misiles, considerándolo invasión de su espacio aéreo, y reforzó su sistema de defensas antiaéreas en Crimea. Finalmente, el Gobierno ucraniano desplazó la ubicación de los ejercicios militares. Rusia dispuso a su flota naval del mar Negro en posición de alerta.

Por otra parte, **la situación dentro de Crimea continuó afrontando violaciones de derechos humanos**, según denunciaron organizaciones y activistas. Las autoridades rusas siguieron persiguiendo a sectores de población críticos con la anexión rusa, con impactos en libertad de expresión y asociación.[72] Entre otros hechos durante el año, **el Gobierno ruso prohibió en abril el órgano de representación de la población tártara, Mejlis, designándolo como organización extremista.** Fueron detenidos durante el año diversos defensores de derechos humanos y representantes tártaros. Activistas y organizaciones denunciaron también intimidación y hostigamiento en relación a las elecciones parlamentarias rusas del 18 de septiembre, celebradas también en Crimea. Asimismo, entró en vigor en enero el bloqueo por parte de Ucrania al comercio con Crimea. Por otra parte, un informe de la Fiscalía de la CPI señaló en noviembre que la información disponible remitía a la existencia de un conflicto militar entre Rusia y Ucrania y que la situación dentro de Crimea equivalía a un "estado de ocupación". Tras ello, Rusia se retiró de la CPI, revocando su firma. Asimismo, la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre una resolución condenatoria de "la ocupación temporal de Crimea" y de los abusos de derechos humanos (70 votos a favor, 77 abstenciones y 26 votos en contra). Por otra parte, la elección de Donald Trump como nuevo presidente de EEUU generó incertidumbre en Ucrania, ante la posibilidad de un acercamiento entre EEUU y Rusia y las posibles consecuencias sobre las sanciones contra esta última.

Se incrementó la tensión entre Ucrania y Rusia, con acusaciones de provocaciones en torno a Crimea y medidas de militarización

Rusia y Cáucaso

Armenia	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
La ex república soviética de Armenia se independizó en 1991, en el marco de descomposición de la URSS, e inició un proceso de transición convulso, marcado por la guerra con Azerbaiyán en torno al enclave de Nagorno-Karabaj (1992-1994) y por la inestabilidad política. Su participación en dicha guerra le supuso sanciones internacionales, con grave repercusión en su economía, si bien experimentó cierto repunte en años posteriores. Internamente, el país ha afrontado diversas crisis políticas desde su independencia, incluyendo la renuncia en 1998 del entonces presidente Levon Ter-Petrosian, acusado de concesiones a Azerbaiyán en el proceso de paz; o los episodios violentos de 1999 en el Parlamento, en que varios hombres armados mataron al primer ministro, al presidente de la cámara y a seis parlamentarios. Temas recurrentes de tensión en la etapa postsoviética han sido las fricciones entre Gobierno de turno y la oposición sobre irregularidades electorales, las denuncias sobre vulneración de los derechos humanos, especialmente de libertad de expresión y prensa, las críticas al uso de la fuerza en la represión de manifestaciones o a la corrupción. El clima de descontento y polarización se agravó a partir de la crisis electoral de 2008.

Se incrementó la tensión a mediados de año, por la crisis generada en torno al asedio militar y atrincheramiento de un grupo armado en una comisaría de capital, en demanda de dimisión del presidente, que tuvo consecuencias sociales y políticas. El ataque se produjo a mitad de julio, por hombres armados vinculados al movimiento opositor Parlamento Fundacional, y resultó en la muerte de un policía y la toma de diversos rehenes. El grupo reclamó la dimisión del presidente, Serzh Sarkisian, y la liberación del líder de su movimiento, el veterano de la guerra de Nagorno-Karabaj, Zhirayr Serfilian, detenido a finales de junio, poco después de anunciar los planes de creación de un nuevo grupo, Resistencia Nacional, con el que derrocar al Gobierno. La toma de la comisaría se prolongó durante la segunda quincena de julio. Algunos análisis atribuyeron al grupo descontento con la gestión de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj.[73] Conforme la toma de la comisaría se prolongó, se sucedieron movilizaciones en apoyo

72. Human Rights Watch, *World Report 2017. Events of 2016*, HRW, 2017.
73. Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

a los atacantes, y se produjeron algunos incidentes entre manifestantes y Policía. 75 personas resultaron heridas en las protestas en los últimos días de julio. Finalmente, tras un ultimátum y amenaza de operación de gran escala por las fuerzas de seguridad, el grupo se entregó, a lo que siguió la detención de 20 personas. No obstante, continuaron las protestas en semanas posteriores, en demanda de la liberación de los atacantes. Varios altos miembros del partido opositor Herencia fueron detenidos por las protestas. El partido decidió retirarse de los comicios locales de septiembre en protesta por las detenciones, y finalmente fueron liberados. **La crisis política y social posterior al asedio derivó también en la dimisión del primer ministro**, Hovik Abrahamyan, lo que fue seguido de cambios en el equipo de gobierno. Por otra parte, durante el año Armenia y Rusia reforzaron sus vínculos militares, con el anuncio de Rusia del incremento de su presencia militar en su base en el aeropuerto armenio de Ereburi. Además, el Parlamento armenio ratificó un acuerdo armenio-ruso para la creación de un sistema de defensa aéreo, firmado en diciembre de 2015, que no se aplica sobre Nagorno-Karabaj.

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj

Síntesis:
La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre ésta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego.

El conflicto en torno a Nagorno-Karabaj escaló de manera significativa, con la crisis violenta más grave desde el fin de la guerra en 1994. El estallido de violencia se produjo durante los primeros días de abril, e involucró uso de tanques, helicópteros y artillería. El balance de víctimas mortales osciló, según fuentes, entre un centenar y dos centenares, incluyendo civiles. Las partes se acusaron mutuamente de iniciar los ataques y amenazaron con operaciones de gran escala. Diversos análisis y expertos apuntaron a un intento de Azerbaiyán de poner a prueba las capacidades de defensa de Armenia y, a la vez, de forzarles a una negociación desde una posición más debilitada.[74] Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán tomaron el control de algunas zonas de territorio anteriormente bajo control armenio. Hubo diversas interpretaciones sobre las implicaciones de la violencia, con algunos análisis señalando la falta de cambios sustantivos sobre el *statu quo* militar y político y otros enfatizando que la crisis supone una victoria militar parcial para Azerbaiyán, así como evidencia los riesgos de nuevas fases de violencia elevada. La crisis movilizó apoyos a sus respectivas fuerzas armadas tanto en Armenia y Nagorno-Karabaj como en Azerbaiyán. El Grupo de Minsk de la OSCE –órgano mediador en el conflicto– condenó severamente el estallido de violencia "sin precedentes". Las partes en conflicto alcanzaron un alto el fuego el 5 de abril. Previamente al estallido de la crisis, en los primeros meses del año ya se habían producido numerosos incidentes violentos de baja intensidad, con acusaciones cruzadas, y diversas víctimas mortales.

La región de Nagorno-Karabaj asistió al estallido de violencia más grave entre fuerzas armenias y azerbaiyanas desde el fin de la guerra en 1994

Tras el acuerdo de alto el fuego de abril siguieron produciéndose incidentes, con bajas militares. El propio presidente azerbaiyano afirmó en junio que el alto el fuego no era estable. En meses siguientes, los Gobiernos armenio y azerbaiyano se comprometieron a reimpulsar las negociaciones de paz, reforzar mecanismos de observación y crear instrumentos de investigación de incidentes, pero sin concreción práctica,[75] lo que mantuvo las alertas elevadas hasta final de año ante los riesgos de nuevas derivas de violencia de gran escala. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, denunció la imposibilidad de acceso de su Oficina a la región de Nagorno-Karabaj, incluyendo en la etapa post-crisis de abril. La tensión continuó elevada a finales de año. Entre los incidentes, las autoridades de Nagorno-Karabaj denunciaron en octubre un intento de incursión de fuerzas de Azerbiyán, acusaciones rechazadas por el Gobierno azerbaiyano. Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán visitaron a sus tropas en torno a la línea de contacto en noviembre. En el marco de esa visita, el presidente azerbaiyano subrayó la necesidad de recuperar el control sobre Nagorno-Karabaj, incluyendo por la fuerza.

74. Thomas de Waal, "Why we need to contain the Caucasus crisis", Op-ed, *POLITICO Europe*, 4 de mayo de 2016.
75. Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Georgia (Abjasia)	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia

Síntesis:
La precaria situación de seguridad en la región responde a la no resolución de las cuestiones de fondo por las que se enfrentaron en conflicto armado (1992-1994) los líderes locales abjasios, apoyados por Rusia, con el Gobierno georgiano, defendiendo, respectivamente, la independencia de la región y la integridad territorial del país, en el contexto de descomposición de la URSS. Tras el fin de esa guerra, que desplazó a unos 200.000 georgianos, el territorio de Abjasia ha funcionado como un Estado *de facto*. Pese a la existencia de un acuerdo de alto el fuego, un proceso negociador y presencia internacional en esos años (observadores de la ONU y fuerzas de paz rusas), la tensión se mantuvo, alimentada por las tensiones geoestratégicas y de balance de poderes en el Cáucaso entre Georgia y Rusia. Éstas escalaron hasta devenir en una guerra internacional en agosto de 2008, iniciada en Osetia del Sur, tras la cual las fuerzas abjasias consolidaron su control sobre Abjasia y vieron formalmente reconocida su independencia por parte de Rusia. Los incidentes frecuentes de seguridad, el estatus incierto del territorio, el papel de Rusia y el impacto acumulado de ambas guerras son fuente continua de tensión.

Continuó la tensión relativa al conflicto sobre el estatus de Abjasia, así como otras fuentes de tensión internas en la región en disputa. **La situación de seguridad se mantuvo mayoritariamente en calma, si bien continúo la pauta de militarización en la zona**. Entre los incidentes durante el año, un ciudadano georgiano murió en mayo en una localidad bajo control de Georgia (Khurcha), junto a un punto de cruce con Abjasia, por disparos de un guardia de frontera abjasio, lo que generó tensión entre las partes. El Gobierno georgiano señaló a Rusia como responsable último del incidente dado el control de Rusia sobre las fuerzas abjasias. El suceso tuvo lugar poco después del acuerdo alcanzado en marzo en el proceso negociador para la reanudación del mecanismo de prevención y respuesta de incidentes (IPRM), paralizado desde 2012 por desavenencias entre las partes.[76] Por otra parte, el conflicto continuó inmerso en un contexto de militarización. El Parlamento ruso ratificó en noviembre el acuerdo firmado en 2015 entre Rusia y Abjasia sobre "Partenariado y Alianza Estratégica", que incluye la creación de un espacio de seguridad y defensa común y la creación de un grupo combinado de fuerzas, bajo el liderazgo de Rusia a través de su base militar en Abjasia. Georgia criticó la medida como un episodio más del proceso de anexión por parte de Rusia, denunciando amenazas a la estabilidad de toda la región. Por otra parte, en el plano internacional, Georgia llevó a cabo ejercicios militares con EEUU y Reino Unido en mayo, que fueron calificados por Rusia de provocación. Además, Georgia y EEUU firmaron un memorándum en materia de defensa y seguridad. Asimismo, Georgia y la OTAN acordaron en la cumbre de la alianza atlántica en julio en Varvosia dar pasos para fortalecer las capacidades de defensa georgianas, incluyendo en defensa aérea, si bien siguió fuera de discusión la aprobación de un Plan de Acción para la Adhesión (paso previo a la incorporación de un país a la OTAN). Asimismo, Rusia criticó en noviembre como una amenaza a la estabilidad de la región la celebración de ejercicios militares de Georgia y la OTAN cerca de la capital georgiana, Tbilisi.

En clave interna, **la situación en Abjasia continuó afectada por tensiones entre el Gobierno de la autoproclamada república de Abjasia y sectores de oposición**, ya manifestadas en 2014 y 2015. El líder abjasio, Raul Khajimba, firmó un decreto en junio para la celebración de un referéndum a principios de julio en el que decidir si convocar elecciones anticipadas, lo que había sido una demanda de la oposición. No obstante, se produjeron movilizaciones opositoras en julio reclamando el retraso de la consulta, criticando la falta de tiempo para preparar la campaña del referéndum. Las protestas incluyeron el intento de toma de control de la sede del Ministerio de Interior y choques con fuerzas de seguridad, con más de una decena de heridos. La tensión derivó en la retirada del cargo del Ministerio de Interior, acusado por los opositores de tratar de interferir en el referéndum. El líder abjasio rechazó en julio las demandas de posponer el referéndum, si bien este fue finalmente declarado no válido, al no alcanzarse los mínimos requeridos, en un contexto de boicot de la oposición. Siguieron cambios en el Gobierno abjasio en meses siguientes, incluyendo la destitución del primer ministro Artur Mikvabia, sustituido por Beslan Bartsits. En diciembre, y ante nuevas protestas de la oposición en demanda de la dimisión de Khajimba, éste rechazó abandonar el cargo pero ofreció cargos gubernamentales a la oposición. Medios de comunicación señalaron el énfasis puesto por el presidente ruso, Vladimir Putin, en reuniones en Moscú con el liderazgo abjasio sobre la necesidad de estabilidad interna en Abjasia.

Georgia (Osetia del Sur)	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia

Síntesis:
La tensión en la región está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo por las que las fuerzas osetias y Georgia se enfrentaron en una guerra entre 1991 y 1992.

76. Véase el resumen sobre Georgia (Abjasia) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Desde entonces, las partes mantuvieron sus posiciones respectivas de defensa de independencia o unificación con Rusia y de la integridad territorial de Georgia, sin lograr resolver por la vía de la negociación el *impasse* de la región, independiente *de facto.* A su vez, el conflicto interno se ha visto alimentado por las tensiones entre Georgia y Rusia ¬–vinculadas a cuestiones de geoestrategia y balance de poderes en la región del sur del Cáucaso–, que en 2008 escalaron hasta derivar en una breve guerra iniciada en Osetia del Sur y extendida después a Abjasia y zonas bajo control georgiano. Tras esa última guerra y el desplazamiento forzado de la mayoría de población georgiana de Osetia del Sur, la posición osetia quedó reforzada. Rusia reconoció su independencia y mantuvo presencia militar en la región. La cuestión de los desplazados de los años noventa y de la segunda guerra, el estatus del territorio y las violaciones periódicas del alto el fuego siguen siendo fuente de tensión.

Se mantuvo la situación de tensión entre Georgia y Osetia del Sur, en torno al estatus de esta última, sin avances en el proceso de paz.[77] Entre los factores de conflictividad durante el año, sobresalió el **anuncio en abril del líder de la autoproclamada república de Osetia del Sur, Leonid Tibílov, de organizar un referéndum antes de agosto sobre cambios constitucionales que permitirían a la entidad solicitar la unión a Rusia**. Tibílov señaló que tras el referéndum esperarían el tiempo necesario para solicitar dicha adhesión con el fin de evitar generar riesgos políticos a Rusia. La cuestión de un referéndum ya había estado presente en el debate político en Osetia del Sur en etapas anteriores, como en 2015. El Gobierno georgiano criticó el anuncio y advirtió de que ningún referéndum en Osetia del Sur sería legal mientras el territorio continúe bajo control efectivo de Rusia y mientras continúe la situación de desplazamiento forzado. Finalmente, en mayo **Tibílov y el presidente del Parlamento, Anatoly Bibilov, anunciaron que se retrasaban los planes de un referéndum hasta después de las elecciones presidenciales osetias de abril de 2017**. Asimismo, a finales de diciembre, el líder osetio anunció los planes de otro referéndum sobre un cambio de nombre de la región (propuesta de cambio a "Osetia del Sur – Alania") coincidiendo con los comicios presidenciales de 2017. Por otra parte, respecto a la situación de seguridad, se mantuvo la situación de calma, pese a la tensión crónica vinculada a los obstáculos a la libertad de movimiento, la militarización e incidentes de seguridad. Los arrestos de civiles acusados de cruzar ilegalmente la frontera continuaron siendo uno de los problemas en materia de seguridad humana. Según Georgia, 109 personas fueron detenidas entre enero y septiembre por guardias fronterizos rusos en la frontera administrativa entre Osetia del Sur y Georgia, si bien la práctica mayoría fueron puestas en libertad. En 2015 la cifra anual de detenidos se elevó a 163. El conflicto en torno a Osetia del Sur continuó marcado por la situación de conflictividad internacional entre Georgia y Rusia, y entre instituciones occidentales y Rusia. Entre otros hechos, Georgia criticó duramente la celebración de las elecciones parlamentarias rusas en territorio de Osetia del Sur y de Abjasia.[78] A su vez, Rusia criticó los diversos ejercicios militares de Georgia con socios occidentales y países miembros de la OTAN.

El líder de Osetia del Sur anunció un referéndum sobre cambios constitucionales para solicitar la anexión a Rusia, si bien fue finalmente retrasado a 2017

Rusia (Chechenia)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados de oposición

Síntesis:
Tras la llamada primera guerra de Chechenia (1994-1996), que enfrentó a la Federación de Rusia con la república chechena principalmente por la independencia de esta última (autoproclamada en 1991 en el contexto de descomposición de la URSS) y que terminó en un tratado de paz que no resolvió el estatus de Chechenia, el conflicto se reabre en 1999, en la llamada segunda guerra chechena, con el detonante de unas incursiones en Daguestán por rebeldes chechenos y atentados en ciudades rusas. En un contexto preelectoral y con un discurso antiterrorista, el Ejército ruso entró de nuevo en Chechenia para combatir al régimen independentista moderado surgido tras la primera guerra y asolado a su vez por disputas internas y creciente criminalidad. Rusia dio por acabada la guerra en 2001, sin acuerdo ni victoria definitiva, y propició un estatuto de autonomía y una administración chechena pro-rusa, pero los enfrentamientos persisten, en paralelo a la islamización de las filas rebeldes chechenas y una regionalización de la lucha armada. Asimismo, la población civil hace frente a graves violaciones de derechos humanos, en gran parte cometidas por las fuerzas de seguridad locales.

Se incrementó la situación de tensión en la república chechena, con un aumento de víctimas mortales vinculado al conflicto entre fuerzas de seguridad y actores armados islamistas, mientras continuó **la represión y hostigamiento contra sectores independientes y población civil** acusada de dar apoyo a la insurgencia. Al menos una treintena de personas murieron en 2016 a causa del conflicto, doblando la cifra del año anterior, según los balances del portal independiente Caucasian Knot. La mayoría de víctimas fueron supuestos miembros de los grupos armados. Se sucedieron los hechos de violencia durante el año, incluyendo operaciones especiales de las fuerzas de seguridad y ataques insurgentes. Entre los incidentes, enfrentamientos en diciembre en las afueras de la capital, Grozny –y según diversas fuentes, también dentro– causaron la muerte de siete

77. Véase el resumen sobre Georgia (Osetia del Sur) en el capítulo 3 (Procesos de paz).
78. Véase el resumen sobre Georgia (Abjasia) en este capítulo.

insurgentes y cuatro policías. ISIS, organización a la que se ha adherido la mayoría de la insurgencia del norte del Cáucaso, reivindicó los ataques. Como en etapas anteriores, los hechos fueron seguidos de **prácticas de castigo colectivo, con la detención de un centenar de familiares de los insurgentes implicados**. Seis policías resultaron heridos en un ataque contra un puesto de control en mayo cerca de Grozny, mientras tiroteos en octubre entre insurgentes y policías resultaron en ocho combatientes muertos y cuatro policías heridos. Asimismo, el líder de ISIS en Chechenia, Aslan Avgazarovich Byutukayev (Amir Khamzat) fue designado en julio "terrorista" por el Departamento de Estado de EEUU.

Por otra parte, la situación en Chechenia continuó caracterizada por las violaciones de derechos humanos y el férreo control sobre la población. A las prácticas de castigo colectivo, se sumaron medidas de hostigamiento contra individuos independientes (entre ellos, ciudadanos que señalaron prácticas de corrupción, periodistas *freelance*, analistas políticos o profesores). Una veintena de hombres con el rostro cubierto atacaron a un grupo de periodistas –incluyendo dos periodistas extranjeros– y varios activistas, entre ellos del Comité para la Prevención de la Tortura. Su vehículo fue atacado e incendiado en la frontera entre Chechenia e Ingushetia tras realizar visitas a personas víctimas de torturas y otros abusos. El líder checheno, Ramzan Kadyrov, obtuvo un nuevo mandato como jefe de la república tras ganar las elecciones de septiembre, celebradas en un contexto de falta de libertades, según denuncian desde hace años organizaciones y activistas de derechos humanos locales e internacionales.

Sudeste de Europa

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional
Actores:	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX

Síntesis:
La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia.

Continuó la situación de crisis política y social dentro de Kosovo, con numerosas protestas, incluyendo incidentes de violencia, en contra del acuerdo de descentralización entre Kosovo y Serbia, así como tensiones entre Kosovo y Serbia, ante la falta de implementación del pacto, entre otras cuestiones. El acuerdo de agosto de 2015 entre los Gobiernos serbio y kosovar para la creación de una asociación de municipios de mayoría serbia de Kosovo fue confrontado por la oposición albanokosovar a lo largo de 2016, como ya había sucedido en los últimos meses del año anterior. Los partidos opositores Vetevendosje, Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) y Nisma advirtieron sobre sus intenciones de paralizar ese acuerdo, así como el de demarcación fronteriza con Montenegro. Las críticas se plasmaron en forma de protestas en las calles en diversos momentos del año con llamamientos a la dimisión del Gobierno y algunos incidentes y choques entre manifestantes y la Policía. Así, en torno a 60.000 personas participaron en protestas el 9 de enero en la capital, a lo que se unieron otras movilizaciones entre enero y mayo y fechas posteriores. Además, la oposición política volvió a hacer uso de prácticas de boicot parlamentario (marzo) y de lanzamiento de gases lacrimógenos (febrero, marzo, agosto, entre otros meses) y llamó a elecciones anticipadas. La toma de posesión en abril del nuevo presidente, el ex primer ministro y ex guerrillero Hashim Thaci, elegido en los comicios presidenciales de febrero, transcurrió también entre protestas y boicot de la oposición.

A la crisis por el acuerdo de descentralización se añadieron otros elementos. Filtraciones en agosto por un medio de comunicación sobre supuesto tráfico de influencias por parte del oficialista PDK en la designación de altos cargos del Estado, incluyendo fiscales y jueces, generaron nuevas protestas en agosto y llevaron a la dimisión del líder del partido, y a diversos incidentes violentos de protesta, con lanzamiento de granadas contra el Parlamento y contra la televisión pública. Además, la muerte en prisión bajo custodia en noviembre de un joven activista del partido opositor Vetevendosje –uno de los seis miembros detenidos en las protestas de agosto– generó numerosas críticas y nuevas protestas. Frente a la versión oficial de suicidio por asfixia, sectores opositores reclamaron una investigación internacional independiente. Asimismo, la tensión en Kosovo también se incrementó entre el PDK y su socio serbokosovar en el gobierno de coalición, Lista Serbia, así como entre Kosovo y Serbia. Lista Serbia anunció en diciembre la paralización de su participación en el Gobierno. La crisis había estado motivada por la destitución ese mes de Ljuboir Maric,

ministro para la autonomía local de Kosovo y miembro de Lista Serbia, por acompañar al responsable de la Oficina de Serbia para Kosovo, Marko Djuric, en un viaje a Kosovo sin autorización de Pristina. El primer ministro de Serbia emitió a finales de mes un ultimátum para su reintegración. La sucesora de Maric, Mirjana Jevtic, dimitió. Asimismo, el Gobierno de Serbia advirtió en diciembre que si el Gobierno kosovar no avanzaba en la implementación de la descentralización de los municipios de mayoría serbia del norte de Kosovo, la prevista asociación de municipios se constituiría por sí misma en febrero de 2017. La tensión entre el Gobierno y su socio Lista Serbia y entre Kosovo y Serbia estuvo ligada también a la decisión del Parlamento kosovar en octubre de nacionalizar el complejo minero de Trepca, ubicado en Mitrovica, en la frontera con Serbia, lo que generó protestas y al boicot serbokosovar del Parlamento. Ante el contexto de parálisis institucional y la elevada tensión política en Kosovo, analistas, políticos y medios de comunicación especulaban a finales de año sobre la posibilidad de elecciones anticipadas.

Turquía	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Turquía, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen

Síntesis:
La actual República de Turquía fue fundada por Mustafa Kemal "Atatürk" en 1923, tras la derrota del Imperio Otomano en la I Guerra Mundial –y la consiguiente partición de sus territorios (Tratado de Lausanne de 1923)–, y la guerra de independencia (1919-1923). Se fundó bajo principios como el laicismo, el nacionalismo y el estatismo, promoviéndose un estado nación secular con un papel predominante del Ejército, como actor garante. A lo largo de su historia, Turquía –país puente entre Occidente y Oriente, de mayoría musulmana y segundo Ejército de la OTAN– se ha visto afectada por periodos de inestabilidad en torno a diversos ejes y actores. Por una parte, la falta de soluciones a la cuestión kurda ha resultado en rebeliones kurdas de diversa naturaleza y persecución estatal de sectores prokurdos, sobresaliendo la guerra entre Turquía y el PKK iniciada en 1984. Por otra parte, el país ha sufrido diversos golpes de Estado militares (1960, 1971, 1980, 1997). Asimismo, la etapa de poder bajo el islamista AKP (en el poder desde 2002) y el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan (primer ministro entre 2003 y 2014 y presidente desde entonces) ha ido acompañada de medidas iniciales de democratización y de denuncias, en años posteriores, de autoritarismo, incrementándose los niveles de tensión interna social y política. Asimismo, la confrontación creciente entre el régimen del AKP –en el poder desde 2003– y su antigua aliada organización del clérigo musulmán Fetullah Gülen se puso de manifiesto en un intento de golpe militar, en julio de 2016, que resultó fallido y que fue atribuido a sectores de las FFAA vinculadas a Gülen. La intentona desencadenó la declaración de Estado de emergencia y purgas masivas. La situación de derechos humanos, ámbito de grave preocupación en los años ochenta y noventa, se deterioró de nuevo en el contexto de reinicio de la guerra con el PKK en 2015 y de las medidas de emergencia tras el intento de golpe. Por otra parte, el grave deterioro regional vinculado a las guerras en Siria e Iraq también generó nuevos ejes de conflictividad para Turquía: incremento de atentados atribuidos a ISIS contra objetivos civiles en suelo turco y un complejo escenario de relaciones exteriores.

Turquía hizo frente a una grave crisis, con múltiples focos de conflictividad: un incremento de la violencia atribuida a ISIS; un intento de golpe de Estado por parte de sectores del Ejército; una grave crisis de derechos humanos; y fuerte tensión política en torno a la reforma constitucional, entre otros elementos. Todo ello sumado a la escalada del conflicto armado entre Turquía y la insurgencia kurda del PKK.[80] **En relación a ISIS, se atribuyeron al grupo diversos atentados de gran escala durante el año, con un balance total de más de un centenar de fallecidos y varios centenares de heridos**, lo que supone un incremento respecto a los últimos años. Los ataques incluyeron un atentado en enero en Estambul en una zona turística, con 11 víctimas mortales; otro atentado suicida en Estambul en marzo en una calle comercial, con unos cuarenta heridos y media docena de muertes; un ataque suicida múltiple en el aeropuerto de Estambul en junio, con 44 fallecidos y 250 heridos; un atentado contra una boda kurda en la provincia de Gaziantep en julio, con 51 muertos y 70 heridos; y un ataque con tiroteo masivo en la madrugada del 1 de enero de 2017 en una discoteca de Estambul, con 39 muertos y 65 heridos. A ello hay que añadir los ataques aéreos lanzados durante el año desde territorio bajo control de ISIS en Siria contra objetivos diversos en la provincia turca de Kilis, que causaron varias víctimas mortales y decenas de heridos. Turquía lanzó ataques aéreos de represalia, con centenares de militantes de ISIS fallecidos, según balances gubernamentales; detuvo a cientos de sospechosos de pertenencia a ISIS en suelo turco; y desde agosto envió tropas a Siria, como parte de su estrategia contra ISIS y, sobre todo, contra las milicias kurdas de Siria, e intentó implicarse en la ofensiva contra ISIS en Mosul (Iraq) pese al rechazo del Gobierno iraquí.[81]

Otro gran eje de conflictividad en Turquía durante el año lo constituyó el intento de golpe de Estado el 15 de julio, por sectores del Ejército. Según el Gobierno, la intentona golpista involucró a 8.651 militares y el uso de 35 aviones –incluyendo de combate–, 246 vehículos blindados –entre ellos, 74 tanques–. Edificios como el Parlamento y oficinas de Presidencia fueron atacadas. El propio presidente, Recep Tayyip Erdogan, escapó a un intento de asesinato, como parte del golpe, en Mármara. El ataque fracasó por la afirmación del poder por el Gobierno, el despliegue de fuerzas de seguridad y la amplia movilización popular. El ataque **causó 265 víctimas**

80. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
81. Véase los resúmenes sobre Siria, Iraq y sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

mortales –161 civiles y 104 participantes en el golpe y en torno a 2.200 heridos. El golpe fallido fue atribuido por el Gobierno al movimiento religioso Hizmet –liderado por el clérigo residente en EEUU Fetullah Gülen–, antiguo aliado del oficialista AKP, calificado posteriormente por el Gobierno de organización terrorista (con las siglas FETÖ), y considerado como un actor de poder con amplia presencia e influencia en Fuerzas Armadas y policiales y sector judicial y burocrático. Gülen negó vinculación con el golpe. El golpe fue condenado por toda la clase política, y los partidos con representación en el Parlamento (AKP, CHP, HDP, MHP) aprobaron una declaración conjunta condenatoria. El Gobierno decretó el Estado de emergencia (prolongado en octubre tres meses más) y derogó numerosas protecciones de la Convención Europea de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Bajo esa legislación de excepción se emitieron decretos en diversos momentos del año que regularon purgas masivas en el Ejército, Policía, sistema judicial y diversos sectores profesionales (educación, medios de comunicación, sector empresarial, entre otros). En torno a 125.000 personas fueron despedidas de sus puestos por supuestos vínculos con el movimiento de Gülen, incluyendo un tercio del personal de las Fuerzas Armadas y una quinta parte del sistema judicial (3.673 jueces despedidos y 2.700 suspendidos de actividad) y unos 28.000 profesores; se emprendió acción legal contra más de 92.000 personas, de las cuales más de 39.000 fueron arrestadas; se detuvo a unos 140 periodistas, otros 2.500 fueron despedidos y se cerraron 177 medios de comunicación (11 reabiertos después); se cerraron unas 1.800 asociaciones, unos 2.100 colegios, universidades y residencias, así como en torno a 690 compañías.[82]

Turquía hizo frente a múltiples focos de conflictividad, incluyendo atentados atribuidos a ISIS y un golpe de Estado fallido al que siguieron purgas masivas

La dimensión masiva de las purgas generó gran preocupación y llamadas de alerta entre organizaciones de derechos de derechos humanos y partidos políticos opositores, entre otros sectores, que señalaron impactos graves sobre libertades de expresión, asociación y asamblea. El partido opositor kemalista CHP compiló 37.000 quejas por trato discriminatorio. El CHP apeló contra artículos de varios de los decretos reguladores de las purgas, mientras se presentaron otros 45.000 recursos individuales. El CHP, Amnistía Internacional y la ONG local Asociación de Derechos Humanos de Turquía alertaron sobre malos tratos y tortura bajo detención. Organismos internacionales también expresaron preocupación. El Estado de emergencia post-golpe y la legislación antiterrorista (considerada demasiado vaga por organizaciones como Amnistía Internacional) ampararon también la persecución de gran escala contra sectores de población civil acusados de vínculos con el PKK, incluyendo cargos electos y representantes políticos, académicos, periodistas.[83] **Se alertó sobre una situación general de crisis de derechos humanos en el país**, reduciéndose significativamente el espacio para las voces independientes y críticas. Por otra parte, y en paralelo al clima de excepcionalidad derivado del intento fallido del golpe de Estado, se deterioró el clima político. Pese a la unidad política mostrada tras el golpe, se dio paso a un nuevo clima en que el partido pro-kurdo HDP fue excluido de la iniciativa política, dejándole fuera del diálogo político entre los líderes de los partidos políticos promovido por Erdogan. La política frentista se agudizó en meses posteriores, con el impulso del oficialista AKP a la reforma de la Constitución, con el objetivo de un cambio a régimen presidencialista, frente al rechazo del CHP y HDP y diversos sectores de población. Análisis apuntaron a la configuración de un frente nacional entre el AKP y el MHP. Una comisión parlamentaria aprobó en diciembre las reformas constitucionales, y se esperaba su aprobación por el Parlamento a inicios de 2017, lo que podría abrir las puertas a un referéndum sobre las reformas en la primera mitad de 2017, en medio de una agudización de la tensión política. Asimismo, la fragilidad de la situación general quedó en evidencia también con el **asesinato en Ankara en diciembre del embajador ruso, a manos de un policía de servicio**, sobre el que pasó a investigarse posibles vínculos con el movimiento de Gülen. En un contexto de progresiva recuperación de las relaciones entre Turquía y Rusia, ambos Gobiernos denunciaron que el incidente tenía intencionalidad de dañar las iniciativas diplomáticas que Moscú, Ankara y Teherán impulsaban en Siria y acordaron una investigación conjunta sobre los hechos. En cambio, en contraste con el acercamiento con Moscú, 2016 fue un año de grave incremento de la tensión entre Turquía y otros actores internacionales, como EEUU.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Arabia Saudita	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)

Síntesis:
Gobernada desde el siglo XVIII por la familia al-Saud y establecida como Estado en 1932, Arabia Saudita se caracteriza por su conservadurismo religioso y su riqueza,

82. Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, *Post-monitoring dialogue with Turkey - the failed coup in Turkey of 15 July 2016: some facts and figures*, AS/Mon/Inf (2016)14 rev 3/Information note.
83. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

sustentada en las reservas de petróleo. Potencia regional, a nivel interno la monarquía sunní concentra el poder político y lidera las instituciones de gobierno, dejando escaso margen para la disidencia. Los partidos políticos no están permitidos, la libertad de expresión constreñida y muchos derechos básicos limitados. La minoría chií, concentrada en la zona este del país, ha denunciado marginación y exclusión de las estructuras del Estado. Las autoridades han sido acusadas de emprender acciones represivas en nombre de la seguridad del país y en el marco de campañas antiterroristas, que tienen entre sus objetivos militantes de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). En el contexto de la denominada Primavera Árabe de 2011, las protestas pro-reformas y democracia suscitaron una respuesta represiva del Gobierno –en especial en las zonas de mayoría chií del país–, y las autoridades han denunciado la existencia de intentos de desestabilización desde el exterior, señalando a Irán. El país es escenario de acciones armadas esporádicas de AQPA y, más recientemente, de células vinculadas presuntamente a ISIS.

La situación de tensión en Arabia Saudita en 2016 continuó estando determinada por dinámicas internas y otras vinculadas a su implicación en campañas militares en el exterior, además de su pulso regional con Irán. **La tensa relación con Teherán quedó especialmente expuesta a principios de año tras la decisión de Riad de ejecutar a 47 condenados por delitos de terrorismo, entre ellos el destacado clérigo chií Nimr al-Nimr**. La medida provocó manifestaciones en varios países, entre ellos Bahrein, Líbano e Iraq, y derivó en masivas protestas y ataques contra misiones diplomáticas saudíes en Irán. La escalada llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Teherán y Riad y motivó que varios Estados aliados de Arabia Saudita –entre ellos Bahrein, Sudán y EAU– cortaran o degradaran sus vínculos diplomáticos con la república islámica. Las acciones de represalia de Riad también afectaron la ayuda a Líbano –las autoridades saudíes consideraron que no había reaccionado de manera contundente y suspendieron su apoyo económico al país– y motivaron acciones contra Hezbollah, aliado de Irán, que fue declarado grupo terrorista por el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.[84] En el marco de esta rivalidad y tensión entre Irán y Arabia Saudita, durante 2016 Teherán también insistió en sus críticas a Riad por su gestión del peregrinaje a la Meca, después de los incidentes en los que murieron cientos de personas en 2015, y algunos funcionarios iraníes plantearon que Riad estaba apoyando a grupos armados que operan en Irán.[85] Cabe destacar que la ejecución del grupo de condenados por terrorismo –43 sunníes y cuatro chiíes– por parte de Arabia Saudita también generó otras reacciones, entre ellas amenazas de venganza de al-Qaeda por la muerte de algunos de sus afiliados, advertencias de ISIS de que atacaría prisiones donde estuvieran detenidos yihadistas, y también manifestaciones en zonas del país de mayoría chií, como en la zona de Qatif. **A lo largo del año también continuaron produciéndose periódicos hechos de violencia que dejaron una veintena de víctimas mortales**. Entre estos incidentes cabe mencionar el ataque a una mezquita chií en Mahasen en enero que provocó dos fallecidos; dos atentados reivindicados por una filial de ISIS autodenominada Provincia Najd que dejaron dos personas fallecidas en abril; enfrentamientos de las fuerzas policiales con presuntos militantes que resultaron en otros dos muertos en la provincia de Bisha el mismo mes; acciones de las fuerzas de seguridad contra presuntos milicianos de ISIS que causaron cuatro muertos en mayo, además de otros dos milicianos del grupo armado que se hicieron estallar. Julio fue uno de los meses más cruentos después de que ataques suicidas golpearan tres ciudades del país: Jeddah (contra el consulado de EEUU), Qatif y Medina. En esta última ciudad, lugar sagrado para el Islam, el atacante suicida mató a cuatro funcionarios de seguridad. Otros cuatro miembros de las fuerzas de seguridad murieron en dos episodios, en septiembre y en octubre, tras recibir disparos en la ciudad de Dammam. A lo largo del año las autoridades saudíes también informaron del desmantelamiento de presuntas células de ISIS, de la detención de sospechosos de vínculos con este grupo armado y del enjuiciamiento a más de una treintena de personas por presunto espionaje para Irán. De este último grupo, la mitad fueron condenados a muerte a finales de año.

Paralelamente, Arabia Saudita siguió implicada en la coalición anti-ISIS liderada por EEUU y se mantuvo a la cabeza de la coalición internacional de apoyo al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi en el marco del conflicto armado en Yemen.[86] En este contexto, el reino saudí fue acusado de múltiples abusos, entre ellos sistemáticas ofensivas contra blancos civiles y uso de armamento prohibido, como bombas de dispersión. Tras el bloqueo de los intentos por reconducir el conflicto a través de negociaciones a mediados de año, las hostilidades se intensificaron en Yemen, se multiplicaron los incidentes en la zona fronteriza e incluso algunas ofensivas que penetraron en territorio saudí. **Según estimaciones publicadas por medios de prensa, desde la implicación de Riad en el conflicto armado yemení en marzo de 2015 hasta finales de 2016 unos 114 saudíes habrían perdido la vida como consecuencia de ataques de actores armados yemeníes o de minas terrestres**. Cabe destacar que Arabia Saudita también continuó siendo objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales por sus políticas y abusos en materia de derechos humanos. Grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron que Riad fuera suspendido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su responsabilidad en la muerte de civiles en Yemen. En un polémico episodio,

Diversos hechos de violencia dejaron al menos una veintena de víctimas mortales en Arabia Saudita a lo largo de 2016

84. Véase el resumen sobre Líbano en este capítulo.
85. Véase el resumen sobre Irán (noroeste) e Irán (Sistán Baluchistán) en este capítulo.
86. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

el informe anual del representante especial de la ONU para los Niños y Niñas en Conflictos señaló a Arabia Saudita por violar los derechos de los menores de edad en su calidad de principal responsable de las muertes de niñas y niños en Yemen. No obstante, tras presiones de Riad, se retiró al país de la lista de países incluidos en el informe, en una acción denunciada por grupos de derechos humanos. Adicionalmente, algunas campañas ciudadanas pusieron en la mira las políticas saudíes discriminatorias hacia las mujeres, entre ellas la que llama al Gobierno a poner fin al sistema de guardianes masculinos, y otras ONG alertaron sobre el extenso uso de la pena capital en el país, donde se habrían ejecutado a un total de 150 personas en 2016, cifra similar a la de 2015 (158).

Bahrein	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
Las revueltas populares que se propagaron por países del Magreb y Oriente Medio durante 2011 repercutieron también en Bahrein. Gobernado desde el siglo XVIII por la monarquía de los al-Khalifah y protectorado británico entre 1861 y 1971, en 2002 el país se constituyó formalmente en una monarquía constitucional. La familia en el poder es sunní, a diferencia de la mayoría de la población del país que es de confesión chií y que denuncia políticas sistemáticas de discriminación. Las tensiones internas, que se habían incrementado en los últimos años, se convirtieron en una contestación abierta a partir de febrero de 2011. Las demandas de reformas políticas y sociales fueron respondidas por el Gobierno con incentivos económicos y ofertas de diálogo político, pero también con represión y persecución a los detractores del Gobierno. La amenaza a la estabilidad del régimen motivó una intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que envió tropas al país. La situación en Bahrein ha alimentado la confrontación entre Irán y los países del Golfo –en especial con Arabia Saudita–, y preocupa a EEUU, que tiene a su V Flota estacionada en el archipiélago.

Durante 2016 la situación en Bahrein continuó caracterizándose por periódicas manifestaciones contra el régimen que en ocasiones derivaron en incidentes violentos, medidas gubernamentales contra activistas y sectores disidentes que afectaron particularmente a la comunidad chií del país, y tensiones diplomáticas con Irán. Como en años anteriores, y a pesar de un amplio operativo de las fuerzas de seguridad, se produjeron nuevas manifestaciones con motivo de un nuevo aniversario –el quinto– de las movilizaciones contra el Gobierno en el marco de las revueltas árabes. Las protestas, protagonizadas principalmente por la comunidad chií de Sitra, al sur de Manama, fueron dispersadas por la Policía. A lo largo de 2016 tuvieron lugar diversos episodios de violencia, entre ellos un ataque con cócteles molotov contra una estación de Policía de la capital que dejó un oficial fallecido a principios de año; una explosión que provocó la muerte a una mujer y causó heridas a tres menores en la localidad de East Eker, al sur de Manama, en junio; y la muerte en prisión de un sospechoso detenido por este último ataque, en julio. Durante el año también se anunciaron diversas sentencias de cárcel contra personas acusadas de complot, espionaje, pertenencia a grupos terroristas, intentos de ataques contra las fuerzas de seguridad o por recibir armas y explosivos con el fin de perpetrar ataques en el país. Adicionalmente, continuaron las acciones contra activistas y sectores de la oposición. **Uno de los hechos más significativos del año fue la decisión judicial de suspender las actividades y cerrar las oficinas del principal partido opositor chií, al-Wefaq, organización que acabó siendo disuelta por orden de una corte en julio tras ser acusada de promover la violencia y el terrorismo**. Previamente, la Corte de Apelaciones de Bahrein había decidido doblar la condena de prisión impuesta al principal dirigente opositor y líder de al-Wefaq, el sheikh Ali Salman. Detenido desde finales de 2014, Salman pasó así de una sentencia de cuatro años a una de nueve años de cárcel por "promover un cambio del sistema político por la fuerza". Al-Wefaq consideró que la medida era una provocación y minaba las posibilidades de resolver la crisis política en el país. Además, y en acciones que motivaron nuevas protestas y algunos enfrentamientos con la Policía, las autoridades decidieron retirar la ciudadanía del ayatollah Isa Qassim, considerado como el líder espiritual de la comunidad chií de Bahrein. Semanas más tarde se anunció que el clérigo sería juzgado por captación ilegal de fondos y lavado de dinero. En paralelo, se produjeron nuevas detenciones de destacados activistas, entre ellos Nabeel Rajab –presidente del Bahrein Centre for Human Rights y crítico de la guerra en Yemen en la que participa Bahrein–, Mohammed al-Tajer –abogado que ha defendido a diversas figuras de la oposición y activistas involucrados en las protestas pro-democracia desde 2011–, Ibrahim Sharif –figura de la oposición secular acusado de pretender el derrocamiento del gobierno– y Zainab al-Khawaja –condenada por insultar y romper una foto del rey. También se denunciaron medidas de acoso y detenciones de periodistas.

En este contexto, **diversas voces desde el exterior llamaron la atención sobre las medidas contra los sectores disidentes y la situación de derechos humanos en Bahrein**. Un informe del Departamento de Estado de EEUU filtrado a la prensa en junio señalaba que los esfuerzos para impulsar una reconciliación nacional en el país estaban en suspenso y que el país no había implementado las recomendaciones sobre la protección a la libertad de expresión. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también alertó sobre el riesgo de escalada de tensión en el país tras la disolución de al-Wefaq y un grupo de expertos independientes de la ONU demandó a Manama que detuviera la campaña de arrestos arbitrarios y liberara a los detenidos por ejercer su libertad de expresión y el derecho a asamblea. Amnistía Internacional también denunció que las

torturas y los malos tratos persistían en Bahrein a pesar de la introducción de algunas reformas. Finalmente, cabe destacar que la relación con Irán fue tensa durante todo el año, pero las diferencias con la república islámica se hicieron especialmente evidentes a principios de 2016. Bahrein decidió romper relaciones diplomáticas con Teherán después de que su principal aliado, Arabia Saudita, hiciera lo propio. La crisis diplomática estuvo motivada por la ejecución por parte de Riad de un destacado clérigo chií, lo que derivó en ataques a misiones diplomáticas saudíes en Irán.[87] Este episodio también motivó manifestaciones en Bahrein, principalmente en la localidad de Sitra, donde las protestas derivaron en choques con las fuerzas de seguridad. A lo largo de 2016, las autoridades de Bahrein también anunciaron el desmantelamiento de presuntas células con vinculaciones con Irán y Hezbollah que pretendían llevar a cabo ataques en el territorio y conllevaron la deportación de ciudadanos libaneses por su supuesta relación con la milicia chií. Durante el año Irán y Hezbollah también lanzaron advertencias a Manama sobre las consecuencias de algunas de sus medidas contra sectores chiíes, como el retiro de la ciudadanía del ayatollah Qassim, y alertaron que este tipo de acciones podrían alentar brotes de violencia.

Irán (noroeste)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)

Síntesis:
A pesar de la naturaleza heterogénea y multiétnica de Irán, las minorías que habitan el país, entre ellas los kurdos, han sido sometidas a décadas de políticas centralistas y de homogeneización y han denunciado discriminación por parte de las autoridades de la República Islámica. En este contexto, desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a Teherán en un intento por obtener una mayor autonomía para la población kurda, que se concentra en las provincias del noroeste del país. Grupos como el Partido Democrático Kurdo (PDKI) y Komala encabezaron esta lucha durante décadas. Desde 2004 es el Partido por la Vida Libre en Kurdistán (PJAK), vinculado al PKK de Turquía, el que protagoniza el conflicto con Teherán, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, se enfrenta periódicamente con las fuerzas iraníes, en particular miembros de la Guardia Revolucionaria.

La tensión entre el Gobierno iraní y grupos armados kurdos que operan en el noroeste del país continuó motivando **hechos de violencia que en 2016 habrían provocado la muerte de una treintena de personas, un balance superior al del año anterior cuando se contabilizó una veintena de víctimas mortales**. Como en períodos previos, el balance de fallecidos en las hostilidades es difícil de precisar dadas las informaciones contradictorias proporcionadas por las diversas fuentes. Los incidentes más destacados se produjeron a partir de mediados de año e involucraron a las fuerzas de seguridad y a miembros del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) y del Partido por la Vida Libre en el Kurdistán (PJAK). Respecto a los choques con el PDKI, en junio miembros de la Guardia Revolucionaria se enfrentaron a combatientes del grupo en la zona fronteriza con Iraq. Según fuentes oficiales iraníes, los combates provocaron la muerte a 11 milicianos kurdos y a tres efectivos militares iraníes. El PDKI, en cambio, cifró en más de una veintena los fallecidos entre las tropas iraníes y reconoció haber perdido a varios combatientes. En julio, nuevos choques en la localidad de Sawlawa, en el Kurdistán iraní, habrían provocado la muerte de dos miembros del PDKI. **Los enfrentamientos entre tropas iraníes y el PDKI fueron los primeros en casi dos décadas** y llevaron algunas fuentes iraníes a sugerir que la reactivación de las actividades del grupo estaba siendo alentada por Arabia Saudita, en el marco de la pugna regional entre Riad y Teherán.[88] El Gobierno de Riad descartó haberse involucrado en asuntos internos iraníes, aunque un ex alto cargo iraní –el príncipe Turki al Faisal, ex jefe de la inteligencia saudí– se dejó ver en una reunión en Francia de otro grupo opositor, la Mujahedin Khalq Organization (MKO), que busca derrocar al gobierno de la república islámica. El PDKI, en tanto, negó estar recibiendo apoyo saudí y aseguró que se había visto forzado a tomar las armas porque no veía alternativa para asegurar los derechos políticos de la comunidad kurda. Según algunos análisis, el PDKI había despachado varias unidades de combatientes y cadetes a la zona del Kurdistán iraní desde marzo de 2015. Dado que el PDKI tiene a su base política en Erbil (Iraq), Irán advirtió al Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) iraquí que la seguridad fronteriza constituía una línea roja para Teherán y que atacaría las bases del KDPI si el KRG no contenía las ofensivas del grupo.

Las fuerzas de seguridad de Irán se enfrentaron en varias ocasiones a miembros del PDKI, en los primeros choques con combatientes de este grupo en casi dos décadas en el Kurdistán iraní

En cuanto al PJAK –que teóricamente mantiene un acuerdo de cese el fuego con Teherán desde 2011, aunque éste se ha visto afectado por diversas violaciones en los últimos años– miembros de este grupo fueron acusados por Teherán de la muerte de dos efectivos de la Guardia Revolucionaria. En otra acción atribuida al PJAK, miembros del grupo habrían disparado contra el vehículo que transportaba a un parlamentario en la provincia de Kermansha, fronteriza

87. Véase el resumen sobre Arabia Saudita en este capítulo.
88. Véase el resumen sobre Arabia Saudita en este capítulo.

con Iraq, causando la muerte a dos personas. Cabe destacar que también se informó de incidentes en Kermansha que habrían derivado en el fallecimiento de cuatro presuntos miembros de ISIS. Las autoridades iraníes han acusado a miembros de las minorías sunníes del país, entre ellas la kurda, de simpatizar con ISIS y en septiembre informaron que habían evitado que 1.500 personas se adhirieran a las filas del grupo armado. Grupos de derechos humanos denunciaron que los presuntos vínculos con ISIS se utilizan como excusa para perseguir a la comunidad sunní de Irán. Cabe señalar, además, que organizaciones vinculadas al PJAK/PKK combaten contra ISIS en Siria.

Adicionalmente, cabe destacar que **a principios de agosto Teherán ejecutó a 20 prisioneros kurdos en la prisión de Rahai Shahr bajo acusaciones de terrorismo**. Según fuentes oficiales iraníes, los ejecutados formaban parte del grupo Tawhid y Yihad y estaban acusados de perpetrar 24 ataques armados con un saldo de 21 víctimas mortales entre 2009 y 2011. No obstante, fuentes próximas a los acusados y grupos de derechos humanos negaron estos cargos y denunciaron la obtención de confesiones bajo torturas. La ejecución fue interpretada por algunos analistas como un mensaje intimidatorio de Teherán hacia la comunidad kurda y los grupos armados que operan actualmente en el noroeste del país. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU consideró la ejecución de este grupo de prisioneros kurdos como una grave injusticia y denunció la falta de un debido proceso judicial. El PDKI también condenó las ejecuciones. En contraste con estos acontecimientos, cabe mencionar que durante una visita a la región kurda de Irán, en concreto a Mahabad –antigua capital de la breve república kurda establecida en 1946 y que duró 11 meses–, el presidente iraní Hassan Rouhani prometió más derechos culturales y se comprometió a abrir centros de idioma kurdo en la zona, tras asegurar que la lengua de grupos étnicos debía ser respetada y reconocida.

Irán (Sistán Baluchistán)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Guardia Revolucionaria (Pasdaran), grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán

Síntesis:
Sistán Baluchistán es una provincia iraní limítrofe con Afganistán y Pakistán –la población baluchi vive a ambos lados de la frontera– y de mayoría sunní, en contraste con el resto del país, donde predomina la rama chií del Islam. La zona se caracteriza por altos índices de pobreza y es escenario de rutas de contrabando y de tráfico de drogas.

Desde 2005 el grupo Jundollah (Soldados de Dios) ha llevado a cabo una campaña insurgente en esta región. La organización, que también se autodenomina Movimiento de Resistencia del Pueblo, fue creada en 2002 y denuncia una persecución sectaria por parte de Teherán. Jundollah asegura que su objetivo es la defensa de los derechos, la cultura y la religión de los baluchis y niega tener una agenda separatista y vínculos con el exterior, como le acusa el Gobierno iraní, que le atribuye conexiones con EEUU, Reino Unido, Pakistán, Arabia Saudita y con la red al-Qaeda. Ante la posibilidad de desestabilización de esta zona, Teherán ha reforzado sus dispositivos de control y ha condenado a muerte a decenas de militantes de Jundollah. Las acciones del grupo insurgente se han reducido desde 2010, tras la captura y ejecución de su líder, pero nuevos grupos armados con una agenda similar a la de Jundollah han continuado operando en la zona, protagonizando esporádicos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La provincia iraní de Sistán Baluchistán continuó siendo **escenario de hechos de violencia durante 2016 que se cobraron la vida de al menos una quincena de personas**, según recuentos a partir de informaciones proporcionadas por fuentes oficiales iraníes. La mayor parte de estos episodios estuvieron protagonizados por fuerzas de la república islámica y el grupo insurgente Jaish al-Adl, al que Teherán atribuye conexiones con Arabia Saudita. Así, en junio, un policía y cinco miembros del grupo armado Jaish al-Adl murieron en choques en la zona de Khash. En julio atacantes armados dieron muerte a cuatro guardias fronterizos en la zona de Jakigour, en el distrito de Sarbaz. El incidente fue seguido de enfrentamientos entre combatientes armados y las fuerzas de seguridad que habrían causado varias muertes. En septiembre los enfrentamientos de Guardianes de la Revolución con Jaish al-Adl en el área de Kouhak, fronteriza con Pakistán, provocaron la muerte de cinco integrantes del grupo armado. Durante el año las autoridades iraníes también informaron de la detención en la región de sospechosos de pertenencia a grupos armados y de la confiscación de materiales explosivos. **En julio se anunció el arresto de 40 personas supuestamente involucradas en una célula que pretendía llevar a cabo ataques en el este del país y que había construido un túnel en la zona fronteriza con Pakistán**. En 2016 Teherán también informó de la desarticulación en Sistán Baluchistán de un presunto grupo vinculado a la opositora Mojaheden-e Khalq Organization (MKO). Finalmente, cabe mencionar que según informaciones de prensa en la provincia de Sistán Baluchistán también se produjo la ejecución de todos los hombres de un poblado por su presunta implicación en tráfico de drogas. Las fuentes no precisaron el nombre de la localidad ni el total de personas ejecutadas, pero destacaron que la zona es propensa a las actividades de contrabando de opio y otros narcóticos en la ruta que conecta con Pakistán y Afganistán. La región se encuentra entre las provincias con mayores índices de aplicación de la pena de muerte del país.

Irán – EEUU, Israel[89]	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel

Síntesis:
Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Khomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del "eje del mal" y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015.

Durante **2016 se mantuvo la baja intensidad de esta tensión tras la firma del acuerdo sobre el programa nuclear iraní en julio de 2015, aunque se produjeron algunos incidentes**. A principios de año la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) certificó que la república islámica estaba cumpliendo con sus compromisos según lo pactado, lo que condujo a que a mediados de enero se anunciara formalmente el levantamiento de las sanciones contra Irán. En este contexto, y tras meses de negociaciones secretas, Washington y Teherán también alcanzaron un acuerdo para el intercambio de prisioneros. A lo largo de 2016 también se avanzó en las gestiones para permitir el acceso de Teherán a los fondos que habían estado congelados y para promover las inversiones en el país. El presidente Hassan Rouhani visitó Europa, en el primer viaje de un mandatario iraní a la región en 16 años. La república islámica también recibió la visita de representantes europeos, entre ellos la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y se anunció el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre el país asiático y la UE. Reuniones de la Comisión Conjunta en Viena y del G5+1 (los cinco países del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) en Nueva York permitieron abordar algunas dificultades en la puesta en práctica del pacto nuclear y, en diciembre de 2016, después de una visita a Teherán, el director de la AIEA volvió a confirmar que Irán se mantenía respetuosa al acuerdo. Pese a los avances en la implementación del pacto, se produjeron algunos hechos de tensión relacionados con actividades de Irán en el desarrollo de misiles y episodios entre naves estadounidenses e iraníes. Respecto a las pruebas de misiles iraníes, EEUU y Francia anunciaron sanciones para individuos y entidades involucrados en estas acciones, que consideraron contrarias a la resolución 2231 sobre la cuestión nuclear iraní. No obstante, las autoridades iraníes defendieron estos desarrollos y subrayaron que el programa de misiles no era negociable por ser parte de las capacidades de defensa del país. Durante 2016 también se registraron diversos incidentes que derivaron en la detención de una decena de marines estadounidenses de dos barcos capturados en aguas territoriales iraníes, en enero; disparos de balizas de advertencia de EEUU durante maniobras de barcos de guerra estadounidenses en la zona del Golfo Pérsico que se encontraron con cuatro naves militares iraníes, en agosto; y una cuasi colisión entre un patrullero de EEUU y una nave de los Guardianes de la Revolución en el estrecho de Ormuz, en septiembre. En el marco del conflicto armado en Yemen, y tras un ataque con misiles de EEUU contra posiciones al-houthistas –en represalia por un supuesto ataque del grupo armado a un barco estadounidense– Irán desplegó dos barcos de guerra en el Golfo de Adén con el argumento de proteger a barcos comerciales de acciones de piratería.[90]

Hacia finales de año, **los cambios políticos en EEUU encendieron las alarmas sobre la posible repercusión de las políticas del nuevo presidente, Donald Trump –electo en noviembre– en las relaciones con Irán** y, en particular, en el mantenimiento del acuerdo nuclear. El primer ministro israelí –férreo opositor al acuerdo sobre el programa nuclear iraní– declaró que pretendía discutir con el nuevo presidente estadounidense las posibles fórmulas para revertir el pacto. En este nuevo escenario, tanto la Cámara de Representantes (a finales de noviembre) como el Senado estadounidense (en diciembre) aprobaron reintroducir la ley de sanciones contra Irán –Iran Sanctions Act (ISA)– por un plazo de 10 años. La medida alentó críticas de las autoridades de Teherán, que denunciaron que violaba el espíritu del pacto nuclear y que podría conducir a represalias. La legislación, sin embargo, requería para su puesta en marcha la ratificación del presidente Barack Obama, quien se negó a firmarla. Adicionalmente, cabe destacar que durante 2016 se intensificó la tensión entre Irán y Arabia Saudita, otro de los países que han observado con recelo el pacto internacional con Irán por su programa nuclear. En un contexto de pulso regional alentado por conflictos en países como Siria y Yemen, las relaciones entre ambos países se enturbiaron aún más tras la decisión de Riad de ejecutar a un destacado clérigo chií a principios de año. Este hecho motivó la condena de las autoridades de Teherán y alentó manifestaciones que acabaron con agresiones a las misiones diplomáticas

89. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.
90. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

saudíes en Irán. Aunque el Gobierno iraní condenó estos hechos, el episodio llevó a Arabia Saudita a decretar una ruptura en las relaciones diplomáticas, movimiento que fue imitado por otros países aliados de Riad. En este contexto, la Organización para la Conferencia Islámica también denunció la interferencia de Irán en asuntos árabes por su pronunciamiento sobre las decisiones judiciales de Arabia Saudita. Las relaciones entre ambos países también se vieron tensionadas por las manifestaciones en Irán y las críticas de Teherán a Riad por su gestión del peregrinaje a la Meca, tras los incidentes que en 2015 dejaron centenares de víctimas mortales, y por sus insinuaciones sobre el presunto apoyo saudí a grupos armados insurgentes en Irán.[91]

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la desaparición de centenares de personas detenidas por las autoridades egipcias

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:
En el marco de las llamadas "revueltas árabes", las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

Egipto continuó siendo escenario de una tensión interna caracterizada por múltiples denuncias de abusos a los derechos humanos, persecución y acoso a activistas y sectores disidentes, y movilizaciones de sectores críticos con las políticas del régimen. Como en años anteriores, a principios de 2016 las autoridades adoptaron severas medidas de seguridad para prevenir las manifestaciones por un nuevo aniversario de la caída del régimen de Hosni Mubarak. Los Hermanos Musulmanes (HM) –organización proscrita y declarada terrorista– hizo llamamientos a protestar, pero los intentos de los manifestantes de congregarse fueron dispersados por la Policía. A lo largo del año, sin embargo, se produjeron otras movilizaciones por distintas motivaciones: protestas tras el asesinato de un civil por las fuerzas de seguridad, manifestaciones de médicos en denuncia de abusos policiales y marchas de estudiantes, entre otras. **Las protestas más multitudinarias desde 2013 se produjeron en abril, en rechazo a la decisión del Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi de ceder dos islas ubicadas en el Mar Rojo, Tiran y Sanafir, a Arabia Saudita**. La medida alentó las críticas contra las autoridades de parte de sectores que la consideraron como una traición y como una afrenta al orgullo nacional dado el carácter estratégico de las islas y su simbolismo vinculado a las guerras árabe-israelíes. El Gobierno de al-Sisi insistió en que las islas son saudíes y que Egipto asumió su control a petición de Riad en los años cincuenta. La medida fue anulada por una decisión judicial en junio, pero el Gobierno apeló y a finales de año el destino de Tiran y Sanafir seguía siendo incierto. En medio de la polémica, más de 150 personas fueron condenadas a penas de hasta cinco años de cárcel por su participación en las protestas contra la transferencia de las islas a Arabia Saudita. A esto se suma que durante todo el año continuaron las informaciones sobre procesos, condenas, revocaciones de algunas sentencias y nuevas detenciones de dirigentes e integrantes de los HM. En marzo de 2016, más de 30 jueces fueron obligados a retirarse de sus cargos por haber mantenido una posición crítica frente al golpe de Estado que en 2013 expulsó del Gobierno al primer presidente islamista, Mohamed Mursi. Paralelamente, a lo largo de 2016 continuaron las denuncias sobre el cierre o la congelación de actividades de numerosas ONG –en algunos casos por sus presuntos vínculos con los HM, en otros por la recepción de ayudas económicas del exterior, entre otras causas–, el bloqueo a las actividades de académicos críticos y la prohibición de viaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. En este contexto, representantes de la ONU –entre ellos el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Relator Especial para la Libertad de Asamblea y Asociación y expertos de la ONU en libertad de expresión–, llamaron a las autoridades egipcias a poner fin a las medidas restrictivas y a la represión a la sociedad civil, alertaron sobre las reacciones desproporcionadas de las autoridades –arrestos masivos, uso de la fuerza– para frenar el ejercicio del derecho a reunión y a protestas pacíficas y advirtieron sobre el uso abusivo de leyes contraterroristas.

91. Véase el resumen sobre Arabia Saudita en este capítulo.

Organizaciones internacionales de derechos humanos también denunciaron el uso de las políticas de "seguridad nacional" como excusa para acosar a sectores disidentes y formularon algunas acusaciones específicas. Amnistía Internacional señaló en julio a la Agencia de Seguridad Nacional por secuestros, torturas y desapariciones forzadas con el objetivo de intimidar a la oposición y acallar a las voces disidentes. En su informe, la organización advirtió de la desaparición de centenares de personas, incluyendo algunos jóvenes de hasta 14 años, documentó casos de torturas –incluyendo uso de violencia sexual– y alertó sobre la connivencia entre las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales para encubrir y bloquear las investigaciones de abusos.[92] Según las informaciones del Consejo Nacional para los Derechos Humanos de Egipto, entre abril de 2015 y marzo de 2016 se habían contabilizado un total de 266 desapariciones forzadas. Otro informe de HRW también puso el acento en las violaciones a los derechos humanos de personas detenidas y a los casos de muerte de quienes estaban en prisión. En este contexto, cabe destacar que **uno de los casos de mayor notoriedad y repercusión internacional durante 2016 fue el del estudiante italiano Giulio Regeni**. El joven, que desarrollaba una investigación sobre los sindicatos en Egipto, desapareció en El Cairo el 25 de enero y su cuerpo fue hallado el 3 de febrero en los suburbios con evidentes signos de tortura. Las autoridades egipcias negaron tener responsabilidad en los hechos, pero el caso motivó que Italia retirara a su embajador en Egipto ante la falta de colaboración egipcia en la investigación del caso y, posteriormente, llevó a Roma a suspender las ventas de equipamiento militar al país norteafricano. Paralelamente, durante 2016 otras voces alertaron sobre el incremento sin precedentes de los juicios militares contra civiles en Egipto, que desde 2014 ya sumarían más de 7.000 (frente a los 12.000 en las tres décadas de Gobierno de Mubarak).[93] Asimismo, el Committee to Protect Journalists identificó a Egipto como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En este escenario, el Parlamento egipcio –que retomó sus sesiones a principios de año, por primera vez desde junio de 2012– aprobó en agosto una extensión por otros cinco años de un decreto –la Ley 136 (2014)– que ha permitido ampliar la jurisdicción militar y, en noviembre, una nueva legislación restrictiva para las actividades de las ONG.

Iraq (Kurdistán)	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Territorio, Recursos, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán, PKK

Síntesis:
Concentrada en la zona norte de Iraq, la población kurda representa entre un 15 y un 20% del total de habitantes del país. Desde la creación del Estado iraquí, y tras el incumplimiento de las promesas sobre un Estado kurdo independiente en la región, la población kurda ha vivido un difícil encaje con el Estado iraquí y ha padecido severos casos de represión. En 1992, tras el fin de la Guerra del Golfo, el establecimiento de la zona de exclusión aérea en el norte de Iraq sentó las bases para la creación del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG). Esta experiencia de autogobierno kurdo se vio reforzada después del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en 2003 y ganó reconocimiento en el esquema federal consagrado en la Constitución iraquí de 2005. Desde entonces, las divergentes interpretaciones sobre los derechos y competencias de cada una de las partes han alimentado las tensiones entre Erbil y Bagdad. La disputa se ha focalizado principalmente en el estatus de los llamados "territorios en disputa" y el control de los recursos energéticos. En el período más reciente, la guerra siria y la evolución del conflicto armado en Iraq han repercutido en las dinámicas de esta disputa, reavivando los debates sobre las perspectivas de un eventual Estado kurdo independiente.

Como el año anterior, la situación en la región del Kurdistán iraquí estuvo determinada por las consecuencias del conflicto armado en el país, tensiones entre Erbil y Bagdad y pugnas entre actores políticos kurdos. **La campaña contra ISIS, y en particular la operación para recuperar el control de la ciudad de Mosul de manos del grupo armado, motivó unos niveles de cooperación y coordinación sin precedentes entre las fuerzas iraquíes y los combatientes kurdos** (peshmergas) durante el segundo semestre del año, que en cierto modo eclipsaron las diferencias entre las autoridades iraquíes y kurdas. Sin embargo, esta colaboración no estuvo exenta de roces y dificultades, sobre todo en los meses previos al inicio de la campaña. Así, por ejemplo, en julio, poco después de que EEUU suscribiera un memorándum de entendimiento con el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) para proveer ayuda financiera (415 millones de dólares) y asistencia militar a los peshmergas –una medida considerada como un incentivo para su contribución a la ofensiva para retomar Mosul–, el Gobierno iraquí intentó excluir a los kurdos de las reuniones con la coalición anti-ISIS celebradas en Washington y algunos miembros del Gobierno de Bagdad pusieron en duda la participación de las fuerzas kurdas en la campaña contra ISIS en Mosul. Pese a ello, en septiembre Bagdad, Erbil y Washington llegaron a un acuerdo tripartito sobre la cooperación para la campaña en Mosul. Los peshmergas se involucraron en las hostilidades en alianza con las tropas federales iraquíes y trabajaron conjuntamente con milicias chiíes (Fuerzas de Movilización Popular, FMP) en el cerco a la ciudad, en el marco de un acuerdo para el reparto de las áreas a controlar y liberar.

La situación en el Kurdistán iraquí también estuvo influida por la implicación del PKK y de Turquía en Iraq.

92. Amnesty International, *Egypt: 'Officially, you do not exist': Disappeared and tortured in the name of counter-terrorism*, Amnesty International, 13 de julio de 2016.
93. Sahar Aziz, "The Expanding Jurisdiction of Egypt's Military Courts", *Sada*, Carnegie Endowment for International Peace, 12 de octubre de 2016.

Uno de los focos de tensión en los que se vio involucrado el KRG durante 2016 estuvo vinculado a la localidad de Sinjar y a la presencia del PKK en esta localidad yazidí. Fuerzas del PKK han permanecido en la zona después de jugar un papel en la asistencia y evacuación de parte de la comunidad yazidí en 2014, cuando fue objeto de un intenso ataque de ISIS. Dirigentes del KRG reiteraron su rechazo a una presencia continua del PKK en la zona –posición en la que coincidirían Bagdad y EEUU–, un área donde también hay desplegados peshmergas. En declaraciones públicas, **el primer ministro del KRG, Nechirvan Barzani, no descartó el uso de la fuerza para expulsar al PKK de Sinjar**, alentando especulaciones sobre la posibilidad de un conflicto armado intra-kurdo.[94] Turquía también alertó que no permitiría que el PKK constituyera una nueva base en Sinjar similar a la que tiene en las montañas de Qandil, en el Kurdistán iraquí. En este contexto, cabe mencionar que el KRG de Massoud Barzani mantuvo su relación estratégica con Turquía, en un escenario de tensiones entre Ankara y Erbil por la intención del Gobierno de Erdogan de participar en la ofensiva en Mosul y por la presencia de tropas turcas en las proximidades de esta ciudad. El Gobierno de Bagdad rechazó la implicación de Ankara y exigió la retirada de sus tropas de la localidad de Bashiqa. Hasta finales de 2016, sin embargo, las fuerzas turcas no se habían retirado.[95] En otro hecho vinculado con el conflicto armado, cabe destacar que a principios de 2016 el KRG fue acusado de la destrucción deliberada de miles de viviendas de comunidades árabes en aparente venganza por su presunto apoyo a ISIS en poblados de Nínive, Kirkuk y Diyala. Amnistía Internacional alertó que el desplazamiento forzado y la destrucción deliberada de infraestructuras sin justificación militar podrían constituir un crimen de guerra y se habría producido en zonas recuperadas de ISIS entre septiembre de 2014 y marzo de 2015.[96]

A estos focos de tensión se añadieron las fracturas entre sectores políticos del Kurdistán iraquí, que también tuvieron su reflejo en Bagdad y en posiciones divergentes respecto a la búsqueda de una eventual independencia. Aunque forman una coalición en el gobierno regional, las diferencias entre el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) de Barzani y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK) se hicieron evidentes. A mediados de mayo, el PUK y el partido político kurdo Gorran –ambas formaciones partidarias de una aproximación más conciliadora hacia Bagdad– suscribieron una alianza para unir fuerzas tanto en la región del Kurdistán como en Bagdad y juntos pasaron a ser la mayor delegación kurda en el Parlamento iraquí, con 30 representantes frente a los 28 del KDP. Posteriormente, Gorran –que no reconoce a Barzani como presidente del KRG tras la polémica extensión de su mandato en agosto de 2015– rechazó participar en una reunión convocada por el mandatario para discutir un posible referéndum sobre la independencia del KRG de Iraq. En un contexto de crecientes problemas económicos en el Kurdistán iraquí –que motivaron protestas de funcionarios públicos y profesores por recortes de salarios e impagos de sueldos– Barzani visitó Bagdad a finales de septiembre para discutir la operación en Mosul y cuestiones bilaterales. Dirigentes del KRG insistieron en la vía del diálogo con Bagdad para resolver los temas pendientes y aunque se mantuvo un clima de colaboración, algunos analistas alertaron que las tensiones entre Bagdad y Erbil resurgirán una vez finalice la campaña en Mosul.

Israel – Siria – Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)

Síntesis:
La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en el Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión internacional protagonizada por Israel, Siria y Líbano persistió durante 2016 aunque registró menores niveles de violencia que el año anterior, cuando se produjeron los peores incidentes desde la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah con un saldo de más de una decena de víctimas mortales. En enero la milicia chií libanesa lanzó un ataque con explosivos contra dos vehículos de las fuerzas de seguridad israelíes en la disputada zona de las Granjas de Sheeba, a lo que Israel respondió con fuego de artillería y de mortero. No se reportaron víctimas en el marco de este intercambio. **La acción de Hezbollah fue reivindicada por el grupo como una represalia por el asesinato del destacado dirigente de la organización Samir Qantar en un ataque aéreo en Damasco ocurrido a finales de 2015** y atribuido a Israel. En mayo se informó de la muerte en un ataque

94. Denise Natali, "Is Iraqi Kurdistan heading towars civil war?", *Al-Monitor*, 3 de enero de 2017.
95. Véase los resúmenes sobre Iraq y sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
96. Amnesty International, *Banished and dispossessed: Forced displacement and deliberate destruction in northern Iraq*, Amnesty International, 20 de enero de 2016.

explosivo en la capital siria del comandante militar de Hezbollah Mustafa Badreddine, el dirigente del grupo de más alto rango en ser asesinado desde la muerte de su predecesor, Imad Mughniyeh, en una operación conjunta de la CIA y el Mossad en 2008 en Damasco. Aunque las primeras versiones apuntaron a Israel como responsable de la acción contra Badreddine, Hezbollah finalmente atribuyó el ataque a grupos armados sunníes que operan cerca del aeropuerto de Damasco.[97] En julio un ataque de confusa autoría en la zona de los Altos del Golán fue atribuido por algunas fuentes a Israel, aunque Hezbollah responsabilizó de la acción a milicianos de al-Qaeda. En octubre, el Ejército israelí informó de otro episodio en el que un soldado israelí resultó herido presuntamente tras ser tiroteado desde un vehículo en la zona fronteriza.

Más allá de incidentes de este tipo, la misión de la ONU en Líbano (UNIFIL) subrayó que en general el clima en su área de operaciones y a lo largo del Río Azul fue de calma, aunque **las partes en disputa mantuvieron una retórica provocativa y desafiante, en un año en que se cumplía el décimo aniversario de la guerra de 2006**. En entrevistas y declaraciones públicas, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró que el grupo estaba en posesión de armamento capaz de golpear en cualquier punto de Israel y que continuaba incrementando sus capacidades. La milicia chií, que se mantuvo abiertamente implicada en la guerra en Siria en apoyo al régimen de Bashar al-Assad, agradeció a Irán por el apoyo económico y militar al grupo. Paralelamente, altos cargos de las fuerzas de seguridad israelíes alertaron que la respuesta israelí a cualquier agresión de Hezbollah llevaría a una confrontación de gran escala. En abril y sin dar detalles, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también aseveró que su Gobierno había lanzado decenas de ataques en Siria con el objetivo de prevenir transferencias de armas a Hezbollah. A lo largo del año, Israel insistió en denunciar movimientos tendientes a transferir armas a Hezbollah a lo largo de la frontera sirio-libanesa que la ONU no pudo verificar de manera independiente. La UNIFIL también constató que Israel había continuado violando de manera sistemática el espacio aéreo libanés, casi diariamente y en su mayoría a través de aviones no tripulados. Durante el último trimestre, la zona ocupada de los Altos del Golán fue escenario de nuevos incidentes que llevaron a Israel a desplegar su sistema de defensa aérea Iron Dome. Según informaciones publicadas a finales de noviembre, Israel habría lanzado dos misiles que golpearon la zona oeste de Damasco sin que se reportaran víctimas y habría dado muerte a cuatro combatientes sirios presuntamente vinculados a ISIS que habían atacado a tropas israelíes en el Golán.

Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupos armados ISIS y Frente al-Nusra

Síntesis:
El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada "Revolución del Cedro" que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

Al igual que en años previos, Líbano fue escenario de una tensión interna determinada por las consecuencias en el país del conflicto armado en la vecina Siria, por incidentes vinculados a la comunidad palestina refugiada en el país, por el persistente *impasse* político que no se resolvió hasta finales de año y, como novedad, por tensiones con Arabia Saudita que afectaron el apoyo económico que Riad estaba proporcionando a las Fuerzas Armadas libanesas. Respecto a las dinámicas vinculadas con el conflicto armado sirio, además de la participación directa de actores libaneses como Hezbollah en la guerra siria,[98] cabe desatacar que a lo largo de 2016 se registraron diversos incidentes en territorio libanés, principalmente en zonas limítrofes, que causaron la muerte de más de medio centenar de personas. Uno de los hechos más graves se produjo en febrero, cuando una operación del Ejército en la zona de Arsal provocó la muerte de seis hombres armados y derivó en el arresto de 16 presuntos combatientes de ISIS. Ese mismo mes y también en Arsal, la milicia chií de Hezbollah dio muerte a cuatro combatientes del Frente al-Nusra, grupo armado con base en Siria vinculado a al-Qaeda. Otro hecho destacado tuvo lugar en marzo en una zona fronteriza con Siria, cuando los enfrentamientos entre hombres armados y tropas libanesas dejaron nueve personas fallecidas, un soldado y ocho milicianos. En este mismo período también se registraron combates entre el Frente al-Nusra e ISIS que se iniciaron en la ciudad de Jrajeer

Líbano continuó viéndose afectado por las dinámicas del conflicto armado en Siria y diversos incidentes, en su mayoría en zonas fronterizas, causaron la muerte de más de cincuenta personas

97. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).
98. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados) y sobre Israel-Siria-Líbano en este capítulo.

en la región montañosa de Qalamoun, en Siria, pero se extendieron a las localidades libanesas de Arsal y Raas Baalbek, dejando una treintena de combatientes fallecidos. **Uno de los incidentes más significativos del año se produjo a finales de junio, cuando dos ofensivas suicidas perpetradas por ocho atacantes provocaron la muerte de seis personas y dejaron heridas a decenas en la localidad de al-Qaa, de mayoría cristiana y fronteriza con Siria, en una acción no reivindicada pero atribuida a ISIS**.

Las autoridades identificaron a los atacantes como nacionales sirios, lo que derivó en un incremento de las tensiones entre la población libanesa y la comunidad siria refugiada en el país –más de un millón de personas– y llevó a algunos sectores de la comunidad cristiana a hacer llamamientos a la auto-defensa armada. En este contexto se produjeron algunos hechos de violencia, incluyendo ataques a refugiados, además de arrestos masivos, operaciones de rastreo en campos de población refugiada e imposición de toques de queda para personas de nacionalidad siria en la zona del ataque y poblados de los alrededores. En septiembre se contabilizaron varios heridos en choques entre libaneses y refugiados sirios en la zona de Dawhet Aramoon, al sur de Beirut. El primer ministro libanés hizo un llamamiento a la comunidad internacional a diseñar un plan para el retorno de la población refugiada siria antes del "colapso" de Líbano. Cabe destacar que durante el año diversas ONG y agencias internacionales alertaron sobre la precaria situación de la población siria refugiada en el país. En este sentido, se denunció por ejemplo el elevado número de menores de edad que se han visto obligados a trabajar en condiciones de explotación laboral y que la mitad de los niños y niñas refugiados sirios no está recibiendo una educación formal. También en relación con Siria, durante el último trimestre del año se informó de la imputación de dos oficiales sirios por su supuesta responsabilidad en ataques a dos mezquitas sunníes en Trípoli en 2013 que dejaron 40 víctimas mortales y se celebraron protestas por la presunta implicación siria en ataques a sedes de dos grupos políticos libaneses. Además, entre enero y octubre las fuerzas de seguridad libanesas detuvieron a 1.700 personas por su presunta afiliación a grupos extremistas o participación en actividades terroristas. Cabe mencionar que durante 2016 también se registraron algunos hechos de violencia entre la comunidad palestina refugiada en Líbano, en concreto enfrentamientos entre facciones vinculadas a al-Fatah y a grupos islamistas en el campo de Aïn el-Helweh en los que murieron dos personas.

A nivel político, **las diferencias entre las distintas formaciones libanesas y el bloqueo en la elección del presidente se mantuvieron durante casi todo el año. No fue hasta octubre que, después de más de dos años de *impasse*, se acordó la elección de Michael Aoun como nuevo mandatario del país**. El ex general de 81 años sucedió así a Michel Suleiman, que había dejado el cargo en mayo de 2014. Líder del Movimiento Patriótico Libre y considerado como una figura próxima a Irán y aliado de Hezbollah, Aoun cumple con el singular esquema de reparto de poder establecido en la Constitución libanesa que exige que el presidente sea cristiano, que el primer ministro sea sunní y que el portavoz del Parlamento sea chií. Su designación se desbloqueó después de que el líder del Movimiento Futuro, Saad Hariri, decidiera respaldarlo. Un mes más tarde Hariri fue nombrado como primer ministro y en diciembre se configuró el nuevo gabinete, que definió como sus prioridades preservar la seguridad del país en el contexto de inestabilidad regional y preparar la celebración de elecciones parlamentarias –las primeras en ocho años– que deberían celebrarse en mayo de 2017. Finalmente, cabe mencionar que la situación en Líbano se vio influida por las tensiones con Arabia Saudita, en el marco del pulso regional entre Riad y Teherán. **El reino saudí decidió suspender la ayuda militar a Líbano –por un valor de 3.000 millones de dólares– tras considerar que Beirut no había condenado de manera contundente los ataques contra misiones diplomáticas saudíes en Irán** en enero, agresiones que estuvieron motivadas por la decisión de Riad de ejecutar a un destacado clérigo chií.[99] Arabia Saudita denunció la influencia de Hezbollah –aliado de Irán– en Líbano y promovió medidas contra la milicia chií. Así, en marzo el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Liga Árabe designaron a Hezbollah como una organización terrorista. Asimismo, durante el año varios países del CCG decidieron expulsar a nacionales libaneses de sus territorios por sus presuntos vínculos con la milicia chií y desaconsejaron a sus ciudadanos viajar a Líbano.

Palestina	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	AP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedine al-Qassam, grupos salafistas

Síntesis:
La oposición entre los distintos sectores palestinos en las últimas décadas ha estado protagonizada principalmente por grupos nacionalistas laicos por una parte (Fatah y su brazo armado ¬–las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa–, FPLP, FDLP) y grupos confesionales por otra (Hamas y su brazo armado –Brigadas Ezzedine-al-Qassam–, Yihad Islámica). El enfrentamiento responde a la voluntad de controlar el poder dentro de los territorios palestinos y se ha traducido, a su vez, en diferentes aproximaciones respecto a las relaciones con Israel. Tras años de dominio de Fatah en la política palestina, las acusaciones de corrupción y de no defender los intereses palestinos en el proceso de paz desencadenaron el triunfo de Hamas en las elecciones de enero de 2006. Este hecho precipitó una batalla dialéctica y armada entre ambas formaciones por el control de las instituciones políticas y, sobre todo, de las fuerzas de seguridad. En 2011 Hamas y Fatah anunciaron un acuerdo

99. Véase el resumen sobre Arabia Saudita en este capítulo.

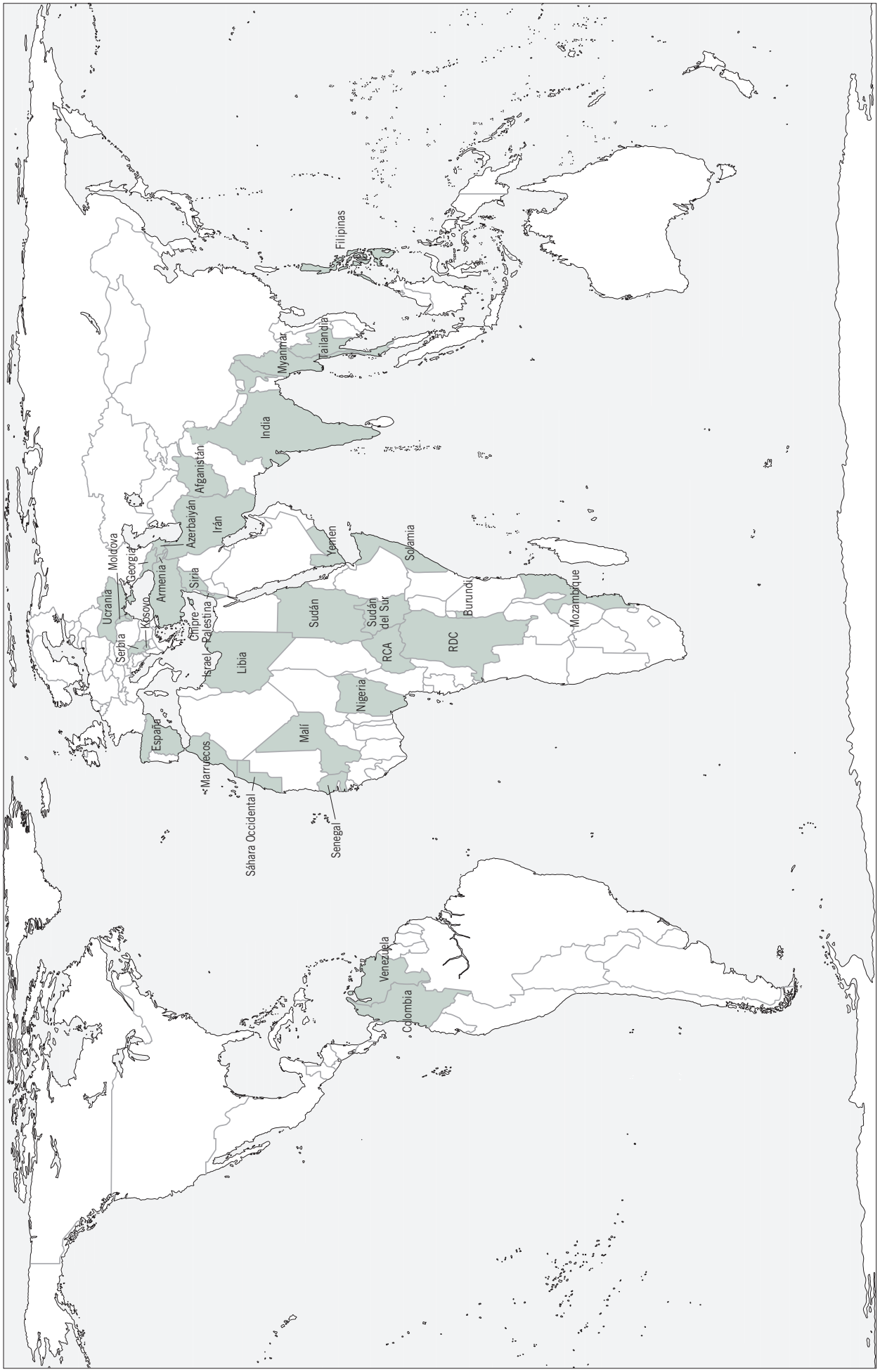
de reconciliación. Sin embargo, las discrepancias entre ambas formaciones han persistido, dificultando la formación de un gobierno de unidad nacional. Los cambios en la región en el marco de las revueltas árabes también han tenido una influencia relevante en los avances y retrocesos del proceso de reconciliación, al que Israel se opone abiertamente.

A lo largo de 2016 **persistieron las divisiones en el liderazgo palestino y las disputas entre Fatah y Hamas**. Como en años previos, durante el año se informó de iniciativas de mediación que pretendían favorecer la reconciliación entre las partes. Así, en los primeros meses de 2016 y bajo los auspicios de Qatar, ambas formaciones retomaron los contactos para explorar las posibilidades de poner fin a las divisiones y formar un gobierno de unidad nacional efectivo. Fatah y Hamas mantuvieron conversaciones en Doha a principios de febrero con el fin de discutir la implementación del pacto –conocido como Beach Refugee Camp Agreement– suscrito en abril de 2014 y precedido por otros dos acuerdos de unidad fallidos, el de El Cairo (2011) y el de la Meca (2007). No obstante, continuaron las diferencias entre las partes en temas como el control de los cruces fronterizos de la Franja de Gaza o la celebración de comicios legislativos y presidenciales. Según trascendió, se celebraron nuevas reuniones en Doha en marzo –después de que una delegación de Hamas visitara Egipto– y en junio, pero esta última habría concluido con nuevas acusaciones mutuas. Hamas acusó a la Autoridad Palestina (AP) de llevar a cabo una campaña de acoso al movimiento islamista en Cisjordania que habría llevado a la detención de unas 200 personas. Fatah presentó una queja similar sobre el arresto de algunos de sus representantes en la Franja de Gaza. El grupo islamista también fue señalado por la adopción de algunas medidas, como la ejecución de tres personas condenadas por asesinato en mayo sin contar con la aprobación de la AP, como requiere la ley palestina.

En este contexto, **la convocatoria a elecciones municipales volvió a exponer las profundas diferencias entre Hamas y Fatah, que se acusaron mutuamente de obstruir las campañas de sus adversarios. Los comicios, que estaban previstos para el 8 de octubre y que habrían sido las primeras elecciones palestinas desde 2006, fueron finalmente suspendidos**. Una decisión de la Corte Suprema palestina, con sede en Ramallah, justificó la decisión bajo el argumento de que la votación no podría llevarse a cabo en Jerusalén Este, además de algunos problemas de procedimiento. La medida se adoptó poco después de que tribunales de Gaza descalificaran varias listas de candidatos de Fatah, tras ser objetadas por Hamas. Aunque la Comisión Electoral recomendó posponer las elecciones por un plazo de seis meses para resolver los obstáculos de la votación, finalmente los comicios fueron postergados indefinidamente por la AP. En consecuencia, ambas formaciones intercambiaron acusaciones respecto al fracaso en la convocatoria electoral. La persistencia de estas divisiones en el liderazgo palestino se produce en momentos en que se ha incrementado la visión crítica sobre la AP entre la población palestina y con crecientes problemas de Hamas para lidiar con la crítica situación en Gaza.[100] Adicionalmente, el Cuarteto para Oriente Medio, en su informe sobre los obstáculos para reactivar las negociaciones de paz y avanzar en una solución de dos Estados, señaló que uno de los problemas era la ausencia de unidad palestina. Pese a las divergencias, una delegación de Hamas aceptó la invitación y participó en el séptimo Congreso General de Fatah, celebrado a finales de noviembre y el primero desde 2009. Durante el encuentro, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, llamó a Hamas a superar las divisiones. Abbas y el líder de Hamas, Khaled Meshaal, se habían reunido nuevamente en Qatar a finales de octubre. En otro hecho destacado ocurrido a finales de año, Abbas decidió retirar la inmunidad parlamentaria a su archirrival Mohamed Dahlan y otros cuatro legisladores, después de ser acusados de tráfico de armas, apropiación de fondos públicos y difamación. Dahlan, que fue expulsado del liderazgo de Fatah en 2011 y vive en EAU, mantenía su cargo de legislador. La decisión de Abbas fue objeto de debate en una sesión extraordinaria del Consejo Legislativo Palestino a finales de diciembre.

100. Véase "Israel-Palestina: la agonía de la solución de dos Estados y el riesgo de mayor violencia a 50 años de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

Mapa 3.1. **Procesos y negociaciones de paz**



3. Procesos de paz

- El presente capítulo analiza 38 procesos y negociaciones de paz que tuvieron lugar durante 2016, de los cuales 15 tuvieron lugar en África, ocho en Asia, siete en Europa, cinco en Oriente Medio y tres en América.
- En Burundi, el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición facilitado por la EAC continuó estancado, lo que contribuyó a intensificar la crisis y la violencia.
- Ante el bloqueo en la implementación del acuerdo de Skhirat auspiciado por la ONU en Libia, algunos actores regionales se involucraron para intentar facilitar una salida política a la crisis.
- El Gobierno de RDC y la coalición opositora Rassemblement alcanzaron un acuerdo el 31 de diciembre bajo la facilitación de la Conferencia Episcopal congolesa.
- El Gobierno de Colombia y las FARC alcanzaron un acuerdo de paz histórico tras más de 50 años de conflicto armado, el más avanzado en igualdad de género hasta la fecha.
- Tras varios años de parálisis en el proceso de paz, se reanudaron las negociaciones oficiales entre el Gobierno filipino y el NDF.
- Se celebró en Myanmar la Conferencia de Paz Panglong-21, que reunió al Gobierno con la casi totalidad de los grupos armados de oposición activos en el país, incluyendo a la mayoría de aquellos con los que no se firmó el acuerdo de alto el fuego nacional.
- Se reiniciaron las negociaciones formales entre las autoridades de Moldova y de la región independiente *de facto* de Transdniestria.
- Tras los hechos de violencia más graves desde el fin de la guerra en 1994, Armenia y Azerbaiyán acordaron medidas de prevención de nuevas crisis, pero a finales de año éstas seguían sin implementarse.
- Las negociaciones entre el Gobierno israelí y la AP se mantuvieron bloqueadas durante 2016, mientras diferentes actores impulsaron algunas iniciativas tendientes a reactivar el proceso de paz.

El presente capítulo analiza procesos de paz, en especial negociaciones, que tuvieron lugar a lo largo del año 2016. Está estructurado en tres secciones. En el primer apartado se expone la definición de procesos de paz y negociaciones de paz y una tabla resumen de negociaciones y procesos de paz en 2016. En el segundo se identifican algunas tendencias y se presentan reflexiones generales sobre las negociaciones y procesos de paz analizados en el transcurso del año. En el tercer y último apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes de 2016 en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países que han sido objeto de procesos y negociaciones de paz a lo largo de 2016.

3.1. Procesos y negociaciones de paz: definiciones

Se entiende por **procesos de paz** todos aquellos esfuerzos políticos, diplomáticos y sociales destinados a resolver los conflictos y transformar sus causas de fondo mediante métodos pacíficos, especialmente a través de las negociaciones de paz. Se consideran **negociaciones de paz** los procesos de diálogo entre al menos dos partes enfrentadas en un conflicto, en los cuales las partes abordan sus diferencias en un marco concertado para poner fin a la violencia y encontrar una solución satisfactoria a sus demandas. Las negociaciones de paz suelen ir precedidas de fases previas o exploratorias que permiten definir el formato, lugar, condiciones y garantías, entre otros aspectos de la futura negociación. Las negociaciones de paz pueden estar facilitadas o no por terceras partes. Las terceras partes intervienen en la disputa para contribuir al diálogo entre los actores enfrentados y favorecer una salida negociada del conflicto. En las negociaciones de paz también pueden participar otros actores no directamente implicados en la disputa. Las negociaciones de paz pueden resultar en acuerdos globales, parciales, acuerdos relativos al procedimiento o proceso y acuerdos vinculados a las causas o consecuencias del conflicto, pudiéndose combinar elementos de los diversos tipos en un mismo acuerdo.

Tabla 3.1. **Resumen de los procesos y las negociaciones de paz en 2016**

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
África		
Burundi	Gobierno, oposición política y social agrupada en el Conseil National pour le respect de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et la Restauration d'un Etat de Droit (CNARED)	Comunidad de Estados de África del Este (East African Community, EAC)
Libia	Consejo Presidencial y Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), Cámara de Representantes (CdR), Congreso General Nacional (CGN)	ONU, Argelia, Egipto, Marruecos
Malí (norte)	Gobierno, Coordinadora Movimientos de Azawad (CMA) –MNLA, MAA y HCUA–, Plataforma –GATIA, CMFPR, CPA, facción del MAA–	Argelia, Francia, ECOWAS, UA, ONU
Marruecos – Sáhara Occidental	Marruecos, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO)	ONU, Argelia y Mauritania , Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia)
Mozambique	Gobierno, grupo opositor RENAMO	Equipo mediador nacional, SADC, Iglesia Católica, UE
Nigeria (Delta del Níger)	Gobierno, Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND), Pan-Niger Delta Coastal States Stakeholders Consultative Forum, (PANDEF), Vengadores del Delta del Níger (NDA)	--
RCA	Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias antibalaka	UA, CEEAC, ONU, Organización para la Cooperación Islámica (OCI)
RDC	Gobierno, Alianza por la Mayoría Presidencial, oposición política y social agrupada en la coalición Rassemblement (partido Union pour la Démocratie et le Progrès Sociale (UDPS), la Oposición Dinámica y el G7, entre otros), Union pour la Nation Congolaise y otros partidos políticos	Conferencia Episcopal Congolesa (CENCO), Angola, Tanzania, Uganda, Grupo de Apoyo a la Facilitación del Diálogo Nacional sobre la RDC liderada por la UA, UE, UA, ONU, EEUU, Organización Internacional de la Francofonía
Senegal (Casamance)	Gobierno de Senegal, grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) y sus diferentes facciones	Comunidad de Sant'Egidio, Gambia, Guinea-Bissau
Somalia	Gobierno Federal de Transición, líderes de los estados federales y emergentes (Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste), movimiento político-militar Ahlu Sunna Wal-Jama'a, líderes de clanes y subclanes	ONU, IGAD, Turquía
Sudán	Gobierno de Sudán, coalición opositora "Sudan Call" formada por partidos de oposición nacional, Frente Revolucionario de Sudán (SRF, coalición que aglutina a grupos armados de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur)	African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP), Troika (EEUU, Reino Unido, Noruega), Alemania
Sudán (Darfur)	Gobierno, Movimiento por la Justicia y la Equidad (JEM), Movimientos de Liberación de Sudán, facciones SLA-MM y SLA-AW	UA, UNAMID, Chad
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	Gobierno, SPLM-N	African Union High-Level Implementation Panel (AUHIP), Uganda
Sudán del Sur	Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition, SPLM7, SSDM-Cobra Faction	IGAD Plus: IGAD, UA (Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega)
Sudán – Sudán del Sur	Gobierno de Sudán y Gobierno de Sudán del Sur	IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), Egipto, Libia, EEUU, UE
América		
Colombia (FARC-EP)	Gobierno y FARC-EP	Países garantes (Cuba, Noruega), países acompañantes (Venezuela, Chile)
Colombia (ELN)	Gobierno y ELN	Países garantes (Ecuador, Brasil y Noruega), países acompañantes (Cuba, Venezuela y Chile)
Venezuela	Gobierno, oposición (MUD)	UNASUR, Vaticano

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
Asia		
Afganistán	Gobierno, insurgencia talibán, red Haqqani, EEUU	Grupo cuadrilátero (Pakistán, EEUU, China, Afganistán), Qatar, Arabia Saudita
Filipinas (MILF)	Gobierno, MILF	Malasia, International Contact Group, Organización para la Cooperación Islámica
Filipinas (MNLF)	Gobierno, MNLF (facción liderada por Nur Misuari)	Organización para la Cooperación Islámica (OCI)
Filipinas (NDF)	Gobierno, NDF (organización paraguas de distintas organizaciones comunistas, entre ellas el Partido Comunista de Filipinas, que es el brazo político del NPA)	Noruega
India (Assam)	Gobierno, ULFA-PTF, NDFB-P, NDFB-RD	--
India (Nagalandia)	Gobierno, NSCN-IM	--
Myanmar	Gobierno, grupos armados firmantes del acuerdo de alto el fuego (NCA): DKBA, RCSS/SSA-South, CNF, KNU,KNLAPC, ALP, PNLO, ABSDF; grupos armados no adheridos al NCA: UWSP, NDAA, SSPP/SSA-N, NMSP, KNPP, NSCN-K, KIA	--
Tailandia (sur)	Gobierno, MARA Patani (organización paraguas que representa a varios grupos armados)	Malasia
Europa		
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Armenia, Azerbaiyán	Grupo de Minsk de la OSCE (copresidido por Rusia, Francia y EEUU; el resto de miembros permanentes son Belarús, Alemania, Italia, Suecia, Finlandia y Turquía)
Chipre	República de Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre	ONU, UE, Turquía, Grecia y Reino Unido
España (País Vasco)	ETA, actores políticos y sociales del País Vasco	Grupo Internacional de Contacto (GIC), Foro Social y Foro Social Permanente
Georgia (Abjasia, Osetia del Sur)	Georgia, representantes de Abjasia y Osetia del Sur, Rusia[1]	OSCE, UE y ONU, EEUU, Rusia[2]
Moldova (Transdniestria)	Moldova, autoproclamada República de Transdniestria	OSCE, Ucrania, Rusia, EEUU y UE
Serbia – Kosovo	Serbia, Kosovo	UE, ONU
Ucrania	Ucrania, representantes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Rusia[3]	OSCE (en el Grupo Trilateral de Contacto, donde también participan Ucrania y Rusia[4]), Alemania y Francia (en el Grupo de Normandía, donde también participan Ucrania y Rusia[5])
Oriente Medio		
Irán (programa nuclear)	Irán, G5+1 (EEUU, Francia, Reino Unido, Rusia y China más Alemania), UE	--
Israel – Palestina	Gobierno israelí, Autoridad Palestina (AP)	Cuarteto para Oriente Medio (EEUU, Rusia, ONU, UE), Francia, Egipto, Rusia
Palestina	Hamas, Fatah	Cuarteto para Oriente Medio (EEUU, Rusia, ONU, UE), Francia, Egipto, Rusia
Siria	Gobierno, sectores de la oposición	Qatar, Egipto
Yemen	Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, al-houthistas, fuerzas del expresidente Alí Abdullah Saleh	ONU, Kuwait, EEUU

Las negociaciones de paz marcadas en negrita son descritas en el capítulo.
-- No existen o no hay constancia pública de la existencia de terceras partes.

1. El estatus de Rusia en el proceso de paz en Georgia está sujeto a interpretaciones diferentes. Georgia lo considera actor en conflicto y parte negociadora, mientras Rusia se considera tercera parte.
2. Ibid.
3. El estatus de Rusia en el proceso de paz en Ucrania está sujeto a interpretaciones diferentes. Ucrania lo considera actor en conflicto y parte negociadora, mientras Rusia se considera tercera parte.
4. Ibid.
5. Ibid.

3.2. Negociaciones y procesos de paz: tendencias y panorámica general en 2016

A lo largo del año 2016 se identificaron 38 procesos y negociaciones de paz a nivel mundial. El análisis de los diferentes contextos refleja una variedad de realidades y dinámicas, fruto de la diversa naturaleza de los conflictos armados y tensiones socio-políticas a las que están vinculadas las negociaciones y procesos de paz. Aun así, es posible apuntar algunas reflexiones generales e identificar algunas tendencias. En materia de **distribución geográfica**, del total de negociaciones y procesos de paz identificados en 2016, la mayor parte se concentró en África –15 casos, equivalentes a un 40%–, seguido a una mayor distancia por Asia –ocho contextos que representan el 21%–, Europa –con siete casos que suponen el 18%–, Oriente Medio –cinco contextos que equivalen el 13%– y América –tres casos que representan el 8%.

En cuanto a los **actores involucrados en la negociación**, el análisis de los diversos contextos refleja que **en un importante número de casos los principales protagonistas de las negociaciones fueron los gobiernos de los respectivos países y actores armados**. Este fue el caso de contextos como por ejemplo el de Mozambique –entre el Gobierno y el movimiento político-militar RENAMO–, Sudán del Sur –entre el Gobierno y el grupo armado SPLA-IO–, Colombia –entre el Gobierno y las FARC-EP y también con el grupo armado ELN–, Filipinas –en el caso de las negociaciones de las autoridades con el grupo armado MILF y con el MNLF–, Myanmar –con un proceso de paz que involucra al Gobierno y a diversas organizaciones armadas de oposición–, India –entre el Gobierno y diversos grupos armados en Assam y también con la organización armada de oposición NSCN-IM en el estado de Nagalandia– o Tailandia (sur) –entre las autoridades del país y el grupo MARA Patani. En otros casos, se observó una diversidad más amplia que abarcó a actores tanto políticos como armados en interlocución con las autoridades gubernamentales. Fue el caso, por ejemplo, de contextos como el de Malí (norte) –donde el proceso negociador ha involucrado en los últimos años a las autoridades nacionales y a numerosos actores políticos y armados de la región de Azawad (norte)–, Siria –donde las negociaciones indirectas han implicado tanto a una representación gubernamental como a sectores vinculados a la oposición política y armada– o Yemen –donde los interlocutores han sido, por un lado, el Gobierno depuesto y, por otro, tanto el grupo armado al-houthista como sectores vinculados al ex presidente Alí Abdullah Saleh. En otra serie de casos los procesos negociadores han tenido como protagonistas a los respectivos gobiernos con sectores de la oposición política y social del país, como ilustran los casos de Burundi o Venezuela.

En un importante número de casos los principales protagonistas de las negociaciones fueron los gobiernos de los respectivos países y actores armados

En un reflejo de las diversas dinámicas de conflicto, las negociaciones y procesos de paz analizados también dan cuenta de otros casos donde los principales interlocutores son los gobiernos de diferentes Estados, en el marco de disputas que incluyen temas de demarcación fronteriza y el estatus de determinados territorios, como en los casos de Sudán y Sudán del Sur y el de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj. **En otros contextos los participantes en la negociación son principalmente los gobiernos y entidades que pretenden la secesión, buscan un nuevo estatus político y administrativo o que aspiran a ser Estados con pleno reconocimiento internacional**. Entre estos casos se cuentan varios en Europa, por ejemplo, el de Georgia en lo referente a Abjasia y Osetia del Sur; Moldova y la autoproclamada república de Transdniestria; Ucrania y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk; o el de Serbia y Kosovo –si bien el estatus legal internacional de Kosovo no está definido, ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países. Más allá del continente europeo, también cabe mencionar casos de larga data, como el de Marruecos-Sáhara Occidental –la RASD no ha sido reconocida internacionalmente, pero al mismo tiempo el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por la propia ONU como un territorio pendiente de descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no está reconocida por el derecho internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas–, o el de Israel y Palestina –donde aún está pendiente la configuración y reconocimiento internacional del Estado palestino, pese a su admisión como "Estado observador" en la ONU en 2012 y su reconocimiento por numerosos Estados. **Los procesos de paz analizados en 2016 también incluyen otros casos especiales desde el punto de vista de los actores implicados en la negociación, como por ejemplo el caso de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní**, que además del Gobierno de Teherán involucraron a otros actores internacionales como el G5+1 (grupo constituido por EEUU, Rusia, Francia, Reino Unido y China más Alemania) y la UE, todos firmantes del acuerdo de 2015, en fase de implementación durante 2016. **Otro ejemplo es el caso del País Vasco**, con un proceso protagonizado por el grupo armado ETA y actores políticos y sociales vascos, pero sin la participación del Gobierno español.

En lo que respecta a las **terceras partes implicadas en procesos de paz y negociación**, cabe mencionar que si bien hay muchos casos donde se conoce públicamente cuáles son los actores involucrados en tareas de mediación, facilitación y acompañamiento, en otros contextos estas tareas se llevan a cabo de manera discreta y no pública. En términos generales, es posible identificar algunas dinámicas generales

relacionadas con la intervención de terceras partes. Entre ellas, el **papel desempeñado por Naciones Unidas en un destacado número de contextos** –13 de los 38 procesos analizados, un tercio del total (34%)–, en especial en África y Oriente Medio. En algunos casos la ONU aparece involucrada como tercera parte a través de enviados especiales –como por ejemplo en los casos del conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental, en Libia, Siria o en Yemen–, en el marco de plataformas o grupos de actores que pretenden actuar como facilitadores del diálogo –como en el caso de Israel-Palestina, donde forma parte del Cuarteto para Oriente Medio–; o a través de sus misiones y representantes especiales del secretario general de la ONU en terreno –como en RCA, RDC, Malí y Sudán (Darfur).

También cabe mencionar el rol de tercera parte que juegan organizaciones regionales en diversas áreas, en especial en África y Europa. De los 15 casos de negociaciones y procesos de paz identificados en el continente africano, en 11 de ellos había organizaciones regionales involucradas en la facilitación de los contactos entre los actores en conflicto, entre ellas la Unión Africana (UA), la Comunidad de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), la Comunidad de Estados de África del Este (EAC, por sus siglas en inglés), la Comunidad Económica de Estados del África Central (CEEAC, por sus siglas en francés), la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés). En Europa organizaciones regionales tuvieron un papel como tercera parte en seis de los siete procesos de paz analizados, como la Unión Europea (UE) en Serbia-Kosovo y en Chipre –aunque en este último caso con un rol secundario, en un proceso liderado por la ONU–, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj y en Ucrania y ambas organizaciones –UE y OSCE– en los casos de Georgia (Abjasia, Osetia del Sur) y Moldova (Transdniestria). Cabe destacar que la UE también desempeñó funciones como tercera parte más allá del continente europeo, en especial en contextos de África y Oriente Medio, entre ellos Mozambique, RDC, Sudán del Sur, Israel-Palestina (integrando el Cuarteto para Oriente Medio) o Siria (como parte del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, ISSG, por sus siglas en inglés).

En el caso de América, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) estuvo involucrada en la facilitación del diálogo en Venezuela. En Oriente Medio, la Liga Árabe no ha tenido un rol relevante como tercera parte y de los cinco procesos de paz analizados en 2016 sólo estuvo implicada en Siria y en el marco de una plataforma más amplia –el ISSG, integrado por 26 países y organizaciones. En los procesos de paz en Asia no hubo organizaciones regionales involucradas en la facilitación del diálogo, pero sí se observó la participación de una organización intergubernamental de carácter religioso, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI, ex Organización para la Conferencia Islámica, que reúne a 57 países musulmanes) en dos de los ocho casos analizados correspondientes a Filipinas: en las negociaciones con el MILF y también con el MNLF. Cabe destacar que la OCI también tuvo presencia como tercera parte en otros dos casos en 2016, en la RCA y en Siria (en este último caso como parte del ISSG). Más allá de la OCI, cabe mencionar que la Iglesia Católica también se implicó en algunos procesos negociadores. Entre otros contextos, en Venezuela esta participación se tradujo en la implicación del Vaticano en el equipo mediador a petición de la oposición; en Mozambique representantes de la Iglesia Católica se sumaron al equipo de mediación internacional integrado también por la UE y el presidente sudafricano Jacob Zuma; y en la RDC la Iglesia Católica congolesa fue clave para facilitar la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición a finales de diciembre.

Naciones Unidas desempeñó un papel como tercera parte en un tercio de las negociaciones analizadas en 2016

En la mayoría de los casos de negociaciones y procesos de paz analizados en 2016 terceros **Estados también participaron como mediadores o facilitadores de los contactos y el diálogo entre las partes en disputa** (con resultados dispares). Entre estos países, cabe destacar por ejemplo el papel de Argelia en escenarios africanos como Libia o Malí (norte); el de Qatar en Afganistán y en la promoción del diálogo entre los grupos Fatah y Hamas en Palestina; o el de Noruega, involucrado en la facilitación de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y también en los contactos exploratorios con el ELN, además del proceso entre el Gobierno filipino y el NDF. Según trascendió en 2016, en el pasado la diplomacia noruega también desempeñó un papel en el caso de Afganistán. En ocasiones, el papel de terceros Estados es complejo de valorar por su grado de implicación en determinados conflictos. Así, por ejemplo, Rusia aparece involucrada en algunos procesos de negociación –como Georgia (Abjasia, Osetia del Sur), Ucrania o Siria–, aunque algunas de las partes en disputa lo consideran más como un actor de la contienda que como una tercera parte. Históricamente, el papel de EEUU en lo referente al proceso palestino-israelí también ha sido puesto en cuestión por voces críticas debido a su aproximación favorable a las tesis israelíes, aunque justamente en 2016 la administración de Barack Obama rompió con una tradición de veto y se abstuvo en una votación del Consejo de Seguridad de la ONU crítica con Israel por su política de construcción de asentamientos en los territorios ocupados palestinos.

Una valoración general de los **temas de la agenda de negociación** en los distintos casos, ya sea en

fase inicial de discusión o incluso en períodos de implementación después de la suscripción de acuerdos globales o parciales, permite identificar algunos asuntos recurrentes en distintos contextos y escenarios geográficos, más allá de la singularidad propia de cada uno de los procesos. Por ejemplo, cuestiones relativas al **desarme de grupos armados, a la entrega de arsenales específicos y/o a la reintegración de combatientes**, un tema que a lo largo de 2016 estuvo presente en contextos como Mozambique, Malí (norte), RCA, Sudán del Sur, Colombia, España (País Vasco) o Yemen. Otro tema presente en los esquemas de diálogo o en los requerimientos y condiciones de algunos de los actores involucrados –o que pretenden implicarse– en un proceso de negociación tiene que ver con **demandas para la liberación de prisioneros**. Este asunto estuvo en la agenda en diversos contextos durante 2016, entre ellos Sudán, Afganistán, Filipinas (NDF), Ucrania o Yemen. En el caso concreto de las conversaciones exploratorias entre el Gobierno colombiano y el ELN, la liberación de personas secuestradas por el grupo armado también fue uno de los temas centrales de las discusiones –y de los desacuerdos– entre las partes. Otros temas vinculados a las dinámicas específicas de los conflictos y tensiones que suscitan las negociaciones tienen que ver con asuntos como el **estatus político y administrativo de determinados territorios** –por ejemplo en Sudán (Darfur), Filipinas (MILF), Moldova (Transdniestria), Ucrania (este) o Chipre–, **demarcaciones fronterizas** –en casos como el de Sudán-Sudán del Sur –o procesos de **reconciliación nacional y/o política** –por ejemplo en RCA o Palestina–, entre otros (incluyendo cuestiones vinculadas a inclusividad, reformas políticas y económicas, cronogramas electorales, formación de gobiernos de transición o unidad nacional o mecanismos de reparación a víctimas del conflicto).

Temas como el desarme de grupos armados, la entrega de arsenales, la reintegración de ex combatientes o la liberación de prisioneros estuvieron en la agenda de negociaciones y procesos de paz

Cabe destacar que las cuestiones relativas a la **declaración de treguas y altos el fuego, al respeto a compromisos de cese el fuego y a las negociaciones para el establecimiento de cese de hostilidades de largo plazo** también constituyen un tema clave y recurrente que estuvo presente en diversos contextos a lo largo de 2016. En algunos casos, como Siria o Yemen, el no respeto de los acuerdos de cese de hostilidades acabó por afectar seriamente las perspectivas de negociación y búsqueda de una salida política en estos conflictos armados. En Sudán (Kordofán y Nilo Azul), las dificultades para acordar una agenda para el cese de hostilidades y las acusaciones de violación del alto el fuego por parte del SPLM-N contra el Gobierno también acabaron en la suspensión de las negociaciones a finales de año. En Sudán del Sur, las violaciones constantes del alto el fuego derivaron en el colapso del acuerdo. En cuanto a Marruecos-Sáhara Occidental, las denuncias cruzadas por presunta violación al alto el fuego vigente desde 1991 evidenciaron los riesgos de escalada de violencia en un contexto caracterizado por el bloqueo en las negociaciones para abordar los temas sustantivos del conflicto. En otros casos, como el de Filipinas (NDF), sucesivas declaraciones unilaterales de alto el fuego por parte de los actores implicados en el conflicto pretendieron mantener abierta la vía del diálogo, no sin dificultades y retrocesos durante el año. En Colombia, en tanto, el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo se erigió como uno de los seis ejes del histórico acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.

En lo que respecta a la **evolución de las negociaciones y procesos de paz en 2016**, el análisis de los diferentes casos revela una diversidad de dinámicas. En clave positiva, al finalizar el año el **buen desarrollo de las negociaciones y la consecución de acuerdos** en algunos contextos permitía albergar ciertas expectativas sobre la evolución general de los respectivos procesos de paz. Es el caso de Colombia, donde después de 52 años de conflicto armado y más de cuatro años de negociación entre las autoridades y la guerrilla de las FARC-EP se alcanzó un acuerdo que, además del ya mencionado tema del cese el fuego definitivo, contempla temas de reforma rural, participación política, drogas ilícitas, víctimas y mecanismos de implementación y verificación. A pesar del revés que supuso el triunfo del "no" en el referéndum para ratificar el pacto, el Gobierno y las FARC-EP mantuvieron su determinación de alcanzar un acuerdo definitivo que, tras algunas modificaciones, fue refrendado por el Congreso colombiano a finalizar el año. Sin tener la trascendencia histórica del caso colombiano, otros casos donde se identificaron progresos en las negociaciones durante 2016 fueron RDC, donde el 31 de diciembre las partes en disputa suscribieron un acuerdo que podría contribuir a desbloquear la grave crisis en el país –según el pacto el presidente Joseph Kabila permanece en su cargo pero se compromete a no presentarse a las elecciones de 2017–; Somalia, donde los múltiples encuentros celebrados durante el año condujeron a la celebración de elecciones al finalizar el año; y Chipre, donde se identificaron avances significativos hacia una eventual solución definitiva del conflicto, pese a los retos pendientes. Asimismo, durante 2016 en varios escenarios se produjo la **reactivación de negociaciones después de un período de parálisis o estancamiento**, en algunos casos después de varios años. Fue el caso de los procesos de paz del Gobierno filipino con el NDF, el MILF y el MNLF, respectivamente, tras la llegada al poder del presidente Rodrigo Duterte. En estos casos la reactivación de las conversaciones fue de la mano de la adopción de algunas medidas de

fomento de la confianza –como las ya mencionadas declaraciones de alto el fuego–, aunque el diálogo no estuvo exento de dificultades. En Europa también fue el caso del proceso de paz entre las autoridades de Moldova y de la región de Transdniestria, que vivió un nuevo impulso durante 2016 tras el reinicio de las negociaciones formales entre las partes después de nuevos esfuerzos de mediación auspiciados por la OSCE (bajo presidencia alemana). En otros casos se identificaron **contactos y esfuerzos de carácter exploratorio para el establecimiento de negociaciones**, como entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, y entre el Gobierno afgano y la insurgencia talibán, con participación de EEUU. En este último contexto, pese a las diferentes iniciativas diplomáticas no se logró el inicio oficial de negociaciones, pero sí tuvieron lugar una serie de importantes encuentros de carácter no oficial.

Después de 52 años de conflicto armado y más de cuatro años de negociación entre las autoridades y la guerrilla de las FARC-EP, durante 2016 se alcanzó un acuerdo histórico en Colombia

En otra serie de casos **el diálogo entre las partes se mantuvo abierto y se celebraron diversas rondas de negociación durante el año, pero no se registraron avances significativos en temas clave o en la consecución de un acuerdo final**. Entre ellos, contextos como el de India (Nagalandia) –donde siguieron los contactos entre las partes en un clima de menor tensión y violencia–, Myanmar –donde se observaron sólo avances simbólicos, aunque de enorme importancia, en las negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados de oposición adheridos al alto el fuego nacional–, Tailandia (sur) –sin avances sustantivos en el diálogo entre las autoridades y el grupo MARA Patani–, Ucrania –donde se alcanzaron algunos acuerdos limitados en temas humanitarios y de seguridad, pero no se avanzó en los temas de fondo del conflicto–, Georgia (Abjasia-Osetia del Sur) –en un proceso con numerosas dificultades que consiguió algunos avances en materia de prevención de incidentes y aspectos humanitarios, sin obtener resultados positivos en las cuestiones sustantivas–, o Palestina –donde pese a los contactos se mantuvo la distancia entre Hamas y Fatah y los obstáculos para la formación de un gobierno de unidad efectivo y para implementar las medidas previstas en acuerdos previos entre las partes. En otra serie de contextos, las **profundas diferencias entre las partes –entre otros factores– alimentaron el persistente bloqueo en las negociaciones**, como en los casos de Marruecos-Sáhara Occidental e Israel-Palestina, donde desde hace años no se registran conversaciones directas.

Diversos procesos de negociación enfrentaron dificultades en la fase de implementación de acuerdos previos o debido a una intensificación de las dinámicas de violencia

En otros casos, se evidenciaron serias **dificultades en la fase de implementación de acuerdos** suscritos recientemente. Fue el caso, por ejemplo, de Malí (norte), como consecuencia de tensiones y divisiones entre las partes suscriptoras del acuerdo de Argelia en 2015 y continuas violaciones al cese el fuego; de Sudán del Sur, donde la puesta en práctica del acuerdo de paz alcanzado en 2015 entre sectores leales al presidente Salva Kiir y al ex vicepresidente Riek Machar enfrentó serias dificultades y llevó al anuncio del colapso del pacto en septiembre de 2016; en Libia, escenario en el que se registraron serias dificultades para implementar el acuerdo de Skhirat suscrito a finales de 2015, en particular para el establecimiento de un gobierno de acuerdo nacional, en un contexto marcado por la fragmentación institucional y una persistente violencia; y también en Serbia-Kosovo, otro contexto que enfrentó diversos problemas y una escalada retórica y que no obtuvo avances en temas clave, como la creación de una asociación de municipios en el norte de Kosovo, prevista en el acuerdo de 2013. En contraste, y aunque también enfrentó algunos obstáculos, la implementación del acuerdo sobre el programa nuclear iraní adoptado a finales de 2015 se desarrolló de acuerdo a las pautas establecidas, en línea con una evolución positiva del proceso en los últimos años. No obstante, el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU y su relación con Israel alentaron algunas dudas sobre las perspectivas futuras de este proceso.

A lo largo de 2016 también se registraron otros **contextos en los que la intensificación de la violencia y de la tensión afectó seriamente las perspectivas de la negociación**, derivando en algunos casos en un deterioro o bloqueo de la vía dialogada. Este fue el caso, por ejemplo, de Mozambique, donde la intensificación de las tensiones y el asesinato de uno de los miembros del equipo negociador afectaron seriamente el curso de las conversaciones entre el Gobierno y el grupo opositor RENAMO; el de la RCA, debido a la desconfianza entre los diferentes grupos armados, algunos antiguos aliados, que ha conducido a la práctica partición del territorio y consolidación del control territorial por parte de algunos grupos armados; el de Yemen, escenario en que las persistentes violaciones a la tregua y las diferencias entre las partes derivaron en un estancamiento del diálogo auspiciado por la ONU a partir de agosto de 2016; o en el caso de Siria, donde la reducción limitada y parcial de la violencia permitió retomar los contactos indirectos entre las partes en el marco del proceso de Ginebra durante los primeros meses del año, aunque sin capacidad de recorrido debido a que la intensificación posterior de las hostilidades volvió a poner en entredicho los esfuerzos por facilitar una vía de salida política.

Adicionalmente, cabe destacar que diversos procesos negociación se vieron afectados por el fenómeno de

los **spoilers o saboteadores**, actores que no participan en el proceso de paz y que con sus acciones amenazan con minar los esfuerzos por reconducir el conflicto por la vía dialogada, así como por la fragmentación o divisiones internas de actores involucrados en el diálogo que amenazaban total o parcialmente las perspectivas del proceso de paz. En el caso de Malí (norte), los actores armados de línea yihadista marginados de las negociaciones de paz mantuvieron sus acciones violentas en el país y algunos de los actores signatarios del pacto enfrentaron profundas tensiones y desacuerdos. En Somalia, el grupo armado al-Shabaab intensificó sus ofensivas en un intento –sin éxito– por desestabilizar el proceso de paz en el país. En Afganistán, los intentos por entablar conversaciones se produjeron en paralelo a serias divisiones en el seno de los talibán sobre la conveniencia o no de negociar con las autoridades locales y sobre el papel que debería jugar Pakistán. Y en el caso de Tailandia (sur), por ejemplo, las conversaciones entre el Gobierno y MARA Patani transcurrieron en un clima de dudas sobre la capacidad de control o ascendencia de este grupo armado sobre el BRN, la principal organización responsable de la violencia en la zona meridional del país.

Con respecto a **la integración de la dimensión de género en los procesos de paz**,[6] cabe destacar la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, el más avanzado en materia de igualdad de género hasta la fecha con la inclusión de un enfoque de género de forma transversal a todo el articulado y que fue el resultado de una participación significativa de las mujeres en el proceso, tanto en las delegaciones negociadoras como representando a la sociedad civil. Cabe mencionar también que en algunos de los casos analizados en 2016 hubo un reclamo explícito por una **mayor participación de mujeres en las negociaciones**, como por ejemplo en Myanmar –donde organizaciones de mujeres estuvieron presentes sólo como observadoras, pero exigieron una participación directa a través de una cuota de 30%–, en Chipre –donde el secretario general de la ONU demandó otorgar una mayor relevancia al Comité de Igualdad de Género y a la implementación de compromisos en el marco de la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad– o en Siria –donde se consiguió una mayor formalización de la presencia de mujeres en el proceso negociador auspiciado por la ONU a través de la formación de un grupo consultivo, el Women's Advisory Board, que asesora al enviado especial para Siria.[7] A pesar de los numerosos retos que persisten para la lograr la participación significativa de las mujeres en los procesos de paz, así como la integración de la perspectiva de género en los acuerdos resultantes, se constatan algunos avances en este ámbito, en consonancia con lo establecido por la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y todas las resoluciones posteriores que conforman la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.

6. Véase el Capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

3.3. Procesos de paz: evolución anual

3.3.1. África

África Austral

Mozambique	
Actores negociadores:	Gobierno, grupo armado RENAMO
Terceras partes:	Equipo mediador nacional, SADC, Iglesia Católica, UE, Jacob Zuma (presidente sudafricano), Jakaya Kikwete (ex presidente tanzano)
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de paz de Roma (1992)

Síntesis:
El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), apoyado por las minorías blancas gobernantes en la antigua Rhodesia (hoy Zimbabwe) y la Sudáfrica del apartheid, en el contexto de la Guerra Fría. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de guerra que causó un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico aunque con elevados niveles de desigualdad. En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas de un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de cambios, principalmente la reforma de la comisión electoral nacional y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992, hecho que finalmente ocurrió, desatando la vuelta a los enfrentamientos armados en abril de 2013 y la posterior apertura de un nuevo proceso de negociación de paz acordado en agosto de 2014.

La intensificación de las tensiones producidas durante el año en Mozambique impidió lograr avances significativos en la mesa de negociación entre el Gobierno y el grupo opositor RENAMO, que siguió exigiendo al Gobierno de Filipe Nyusi el control administrativo de las seis provincias donde obtuvo mayoría de votos en las elecciones de 2014, así como una nueva fórmula de integración de sus combatientes en las fuerzas de seguridad nacional. Durante los primeros meses del año el diálogo de paz permaneció roto debido a que el líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, se negó a reunirse con el Gobierno hasta

que no se resolviese la demanda de autogobierno en las seis provincias. Dhlakama también exigió la mediación internacional de Jacob Zuma y de la Iglesia Católica como precondición para reiniciar conversaciones y reunirse con el presidente Filipe Nyusi. Sin embargo, durante el mes de mayo, RENAMO modificó su postura y anunció que aceptaba participar en la mesa de negociaciones y retomar el diálogo con el Gobierno, presentando a su vez los nombres de los integrantes de su equipo negociador, que estará conformado por tres diputados del partido: José Manteigas, Eduardo Namburete y André Magibire. La representación gubernamental ya había sido designada anteriormente por el presidente Nyusi durante el mes de marzo y estuvo conformada por Jacinto Veloso, miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, María Benvinda Levi, consejera del presidente, y Alves Muteque, cuadro de la jefatura. Ambos equipos mantuvieron una primera reunión el 25 de mayo en la sede del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Posteriormente, el presidente Nyusi accedió a la participación de mediadores internacionales, inicialmente representantes de la Iglesia Católica, la UE y el presidente sudafricano, Jacob Zuma.

El Gobierno mozambiqueño accedió a la mediación internacional bajo un equipo conformado por representantes de la Iglesia Católica, la UE y el presidente sudafricano Jacob Zuma

A finales de junio ambas partes decidieron ampliar los equipos negociadores, pasando de tres miembros a seis. Por parte del Gobierno los nuevos integrantes designados fueron: Antonio Hama Thai, veterano de la guerra de independencia, ex Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y actualmente diputado parlamentario del partido FRELIMO; Alfredo Gamito, ex ministro de Administración del Estado; y Edmundo Galiza Matos Junior, actual portavoz del grupo parlamentario FRELIMO. Mientras que por parte de RENAMO los tres nuevos negociadores fueron: Jeremias Pondeca, ex diputado del Parlamento de Mozambique; Leovigildo Buanacasso, ex candidato de RENAMO a alcalde de la ciudad de Cuamba; y María Joaquina Inacio, ex miembro de la Comisión Nacional Electoral (CNE). Con los nuevos equipos, la mesa de negociación se retomó el 21 de julio, pero fue suspendida dos días después debido a desacuerdos. El 17 de agosto se acordó el establecimiento de un comité para la redacción de una propuesta legislativa que permitiese el nombramiento de gobernadores de la oposición en las seis provincias demandadas por la oposición. Las conversaciones fueron pospuestas hasta el 12 de septiembre sin que las partes lograsen un acuerdo de alto el fuego.

En septiembre se avanzó en el punto relativo a la reintegración de combatientes de RENAMO, acordando que el grupo opositor prepararía un plan al respecto. Posteriormente, el 8 de octubre, y a raíz del asesinato en la capital, Maputo, de Jeremias Pondeca, miembro del equipo de negociación de RENAMO, se volvieron a detener las negociaciones. El asesinato de Pondeca fue duramente condenado por todas las partes. El día 18 el equipo mediador reanudó las conversaciones de forma separada, contando además con la participación del ex presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, quien se unió al equipo de mediadores internacionales. El 22 de octubre el equipo mediador intentó reunirse con Afonso Dhlakama en su domicilio en Gorongosa, sin obtener resultado. Los enfrentamientos armados hicieron que se suspendieran nuevamente las negociaciones hasta el 10 de noviembre. Mario Raffaelli, coordinador del equipo internacional de mediación y representante de la UE, propuso a ambas delegaciones el envío al Parlamento de un conjunto de puntos sobre la descentralización, así como también una hoja de ruta para tratar los otros puntos de la agenda de las negociaciones. A principio de diciembre, y sin lograr nuevos avances en el alto el fuego, el equipo de mediadores internacionales abandonó Mozambique, declarando que volverían cuando hubiese una invitación formal de ambas partes. Finalmente, el 26 de diciembre el presidente Nyusi y Dhlakama mantuvieron una conversación telefónica que sirvió para acercar posturas, lo que llevó a que la oposición declarase una tregua unilateral hasta principios de año para que la población mozambiqueña pudiera recibir el año nuevo en un clima de paz. Dhlakama afirmó que la tregua podría prolongarse en los primeros meses del 2017 y dar pie a un ambiente favorable para el reinicio de las negociaciones de paz.

África Occidental

Malí (norte)	
Actores negociadores:	Gobierno, Coordinadora Movimientos de Azawad (CMA) –MNLA, MAA y HCUA–, Plataforma –GATIA,CMFPR, CPA, facción del MAA–
Terceras partes:	Argelia, Francia, ECOWAS, UA, ONU
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de paz de Argelia (2015)

Síntesis:
El conflicto armado que afecta a Malí desde principios de 2012 derivó en una crisis institucional –materializada en un golpe militar– y en un progresivo control de la zona norte del país por parte de grupos tuaregs y yihadistas. Desde el inicio del conflicto, diversos actores internacionales –entre ellos ECOWAS, UA y ONU– han promovido iniciativas conducentes al restablecimiento del orden institucional y a la recuperación de la integridad territorial de Malí. En paralelo a las aproximaciones militaristas para enfrentar la crisis, se iniciaron contactos exploratorios con algunos grupos armados (MNLA y Ansar Dine) para buscar una salida negociada. Pese al anuncio de un compromiso con el cese de hostilidades de estos grupos insurgentes, a principios de 2013 una ofensiva de Ansar Dine precipitó una intervención militar internacional liderada por Francia. En mayo de 2014 se volvió a poner en marcha un nuevo proceso negociador, liderado

por Argelia, en el que el Gobierno de Malí negoció a dos bandas con las dos coaliciones creadas por los grupos armados: la Coordinadora (grupos afines a una fórmula federalista/secesionista) y la Plataforma (grupos afines al gobierno). En julio de 2015 se logró finalmente la firma de un acuerdo de paz en Argel entre el Gobierno, la CMA y la Plataforma, quedando los grupos de corte yihadista fuera de las mesas de negociación, lo que ha mantenido las hostilidades por parte de estos grupos en un nuevo contexto de implementación de las cláusulas presentes en el acuerdo de paz.

La implementación del Acuerdo de Paz de Argelia, firmado en julio del 2015 entre el Gobierno maliense, los grupos árabe-tuareg vinculados a la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) y los grupos progubernamentales pertenecientes a la Plataforma, **se deterioró significativamente durante el año debido a las continuas violaciones al cese al fuego y a las tensiones y divisiones internas entre los grupos firmantes**, sobre todo en la CMA. Ya a principios de año el Consejo de Seguridad de la ONU hizo un llamamiento a las partes firmantes del acuerdo para que dieran prioridad a la aplicación de las disposiciones del mismo, la implementación del programa de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes (DDR) y el inicio del proceso de descentralización, e instó a las partes a desplegar las patrullas de seguridad conjuntas en el norte del país, debido al deterioro en la situación de seguridad por el accionar de los grupos yihadistas. Debido a los grandes desafíos sobre la implementación del acuerdo de paz, los días 17 y 18 de enero se organizó una reunión de emergencia a instancias de Argelia –país que encabeza la mediación internacional– en la que se abordaron los retrasos en la implementación de las cláusulas del acuerdo, así como las tensiones existentes entre los grupos armados firmantes. Tras la reunión, el Gobierno maliense nombró a los gobernadores de las recién creadas regiones norteñas del país, Menaka y Taoudeni, lo que constituyó un primer avance hacia la descentralización y el restablecimiento de la administración estatal en el norte. Durante el mes de enero, Mongi Hamdi dejó los cargos de Representante Especial del Secretario General (SRSG) para Malí y Jefe de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), dando paso a la designación de Mahamat Saleh Annadif. A principios de febrero, las tensiones entre la CMA y la Plataforma volvieron a manifestarse por el control de la ciudad de Kidal, lo que dio pie al inicio de conversaciones entre ambos grupos armados y al logro de acuerdos, entre ellos, el establecimiento de patrullas conjuntas en la ciudad. Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU visitó Malí entre los días 4 y 6 de marzo para evaluar la aplicación del acuerdo de paz, alentando a las partes a seguir avanzando y apoyando los acuerdos de paz locales que se estaban logrando en el país. Además, la misión se reunió con organizaciones de mujeres y destacó la escasa participación de éstas en todo el proceso.[8]

La implementación del Acuerdo de Paz de Argelia de 2015 entre el Gobierno maliense y los grupos árabe-tuareg se deterioró debido a las continuas violaciones al cese al fuego y a las tensiones y fracciones internas entre los grupos firmantes

Algunos de los puntos más controvertidos en la aplicación de las cláusulas del Acuerdo de Paz, tuvieron que ver con la implementación y la cobertura del programa DDR y con la nominación de las autoridades provisionales en el norte del país. Al respecto, el 13 de mayo, cientos de manifestantes en la ciudad de Gao solicitaron al Gobierno maliense y a la misión de la ONU (MINUSMA) la inclusión en el programa de DDR de más jóvenes locales para que se pudieran beneficiar. Posteriormente estallaron manifestaciones en Gao, Tombuctú y Bamako, en protesta por el nombramiento de las autoridades y la exclusión de los jóvenes de los programas de DDR, así como por la represión de los cuerpos de seguridad. En medio de la creciente tensión, el 14 de junio se acordó un nuevo calendario para el nombramiento de las autoridades provisionales y la restauración de los servicios públicos en cinco regiones del norte. El 8 de julio, en otro gesto hacia el acuerdo de paz, se hizo oficial la designación realizada por el presidente maliense de su Ejecutivo, que incluyó a nueve nuevos ministros, entre ellos a Nina Walett Intalou, del grupo rebelde Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA), integrado en la CMA, quien asumió el Ministerio de Turismo y Artesanía. Por otro lado, el 17 de julio, los grupos armados de origen tuareg GATIA (miembro de la Plataforma) y HCUA (miembro de la CMA) firmaron un acuerdo en Niamey, capital de Níger, sobre seguridad local y reparto del poder para resolver las disputas por el control de la ciudad de Kidal y sus rutas de acceso. Sin embargo, este acuerdo no logró reducir los enfrentamientos en Kidal entre los grupos armados tuaregs, volviendo a producir enfrentamientos entre ambas organizaciones a partir del mes de agosto. Estos enfrentamientos hicieron que la CMA no se sumara al establecimiento de las patrullas conjuntas previstas en el acuerdo, que se iniciaron a principios de octubre con miembros del operativo francés Barkhane, de las Fuerzas Armadas malienses y de los grupos rebeldes de la Plataforma patrullando el área de Ménaka-Ansongo. Por otro lado, a mediados de octubre, el Gobierno maliense designó las autoridades provisionales en las cinco regiones del norte, medida que fue contestada por algunas facciones pertenecientes a la CMA (el Movimiento para la Salvación de Azawad –MSA–, la Coalición del pueblo de Azawad –CPA–, el Congreso para la Justicia en Azawad –CJA– y miembros de la Coordinadora Patriótica de Movimientos y Fuerzas en Resistencia –CMFPR2–) y a la Plataforma, quienes cuestionaron el reparto de las listas y su composición mayoritaria por facciones de la región de Kidal. El 20 de noviembre, y aún sin el establecimiento de las autoridades de transición, el Gobierno celebró las

8. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

elecciones locales en la región, que se saldó con el boicot de la CMA a las mismas, produciéndose incidentes en algunos puntos y no pudiéndose realizar los comicios en las regiones de Kidal, Taoudeni y Ménaka, y sólo de manera parcial en Gao, Tombuctú y Mopti. Al finalizar el año, y debido al mantenimiento de los enfrentamientos entre los grupos armados pertenecientes a la CMA y a la Plataforma, la CMA solicitó la mediación de Argelia para convocar una reunión de alto nivel entre las partes firmantes del Acuerdo de Paz, amenazando con suspender su participación en el proceso de paz. El 31 de diciembre el presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keïta, anunció la celebración de una conferencia nacional de diálogo para el mes de marzo de 2017, en la cual se preveía realizar un profundo debate sobre los problemas nacionales y las causas del conflicto en el norte del país.

Cuerno de África

Somalia	
Actores negociadores:	Gobierno Federal, líderes de los estados federales y emergentes (Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste), movimiento político-militar Ahlu Sunna Wal-Jama'a, líderes de clanes y subclanes
Terceras partes:	ONU, IGAD, Turquía, entre otros
Acuerdos relevantes:	Hoja de Ruta para poner fin a la transición (2011), Acuerdo de Kampala (2011), Constitución Federal Provisional (2012), Declaración de Mogadiscio sobre el Foro Consultivo Nacional (2015)

Síntesis:
El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra la dictadura de Siad Barre y tres años después consiguió derrocarlo. Desde 1991, se han celebrado más de 15 procesos de paz para tratar de establecer una autoridad central con diferentes propuestas. Cabe destacar los procesos de Addis Abeba (1993), Arta (2000) y Mbagathi (2002-2004). El centralismo del Estado somalí había derivado en un elevado autoritarismo en tiempos de Barre, por lo que las diferentes propuestas pretendían establecer un Estado que no concentrara el poder, fórmula ampliamente rechazada por la sociedad somalí. Sin embargo, algunos clanes y señores de la guerra rechazaron el modelo descentralizado o federal porque representaba una amenaza a su poder. El poder de algunos señores de la guerra que han convertido el conflicto en su modus vivendi, la representatividad y los equilibrios de cuotas de poder para configurar el futuro Gobierno entre los diferentes actores y clanes que componen la estructura social somalí agraviados y enfrentados durante la dictadura de Siad Barre y tras años de guerra, la injerencia de Etiopía y Eritrea y la postura errática de la comunidad internacional han dificultado la resolución del conflicto. El ascenso del Islam político como alternativa de poder a través de los tribunales islámicos y la internacionalización del conflicto con la irrupción de combatientes extranjeros en el brazo armado de los tribunales, al-Shabaab, así como la invasión etíope y el papel de EEUU en la lucha contra el terrorismo, han contribuido a dificultar la situación. El Gobierno Federal de Transición, surgido del proceso de paz de Mbagathi (2004), finalizó su andadura en 2012 dando paso al Gobierno Federal. Este Gobierno debía ser el encargado de celebrar las elecciones en 2016. El Foro Consultivo Nacional celebrado en 2015 sentó las bases para que en 2016 se alcanzaran los diferentes acuerdos de implementación del proceso electoral, que se celebró a finales de 2016 y principios de 2017.

Somalia celebró en 2016 el proceso electoral que debe culminar con las elecciones presidenciales a principios de 2017. Según la Constitución Federal Provisional aprobada en 2012, el mandato del Parlamento y del Gobierno Federal debía finalizar en agosto y septiembre de 2016. Durante la primera mitad del año se celebraron diversas rondas de negociación para acordar el modelo de proceso electoral e implementar las decisiones acordadas en el proceso consultivo nacional celebrado en 2015. Estas rondas fueron acompañadas de numerosos encuentros a nivel local entre los líderes políticos regionales, los ancianos líderes de clan y los diferentes actores políticos y organizaciones de la sociedad civil. En la reunión celebrada en Kismayo a principios de año el Gobierno anunció la celebración de las elecciones durante 2016, aunque descartó la celebración de elecciones directas y universales debido a la situación de inseguridad en diversas partes del país, tal y como ya había señalado en julio de 2015. Ante esto, los principales actores políticos estaban divididos sobre qué modelo de proceso electoral y qué circunscripción electoral debía ser la más adecuada para celebrar el proceso. Así, algunos actores políticos sugirieron que las elecciones parlamentarias se celebraran en base a las 18 regiones que tiene el país, mientras que otros señalaron que la circunscripción debía configurarse a partir de los estados miembros federales existentes y emergentes. De las conclusiones del proceso consultivo celebrado en 2015, el nuevo Gobierno Federal debía formarse sobre la base de la comunidad y de la geografía, de acuerdo a la fórmula de reparto de poder proporcional entre clanes "4.5", en referencia a los cuatro grandes clanes (Issak, Darod, Hawiye y Dir) y a los clanes minoritarios, entre los que se distribuye la fracción final. En abril, el representante especial del secretario general de la ONU, Michael Keating, declaró que el proceso involucraría a 100 veces más de electores que en 2012, y sería implementado de una forma más estructurada y transparente que el precedente. Además, añadió que el proceso de 2016 debía ser el trampolín para que las elecciones de 2020 sean una persona-un voto.

Sin embargo, no fue hasta agosto que se alcanzó un acuerdo sobre el calendario electoral y la fórmula de votación entre los presidentes de las diferentes regiones del país y el presidente del Gobierno Federal, Hassan Sheikh Mohamud, con el apoyo del Federal Indirect Electoral Implementation Team (FIEIT) apoyado por la ONU. En 2012, 135 ancianos líderes clánicos

escogieron a los miembros del Parlamento. Según la hoja de ruta actual, 13.750 personas de todos los estados federales tenían que escoger a los 275 parlamentarios, y se creará una cámara alta formada por 54 senadores que estará escogida por los estados federales. Finalmente, tras prolongadas negociaciones sobre los detalles del modelo electoral, junto con algunas demoras técnicas, el 15 de octubre comenzaron las elecciones parlamentarias federales. A 31 de diciembre, se había elegido a 43 miembros para los 54 escaños de la cámara alta y a 258 miembros de los 275 escaños de la cámara baja. El nuevo Parlamento Federal fue inaugurado el 27 de diciembre en una sesión conjunta de ambas cámaras. Posteriormente comenzaron los preparativos para la elección de los presidentes de las cámaras y del presidente del país. Aunque el proceso indirecto se vio sometido a acusaciones de fraude y corrupción, en términos globales supuso un importantísimo avance para sentar las bases de las nuevas instituciones políticas del país.

Somalia celebró con éxito el proceso electoral que debe culminar con las elecciones presidenciales a principios de 2017

El Foro de Líderes Nacionales, integrado por líderes federales y regionales, desempeñó un papel fundamental para solventar las cuestiones relacionadas con las elecciones, como el apoyo a un código de conducta para todos los candidatos presidenciales y parlamentarios y el establecimiento de un mecanismo independiente de solución de controversias electorales, según destacaron los informes de la ONU. Los casos verificados de mala práctica electoral hicieron que el Foro ordenara la repetición de las elecciones para cinco escaños parlamentarios, aunque las acusaciones y sospechas se ampliaban a otras decenas de escaños. En total, votaron para elegir a los miembros de la cámara baja cerca de 13.000 delegados de todo el país, y las asambleas regionales eligieron a los miembros de la cámara alta. A 31 de diciembre, la representación de las mujeres era del 24% en la cámara baja y del 23% en la cámara alta, una mejora considerable respecto a la anterior composición del Parlamento Federal (14% en la cámara baja), aunque por debajo del objetivo del 30% acordado por el Foro. Del costo del proceso electoral (14 millones de dólares), el 60% fue sufragado por donantes internacionales, el Gobierno Federal de Somalia aportó el 10% y el 30% se cubrió con las tasas de inscripción de los candidatos. Durante el año también se llevó a cabo la revisión de la Constitución Federal Provisional y el comité encargado de esta labor decidió que las recomendaciones elaboradas se trasladarían al nuevo Parlamento. Se celebraron también dos talleres en Mogadiscio con el apoyo financiero y técnico de las Naciones Unidas, donde se reunieron representantes de las mujeres y los jóvenes de todas las regiones de Somalia y definieron sus prioridades con respecto a la revisión de la Constitución Federal Provisional y trasladaron sus recomendaciones al Comité de Supervisión.

Las conversaciones entre el Gobierno Federal y Somalilandia para su participación en el proceso electoral y en el proceso de creación del Estado siguieron estancadas durante el año

En paralelo, el proceso de creación del Estado federal de Somalia se completó con la fusión el 9 de octubre de las regiones de Hiraan y Shabelle Dhexe en la nueva Administración Provisional de HirShabelle, después de intensas negociaciones. Se designó a Jowhar como capital del nuevo estado, la Asamblea Estatal recién establecida eligió a un presidente y vicepresidente regionales y al presidente y vicepresidente de la Asamblea. Después de intensas gestiones efectuadas por el Gobierno Federal y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la mayoría de los ancianos de los clanes que anteriormente se habían opuesto al proceso aceptaron adherirse a él, con la excepción del líder del subclan Habar Gidir-Hawadle. En consecuencia, el Estado federal quedó formado, teóricamente, por Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste y Somalilandia. Somalilandia, que no tiene relaciones con el Gobierno Federal, no participó en el proceso electoral ni envió nominaciones para la cámara alta, aunque el Gobierno Federal lo considera uno más de los estados federales. Las conversaciones entre el Gobierno Federal y Somalilandia para su participación en el proceso electoral y en el proceso de creación del Estado siguieron estancadas durante el año. En este sentido, Somalilandia concluyó en septiembre la inscripción electoral en preparación de sus propias elecciones parlamentarias y presidenciales, previstas para marzo de 2017 pero que fueron aplazadas, aduciendo la necesidad de revisar la asignación de escaños en las regiones de Awdal, Sool y Sanaag oriental, lo que provocó el rechazo de los partidos de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional. Se inscribieron unos 850.000 votantes, que incluían, por primera vez, a votantes en los territorios en disputa de Sool, Sanaag y Cayn, a pesar de los enfrentamientos entre las fuerzas de Somalilandia y Puntlandia en Sanaag en julio, en que murieron cinco personas. Las conversaciones oficiales entre las dos partes hicieron que se redujeran las tensiones y se concluyera satisfactoriamente la inscripción de los votantes. Cabe destacar que el 13 de septiembre, la IGAD celebró la 28º cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno en Mogadiscio, la primera cumbre de ese tipo en territorio somalí en 42 años. La ONU y el Gobierno Federal también estuvieron promoviendo la creación de un foro estable de la comunidad internacional integrado por seis de los mayores contribuyentes internacionales a la reforma del sector de la seguridad de Somalia, es decir, EAU, EEUU, Reino Unido, Turquía, la UE y la ONU. Por su parte, al-Shabaab aumentó los ataques durante el año para intentar desestabilizar el proceso, sin éxito, y no se tuvo constancia de contactos entre el Gobierno Federal y al-Shabaab para iniciar un proceso de paz.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Actores negociadores:	Gobierno, oposición política y social agrupada en el Conseil National pour le respect de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et la Restauration d'un Etat de Droit (CNARED)
Terceras partes:	Comunidad de Estados de África del Este (East African Community, EAC)
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de Arusha para la paz y la reconciliación en Burundi (2000), Acuerdo global de alto el fuego (2006)

Síntesis:
La mediación iniciada en 1998 por el presidente tanzano Julius Nyerere y culminada por el sudafricano Nelson Mandela cristalizó en la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000, que sentó las bases para poner fin al conflicto en Burundi iniciado en 1993. Este acuerdo, aunque no redujo totalmente el clima de violencia hasta unos cuantos años más tarde (con la firma del pacto entre las FNL y el Gobierno, en 2006, y el inicio de su implementación a finales de 2008), supuso el inicio del proceso de transición política e institucional que acabó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, sentaron las bases de futuro para superar el conflicto y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ensombreció el proceso de reconciliación y provocó la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales también calificadas como fraudulentas en abril de 2015, la subsiguiente escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. Desde entonces, la EAC ha facilitado sin éxito un diálogo político entre el Gobierno y la coalición CNARED, que agrupa a la oposición política y social, parte de ella en el exilio por ser considerada como la responsable o cómplice del golpe de Estado de 2015.

Casi dos años después del inicio de la crisis política en el país, desencadenada por la decisión del partido en el poder, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), de apoyar la candidatura del presidente Pierre Nkurunziza para un tercer mandato presidencial que ganó en julio, la situación política permaneció totalmente estancada y el clima de violencia no hizo más que deteriorarse. **Los esfuerzos regionales por resolver la crisis por medio de un diálogo político inclusivo bajo los auspicios de la Comunidad de Estados de África del Este (EAC) no consiguieron ningún avance durante el año**. En paralelo, se celebró un proceso de diálogo nacional entre diversos partidos y el CNDD-FDD bajo los auspicios de la Comisión Nacional para el Diálogo Interburundés (CNDI) establecida por el Gobierno, cuya legitimidad e inclusividad fue cuestionada por la propia ONU. Las conclusiones que figuran en el informe provisional de la CNDI de agosto de 2016 incluían factores de riesgo como la eliminación de los límites a los mandatos presidenciales y otras enmiendas constitucionales que, de aprobarse, minarían el Acuerdo de Arusha del año 2000. En este sentido, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, nombrado mediador oficial por la EAC, señaló que el CNARED[9] era la principal coalición opositora del país, por lo que su presencia en el CNDI era determinante de cara a legitimar este proceso y su participación se consideró decisiva en cualquier intento de negociación política. La ONU y la UA llevaron a cabo una ofensiva diplomática durante diferentes fases del año para promover el diálogo político facilitado por la EAC.

En el marco del proceso de diálogo liderado por la EAC se celebraron tres reuniones encabezadas por el presidente Museveni, como mediador, y el ex-presidente tanzano Benjamin Mkapa, como facilitador. La primera se celebró en Entebbe (Uganda) en diciembre de 2015 y las otras dos en Arusha (Tanzania) en mayo y julio de 2016, aunque con retrasos y ausencias de las partes. Hasta diciembre de 2016 el facilitador había celebrado consultas por separado con el Gobierno y algunos miembros de la oposición política. No obstante, no se produjo un diálogo directo entre los representantes del Gobierno y de la coalición política y social, CNARED. El Gobierno manifestó su compromiso con el diálogo promovido por la EAC pero rechazó mantener contactos con los implicados en el golpe de Estado fallido de mayo de 2015 y con los dirigentes de la sociedad civil del movimiento "Halte au troisième mandat", de oposición al tercer mandato, que componen el CNARED. El Gobierno, en cambio, pidió que el proceso de diálogo volviera a tener lugar en el interior del país y se fusionara con el proceso de la CNDI, decisión rechazada por la EAC. Ante las dificultades para llevar a cabo este diálogo, Mkapa solicitó a los países de la región que presionaran al Gobierno y a la oposición para forzar un compromiso con el diálogo sin condiciones previas. El 8 de septiembre se celebró una cumbre de jefes de Estado de la EAC en Dar es Salaam, Tanzania, en la que se manifestó su apoyo al facilitador, y después de la cumbre, Mkapa preparó una hoja de ruta para el proceso de diálogo y la presentó al mediador, el Presidente Museveni, el 2 de noviembre. La hoja de ruta preveía una serie de compromisos entre diciembre de 2016 y junio de 2017, que

El facilitador de las negociaciones de paz de la EAC entre el Gobierno burundés y la oposición, el tanzano Mkapa, fue acusado de sesgo a favor del régimen

9. CNARED está formado por 22 partidos y movimientos políticos opositores y liderada por Jean Minani, quien ha sido presidente de la Asamblea Nacional en dos ocasiones y líder del partido FRODEBU.

culminarían en un acuerdo final que se alcanzaría en junio. En diciembre, Mkapa visitó Bujumbura y consultó con representantes del Gobierno y el propio Nkurunziza la hoja de ruta propuesta, pero al concluir la visita, el facilitador señaló en una conferencia de prensa la legitimidad del tercer mandato de Nkurunziza y remarcó que el diálogo se centraría en la preparación de unas elecciones libres y justas en 2020, lo que provocó el rechazo de la oposición política y de la sociedad civil que calificaron a la mediación tanzana de amateurismo, de colusión y sesgo a favor del régimen, y pidieron una reunión con el líder mediador de la EAC, Museveni. **CNARED exigió el relevo inmediato de la facilitación tanzana e hizo un llamamiento a que la ONU sustituyera a Tanzania en el diálogo interburundés, por lo que a finales de 2016 el proceso se situó al borde de la ruptura total**.

La creación del Grupo de Apoyo Internacional en sustitución del Grupo de Contacto Internacional sobre la RCA simbolizó un nuevo marco para la colaboración internacional, al que se sumó China

RCA	
Actores negociadores:	Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias antibalaka
Terceras partes:	UA, CEEAC, ONU, OCI
Acuerdos relevantes:	Pacto republicano para la paz, la reconciliación nacional y la reconstrucción en la RCA (2015)

Síntesis:
Desde su independencia en 1960, la situación en la República Centroafricana se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Tras las elecciones de 2005, en las que venció François Bozizé y que consolidaron el golpe de Estado perpetrado previamente por éste, surgen diferentes movimientos insurgentes en el norte del país, marginado históricamente y de confesión musulmana, que en diciembre de 2012 forzaron la celebración de negociaciones. En enero de 2013 en Libreville el Gobierno de François Bozizé y la coalición de grupos armados, llamada Séléka, acordaron un Gobierno de transición pero Séléka decidió romper el acuerdo y tomó el poder derrocando a Bozizé. No obstante, milicias de autodefensa ("antibalaka"), sectores del Ejército y partidarios de Bozizé se rebelaron contra el Gobierno de Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizada, y en diciembre de 2014 una nueva ofensiva puso fin al Gobierno de Séléka y se configuró un Gobierno de transición liderado por Catherine Samba-Panza. Los líderes regionales, encabezados por el congolés Denis Sassou-Nguesso, facilitaron iniciativas de diálogo en paralelo a la configuración de un proceso de diálogo nacional. El proceso de diálogo nacional culminó en mayo de 2015. Algunos de los acuerdos alcanzados fueron implementados, como la celebración de las elecciones que pusieron fin a la fase de transición, pero el desarme e integración de los miembros de las guerrillas en los cuerpos de seguridad sigue pendiente, lo que ha comportado la persistencia de la inseguridad y la violencia. El Gobierno está intentado negociar con ellas con la mediación de la UA, en coordinación con la CEEAC y la ONU.

Aunque el año se inició de forma esperanzadora con la celebración de las elecciones que pusieron fin a la fase de transición en el país, **no se produjeron avances en las negociaciones con los grupos armados para proceder a su desarme, desmovilización y reintegración, lo que comportó la persistencia de la inseguridad y la violencia en amplias partes del país**.[10] La creación del Grupo de Apoyo Internacional en sustitución del Grupo de Contacto Internacional sobre la RCA simbolizó el nuevo marco para la colaboración internacional, al que se sumó China. La mediación internacional de la mano de los sucesivos presidentes de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), primero de Chad y después de República del Congo, también dejó de llevarse a cabo. A pesar de los primeros logros del período posterior a la transición, como la puesta en marcha del Programa Nacional de Desarme, Desmovilización, Repatriación y Reintegración (Programa Nacional de DDRR) de grupos armados, este proceso se vio frenado por la desconfianza entre los diferentes actores armados, y a partir de junio se produjo un importante deterioro de la seguridad.

La implementación del acuerdo entre el Gobierno y la mayoría de los grupos armados sobre la estrategia de desarme (aprobado en el marco del Pacto de 2015), junto con la adopción de una política de seguridad nacional y el plan de desarrollo de las fuerzas de seguridad interior, representaron pasos importantes aceptados por la mayoría de los actores políticos centroafricanos, aunque no por todos los grupos armados. Tal y como destacó el informe de septiembre del secretario general de la ONU sobre la situación en el país, a mediados de abril de 2016, el presidente inició una primera ronda de consultas con representantes de grupos armados, durante la cual los instó a desarmarse. La postura del presidente de que el desarme debía preceder a la participación en el proceso político generó frustración entre facciones ex-Séléka, principalmente la Union pour la Paix en Centrafrique (UPC), el Mouvement Patriotique por la Centrafrique (MPC) y el Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC), que habían exigido cargos en el Gobierno y la reintegración en los cuerpos de seguridad como condiciones previas para las negociaciones sobre el desarme. El 18 de mayo, después de reunirse con representantes de los grupos armados, el presidente emitió un comunicado en el que expresó su satisfacción con los resultados de las consultas y se comprometió a resolver las preocupaciones planteadas por los grupos, aunque no antes de que concluyera el proceso de desarme. Posteriormente, los grupos armados celebraron la creación el 2 de julio de un mecanismo dentro de la Oficina del presidente de coordinación nacional para el DDRR, la reforma del sector de la seguridad y la reconciliación nacional, encabezado por el ministro consejero Jean Willybiro Sako como

10. Véase el resumen sobre RCA en el capítulo 1 (Conflictos armados).

coordinador especial. Posteriormente, el 24 de agosto, el presidente nombró a los miembros de un comité de asesoramiento y supervisión del programa nacional de DDRR, incluidos dos miembros del poder ejecutivo, uno de la Asamblea Nacional, dos de la sociedad civil, tres de plataformas religiosas, 28 de grupos político-militares y cinco representantes de la comunidad internacional.

Tal y como señaló la ONU, el presidente se reunió con grupos armados durante las visitas facilitadas por la MINUSCA a Bouar en junio, Kaga Bandoro en agosto y Bria en septiembre. Algunos representantes de los ex-Séléka en Bria condicionaron su participación en el proceso de DDRR a la aplicación de políticas más inclusivas hacia la comunidad musulmana. El 5 de septiembre Willybiro-Sako se reunió con representantes de los grupos ex-Séléka UPC y de Rassemblement Patriotique pour le Renouveau de la Centrafrique (RPRC) y representantes de las milicias anti-balaka, las comunidades y la sociedad civil en Bambari, donde todos expresaron interés por el programa de DDRR. En octubre se convocó la primera reunión del Comité Consultivo de Seguimiento sobre el DDRR, a la que asistieron 11 de los 14 principales grupos armados. El FPRC, el grupo anti-balaka de Maxime Mokom y el grupo Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R),[11] boicotearon el proceso, aunque posteriormente este último se sumó al Comité. Tras el brote de violencia en Kaga Bandoro entre grupos ex-Séléka y antibalaka el 12 de octubre, el presidente viajó con el representante especial del secretario general de la ONU a la zona y se reunió con representantes de los grupos armados, donde lanzó un mensaje de paz y a la vez subrayó que los responsables de la violencia rendirían cuentas.

Por otra parte, continuaron las gestiones para reunificar a los diferentes grupos ex-Séléka. El movimiento celebró una asamblea general los días 18 y 19 de octubre en Bria, con la participación de los grupos armados FPRC, RPRC y disidentes de la UPC. En la asamblea, el RPRC convino en unir sus fuerzas bajo un mando unificado, dirigido por el vicepresidente primero del FPRC, Noureddine Adam. El MPC y la UPC boicotearon la reunión. En la declaración final de la asamblea, los participantes hicieron un llamamiento al diálogo con el Gobierno y expresaron la intención del grupo de ejercer su autoridad en las zonas bajo su control. Posteriormente, la Organización de Cooperación Islámica (OCI) convocó una reunión en Sido (Chad), los días 30 y 31 de octubre, durante la cual examinó con representantes del FPRC, el MPRC y el RPRC posibles enfoques en las negociaciones con el Gobierno. La UPC rechazó la invitación para asistir a la reunión. La negativa de la UPC a sumarse a las filas de la coalición del FPRC y su expansión en el este desencadenaron enfrentamientos entre los dos grupos en las prefecturas de Ouaka y Hautte-Kotto. Finalmente, cabe añadir que el 30 de noviembre, la CEEAC celebró el 8º período extraordinario de sesiones de la Conferencia de jefes de Estado o de Gobierno en Libreville. Los participantes expresaron su apoyo a una iniciativa de mediación entre el Gobierno y los grupos armados dirigida por la UA, en coordinación con la CEEAC y la ONU. En el comunicado adoptado se exhortó a los grupos armados a que depusieran las armas y se sumaran al proceso de desarme iniciado por el presidente centroafricano.

RDC	
Actores negociadores:	Gobierno, Alianza por la Mayoría Presidencial, oposición política y social agrupada en la coalición Rassemblement (partido Union pour la Démocratie et le Progrès Sociale (UDPS), la Oposición Dinámica y el G7, entre otros), Union pour la Nation Congolaise y otros partidos políticos
Terceras partes:	Conferencia Episcopal Congolesa (CENCO), Angola, Tanzania, Uganda, Grupo de Apoyo a la Facilitación del Diálogo Nacional sobre la RDC liderada por la UA, UA, SADC, Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, UE, ONU, OIF y EEUU
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de Sun City, Acuerdo de Pretoria y Acuerdo de Luanda (2002), Acuerdo Global e Inclusivo sobre la Transición (2002), Acuerdo de Paz Inclusivo y Global en la RDC (2016)

Síntesis:
Las demandas de democratización en los años noventa acabaron en una sucesión de rebeliones culminando en la conocida como "primera guerra mundial africana" (1998-2003).[12] La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política y los principales actores insurgentes, en un acuerdo de reparto del poder político. A partir de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en 2005. En 2006 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, en medio de un clima de tensión y acusaciones de fraude. En las elecciones de 2011, en las que también venció Kabila, se cometieron numerosas irregularidades y contribuyeron a avivar la inestabilidad, y desde entonces el debate político se centró en el fin de su segundo mandato. En la profunda crisis actual confluyen las promesas frustradas de democratización (incumplimiento de la Constitución y la celebración de elecciones en los plazos acordados), la pobreza omnipresente y la violencia crónica, y el control del Gobierno depende cada vez más de fuerzas de seguridad en gran parte disfuncionales. El intento del presidente Kabila de permanecer en el poder más allá de su segundo y último mandato constitucionalmente permitido, que concluía el 19 de diciembre de 2016, está malbaratando más de una década de progreso. La mayoría gubernamental espera

11. Creado a finales de 2015 bajo la dirección del autoproclamado general Sidiki Abass, el movimiento 3R surge con el objetivo de proteger a la comunidad peul, minoritaria en la provincia de Ouham Pendé, frente a los ataques de las milicias anti-balaka. Véase Human Rights Watch, "République Centrafricaine: Un nouveau groupe armé sème la terreur", 20 de diciembre de 2016.
12. Véase la síntesis de RDC (este) y RDC (este - ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

retener el poder retrasando las elecciones presidenciales, mientras que la oposición pretende forzar el inicio de una rápida transición que culmine con el fin del mandato de Kabila y elecciones. La UA facilitó el diálogo político entre el Gobierno y las diferentes plataformas y partidos opositores, aunque fue la Conferencia Episcopal (CENCO) la que consiguió aproximar al Gobierno y a la principal coalición opositora, Rassemblement, a la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo el 31 de diciembre de 2016.

Aunque a principios de año las perspectivas no eran halagüeñas**, el año culminó con un acuerdo que puede contribuir a desatascar la grave crisis política en RDC**. Desde las elecciones de 2011, el debate político ha estado centrado en el fin del segundo mandato del presidente Joseph Kabila y la creciente tensión derivada de ello. En febrero de 2015, con la publicación del calendario electoral y de la ley electoral, se dio inicio al proceso que debía conducir a la celebración de elecciones directas e indirectas en los niveles locales, provinciales y nacionales antes de diciembre de 2016. Sin embargo, diversas cuestiones ligadas al marco legal y a los recursos disponibles no fueron resueltas a tiempo por lo que el régimen creó las condiciones que prácticamente imposibilitaban el cumplimiento del calendario electoral. Esta situación estuvo acompañada por los intentos de Kabila de promover un diálogo nacional desde abril de 2015 entre la coalición mayoritaria en el poder, la oposición política y la sociedad civil. Este diálogo pretendía abordar el calendario electoral, la inclusión en el censo de varios millones de votantes que habrían adquirido el derecho de voto desde 2011, la financiación del proceso y la seguridad en las elecciones. Aunque en algunos momentos la oposición política, muy dividida, había manifestado su disposición a participar en el proceso, finalmente se retiró de las consultas preliminares alegando que este diálogo podría utilizarse para justificar el aplazamiento de las elecciones presidenciales con la finalidad de prorrogar el mandato presidencial. Además, la misma coalición gubernamental también sufrió divisiones como consecuencia de la evolución del proceso y, en septiembre, un grupo de siete partidos políticos (el "G7") de la coalición gobernante advirtió a Kabila sobre el riesgo de desestabilización del país en caso de incumplimiento de la Constitución. A raíz de este posicionamiento, el G7 fue expulsado de la coalición gubernamental.

La grave crisis económica que afecta a RDC contribuyó al clima de frustración social y repercutió en la crisis institucional y política

El Panel de Sabios de la UA escogió en enero de 2016 a uno de sus miembros, Eden Kodjo, antiguo primer ministro de Togo, para que celebrara consultas en apoyo del diálogo politico en el país. En abril la UA le nombró oficialmente como facilitador del diálogo político nacional, aunque la oposición se negó a participar. En paralelo, la oposición política intentó internacionalizar el proceso solicitando a la ONU, la UE, la UA, la Organización Internacional de la Francofonía y EEUU que apoyaran al facilitador propuesto por la UA, y se celebraron reuniones entre actores de la oposición y representantes de estas organizaciones internacionales, como era la reunión celebrada en Bruselas en julio. En este encuentro la oposición política reconoció la necesidad de llevar a cabo un diálogo nacional con la participación de todo el espectro político. En paralelo, el 4 de julio se había celebrado en Addis Abeba la primera reunión del grupo internacional de apoyo al proceso de RDC, conocido como Grupo de Apoyo a la Facilitación del Diálogo Nacional sobre la RDC liderada por la UA, que había lanzado un llamamiento a los actores clave para crear un clima adecuado de cara a la celebración del diálogo nacional. **El Diálogo Nacional propuesto por Kabila y facilitado por el mediador de la UA finalmente se inició el 1 de septiembre** con la participación de una parte de la oposición política, entre los que destacaba el partido opositor Union pour la Nation Congolaise (UNC), liderado por Vital Kamerhe, antiguo aliado de Kabila, sectores de la sociedad civil y la Conferencia Episcopal (CENCO), pero **no contó con la participación de la coalición opositora Rassemblement**. **El 18 de octubre estos diferentes actores alcanzaron un acuerdo, que prolongaba el mandato presidencial de Kabila hasta abril de 2018, cuando se celebrarían las elecciones.** Rassemblement boicoteó el acuerdo y acusó a Edem Kodjo de parcialidad en favor de los intereses del presidente congolés. El acuerdo establecía la formación de un nuevo Gobierno con una figura opositora en el cargo de primer ministro. A mediados de noviembre fue nombrado el opositor Samy Badibanga (perteneciente a UDPS et Alliés, un sector disidente de la opositora Union pour la Démocratie et le Progrés Sociale, UDPS, partido miembro de Rassemblement, que si participó en el diálogo) en cumplimiento del acuerdo, en sustitución de Matata Ponyo, aunque su nombramiento fue desdeñado por Rassemblement. El acuerdo fue resultado de la facilitación de la UA liderada por Edem Kodjo y apoyada por el Support Group, formado por diversas organizaciones internacionales (UA, SADC, la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, UE, ONU y OIF). La CENCO anunció que rechazaba el acuerdo porque debería incluir explícitamente que Kabila no competiría a un tercer mandato y pidió que se entablara un diálogo más inclusivo para llegar a un consenso sobre el proceso electoral.

El 31 de octubre, a solicitud del presidente, la CENCO inició un proceso de mediación con objeto de promover el consenso sobre la transición y las elecciones. Con ese fin, mantuvo una serie de reuniones con la coalición en el poder, la Alianza por la Mayoría Presidencial, y la coalición opositora, Rassemblement, entre otros. Octubre y noviembre transcurrieron en medio de un

grave clima de movilización social y violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en paralelo a los llamamientos al diálogo por parte de la CENCO, sin éxito. El representante especial del secretario general de la ONU y el enviado especial para la región de los Grandes Lagos también llevaron a cabo sus buenos oficios para acercar a los actores políticos, reuniéndose con el Gobierno, Rassemblement, CENCO, el nuncio apostólico, una delegación de la Conferencia Panafricana de Iglesias y representantes de Angola. En el plano regional, antes de que se celebrara en Luanda, el 26 de octubre, la reunión del Mecanismo de Supervisión Regional del Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la RDC y la Región, el enviado especial de la ONU viajó a Tanzania y a Uganda, donde se reunió con el ministro tanzano de Exteriores, Augustine Mahiga, y el presidente ugandés, Yoweri Museveni, respectivamente, para analizar la situación. Entre el 11 y el 13 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU también realizó una visita para promover el diálogo en el país. La grave crisis económica que afecta al país contribuyó al clima de frustración social y repercutió en la crisis institucional y política: **Rassemblement intentó vincular la deriva económica a la crisis política mientras que el Gobierno alertaba de que la crisis económica, el paro, la caída de los salarios de los funcionarios públicos y la creciente inflación no debían ser instrumentalizados políticamente**.[13]

A principios de diciembre la mediación de la CENCO entre signatarios y no signatarios del acuerdo de 18 de octubre se encontraba en punto muerto. El 2 de diciembre la CENCO hizo un llamamiento a celebrar conversaciones directas entre Gobierno y Rassemblement bajo su mediación, y el 5 de diciembre Kabila, en un comunicado de prensa, expresó su apoyo al trabajo de la CENCO y le pidió que prosiguiera con los intentos de mediación para evitar un agravamiento de la crisis. Ante el estancamiento de la situación y la evolución violenta de los acontecimientos, la UE el 12 de diciembre estableció sanciones contra siete altos cargos del Gobierno para frenar el clima de violencia ante la proximidad del fin del mandato de Joseph Kabila el 19 de diciembre.[14] La UE manifestó su preocupación por la situación de violencia y destacó la necesidad de promover el diálogo para celebrar las elecciones a ser posible en 2017. Finalmente, bajo la mediación de la Iglesia Católica congolesa, el 17 de diciembre, dos días antes de que culminara el mandato presidencial y bajo un elevado clima de tensión y movilizaciones por todo el país, se inició una nueva ronda de consultas entre el Gobierno, la oposición firmante del acuerdo del 18 de octubre y la oposición no firmante de dicho acuerdo. El 19 de diciembre concluyó oficialmente el segundo y último mandato del presidente, según establece la Constitución, en un clima de persistente tensión y manifestaciones, y se formó un Gobierno de transición mientras proseguía el diálogo. **Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo el 31 de diciembre. Según el acuerdo, Kabila permanecía en el cargo pero se comprometía a no presentarse a las elecciones de diciembre de 2017, cuatro meses antes de lo establecido en el acuerdo del 18 de octubre.** Otros elementos destacados fueron la propuesta de formación de un Gobierno de unidad con un primer ministro nombrado por Rassemblement y la revisión de la CENI. Sin embargo, quedaron numerosos elementos pendientes de concretar del acuerdo, por lo que se prolongaron las conversaciones en enero de 2017.

Sudán	
Actores negociadores:	Gobierno de Sudán, coalición opositora "Sudan Call" formada por partidos de oposición nacional y Frente Revolucionario de Sudán (SRF, coalición que aglutina a grupos armados de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur)
Terceras partes:	African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP), Thabo Mbeki, Troika (EEUU, Reino Unido, Noruega), Alemania
Acuerdos relevantes:	--

Síntesis:
En el país se mantienen abiertos diferentes conflictos armados (Darfur, Nilo Azul y Kordofán Sur), así como tensiones entre el Gobierno y la oposición. En medio de este clima de inestabilidad política, a principios del 2014, el presidente sudanés, Omar al Bashir, hizo un llamamiento al "diálogo nacional" para hacer frente a los problemas políticos y económicos que permitiera afrontar la pobreza, la guerra y la inestabilidad política en todo el territorio nacional. El Gobierno anunció que dicho diálogo tendría cuatro objetivos prioritarios: lograr la paz, proteger los derechos constitucionales, revigorizar la economía y revivir la identidad nacional. El Ejecutivo sudanés manifestó que la iniciativa no excluía a ningún sector y que era el momento de realizar reformas, después de 25 años de régimen. La propuesta contó desde sus inicios con la implicación del ex presidente sudafricano Thabo Mbeki y del African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP) para promover negociaciones de paz y una transformación democrática.

El año 2016 se inició con la noticia de la extensión por parte del Gobierno del cese al fuego en las regiones de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur, aunque éste se quedó en una declaración de intenciones, ya que los combates entre las Fuerzas Armadas y los movimientos rebeldes se intensificaron durante el primer semestre, sobre todo en la región de Jebel Marra, en Darfur, produciendo una grave crisis humanitaria y de desplazamiento forzado.[15] En este contexto, **el Gobierno de Sudán anunció a mediados de febrero que extendía de manera indefinida las negociaciones dentro del marco del Diálogo Nacional**

13. Hoebeke, Hans y Phillipe Kadima Cintu, "Hungry for change: the economics underlying DR Congo's political crisis", *African Arguments*, 12 de diciembre de 2016.
14. Press Office - General Secretariat of the Council, "Democratic Republic of the Congo (DRC): EU adopts sanctions against 7 individuals responsible for violence", Council of the European Union, 12 de diciembre de 2016.
15. Véase el resumen sobre Sudán (Darfur) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

y, a su vez, notificó que aceptaba la invitación del grupo mediador, el African Union High Implementation Panel (AUHIP), para realizar la siguiente ronda de negociaciones (11ª) con los grupos armados de oposición durante los días 16-18 de marzo en la capital etíope, Addis Abeba. Como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión de marzo, el Gobierno y el AUHIP pactaron y firmaron la hoja de ruta que marcará el desarrollo del proceso negociador en los diferentes conflictos armados, que incluía nuevas medidas de alto el fuego y que las conversaciones en las "Dos Áreas" (Kordofán Sur y Nilo Azul) y en Darfur se realizarían bajo el respaldo del marco del Diálogo Nacional. Sin embargo, los grupos armados principales de Darfur (JEM) y de las "Dos Áreas" (SPLM-N), así como el partido opositor National Umma Party (NUP), se negaron a firmar inicialmente el texto aludiendo un sesgo hacia el Gobierno. El 24 de abril, la coalición de movimientos armados de Sudán, el Frente Revolucionario de Sudán (SRF, por sus siglas en inglés) que integra a grupos de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, anunció su voluntad de realizar un cese al fuego durante seis meses, e instó a los mediadores de la UA a que se reunieran con el Gobierno para discutir su implementación. No fue hasta el 18 de junio cuando el presidente, Omar al-Bashir, declaró el alto el fuego unilateral por un periodo de cuatro meses y sólo en los estados de Nilo Azul y Kordofán Sur, con la voluntad de permitir que los movimientos rebeldes que no son signatarios del Documento de Doha para la Paz en Darfur de 2011 (DDPD, por sus siglas en inglés) se unieran al proceso. La medida también significó un llamado a todas las fuerzas políticas y movimientos armados del país a unirse al Diálogo Nacional antes de la convocatoria del congreso general que había sido fijada para el día 6 de agosto (pospuesta posteriormente).

La coalición "Sudan Call", que aglutina a todos los grupos de la oposición (NUP, SPLM-N, JEM y SLM-MM) propuso el 19 de junio un documento complementario a la hoja de ruta acordada entre Gobierno y la AUHIP, que fue rechazado por el Ejecutivo sudanés. Posteriormente la coalición opositora se reunió en París del 18 al 22 de julio para tratar su incorporación al proceso, volviendo a solicitar a la AUHIP la inclusión del documento suplementario a la hoja de ruta y que se retomasen todos los puntos previstos en la decisión 539 del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, que versan sobre la liberación de presos políticos y detenidos, garantizar libertades políticas, así como la libertad de expresión y prensa. Finalmente, el 8 de agosto la coalición opositora se adhirió a la hoja de ruta, lo que dio pie al inicio de conversaciones los días 10 y 11 del mismo mes en Addis Abeba, para tratar de asegurar un alto el fuego duradero en las regiones de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul. Sin embargo, las discrepancias entre las partes volvieron a bloquear las negociaciones e impedir el cese de la violencia, sobre todo debido a divergencias sobre el acceso de la ayuda humanitaria en las "Dos Áreas" y a medidas de seguridad. Thabo Mbeki, jefe del equipo de mediación de la AUHIP, suspendió el 14 de agosto la ronda de negociación. Sin nuevos avances en las negociaciones entre Gobierno y oposición, el Ejecutivo anunció el día 10 de octubre que extendía de manera unilateral el cese al fuego hasta finales de 2016, medida a la que se unieron el 31 de octubre los grupos armados darfuríes SLA-MM y JEM-Gibril (JEM-G), quienes decretaron un cese al fuego por un periodo de seis meses.

Una facción del SLM-AW firmó con el Gobierno de Darfur Central un acuerdo de paz

En la reunión del Comité de Coordinación del Diálogo Nacional celebrada entre el 26 septiembre y el 5 de octubre se acordó que el Gobierno Nacional de Consenso se formaría tres meses después de que fuera aprobado el documento final resultante de las negociaciones. Posteriormente, se aprobó un documento nacional que buscaba facilitar el camino para la redacción de una nueva Constitución. Finalmente, el 21 de diciembre Thabo Mbeki se desplazó a Jartum donde se reunió con el presidente al Bashir para discutir sobre los avances del Diálogo Nacional, el cese al fuego, así como sobre las cuestiones más actuales en las regiones de conflicto armado.

Sudán (Darfur)	
Actores negociadores:	Gobierno, JEM, SLA-MM, SLA-AW
Terceras partes:	UA, UNAMID, Chad
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de paz de Darfur (DPA) (2006)

Síntesis:
La marginación política, económica y cultural de la región de Darfur respecto el conjunto de Sudán se encuentra en las raíces de un conflicto al que a partir de los años ochenta se le une la competencia creciente por los recursos hídricos y la disponibilidad de pastos como consecuencia de la sequía. Junto a esto, la instrumentalización de la religión y las diferencias étnicas contribuyeron decisivamente a agravar la situación, a la que se le unió la interferencia de países vecinos como Chad y Libia. En medio de las conversaciones de paz para resolver el histórico contencioso entre el norte y el sur del país, diversos grupos armados, principalmente el JEM y el SLA, se rebelaron en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región. En primer lugar, Chad, y posteriormente, la UA, promovieron contactos entre las partes para facilitar el acceso humanitario y entablar negociaciones de paz que condujeran al fin de la violencia. En 2006 se alcanzó un acuerdo de paz, el Darfur Peace Agreement (DPA) en Abuja, que sólo incluyó a una facción del SLA, la liderada por Minni Minawi, mientras persistió el conflicto y los intentos frustrados de diálogo, principalmente promovidos por Qatar en el marco del proceso de paz de Doha, al que se fueron sumando los diferentes actores.

Los días 11 al 13 de abril se celebró en Darfur el referéndum previsto en el Documento de Doha para la Paz en Darfur de 2011 (DDPD, por sus siglas en inglés), que para el Gobierno de Sudán significaba la conclusión

de manera oficial de la hoja de ruta establecida en la aplicación del acuerdo de paz en la región. En la consulta, la población darfurí tenía que decidir el estatus administrativo de Darfur: mantener la actual fórmula de división administrativa de cinco estados o reunificarlos en uno solo. La votación contó con una baja participación debido a que los grupos armados rebeldes darfuríes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) y las facciones del Movimiento de Liberación de Sudán lideradas por Minni Minawi (SLM-MM) y Abdel Wahid al-Nur (SLM-AW) realizaron un llamamiento a boicotear el referéndum. El día 23 de abril la Comisión para el Referéndum en Darfur hizo públicos los resultados, los cuales mostraron una mayoría del 97% a favor de mantener la fórmula administrativa actual. Con la celebración de la votación el Gobierno declaró que había llegado el fin de la guerra en la región. Un día después de la celebración del referéndum, la coalición de movimientos armados de Sudán, el Frente Revolucionario de Sudán (SRF, por sus siglas en inglés), que integra a grupos de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, anunció su intención de decretar un cese al fuego durante seis meses en las tres zonas e instó a los mediadores de la UA a discutir con el Gobierno la viabilidad de su implementación. Sin embargo, y en la lógica de fin del conflicto, el Gobierno de Sudán anunció el 17 de junio un cese al fuego unilateral por cuatro meses en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul, no aplicable a Darfur, debido a su argumentación de que ya no existía rebelión en la zona. El Gobierno también presionó para la no renovación del mandato de la Misión Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), que concluía a finales de junio de 2016, debido a que, desde su punto de vista, su presencia ya no era necesaria ante la supuesta nueva coyuntura posconflicto. Sin embargo, el 29 de junio el Consejo de Seguridad de la ONU, siguiendo recomendaciones de informes emitidos por la ONU y la UA, decidió prorrogar por un año más el mandato de la misión, medida que fue muy bien recibida por los movimientos armados de oposición en Darfur.

A finales del mes de mayo, los movimientos armados JEM y SLM-MM se reunieron con el equipo mediador de Darfur en Doha, donde propusieron al Gobierno renegociar el Documento de Doha para la Paz en Darfur, propuesta que fue rechazada por Jartum el 6 de junio. Los días 10 y 11 de agosto, el Gobierno y los movimientos armados darfuríes volvieron a retomar el diálogo sin lograr acuerdos específicos. Posteriormente, el 10 de octubre, el Gobierno anunció la extensión del cese al fuego decretado en junio hasta el final de año, al que se sumaron el 31 de octubre los movimientos armados SLA-MM y JEM-Gibril. La UNAMID felicitó a las partes por el anuncio del cese de hostilidades e invitó a la facción del SLA dirigida por Abdul Wahid El Nur (SLA-AW) a unirse al cese al fuego para avanzar hacia la construcción de la paz en Darfur.

Por otro lado, **más de 80 miembros del SLM-AW, que habían desertado en el mes de octubre de las unidades de Jebel Marra lideradas por El Amin El Tahir (alias "Toro"), Abu Jamal Bakr y Shihabeldin Hagar, firmaron el 6 de noviembre un acuerdo de paz con el Gobierno de Darfur Central en Zalingei**. Si bien los firmantes del acuerdo no representan al movimiento armado completo del SLA-AW, sus líderes son miembros activos del SLM-AW, por lo que este acuerdo fue valorado como un paso histórico. Días después de la firma del acuerdo, conocido como "Korona Peace Agreement", el presidente sudanés, Omar al Bashir, dio instrucciones al ministro de Defensa, Maj. Gen. Ahmed Bin Auf, y al gobernador de Darfur Central, Jaafar Abdelhakam, para iniciar su implementación.

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Actores negociadores:	Gobierno, SPLM-N
Terceras partes:	African Union High-Level Implementation Panel (AUHIP), Uganda
Acuerdos relevantes:	--

Síntesis:
La secesión de Sudán del Sur en julio de 2011 y la reconfiguración nacional que supuso para Sudán agravó las tensiones entre las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul con el Gobierno sudanés, ya que durante el conflicto armado sudanés ambas regiones habían apoyado a la insurgencia sureña del SPLA. Tras la independencia sursudanesa, el SPLM-N ha mantenido la lucha armada en ambas regiones, exigiendo la introducción de reformas democráticas y la descentralización efectiva que permita el desarrollo económico de todas las regiones del nuevo Sudán, así como el reconocimiento de la pluralidad étnica y política. Desde ese momento la AUHIP ha mediado para buscar una resolución pacificada entre las partes, que gira en torno a tres principales ejes en las negociaciones de paz: el modelo de cese al fuego; el tipo de acceso humanitario a las dos áreas (a través de las líneas del frente o mediante la vía transfronteriza); y las características y agenda del Diálogo Nacional.

El escenario en las conocidas como las "Dos Áreas" (Kordofán Sur y Nilo Azul) empezó el año con la extensión por parte del Gobierno de Sudán del cese al fuego que había decretado en el 2016 y el rebrote de la violencia y los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes del SPLM-N, sobre todo durante el primer semestre. De manera paralela al mantenimiento de la violencia, durante el mes de abril la coalición de movimientos armados de Sudán, el Frente Revolucionario de Sudán (SRF, por sus siglas en inglés), que integra a grupos de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, anunció su voluntad de decretar un cese al fuego efectivo por un periodo de seis meses, y pidió al equipo mediador del AUHIP su intermediación con el Gobierno para conseguirlo. Si bien durante el mes de mayo persistieron los combates en la región, el 17 de junio el Gobierno anunció un cese al fuego unilateral por cuatro meses en Kordofán Sur y Nilo Azul, con la voluntad de permitir a los grupos rebeldes que no son signatarios del Documento de Doha para la Paz que se

unieran al proceso de paz en Sudán. Poco después, durante el mes de julio, el SPLM-N acusó al Gobierno de no respetar el cese al fuego pactado. Durante los días 10 y 11 de agosto, el Gobierno y los rebeldes mantuvieron reuniones y trataron sin éxito de acordar una agenda para el cese de hostilidades. El 9 de septiembre, nuevamente el SPLM-N volvió a acusar al Ejército de violar el cese al fuego en Kordofán Sur. El 2 de octubre, el SPLM-N y el Gobierno mantuvieron reuniones informales en la capital etíope organizadas por Uganda, en un intento por desbloquear las discrepancias entre las partes sobre el acceso de la ayuda humanitaria en las "Dos Áreas", sin lograr avances. Sin acuerdos sobre puntos importantes, como la facilitación del acceso de la ayuda humanitaria, el 10 de octubre, una semana antes de concluir el periodo de cese al fuego decretado en junio, el Gobierno volvió a ampliarlo hasta finales de año. Por otro lado, y a raíz de la denuncia realizada por la ONG Amnistía Internacional el 29 de septiembre sobre el uso de armas químicas contra civiles en la región de Darfur por parte del Gobierno de Sudán[16] –acusaciones que el Gobierno negó– el SPLM-N decidió suspender todas las negociaciones con Jartum, a excepción de aquellas que tienen que ver con el suministro de ayuda humanitaria en los estados del Kordofán Sur y del Nilo Azul. A finales de año las conversaciones se mantenían suspendidas entre el Gobierno y los rebeldes del SPLM-N, quienes solicitaron la dimisión del presidente Omar al Bashir, en respuesta a las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno en el mes de noviembre que generaron un gran malestar y rechazo en gran parte del país.[17]

Sudán del Sur	
Actores negociadores:	Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition (SPLA-IO), SPLM7, SSDM-Cobra Faction
Terceras partes:	"IGAD Plus": IGAD, que integra a Sudán, Sudán del Sur, Kenia, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Uganda; UA (Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega)
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de paz (2015)

Síntesis:
Después de años de conflicto armado que enfrentó al Gobierno central de Sudán y el sur del país, liderado por la guerrilla del SPLM/A, Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente en 2011, tras la realización del referéndum previsto en el acuerdo de paz de 2005 (Comprehensive Peace Agreement –CPA–) facilitado con la mediación de la IGAD. La firma de la paz entre Sudán y Sudán del Sur y la consecución de la independencia no han logrado, sin embargo, acabar con la conflictividad y la violencia. Sudán del Sur ha seguido envuelto en una serie de conflictos internos promovidos por disputas por el control de territorio, ganado y poder político, así como por las prácticas neo-patrimoniales y la corrupción en el seno del Gobierno, que no han permitido lograr la estabilidad y consolidar la paz. Como parte de las negociaciones de paz impulsadas en abril de 2013, el presidente ofreció una amnistía a seis comandantes de grupos rebeldes que no tuvo buenos resultados iniciales. Posteriormente, en diciembre de 2013, las tensiones entre las facciones leales al presidente Salva Kiir y las leales al ex vicepresidente Riek Machar, SPL/A-in-Opposition (SPLA-IO), dieron paso a una nueva escalada de violencia en diversas regiones del país. En enero de 2014, y a través de la mediación de la IGAD, el Gobierno y el SPLA-IO iniciaron conversaciones de paz en Addis Abeba (Etiopía). Los esfuerzos diplomáticos se han encontrado con muchos obstáculos para lograr acuerdos de alto el fuego efectivos, habiendo firmado nueve compromisos diferentes entre diciembre de 2013 y agosto de 2015, de cese de hostilidades y medidas transitorias que han sido sistemáticamente violados, lo cual había impedido sentar las bases de una solución política al conflicto. El 17 de agosto de 2015, y tras fuertes presiones internacionales y amenazas de bloqueos y sanciones económicas, las partes firmaron un acuerdo de paz promovido por la IGAD Plus, aunque persisten muchas incertezas sobre su implementación.

En Sudán del Sur la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado por las partes en agosto de 2015 se fue deteriorando a lo largo del año hasta llegar al anuncio de colapso por parte de Riek Machar, líder del SPLA-IO, en septiembre de 2016. El año comenzó con muchas dudas sobre el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz luego de que el presidente Salva Kiir decretase de manera unilateral, en octubre de 2015, la nueva fórmula de división administrativa de 28 estados que generó el rechazo de muchos grupos regionales, así como también de las fuerzas opositoras del SPLA-IO. El 22 de enero había sido la fecha prevista para la creación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional (TGoNU) –según la nueva hoja de ruta acordada por la Comisión de Monitoreo y Evaluación (JMEC). Sin embargo, éste no llegó a conformarse debido a que el SPLA-IO se negó a proponer a sus ministros hasta que el Gobierno no anulase la división administrativa. Festus Mogae, expresidente de Botswana y actual presidente de la JMEC, manifestó que la orden de Kiir de crear 28 estados significaba una grave violación del acuerdo, urgiendo al Gobierno a retirarla para avanzar en la implementación de los mismos. Aún con la tensión generada por el decreto presidencial, el 11 de febrero el presidente Kiir nombró a Riek Machar, líder del SPLA-IO, primer vicepresidente del país, tal y como se estipulaba en el capítulo uno del texto, en lo que significó un gran paso en la implementación de los acuerdos. El hasta entonces vicepresidente del Gobierno de Sudán del Sur, James Wani Igga, pasó a ser el segundo vicepresidente del país. El ministro de Comunicación sursudanés, Michael Makuei Lueth, informó que el Gobierno acordó, tal y como solicitaba la oposición, retrasar la formación del TGoNU hasta que Riek Machar regresara a Juba con sus tropas, previsto en el capítulo dos, concerniente al cese al fuego permanente y mecanismos de seguridad. Para ello, el Gobierno también anunció el inicio de la retirada de las tropas gubernamentales de la capital, Juba. La JMEC informó de avances en la implementación

16. Véase el resumen sobre Sudán (Darfur) en el capítulo 1 (Conflictos armados).
17. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 2 (Tensiones).

de algunos puntos relativos al apartado de seguridad durante la transición, que incluía la llegada de 1.370 tropas del SPLA-IO a la capital durante el mes de marzo. Un mes después, el 26 de abril, Machar regresó a Juba para asumir el cargo de primer vicepresidente, y dos días después, se conformó oficialmente el TGoNU. El presidente Salva Kiir, recibió a Machar en el palacio presidencial y declaró que su regreso marcaba el final de la guerra y la vuelta de la paz y la estabilidad a Sudán del Sur. El TGoNU quedó conformado por 30 ministros, de los cuales 16 corresponden al Gobierno, diez al SPLA-IO, dos al grupo del SPLA-FD y otros dos a los otros grupos políticos, tal y como se estipulaba en el acuerdo de paz: 53% miembros del SPLM, 33% de las fuerzas del SPLA-IO, 7% del SPLM-FD y 7% miembros de otros partidos. De los treinta ministros, solamente seis fueron mujeres, representando el 20% del total, que asumieron los ministerios de Caminos y Puentes; Medio Ambiente y Bosques; Conservación de la Vida Silvestre y Turismo; Género, Infancia y Bienestar Social; Cultura, Juventud y Deportes; y Tierra, Vivienda y Desarrollo Urbano. Además, las organizaciones de mujeres reclamaron en diferentes momentos del año una mayor participación en el proceso de paz.[18]

Los enfrentamientos de julio en Juba entre tropas gubernamentales y fuerzas del SPLA-IO rompieron el Gobierno de transición y pusieron en serio riesgo el acuerdo de paz en Sudán del Sur

La creación del nuevo Gobierno significó un gran paso, pero no llegó a distender las numerosas tensiones existentes. Tanto el JMEC, como la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) insistieron que no reconocerían la división administrativa de los 28 estados, instando al Gobierno a retirarla debido a que seguía suponiendo una amenaza para el logro de la paz en el país. El nuevo gabinete del Gobierno de Transición formó un comité técnico para revisar las fronteras, determinar el número de estados y tratar de reducir las tensiones políticas. Por otro lado, y en lo relativo al **Acuerdo de Reunificación de Arusha**, que versa sobre la unidad del partido del SPLM –hecho que influyó en el origen del estallido de la violencia en diciembre de 2013– el vicepresidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, visitó Juba a mediados de mayo para impulsar la implementación de la reunificación del SPLM, aunque su visita no dio buenos resultados y la facción de Riek Machar declaró que se registraría como partido independiente si no se respetaba el citado acuerdo de reunificación. Paralelamente, el Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia del Cese al Fuego y Acuerdos de Transición sobre Seguridad (Ceasefire Transitional and Security Arrangements Monitoring Mechanism, CTSAMM) acusó a las fuerzas del SPLA leales al presidente Kiir, de no cooperar en la implementación de los acuerdos de seguridad esbozados en el texto.

Las tensiones entre fuerzas leales a Kiir y a Machar volvieron a estallar al negarse el Gobierno a firmar la resolución para el establecimiento de los lugares de acantonamiento para las fuerzas armadas del SPLA-IO

Durante el mes de junio, las tensiones entre fuerzas leales a Kiir y a Machar volvieron a estallar al negarse el Gobierno a firmar la resolución para el establecimiento de los lugares de acantonamiento para las fuerzas armadas del SPLA-IO. Esta situación generó la violación al alto el fuego con el estallido de ataques del SPLA-IO contra fuerzas gubernamentales en Kajo Keji, el 11 de junio, y el 15 de junio en la ciudad de Raja, para demostrar la necesidad de sitios de acantonamiento y unificación en el Ejército, así como la puesta en marcha de programas de desarme en esas áreas. El presidente del JMEC condenó los hechos y denunció directamente al presidente Kiir por las violaciones al acuerdo de paz que amenazaban seriamente con su colapso. **Con el clima de tensión en aumento, estallaron en Juba cuatro días de enfrentamientos (7-10 julio) entre las fuerzas gubernamentales y el SPLA-IO, que dejaron un balance oficial de alrededor de 270 personas muertas**, la mayoría combatientes, aunque fuentes no oficiales cifraron las muertes en medio millar. Machar se vio obligado a abandonar la capital con las tropas del SPLA-IO, buscando refugio en la RDC primero y, posteriormente, en Sudáfrica. El secretario general de la ONU condenó duramente los enfrentamientos en la capital y solicitó al Consejo de Seguridad la imposición de un embargo de armas sobre el país. La IGAD y la UA también condenaron los hechos y solicitaron a ambos bandos que sus fuerzas armadas abandonasen Juba para ser reemplazadas por una fuerza regional de protección que asumiera la seguridad en la capital. Salva Kiir exigió la vuelta de Machar a la capital y ante la negativa de éste a volver antes del despliegue de las tropas internacionales, Kiir lo destituyó y reemplazó por el ministro de Minería, Taban Deng Gai, quien fue expulsado del SPLA-IO por traición. Esta situación generó tensiones y divisiones en el interior del SPLA-IO, así como una nueva ola de enfrentamientos armados en diferentes partes del país. Tanto la JMEC, como la ONU, la IGAD y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (PSC) criticaron el reemplazo de Machar, afirmando que suponía una violación al Acuerdo de Paz. El Gobierno de Kiir destituyó también a seis de los diez ministros del TGoNU propuestos por el SPLA-IO. **El 25 de septiembre Machar emitió un comunicado desde Jartum, en el que daba por colapsado el Acuerdo de paz y llamaba a sus seguidores a retomar la guerra contra el Gobierno.**

En este clima caracterizado por el aumento de los incidentes violentos en diferentes regiones del país (Wao,

18. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

Ecuatorias),[19] el 12 de agosto el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una fuerza regional de 4.000 unidades que se unirán a la misión de la UNMISS, con el mandato de garantizar la paz en la capital de Sudán del Sur, pudiendo hacer uso de la fuerza para la protección de la población civil. El Gobierno de Salva Kiir, quien en un primer momento se negó a su despliegue, durante el mes de noviembre declaró que sí lo aceptaría. A finales de año el Consejo de Seguridad, en su reunión mantenida el 23 de diciembre, decidió por ocho votos frente a siete, no aprobar la resolución presentada por EEUU en la cual se solicitaba el embargo de armas así como la aplicación de sanciones a altos dirigentes: Riek Machar, Paul Malong (jefe del Ejército del SPLA) y Michael Makuei (ministro de Información).

En enero el Ejecutivo sudanés reabrió las fronteras con Sudán del Sur, las cuales permanecían cerradas desde la proclamación de la independencia en 2011

Sudán - Sudán del Sur	
Actores negociadores:	Gobierno de Sudán y Gobierno de Sudán del Sur
Terceras partes:	IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), Egipto, Libia, EEUU, UE
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de paz global (CPA) (2005); Acuerdo de cooperación (2012)

Síntesis:
El conflicto bélico entre Sudán y su parte meridional, actualmente Sudán del Sur, que duró más de 30 años se caracterizó por una acentuada complejidad cuya naturaleza abordó distintas dimensiones relativas a la cultura y a la historia de ambos países, marcada por dos guerras civiles (1963-1972 y 1983-2005). El Acuerdo de Paz Global (CPA, por sus siglas en inglés) de enero del 2005 estableció la celebración de un referéndum en el sur del país para ratificar la independencia de esta región. La consulta se celebró en enero de 2011 y, después de una clara victoria de los partidarios del sí, en julio de 2011 Sudán del Sur declaró su independencia convirtiéndose en un nuevo Estado. Sin embargo, la separación de ambos países no puso fin a las desavenencias entre Jartum y Juba debido a la multiplicidad de asuntos pendientes de resolución entre ambos Gobiernos. Entre los principales obstáculos para la estabilidad se encuentra la disputa por el enclave petrolero de Abyei y la delimitación final de la frontera entre ambos Estados así como la falta de acuerdo en torno a la explotación de los recursos petroleros (con yacimientos en Sudán del Sur pero con oleoductos para su exportación en Sudán). Las acusaciones mutuas respecto al apoyo de movimientos insurgentes en el país vecino han contribuido a desestabilizar más la situación y amenazar la convivencia pacífica de ambos países.

Las tensiones entre los Gobiernos de Sudán y Sudán del Sur se distendieron a principios de año con la decisión tomada el 27 de enero por parte del Ejecutivo sudanés, presidido por Omar al-Bashir, de reabrir las fronteras con Sudán del Sur, las cuales permanecían cerradas desde junio de 2011, un mes antes de la declaración formal de independencia de Sudán del Sur. La decisión fue leída como un paso histórico para la normalización de las relaciones entre ambos vecinos. Días antes de esta histórica medida, el Gobierno de Sudán había hecho otro gesto reduciendo las tasas para el tránsito de petróleo desde Sudán del Sur, a lo que el Ejecutivo sursudanés presidido por Salva Kiir, respondió con la orden de retirada del Ejército de la Zona Fronteriza Desmilitarizada Segura (SDBZ por sus siglas en inglés) y su reubicación a unos ocho kilómetros de distancia. Ambos hechos se relacionaron con los avances en las reuniones mantenidas en octubre del 2015 en Addis Abeba por la Comisión de Fronteras Conjunta (JBC) entre Sudán y Sudán del Sur, bajo los auspicios del Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), con el fin de resolver las diferentes situaciones fronterizas relativas a Abyei, 14-Mile área, Joudat Al-Fakhar, Jebel al-Migainais, Kaka y el enclave de Kafia Kingi, lo que equivale a un 20% de la frontera compartida entre ambos países que está pendiente de delimitar. Sin embargo, a mediados de marzo el Consejo de Ministros de Sudán amenazó con revertir la decisión de la reapertura fronteriza, así como con procesar a cualquier ciudadano sursudanés que se encontrase en el país sin permiso –lo que afectaría a los miles de refugiados que huyen del conflicto armado en Sudan del Sur– si el Gobierno de Sudán del Sur no retiraba sus tropas de la frontera como había decretado a finales de enero, y si éste no dejaba de apoyar y cobijar a los grupos rebeldes sudaneses. En este clima de tensión y acusaciones mutuas de cobijar a grupos rebeldes opositores, el 6 de junio delegaciones de ambos gobiernos se reunieron en Jartum comprometiéndose a retirar las tropas de la SDBZ, así como también pactaron dejar de apoyar a grupos rebeldes hostiles entre sí. Durante el mes de agosto el nuevo primer vicepresidente sursudanés, Taban Deng Gai, visitó Jartum y se comprometió nuevamente a expulsar a las insurgencias sudanesas del país. Sin embargo, el 18 de septiembre, Sudán volvió a amenazar con cerrar su frontera si Juba no cumplía con su compromiso de expulsar a los grupos insurgentes.

A finales de septiembre, y durante cuatro días, ambos países se reunieron en el marco de la JBC en Addis Abeba, acordando las dos partes un documento para la demarcación fronteriza, estableciendo los términos de referencia, el presupuesto para la demarcación y el plan de trabajo de la comisión fronteriza conjunta. A principios de noviembre las tropas sursudanesas se retiraron de sus posiciones en la frontera en cumplimiento con el Acuerdo de Cooperación de 2012. A finales de mes, y coincidiendo con la cumbre árabe-africana en la capital de Guinea Ecuatorial, los presidentes sudanés y sursudanés mantuvieron una reunión bilateral donde acordaron la reapertura de la frontera y la aplicación del Acuerdo de Cooperación de 2012, pactando a su vez el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como

19. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 1 (Conflictos armados).

comprometiéndose nuevamente a no apoyar a ningún grupo rebelde de ambos países. El Gobierno de Sudán del Sur acogió con satisfacción la decisión de las autoridades sudanesas de no conceder la entrada a Jartum al líder rebelde y ex primer vicepresidente Riek Machar, quien se tuvo que exiliar provisionalmente en Sudáfrica.

Magreb - Norte de África

Libia	
Actores negociadores:	Consejo Presidencial y Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), Cámara de Representantes (CdR), Congreso General Nacional (CGN)
Terceras partes:	ONU, Argelia, Egipto, Marruecos
Acuerdos relevantes:	Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat (2015)

Síntesis:
Después de la caída del régimen de Muamar Gaddafi en 2011, Libia ha vivido un proceso de transición con múltiples desafíos políticos, económicos, sociales, institucionales y de seguridad, en un contexto caracterizado por la presencia de numerosos actores armados. Desde 2014, el país norteafricano ha sido escenario de una creciente violencia y convulsión política, que derivó en la conformación de dos grandes polos de poder. Ante esta evolución se han activado iniciativas de mediación lideradas por la ONU que han intentado buscar una salida a la crisis en un proceso no exento de obstáculos debido a las disputas de legitimidad, la diversidad de actores implicados, los múltiples intereses en juego y el persistente clima de violencia en el país, entre otros factores. A finales de 2015, bajo los auspicios de la ONU, se firmó el Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat, en medio de un clima de persistentes divisiones y escepticismo por las previsibles dificultades para su implementación.

Tras la firma del Acuerdo Político de Libia (APL) el 17 de diciembre de 2015 en la localidad marroquí de Skhirat, el año 2016 se inició con una combinación de expectativas y dudas sobre las posibilidades y retos para su implementación.[20] El pacto –suscrito bajo los auspicios de la ONU después de catorce meses de negociaciones– contó con un apoyo limitado desde un principio. Al finalizar 2015 este hecho se evidenció en el respaldo parcial que recibió de parte de los dos cuerpos legislativos en funciones en el país al momento de alcanzar el acuerdo: 80 de los 188 legisladores de la Cámara de Representantes (CdR) con base en Tobruk (este) y 50 de los 136 integrantes del Congreso General Nacional (CGN), operativo en la capital libia, Trípoli, suscribieron formalmente el pacto. **A lo largo de 2016 se hicieron patentes numerosas dificultades a la hora de implementar el acuerdo**, que estableció la creación de un Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) como vía para sortear las profundas divisiones políticas en el país. EL GAN debía reemplazar a las dos administraciones paralelas operativas en el país, que hasta entonces se habían estado disputando la legitimidad desde Trípoli y Tobruk. Para ello, el acuerdo político definió la creación de un Consejo Presidencial, encabezado por Fajez Sarraj –futuro primer ministro–, que debía proponer el gabinete del nuevo gobierno. En los meses siguientes este Consejo Presidencial, integrado por nueve miembros, enfrentó divisiones y problemas para asentar su autoridad en el país (no se instaló en Trípoli hasta marzo por problemas de seguridad) y, adicionalmente, tuvo grandes problemas en sus intentos por validar el gabinete del GAN. La CdR, reconocida en el acuerdo de Skhirat como el único cuerpo legislativo legítimo en el país, se negó a aprobar las propuestas de GAN presentadas por Sarraj. La votación se postergó en diversas ocasiones y, según trascendió, diversos legisladores favorables al GAN recibieron presiones e intimidaciones por parte de congresistas contrarios a la propuesta, que impidieron la votación. En este contexto, en abril, 102 de los 200 integrantes de la CdR publicaron una carta abierta expresando su apoyo al GAN, en un gesto que fue valorado positivamente por el Enviado Especial de la ONU para Libia, Martin Kobler. En agosto, sin embargo, la CdR se pronunció abiertamente en contra del GAN a través de un voto de no confianza. En este escenario, Sarraj optó por poner en marcha un gabinete sin apoyo de la CdR. Algunos análisis destacaron que un punto clave en el rechazo de la CdR y de sectores políticos del este del país al GAN tuvo que ver con las diferencias sobre los asuntos de seguridad y, en concreto, con el artículo 8 del acuerdo que estipula que todos los poderes en este ámbito serían transferidos al Consejo Presidencial. Esta disposición fue interpretada como una medida de riesgo para la posición del general Khalifa Hiftar, hombre fuerte en el este del país y con capacidad de influencia en las autoridades de Tobruk.

Ante las dificultades para la implementación del acuerdo de Skhirat, algunos actores regionales se involucraron para intentar facilitar una salida a la crisis en Libia

Paralelamente, a lo largo de 2016 algunos miembros del CGN –el Parlamento basado en Trípoli predecesor de la CdR– accedieron a formar parte del Alto Consejo Consultivo, un nuevo órgano creado por el acuerdo de Skhirat. No obstante, otros sectores del CGN mantuvieron una posición reticente y defendieron apostar por el mantenimiento del Gobierno de Salvación Nacional que había estado funcionando en la capital libia. Su líder, Khalifa Ghweil, incluso protagonizó un intento de golpe de Estado en octubre. Las dificultades para implementar el acuerdo político de Skhirat, por tanto, ahondaron los problemas de fragmentación institucional en Libia a lo largo del año. En este escenario, **algunos actores regionales decidieron implicarse en la búsqueda de nuevas fórmulas para afrontar**

20. Véase "Libia ante un escenario de inestabilidad crónica" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

la crisis en el país. Así, por ejemplo, Argelia –que mantuvo su apoyo al GAN– invitó a diferentes actores clave del conflicto libio –entre ellos Sarraj, Hifter y al presidente de la CdR, Ageela Saleh– para mantener diversas rondas de consultas en Argel y explorar las posibilidades de un diálogo intra-libio. Egipto, aliado del general Hifter, también mantuvo contactos con diferentes actores libios e invitó a varios de ellos a reuniones en El Cairo. Cabe mencionar que la mediación de la ONU enfrentó algunas críticas que apuntaron a que el proceso ha buscado dar respuesta a intereses europeos, más que a los de la población libia, en un contexto marcado por el interés en bloquear los flujos de personas refugiadas y migrantes desde las costas del país norteafricano hacia la UE. Al finalizar el año, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su preocupación por la crisis política y de seguridad en Libia y reafirmó su apoyo total a lo establecido en el acuerdo de Skhirat. El Enviado Especial de la ONU para Libia reconoció a finales de 2016 la existencia de un cierto margen para introducir cambios en el APL.

El Consejo de Seguridad de la ONU exigió un retorno a la plena normalidad de las funciones de la MINURSO e hizo un llamamiento a Marruecos y al Frente POLISARIO a iniciar una fase intensiva y sustantiva de negociaciones

Marruecos – Sáhara Occidental	
Actores negociadores:	Marruecos – Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO)
Terceras partes:	ONU, Argelia y Mauritania (observadores), Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia)
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de cese el fuego (1991)

Síntesis:
Los intentos de mediación y búsqueda de una salida negociada al conflicto del Sáhara Occidental derivaron en un acuerdo de cese el fuego en 1991. Desde entonces, y pese a la existencia de un marco formal de negociaciones bajo los auspicios de la ONU, el proceso de paz sobre el Sáhara Occidental no ha fructificado. Las sucesivas propuestas y numerosas rondas de negociaciones no han suscitado un acuerdo entre las partes, que mantienen sus respectivas líneas rojas: Marruecos insiste en su reclamo sobre el territorio y sólo está dispuesto a admitir un estatus de autonomía, mientras que el Frente POLISARIO reivindica la necesidad de llevar a cabo un referéndum que incluya la opción de independencia. Las negociaciones sobre el Sáhara Occidental –reconocido como un territorio pendiente de descolonizar– se han visto determinadas por la asimetría de los actores en disputa, la incapacidad de la ONU para poner en marcha una consulta sobre el futuro del territorio, la rivalidad regional entre Marruecos y Argelia –apoyo clave para el POLISARIO–, y por el respaldo a Rabat por parte de actores internacionales clave, como EEUU o Francia, lo que ha determinado, en la práctica, una prevalencia de las tesis marroquíes en la aproximación al conflicto.

Se mantuvo el **bloqueo en las negociaciones entre Marruecos y el Frente POLISARIO que ha persistido en los últimos años, desde la suspensión de los contactos informales entre las partes en 2012. A esta situación se añadió un mayor distanciamiento y una tensión sin precedentes entre Marruecos y el secretario general de la ONU** –y, como consecuencia, con la MINURSO– tras la visita de Ban Ki-moon a la región en marzo. Las declaraciones del alto diplomático de la ONU respecto a la "ocupación" del Sáhara Occidental durante una visita a los campos de refugiados saharauis en Argelia alentaron una airada respuesta de Rabat, que pidió públicamente aclaraciones sobre las palabras de Ban, organizó masivas protestas en Rabat y El Aaiún y decidió expulsar a la mayor parte del componente civil de la MINURSO.[21] Ban lamentó que las autoridades marroquíes optaran por estas vías y por emitir una serie de comunicados públicos en lugar de buscar una clarificación por canales diplomáticos. Marruecos también había expresado su disconformidad con declaraciones previas del secretario general de la ONU con motivo de un nuevo aniversario de la Marcha Verde, en noviembre de 2015. En este contexto, el Consejo de Seguridad decidió en abril renovar el mandato de la MINURSO, exigió un retorno a la plena normalidad de las funciones de la misión e hizo un llamamiento a Marruecos y al Frente POLISARIO a iniciar una fase intensiva y sustantiva de negociaciones bajo los auspicios del secretario general de la ONU (resolución 2285). A mediados de año, Rabat y la ONU llegaron a un acuerdo para el retorno de funcionarios a la MINURSO. En este contexto, se especuló sobre un nuevo viaje a la región del enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, y sobre la posibilidad de que la ONU presentara una propuesta oficial a las partes en conflicto para reactivar las negociaciones. El diplomático había realizado una visita en febrero de 2016 –precedida por otras rondas en septiembre, octubre y noviembre de 2015–, pero durante este último desplazamiento no se reunió con autoridades marroquíes. Ross –declarada persona *non grata* por Rabat hace unos años– finalmente no concretó un nuevo viaje a la región durante el segundo semestre, pero el subsecretario general de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, Hervé Ladsous, se trasladó a la zona en octubre y visitó El Aaiún y los campos de refugiados de Tindouf.

Cabe destacar que durante el año en sus comunicaciones con la ONU **Marruecos insistió en su iniciativa de autonomía, considerada por Rabat como lo máximo que puede ofrecer para abordar el conflicto del Sáhara Occidental**, al que describe como parte de sus provincias del sur. En una carta dirigida al secretario general de la ONU fechada a mediados de febrero –antes del *impasse* tras la visita de Ban–, el representante marroquí ante

21. Véase el resumen sobre Marruecos-Sáhara Occidental en el capítulo 2 (Tensiones).

la organización internacional, Omar Hilale, detalló que esta autonomía iría acompañada de un plan de desarrollo focalizado en las áreas de fosfatos, pesca, agricultura y turismo. En julio, Marruecos también anunció formalmente su intención de reincorporarse a la Unión Africana, que abandonó en 1984 después de que la organización regional decidiera admitir a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En un discurso televisado el rey Mohammed VI subrayó que esta medida no suponía en ningún caso renunciar a los (pretendidos) derechos del reino sobre el Sáhara Occidental. Adicionalmente, cabe mencionar que durante el segundo semestre, el secretario general de la ONU se mostró alarmado por el incremento de la tensión entre Marruecos y el Frente POLISARIO en una zona próxima a la frontera con Mauritania y recordó la necesidad de que ambas partes respetaran el acuerdo de cese el fuego vigente desde 1991. Al finalizar el año, un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE rechazó que los territorios del Sáhara Occidental pudieran ser incluidos en acuerdos comerciales entre Marruecos y la UE.

El Gobierno y las FARC-EP firmaron un histórico acuerdo de paz en Colombia que fue rechazado en primera instancia en referéndum popular

3.3.2. América

Colombia (FARC-EP)	
Actores negociadores:	Gobierno y FARC-EP
Terceras partes:	Países garantes (Cuba, Noruega), países acompañantes (Venezuela, Chile)
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de paz de La Habana (2016)

Síntesis:
Desde que surgieron las primeras guerrillas en Colombia en 1964 se han producido varios intentos de negociación. A principios de los noventa se logró la desmovilización de varios grupos pequeños, pero no de las principales guerrillas de las FARC-EP y del ELN. En 1998, el presidente Andrés Pastrana autorizó la desmilitarización de una amplia región de Colombia, con centro en San Vicente del Caguán, para llevar a cabo unas negociaciones con las FARC-EP, que duraron hasta 2002 y no dieron resultado. En 2012, y después de varios meses de negociaciones secretas en Cuba, se iniciaron unos nuevos diálogos con las FARC-EP en la isla, con una agenda delimitada y con mecanismos de participación civil. Tras cuatro años de negociaciones, a finales de 2016 se logró la firma de un acuerdo de paz histórico para el pueblo colombiano.

El 2016 se convirtió en un año histórico en Colombia, ya que después de más de 52 años de conflicto armado, el Gobierno colombiano presidido por Juan Manual Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) encabezada por Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", firmaron el acuerdo de paz tras cuatro años de negociaciones en La Habana. La firma de la histórica paz no estuvo exenta de dificultades, la última de ellas producida a la hora de someter el acuerdo final al refrendo popular en octubre, que resultó en con un rechazo al mismo que obligó a las partes a volver a revisar contenidos y aprobar el texto final, esta vez, por vía parlamentaria.

Si bien ambas partes habían anunciado desde septiembre de 2015 la fecha del 23 de marzo de 2016 como plazo previsto para lograr el acuerdo final de paz, las negociaciones se extendieron un poco más de la hoja de ruta planteada. El 2 de febrero se retomaron los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP con un nuevo impulso, luego de asegurar la implicación de la ONU, quien aceptó organizar una misión de verificación del fin del conflicto para velar por el cumplimiento del alto el fuego y la entrega de armas definitiva. El 24 de febrero el presidente Santos anunció el respaldo de la mayoría de los partidos políticos del país para sacar adelante los acuerdos que se alcanzaran en la mesa de negociaciones, con la excepción del principal partido opositor, el Centro Democrático, liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe. A principios de marzo las comisiones del Senado y el Congreso aprobaron el proyecto de ley para permitir la creación de zonas de concentración para los combatientes de las FARC-EP donde se realizarán las entregas de armas, el tránsito a la legalidad y la reincorporación de combatientes a la vida civil. Posteriormente, **el 23 de junio, en lo que fue considerado un paso irreversible para poner fin al conflicto armado, el Gobierno colombiano y la guerrilla firmaron un acuerdo sobre el "fin del conflicto" y el mecanismo de referéndum para su ratificación por parte del pueblo colombiano.** En el acuerdo, que se presuponía como el último paso antes de la firma total de la paz, se definió el funcionamiento del cese al fuego y el cese de las hostilidades, el proceso de abandono de las armas, las garantías de seguridad y la preparación de la reincorporación a la vida civil de las tropas de las FARC-EP. El pacto dispuso el establecimiento de 23 zonas veredales y ocho sitios más pequeños donde las FARC-EP concentrarán a sus fuerzas. Además se adoptó la resolución del Tribunal Constitucional sobre el mecanismo de referéndum para la ratificación popular del acuerdo final de paz. Tras el acuerdo, tan sólo quedaban algunos temas pendientes en la agenda, como la "reincorporación" de las FARC-EP a la vida civil y su transformación en un movimiento político y los mecanismos de monitoreo e implementación para todos los compromisos.

Dos meses después, **el 24 de agosto, los equipos negociadores del Gobierno y las FARC-EP lograron el histórico acuerdo de paz** que, tras su ratificación en el plebiscito convocado para el 2 de octubre, tenía que abrir una nueva etapa política en el país. El acuerdo se compuso de seis apartados: 1) Reforma rural integral; 2) Participación política: Apertura democrática para construir la paz; 3) Cese

el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas; 4) Solución al problema de las drogas ilícitas; 5) Víctimas; y 6) Mecanismos de implementación y verificación. **El acuerdo incorpora de forma transversal el enfoque de género.**[22] Tanto el Presidente Santos como "Timochenko" ordenaron el alto el fuego definitivo a partir del 29 de agosto. Tras darse a conocer el acuerdo final, la oposición anunció que llevaría a cabo una campaña contra el acuerdo y que promovería el "no" en el plebiscito. Luego de la presentación del acuerdo final, **el 26 de septiembre, Gobierno y FARC-EP firmaron en Cartagena de Indias la paz** en una ceremonia en la que fueron acompañados por unos 2.500 invitados y unos 15 jefes de Estado, encabezados por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La UE declaró, en apoyo al acuerdo, que suspendería a las FARC-EP de su lista de organizaciones terroristas. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, también anunció que EEUU revisaría la salida de las FARC-EP de su lista de grupos terroristas en la medida en que cambien los "hechos" tras la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, la euforia por el logro de una paz histórica se vio congelada debido a los **resultados del referéndum del día 2 de octubre. El "no" al acuerdo, que fue encabezado por el ex presidente Álvaro Uribe, obtuvo la victoria con un ajustado 50,21% (6.431.376 votos) frente al 49,78% (6.377.482 votos) que obtuvo el "sí" –es decir, poco más de 50.000 votos– en una consulta cuya abstención estuvo en el 60% del censo electoral.** Tras el varapalo electoral, Gobierno y FARC-EP reafirmaron su compromiso con la paz. El jefe negociador del Gobierno colombiano**,** Humberto de la Calle Lombana, puso su cargo a disposición del presidente, quien lo ratificó en el puesto y nombró, junto con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, interlocutor con la oposición dirigida por el expresidente Álvaro Uribe. Tras dos semanas de negociaciones entre el Gobierno y la oposición, el 4 de octubre el equipo negociador del Gobierno se volvió a trasladar a La Habana para renegociar algunos puntos del texto con las FARC-EP. En este contexto, el presidente Santos fue galardonado con el premio Nobel de la Paz 2016 por sus "decididos esfuerzos" por llevar la paz a su país, en una medida que fue interpretada como un espaldarazo de la comunidad internacional al proceso de paz en Colombia tras el triunfo del "no" en el referéndum.

Finalmente, el 12 de noviembre, Gobierno y FARC-EP, lograron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El presidente colombiano manifestó que el nuevo acuerdo recogía los planteamientos de todos los sectores sociales y mejoraba el original. Por su parte, las FARC-EP manifestaron que la guerrilla cedió hasta los "límites de lo razonable y aceptable", y que su firma debería dar inicio a la construcción del "país de la concordia". Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz en Colombia, urgió a las partes a la pronta implementación del nuevo acuerdo para evitar situaciones que pongan en peligro el cese del fuego que comenzó el 29 de agosto. El 24 de noviembre, en una ceremonia realizada en Bogotá ante más de 800 invitados, Gobierno y FARC-EP volvieron a firmar el texto definitivo, mismo que fue refrendado en días posteriores por el Congreso de la República, y no por votación popular. El 4 de diciembre se instaló en Bogotá la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) del Acuerdo de Paz, así como el Consejo Nacional de Reintegración.

Colombia (ELN)	
Actores negociadores:	Gobierno y ELN
Terceras partes:	Países garantes (Ecuador, Brasil y Noruega), países acompañantes (Cuba, Venezuela y Chile)
Acuerdos relevantes:	Acuerdo "Puerta del Cielo" (1988)

Síntesis:
Desde el surgimiento del ELN en 1964 diversos han sido los procesos negociadores que han tratado de buscar la paz en el país. Las primeras negociaciones entre el Gobierno y el ELN datan de 1991 (Caracas y Tlaxcala). En 1998, ambas partes firmaron en Madrid un acuerdo de paz que preveía la celebración de una convención nacional. Ese mismo año se firmó en Maguncia (Alemania) el acuerdo "Puerta del Cielo", entre el ELN y miembros de la sociedad civil, centrado en aspectos humanitarios. En 1999, el Gobierno y el ELN retomaron los contactos en Cuba, que finalizaron en junio de 2000. El Gobierno de Álvaro Uribe retomó las negociaciones de paz con esta guerrilla en Cuba, de 2005 al 2007, sin lograr resultados. A finales de 2012, el ELN mostró su disposición a abrir nuevas negociaciones con el presidente Juan Manuel Santos, nombrando una comisión negociadora, pero a mediados de 2014 el mandatario todavía no había autorizado el inicio de negociaciones formales, aunque se han mantenían los contactos exploratorios.

Durante el 2016 se mantuvieron las conversaciones entre Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de carácter exploratorio, retomando las conversaciones preliminares que se iniciaron en junio de 2014. El 30 de marzo, Frank Pearl, representante del Gobierno colombiano, y Antonio García, representante del ELN, habían anunciado el inicio de conversaciones formales para la paz en su fase pública para el 27 de octubre, que se desarrollarían principalmente en Ecuador, contando con la presencia de representantes de los países garantes: Ecuador, Brasil y Noruega y Venezuela, así como de países acompañantes, Chile, Cuba y Venezuela. En dichas conversaciones la agenda planteada se conformaba de seis puntos: 1) Participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2) Democracia para la paz; 3) Transformaciones para la paz; 4) Víctimas; 5) Fin del conflicto armado; y 6) Implementación. El Gobierno colombiano manifestó

22. Véase "La inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo de paz en Colombia" en el capítulo 6 (Oportunidades de paz para 2017).

su satisfacción por el inicio de las conversaciones con el ELN, las cuales se desarrollaran de manera independiente a las mantenidas con las FARC-EP, pero manifestó que estas solamente se iniciarían cuando quedaran resueltos algunos temas humanitarios, entre ellos, la liberación de las personas secuestradas por la guerrilla. Finalmente, y tras meses de negociaciones no públicas marcadas por los desacuerdos sobre la liberación de secuestrados por el ELN –sobre todo del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, quien se había intercambiado en el mes de abril por su hermano Patrocinio, exgobernador del departamento de Chocó–, ambas partes anunciaron el 3 de noviembre como nueva fecha para el inicio de las conversaciones en Ecuador, luego de haber sido suspendidas el 27 de octubre. Sin embargo, la no liberación de Odín volvió a posponer las negociaciones, cuyo inicio se preveía para los primeros meses de 2017.

Venezuela	
Actores negociadores:	Gobierno, oposición (MUD)
Terceras partes:	UNASUR, Vaticano
Acuerdos relevantes:	--

Síntesis:
La crisis política y social que atraviesa el país se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, incrementándose la tensión posteriormente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013 que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Posteriormente, en diciembre de 2015, la oposición venezolana (Mesa de Unidad Democrática - MUD) consiguió una abrumadora victoria en las elecciones legislativas, las cuales por primera vez desde la llegada de Chávez al poder, le otorgaron el control de la Asamblea Nacional (Parlamento). Este hecho ha incrementado la tensión política entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y el nuevo poder Legislativo en manos opositoras, abriendo un nuevo espacio de disputas y confrontaciones en el país. Diversos actores externos han intentado mediar y favorecer una salida al conflicto.

A raíz de la abrumadora victoria electoral conseguida por la oposición venezolana en las elecciones legislativas celebradas en diciembre de 2016, las cuales les otorgaron el control de la Asamblea Nacional (Parlamento), la crisis política entre el Gobierno y la oposición se incrementó como consecuencia de la pérdida de poder institucional del Gobierno de Nicolás Maduro. La toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional (AN), el 5 de enero, proporcionó a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el control absoluto de la cámara, lo que desencadenó diferentes estrategias parlamentarias para tratar de deponer al Gobierno que fueron contrarrestadas por el Ejecutivo utilizando al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aparato que se encuentra bajo control gubernamental. Al inicio de año, la oposición planteó la realización de un referéndum revocatorio, la celebración de una reforma constitucional para la renovación de los poderes del Estado y la presentación de una enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial de seis a cuatro años.[23] Todas estas medidas fueron revocadas en diferentes momentos del año por parte del TSJ, lo que incrementó significativamente el clima de crispación política, a lo que se unió el deterioro de la situación económica y social en el país, que llevaron al Ejecutivo de Maduro a decretar durante el mes de mayo el Estado de Excepción y Emergencia Económica, por medio del cual se suspendieron las garantías constitucionales. El bloqueo del Gobierno y de los aparatos bajo control gubernamental a las iniciativas parlamentarias, llevó a la oposición a aumentar las movilizaciones populares, así como a iniciar un procedimiento contra el presidente Maduro en la AN y a solicitar al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la invocación de la Carta Democrática Interamericana ante la "crisis institucional y humanitaria" que atravesaba el país, y cuya última consecuencia sería la suspensión de Venezuela de su pertenencia a la OEA.

Para tratar de reducir el clima de tensión durante el año se pusieron en marcha diferentes iniciativas de mediación, en las cuales la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) jugó un papel central. A principios de año, una comisión internacional auspiciada por la UNASUR, encabezada por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los exmandatarios de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández, llegó a Venezuela para mediar entre el Gobierno venezolano y la oposición. El 28 de mayo, la comisión, el Gobierno y la oposición se reunieron en la República Dominicana para tratar de desacelerar la crisis, sin lograr avances. La MUD solicitó la participación del Vaticano en el equipo mediador, que fue aceptada por el presidente Maduro a finales de julio. Finalmente, el 30 de octubre se inició el proceso de diálogo nacional facilitado por la mediación de la UNASUR y el Vaticano, a través de su enviado especial, Monseñor Emil Paul Tscherrig. En este espacio se establecieron cuatro mesas de trabajo: respeto a la soberanía, reparación de víctimas, cronograma electoral y economía. La MUD condicionó el progreso de las conversaciones a la liberación de más de un centenar de opositores y a la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas, así como por otro lado, postergó el proceso de juicio político en la AN contra el presidente Maduro. El 12 de noviembre se acordó una declaración conjunta denominada "Convivir en paz", en la que ambas partes se comprometieron a cumplir con la Constitución del país, así como expresaron su compromiso con una convivencia pacífica y sin violencia, lo cual hizo que el Consejo Permanente de la OEA aprobase una declaración de apoyo al diálogo. Sin embargo, en la tercera sesión del 12 de diciembre la oposición

23. Véase el resumen sobre Venezuela en el capítulo 2 (Tensiones).

suspendió su participación en la mesa de negociación arguyendo que el Gobierno no estaba cumpliendo con los compromisos acordados el 12 de noviembre. El Gobierno, por su parte, manifestó que el diálogo seguía abierto.

3.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Actores negociadores:	Gobierno, insurgencia talibán, EEUU
Terceras partes:	Grupo cuadrilátero (Pakistán, EEUU, China, Afganistán), Qatar, Arabia Saudita
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de Bonn –Acuerdo sobre las disposiciones provisionales en Afganistán en espera del restablecimiento de las instituciones permanentes de gobierno– (2001)

Síntesis:
Afganistán sufre una situación de conflicto armado de manera continua desde 1979. Los intentos de negociación entre las partes se han sucedido a lo largo de todas las fases del conflicto armado. Durante la década de los ochenta Naciones Unidas facilitó acercamientos entre EEUU y la URSS. Tras la caída del régimen talibán en 2001, Naciones Unidas facilitó de nuevo el proceso que dio lugar al Acuerdo de Bonn, que marcó el inicio de la transición en el país. La persistencia del conflicto armado y la imposibilidad de poner fin a éste por la vía militar ha llevado a que en los últimos años se haya producido un progresivo acercamiento de los Gobiernos afgano y estadounidense a la insurgencia talibán, proceso que no ha estado exento de dificultades y que no ha superado la fase de exploración y creación de medidas de confianza. Diferentes actores internacionales como Naciones Unidas y los Gobiernos alemán y de Arabia Saudita han desempeñado diferentes roles de facilitación y acercamiento entre las partes.

En lo que respecta a las negociaciones para poner fin al conflicto armado en Afganistán, cabe destacar que a lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de carácter diplomático pero no se logró el inicio oficial de conversaciones de paz, aunque sí se produjeron importantes encuentros no oficiales, entre los que cabe destacar los que tuvieron lugar en Qatar en septiembre y octubre y en los que participaron el Gobierno afgano, la insurgencia talibán y la diplomacia estadounidense. El año se inició con la conformación del grupo cuadrilátero de coordinación, integrado por los Gobiernos de Pakistán, Afganistán, China y EEUU y que celebraron una primera reunión en enero en Islamabad con la intención de retomar el proceso de paz interrumpido el año anterior tras el anuncio público de la muerte del Mullah Omar. En este encuentro, el representante pakistaní presentó una propuesta para retomar el diálogo con cuatro puntos: 1) crear las condiciones idóneas para incentivar que los talibán dejen las armas y se unan al diálogo; 2) tomar medidas secuenciales para preparar contactos directos con los talibán; 3) usar medidas de confianza para animarles a retomar el diálogo; y 4) usar un plan que sea realista y evite crear grandes expectativas. En febrero, tras celebrar una segunda reunión en Kabul, el grupo cuadrilátero de coordinación anunció que en la primera semana de marzo se produciría una nueva ronda de conversaciones directas entre la insurgencia talibán y el Gobierno de Afganistán en Islamabad, Pakistán. El grupo cuadrilátero emitió un comunicado invitando a todos los talibanes y otros grupos a desplazarse a Pakistán para participar en las negociaciones, que sin embargo fue respondido poco después con una negativa por parte de la insurgencia talibán a llevar a cabo negociaciones con el Gobierno afgano y rechazando el anuncio efectuado por el grupo cuadrilátero. Los talibanes negaron haber autorizado la participación de nadie en representación talibán en la reunión anunciada a finales de febrero, reiterando sus condiciones para una negociación: la retirada de las tropas extranjeras, la eliminación de las listas negras y la puesta en libertad de los prisioneros insurgentes. Las declaraciones del asesor pakistaní de asuntos exteriores, Sartaj Aziz, señalando que el Gobierno pakistaní tenía influencia sobre la insurgencia talibán para llevarles a la mesa de negociaciones, reconociendo abiertamente la presencia en territorio pakistaní de los líderes talibanes y sus familias, podrían haber perjudicado el anuncio de negociaciones.

Varios medios de comunicación occidentales revelaron que el Gobierno afgano y representantes talibanes habían reiniciado las conversaciones de paz en Qatar, aunque no se trataba de un proceso de negociaciones oficiales

En octubre, sin embargo, varios medios de comunicación occidentales revelaron informaciones obtenidas a través de fuentes talibanes que señalaban que el Gobierno afgano y representantes talibanes habían reiniciado las conversaciones de paz en Qatar, aunque no se trataba de un proceso de negociaciones oficiales. Varios miembros de la comisión política talibán en Qatar se habrían reunido en dos ocasiones, en septiembre y octubre, en Doha con el jefe de los servicios de inteligencia afganos, Mohammed Masoom Stanekzai, y en presencia de un diplomático de alto rango estadounidense. Estos encuentros se celebraron sin la asistencia de representantes pakistaníes, lo que mostraría el distanciamiento tanto de los talibanes como del Gobierno afgano con el país vecino, aunque posteriormente, tres representantes talibanes se desplazaron a Pakistán. Las reuniones en Doha eran las primeras celebradas desde el asesinato del líder talibán Mullah Mansoor por un avión no tripulado estadounidense. El Gobierno afgano negó tener conocimiento de este encuentro y la Embajada estadounidense en Qatar declinó hacer comentarios sobre las reuniones. No obstante, la presencia diplomática estadounidense en estas reuniones habría servido para relanzar el proceso, ya que los talibanes se han negado en numerosas ocasiones a reunirse solo con el Gobierno afgano, por considerarlo un gobierno títere, y

han destacado la importancia de que las negociaciones se produzcan a tres bandas. En el encuentro posterior mantenido por los representantes talibanes con el Gobierno pakistaní, este último habría tratado de relanzar un proceso de diálogo entre talibanes y Gobierno afgano liderado por Pakistán. Todos los intentos de relanzar el proceso de paz se produjeron en un contexto de fuertes divisiones internas en el seno de la organización talibán acerca de la conveniencia o no de negociar con Afganistán, así como sobre el papel que debe jugar Pakistán. Algunos líderes talibanes, entre ellos el hasta ahora principal negociador Sayed Muhammad Tayeb Agha, se habrían mostrado favorables a distanciarse de Pakistán e incluso a que la dirigencia abandonara el país, en el que reside abiertamente. Por otra parte, las relaciones entre Afganistán y Pakistán también estaban notablemente deterioradas, con acusaciones por parte del Gobierno afgano a Pakistán de estar detrás de los recientes éxitos militares de la insurgencia.

El año concluía con una reunión en Moscú de los Gobiernos ruso, chino y pakistaní para discutir sobre el proceso de paz en Afganistán sin que el Gobierno de este país fuera invitado a participar en dicha reunión, lo que incentivó las interpretaciones del encuentro como un intento por parte de Rusia y Pakistán de fortalecer su relación con China como contrapeso al acercamiento entre Afganistán e India que se ha producido en los últimos años. Además, tanto el Gobierno afgano como el estadounidense señalaron que el Ejecutivo ruso estaría incrementando sus contactos con los talibanes. A finales de año, prensa internacional reveló detalles sobre los intentos de facilitación de negociaciones de paz entre el Gobierno afgano y la insurgencia talibán por parte de la diplomacia noruega entre los años 2007 y 2010 y que fracasaron en gran medida por la obstaculización de estos esfuerzos por el Gobierno pakistaní con la detención del líder talibán Mullah Abdul Ghani Baradar, que debía participar en las conversaciones de paz previstas entre Gobierno afgano e insurgencia. En lo que respecta a las iniciativas de diplomacia ciudadana, la organización Pugwash llevó a cabo varias reuniones en Afganistán y en el extranjero con múltiples actores involucrados en la construcción de la paz en el país y presentó una propuesta de borrador de acuerdo de paz. Especialmente importante fue la participación de representantes talibanes en algunos de estos encuentros. Por otra parte, cabe destacar que **en el mes de octubre el Gobierno afgano firmó un acuerdo de paz con el grupo armado de oposición Hezb-i-Islami, liderado por el señor de la guerra Gulbudin Hekmatyar,** segundo grupo armado en importancia en el país. El acuerdo, celebrado por Naciones Unidas y la Embajada de EEUU, fue recibido con preocupación por diferentes organizaciones de derechos humanos, que subrayan el papel de Hekmatyar en la guerra en el país y las graves violaciones de derechos humanos de las que es responsable, entre las que cabe destacar el bombardeo indiscriminado de población civil, el asesinato selectivo de intelectuales, desapariciones forzadas y ataques con ácido contra mujeres por no llevar velo. El acuerdo contempla la puesta en libertad de los presos del grupo armado y una amnistía para Hekmatyar, a quien se autorizará a regresar a Kabul y participar en la vida política del país. El Gobierno deberá asumir los costes en seguridad del emplazamiento que el grupo decida como sede para su liderazgo. El Gobierno afgano también accedió a trabajar para que Naciones Unidas y EEUU retiren las sanciones contra Hekmatyar. Cabe destacar que una parte significativa del grupo se escindió de la facción armada y se unió al Gobierno de Hamid Karzai sin renegar de Hekmatyar, lo que podría aportarle en la actualidad una importante plataforma política. El grupo armado accedió a desarmarse, a acatar la Constitución y a participar en mecanismos de justicia transicional.

India (Nagalandia)	
Actores negociadores:	Gobierno indio, NSCN-IM
Terceras partes:	--
Acuerdos relevantes:	Acuerdo marco (2015)

Síntesis:
El estado indio de Nagalandia ha vivido una situación de conflicto armado y crisis sociopolítica desde los años cincuenta, como consecuencia de la aspiración no satisfecha de independencia y creación de un estado soberano de gran parte de la población naga. Desde la década de los sesenta se han producido diferentes intentos de negociación, pero no fue hasta el año 1997 que se logró un acuerdo de alto el fuego con el grupo NSCN-IM, uno de los principales actores del conflicto. A pesar de que el acuerdo se ha mantenido vigente hasta la actualidad, las negociaciones no han logrado avances significativos en los temas centrales, aunque en el año 2012 el proceso de paz experimentó un impulso gracias a un mayor involucramiento del Gobierno naga y parlamentarios del estado. En paralelo a las negociaciones con el NSCN-IM, en el año 2001, el Gobierno alcanzó otro acuerdo de alto el fuego con la organización insurgente NSCN-K, sin que tampoco estas negociaciones hayan avanzado de manera significativa. En 2015, el Gobierno y el NSCN-IM alcanzaron un preacuerdo marco de paz, considerado un preámbulo para la resolución final del conflicto. Sin embargo, ese mismo año se rompió el acuerdo de alto el fuego con el NSCN-K, reiniciándose enfrentamientos de carácter violento.

En el estado indio de Nagalandia prosiguieron las negociaciones de paz entre el Gobierno indio y el grupo armado de oposición naga NSCN-IM. Aunque de forma repetida a lo largo del año ambas partes se esforzaron en difundir la idea de que las negociaciones avanzaban positivamente tras la firma del acuerdo marco de paz firmado en 2015, lo cierto es que **el año concluyó sin que se hubiesen registrado avances significativos y sin noticias relativas a un acuerdo de paz final.** En enero ambas partes anunciaron su intención de acelerar el proceso y de mantener reuniones formales dos veces por semana en Delhi, tras varios años en los que se celebraban dos rondas formales de negociación con carácter anual sin que se hubiesen producido avances en el proceso. No obstante, la muerte en el mes de julio

del líder y fundador del grupo armado NSCN-IM, Isak Chishi Swu, incrementó la preocupación por el futuro del proceso de paz con el Gobierno indio y por la posibilidad de que el acuerdo de paz preliminar que se alcanzó en agosto de 2015 se traduzca en un acuerdo de paz final. Swu, de 84 años, estaba ingresado en un hospital en Delhi. Aunque Swu estaba enfermo desde junio del año pasado, en agosto de 2015 firmó el acuerdo de paz. Este hecho fue destacado por miembros del Gobierno indio con el objetivo de recalcar su legitimidad y posibles divisiones entre las organizaciones nagas con respecto al acuerdo, puesto que la figura de Swu era decisiva y en su ausencia estas divisiones podrían acrecentarse. Tras el fallecimiento de Swu se nombró presidente del NSCN-IM a Kholi Konyak, general que había encabezado la facción disidente NSCN-U y que en marzo, pocos días después de reincorporarse al NSCN-IM, se había unido a la delegación negociadora del NSCN-IM con el Gobierno indio. En paralelo a las negociaciones con el NSCN-IM, el Gobierno señaló también que se estaba trabajando intensamente para revertir la ruptura del acuerdo de alto el fuego con el NSCN-K y destacó los esfuerzos llevados a cabo por organizaciones naga como Naga Hoho y Eastern Nagaland People's Organisation (ENPO), que se desplazaron a Myanmar a instancias de la Asamblea del estado de Nagalandia para conversar con el NSCN-K. Algunas fuentes han señalado que la intención del Gobierno indio sería la de incorporar a un acuerdo final a todas las organizaciones nagas antes de su firma. Cabe destacar que los diferentes esfuerzos negociadores se produjeron en un contexto de menor tensión y violencia que en años anteriores, y que durante 2016, apenas se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los diferentes grupos insurgentes que operan en Nagalandia. Además, el número de fallecidos como consecuencia de la violencia armada se redujo de las 46 muertes registradas en 2015 a seis durante 2016.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NDF)	
Actores negociadores:	Gobierno, NDF (organización paraguas de distintas organizaciones comunistas, entre ellas el Partido Comunista de Filipinas, que es el brazo político del NPA)
Terceras partes:	Noruega
Acuerdos relevantes:	Declaración conjunta de La Haya (1992), Acuerdo conjunto sobre seguridad y garantías de inmunidad (1995), Acuerdo sobre el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (1998)

Síntesis:
Las negociaciones entre el Gobierno y el NDF se iniciaron en 1986, tras la caída de la dictadura de Ferdinand Marcos. Desde entonces se han producido numerosas rondas de negociaciones, pero solamente se ha llegado a un acuerdo en uno de los cuatro aspectos sustantivos de la agenda negociadora identificados en la Declaración de La Haya de 1992: derechos humanos y derecho internacional humanitario (se firmó un acuerdo en 1998); reformas socioeconómicas; reformas políticas y constitucionales, y fin de las hostilidades y disposición de fuerzas. Desde el año 2004, el Gobierno de Noruega ejerce tareas de facilitador entre el Gobierno y el NDF, organización política que representa al Partido Comunista de Filipinas y a su brazo armado (el NPA) en las negociaciones de paz. Además de las diferencias sustantivas entre Gobierno y NDF acerca del modelo socioeconómico y político que más conviene a Filipinas, uno de los aspectos que en los últimos años ha generado mayor controversia entre las partes es el de las garantías de seguridad e inmunidad para los miembros del NDF que participan en las negociaciones de paz.

Tras varios años de parálisis en el proceso de paz, en la segunda mitad del año se reanudaron las conversaciones de paz oficiales entre ambas partes, se redujo notablemente la violencia y se produjeron avances sustanciales en la agenda negociadora, aunque a finales del 2016 volvió a resurgir la tensión entre las partes por la insistencia del Gobierno en firmar un alto el fuego bilateral y por la exigencia por parte del NDF de que Manila liberara a cientos de prisioneros políticos. Así como las relaciones entre el NDF y la administración de Benigno Aquino fueron muy tensas en la última parte del mandato de Aquino, la elección de Rodrigo Duterte como nuevo presidente en mayo marcó un punto de inflexión en el proceso de paz. Así, una semana después de su victoria electoral, Duterte mostró su disposición a iniciar un diálogo con el líder y fundador del CPP y el NPA, Jose Maria Sison, tanto desplazándose él a Utrecht –donde Sison reside desde 1987– como garantizando su seguridad e inmunidad en un eventual regreso de Sison a Filipinas. Además, ofreció al NDF cuatro ministerios en su Gobierno y se reunió con uno de los máximos líderes del NDF –Fidel Agcaoli– para abordar el futuro de las conversaciones de paz. Aunque el NDF rehusó formar parte del Gobierno, tanto Agcaoli como el propio Sison se mostraron optimistas respecto del proceso de paz y se mostraron dispuestos a no poner ninguna precondición para la reanudación del diálogo. Según algunos analistas, las relaciones personales entre Sison y Duterte –este último había sido alumno de Sison en la universidad–, así como la afinidad ideológica de Duterte con el NDF –en alguna ocasión se había declarado socialista y había facilitado en varios momentos la liberación de rehenes y prisioneros por parte del NPA como alcalde de Davao– contribuyeron al desbloqueo de las negociaciones y al establecimiento de una mayor confianza entre las partes. Además, los nombramientos de Jesús Dureza como consejero presidencial para el proceso de paz, del secretario de Empleo Silvestre Bello como jefe del panel negociador y de Hernani Braganza como miembro del panel también contribuyó a mejorar las relaciones entre ambas partes, por cuanto en el pasado los tres habían jugado un papel importante en el proceso de paz con el NDF.

Así las cosas, en junio se reanudaron en Oslo las conversaciones exploratorias, en las que ambas partes

acordaron la agenda de las negociaciones formales que deberían iniciarse en Noruega a finales de julio: ratificación de los acuerdos logrados hasta el momento (más de 20); calendario sobre las negociaciones en los tres aspectos principales de la agenda sustantiva (reformas económicas y sociales; reformas políticas y constitucionales; y fin de las hostilidades), con el compromiso de ambas partes de acelerar el ritmo de la negociación; reconstitución de la lista de personas cubiertas bajo el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG, por sus siglas en inglés); amnistía para los prisioneros políticos; y cese de hostilidades. Además, ambas partes también acordaron que el panel gubernamental recomendaría al presidente la liberación inmediata de los llamados consultores del NDF y otras personas presas que según el NDF se hallan amparadas por el JASIG para que pudieran participar en las mencionadas negociaciones formales; así como la liberación de varios presos por razones humanitarias. En sintonía con estos primeros contactos con el NDF pero también con otros grupos como el MILF y el MNLF, a mediados de julio el Gobierno hizo pública su nueva estrategia de paz, que entre otras cuestiones contemplaba la reanudación de las conversaciones con el NDF.

Poco después de esta primera reunión exploratoria se produjo una de las principales crisis de confianza entre ambas partes. Durante su primer mensaje sobre el estado de la nación, Duterte declaró un alto el fuego con el NDF como gesto de buena voluntad y para propiciar una atmósfera de confianza de cara a la primera ronda de conversaciones formales previstas para finales de julio –finalmente fueron pospuestas hasta finales de agosto– y llamó al NDF a replicar el cese de hostilidades unilateral del Gobierno. Sin embargo, el NDF no ordenó dicha medida y además, según el Gobierno, fue el responsable de un ataque en el que un soldado murió y otros tres resultaron heridos. Ante la falta de respuesta al ultimátum dado por el Gobierno para que el NDF diera explicaciones sobre lo ocurrido, Duterte ordenó la finalización del alto el fuego el 30 de julio. A pesar de esta decisión y del cruce de declaraciones entre las partes que se produjeron antes y después de la retirada del cese de hostilidades por parte del Gobierno, Duterte reiteró su intención de reanudar las negociaciones con el NDF, así como su voluntad de liberar a algunos de los prisioneros del NDF.

Así, **entre el 22 y el 27 de agosto el Gobierno y el NDF se reunieron en Oslo, reanudando las conversaciones formales interrumpidas en 2013**. En esta reunión ambas partes renovaron el acuerdo sobre garantías de seguridad e inmunidad –el aspecto que en los últimos años ha generado mayor controversia entre las partes y que provocó el bloqueo del proceso de paz durante las conversaciones con el anterior Gobierno de Benigno Aquino– y se comprometieron acelerar el ritmo del proceso de paz: firma en seis meses del acuerdo sobre reformas económicas y sociales –considerado por muchos analistas como el punto más importante de la agenda sustantiva– y rúbrica de un acuerdo de paz para agosto de 2017, lo que otorgaría al Gobierno de Duterte un plazo de cinco años para implementar dicho acuerdo. Además, tras la reunión ambas partes firmaron sendos acuerdos de alto el fuego indefinido, los primeros de estas características en tres décadas. Cabe destacar que días antes del inicio de las conversaciones, el Gobierno y la Corte Suprema autorizaron la liberación temporal de 20 prisioneros del NDF para que formaran parte de la delegación que viajó a Oslo, entre los que se hallaban Benito Tiamzon y Wilma Tiamzon, los dos principales líderes del NPA y el Partido Comunista en Filipinas. En octubre se llevó a cabo una segunda ronda de conversaciones formales en la que ambas partes reafirmaron su intención de firmar un acuerdo de paz para agosto de 2017 y avanzaron simultáneamente en la discusión sobre los tres puntos de la agenda sustantiva –reformas económicas y sociales, reformas políticas y constitucionales y fin del conflicto–. Además, se comprometieron a tener listo para finales de octubre un borrador de acuerdo de cese de hostilidades bilateral, que debería sustituir a los dos alto el fuego unilaterales indefinidos que firmaron ambas partes a finales de agosto y que, según el Gobierno, debería contemplar la supervisión conjunta del cese de hostilidades e incluso incorporar a una tercera parte a dichas tareas. Cabe destacar que una delegación de seis miembros de la Cámara de Representantes asistió a las reuniones entre el Gobierno y el NDF en calidad de tercera parte observadora.

Tras varios años de parálisis en el proceso de paz, la victoria de Rodrigo Duterte a mediados de año comportó la reanudación de las conversaciones de paz oficiales entre el Gobierno de Filipinas y el NDF

En los últimos meses del año siguieron produciéndose contactos entre las partes y los grupos de trabajo continuaron trabajando en la agenda sustantiva, pero **se incrementó notablemente la tensión entre el Gobierno y el NDF por los desacuerdos, retrasos y acusaciones cruzadas respecto de dos cuestiones: la firma de un acuerdo de alto el fuego bilateral y permanente –el primero de este tipo desde el surgimiento del NPA a finales de los años sesenta– y la liberación de presos políticos exigida por el NDF**. Respecto del primer punto, cabe destacar que se retrasó en varias ocasiones la firma de un pacto que sustituyera a los acuerdos de alto el fuego permanente unilaterales firmados en agosto, por lo que éstos tuvieron que ser prorrogados. Ambas partes alegaron que tales retrasos se debían a varias violaciones del alto el fuego y a la existencia de desacuerdos en varios puntos clave –mecanismos de supervisión del alto el fuego; definición de las zonas de separación entre ambas partes; definición y parámetros de qué constituye un acto hostil; o debate sobre si la extorsión debería considerarse también un acto hostil–, pero el Gobierno acusó en varias ocasiones al NDF de negarse a firmar este acuerdo. Por su parte, el NDF condicionó la firma del pacto a los avances que

pudieran producirse en la liberación de presos políticos, pues considera que no se trata de una medida de buena voluntad del Gobierno, sino de un compromiso que hasta en dos ocasiones ha asumido Rodrigo Duterte, y de un cumplimiento de dos de los principales acuerdos firmados hasta la fecha: el de derechos humanos y derecho internacional humanitario y el de garantías de seguridad e inmunidad.

Por su parte, el Gobierno declaró estar trabajando en la amnistía para 434 personas presas incluidas en una lista que el NDF envió al Gobierno, pero a la vez señaló que dicha liberación no depende del Gobierno y requiere de la aprobación del Congreso y de ciertos procedimientos administrativos y judiciales que llevan un tiempo. Además, Manila señaló que hasta la fecha había sido el Gobierno quien había demostrado mayor voluntad política en las conversaciones de paz y recordó que ya ordenó la liberación temporal de 22 consultores del NDF para que pudieran participar en la primera ronda de conversaciones formales en agosto. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a acelerar los procedimientos que dependan del poder Ejecutivo si el NDF firmaba el mencionado acuerdo de alto el fuego bilateral. En este escenario, en el mes de diciembre, con motivo de la conmemoración del 48º aniversario de la creación del Partido Comunista de Filipinas, Jose Maria Sison advirtió al Gobierno que su negativa a proceder con la mencionada liberación de presos era un obstáculo importante para lograr la firma de un acuerdo de paz para mediados de 2017 –tal y como acordaron ambas partes en el mes de agosto–, mientras que uno de los principales líderes del partido, Luis Jalandoni, advirtió que el NPA no dejará las armas aunque esté negociando con el Gobierno y que el Partido Comunista de Filipinas se verá obligado a poner fin a su tregua unilateral si Manila sigue cometiendo violaciones de los derechos humanos y sigue desplegando efectivos militares en áreas en las que opera o controla el NPA.

Tras ganar las elecciones en Filipinas, Rodrigo Duterte se reunió con líderes del MILF y de una de las facciones del MNLF para abordar tanto las perspectivas de paz en Mindanao como para sondear el apoyo de ambas organizaciones a su propuesta de transformar el país de un Estado unitario a uno federal

Filipinas (MILF)	
Actores negociadores:	Gobierno, MILF
Terceras partes:	Malasia, International Contact Group, Organización para la Cooperación Islámica (OCI)
Acuerdos relevantes:	Acuerdo para el cese general de hostilidades (1997), Acuerdo sobre paz entre el Gobierno y el MILF (2001), Cese mutuo de hostilidades (2003), Acuerdo marco sobre Bangsamoro (2012), Acuerdo global sobre Bangsamoro (2014)

Síntesis:
Las negociaciones de paz entre el Gobierno y el MILF, grupo escindido del MNLF, se iniciaron en 1997, pocos meses después de que el Ejecutivo de Fidel Ramos hubiera firmado un acuerdo de paz con el MNLF. Desde entonces, el proceso negociador se ha visto interrumpido en tres ocasiones (en los años 2000, 2003 y 2008) por el estallido de violencia de alta intensidad. A pesar de ello, durante las más de 30 rondas de negociación que se han producido desde finales de los años noventa se han alcanzado algunos acuerdos en materia de seguridad y desarrollo, así como un acuerdo de cese de hostilidades que en términos generales ha sido respetado. En octubre de 2012, ambas partes firmaron un acuerdo de paz preliminar que prevé la sustitución de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán por una nueva entidad política con mayor cobertura territorial y competencias de autogobierno más amplias.

A pesar de la incertidumbre que se vivió durante el primer semestre del año tras las parálisis de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el MILF, la victoria de Rodrigo Duterte en las elecciones presidenciales del mes de mayo comportó la reactivación del diálogo y de las medidas de fomento de la confianza entre ambas partes, hasta el punto de que en diciembre Duterte y el líder del MILF, Ebrahim Murad, se reunieron para abordar el futuro del proceso de paz. En efecto, con la suspensión de las sesiones legislativas ordinarias del Congreso en el mes de enero, quedó claro que el Parlamento no aprobaría antes de las elecciones presidenciales del mes de mayo la Ley Fundamental de Bangsamoro (BBL, por sus siglas en inglés), norma que debería incorporar los contenidos principales del Acuerdo Marco sobre Bangsamoro (2012) y el Acuerdo Global sobre Bangsamoro (2014) firmados con el MILF después de varios años de negociaciones y que debería propiciar la sustitución de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) por una nueva región autónoma, denominada Bangsamoro, con mayor alcance territorial y nivel de autogobierno. Este hecho, que culminó numerosos retrasos en la tramitación de dicha ley, impidió que la implementación de la BBL pudiera iniciarse bajo el mandato del presidente Benigno Aquino, tal y como habían previsto tanto el MILF como el Gobierno. El Ejecutivo criticó la pasividad y la indiferencia con la que ambas cámaras habían abordado el trámite parlamentario de la ley. En varias ocasiones las discusiones y audiencias sobre la BBL tuvieron que ser pospuestas por falta de quórum. Además, las dos cámaras aprobaron borradores alternativos a la ley, que había sido revisada y enmendada por el Gobierno antes de ser enviada al Parlamento. Tanto el MILF como el Gobierno se opusieron a la aprobación de dichos borradores de ley por considerar que no recogían ni la letra ni el espíritu de los acuerdos que habían alcanzado el Gobierno y el MILF en 2012 y 2014. Por su parte, el

MILF señaló que la parálisis en el proceso de paz podría comportar una enorme frustración entre el pueblo moro; la radicalización de determinados sectores del MILF; la legitimación de aquellas voces que recelaban del Gobierno y que abogaban por una reacción militar a la actual situación; generando todo ello un caldo de cultivo favorable al fortalecimiento de grupos armados que operan en Mindanao y que se oponen al proceso de paz, como Abu Sayyaf, el BIFF, determinadas facciones del MNLF o grupos que dicen formar parte de Estado Islámico. A pesar de estas advertencias, ambas partes prolongaron el acuerdo de alto el fuego y expresaron su compromiso con el diálogo como único instrumento para solventar el conflicto en Mindanao.

Tras ganar las elecciones presidenciales en el mes de mayo, Rodrigo Duterte se reunió inmediatamente con los principales líderes del MILF y de una de las facciones del MNLF para abordar tanto las perspectivas de paz en Mindanao como para sondear el apoyo de ambas organizaciones a su propuesta de transformar Filipinas de un Estado unitario a uno federal. Poco después, **el Gobierno anunció una nueva estrategia de paz consistente en impulsar paralelamente el establecimiento de un Estado federal y la redacción de una ley que sustituya a la BBL**. En este sentido, el Gobierno amplió de 15 a 21 integrantes la composición de la Comisión de Transición Bangsamoro (BTC, el organismo encargado de redactar la anterior BBL y la nueva ley) para dar cabida a miembros del MNLF y de otros sectores de Mindanao. La BTC, que será presidida por el jefe del panel negociador del MILF y tendrá mayoría de miembros elegidos por el MILF, debería tener lista la nueva ley para julio de 2017. Posteriormente el Congreso deberá armonizar en una sola ley esta propuesta de la Comisión con la que surja de la negociación entre el Gobierno y la facción del MNLF liderada por Nur Misuari sobre la plena implementación del acuerdo de paz de 1996. Por otra parte, cabe destacar que a principios de diciembre Rodrigo Duterte se reunió con el líder del MILF, Ebrahim Murad, y con algunos de los miembros del Comité Central del MILF para abordar el futuro del proceso de paz. Duterte, sin embargo, advirtió al MILF que aquellos aspectos constitucionalmente más sensibles del acuerdo de paz de 2014 deberán aguardar a la transformación de Filipinas de un Estado unitario a uno federal. En este sentido, a finales de diciembre el consejero presidencial para el proceso de paz, Jesús Dureza, declaró que el Gobierno estaría dispuesto a reformar la Constitución de 1978 para, entre otras cuestionar, acomodar y dar respuesta a algunas de las demandas que plantean las principales insurgencias del país (NPA, MILF, MNLF). Según Dureza, dicha Constitución ha sido un obstáculo importante en las negociaciones con todos estos grupos porque éstos no aceptan sentirse circunscritos a una legalidad que no consideran propia. De hecho, Dureza admitió que la mayor parte de los acuerdos firmados con estos grupos no mencionan la Constitución filipina, sino el derecho internacional.

Filipinas (MNLF)	
Actores negociadores:	Gobierno, MNLF (facción liderada por Nur Misuari)
Terceras partes:	Organización para la Cooperación Islámica (OCI)
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de Trípoli (1976), Acuerdo de paz final (1996)

Síntesis:
Tras un lustro de hostilidades armadas de alta intensidad entre el Gobierno y el MNLF, ambas partes firmaron un acuerdo de paz en 1976 en Trípoli bajo los auspicios de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), que poco antes había reconocido al MNLF como el representante legítimo del pueblo moro. Sin embargo, la implementación unilateral de dicho acuerdo por parte de la dictadura de Ferdinand Marcos provocó el reinicio del conflicto armado. Tras la caída de Marcos y la recuperación de la democracia en 1986, se reanudaron las conversaciones de paz y en 1996 se logró un nuevo acuerdo de paz para la plena implementación del acuerdo de Trípoli de 1976. Sin embargo, tanto el MNLF como la OCI consideraron que aspectos sustanciales del nuevo acuerdo de paz no habían sido implementados, de modo que desde el año 2007 se inició un proceso tripartito de revisión del mismo. A pesar de los avances que se lograron en dicho proceso (los llamados "42 puntos de consenso"), el ataque por parte del MNLF a la ciudad de Zamboanga en septiembre de 2013; la orden de búsqueda y captura contra el fundador del MNLF, Nur Misuari; las críticas del MNLF al acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y el MILF en marzo de 2014; y las interpretaciones distintas entre el Gobierno y el MNLF sobre la conclusión o no del proceso de revisión del acuerdo provocaron una parálisis de las negociaciones de paz desde finales del 2013.

Después de varios meses de parálisis en el proceso de paz, la llegada de Rodrigo Duterte a la presidencia del país a mediados de año comportó la reanudación de las conversaciones entre el Gobierno y las diferentes facciones del MNLF. **En cuanto al diálogo con la facción mayoritaria del MNLF, liderada por el ex alcalde de Cotobato Muslimin Sema, el Gobierno amplió la composición de la BTC precisamente para dar cabida a las opiniones del MNLF y facilitar así la armonización de contenidos entre los acuerdos de paz que el Gobierno firmó en 1996 con el MNLF y el 2014 con el MILF**. De hecho, tres de los 10 miembros de la BTC designados por el Gobierno serán del MNLF. En cuanto a la facción del MNLF liderada por el fundador del grupo, Nur Misuari, Duterte manifestó públicamente en varias ocasiones tras su elección en mayo su intención de involucrar en las conversaciones de paz a Nur Misuari, prófugo de la justicia desde 2013 por su participación en el sitio militar a la ciudad de Zamboanga, en el que más de 200 personas murieron y decenas de miles fueron desplazadas. De hecho, durante la campaña electoral, Misuari instó a sus seguidores a votar a Duterte, siendo la primera vez en la historia del MNLF que su líder hacía un llamamiento tan explícito en unas elecciones presidenciales. En agosto, Duterte confirmó públicamente haber mantenido contacto con Misuari para convencerle acerca de la necesidad de entablar

conversaciones de paz y se comprometió públicamente a no detenerle ni a ponerle bajo custodia gubernamental, así como a librarle un salvoconducto. A mediados de agosto Duterte incluso se desplazó a la isla de Jolo –lugar de nacimiento de Misuari y en el que se sospecha ha estado prófugo estos últimos años– como medida simbólica para mostrar su voluntad de diálogo.

En noviembre, **Duterte se reunió en el palacio presidencial con Misuari, poco después de que un juzgado local hubiera anulado por un periodo de seis meses las órdenes de búsqueda y captura que pesaban en su contra** y de que el nuevo Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Jesús Dureza, se trasladara a Sulu para viajar personalmente con Misuari a Manila. Tras las contundentes críticas de Misuari al MILF y tras su negativa a participar en la llamada Comisión de Transición Bangsamoro para revisar y mejorar Ley Fundamental de Bangsamoro –la ley que debería recoger los aspectos principales del acuerdo de paz que el Gobierno y el MILF firmaron en 2014 y que debería permitir la sustitución de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) por una nueva región autónoma denominada Bangsamoro–, el Gobierno se comprometió a iniciar una negociación bilateral con el MNLF acerca de la plena implementación del acuerdo de paz de 1996, facilitado por la OCI. Así, tras la reunión entre Duterte y Misuari, el Gobierno declaró que el MNLF conformará un panel de cinco personas para completar el proceso de diálogo que en los últimos años han llevado a cabo el Gobierno, el MNLF y la OCI. Dicho proceso, denominado Proceso de Revisión Tripartito, tenía el objetivo de completar la plena implementación del acuerdo de paz de 1996, principalmente a través de la enmienda de la ley que fundó la RAMM, creada tras la firma del mencionado acuerdo de paz. Según declaró el Gobierno, el Congreso armonizará las propuestas que presenten respectivamente la Comisión de Transición Bangsamoro –en la que se integran el MILF, el Gobierno y la facción mayoritaria del MNLF– y la facción del MNLF liderada por Misuari. A mediados de diciembre, Misuari, viajó a Arabia Saudita para participar en una reunión de la OCI y para discutir con el secretario general de la organización el futuro y los detalles del proceso de paz.

Myanmar	
Actores negociadores:	Gobierno; grupos armados firmantes del acuerdo de alto el fuego (NCA): DKBA, RCSS/SSA-South, CNF, KNU,KNLAPC, ALP, PNLO, ABSDF; grupos armados no adheridos al NCA: UWSP, NDAA, SSPP/SSA-N, NMSP, KNPP, NSCN-K, KIA
Terceras partes:	--
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de alto el fuego nacional (octubre de 2015)

Síntesis:
Desde que en 1948 se iniciara el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de Myanmar y los grupos insurgentes de adscripción étnica se han producido varios procesos de negociación que han perseguido el fin de la violencia armada. Desde finales de la década de los ochenta y a lo largo de la década de los noventa, numerosos grupos armados alcanzaron acuerdos de alto el fuego con el Gobierno birmano. Si bien nunca se alcanzaron acuerdos de paz definitivos, la violencia se redujo notablemente como consecuencia de estos pactos. En el año 2011, después del cambio de Ejecutivo como consecuencia de las elecciones de 2010, el nuevo Gobierno inició una serie de acercamientos a la insurgencia armada que desembocaron en el inicio de negociaciones de paz y la firma de acuerdos con la mayoría de los grupos armados que operan en diferentes zonas del país. A mediados de 2012 el Gobierno había firmado acuerdos de alto el fuego bilaterales con 12 organizaciones insurgentes. En 2013 se inició un proceso de diálogo con diferentes grupos insurgentes con el objetivo de lograr un acuerdo de alto el fuego de alcance nacional y de impulsar conversaciones de carácter político. En 2015 Gobierno y ocho grupo armados de oposición firmaron un acuerdo de alto el fuego (NCA, por sus siglas en inglés) y se iniciaron los primeros pasos para el diálogo político.

En Myanmar, el proceso de paz con los grupos armados de oposición adheridos al acuerdo de alto el fuego nacional (NCA, por sus siglas en inglés) avanzó especialmente en los aspectos simbólicos, aunque un gran número de grupos armados siguieron sin firmar este acuerdo y se repitieron los enfrentamientos armados a lo largo de todo el año.[24] Tras la toma de posesión de Aung San Suu Kyi como Consejera de Estado del Gobierno de Myanmar, en el marco de la primera reunión mantenida con representantes de los ocho grupos armados firmantes del NCA, la líder birmana anunció la convocatoria de una conferencia Panglong, en referencia a la Conferencia de Panglong de 1947 que convocó Aung San, el líder de la independencia birmana y padre de Suu Kyi, reuniendo a los líderes étnicos previamente a la independencia del país. El anuncio se produjo en el marco del Comité Conjunto de Supervisión, organismo integrado por Gobierno, grupos armados, Ejército y sociedad civil, para supervisar el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego. En los meses siguientes se celebraron varias reuniones preparatorias que culminaron con la celebración durante los primeros días de septiembre de la Conferencia de Paz Panglong-21, que reunió a Gobierno con la casi totalidad de los grupos armados de oposición activos en el país, incluyendo a aquellos con los que no se firmó el acuerdo de alto el fuego nacional, con la excepción de los grupos AA, MNDAA y TNLA. La conferencia, de cuatro días de duración, tuvo lugar en Naypidaw, capital del país. En la conferencia, cuya ceremonia inaugural fue atendida por 1.400 personas entre asistentes, diplomáticos e invitados, participaron 75 representantes del Gobierno, 75 del Parlamento, 50 de las Fuerzas Armadas, 200 de los grupos armados étnicos, 150 de partidos políticos, 50 de los grupos defensores de las minorías étnicas, 50

24. Véase resumen sobre Myanmar en el capítulo 1 (Conflictos armados).

de otros grupos y 50 observadores. Las organizaciones de mujeres no estuvieron representadas con un estatus propio con asiento en la mesa de negociaciones, sino que asistieron como observadoras, aunque exigieron una mayor participación. De hecho, unos meses antes habían reclamado una mayor presencia y habían elaborado recomendaciones para la conferencia de paz durante un encuentro en Naypyidaw, convocado por la Alianza para la Inclusión de Género en el Proceso de Paz (AGIPP, por sus siglas en inglés) y por ONU Mujeres en el que participaron diferentes organizaciones de mujeres así como parlamentarias y políticas. Los grupos de mujeres habían exigido un sistema de cuotas que reserve un 30% para las mujeres y que permita incrementar el liderazgo político femenino. Durante la conferencia Panglong-21, el secretario general de la ONU hizo un llamamiento para que hubiera una representación del 30% de las mujeres en todos los niveles de las negociaciones.[25] La Conferencia concluyó sin que se hubiera aprobado ninguna resolución y fue considerada como el primer paso en el camino hacia la paz en el país con todos los grupos armados. Diferentes voces apuntaron a que el principal éxito había sido el de reunir a representantes de todos los sectores en una misma mesa, incluyendo a los grupos que no estaban incluidos en el acuerdo de alto el fuego. No obstante, el grupo armado UWSA abandonó la conferencia en el segundo día denunciando la discriminación de las minorías étnicas. La segunda ronda de la Conferencia de Paz Panglong-21 se convocó para febrero de 2017. En los meses siguientes el Comité Conjunto para el Diálogo de Paz de la Unión, integrado por Gobierno, insurgencia y militares y que está presidido por Aung San Suu Kyi, se reunió con el objetivo de coordinar el diálogo político acerca de una posible reestructuración de carácter federal en el país.

En paralelo, **el Gobierno llevó a cabo varias iniciativas para tratar de incorporar al acuerdo a los grupos armados que no habían firmado el NCA**. En junio una delegación gubernamental birmana habría mantenido contactos con tres grupos armados de oposición que fueron excluidos del acuerdo de alto el fuego –TNLA, AA y MNDAA– con el objetivo de que pudieran participar en la Conferencia de Paz inicialmente convocada para el mes de agosto. El Gobierno autorizaría su participación en la Conferencia y su inclusión en el acuerdo de alto el fuego si los grupos accedieran a desarmarse y cesar sus ataques contra las Fuerzas Armadas. En octubre, la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, reiteró el llamamiento a los grupos armados de oposición para que antes de la siguiente sesión de Panglong-21, prevista para el mes de febrero de 2017, firmaran el NCA, puesto que sin el cumplimiento de este requisito el Ejército no permitiría su participación en el proceso de diálogo político. La coordinadora de grupos armados no firmantes del acuerdo, United Nationalities Federal Council (UNFC), había solicitado participar en el proceso político sin necesidad de adherirse al acuerdo de alto el fuego, pero esta petición fue rechazada y el Gobierno mantuvo su postura invariable en los siguientes meses. A finales de año, la UNFC llevó a cabo una reunión de consultas con representantes de la sociedad civil, así como de los grupos armados que sí firmaron el NCA, sobre la situación del actual proceso de paz. Aunque estaba previsto que el Gobierno y los integrantes de la UNFC se reunieran con anterioridad a la celebración de la próxima sesión de la Conferencia Panglong-21, convocada para el mes de febrero de 2017, el encuentro se pospuso hasta el mes de enero. Además, el Gobierno también propuso una reunión en China con los grupos armados que conforman la Alianza del Norte (KIA, TNLA, MNDAA y AA), insurgencias que protagonizan el conflicto armado y que en el mes de noviembre llevaron a cabo una ofensiva militar contra posiciones de las Fuerzas Armadas en el estado Shan.

Tailandia (sur)	
Actores negociadores:	Gobierno, MARA Patani
Terceras partes:	Malasia
Acuerdos relevantes:	--

Síntesis:
Desde el año 2004, fecha en la que se reinicia el conflicto armado en el sur de Tailandia, se han producido varias conversaciones informales, exploratorias y discretas entre el Gobierno tailandés y el movimiento insurgente. Algunas de estas iniciativas de diálogo han sido lideradas por organizaciones no gubernamentales, por el Gobierno de Indonesia o por antiguos altos cargos del Estado tailandés. Tras aproximadamente un año de contactos exploratorios entre el primer ministro Thaksin Shinawatra y algunos movimientos insurgentes, a principios de 2013 se iniciaron conversaciones públicas y formales entre el Gobierno y el grupo armado BRN, con la facilitación del Gobierno de Malasia. Algunos de los principales problemas observados en cada uno de los procesos de diálogo ensayados son la atomización del movimiento insurgente (que hace difícil tanto el control de la violencia sobre el terreno como la articulación de demandas comunes) y la resistencia del Gobierno a reconocer la identidad distintiva de la población sureña o a aprobar medidas de descentralización política.

A pesar de que hacia el mes de abril parecía que el proceso de paz quedaba paralizado, **en el último trimestre del año se llevaron a cabo varias rondas de negociación y se registraron algunos avances en cuanto a la posibilidad de crear las denominadas zonas de seguridad, regiones acordadas entre ambas partes en las que las fuerzas insurgentes se comprometerían a reducir o eliminar la violencia como medida de fomento de la confianza y como prueba de que MARA Patani efectivamente controla a las personas o grupos que están detrás de la violencia.** Durante el primer trimestre del año, en el que no se registraron avances

25. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

significativos y ni siquiera contactos respecto de las negociaciones de paz, el hecho de mayor relevancia fue la visita oficial a Malasia y Tailandia por parte del secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), Iyad Ameen Madani, en la que éste agradeció a Bangkok los esfuerzos que estaba llevando a cabo en la gestión del conflicto en el sur del país y a la vez instó al Gobierno a garantizar un mayor reconocimiento a la comunidad musulmana en Tailandia. Ante los rumores sobre una posible intervención de la OCI en tareas de facilitación del diálogo, un portavoz de MARA Patani rechazó dicha posibilidad por considerar que Malasia ya está llevando a cabo dichas tareas de manera efectiva y por considerar que no sería beneficioso para las actuales conversaciones de paz que hubiera dos terceras partes ejerciendo de facilitadoras. Sin embargo, MARA Patani también remarcó la importancia de que la OCI apoye las actuales conversaciones de paz y señaló que la participación de la OCI o de cualquier otra tercera parte podría considerarse solamente con la autorización del Gobierno tailandés y una vez las negociaciones de paz entren en una fase formal y oficial.

A principios de marzo se generó una cierta expectativa sobre una posible reanudación de las conversaciones de paz, después de que el Gobierno acordara conceder inmunidad y protección de movimientos a los principales interlocutores de los grupos armados que operan en el sur del país. Sin embargo, a finales de abril algunos analistas advirtieron sobre el riesgo de parálisis o colapso del proceso de paz después de que durante la nueva ronda de conversaciones informales que se celebró en Kuala Lumpur –la primera desde agosto de 2015 en la que las delegaciones de ambas partes estaban plenamente representadas– el Gobierno se negara a firmar los términos de referencia de las negociaciones, que según MARA Patani habían sido elaborados y acordados por los respectivos equipos técnicos durante tres reuniones que tuvieron lugar entre octubre y marzo. El portavoz de MARA Patani y miembro del panel negociador, Abu Hafez al-Hakim, también declaró que el cese del secretario del panel, el general Nakrob Boonbuathong, a quien consideraba como uno de los principales impulsores del proceso de paz en el seno del Gobierno, podría estar detrás de la decisión de Bangkok de no ratificar los mencionados términos de referencia. Nakrob Boonbuathong era la única persona del Gobierno que había estado presente en las negociaciones desde el inicio del proceso de paz en 2013 y era la persona del panel negociador que más se había involucrado en las cuestiones técnicas de las negociaciones. Según algunas informaciones periodísticas, su cese podría deberse a que era considerado demasiado cercano a las posturas de los grupos insurgentes.

A pesar de todo ello, tras varios de meses de tensión y distanciamiento entre las partes, en los meses de septiembre y octubre se llevaron a cabo dos nuevas rondas de negociación en las que, aunque no se registraron avances significativos, MARA Patani declaró no tener ninguna vinculación con la serie de atentados que se registraron a mediados de agosto (principalmente 12 ataques consecutivos en varias localizaciones, algunas turísticas, de ocho provincias del sur del país, así como el estallido de dos bombas en un hotel de Pattani) y ambas partes se comprometieron a seguir dialogando y a explorar la posibilidad de establecer determinadas zonas de seguridad. De hecho, en el encuentro llevado a cabo a finales de octubre se establecieron unos Grupos Técnicos Conjuntos para abordar esta cuestión. A mediados de diciembre, durante la tercera reunión de estos grupos en Kuala Lumpur, ambas partes acordaron un borrador sobre el Marco General de las Zonas de Seguridad y MARA Patani anunció que para mediados de 2017 podrían haberse implementado un proyecto piloto de las denominadas zonas de seguridad. A pesar de estos avances, a finales de año el Gobierno reconoció que desde que se iniciaron las conversaciones sobre este tema no se habían reducido los niveles de violencia en el sur del país (32 personas murieron y 69 resultaron heridas en dicho periodo) y advirtió de que no había ningún calendario aprobado para la implementación de las zonas de seguridad, y que la viabilidad de las mismas depende en buena medida de la disposición del BRN –el grupo armado más activo en el sur del país– a seguir las directrices de MARA Patani.

Numerosas voces, entre ellas el Gobierno o el centro de investigación International Crisis Group (ICG), sostienen que **uno de los principales problemas del proceso de paz es que MARA Patani no habla en nombre del BRN, el principal grupo responsable de la violencia en el sur del país, y de ahí la insistencia por parte de Bangkok en que MARA Patani demuestre que tiene una cierta ascendencia o capacidad de control sobre el BRN**. De hecho, fuentes de inteligencia señalaron que en los últimos meses algunas facciones del BRN, especialmente BRN-C, estarían boicoteando los esfuerzos negociadores de MARA Patani. En este sentido, cabe destacar que en el mes de noviembre un medio de comunicación señaló que la cúpula dirigente del BRN había sido renovada y que en el nuevo órgano dirigente –denominado Dewan Pimpinan Parti– no había ninguno de los miembros de MARA Patani, lo que dificultaría la coordinación directa ente la cúpula del BRN y MARA Patani y por ende tanto el establecimiento de las mencionadas zonas de seguridad como la mejora de la confianza entre las partes negociadoras. Según algunas informaciones aparecidas en prensa, sobre las que MARA Patani no se pronunció, el nuevo presidente del Dewan Pimpinan Parti sería Safie Basoe (también conocido como Spae-ing Basoh), y su secretario Abdullah Wan Mat Noor (también conocido como Doonloh Wae-mano).

3.3.4. Europa

Europa Occidental

España (País Vasco)	
Actores negociadores:	ETA, actores políticos y sociales del País Vasco
Terceras partes:	Grupo Internacional de Contacto (GIC), Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz y Foro Social Permanente
Acuerdos relevantes:	--

Síntesis:
Desde el fin de la dictadura franquista en España, se han producido diversos intentos de resolución del conflicto que ha involucrado a la organización armada ETA, creada en 1959 en demanda de la autodeterminación de los territorios considerados como Euskal Herria y la creación de un Estado socialista. Negociaciones entre 1981 y 1982 llevaron a la disolución en 1982 de ETA político-militar VII Asamblea. Las llamadas Conversaciones de Argel a finales de los ochenta, bajo el Gobierno socialdemócrata del PSOE, y las aproximaciones a ETA a finales de los noventa por el Gobierno conservador del PP, acompañadas de treguas, fracasaron. Fueron décadas en que continuó activo el conflicto en sus múltiples expresiones, incluyendo la violencia de ETA, y de la organización parapolicial GAL, amparada por sectores del Estado. En los años 2000 continuó la tensión socio-política y militar, con nuevos atentados de ETA e ilegalización del partido Batasuna (2003) y cierre y enjuiciamiento de otros actores políticos y sociales, mientras se asistió también a acercamientos secretos entre dirigentes socialistas vascos y de la izquierda abertzale, llamamientos públicos al diálogo, nuevas propuestas políticas y un proceso de transformación en la izquierda abertzale de apuesta por vías pacíficas. Contactos exploratorios dieron paso a la formalización en 2005 de un nuevo proceso, que contemplaba dos mesas paralelas, una entre partidos políticos y otra entre Gobierno y ETA y que fue acompañado de una nueva tregua. En medio de múltiples obstáculos y un nuevo atentado a finales de 2006, el proceso fracasó. La década siguiente dio paso a nuevas iniciativas y declaraciones -como la Propuesta de Alsasua (2009) y Zutik Euskal Herria (Euskal Herria en Pie) (2010), de la izquierda abertzale y que recogían los principios Mitchell de negociación; la Declaración de Bruselas (2010), de personalidades internacionales y llamamientos de facilitadores internacionales apelando a ETA a un alto el fuego permanente, unilateral y verificable- y a un nuevo impulso a la paz desde sectores de sociedad civil, con participación internacional. Precedida por la Conferencia Internacional por la Paz de Aiete, ETA anunció en 2011 el cese definitivo de la actividad armada y en años posteriores dieron nuevos pasos hacia el desarme unilateral, con implicación de la sociedad civil.

Se produjeron avances durante el año en torno al conflicto protagonizado por ETA, con nuevos llamamientos a un desarme total y definitivo, así como pasos por parte del colectivo de presos de aceptación de beneficios penitenciarios individuales. Durante el año se sucedieron los mensajes políticos y sociales sobre nuevos pasos en el contexto abierto desde el fin de la actividad armada de ETA. Así, en enero se celebró el III Foro Social para impulsar el Proceso de Paz, con el objetivo de contribuir desde la sociedad civil a fijar las bases para un desarme ordenado. En un nuevo encuentro en octubre, **se presentó el Foro Social Permanente, formado por 14 personas de 14 organizaciones. El Foro instó a ETA a un desarme total y definitivo y lo antes posible.** Además, reclamó a los Gobiernos garantías de seguridad para las personas que intervengan en el proceso e instó también a los partidos políticos al diálogo. Señaló también que el desarme debía ser verificado internacionalmente. También el Gobierno vasco señaló a finales de diciembre su disposición a apoyar un desarme unilateral, seguro y ordenado. **Las dificultades en torno a las estrategias de desarme se evidenciaron de nuevo durante el año.** Las fuerzas de seguridad francesas, en coordinación con la Guardia Civil, localizaron un zulo de ETA en el norte de Francia con 145 armas cortas, el mayor desde una operación de 2004. En diciembre fue detenido en Francia el dirigente de ETA Mikel Irastorza, considerado persona responsable de una posible entrega negociada del armamento del grupo. Además, otra operación en diciembre de la guardia civil y fuerzas francesas identificó otro depósito de armas en Francia, con 50 armas de fuego, y detuvieron a cinco personas de nacionalidad francesa, incluyendo una periodista, un expresidente de una cámara agrícola y un activista ecologista. Según el Ministerio de Interior español el armamento iba a ser usado para escenificar una entrega de armas. Un día antes, el portal Mediabask publicó varios documentos en que algunos de los arrestados y otros activistas civiles se ofrecían como representantes de la sociedad civil para apoyar un proceso de desarme y destrucción del armamento de ETA. Según cartas de ETA publicadas por ese medio, el grupo habría aceptado su participación y delegar en la sociedad civil la responsabilidad política del proceso de desarme. Por otra parte, tras la operación de octubre, el ministro de Interior en funciones Jorge Fernández Díaz afirmó que a ETA solo le quedaba disolverse, y señaló que si se la organización diera ese paso la política de dispersión penitenciaria se reconsideraría.

Se produjeron nuevos llamamientos a un desarme total y definitivo del grupo armado vasco ETA

Otro de los hechos significativos durante el año fue **la aceptación por parte del Colectivo de Presos de ETA (EPPK) de los beneficios penitenciarios individuales**, según un documento difundido en medios vascos, en que se fijarían como límites la "delación" y el "arrepentimiento". El documento sigue la línea ya abierta en diciembre 2013 por el EPPK y da respuesta también a los llamamientos en esa dirección del liderazgo político abertzale, en contraste con la posición anterior de rechazo a vías individuales. Un sector crítico, constituido en Movimiento Pro Amnistia, presentó en diciembre su oposición a la postura de aceptación de los beneficios individuales, si bien dirigentes abertzales señalaron que se trataba de sectores reducidos, anclados en esquemas del pasado. Otro elemento relevante del

año fue **la salida de la cárcel Arnaldo Otegi, dirigente abertzale y uno de los principales promotores del fin de la lucha armada, tras cumplir condena de seis años y medio de prisión**, acusado de reconstruir Batasuna bajo órdenes de ETA. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó de nuevo a España por no investigar suficientemente una denuncia por torturas de una persona en régimen de incomunicación bajo custodia policial tras su detención en 2011 por la Guardia Civil por supuesta pertenencia a la organización EKIN. Es la sexta sentencia condenatoria de ese tipo desde 2010. Asimismo, un macroestudio elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco señaló que 3.300 personas necesitaron escolta (más de dos tercios entre uno y cinco años, una quinta parte durante una década y varios casos durante 20 años). El estudio también cuantifica en 36.000 las personas que figuraban en los archivos de ETA como posibles objetivos, de mayor o menor grado.

Europa Oriental

Moldova (Transdniestria)	
Actores negociadores:	Moldova, autoproclamada República de Transdniestria
Terceras partes:	OSCE, Ucrania y Rusia y EEUU y UE en el formato 5+2
Acuerdos relevantes:	Acuerdo sobre los Principios para un arreglo pacífico del conflicto armado en la región del Dniester de la República de Moldova (1992), Memorandum sobre las bases para la normalización de las relaciones entre la República de Moldova y Transdniestria (Acuerdo de Moscú) (1997)

Síntesis:
Transdniestria, un territorio de 4.000 km2 y medio millón de habitantes, de mayoría de población rusohablante, legalmente bajo soberanía de Moldova y de facto independiente, es escenario desde los años noventa de un conflicto no resuelto en torno a su estatus. El conflicto emergió en la etapa final de la URSS, cuando se incrementaron los temores en Transdniestria sobre una posible unificación entre una Moldova independiente y Rumanía –ambas con vínculos históricos y culturales–. Transdniestria rechazó la soberanía de Moldova y se declaró independiente de ésta. Se asistió a una escalada de incidentes, que derivaron en un conflicto armado en 1992. Un acuerdo de alto el fuego ese mismo año puso fin a la guerra y dio paso a un proceso de paz, con mediación internacional. Entre las principales cuestiones en disputa se incluye el estatus del territorio –defensa de la integridad estatal y aceptación de un estatus especial para la entidad, por parte de Moldova; y demanda de modelos de amplias competencias, como confederalismo e independencia plena, por parte de Transdniestria. Otros ejes de disputa en la negociación incluyen la dimensión cultural y socioeconómica y la presencia militar rusa en Transdniestria. Desde sus inicios, ha habido diversas propuestas de solución, acuerdos parciales, compromisos y medidas de confianza en el marco del proceso de paz, así como fuertes obstáculos y etapas de estancamiento. También se han proyectado disputas internacionales de dimensión geoestratégica sobre este conflicto no resuelto, agravadas con la guerra en Ucrania.

El proceso de paz entre las autoridades de Moldova y la región de Transdniestria asistió a un nuevo impulso durante el año, con el reinicio de las negociaciones formales. De la mano de esfuerzos mediadores renovados bajo la presidencia alemana de la OSCE, y precedida por visitas (febrero, abril, mayo) a Chisinau y Tiraspol por el nuevo representante especial de la presidencia de turno de la OSCE, Cord Meier-Klodt, se reanudó en junio el proceso en su formato 5+2. Así, tras la paralización desde 2014 de las reuniones en dicho formato (Moldova y Transdniestria como partes en conflicto; OSCE como mediadora; Rusia y Ucrania como países garantes, y EEUU y la UE como observadores), todos los participantes en la mesa 5+2 se reunieron en Berlín entre el 2 y 3 de junio. La reanudación de las negociaciones fue calificada en sí como un hito y como indicador de un nuevo ímpetu. En el marco del encuentro, **las partes firmaron un protocolo con pasos detallados para avanzar en la resolución de cuestiones concretas** previo a la celebración de la conferencia informal sobre medidas de construcción de confianza de julio. El documento recibió el respaldo unánime de todos los participantes en el encuentro 5+2. El protocolo incluía los ámbitos de reconocimiento mutuo de documentos, libertad de movimiento de mercancías y personas, educación, ecología, comunicaciones y procesamiento penal. Ese mismo mes de junio, el Parlamento de Transdniestria había aprobado la legislación sobre el marco para las negociaciones con Moldova. En las semanas siguientes las partes avanzaron en la consecución de acuerdos en el ámbito de la ecología (incluyendo la firma de un protocolo sobre intercambio de información de hidrometeorología) y en el intercambio de información sobre procesos penales. Posteriormente, las partes en conflicto participaron el 12 y 13 de julio en la ciudad de Bad Reichenhall (Alemania) en la conferencia internacional sobre medidas de construcción de confianza, cita anual informal celebrada desde 2009, financiada por el país germano y organizada por la misión de la OSCE en Moldova.

En la segunda mitad del año se sucedieron los llamamientos de los actores internacionales a la implementación del compromiso demostrado en las negociaciones de junio y del llamado enfoque de Berlín, basado en objetivos específicos y realizables y un calendario definido. La OSCE valoró positivamente en septiembre el compromiso expresado por Moldova para el desarrollo de un concepto político de estatus especial para Transdniestria. No obstante, en meses posteriores se reiteraron los llamamientos a avanzar, ante los riesgos de falta de materialización práctica sobre el impulso logrado durante el año. Mientras, acontecimientos en clave interna evidenciaron la incertidumbre que rodea al proceso. El presidente de la autoproclamada Transdniestria, Evgeny Shevchuk, emitió un decreto en septiembre sobre medidas encaminadas a facilitar una posible unión a Rusia. Como desarrollo del decreto estaba prevista la creación de un

comité para armonizar la legislación de Transdniestria con el sistema legal ruso. En todo caso, Shevchuk fue sucedido en su puesto por Vadim Krasnoselski, presidente del Parlamento de Tansdniestria y candidato ganador en los comicios presidenciales de la entidad, celebrados en diciembre sin reconocimiento internacional, con un 59% de participación y un 62% de votos favorables. Krasnoselski es una figura pro-rusa –como Shevchuk– y obtuvo el respaldo del conglomerado económico local Sheriff –actor predominante en la economía de Transdniestria–, del que fue antiguo jefe de seguridad.

Moldova también asistió a un cambio de presidencia, con la elección del socialista Igor Dodon, partidario del estatus de neutralidad para el país, crítico con el acuerdo de asociación y libre comercio firmado con la UE en 2014 y partidario de un mayor equilibrio en las relaciones del país con Rusia y Occidente a través –entre otros elementos– de una posible propuesta de colaboración con la Unión Económica Euroasiática que no colisione con la UE. En su campaña electoral, Dodon se mostró partidario de una resolución del conflicto con Transdniestria y tras su elección se pronunció también en ese sentido, a través de una fórmula de estatus especial. Según Dodon, se podría considerar un modelo federal, con garantías para el mantenimiento del Estado moldavo (en referencia a la no unificación con Rumanía), estatus de neutralidad para el país, y un acuerdo de solución que sea ratificado en referéndum simultáneo en Moldova y en la entidad secesionista. Según Dodon, Moldova solo puede sobrevivir como estado unificado si mantiene un estatus neutral, y ello implica la no presencia de tropas extranjeras. Asimismo, Dodon señaló que el calendario de retirada de las tropas rusas en Transdniestria debía determinarse después de la consecución de un acuerdo sobre el estatus político.

Ucrania	
Actores negociadores:	Ucrania, representantes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Rusia[26]
Terceras partes:	OSCE (en el Grupo Trilateral de Contacto, donde también participan Ucrania y Rusia[27]), Alemania y Francia (en el Grupo de Normandía, donde también participan Ucrania y Rusia[28])
Acuerdos relevantes:	Protocolo sobre los resultados de las consultas del Grupo Trilateral de Contacto (Acuerdo de Minsk) (2014), Memorando sobre el cumplimiento de las disposiciones del protocolo sobre los resultados de las consultas del Grupo Trilateral de Contacto (Memorando de Minsk) (2014); Paquete de medidas para la implementación de los acuerdos de Minsk (Acuerdo de Minsk II) (2015)

Síntesis:
El conflicto armado que desde abril de 2014 enfrenta en el este de Ucrania a fuerzas estatales y milicias secesionistas pro-rusas, apoyadas por Rusia, en torno al estatus de esas áreas y con otros múltiples factores de fondo, es objeto de negociaciones internacionales que involucran formatos como el llamado Grupo Trilateral de Contacto (OSCE, Rusia y Ucrania) y a las propias milicias pro-rusas, así como a iniciativas diplomáticas de algunas cancillerías. Desde la creación del Grupo de Contacto en mayo de 2014, ha habido diversos intentos de acuerdos, incluyendo un plan de paz en junio y una breve tregua ese mes no renovada; un pacto (Protocolo de Minsk, septiembre de 2014) que incluía un alto el fuego bilateral y supervisado por la OSCE y descentralización de poder en las áreas bajo control de las milicias; así como un memorándum ese mismo año para una zona desmilitarizada, que completaba al Protocolo de Minsk. Nuevas escaladas de violencia llevaron al acuerdo de Minsk II en 2015, si bien continuaron la violencia y las discrepancias sobre la implementación. Entre los retos para abordar la resolución del conflicto se incluyen la dimensión de internacionalización de la disputa (principalmente, por el apoyo de Rusia a las milicias y el trasfondo de conflicto entre Occidente y Rusia proyectado en la crisis ucraniana). A la guerra en el este le había precedido una grave crisis general en Ucrania (protestas masivas anti-gubernamentales; salida del presidente Yanukóvich; anexión de Crimea por Rusia) en la que también hubo algunos intentos de negociación entre el entonces Gobierno y la oposición.

El proceso de paz relativo al este de Ucrania continuó activo durante el año, sin avances en los temas de fondo del conflicto y con algunos acuerdos limitados en el ámbito humanitario y de seguridad. En relación al estatus de las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las autoproclamadas repúblicas populares, el Parlamento ucraniano pospuso en enero la votación sobre los cambios constitucionales relativos a su estatus –uno de los elementos de los acuerdos de Minsk–. Resultó evidente durante el año que seguía sin haber apoyo político suficiente en Ucrania para ello. Analistas señalaron al respecto que el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, habría intentado ganar tiempo.[29]Por otra parte, **tampoco se logró avanzar en otro de los puntos clave de los acuerdos de Minsk: la celebración de elecciones en las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control rebelde**. El Gobierno ucraniano insistió en su exigencia de precondiciones: implementación del alto el fuego; retirada de tropas extranjeras y mercenarios; acceso sin restricciones de la OSCE para comprobar dicha retirada; y recuperación por Ucrania de su lado de la frontera ucraniano-rusa. En cambio, Rusia y los líderes de Donetsk y Lugansk reclamaron avanzar primero en las cuestiones políticas, como las elecciones. En ese sentido, dieron pasos unilaterales, como la expedición de pasaportes propios por parte de las autoridades rebeldes de Donetsk, afirmando que éstos serían necesarios para participar en unas futuras elecciones. Ello pese a que los acuerdos

26. El estatus de Rusia en el proceso de paz en Ucrania está sujeto a interpretaciones diferentes. Ucrania lo considera actor en conflicto y parte negociadora, mientras Rusia se considera tercera parte.
27. Ibid.
28. Ibid.
29. International Crisis Group, *Ukraine: Military Deadlock, Political Crisis*, Crisis Group Europe Briefing N° 85, 19 de diciembre de 2016.

de Minsk estipulan que la celebración de comicios tendrá lugar bajo legislación ucraniana. Las diversas iniciativas diplomáticas en el marco del formato de Normandía (Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, con cumbres en París en marzo, en Berlín en mayo y octubre, en Minsk en noviembre); del Grupo Trilateral de Contacto (OSCE, Ucrania, Rusia, en contacto con los líderes rebeldes de Donetsk y Lugansk); y de los múltiples contactos diplomáticos *ad hoc* al más alto nivel no lograron avances sustantivos en torno a la implementación de las cuestiones principales de los acuerdos de Minsk. Pese a las expectativas generadas en la cumbre de Berlín en octubre sobre el acuerdo para elaborar en noviembre una nueva hoja de ruta, la cumbre de noviembre en Minsk resultó sin acuerdos.

No obstante, sí que se produjeron algunos **avances parciales en algunos ámbitos, entre los cuales los de seguridad y humanitarios**. Así, en marzo se alcanzó un acuerdo para el inicio de desminado en 12 áreas de la zona de conflicto; para la prohibición de ejercicios militares cerca de la línea de contacto; para la liberación e intercambio de todos los prisioneros y población en situación de detención ilegal antes del 30 de abril; para la creación de un mecanismo para la prevención y gestión de incidentes vinculados a violaciones del alto el fuego; y para garantías de acceso a la zona de conflicto para todos los observadores. No obstante, durante el resto del año se puso de manifiesto las limitaciones y obstáculos a su implementación, incluyendo algunos ataques perpetrados contra la misión de observación de la OSCE, aunque sin víctimas. A su vez, **durante el año se alcanzaron varios altos el fuego *ad hoc* en medio de escaladas de violencia**. Fue el caso de la tregua que entró en vigor el 30 de abril, con motivo de la Pascua ortodoxa; el 31 de agosto, para facilitar el inicio del curso escolar; y el 24 de diciembre, con motivo del periodo navideño. A su vez, a mediados de septiembre las autoridades rebeldes de Donetsk y Lugansk anunciaron un alto el fuego unilateral, al que dio apoyo también Ucrania. No obstante, pese a dichas treguas, continuaron produciéndose incidentes violentos, con acusaciones mutuas de violación de los altos el fuego.

Por otra parte, también en relación a la situación de seguridad, el ministro de Exteriores alemán y presidente de turno de la OSCE, Frank-Walter Steinmeier, señaló en mayo, tras la cumbre en Berlín del formato de Normandía, que se había producido un progreso sustantivo en materia de medidas para la separación de fuerzas militares en la línea del frente y la creación de zonas desmilitarizadas. Estos avances se concretaron en septiembre, con la consecución del Acuerdo Marco de Retirada de Fuerzas y Equipamiento, firmado el 21 de ese mes por los representantes de Ucrania y de Rusia en el Grupo Trilateral de Contacto así como por representantes de Donetsk y Lugansk. Se trata de un nuevo instrumento que pretende mejorar la situación en torno a la línea de contacto ante la falta de implementación de los compromisos anteriores. El acuerdo incluía la retirada inicial de fuerzas y equipamiento de tres zonas (Zolote, Petrivske y Stanytsia), a las que seguirían posteriormente otras zonas. El representante de la OSCE en el Grupo Trilateral de Contacto, Martin Sajdik, confirmó en octubre la implementación de la separación de fuerzas en Zolote y Petrivske, mientras seguían activas las discusiones para su implementación en Stanytsia y en zonas nuevas. A su vez, hubo medidas de carácter humanitario, como liberaciones de prisioneros en diversos momentos del año. Por otra parte, Rusia liberó en mayo a la piloto militar ucraniana Nadezhda Savchenko, tras un año y ocho meses de encarcelamiento, acusada de matar a dos periodistas –ella denunció haber sido tomada presa por combatientes pro-rusos en el este de Ucrania y transferida a Rusia. Su liberación estuvo facilitada por un empresario ucraniano-ruso y a cambio Ucrania liberó a dos combatientes rusos. Savchenko mostró disposición a reunirse con los líderes de las entidades de Donetsk y Lugansk, y en diciembre trascendió información sobre una reunión de ese tipo, centrada en temas humanitarios. Su encuentro generó críticas de la clase política ucraniana, incluyendo del partido del que forma parte (Patria), con acusaciones de hablar con actores terroristas.

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Actores negociadores:	Gobierno de Armenia, Gobierno de Azerbaiyán
Terceras partes:	Grupo de Minsk de la OSCE (copresidido por Rusia, Francia y EEUU, el resto de miembros permanentes son Belarús, Alemania, Italia, Suecia, Finlandia y Turquía)
Acuerdos relevantes:	Protocolo de Bishkek (1994), Acuerdo de alto el fuego (1994)

Síntesis:
El conflicto armado que enfrentó entre 1992 y 1994 a Azerbaiyán y a Armenia por el estatus de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia perteneciente a Azerbaiyán y que se declaró independiente en 1992– finalizó con un acuerdo de alto el fuego en 1994, un balance de más de 20.000 víctimas mortales y un millón de personas desplazadas así como la ocupación militar por Armenia de varios distritos alrededor de Nagorno-Karabaj. Desde entonces se han sucedido las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán, con varios intentos fracasados de planes de paz en los primeros años y un nuevo impulso a través del llamado Proceso de Praga, iniciado en 2004 y centrado desde 2005 en la negociación de unos principios básicos como base para la discusión de un acuerdo posterior (retirada de Armenia de los territorios ocupados alrededor de Nagorno-Karabaj, estatus provisional para Nagorno-Karabaj, derecho al retorno de la población desplazada, decisión eventual sobre el estatus final de la entidad a través de una expresión vinculante de voluntad, garantías internacionales de seguridad). El estancamiento de las negociaciones desde 2010 y la fragilidad en torno a la línea de alto el fuego han incrementado las llamadas de alerta, en un contexto de carrera armamentística y retórica beligerante y en un escenario regional de disputas geoestratégicas.

El proceso de paz en torno a Nagorno-Karabaj evidenció sus limitaciones y debilidades en un año en que el conflicto asistió al estallido de violencia más grave desde el fin de la guerra en 1994. Tras unos días en abril de fuertes enfrentamientos entre fuerzas armenias y azerbaiyanas, que causaron entre un centenar y dos centenares de víctimas mortales –según fuentes–,[30] las partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego el 5 de abril, en una reunión facilitada por Rusia. El acuerdo, anunciado desde las capitales de Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj, siguió a intensos llamamientos a la contención y gestiones diplomáticas, incluyendo del presidente ruso, Vladimir Putin, y del Grupo de Minsk de la OSCE (Rusia, EEUU, Francia). Este último valoró positivamente la consecución del acuerdo. Al acuerdo de abril le siguieron varias reuniones de alto nivel el resto del año, que resultaron en compromisos relevantes, pero que no llegaron a concretarse e implementarse. Así, por una parte, los presidentes de Armenia, Serzh Sargsyan, y Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reunieron en Viena en mayo, en una cumbre facilitada por el Grupo de Minsk de la OSCE, que constituyó la primera cumbre presidencial desde el brote de violencia. **Las partes se comprometieron a acordar lo antes posible un mecanismo de investigación de incidentes bajo el paraguas de la OSCE. Además, acordaron reforzar la Oficina del representante personal de la presidencia de turno de la OSCE**, ampliando su personal –que actualmente cuenta con solo seis observadores–, así como continuar el intercambio de información sobre personas desaparecidas bajo el paraguas del Comité Internacional de la Cruz Roja. La cumbre de mayo fue seguida de una nueva reunión presidencial en junio, en este caso facilitada por el presidente ruso y celebrada en San Petersburgo. El comunicado conjunto emitido por el Kremlin subrayaba el compromiso de las partes con el alto el fuego –pese a las denuncias mutuas desde abril de nuevos incidentes de baja intensidad de violación del alto el fuego–, y el acuerdo para ampliar el número de observadores internacionales en la zona de conflicto, aunque sin concreción aún sobre este aspecto. Previo a esa reunión, el líder azerbaiyano había afirmado que no era aceptable el *statu quo*. En un gesto de apoyo a las iniciativas diplomáticas, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) emitió en julio una declaración de apoyo a los acuerdos de Viena y de San Petersburgo y expresó su apoyo a los esfuerzos del Grupo de Minsk. No obstante, **expertos y analistas alertaban sobre la falta de avances sustantivos en el desarrollo e implementación de los acuerdos, así como de la parálisis general del proceso de paz para un acuerdo final**.

Tras la crisis más grave desde el fin de la guerra en 1994, Armenia y Azerbaiyán acordaron medidas de prevención de nuevas crisis, pero a finales de año éstas seguían sin implementarse

El Grupo de Minsk visitó en octubre la región, con reuniones por separado con los ministros de Armenia y Azerbaiyán, en las que las partes reafirmaron su apoyo formal a la ampliación de la Oficina del Representante Especial. No obstante, a finales de año quedaba patente la falta de avances y el Grupo de Minsk alertó sobre los riesgos de nuevos incidentes y escaladas. En ese sentido, pese a la retórica de apoyo a los acuerdos mostrada por los líderes locales en las cumbres, durante la segunda mitad del año también emitieron mensajes más belicosos en otros foros. Así, en el marco de una visita a la línea de contacto, el presidente azerbaiyano se pronunció sobre la necesidad de recuperar el control sobre Nagorno-Karabaj, incluyendo si fuera necesario por la fuerza. Asimismo, ante las acusaciones de Armenia a Azerbaiyán sobre el supuesto rechazo del Gobierno azerbaiyano a un mecanismo de investigación de incidentes, éste afirmó que no haría falta tal mecanismo si Armenia se retirase de Nagorno-Karabaj. Por otra parte, en diversos momentos del año Irán se ofreció a mediar entre las partes. En agosto los presidentes ruso, iraní y azerbaiyano se reunieron y abordaron la cuestión de Nagorno –entre otras cuestiones–, unos días antes de otro encuentro entre Putin y su homólogo armenio.

Georgia (Abjasia, Osetia del Sur)	
Actores negociadores:	Gobierno de Georgia, representantes de Abjasia y Osetia del Sur, Rusia[31]
Terceras partes:	OSCE, UE y ONU, EEUU, Rusia[32]
Acuerdos relevantes:	Acuerdo sobre los principios del arreglo del conflicto georgiano-osetio (Acuerdo de Sochi) (1992), Acuerdo de cesación del fuego y separación de las fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994 [acuerdo relativo al conflicto de Abjasia], Protocolo de acuerdo (2008), Implementación del plan del 12 de agosto de 2008 (2008)

Síntesis:
La guerra de agosto de 2008 entre Georgia y Rusia –iniciada en Osetia del Sur y extendida a Abjasia y territorio no disputado de Georgia– finalizó con un acuerdo de paz de seis puntos, mediado por la UE. El plan de paz incluía el inicio de un diálogo internacional sobre la seguridad y estabilidad en Abjasia y Osetia del Sur, dos pequeños territorios en el noroeste y norte-centro de Georgia, fronterizos con Rusia, reconocidos internacionalmente como regiones de Georgia e independientes de facto desde el fin de sendas guerras que enfrentaron a fuerzas abjasias y georgianas (1992-1994) y a fuerzas osetias y georgianas (1991-1992) en torno a sus estatus. El acuerdo de 2008 dio paso al inicio del proceso de diálogo conocido como Discusiones Internacionales de Ginebra (GID, por sus siglas en inglés), que reúne a representantes de Georgia, Osetia del Sur Abjasia y Rusia, bajo mediación internacional (OSCE, UE, ONU, y EEUU

30. Véase el resumen sobre Armenia–Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en el capítulo 2 (Tensiones).
31. El estatus de Rusia en el proceso de paz en Ucrania está sujeto a interpretaciones diferentes. Georgialo considera actor en conflicto y parte negociadora, mientras Rusia se considera tercera parte.
32. Ibid.

como observadora). Según el pacto, el diálogo debía centrarse en disposiciones para garantizar la seguridad y estabilidad en la región, la cuestión de la población refugiada y desplazada y cualquier otro tema de común acuerdo entre las partes, de manera que no se incorporaba de manera explícita la cuestión del estatus en disputa de los territorios. En ese sentido, tras la guerra de 2008 Rusia reconoció de manera formal la independencia de Abjasia y Osetia del Sur y estableció acuerdos y presencia militar permanente en ellos, rechazados por Georgia. La etapa post-2008 supuso el desmantelamiento de los mecanismos de diálogo y observación anteriores, incluyendo las misiones de la OSCE y de la ONU y sustituyó los diálogos separados anteriores por un único formato que abarca a las dos regiones en disputa. También se dio paso a una misión de observación de la UE, sin acceso a los territorios en disputa. Las GID contienen dos grupos de trabajo (seguridad y cuestiones humanitarias) y bajo su cobertura se crearon en 2009 los Mecanismos de Prevención y Respuesta a Incidentes, uno para cada región, facilitados por la UE y OSCE. En un contexto geopolítico de disputa entre Rusia y actores políticos, económicos y militares occidentales (EEUU, UE, OTAN), así como de antagonismo crónico entre las regiones en disputa y Georgia, el proceso de diálogo afronta numerosos obstáculos.

El proceso de paz continuó activo en sus diversos formatos, con algunos avances en el ámbito de prevención de incidentes y en el humanitario, si bien las negociaciones continuaron afrontando numerosas dificultades y falta de avances en cuestiones sustantivas. El proceso transcurrió durante el año al más alto nivel, el de las Discusiones Internacionales de Ginebra –que reúnen conjuntamente a representantes de Georgia, Abjasia, Osetia del Sur y Rusia, bajo mediación de la OSCE, la UE y la ONU y con presencia observadora de EEUU–, así como en niveles inferiores separados, y en espacios trilaterales y bilaterales *ad hoc*. En el formato de las Discusiones Internacionales de Ginebra, el gran avance del año fue el acuerdo alcanzado en la ronda de marzo (35ª ronda) para la reanudación del llamado Mecanismo de Prevención y Respuesta a Incidentes (IPRM, por sus siglas en inglés) de Gali, cancelado desde 2012 por críticas de las autoridades abjasias a la EUMM, co-facilitadora del IPRM,[33] a diferencia del de Osetia del Sur (IPRM de Ergneti), que se había mantenido activo. El acuerdo de reanudación fue valorado positivamente por todas las partes en conflicto y los mediadores en el formato de Ginebra. Se trata además de una medida reclamada también por diversos sectores de población, incluyendo organizaciones locales de mujeres.

Pese a la histórica decisión de reanudar el mecanismo IPRM de Gali –adoptada en la ronda de las Discusiones Internacionales de Ginebra de marzo–, las siguientes rondas del proceso de paz pusieron en evidencia las enormes dificultades, la polarización de posiciones y antagonismo entre las partes. Así, en la ronda de junio (37ª), los representantes de Abjasia y de Osetia del Sur abandonaron las discusiones del grupo de trabajo humanitario, denunciando politización sobre la cuestión de la población desplazada y refugiada. Su salida de las conversaciones tuvo lugar poco después de la tradicional resolución anual de la Asamblea General de la ONU que cada año promueve Georgia, reclamando el derecho de la población georgiana desplazada al retorno a los territorios de Abjasia y Osetia del Sur. Representantes abjasios y osetios también abandonaron una reunión similar en la ronda de diciembre de las discusiones de Ginebra (38ª), evidenciando las dificultades de aproximación en ese ámbito. En cambio, sí transcurrieron sin interrupción las reuniones de ambas rondas (junio, diciembre) relativas al grupo de trabajo sobre seguridad. Aunque no resultaron en avances tangibles, en la ronda de diciembre el grupo de trabajo sobre seguridad incluyó deliberaciones sobre una posible declaración de no uso de la fuerza, uno de los aspectos clave en el proceso. Por otra parte, renunció a su cargo como ministro de Exteriores abjasio, y con ello también a su puesto como negociador principal, Vyacheslav Chirikba, quien fue sustituido por Daur Kove.

En paralelo al formato negociador conjunto de las discusiones de Ginebra, transcurrieron durante el año los diálogos mensuales por separado de los IPRM. El de Gali se reanudó en mayo, tras la decisión adoptada en marzo. En su sucesión de rondas de 2016, el IPRM de Gali transcurrió en un clima considerado como constructivo por los co-mediadores, y estuvo centrado en cuestiones como incidentes de seguridad –especialmente el incidente en torno a la muerte de un ciudadano georgiano por tiroteos de un guardia fronterizo abjasio en mayo–,[34] tránsito de personas, instalación de vallas y elementos fronterizos, activación de la línea de contacto telefónico facilitada por la EUMM, medidas de facilitación para el paso de menores durante el año escolar, personas desaparecidas y alerta temprana sobre actividades militares en las proximidades de la línea de frontera administrativa (incluyendo terrestres y navales). Los co-mediadores destacaron la dimensión humanitaria y preventiva del foco de discusión de algunas de estas cuestiones. En paralelo, transcurrió el IPRM de Ergneti, que abordó una gran variedad de temas, incluyendo el intercambio de información técnica para solucionar problemas de irrigación; tránsito de personas y acceso a campos de labranza y a lugares de culto religioso; incidentes relativos a detenciones (con un incremento de medidas de detención en algunos meses, como mayo), explosiones y supuestos tiroteos en torno a la línea de frontera administrativa; entre otras cuestiones. Entre otros resultados, las partes del IPRM de Ergneti acordaron reanudar en la ronda de febrero el mecanismo tripartito sobre personas desaparecidas bajo el paraguas del Comité Internacional de la Cruz Roja, y en rondas posteriores, como la de octubre, acordaron ahondar en ese ámbito. Además, durante el año, representantes

33. Los IPRM hacen referencia a sendos mecanismos que se crearon bajo el paraguas del proceso de paz para facilitar un espacio de diálogo directo y frecuente en el que prevenir y abordar cuestiones de seguridad y de la situación en terreno entre representantes de Georgia y de Abjasia por un lado (IPRM de Gali), y de Georgia y Osetia del Sur (IPRM de Ergneti) por otro lado. Son mecanismos de diálogo co-facilitados por la OSCE y la misión EUMM de la UE, con participación también de representantes de las tropas rusas en dichos territorios.
34. Véase el resumen sobre Georgia (Abjasia) en el capítulo 2 (Tensiones).

georgianos y osetios hicieron uso intensivo de la línea de comunicación telefónica que facilita la EUMM como parte del IPRM, que fue calificada de útil por las partes. Destacaron otros avances en el plano humanitario, como un acuerdo trilateral de intercambio de 16 prisioneros, alcanzado al margen de las Discusiones Internacionales de Ginebra.[35] La medida trilateral fue valorada muy positivamente por las partes. El ministro georgiano para la Reconciliación, Paata Zakareishvili, expresó la **voluntad del Gobierno georgiano de iniciar una nueva etapa con Abjasia y Osetia del Sur en que las cuestiones humanitarias ocupen un lugar central**. Así lo expresó el Gobierno en diversas ocasiones durante el año. En noviembre, tras la confirmación del nuevo equipo de Gobierno después de las elecciones parlamentarias de octubre –en las que revalidó su victoria el partido oficialista Sueño Georgiano–, el Ejecutivo georgiano afirmó que tenía planes de adoptar pasos más audaces hacia la reconciliación con ambas regiones, mejorando los contactos al nivel de población, en paralelo a su política de no-reconocimiento de los territorios como independientes.

Sudeste de Europa

Chipre	
Actores negociadores:	República de Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre
Terceras partes:	ONU, UE, Turquía, Grecia y Reino Unido
Acuerdos relevantes:	Acuerdo del 13 de Febrero de 2004 (2004)

Síntesis:
La isla de Chipre, habitada por una mayoría griega y por población turca y otras minorías, afronta una situación de conflicto no resuelto de larga duración. Precedido de violencia en los años cincuenta, tras su independencia en 1960 Chipre se vio afectada por una crisis en que se desplazó del poder a la población turcochipriota, poniendo en cuestión el reparto de poder contemplado en la Constitución y en la que se produjeron nuevos hechos de violencia, que llevaron al despliegue de la misión de mantenimiento de la paz UNFICYP en 1964. De fondo se evidenciaba la confrontación entre aspiraciones de *enosis* (unión a Grecia) y de *taksim* (partición) de la población grecochipriota y turcochipriota, respectivamente. Un golpe de Estado en 1974 con el objetivo de promover la unificación con Grecia desencadenó una invasión militar de la isla por Turquía. La crisis generó desplazamiento de población y la división de la isla entre un tercio norte bajo control turcochipriota y dos tercios en el sur bajo control grecochipriota, separados por la llamada "línea verde", supervisada por la ONU. Desde la división de la isla se han sucedido los intentos de solución, como los diálogos de alto nivel en los años setenta y las iniciativas de aproximación promovidas por sucesivos secretarios generales de la ONU en décadas siguientes. El Plan Annan para una federación bicomunal y bizonal fue aprobado en referéndum en 2004 por la población turcochipriota y rechazado por la grecochipriota. Tras el fracaso del diálogo Christofias-Talat (2008-2012), en 2014 se inició una nueva etapa de negociación que ha generado elevadas expectativas.

Se produjeron avances significativos en el proceso de negociaciones de Chipre, calificados de sin precedentes por la ONU, que apuntaron al acercamiento a una solución final al conflicto, pese a los desacuerdos aún presentes en cuestiones clave. Los avances durante el año abarcaron tanto aspectos procedimentales como de contenido. En cuanto al procedimiento y formato, se intensificó el ritmo negociador en la segunda mitad del año, tal como anunciaron en sendas declaraciones conjuntas en mayo y junio los dirigentes políticos de la isla, el grecochopriota Nicos Anastasiades, y el turcochipriota Mustafa Akinci, pasando a dos reuniones por semana. Además, de las cuatro líneas de trabajo técnico que se acordó iniciar en enero (aplicación del acervo comunitario, colaboración con instituciones financieras internacionales, redacción de la constitución y leyes federales y planificación de la aplicación), se puso en marcha la asistencia técnica vinculada a las dos primeras y sus avances fueron bien valorados por la misión de buenos oficios de la ONU. En contraste, las otras dos líneas afrontaron retrasos. Por otra parte, el secretario general de la ONU apeló a los representantes de ambas comunidades de la isla a darle la importancia debida al Comité de Igualdad de Género y a incrementar los esfuerzos para reflejar los principios y objetivos de la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad en las discusiones del proceso de paz. Mientras, el grupo de trabajo sobre cuestiones económicas creó diversos subgrupos de expertos, que fueron aumentando su ritmo de reuniones.

Por otra parte, las negociaciones durante el año estuvieron principalmente centradas en cuatro de los seis capítulos de negociación: **gobernanza y reparto de poder, propiedad, economía y relaciones con la UE. En estos ámbitos se lograron más avances en 2016 que en ningún otro periodo desde el inicio del actual proceso negociador en 2008**, según valoró el secretario general en su informe de enero de 2017 sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre. En relación a la cuestión de la propiedad, por vez primera las partes negociaron sobre la base de un documento conjunto. Asimismo, se incluyeron algunos aspectos sobre el capítulo de seguridad y garantías –uno de los más complejos y que había sido relegado a una fase posterior–, en la fase intensificada del diálogo de la segunda mitad del año. Los últimos meses del año asistieron a un nuevo impulso, que generó expectativas pero también incertidumbre. Así, **los dirigentes de la isla y sus equipos negociadores mantuvieron un retiro negociador en Suiza en noviembre**, centrado en cuestiones clave de la agenda aún pendiente. El encuentro tenía como objetivo acordar los criterios para el ajuste territorial (incluyendo cuestiones como porcentaje de territorio, cifras de retorno de personas desplazadas y extensión de costa para cada uno de los estados constituyentes de la futura federación), así como la elaboración de un mapa en base a esos criterios y el establecimiento de una fecha

35. Véase "¿Una oportunidad para la construcción de confianza multinivel en Georgia? Mecanismos de prevención de incidentes y perspectiva de género" en el capítulo 5 (Oportunidades de paz para 2017).

para una conferencia internacional sobre seguridad y garantías. El retiro tuvo dos fases: una primera entre el 7 y el 11, que concluyó con la petición de un receso por el líder grecochipriota; y una segunda, entre el 20 y 21, que concluyó sin acuerdo. Un comunicado del 21 de noviembre del asesor especial de la ONU para Chipre, Espen Barth Eide, señaló que pese a los esfuerzos no había sido posible una mayor convergencia. El líder turcochipriota atribuyó a la parte grecochipriota el fracaso, mientras el dirigente grecochipriota acusó a la delegación turcochipriota de falta de flexibilidad. No obstante, las partes mostraron disposición a seguir negociando. Hubo numerosos llamamientos al diálogo posterioremente. Finalmente, el 1 de diciembre la ONU anunció que los dirigentes de la isla se reunirían del 9 al 11 de enero de 2017 en Ginebra y que esa ronda iría seguida el 12 de enero de una conferencia internacional en la que participarían las potencias garantes.

Por otra parte, durante el año continuaron desarrollándose iniciativas de diálogo por parte de diversos sectores de la población, incluyendo líderes religiosos y organizaciones y movimientos de mujeres.[36] Entre otras iniciativas, líderes religiosos emitieron un video conjunto en que instaban a la población a apoyar al Comité sobre Personas Desaparecidas, tras el acuerdo de julio para investigar archivos militares con el fin de identificar información sobre el paradero de personas aún desaparecidas. Asimismo, estaba prevista la apertura en 2017 de dos nuevos pasos de cruce entre las dos administraciones de la isla, en el marco de las medidas de confianza. En cambio, no se avanzó en los trabajos relativos a la interconectividad de redes eléctricas y teléfonos móviles.

Serbia – Kosovo	
Actores negociadores:	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo
Terceras partes:	UE, ONU
Acuerdos relevantes:	Acuerdo Militar Técnico entre la Fuerza Internacional de Seguridad (KFOR) y la República Federal de Yugoslavia (1999), Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones (Acuerdo de Bruselas) (2013)

Síntesis:
Desde el fin de la guerra que enfrentó entre 1998 y 1999 a Serbia y al grupo armado albanokosovar ELK, con participación de la OTAN, continúa en disputa el estatus de Kosovo –de mayoría albanesa e históricamente integrada en el Imperio Otomano, en el Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos y más recientemente en la República de Serbia de Yugoslavia (región autónoma y provincia autónoma, sucesivamente)–. Tras un proceso de administración interina internacional de Kosovo con mandato del Consejo de Seguridad de la ONU (resolución 1244, de 1999), en 2006 se abrió un proceso de discusión del estatus bajo paraguas de la ONU. Kosovo dio apoyo a la propuesta del enviado especial del secretario general, Martti Ahtisaari, de independencia supervisada internacionalmente y descentralización para la minoría serbia de Kosovo, mientras Serbia la rechazó. Siguieron nuevos intentos de diálogo facilitados por una troika (EEUU, UE, Rusia) que fracasaron. En 2008 Kosovo proclamó unilateralmente la independencia y se comprometió a implementar el plan Ahtisaari. El inicio de un nuevo proceso de diálogo entre Serbia y Kosovo en 2011 bajo facilitación de la UE (Proceso de Bruselas) abrió las puertas al acercamiento en cuestiones técnicas y políticas. Desde su inicio se han realizado avances significativos, incluyendo el acuerdo para el desmantelamiento de las estructuras paralelas políticas, judiciales y de seguridad de las áreas de mayoría de población serbia de Kosovo; así como para la creación de una asociación/comunidad de municipios serbios en Kosovo. No obstante, existen aún retos pendientes destacados, especialmente en el ámbito de la implementación de los pactos, la reconciliación y la resolución definitiva del estatus político de Kosovo.

El diálogo entre Serbia y Kosovo para la normalización de las relaciones afrontó dificultades significativas durante el año, sin avances en asuntos clave como la creación de una asociación de municipios en el norte de Kosovo y con una escalada de la retórica recriminatoria. La única reunión de alto nivel durante el año tuvo lugar a finales de enero en Bruselas, entre los primeros ministros de Serbia y de Kosovo, Aleksandar Vucic e Isa Mustafa, bajo los auspicios de la alta representante de la UE para asuntos exteriores y política de seguridad, Federica Mogherini. El encuentro, encaminado a analizar el progreso realizado en el diálogo, no supuso avances significativos, pese al compromiso de las partes con el proceso**. Durante el año se incrementó la retórica recriminatoria entre los gobiernos serbio y kosovar sobre la falta de avances en diversos ámbitos**. Así, las autoridades kosovares responsabilizaron a Serbia de los bloqueos en el ámbito de telecomunicaciones, energía y reapertura del puente de Mitrovica, mientras los dirigentes serbios atribuyeron a Kosovo la falta de avances en la creación de la asociación de municipios de mayoría serbia. Este último aspecto, que constituye un elemento clave de los acuerdos previos de 2013 y 2015, continuó sin concretarse durante el año. Así, en medio del aumento de la tensión entre Serbia y Kosovo en los últimos meses del año debido a varios frentes de disputa e incidentes,[37] el primer ministro serbio advirtió de que si el Gobierno kosovar no avanzaba en la descentralización, la asociación de municipios podría constituirse por sí misma en febrero de 2017. Entre los incidentes, tras una visita no anunciada de la ministra kosovar para el Diálogo, Edita Tahiri, al puente de Mitrovica para supervisar los trabajos de reapertura, Tahiri cruzó a Mitrovica norte (de mayoría serbokosovar), tras lo cual fue incendiada una cafetería visitada por la ministra. También hubo incidentes de seguridad y boicot a la visita del primer ministro kosovar y de otros cargos al acto de inauguración de un puente en el municipio de Zvecan/Zveqan, invitados por la KFOR. Alcaldes de los cuatro municipios de mayoría serbia del norte de Kosovo

36. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).
37. Véase el resumen sobre Serbia–Kosovo en el capítulo 2 (Tensiones).

emitieron un comunicado conjunto en que criticaban la actuación de la KFOR y anunciaban la suspensión de su cooperación con la misión de la OTAN.

En cambio, se produjeron avances en algunos aspectos. Así, en noviembre se llegó a un acuerdo relativo a telecomunicaciones. Además, durante el año y a través de gestiones de Austria, la Unión Internacional de Telecomunicaciones asignó un código telefónico propio a Kosovo. Como parte del acuerdo, la filial en Kosovo de la empresa pública serbia de telecomunicaciones podrá proveer los servicios de telefonía fija y móvil. También se había alcanzado un acuerdo en abril para el tránsito de mercancías peligrosas. Hubo también avances técnicos durante todo el año en materia de integración judicial. No obstante, el boicot de políticos y funcionarios serbokosovares a las administraciones kosovares en los últimos meses del año en protesta por la legislación kosovar referente al complejo minero de Trepca generó incertidumbre sobre los riesgos de que afectase al proceso de integración de funcionariado serbokosovar en el sistema judicial kosovar. En todo caso, el formato de conversaciones técnicas del diálogo bajo mediación de la UE continuó activo durante todo el año, a diferencia del diálogo político. El secretario general de la ONU expresó preocupación en diversos momentos del año por la lentitud en la implementación de acuerdos y la falta de avances en cuestiones sustantivas, así como por el incremento de tensiones y escalada de acusaciones entre los Gobiernos serbio y kosovar en los últimos meses del año.

Se produjeron llamadas de alerta por la falta de avances en cuestiones sustantivas en el diálogo entre Serbia y Kosovo, en un año de paralización del diálogo político al más alto nivel

3.3.5. Oriente Medio

Golfo

Irán (programa nuclear)	
Actores negociadores:	Irán, G5+1 (EEUU, Francia, Reino Unido, Rusia y China –los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU–, más Alemania), UE
Terceras partes:	--
Acuerdos relevantes:	Plan de Acción Conjunto (acuerdo provisional, 2013), Plan Integral de Acción Conjunta (2015)

Síntesis:
En la mira de la comunidad internacional desde 2002, el programa nuclear iraní se convirtió en uno de los elementos clave de la tensión entre la república islámica y Occidente, en particular en su relación con EEUU e Israel. Durante más de una década de rondas de negociaciones, y pese a que se presentaron diversas propuestas para sortear el conflicto, las partes no consiguieron llegar a acuerdo y se mantuvieron casi invariables en sus posturas. Por un lado, EEUU, Israel y varios países europeos con una posición de desconfianza hacia Teherán y convencidos de los objetivos militares de su programa atómico, y, por otro, Irán insistiendo en que sus actividades nucleares sólo tienen finalidades civiles y se ajustan a la normativa internacional. En este contexto, el programa atómico iraní continuó desarrollándose, en paralelo a la aprobación de sanciones contra Teherán por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, de EEUU y de la UE, y a las amenazas de acción militar principalmente por parte de Israel. El cambio de Gobierno en Irán en 2013 alentó expectativas sobre la posibilidad de entablar un diálogo sustantivo en materia nuclear, facilitó nuevas rondas de negociaciones y derivó en la firma de acuerdos que pretenden frenar el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Las negociaciones en torno al programa nuclear iraní han sido recibidas con reticencias por Israel, algunos actores como Arabia Saudita y sectores en EEUU, en un contexto marcado por desconfianzas históricas, cuestiones de soberanía y orgullo nacional, dispares intereses geopolíticos y estratégicos y pugnas regionales, entre otros factores.

Tras la serie de rondas negociadoras celebradas desde noviembre de 2013 que derivaron en el Plan Integral de Acción Conjunta suscrito en Viena en julio de 2015 –adoptado formalmente el 18 de octubre en el llamado "Adoption Day"–, el año **2016 se inició con expectativas sobre el proceso de implementación del acuerdo entre Irán, el G5+1 y la Unión Europea**. A principios de año la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) confirmó que Irán estaba cumpliendo con los compromisos establecidos en el acuerdo, lo que permitió que a mediados de enero se anunciara oficialmente el levantamiento de sanciones económicas contra la república islámica. En este contexto, y tras meses de negociaciones secretas, Washington y Teherán también alcanzaron un acuerdo para el intercambio de prisioneros. A lo largo del año también se avanzó en gestiones para permitir el acceso de Teherán a los fondos que habían estado congelados y para promover las inversiones en el país. Los avances en la implementación del acuerdo también favorecieron una aproximación de la dirigencia iraní con Europa. El presidente Hassan Rouhani viajó al continente europeo en la primera visita de un mandatario iraní a la región en 16 años. Representantes europeos, entre ellos la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, también visitaron Irán y anunciaron una nueva fase de relaciones con la república islámica. Durante el año se identificaron algunas dificultades en la implementación del pacto que fueron abordadas en reuniones entre las partes en Viena y Nueva York. **Al finalizar 2016, y tras realizar una visita a Irán, el director de la AIEA ratificó que el país se mantenía en la línea de respetar e implementar lo establecido en los acuerdos sobre su programa nuclear.** Cabe destacar que esta evolución positiva se dio en paralelo a algunos incidentes de seguridad y a algunas

polémicas sobre el programa de misiles iraní.[38] A mediados de año un informe de la ONU consideró que las pruebas con misiles balísticos de Irán no eran consistentes con el espíritu del acuerdo nuclear. Adicionalmente, cabe mencionar las especulaciones sobre la posible repercusión en el acuerdo nuclear y, en general, en las relaciones con Irán suscitadas por el triunfo electoral del republicano Donald Trump en EEUU. A finales de 2016, el mandatario saliente, Barack Obama, se vio obligado a hacer uso de su poder de veto para bloquear una ley –aprobada por la Cámara de Representantes y por el Senado– que pretendía reintroducir sanciones contra Irán. A esto se añade que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planteó abiertamente que pretendía discutir con Trump opciones y fórmulas para revertir el acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Yemen	
Actores negociadores:	Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, al-houthistas, fuerzas del expresidente Alí Abdullah Saleh
Terceras partes:	ONU, Kuwait, EEUU
Acuerdos relevantes:	--

Síntesis:
Escenario de diversos focos de conflicto en las últimas décadas, Yemen inició en 2011 un difícil proceso de transición tras las revueltas que llevaron a Alí Abdullah Saleh a abandonar la presidencia después de más de 30 años en el cargo. El accidentado proceso derivó en una rebelión de las fuerzas al-houthistas y del expresidente Saleh contra el gobierno de transición encabezado por Abdo Rabbo Mansour Hadi, que se vio obligado a abandonar el poder a principios de 2015. En marzo de ese año, una coalición internacional liderada por Arabia Saudita decidió intervenir militarmente en el país en apoyo al gobierno depuesto y a partir de entonces el conflicto ha vivido una escalada en los niveles de violencia. Ante esta evolución de los acontecimientos, Naciones Unidas –que ha estado involucrada en el país desde el inicio del proceso de transición– y algunos actores regionales e internacionales han intentado promover una vía política para resolver el conflicto. Las hostilidades han agravado significativamente la situación de seguridad y humanitaria en el país.

Durante el año prosiguieron los intentos por facilitar una salida política a la crisis yemení, aunque con diversos obstáculos, y a partir de mediados de año se instaló un persistente bloqueo en las negociaciones. A principios de 2016 se esperaba que el acuerdo de cese el fuego acordado en las conversaciones en Suiza –los primeros contactos directos entre las partes–, en diciembre de 2015, desembocara en una reducción significativa de las hostilidades. Sin embargo, en la práctica la tregua no fue respetada por ninguna de las partes en disputa. Ante el clima de violencia creciente, el enviado especial de la ONU para Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, decidió postergar las negociaciones inicialmente previstas para mediados de enero. No fue hasta abril, después de que se anunciara la implementación de un nuevo cese el fuego, que se reanudaron las negociaciones en Kuwait. Previamente, en las primeras semanas de abril, el enviado especial de la ONU valoró el trabajo del Comité de Coordinación y Desescalada –que reúne a representantes militares de ambos bandos– y de los comités locales involucrados en la mejora de la situación de seguridad en el país. A partir del 24 de abril se retomaron las conversaciones, que se estructuraron en torno a cinco ejes principales definidos a partir de la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU (2015) y de la agenda acordada durante los contactos en Suiza. Estos cinco puntos incluyeron la retirada de las milicias y grupos armados, la entrega de armas pesadas al Estado, acuerdos interinos de seguridad, la restauración de las instituciones del Estado y la reactivación de un diálogo inclusivo, y la creación de un comité especial para personas detenidas y desaparecidas. Hasta último momento, los al-houthistas y el entorno del ex presidente Alí Abdullah Saleh pusieron en duda su participación en el diálogo por las circunstancias de seguridad. Una vez iniciados los contactos, fue la delegación gubernamental la que anunció que suspendía su participación en las conversaciones ante las violaciones al cese el fuego.

Pese a las recurrentes transgresiones al cese de hostilidades, las negociaciones continuaron, principalmente centradas en tres grupos de trabajo. El primero, enfocado en temas políticos, debatió sobre la reactivación de las instituciones estatales; el segundo intercambió visiones sobre la retirada y la entrega de armamento; y el tercero avanzó en una propuesta para liberar a la mitad de todas las personas detenidas por las partes antes de la celebración del Ramadán. En este contexto, en las semanas siguientes se anunciaron algunas liberaciones de prisioneros y, en junio, **Ismail Ould Cheikh Ahmed presentó una hoja de ruta para el fin del conflicto armado en Yemen. La propuesta contemplaba el establecimiento de un gobierno de unidad que tuviera entre sus principales prioridades la reactivación de la economía y la provisión de servicios básicos a la población, duramente afectada por el conflicto**. Adicionalmente, este gobierno se encargaría de impulsar un diálogo político para resolver cuestiones clave como finalizar el borrador de Constitución, la ley electoral y supervisar la transición. Ambas partes en disputa recibieron bien la propuesta, pero defendieron posturas diferentes respecto al calendario de implementación. El entorno del Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi se mostró partidario de dar prioridad al repliegue de los al-houthistas de la capital yemení y de la entrega de armamento pesado, mientras que los al-houthistas defendieron la conformación del gobierno de unidad antes de cualquier cambio de fuerzas en terreno. Las partes celebraron varias semanas de consultas con sus liderazgos, pero la ronda de contactos de julio evidenció la brecha entre ellas y la

38. Véase el resumen sobre Irán – EEUU, Israel en el capítulo 2 (Tensiones).

falta de progresos llevó al enviado especial para Yemen a suspender algunas sesiones. En un clima cada vez más afectado por la persistente violencia, los representantes del Gobierno de Hadi anunciaron su retirada de las conversaciones. Ello, después de que los al-houthistas y el entorno de Saleh impulsaran la creación de un Consejo Supremo con facultades administrativas en las áreas bajo su control. La medida fue valorada por Hadi como un intento por legitimar su autoridad en el país. La ONU también alertó que las decisiones unilaterales ponían en riesgo las negociaciones en Kuwait. **Pese a los esfuerzos por desbloquear el proceso, las negociaciones colapsaron en agosto**. Ismail Ould Cheikh Ahmed aseguró que se daba inicio a una nueva fase de consultas por separado con las partes en disputa y reconoció que uno de los principales obstáculos era la confianza entre los contendientes.

En este contexto, y ante el grave deterioro de la situación de violencia en Yemen, el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, intentó sin éxito promover una nueva iniciativa para reactivar las conversaciones. En los meses siguientes se impulsaron algunos ceses el fuego temporales breves que no fueron renovados. **La ONU presentó una nueva hoja de ruta en octubre.** Aunque no se hizo pública oficialmente, trascendió que la propuesta era similar a la de Kerry e incluía la designación de un nuevo vicepresidente tras la retirada de las fuerzas al-houthistas de Sanaa y de la entrega de armas pesadas a una tercera parte. Después de este nombramiento, Hadi debía entregar el poder al nuevo vicepresidente que designaría a su vez a un primer ministro, responsable de encabezar un gobierno integrado de manera equitativa por representantes del norte y del sur del país. Hadi rechazó este plan por considerar que premiaba la actitud golpista de los al-houthistas y que sentaba un peligroso precedente. En contrapartida, Hadi y su entorno presentaron una propuesta a la ONU que, entre otras medidas, incluía que los líderes de las fuerzas rebeldes, el dirigente al-houthista Abdel Malik al-Houthi, y el ex presidente Saleh abandonen la vida política y el país para cumplir un autoexilio junto a sus familias de por lo menos 10 años. La propuesta de la ONU, en cambio, contó con el apoyo de Reino Unido, EEUU y también de EAU, país que ha dado apoyo militar directo a las fuerzas de Hadi, sobre todo en su campaña en el sur del país. Desde una perspectiva de género, cabe destacar que a diferencia de la mayor presencia que tuvieron las mujeres en la Conferencia de Diálogo Nacional (marzo 2013 a enero de 2014) –en la que se estableció una cuota de 30% para garantizar su participación–, las mujeres yemeníes han estado mayoritariamente excluidas de las iniciativas de negociación impulsadas desde la escalada de violencia en el país en 2015. Pese a los llamamientos de algunos actores internacionales –incluyendo ONU Mujeres, el enviado especial para la Yemen o la UE– y de organizaciones locales para aumentar la presencia de mujeres en los mecanismos de diálogo, las partes mostraron reticencias a una mayor participación en las delegaciones negociadoras. Durante 2016 la ONU promovió que una delegación de siete mujeres visitara a las partes en conflicto en mayo durante las conversaciones en Kuwait.

Mashreq

Israel - Palestina	
Actores negociadores:	Gobierno israelí, Autoridad Palestina (AP)
Terceras partes:	Cuarteto para Oriente Medio (EEUU, Rusia, ONU, UE), Francia, Egipto, Rusia
Acuerdos relevantes:	Reconocimiento mutuo entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación Palestina (OLP) (1993), Acuerdos de Oslo I / Declaración de principios sobre el Gobierno interino (1993), Acuerdo sobre la Franja de Gaza y el área de Jericó (1994), Acuerdos de Oslo (II) / Acuerdo interino sobre la Franja de Gaza y Cisjordania (1995), Memorándum de Wye River (1998), Memorándum de Sharm el-Sheikh (1999), Hoja de ruta para una solución permanente de dos Estados para el conflicto palestino-israelí (2003), Annapolis: Entendimiento conjunto de israelíes y palestinos sobre la negociaciones (2007)

Síntesis:
El proceso de paz entre palestinos e israelíes iniciado en los noventa no ha derivado en un acuerdo entre las partes en los temas más complejos –fronteras, Jerusalén, asentamientos, refugiados palestinos y seguridad– ni en la creación de un Estado palestino. Desde el fracaso del cronograma fijado por los Acuerdos de Oslo se han llevado a cabo una serie de rondas de negociación y se han presentado diversas propuestas que han resultado infructuosas. El proceso de paz se ha desarrollado en medio de periódicos estallidos de violencia y en paralelo a una política de fait accompli de Israel, que ha persistido en sus políticas de ocupación. Estas dinámicas han creado crecientes dudas sobre la viabilidad de la solución de dos Estados.

Las negociaciones entre palestinos e israelíes se mantuvieron en la situación de bloqueo que existe desde abril de 2014. No obstante, a lo largo del año diferentes actores externos impulsaron algunas iniciativas tendientes a reactivar el proceso de paz, entre ellos el Cuarteto para Oriente Medio (EEUU, Rusia, ONU, UE) y países como Francia, Egipto o Rusia. Durante 2016, el Cuarteto para Oriente Medio reiteró su preocupación por las dinámicas del conflicto palestino-israelí y por la viabilidad de la solución de dos Estados. Así, tras una reunión en Múnich en febrero, el Cuarteto anunció la preparación de un informe –el primero de su tipo– sobre la situación en terreno con recomendaciones para avanzar en una salida negociada. El informe, publicado en julio, identificó tres tendencias especialmente preocupantes para las perspectivas de paz: 1) la violencia continua, los ataques contra civiles y la incitación a la violencia que son incompatibles con la resolución pacífica del conflicto; 2) la incesante política

de construcción de asentamientos, la designación de áreas de uso exclusivo de Israel y los obstáculos para el desarrollo palestino; y 3) la situación de seguridad y humanitaria en Gaza, la actividad militante y la presencia de armas ilícitas, así como la ausencia de un liderazgo palestino unificado. A partir de su diagnóstico, el Cuarteto hizo un llamamiento a ambas partes a demostrar un compromiso genuino con la solución de dos Estados y planteó diez recomendaciones específicas. Entre ellas, que las partes eviten acciones y retórica provocativa y que adopten medidas para prevenir hechos de violencia; que Israel cese su política de construcción y expansión de asentamientos y que avance en la transferencia de responsabilidades a la AP en el área C en consonancia con lo dispuesto en acuerdos previos; que el liderazgo palestino avance en el fortalecimiento institucional y en la reunificación de Gaza y Cisjordania bajo un único gobierno palestino, y que todas las partes continúen respetando el alto el fuego en Gaza. Según trascendió, en la fase previa a la publicación del informe el Gobierno israelí realizó gestiones con EEUU para asegurar un redactado más favorable a Israel. De acuerdo a fuentes diplomáticas israelíes, pese a las críticas en el documento, las autoridades israelíes habrían quedado conformes porque el texto no supone ningún mandato para las negociaciones ni hace referencia a las fronteras previas a 1967. Las autoridades palestinas, en cambio, expresaron su decepción con el informe y se mostraron más partidarias de la iniciativa francesa. Esta última fue recibida con hostilidad por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que insistió en evitar la internacionalización del proceso y en defender las conversaciones directas entre palestinos e israelíes.

Francia impulsó la celebración de una conferencia internacional con el propósito de reactivar las negociaciones y evitar el fin de la solución de dos Estados. La cita tuvo lugar en junio y reunió a los representantes de 29 países y organizaciones internacionales, incluyendo la ONU y la UE. La declaración final de la conferencia reflejó el mínimo común denominador de los participantes y se limitó a reiterar que la solución de dos Estados era la única vía para conseguir una paz duradera, pero no delineó un calendario para las negociaciones ni planteó otras medidas. Diversos análisis subrayaron que el Gobierno francés aspiraba a una aproximación más concreta que incluyera la definición de parámetros, mecanismos y un cronograma negociador. Sin embargo, las reticencias de diversos actores, entre ellos EEUU e Israel, habrían llevado a rebajar las ambiciones de la propuesta. Incluso las advertencias iniciales de Francia respecto a que reconocería un Estado palestino en caso de bloqueo en las negociaciones se fueron diluyendo durante el año. En este contexto, la segunda reunión de la conferencia internacional que se había previsto para finales de 2016 quedó finalmente postergada para principios de 2017. A lo largo de 2016, y en paralelo a la iniciativa francesa, se informó de los contactos entre Egipto e Israel para discutir una fórmula que estaría basada en la Iniciativa de Paz Árabe de 2002 y que incluiría la adopción de medidas de confianza. Durante el último trimestre también se conoció que Rusia había invitado a Netanyahu y al presidente de la AP, Mahmoud Abbas, a reunirse en Moscú. En principio, ambas partes habrían respondido favorablemente a la propuesta, pero la reunión no llegó a concretarse.

Distintos actores intentaron promover iniciativas para reactivar el proceso de paz entre palestinos e israelíes, cuyos contactos permanecen bloqueados desde 2014

Cabe destacar que las dinámicas del conflicto palestino-israelí también se vieron afectadas por los cambios políticos en EEUU, que en noviembre se tradujeron en la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales. Dadas las posiciones de Trump favorables a Israel en diversos temas, este hecho alentó reacciones públicas de sectores del Gobierno israelí respecto a dejar atrás la solución de dos Estados como vía para resolver el conflicto. En paralelo, durante el año persistieron las especulaciones sobre la posibilidad de que la administración de Barack Obama diera a conocer sus propios parámetros para la solución del conflicto antes de abandonar el poder a principios de 2017. Finalmente, **la posición del Gobierno de Obama quedó reflejada en la abstención de EEUU en la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos,** revirtiendo la posición tradicional de Washington de vetar las iniciativas críticas o contrarias a los intereses israelíes. La resolución 2334, aprobada a finales de diciembre, denunció que las colonias israelíes constituyen una flagrante violación al derecho internacional y un obstáculo para la solución de dos Estados y alertó que la comunidad internacional no reconocerá modificaciones fronterizas que no sean resultado de un acuerdo entre las partes.

Palestina	
Actores negociadores:	Hamas, Fatah
Terceras partes:	Qatar, Egipto
Acuerdos relevantes:	Acuerdo de la Meca (2007), Acuerdo de El Cairo (2011), Acuerdo de Doha (2012), Acuerdo de Beach Refugee Camp (2014)

Síntesis:
Desde el inicio de la confrontación entre Hamas y Fatah, que a partir de 2007 se ha materializado en una separación de facto entre Gaza y Cisjordania, diversas iniciativas de mediación han intentado reducir la tensión y promover una aproximación entre las dos formaciones palestinas. No fue hasta mayo de 2011 que la confluencia de múltiples factores –entre ellos el estancamiento en las negociaciones con Israel, los cambios en la región como consecuencia de las revueltas árabes y la presión de la opinión pública palestina– facilitó la firma de un acuerdo de reconciliación entre las partes. Sin embargo, las divergencias entre Hamas y Fatah en temas clave dificultaron la implementación

del acuerdo, que pretendía la formación de un gobierno de unidad, la celebración de elecciones legislativas y presidenciales, y una reforma a las fuerzas de seguridad. En los años siguientes (2012, 2014) se anunciaron nuevos acuerdos de reconciliación entre las partes sin que llegaran a implementarse. Los cambios en la región en el marco de las revueltas árabes también han repercutido en el proceso de acercamiento entre las facciones palestinas, al que Israel se opone abiertamente.

Siguiendo la tónica de años anteriores, durante 2016 tuvieron lugar nuevas rondas de contactos entre Fatah y Hamas auspiciadas por actores regionales con el fin de facilitar una reconciliación entre las partes. No obstante, se mantuvo el bloqueo y las dificultades para consensuar la formación de un gobierno de unidad nacional efectivo y para implementar medidas previstas en los acuerdos suscritos por ambas facciones en el pasado. Bajo la mediación de Qatar, Hamas y Fatah retomaron las conversaciones y se reunieron en la capital qatarí, Doha, en febrero para discutir la implementación del acuerdo de Beach Refugee Camp (2014), precedido por varios otros acuerdos fallidos de reconciliación. Según trascendió, las partes mantuvieron sus diferencias en temas como el control de los cruces fronterizos de la Franja de Gaza y la celebración de comicios legislativos y presidenciales. Tras un viaje de una delegación de Hamas a Egipto, se celebraron nuevas reuniones entre delegados del partido islamista y de Fatah en Doha en marzo y junio, pero según algunas informaciones este último encuentro concluyó con acusaciones mutuas de detenciones arbitrarias y acoso político. El clima entre las partes se vio enturbiado además por las diferencias durante la campaña para las elecciones municipales previstas inicialmente para octubre, que finalmente fueron suspendidas.[39] Pese a las divergencias, durante el segundo semestre del año se informó de una nueva reunión entre el presidente de la AP, Mahmoud Abbas, y los líderes de Hamas Khaled Meshaal y Ismail Haniya, en Qatar en octubre. Abbas agradeció los esfuerzos por mediar en la disputa por parte de Qatar y Egipto. Algunos análisis apuntaron que los esfuerzos de Qatar y Egipto no se estaban coordinando.

Según informaciones de prensa, Egipto pretendía recuperar su influencia sobre el proceso, en el marco de un interés más general por obtener una mayor proyección a nivel regional y por su interés en la cuestión palestina por su peso simbólico y por su proximidad territorial, que convierte los asuntos palestinos en un tema de seguridad nacional. Cabe mencionar que las relaciones entre El Cairo y Hamas se deterioraron en los últimos años teniendo en cuenta los vínculos del grupo palestino con los Hermanos Musulmanes, considerado ilegal y organización terrorista por las autoridades egipcias.[40] No obstante, los vínculos han mejorado desde mediados de 2015, cuando las autoridades egipcias revirtieron una decisión previa de designar a Hamas como movimiento terrorista y permitieron la visita de la delegación del partido islamista en marzo de 2016, donde no solo se discutió la tensión intra-palestina sino también la relación entre Egipto y Hamas. El Cairo también recibió a una delegación del movimiento palestino Yihad Islámica en noviembre. Según informaciones de prensa, el Gobierno egipcio también estaba intentando impulsar una reconciliación entre el presidente palestino y Mohamed Dahlan, antiguo responsable de seguridad en Gaza y destituido de Fatah en 2011. En septiembre de 2016, Dahlan hizo un llamamiento a las diferentes facciones y grupos palestinos a establecer una plataforma y articular una visión política conjunta, asumiendo que las conversaciones entre Fatah y Hamas no eran una vía para superar las divisiones intra-palestinas. Según algunos análisis y versiones de prensa, la creciente cercanía entre Egipto y Dahlan –junto a la aproximación de El Cairo y Hamas– habría motivado los viajes de Abbas a Qatar y también a Turquía en octubre. En este escenario, a finales de año informaciones de prensa destacaron que Abbas había expresado su rechazo a cualquier interferencia en los asuntos internos palestinos y había resistido presiones del Cuarteto Árabe (Egipto, Jordania, EAU y Arabia Saudita) para alcanzar una reconciliación interna en Fatah y permitir el retorno de algunas figuras, entre ellas Dahlan. Finalmente, cabe destacar que en su informe sobre las perspectivas del proceso de paz palestino-israelí, el Cuarteto para Oriente Medio –EEUU, Rusia, UE y la ONU– emitió un informe en el que identifica la falta de unidad del liderazgo palestino como uno de los obstáculos para avanzar en la solución de dos Estados.[41]

Siria	
Actores negociadores:	Gobierno, sectores de la oposición
Terceras partes:	ONU, EEUU, Rusia, Grupo Internacional de Apoyo a Siria (ISSG), Turquía
Acuerdos relevantes:	Comunicado de Ginebra del Grupo de Acción por Siria (2012), Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU en apoyo a una Hoja de Ruta para un Proceso de Paz en Siria del Grupo Internacional de Apoyo a Siria ("Declaraciones de Viena") (2015)[42]

Síntesis:
Ante las graves consecuencias del conflicto armado en Siria y en un contexto de preocupación por las repercusiones regionales de la crisis, diversos actores regionales e internacionales han intentado facilitar una salida dialogada y comprometer a las partes en un cese de hostilidades. No obstante, las distintas aproximaciones al conflicto por parte de actores regionales y potencias internacionales junto a la incapacidad para lograr un consenso en el Consejo de

39. Véase el resumen sobre Palestina en el capítulo 2 (Tensiones).
40. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).
41. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en este capítulo.
42. Tanto el Comunicado de Ginebra de 2012 como la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU son documentos de referencia para las negociaciones, pero no han sido suscritos por las partes en conflicto.

Seguridad de la ONU han dificultado las posibilidades de abrir camino a una solución política. Tras una breve y fallida intervención de la Liga Árabe, la ONU asumió el liderazgo de los intentos de mediación, encabezados por los enviados especiales Kofi Annan (2012), Lakhdar Brahimi (2012-2014) y Staffan de Mistura (desde julio de 2014). A sus iniciativas se han sumado EEUU, Rusia –líderes del Grupo Internacional de Apoyo a Siria (ISSG)– y, más recientemente, Turquía. Las distintas rondas de negociaciones celebradas desde el inicio del conflicto armado han evidenciado las profundas diferencias entre las partes y no han conseguido frenar los elevados niveles de violencia en el país.

A lo largo de 2016, continuaron los intentos de facilitar una salida negociada al conflicto armado en Siria. Tras la aprobación de un plan promovido por el Grupo Internacional de Apoyo a Siria (ISSG, por sus siglas en inglés) a finales de 2015, refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de la resolución 2254, el año se inició con tímidas expectativas sobre la reanudación de un diálogo entre las partes en disputa. **Durante el primer semestre del año se celebraron dos rondas de contactos en Ginebra, pero la tercera –prevista para agosto– no llegó a tener lugar en medio de la intensa escalada de violencia en el país**. La primera ronda de conversaciones indirectas se celebró a finales de enero en medio de un clima de escepticismo e incertidumbre sobre la participación de las delegaciones y especulaciones sobre vetos, amenazas de boicot y presiones para incluir o excluir a determinados actores en el diálogo. Así, por ejemplo, trascendió que el partido kurdo sirio PYD –filial del PKK– no fue invitado a participar en esta ronda de conversaciones ante el veto de Turquía. El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, se reunió tanto con representantes del Gobierno de Bashar al-Assad como con delegados del opositor Alto Comité para las Negociaciones (HNC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las conversaciones se suspendieron tres días después de iniciarse ante las diferencias entre las partes sobre la agenda del diálogo, la composición de las delegaciones y la prioridad de los asuntos humanitarios en un contexto de persistente violencia. No fue hasta finales de febrero que EEUU y Rusia, en calidad de co-líderes del ISSG, promovieron un acuerdo de cese de hostilidades. El pacto, que excluyó a los grupos armados ISIS y Frente al-Nusra,[43] fue respaldado de forma unánime por una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (2268). El cese de hostilidades derivó en una reducción de los niveles de violencia durante unas semanas y permitió la reanudación de los contactos entre las partes.

En este contexto, Staffan de Mistura presentó en marzo una declaración de principios sobre diversos temas que deberían convertirse en el eje de las discusiones entre las partes en abril. El texto incluía asuntos como el rechazo al terrorismo, la reconstrucción del Ejército sirio, la conformación de un Estado democrático y no sectario, tolerancia cero a las acciones de represalia y venganza, el derecho a retorno de las personas refugiadas, el rechazo a las interferencias extranjeras en el país y una transición del poder político. El documento no aludía a uno de los puntos clave de la disputa entre las partes: el futuro del presidente sirio Bashar al-Assad y su eventual papel en un gobierno de transición. El opositor HNC presentó un documento donde detalló su visión de esta instancia de transición. En un intento por focalizar la discusión sobre este tema, De Mistura envió un cuestionario al régimen sobre las características que debería tener este órgano transicional, pero Damasco se negó a discutir sobre el tema enfatizando que era un debate prematuro y que el futuro de al-Assad no estaba en la agenda. Según Staffan de Mistura, los contactos con las partes entre el 13 y 27 de abril permitieron identificar algunos puntos en común, pero en términos generales el proceso se vio afectado por el incremento de los niveles de violencia, que pusieron en entredicho el acuerdo de cese de hostilidades. La situación llevó a la delegación opositora a suspender su participación en el proceso formal –aunque permaneció en Ginebra– hasta no constatar avances en la implementación de la tregua y el acceso de ayuda humanitaria. Poco después, en mayo, el jefe de la delegación opositora del HNC, Mohammad Alloush –vinculado al grupo Jaysh al-Islam y considerado como una figura relevante por su capacidad de influir en los actores armados sirios– decidió abandonar el proceso tras denunciar que las negociaciones eran una pérdida de tiempo y que no se estaban implementando medidas relativas al cese de hostilidades, entrega de ayuda y liberación de presos. **Pese a las gestiones para reanudar los contactos entre las partes antes del 1 de agosto, el diálogo permaneció bloqueado. En consecuencia, no llegó a implementarse el cronograma definido por el ISSG**, cuyo plan preveía un proceso de negociaciones de seis meses con el fin de establecer un gobierno de transición que llevara a la aprobación de una nueva Constitución y a la celebración de elecciones en un período de 18 meses. De este primer semestre cabe destacar una mayor formalización de la participación de las mujeres en el proceso negociador promovido por la ONU, a través de la creación en marzo de un grupo consultivo –el Women's Advisory Board– integrado por 12 mujeres sirias de diferentes afiliaciones políticas con la misión de asesorar al enviado especial de la ONU. Sin embargo la iniciativa, apoyada por ONU Mujeres, recibió críticas de organizaciones de mujeres sirias que cuestionaron su representatividad.[44]

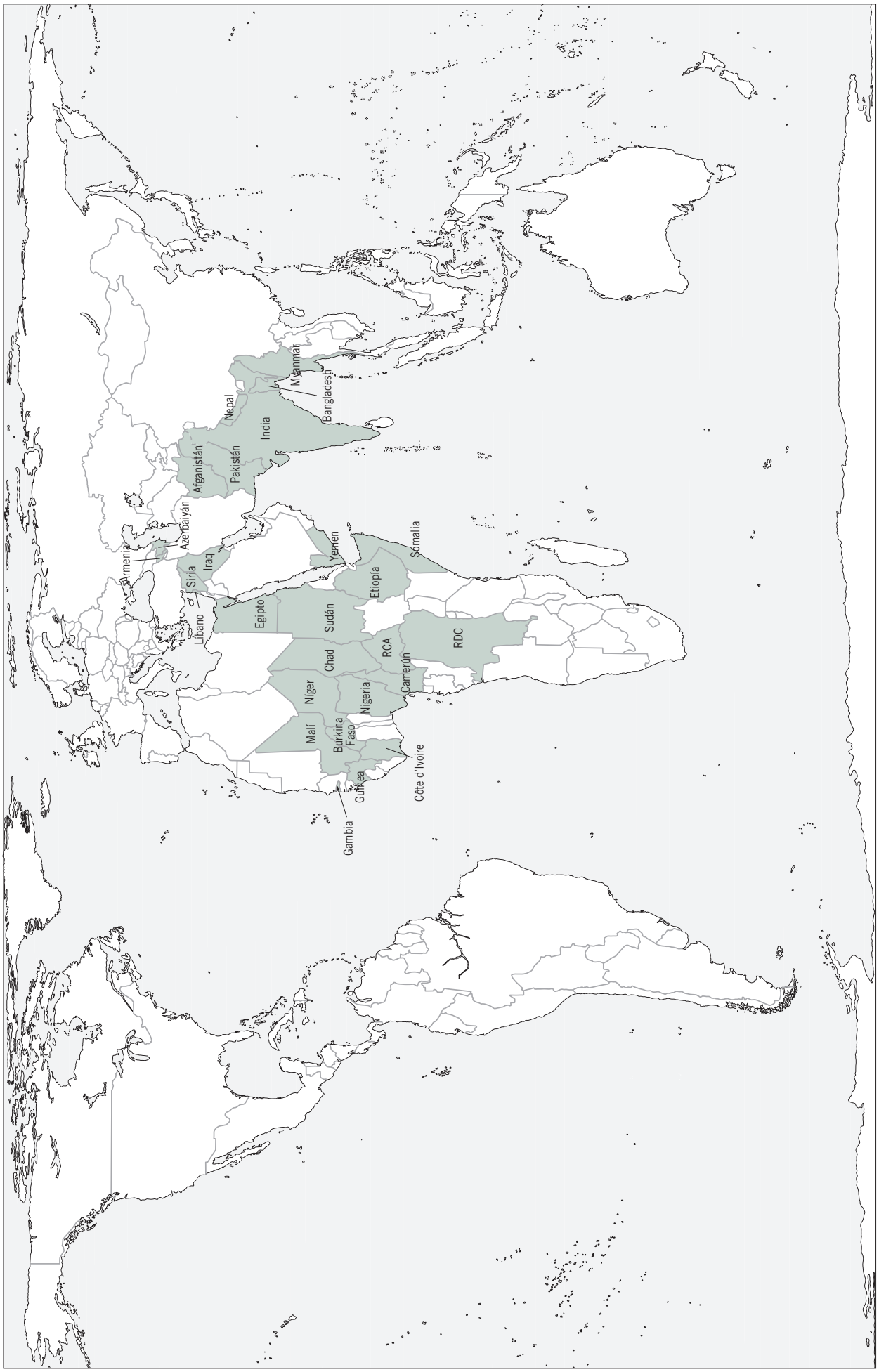
Durante el segundo semestre, EEUU y Rusia intentaron sin éxito el restablecimiento de un cese el fuego en Siria. Si bien ambas potencias llegaron a un acuerdo en septiembre –que incluía la activación de un mecanismo de cooperación entre Washington y Moscú para la lucha contra ISIS y el Frente al-Nusra– el acuerdo colapsó a los pocos días y dio paso a una

43. El Frente al-Nusra/Jabhat al-Nusra cambió su denominación durante 2016 a Jabhat Fateh al-Sham. Para más información véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).
44. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

significativa intensificación de la violencia, sobre todo en Alepo. Esta deriva tensó las relaciones entre EEUU y Rusia en lo relativo a Siria y desbarató las frágiles expectativas de reactivar las negociaciones. Previamente, a principios de septiembre, el HNC había entregado al ISSG una hoja de ruta que contemplaba una fase de seis meses de cese de hostilidades durante la cual se mantendrían negociaciones con el régimen de al-Assad sobre la base del Comunicado de Ginebra de 2012; una segunda fase de 18 meses en la que al-Assad debería entregar el poder a un gobierno con totales poderes ejecutivos, se apartaría del poder a los altos cargos acusados de crímenes graves y se trabajaría en el borrador de una nueva Constitución; y una tercera fase en la que se acordarían los cambios al texto constitucional, se implementarían los resultados de un diálogo nacional y se celebrarían elecciones bajo supervisión de la ONU. En el último trimestre de 2016, en medio de la intensa campaña del régimen en Alepo –con ayuda de Rusia e Irán–, se activaron algunas iniciativas que evidenciaron cambios en el papel de actores regionales e internacionales. Así, en octubre se celebró una reunión en Lausanne (Suiza) a la que asistieron los máximos representantes de Exteriores de EEUU y Rusia y de países de Oriente Medio (Arabia Saudita, Irán, Turquía, Qatar, Jordania y Egipto), es decir, un grupo más reducido respecto al ISSG, que también incluye a Estados europeos. Este encuentro, sin embargo, acabó sin resultados o acuerdos concretos. **Al finalizar el año, después de que el régimen sirio lograra imponerse militarmente en Alepo asestando un duro golpe a las fuerzas rebeldes, Rusia y Turquía auspiciaron una tregua entre el Gobierno de Damasco y actores armados de la oposición**. El acuerdo entró en vigor el 29 de diciembre y fue declarado de alcance nacional, aunque no existía claridad sobre las organizaciones armadas que habían suscrito a la tregua. Se esperaba que este cese de hostilidades favoreciera la celebración en Kazajstán de nuevas negociaciones entre las partes en conflicto en enero de 2017, en el marco de una iniciativa promovida por Rusia, Turquía e Irán.

Pese a las tímidas expectativas creadas a principios de 2016 tras el establecimiento de un cese de hostilidades, los intentos por favorecer una salida negociada al conflicto sirio no prosperaron durante el año

Mapa 4.1. **Desigualdades de género**



4. Género, paz y seguridad

- El 74% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género.
- Durante 2016 se registraron episodios graves de violencia sexual en los conflictos de Sudán del Sur, Nigeria, Iraq, Siria y Myanmar, entre otros.
- Naciones Unidas señaló que más del 70% de las víctimas de trata son mujeres y niñas y que numerosos grupos armados de oposición se implican en delitos de trata.
- La sociedad civil lamentó el escaso cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Gobiernos durante la revisión de alto nivel de la implementación de la resolución 1325 en materia de mujeres, paz y seguridad un año después de la revisión.
- Se estableció el Instrumento de Aceleración Global sobre mujeres, paz y seguridad y acción humanitaria, mecanismo para la financiación de dicha agenda que inició su andadura con escasas aportaciones económicas.
- El acuerdo de paz firmado en Colombia por el Gobierno y las FARC incluyó un enfoque de género de manera transversal, convirtiéndolo en el acuerdo más avanzado en materia de igualdad firmado hasta la fecha.
- Organizaciones de mujeres reivindicaron mayor participación y capacidad de incidencia en los procesos de paz de Myanmar, Malí, Sudán del Sur y Siria, entre otros.

En el presente capítulo se analizan los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como las diversas iniciativas que se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género en el ámbito de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales.[1] Esta perspectiva permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

4.1. Desigualdades de género

El Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI)[2] es una medición de la discriminación contra las mujeres en las instituciones sociales, que refleja las leyes, normas y prácticas discriminatorias en 160 países teniendo en cuenta cinco dimensiones: la discriminación en el seno de la familia, la violencia contra las mujeres, la preferencia por hijos varones, el acceso de las mujeres a los recursos y su acceso al espacio público. Las instituciones sociales discriminatorias (normas formales e informales, actitudes y prácticas) restringen el acceso de las mujeres a los derechos, la justicia y el empoderamiento, y perpetúan las desigualdades de género en áreas como la educación, la salud, el empleo o la participación política.

1. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.
2. El SIGI es un índice elaborado por la OCDE que mide cinco subíndices integrados por 14 indicadores que incluyen: edad legal de matrimonio, matrimonio precoz, autoridad parental, violencia contra las mujeres, mutilación genital femenina, autonomía reproductiva, abortos selectivos por sexo, preferencias de fertilidad, acceso seguro a la tierra, acceso seguro a la propiedad de otros recursos, acceso a servicios financieros, acceso al espacio público, acceso a la participación y la representación política. OCDE, *Social Institutions & Gender Index. 2014 Synthesis Report*. OCDE, 2014.

Tabla 4.1. Países en conflicto armado y tensión con niveles de discriminación de género altos o muy altos[3]

	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación
Conflictos armados[4]	Afganistán Camerún[5] Etiopía India (2) Iraq Myanmar Pakistán (2) RCA	Chad Egipto Malí Níger Nigeria[6] RDC (2) Siria Somalia Sudán (2) Yemen (2)
Tensiones	Armenia[7] Azerbaiyán Burkina Faso Côte d'Ivoire Etiopía (3) Guinea India (4)[8] Iraq Líbano (2)[9] Nepal Pakistán (2)	África Central (LRA) Bangladesh Chad Egipto Gambia Níger Nigeria (2) RDC (3) Siria Somalia Sudán (2) Yemen

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 38 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este indicador con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **20 de los 32 conflictos armados que permanecían activos al finalizar 2016 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación y que cinco conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Argelia, Libia, Israel-Palestina, Rusia, Sudán del Sur–.** Así, el 74% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género. Asimismo, en otros seis países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles medios (Burundi, Filipinas) y en otros con niveles bajos (Ucrania, Colombia, Tailandia y Turquía). En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 31 de las 87 tensiones activas durante el año 2016 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles altos o muy altos según el SIGI), lo que supone un 47% de las tensiones para las que existían datos.

20 de los 32 conflictos armados que permanecían activos a finales de 2016 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género

4.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de utilidad para el análisis de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico y que permite dar visibilidad a aspectos generalmente obviados en este análisis tanto en términos de causas como de consecuencias.

4.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

La violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos durante el año 2016.[10] Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes.

El secretario general de la ONU presentó en el mes de abril el informe anual de seguimiento del impacto de la violencia sexual en los conflictos armados relativo al periodo de enero a diciembre de 2015, en el que se identifican actores armados responsables de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia de sexual. El informe también documenta los patrones y tendencias en la utilización de la violencia sexual en el marco de los conflictos de Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia,

3. Tabla elaborada a partir de los niveles de discriminación de género del SIGI (OCDE) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau. El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.
4. Entre paréntesis el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.
5. Nigeria, Camerún, Chad y Níger protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Lago Chad (Boko Haram). Véase el resumen en el capítulo 1 (Conflictos armados).
6. Ibid.
7. Armenia y Azerbaiyán protagonizan una única tensión internacional, la relativa a la disputa en torno a Nagorno-Karabaj. Véase el resumen en el capítulo 2 (Tensiones).
8. Una de las tensiones protagonizadas por la India hace referencia a la que mantiene con Pakistán.
9. Una de las tensiones en Líbano hace referencia a la que mantiene con Israel y Siria.
10. La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los "incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego". UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

Cuadro 4.1. **Actores armados y violencia sexual en conflictos**[11]

El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos publicado en abril de 2016 incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual en situaciones de conflicto armado, o de ser responsables de ellos, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.[12]

Côte d'Ivoire	Grupos de ex integrantes de milicias, incluidos la Alianza Patriótica de la Etnia Wé, el Frente para la Liberación del Gran Oeste, el Movimiento de Liberación del Oeste de Côte d'Ivoire y la Unión Patriótica de Resistencia del Gran Oeste Fuerzas armadas de Côte d'Ivoire
Iraq	ISIS
Malí	MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, Grupos de Autodefensa de los Tuareg Imgad y sus Aliados
RCA	LRA; antigua coalición de Séléka; fuerzas antibalaka, incluidos elementos asociados de las fuerzas armadas de la RCA; Revolución y Justicia; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano
RDC	Grupos armados: APCLS; ADF-NALU; Fuerzas para la Defensa del Congo; FDLR; Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri/ "Coronel" Adirodhu Mbadhu/ "Coronel" Kakado; LRA; Mai-Mai Cheka/Defensa de Nduma para el Congo; Mai-Mai Kifuafua; Mai-Mai Simba/Manu; Mai-Mai Simba Magaribi; Mai-Mai Simba/Lumumba; Nyatura; Raia Mutomboki Mutomboki/Mulumbu Willy, también conocido como "Willy Alexandre"; Raia Mutomboki/Sadiki Desaba, también conocido como "Kabazimya" Fuerzas Armadas de la RDC; Policía nacional de la RDC
Siria	ISIS; otros grupos armados en las zonas en disputa como Ar-Raqqa, Al-Hasaka, Damasco y Damasco Rural, que incluyen: Frente Al-Nusra, Ejército del Islam, Aknaf Bait Al-Maqdes, Ansar Bait Al-Maqdis, Harakat Ahrar Ash-Sham; fuerzas gubernamentales que incluyen a las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia sirios y las fuerzas partidarias del Gobierno, incluidas las milicias de las Fuerzas de Defensa Nacional
Somalia	Al-Shabaab; Ejército Nacional Somalí; Policía Nacional de Somalia y sus milicias aliadas; fuerzas militares de Puntlandia
Sudán	Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Fuerzas Armadas Sudanesas; Fuerzas de Respuesta Rápida.
Sudán del Sur	LRA; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército/Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición; Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán; Policía Nacional de Sudán del Sur
Otros casos	Boko Haram

Sudán del Sur, Darfur (Sudán), Siria, Yemen; de los casos de posconflicto de Bosnia y Herzegovina, Côte d'Ivoire, Nepal y Sri Lanka, además de la situación en Burundi y Nigeria. En el informe se recogen también diferentes iniciativas de respuesta llevadas a cabo por los Gobiernos o desde otras instancias como Naciones Unidas o la sociedad civil.

Respecto a la situación en **Sudán del Sur**, en diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2327 por la que autoriza a la misión de Naciones Unidas desplegada en el país, UNMISS, a utilizar todos los medios necesarios para detener y prevenir la violencia sexual y de género. El Consejo de Seguridad expresó su preocupación por los hallazgos presentados por la representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos respecto al uso sistemático y generalizado de la violencia sexual como una táctica por parte de las partes en conflicto contra la población civil, en particular las mujeres y las niñas. Las organizaciones que trabajan en el terreno prestando apoyo a las víctimas destacan el grave incremento de esta violencia desde diciembre de 2013, así como la completa impunidad. Naciones Unidas denunció en julio que soldados de Sudán del Sur eran responsables de la violación de civiles en las inmediaciones de la base de Naciones Unidas en Juba, incluyendo en zonas establecidas para la protección de civiles en un contexto de incremento generalizado de la violencia. Las UNMISS señaló que entre el 8 de julio y el 1 de agosto se habían documentado más de 100 casos de violencia sexual y violaciones de civiles desarmadas, incluyendo violaciones en grupo y abuso sexual de menores.

Naciones Unidas denunció el uso sistemático y generalizado de la violencia sexual en Sudán del Sur como una táctica por parte de las partes en conflicto contra la población civil, en particular las mujeres y las niñas

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció la violencia sexual que se cometía contra mujeres y niñas en el marco del conflicto armado en **Nigeria** que enfrenta a las fuerzas de seguridad nigerianas con el grupo armado Boko Haram. Según esta organización, funcionarios públicos y miembros de grupos civiles de autodefensa habría violado y explotado sexualmente a mujeres desplazadas de manera forzada por la situación de conflicto armado. HRW documentó el abuso sexual, incluyendo la violación, de 43 mujeres y niñas en los campos de personas desplazadas internas (IDP) en Maiduguri, capital del estado Borno. Además, se han documentado numerosos casos de sexo transaccional, en los que los funcionarios explotaron sexualmente a las víctimas a

11. Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General,* S/2016/361, 20 de abril de 2016.
12. En esta tabla se utiliza la denominación de los actores armados tal y como aparece recogida en el informe del Secretario General y que no necesariamente coincide con la utilizada en los capítulos 1 y 2 de este anuario.

cambio de acceder a servicios básicos. De acuerdo con diferentes organizaciones humanitarias y de derechos humanos, el temor a la violencia sexual es una de las principales preocupaciones de la población desplazada, y según una encuesta llevada a cabo en julio de 2016 por la organización nigeriana NOI Polls, el 66% de la población desplazada en los estados de Adamawa, Borno y Yobe señalaron que los funcionarios que trabajaban en los campos de acogida de IDP abusaban sexualmente de mujeres y niñas. El abuso sexual de las mujeres y niñas fue constatado también por el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Chaloka Beyani, que tras su visita al país en el mes de agosto declaró que el Gobierno infravaloraba la gravedad de esta violencia, que estaba provocando un elevado número de embarazos no deseados y matrimonios forzados. Además, señaló que seis meses después de la visita conjunta al país de la relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, la relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, y el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, que también denunciaron estos abusos, no se habían constatado mejoras en las condiciones de vida de las mujeres desplazadas ni avances en la lucha contra la violencia sexual o la impunidad.

Respecto a la situación en **Libia**, un informe conjunto de la misión de Naciones Unidas en el país (UNSMIL) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) alertó en diciembre de 2016 sobre la grave situación de las personas migrantes y desplazadas forzosamente que se encontraban o había pasado por el país norteafricano. El escenario de conflicto armado y de profunda inestabilidad en el país ha favorecido la persistencia de múltiples abusos a los derechos humanos, incluyendo tráfico de personas, detenciones arbitrarias, torturas además de situaciones de explotación sexual, violaciones y otras formas de violencia sexual. Los testimonios de mujeres y niñas recogidos en el informe constataron abusos por parte de hombres armados y guardias libios bajo amenazas y extrema violencia y detallaron que algunas de ellas habían sido advertidas de tomar medidas contraceptivas antes de salir de sus países de origen ante el riesgo de sufrir abusos en Libia. Los antecedentes recogidos apuntan a violaciones sistemáticas en centros de detención o *connection houses* donde mujeres y niñas son sometidas a abusos que varían entre períodos de unas horas a varios días. Los testimonios apuntan a víctimas de variadas nacionalidades, procedentes de países como Somalia, Islas Comores, Nigeria, Etiopía, Eritrea o Siria. ONGs y personal de ACNUR también documentaron casos de abusos sexuales contra hombres y niños en su paso por el país norteafricano.[13]

A mediados de 2016 otro informe de la ONU documentó una serie de violaciones y abusos perpetrados por el grupo armado ISIS y concluyó que la organización está cometiendo genocidio contra la población yazidí en **Iraq** y **Siria**, en la medida que busca la destrucción de esta comunidad a través de asesinatos, esclavitud sexual, violaciones colectivas, torturas y humillaciones.[14] El informe fue elaborado a partir de entrevistas con decenas de supervivientes y determina que desde agosto de 2014 los combatientes de ISIS –entre los que se cuentan milicianos de diversas nacionalidades– han cometido una serie de actos tendientes a erradicar la identidad de la población yazidí, que profesa una religión sincrética considerada "pagana" por ISIS. Entre los múltiples crímenes y abusos cometidos por el grupo armado se describe la práctica de forzar la conversión de hombres yazidíes al Islam –asesinando a los que se niegan–, la violación de mujeres y niñas de hasta nueve años y el reclutamiento de menores de hasta siete años como combatientes. Según el informe, ISIS ha desarrollado una plataforma online para circular las fotos de niñas y mujeres yazidíes que han pasado a formar parte de una especie de mercado de esclavas sexuales. De acuerdo a algunos testimonios, las mujeres son violadas casi a diario y si alguna intenta escapar es castigada con el asesinato de alguno de sus hijos o hijas. Se estima que la comunidad yazidí estaría integrada por unas 700.000 personas, predominantemente de etnia kurda, y en su mayoría distribuidas en territorios de Siria e Iraq. Según los cuatro investigadores responsables del informe, al menos 3.200 personas permanecerían retenidas por combatientes de ISIS, principalmente en Siria, a mediados de 2016.

Sobre la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado en **Myanmar**, la representante especial de Naciones Unidas para la violencia sexual en los conflictos, Zainab Hawa Bangura, mostró su preocupación por las denuncias de violencia sexual en el marco de las operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en el estado Rakhine. Bangura señaló que no se trataba de hechos de violencia aislados, sino que formaban parte de un patrón de violencia étnica mucho más amplio. La organización de derechos humanos Arakan Project denunció que más de 30 mujeres rohingya habían sido víctimas de la violencia sexual.

En relación al conflicto armado en **Ucrania,** la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó en 2016 nuevos casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, que hacían referencia tanto a perpetradores vinculados a las fuerzas de seguridad ucranianas como a actores armados en los territorios bajo control de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Entre los patrones

13. United Nations Support Mission in Libya / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *"Detained and Dehumanised" Report on Human Right Abuses Against Migrants in Libya*, UNSMIL/OHCHR, 13 de diciembre de 2016.
14. Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, *"They came to destroy": ISIS Crimes Against the Yazidis*, Human Rights Council, A/HRC/32/CRP.2, 2016.

identificados, se incluyen prácticas de violencia sexual contra hombres y mujeres bajo detención en territorio control del Gobierno, contra personas percibidas como afiliadas a los grupos armados o contra sus familiares con el fin de infligir castigo, humillaciones o forzar confesiones. También se identificaron casos de violencia sexual y acoso contra mujeres en los puestos de control operados por el Gobierno en la línea de contacto. En diversos casos documentados estuvieron involucrados como perpetradores personal con uniforme militar sin insignia. El Servicio de Seguridad de Ucrania alegó en varias ocasiones que no existían evidencias forenses concluyentes que sustentasen las denuncias, a lo que la ACNUDH respondió que en casos de violencia de género y sexual pueden considerarse probatorias evidencias de otro tipo diferente a la forense. Por otra parte, la ACNUDH señaló en varios informes durante el año las limitaciones para acceder a la información de primera mano sobre prácticas de violencia sexual en las zonas bajo control rebelde, en un contexto de reticencia a denunciar debido a la impunidad general, la falta de servicios para las personas supervivientes de violencia sexual y de acceso de la justicia y el miedo a represalias. Aun así, la ACNUDH documentó casos de violencia sexual por fuerzas rebeldes.[15]

La sentencia sobre el caso Sepur Zarco en Guatemala fue pionera al condenar la violencia y la esclavitud sexual durante el conflicto armado

4.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

El ex vicepresidente de la **RDC** y ex líder rebelde, Jean Pierre Bemba, fue condenado en el mes de junio por la Corte Penal Internacional (CPI) a 18 años de prisión, acusado de crímenes de guerra (asesinato, violación y pillaje) y crímenes contra la humanidad (asesinato y violación), cometidos en la RCA entre 2002 y 2003. Bemba fue hallado culpable de no haber evitado que sus soldados cometieran estos crímenes con conocimiento de que estaban teniendo lugar. Se trataba de la primera vez que la CPI centraba una acusación en la violencia sexual y que alguien era condenado por crímenes cometidos por otros bajo su mando. Al finalizar el año seguía pendiente el recurso por parte de los acusados, así como las reparaciones a las víctimas. Las organizaciones de mujeres y de derechos humanos celebraron la sentencia que consideraron un precedente en la lucha contra la impunidad, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad de los altos mandos sobre la conducta de sus tropas. La organización Women's Initiatives for Gender Justice, que desde 2006 trabaja con las mujeres supervivientes de las atrocidades cometidas por el grupo liderado por Bemba en la RCA, señaló que como consecuencia de estos crímenes muchas mujeres sufrieron la estigmatización y ostracismo por parte de sus comunidades, tuvieron graves consecuencias en su salud, hicieron frente a embarazos no deseados y enfermedades como el VIH/SIDA y padecieron importantes traumas, consecuencias que perduran en la actualidad.

En **Guatemala** tuvo lugar otro importante juicio sobre violencia sexual cometida en el transcurso del conflicto armado que asoló el país durante décadas y que finalizó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Un tribunal guatemalteco sentenció a dos ex militares responsables del caso Sepur Zarco a 360 años de prisión, tras ser hallados culpables de crímenes de lesa humanidad por la violencia sexual y la esclavitud doméstica a las sometieron a 11 mujeres indígenas en una base militar en la década de los ochenta. Las mujeres fueron secuestradas después de que anteriormente sus maridos hubieran sido secuestrados y asesinados. Se trataba de la primera ocasión en la que un tribunal nacional juzgaba la esclavitud sexual como un crimen de guerra en el propio país en el que fue cometida. Además, se trataba del primer caso en Guatemala en el que la violencia sexual que tuvo lugar durante el conflicto se juzgaba como crimen de guerra. Las organizaciones de mujeres y de derechos humanos calificaron de histórico el proceso y la sentencia de condena.

En lo que se refiere a la **violencia sexual cometida por el personal militar y civil desplegado en misiones de Naciones Unidas**, cabe destacar que en el informe *Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales*,[16] presentado en febrero por el Secretario General de la ONU, se constató un incremento en el número de abusos cometidos por personal de Naciones Unidas. En 2015, periodo al que hace referencia el informe, se registraron 99 denuncias, frente a las 80 de 2014. Durante el año 2016, la unidad de conducta y disciplina del departamento de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas había registrado 103 denuncias de abuso y explotación sexual. En marzo, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2272. Se trataba de la primera resolución sobre explotación y abuso sexual aprobada por el Consejo de Seguridad. Mediante esta resolución se decidía repatriar a las unidades militares o policiales sobre las que existieran pruebas acerca de la comisión de explotación y abusos sexuales de forma generalizada o sistemática. Además, la resolución solicita al Secretario General que aquellos países que no adopten las medidas oportunas para investigar las denuncias de abuso y explotación sexual sobre su personal militar o policial sean apartados de la misión de paz correspondiente y sean sustituidos por países que sí hayan respetado las

15. Véase los informes publicados en 2017 por ACNUDH: *Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016*; *Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2016*, *Report on the human rights situation in Ukraine 16 August to 15 November 2016*, ACNUDH.
16. Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales. Informe del Secretario General. A/70/729, Asamblea General, 16 de febrero de 2016.

normas de conducta y hayan investigado debidamente las denuncias si se hubiesen producido. En este sentido, se repatrió a 120 soldados procedentes de Congo y desplegados en la RCA, después de que se iniciaran nuevas investigaciones en el país sobre violencia sexual perpetrada por personal de Naciones Unidas. Además, se llevó a cabo el nombramiento de Jane Holl Lute como Coordinadora Especial para mejorar la respuesta de las Naciones Unidas a la explotación y abuso sexuales.

4.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2331 sobre la lucha contra la trata de personas en los contextos de conflicto armado. La resolución destaca los diversos impactos de género de la trata de personas, especialmente su vinculación con la explotación y el abuso sexual, así como con la violencia sexual en los conflictos armados y su posible contribución a la exacerbación de los conflictos armados. La resolución señala que la violencia sexual vinculada con la trata de personas es utilizada por grupos terroristas como una táctica de terrorismo e insta a que se refuercen los mecanismos de protección y asistencia de las víctimas de trata. Además insta a que se trabaje de forma conjunta con la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de mujeres. La resolución menciona a los grupos armados ISIS, Boko Haram, Al-Shabab, LRA y al-Qaeda como responsables de actos de trata. En su informe anual sobre la trata, Naciones Unidas señaló que más del 70% de las víctimas son mujeres y niñas, y un tercio menores. El informe constata como numerosos grupos armados de oposición se implican en delitos de trata.

Boko Haram puso en libertad a 21 de las 200 niñas secuestradas en Chibok, **Nigeria**, en 2014 después de que el Gobierno suizo y el CICR alcanzaran un acuerdo con el grupo armado. Durante su secuestro, las niñas fueron víctimas de matrimonios y conversiones forzadas al Islam. Según Amnistía Internacional, alrededor de 2.000 menores han sido secuestrados por Boko Haram desde 2014, sometiéndoles a abusos sexuales y forzándoles a combatir y a cometer atentados suicidas. Durante el año se produjeron varios atentados suicidas por parte de mujeres que causaron decenas de víctimas de mortales. Diferentes organizaciones denunciaron que estas mujeres habían sido previamente secuestradas por Boko Haram y forzadas a inmolarse.

En **Afganistán**, las organizaciones de mujeres denunciaron que los talibanes habían retomado la práctica de las ejecuciones públicas de mujeres, después de que se difundiera un video que mostraba la ejecución de dos mujeres en la provincia de Jowzjan, al norte del país.

4.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

4.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad

En 2016 se llevaron a cabo dos debates monográficos en el Consejo de Seguridad sobre la agenda mujeres, paz y seguridad. El primero de ellos en febrero relativo a la violencia sexual y los conflictos armados, centrado en la cuestión de la trata de personas vinculada a la violencia sexual en los conflictos. El Secretario General presentó su informe anual sobre esta materia.[17] La sociedad civil resaltó nuevamente la importancia de entender la violencia sexual en los conflictos armados en un marco más amplio de violencias de género perpetradas tanto por actores militares como por civiles en un contexto de profundas desigualdades internacionales entre hombres y mujeres, agravadas por el armamentismo y el militarismo.

En octubre se celebró el debate abierto sobre mujeres, paz y seguridad y el Secretario General presentó su informe de evaluación de la implementación de la resolución 1325 un año después de la evaluación de alto nivel que tuvo lugar en octubre de 2015. El informe recoge los avances en la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad durante el año 2015 y constata que aunque se han producido algunos progresos importantes, todavía queda un largo camino por recorrer hasta que se logre la igualdad de género en todos los esfuerzos de construcción de paz y prevención de conflictos armados. El informe hace referencia a una serie de ámbitos temáticos de implementación. En lo que respecta a la participación de las mujeres en los **procesos de paz**, el Secretario General constata que durante 2015 en todos los equipos de mediación de Naciones Unidas de los 11 procesos de paz activos en los que intervino la organización había mujeres. Además, en 13 delegaciones negociadoras de nueve procesos de paz hubo alguna mujer en posiciones de alto nivel, en contraste con cuatro procesos en 2011. También se llevaron a cabo consultas con la sociedad civil en todos los procesos, como ya se hiciera por primera vez en 2014. Además de la participación de mujeres, el informe del Secretario General hace referencia a la aplicación de la perspectiva de género en los procesos de paz, y señala que el 89% de los procesos en los que era relevante Naciones Unidas facilitó la participación de personas expertas en género, lo que representó un incremento del 67% con

17. Véase el apartado 4.2.1. de este capítulo.

respecto al año anterior. **También aumentó el número de acuerdos de paz firmados que incluyeron provisiones específicamente de género, 70% frente al 50% de 2014.**

El informe recoge también lo sucedido en otros ámbitos de la agenda mujeres, paz y seguridad. En lo que respecta a la participación en las **misiones de mantenimiento de la paz**, las cifras continuaron siendo muy bajas y las mujeres representaron el 3,2% de las tropas militares desplegadas y el 16,9% de policías. Además, como se señaló anteriormente, persistieron las denuncias sobre abuso y explotación sexual por parte de personal de Naciones Unidas en estas misiones. Respecto a la **participación política formal** de las mujeres, continuó siendo mucho más baja en los países afectados por conflictos armados o situaciones posbélicas, en los que las mujeres representaron el 16,6% de diputados parlamentarios frente a la media mundial de 22,7%. Esta cifra además representa un retroceso con respecto a las registradas en años anteriores. Es importante señalar también que en aquellos países afectados por conflictos en los que se hizo uso de medidas de afirmación positiva como las cuotas, la participación de las mujeres se elevó al 22% frente al 11% de los que no utilizaron estos sistemas para promover la participación femenina. La inclusión de la dimensión de género en los procesos de **Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)** de antiguos combatientes sufrió un retroceso y únicamente el 12% de las personas beneficiarias de estos programas fueron mujeres, frente al 26% del año 2014.

El Consejo de Seguridad de la ONU estableció el Grupo Informal de Expertos sobre mujeres, paz y seguridad

Además, cabe destacar otras iniciativas en el marco del Consejo de Seguridad. Se estableció el **Grupo Informal de Expertos sobre mujeres, paz y seguridad**, tal y como se aprobó en la resolución 2242 del Consejo de Seguridad siguiendo la recomendación del Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentado en 2015. El grupo de trabajo no es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, ni sus decisiones reflejan la visión oficial de este organismo, puesto que algunos de sus miembros no participan. No obstante, trabaja en estrecha vinculación y está presidido por un miembro permanente y otro electo, que durante 2016 fueron Reino Unido y España. El trabajo de este grupo debería servir para que la agenda mujeres, paz y seguridad sea integrada en mayor medida en los mandatos de las misiones de paz adaptada a cada contexto; que cuestiones de género sean integradas en las misiones de visita del Consejo de Seguridad; y que el Consejo de Seguridad tenga mayor capacidad para incluir cuestiones relativas a la agenda mujeres, paz y seguridad en los requerimientos que hace a las misiones desplegadas en terreno. Durante 2016 se abordaron las situaciones de Malí, Iraq, RCA y Afganistán, con un resultado desigual en lo que se refiere a una mayor integración de la perspectiva de género en el trabajo de paz llevado a cabo en el terreno.[18]

Cuadro 4.2. **La financiación de la agenda mujeres, paz y seguridad**

En 2016 se estableció el **Instrumento de Aceleración Global sobre mujeres, paz y seguridad y acción humanitaria (Global Acceleration Instrument, GAI** por sus siglas en inglés), mecanismo para la financiación de la agenda mujeres, paz y seguridad acordado durante el proceso de revisión de alto nivel llevado a cabo en 2015. El propio Estudio Mundial sobre la implementación de la resolución 1325 elaborado por Naciones Unidas recomendaba el establecimiento de este mecanismo. El trabajo de preparación para su creación se inició en el año 2014, con la creación del Women, Peace and Security Financing Discussion Group (Grupo de Discusión sobre Financiación Mujeres, Paz y Seguridad), integrado por países donantes, países afectados por conflictos armados, entidades de Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil. Se trata de un instrumento de financiación que se nutrirá de las contribuciones de los Estados con el objetivo de cubrir el vacío económico y las dificultades para financiar dicha agenda. El GAI pretende mejorar la capacidad de prevención de conflictos, de respuesta a las crisis y las emergencias, así como aprovechar las oportunidades de construcción de paz y fortalecer la sostenibilidad y la apropiación local. Las funciones del GAI serán las de acabar con la fragmentación entre la financiación para el desarrollo, la construcción de la paz, la seguridad y humanitaria; abordar la falta de financiación estructural disponible para la participación de las mujeres en la construcción de la paz; y mejorar la coherencia y la coordinación de los diferentes actores involucrados.

Los resultados esperados del GAI se circunscriben a seis ámbitos: 1) creación de entornos adecuados para la implementación de los compromisos en materia de mujeres, paz y seguridad, en particular mediante mecanismos locales que pueden incluir los Planes de Acción Nacional sobre mujeres, paz y seguridad; 2) participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión y las respuestas en materia de prevención de conflictos, lo que requiere de actitudes favorables a la participación de las mujeres, de que las organizaciones locales de mujeres tengan las capacidades necesarias y de que los mecanismos de prevención de conflictos de las

18. Security Council Report, *Women, Peace and Security: Closing the Security Council's Implementation Gap,* 2017.

organizaciones de mujeres estén conectados con mecanismos nacionales e internacionales de prevención; 3) respuestas humanitarias incluyentes en materia de igualdad de género; 4) protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, seguridad y salud, incluyendo la prevención de la violencia de género y el acceso a asistencia para las supervivientes de violencia de género; 5) promoción de la recuperación socioeconómica y la participación política de las mujeres en los contextos posbélicos; y 6) mayor representación y liderazgo de las mujeres en las negociaciones de paz formales e informales.

A lo largo de 2016, cuatro Estados (Australia, Reino Unido, Lituania e Irlanda) contribuyeron al GAI aportando 3,7 millones de dólares. Aunque otros Gobiernos expresaron públicamente su compromiso con la financiación de este instrumento, no se materializaron más contribuciones. Está previsto que al menos la mitad de los fondos del GAI sean directamente destinados a financiar a organizaciones de la sociedad civil. La creación del GAI se produce en un contexto de grave infrafinanciación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad. Algunas estimaciones señalan que en el periodo 2002-2012 la financiación anual específica a esta agenda fue de aproximadamente 459 millones de dólares, aunque con un aumento en los años 2011 y 2012 en los que se alcanzaron montos anuales de 849 millones de dólares.[19] Sin embargo, existe un mandato internacional para mejorar la financiación en esta materia, puesto que en el año 2010, el Secretario General de la ONU estableció el objetivo de dedicar como mínimo el 15% de los fondos que gestionan las Naciones Unidas a proyectos de consolidación de la paz en los que se aborden las necesidades específicas y el empoderamiento de las mujeres o la igualdad de género.

Otro ámbito de implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad de especial relevancia fue la elaboración de Planes de Acción Nacional (NAP, por sus siglas en inglés), puesto que se trata de las principales herramientas con las que cuentan los Estados para aplicar dicha agenda al ámbito nacional y local. Siete países adoptaron NAPs en 2015 y cuatro lo hicieron en 2016 (Kenya, Ucrania, Timor Leste y Sudán del Sur). Además, varios países renovaron y actualizaron por primera o segunda vez, sus NAPs.

El cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Gobiernos en materia de mujeres, paz y seguridad durante el 15º aniversario fue escaso y desigual

Por otra parte, y en lo que respecta a la implementación de la agenda por parte de los Estados miembros, cabe señalar el alto grado de incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los Gobiernos que participaron en el debate de Alto Nivel celebrado en el Consejo de Seguridad de la ONU durante 2015. En ese momento, y coincidiendo con la revisión de 15 años de implementación de la resolución 1325, muchos de los Gobiernos participantes adquirieron compromisos concretos que fueron recopilados en un documento oficial del Consejo de Seguridad.[20] Sin embargo, de acuerdo con el análisis llevado a cabo por la organización internacional de mujeres WILPF, y de los 58 compromisos formales que se recogieron en 2015, sólo se hizo seguimiento de su cumplimiento en el 41% de los casos, y solo en el 22% de éstos el seguimiento se hizo de forma integral, mientras que el 19% fueron abordados de manera parcial.[21] Este análisis da cuenta del frágil e inconstante compromiso de los Estados miembros con la plena implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.

Con respecto a la **implementación de la resolución 1325 por parte de otras organizaciones**, cabe destacar que en el mes de julio la **Unión Africana** presentó su primer informe sobre la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad en África.[22] El informe recoge los avances legislativos e institucionales llevados a cabo por los estados miembro para la puesta en marcha de esta agenda, especialmente por parte de los 19 países africanos que cuentan con un Plan Nacional de Acción sobre la resolución 1325. Señala que es el ámbito de las transformaciones de carácter formal en el que se han registrado más resultados y constata déficits sobre todo en el ámbito de la protección y la recuperación, en especial en lo que respecta al acceso a la justicia. Además, se señala que la supervisión y la financiación siguen siendo insuficientes.

En septiembre la **UE** publicó la versión revisada de los indicadores de seguimiento de la aplicación de la agenda mujeres, paz y seguridad. Los indicadores fueron elaborados y aprobados en 2010 por la Task Force on UNSCR 1325 (grupo de trabajo de la UE sobre la resolución 1325 integrada por personal de EEAS y de la Comisión Europea, con la participación de los

19. Lopez Treussart, T.K. & Piemonte, C., *Financing the unfinished business of gender equality and women's rights: priorities for the post-2015 framework – Technical Brief*, OECD, 2014.
20. Carta de fecha 30 de octubre de 2015 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, S/2015/832. 3 de noviembre de 2015.
21. Peacewomen, *Commitment and Implementation Record for the United Nations Security Council Open Debate on Women, Peace and Security 2016*, WILPF. http://peacewomen.org/sites/default/files/2016%20Commitments%20-%20Copy%20of%202016%20Commitments.pdf
22. African Union Commission, *Implementation of the Women, Peace and Security Agenda in Africa*, Office of the Special Envoy on Women, Peace and Security of the Chairperson of the African Union Commission, 2016.

Estados miembros y la presencia de Naciones Unidas, la OTAN y organizaciones de la sociedad civil)[23], con el objetivo de proporcionar a la organización y los estados miembros una herramienta de evaluación y seguimiento del cumplimiento de la resolución 1325. Los nuevos indicadores abarcan las cuatro áreas de acción de la agenda mujeres, paz y seguridad –prevención, socorro y recuperación, participación y protección. Cabe destacar que además de la información de tipo cuantitativo respecto al cumplimiento de los compromisos relativos a esta agenda tanto por parte de las instituciones de la UE como de los propios estados miembros, los indicadores requieren que se proporcione información sobre buenas prácticas y resultados, con el fin de poder llevar a cabo también una evaluación de carácter cualitativo.[24]

4.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz

Varias negociaciones de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2016. Especialmente importante fue el caso de Colombia, donde tras varios años de negociaciones entre el Gobierno y las FARC se firmó un acuerdo de paz que incluyó múltiples referencias a la igualdad de género. Organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa.

Colombia

Las negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado entre el Gobierno de Colombia y las FARC concluyeron con la firma de un acuerdo de paz que logró la terminación de un conflicto armado de 52 años de duración y con graves impactos de género.[25] El acuerdo fue considerado un hito en términos de la inclusión de la perspectiva de género en su articulado, fruto de un largo proceso negociador en el que también se produjeron avances muy importantes para garantizar la participación de las mujeres y los colectivos LGTBI, su capacidad de incidencia en las negociaciones y la inclusión de la dimensión de género en el acuerdo.[26] En julio, un mes antes de la firma del acuerdo de paz, las partes presentaron de forma pública el resultado del trabajo de la Subcomisión de género en la revisión del acuerdo de paz, con el respaldo de expertas de género de Naciones Unidas. La inclusión del enfoque de género abarcaba ocho aspectos centrales: acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas; gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI para su participación política y social; y sistemas de información desagregados.[27] Las organizaciones de mujeres colombianas celebraron el resultado del acuerdo, fruto de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, las partes negociadoras y los equipos facilitadores del proceso y coincidieron en destacar lo histórico del resultado, ya que ningún acuerdo de paz firmado con anterioridad había incluido de forma tan exhaustiva la perspectiva de género ni había generado un proceso de participación tan amplio.

Chipre

El proceso negociador en Chipre, que asistió a grandes avances y también dificultades durante el año, mantuvo activo su Comité de Igualdad de Género, creado en mayo de 2015, formado por hombres y mujeres, encargado de integrar la perspectiva de género en el conjunto de negociaciones y documentos del proceso y cuyo mandato incluye referencias a la Resolución 1325. El comité se reunió de manera periódica durante el año. El secretario general señaló en su informe de julio sobre su misión de buenos oficios que el comité estaba trabajando en proporcionar información sobre las cuestiones que partes debían tener en cuenta con el fin de incorporar la perspectiva de género. A ese respecto, también trascendieron las buenas impresiones de la Directora Regional de ONU Mujeres para Europa y Asia central, Ingibjorg Gisladottir, de visita a la isla en mayo, sobre el mandato del comité y su capacidad de proporcionar sugerencias concretas. No obstante, dichas evaluaciones positivas contrastaron con la falta de información pública sobre propuestas concretas del comité y sobre sus resultados en el proceso negociador. Sí trascendió información sobre algunas actividades ad hoc organizadas por el comité, como una mesa redonda sobre mujeres y consolidación de la paz en marzo, con facilitación de la misión UNFICYP y de la misión de buenos oficios de la ONU.

Ya en el informe sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre de julio, el secretario general

23. Villellas, M., Urrutia, P. y Villellas, A., *Gender in EU conflict prevention and peacebuilding. Policy and practice*, WOSCAP, 2016.
24. Council of the European Union, *Revised indicators for the Comprehensive approach to the EU implementation of the UN Security Council Resolutions 1325 and 1820 on women, peace and security*, 12525/16, 22 de septiembre de 2016.
25. Véase el resumen de Colombia en el capítulo 3 (Procesos de paz).
26. Para un análisis detallado, véase la oportunidad de paz "La inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo de paz en Colombia", en el capítulo 5 (Oportunidades de paz).
27. Mesa de Conversaciones, Comunicado Conjunto #82.

exhortaba a todas las partes a aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles del proceso y a incorporar la perspectiva de género. En los primeros días de 2017, el secretario general instaba de nuevo a los dirigentes de la isla a redoblar esfuerzos para "reflejar plenamente" en sus discusiones los principios y objetivos de la 1325. Asimismo, altos cargos de la ONU, como la propia Directora regional de ONU Mujeres, y la Representante especial del secretario general de la ONU y jefa de la misión UNFICYP, Elizabeth Spehar –que tomó el relevo durante el año de su predecesora, Lisa Buttenheim– participaron en diversos actos y reuniones relativos al impulso de la perspectiva de género el proceso chipriota. Spehar enfatizó en una conferencia en noviembre organizada por actores de la sociedad civil que conforme avance el proceso negociador será necesario preparar nuevas constituciones e instituciones, para lo cual las aportaciones desde perspectiva de género serán claves, según destacó la representante especial. Por otra parte, ONU Mujeres ofreció su apoyo técnico al proceso de paz.

Myanmar

Durante 2016 el proceso de paz en Myanmar experimentó importantes avances después de que en 2015 varios grupos armados de oposición firmaran un acuerdo de alto el fuego de alcance nacional.[28] El principal hito fue la celebración en el mes de septiembre de la Conferencia de Paz Panglong-21, en la que el Gobierno se reunió con prácticamente todos los grupos armados de oposición activos en el país, incluyendo a aquellos con los que no se firmó el acuerdo de alto el fuego nacional. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que se hicieron para lograr que el máximo número de actores involucrados directamente en el conflicto se incorporaran a las negociaciones de paz y a los diferentes ámbitos del proceso, las organizaciones de mujeres resultaron excluidas y no tuvieron la posibilidad de tener un estatus propio con asiento en la mesa de negociaciones. Esto las relegó al papel de observadoras durante el transcurso de la Conferencia de Paz. La exigencia de una mayor representación y capacidad de incidencia sobre el resultado del proceso se había materializado en diferentes reivindicaciones, así como en la elaboración de un catálogo de recomendaciones para la conferencia de paz durante un encuentro en Naypyidaw, convocado por la Alianza para la Inclusión de Género en el Proceso de Paz (AGIPP, por sus siglas en inglés) y por ONU Mujeres. En este encuentro estuvieron representadas tanto diferentes organizaciones de mujeres como parlamentarias y políticas. Una de las exigencias para lograr una representación significativa que pudiera incidir directamente en los acuerdos fue la del establecimiento de un sistema de cuotas que reservara un 30% para las mujeres permitiendo así incrementar el liderazgo político femenino. El Secretario General de la ONU se hizo eco de esta petición durante la conferencia Panglong-21, e hizo un llamamiento para que hubiera una representación del 30 por ciento de las mujeres en todos los niveles de las negociaciones.

La ausencia de las mujeres ha caracterizado las diferentes fases y espacios del proceso de paz con la insurgencia armada. Por un lado, las delegaciones negociadoras tanto del Gobierno de Myanmar como de los grupos armados de oposición han sido mayoritariamente masculinas, con una presencia de mujeres muy reducida. Varias de las comisiones, comités y equipos negociadores integrados conjuntamente por Gobierno e insurgencia no contaban con la participación de ninguna mujer, por ejemplo el Union Peacemaking Central Committee, el Joint Implementation Coordination Meeting o el Joint Ceasefire Monitoring Committee.[29] Por otra parte, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil que han reivindicado un mayor papel en el proceso de paz también han sido fuertemente excluidas, como evidencia el papel secundario al que se les relegó en la Conferencia Panglong-21. La participación política formal de las mujeres en Myanmar ha sido históricamente muy reducida puesto que el ámbito político estaba fuertemente militarizado hasta la celebración de las elecciones de 2015.

Malí

En Malí el proceso de paz atravesó serias dificultades durante todo el año,[30] y aunque no se alcanzaron avances significativos, las organizaciones de mujeres locales siguieron trabajando para lograr una mayor participación en las conversaciones de paz e incluir sus demandas en la agenda negociadora. Malí fue uno de los países objeto de atención por parte del Grupo Informal de Expertos sobre mujeres, paz y seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU, que en sus deliberaciones destacó cuestiones como la baja participación de las mujeres en las negociaciones de paz, el escaso equilibrio de género de la MINUSMA, la exclusión de las mujeres y el género del proceso de DDR, la exacerbación de los discursos de género en los mensajes de reclutamiento por parte de las organizaciones armadas de corte yihadista o la ausencia de las mujeres en los proyectos humanitarios. La misión del Consejo de Seguridad de la ONU desplazada al país en el mes de marzo para evaluar los progresos en la implementación del acuerdo de paz incluyó como temas para ser evaluados la participación de las mujeres en diferentes mecanismos vinculados al acuerdo de paz, el apoyo de la MINUSMA a la inclusión de la violencia sexual en los aspectos a abordar sobre el acuerdo de paz y la actuación de la MINUSMA en la protección de las mujeres frente a la violencia sexual. La misión del Consejo de Seguridad

28. Véase el resumen sobre Myanmar en el capítulo 3 (Procesos de paz).
29. Human Rights Watch, *A gentleman's agreement*, Human Rights Watch, 25 de agosto de 2016.
30. Véase el resumen sobre Malí en el capítulo 3 (Procesos de paz).

se reunió con organizaciones de mujeres en el terreno. Posteriormente, no obstante, la renovación del mandato de la MINUSMA apenas incluyó cambios en lo que a la inclusión de aspectos vinculados a la agenda sobre género, paz y seguridad se refiere.

Sudán del Sur

A lo largo del año las mujeres de Sudán del Sur llevaron a cabo diferentes iniciativas para demandar una mayor participación en el proceso de paz y presentaron reivindicaciones propias. En mayo, 500 mujeres de todos los estados del país se reunieron en Juba en el marco de la National Women's Peace Conference y elaboraron una agenda de siete puntos encaminada a la implementación del acuerdo de paz incluyendo la perspectiva de género. Entre las recomendaciones a las partes negociadoras incluidas en la agenda estaban las del cumplimiento de la cuota del 25% en las instituciones incluida en el acuerdo de paz o el inicio de un proceso de reforma constitucional que incluyera la participación de las mujeres. Además, se contemplaban cuestiones vinculadas a la implementación del acuerdo de alto el fuego con la colaboración de las organizaciones de mujeres y el fin de la violencia sexual. En el mes de junio diferentes organizaciones de mujeres, entre la que se incluía la South Sudan Taskforce on the Engagement of Women, celebraron en Nairobi una reunión en la que presentaron a las partes en conflicto una serie de demandas para el proceso negociador, entre las que destacaban la importancia de abordar las causas profundas del conflicto mediante consultas a las comunidades, así como garantías sobre el fin de los enfrentamientos y el respeto al cese de hostilidades. Además, las mujeres demandaban que el proceso se centre en la población sursudanesa mediante un proceso de diálogo nacional exhaustivo y genuino que ponga el foco en el interés de la población y no en las posiciones de las partes en conflictos. Este proceso de diálogo nacional debería ser inclusivo, representativo y transparente y finalizar con un acuerdo firmado de carácter global.

Siria

El proceso de paz para poner fin al conflicto armado que asola Siria atravesó numerosas dificultades.[31] Sin embargo, se dieron algunos avances en lo que respecta a la participación de las mujeres y la integración de la perspectiva de género en dicho proceso. Desde que se iniciaron los esfuerzos diplomáticos para poner en marcha un proceso de paz en Siria, las organizaciones de mujeres reclamaron una mayor presencia y capacidad de incidencia en el proceso y agenda negociadora.[32] Sin embargo, no fue hasta el mes de marzo de 2016 que la inclusión de las mujeres en el proceso de paz en Siria alcanzó un cierto grado de formalización. Tras la aprobación en diciembre de 2015 de la resolución 2254 por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se alentaba "la participación significativa de las mujeres en el proceso político para Siria facilitado por las Naciones Unidas", en marzo se anunció la creación del Women's Advisory Board, un grupo consultivo integrado por 12 mujeres con diferentes afiliaciones políticas y sociales y auspiciado por el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura. El Women's Advisory Board estaba conformado por mujeres cercanas al Gobierno de al Assad, mujeres procedentes del movimiento feminista, mujeres con vínculos con ciertos sectores de la oposición, así como académicas islamistas, en un intento de representar a diferentes sectores sociales y poder asesorar a de Mistura en las cuestiones relativas al género en el proceso de paz. En la conformación del grupo jugó un papel muy relevante ONU Mujeres, entidad de Naciones Unidas que ha apoyado la participación de las mujeres en el proceso de paz en Siria desde que éste diera comienzo. El grupo no tiene una participación directa en las negociaciones de paz, sino que asesora a Naciones Unidas en su misión diplomática. El Women's Advisory Group hizo su primera aparición pública en marzo de 2016 coincidiendo con el intento de relanzar el proceso de paz, con un comunicado en el que se pedía como un primer paso la puesta en libertad de las personas detenidas empezando por los activistas por la paz. Además, se pedía un levantamiento de las sanciones que impiden la provisión de comida, medicinas y suministros médicos. El comunicado vino acompañado de un gesto considerado de enorme importancia: la revelación de los nombres de todas las mujeres que conformaban el grupo. A pesar del intento por generar un grupo de mujeres representativo de diferentes sectores políticos y sociales sirios, desde su creación recibió numerosas críticas, tanto por parte de quienes se oponen a la participación de las mujeres en el proceso de paz como de otras organizaciones de mujeres que criticaron precisamente la falta de representatividad.

En paralelo, la delegación opositora en las negociaciones de paz, el Alto Comité para las Negociaciones, estableció un comité consultivo de mujeres (Women's Consultative Committee). En palabras de mujeres que lo integran, ante la imposibilidad de lograr un mayor número de mujeres en la delegación negociadora, se presionó para crear un grupo consultivo con el que la delegación negociadora tiene que establecer un diálogo. Según las cifras recopiladas por la organización estadounidense Inclusive Security, en las negociaciones sobre Siria celebradas en Ginebra, hubo tres mujeres en cada una de las delegaciones negociadoras representando al Gobierno y la oposición, además de las mujeres que asesoraron a la oposición en el comité consultivo, en el que participaron entre 20 y 25 mujeres.[33] Así pues,

31. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 3 (Procesos de paz).
32. Véase Escola de Cultura de Pau "Dimensión de género en la construcción de paz", *Alerta 2015! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria Editorial, 2015.
33. Williams, K. *Infographic: Women's Inclusion in the Syria Peace Talks*, Inclusive Security, 10 de marzo de 2016.

aunque se trata de avances importantes, sin duda son iniciativas y medidas insuficientes para lograr la integración de la perspectiva de género en el proceso de paz. El propio marco que establece la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es claramente frágil, puesto que se sirve de un lenguaje meramente declarativo y no se incluyen referencias concretas en los párrafos operativos de la resolución, lo que deja al arbitrio y buena voluntad de las partes cualquier avance.

4.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Organizaciones de mujeres protagonizaron acciones para denunciar el **bloqueo israelí a Gaza** y se movilizaron para exigir una solución política al conflicto palestino-israelí. La flotilla de mujeres a Gaza, iniciativa de la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad, zarpó de Barcelona a mediados de septiembre con la intención de denunciar el bloqueo israelí sobre la Franja y poner de relieve las acciones de resistencia de las mujeres palestinas en el marco del conflicto. Una de las embarcaciones, Amal, se vio obligada a regresar por problemas técnicos, mientras que la segunda nave, Zaytouna, fue interceptada a principios de octubre por la marina israelí. En ella viajaban la Premio Nobel de la Paz Mairead Maguire, de Irlanda del Norte y mujeres activistas procedentes de Sudáfrica, Suecia, Rusia, Malasia y Reino Unido. Adicionalmente, desde el 5 de octubre y durante dos semanas, tuvo lugar la llamada "Marcha de la Esperanza", promovida por el movimiento israelí Women Wage Peace. Creado en 2014 tras la operación israelí sobre Gaza, reúne a mujeres israelíes de diverso signo político y tiene como principal objetivo ejercer presión para favorecer una salida política al conflicto. La marcha iniciada por un pequeño grupo de veinte mujeres israelíes cerca de la frontera con Líbano recorrió entre 5 y 10 kilómetros diarios y llegó hasta las proximidades de Gaza. Tras llegar a la ciudad palestina de Jericó, a la marcha se sumaron unas 3.000 mujeres, entre ellas un millar de palestinas. La iniciativa incluyó una protesta en las afueras de la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El acto de clausura de la marcha contó con la participación de la activista liberiana y premio Nobel de la paz Leymah Gbowee, que reivindicó el activismo político de las mujeres y subrayó su capacidad para tender puentes entre comunidades divididas. Las organizadoras reivindicaron la resolución 1325 de la ONU para demandar una mayor participación de las mujeres en los esfuerzos por la paz.

En **Colombia** se celebró en el mes de septiembre la **II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz**, que reunió a 500 mujeres de todo el país, incluyendo a mujeres de la diáspora colombiana en el exterior. La Cumbre agrupó a múltiples organizaciones de mujeres con el objetivo de respaldar el acuerdo de paz firmado en el mes de agosto y acordar una agenda para el seguimiento y la verificación de la implementación del acuerdo. En el manifiesto aprobado por la II Cumbre se dio un respaldo público a los acuerdos de cara al plebiscito sobre éstos que se celebró días después. Además, el manifiesto recogía la voluntad de las organizaciones de mujeres de garantizar la reparación a todas las víctimas del conflicto armado, de exigir la participación paritaria de las mujeres en todas las instituciones, de apoyar la reintegración social de las mujeres combatientes y de constituirse en plataforma permanente de verificación de la implementación de los acuerdos de paz y del cumplimiento de todo lo acordado con respecto a los derechos de las mujeres y la arquitectura institucional para la paz a nivel local. La II Cumbre Nacional representaba la continuación de la cumbre celebrada en 2013 y que también reunió a cerca de 500 mujeres de organizaciones de todo el país. Las exigencias de la I Cumbre Nacional derivaron en el establecimiento de la Subcomisión de género en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, así como en la incorporación de más mujeres a los equipos negociadores de ambas partes.

En el **estado indio de Nagalandia**, la organización de mujeres Naga Mothers Association (NMA), se reunió en Myanmar con dirigentes del grupo armado de oposición NSCN-K para demandar al grupo el establecimiento de un alto el fuego. El acuerdo de alto el fuego que dicho grupo armado mantenía con el Gobierno desde el año 2000 se rompió en 2015, dando lugar a una escalada de la violencia. La NMA ha llevado numerosas iniciativas de diplomacia paralela en Nagalandia en las últimas décadas, propiciando el diálogo con los actores armados. En esta ocasión, las autoridades indias permitieron el viaje a la delegación de la NMA, integrada por cuatro mujeres de la organización, el segundo en el último año.

Organizaciones de mujeres continuaron movilizadas en torno al proceso de paz en **Chipre**, reclamando mayor participación e integración de la perspectiva de género. Entre las iniciativas durante el año, el Lobby de Mujeres de Chipre, con el apoyo con organismos internacionales, organizó una conferencia en noviembre sobre la resolución 1325 y el contexto chipriota, en la que participaron diplomáticas internacionales como la representante especial del secretario general en Chipre y jefa de la misión UNFICYP, Elizabeth Spehar; la asesora principal de EEAS sobre género e implementación de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad; y la embajadora de Suecia en Nicosia, Anna Olsson Vrang.

Mujeres activistas de **Armenia** y de **Azerbaiyán** hicieron llamamientos al fin de la violencia y la resolución del conflicto de **Nagorno-Karabaj** tras producirse en abril la crisis más violenta desde el fin de la guerra en 1994. En un comunicado la organización Mujeres de Negro de Armenia expresó profunda preocupación por los incidentes violentos en la línea de contacto y por la retórica belicista en ambos países. El grupo instó a ambos países a poner fin a la violencia y avanzar hacia una solución noviolenta del conflicto y llamó a

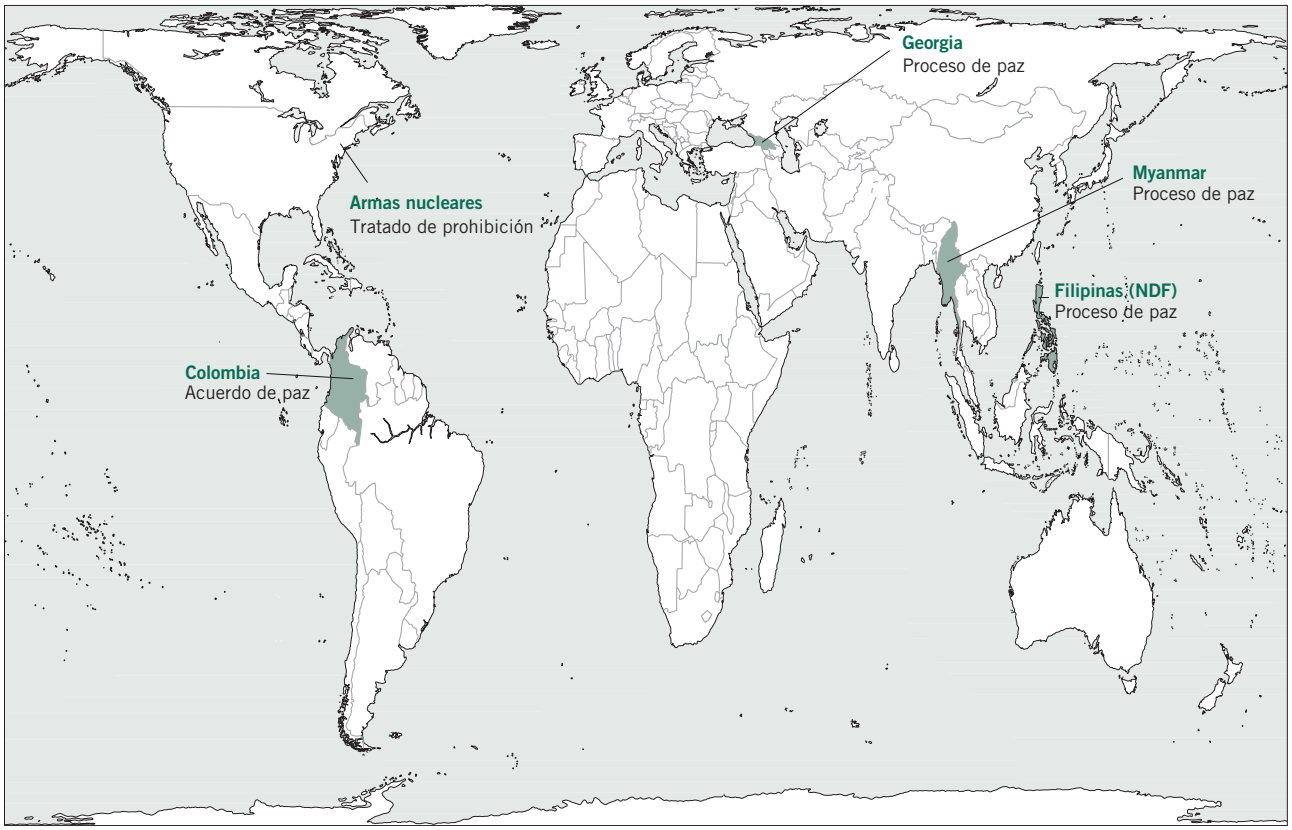
las sociedades de ambos lados del conflicto a poner fin a los discursos de odio. Activistas de Azerbaiyán también expresaron preocupación por el clima militarista en Azerbaiyán y señalaron que pese al carácter repentino de la escalada de violencia esta no fue inesperada. Además mujeres activistas se sumaron también a la creación de la Plataforma por la Paz entre Armenia y Azerbaiyán, que agrupa a hombres y mujeres activistas, escritores, periodistas, entre otros. En un discurso de final de año, la Plataforma se comprometió a dar a apoyo a una solución basada en el diálogo y el común acuerdo.

5. Oportunidades de paz para 2017

Tras analizar el año 2016 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el año 2017. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva y/o temas de la agenda internacional que pueden contribuir a corto o medio plazo, a la construcción de la paz. Las oportunidades identificadas de cara a 2017 hacen referencia a la inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo de paz en Colombia, a la reanudación de las conversaciones de paz entre el Gobierno de Filipinas y el NDF, a la inclusividad en el proceso de paz en Myanmar, a la reanudación de los mecanismos de prevención de incidentes y la introducción de la perspectiva de género en el proceso de diálogo en Georgia y, por último, a las negociaciones a nivel internacional que tendrán lugar en 2017 sobre la prohibición de las armas nucleares, que pueden ofrecer una oportunidad histórica para el establecimiento de un tratado en este ámbito.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 5.1. **Oportunidades de paz para 2017**



5.1. La inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo de paz en Colombia

El 12 de noviembre de 2016, el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron el *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera* con el objetivo de poner fin al conflicto armado iniciado en 1964 y que ha tenido un grave impacto en el país, causando más de ocho millones de víctimas según los registros gubernamentales. Se trata de un acuerdo de enorme relevancia en lo que respecta a la inclusión de la perspectiva de género y que representa una oportunidad única para avanzar en la construcción de una paz sostenible e inclusiva en Colombia, con la participación de las mujeres y la población LGTBI como actores claves en la implementación del acuerdo. El Gobierno y las FARC habían alcanzado un acuerdo final previo en el mes de agosto tras un proceso de negociación llevado a cabo en La Habana con la facilitación de Cuba y Noruega y con la participación de Chile y Venezuela como países garantes. Sin embargo, este acuerdo fue rechazado por una ajustada mayoría de votos en el plebiscito convocado por el Gobierno para su refrendación en el mes de septiembre. Tras la celebración del plebiscito, en el que el "No" al acuerdo de paz obtuvo el 50,2% frente al 49,8% del "Sí", se inició una nueva negociación entre las partes, que incluyó un proceso de diálogo con los sectores políticos y sociales que habían defendido el rechazo al acuerdo de paz y que derivó en la rúbrica de un nuevo acuerdo. Las dos cámaras legislativas del Congreso de Colombia refrendaron el nuevo acuerdo de paz, tras lo cual éste entró en vigor y se inició el proceso de implementación a principios del mes de diciembre de 2016.

Tanto el proceso de paz como el acuerdo alcanzado han sido descritos como innovadores.[1] Entre los diferentes aspectos novedosos cabe destacar de manera especial, la participación sustantiva de las mujeres y de representantes de organizaciones LGTBI en el proceso de diálogo y la inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo final. Se trata de dos hechos especialmente relevantes, puesto que 16 años después de la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad y del inicio de la conocida como agenda mujeres, paz y seguridad, las mujeres y el género continúan ausentes en gran parte de los procesos y acuerdos de paz.[2] La resolución 1325 "pide un aumento de la participación de la mujer en los niveles de adopción de decisiones en la solución de los conflictos y los procesos de paz" y "pide a todos los que participen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz que adopten una perspectiva de género". Posteriores resoluciones del Consejo de Seguridad han profundizado en este aspecto y, por ejemplo, la resolución 2122 puso énfasis en que tanto las delegaciones negociadoras como los equipos facilitadores y mediadores contaran con conocimientos técnicos sobre la inclusión de la perspectiva de género, así como el nombramiento de más mujeres mediadoras. Así pues, el marco normativo internacional sobre mujeres, paz y seguridad establece directrices claras sobre la importancia de que los procesos y los acuerdos de paz sean inclusivos con respecto al género. Sin embargo, el caso de Colombia es especialmente relevante por ser uno de los primeros en haberlo hecho efectivo de manera explícita y sustantiva en el texto del acuerdo firmado, ya que si bien el 27% de los acuerdos de paz suscritos después de la aprobación de la resolución 1325 contienen alguna referencia a las mujeres o al género, no todas las referencias incluidas en los acuerdos de paz tienen el mismo grado de profundidad o exhaustividad y son pocos los casos en los que estas referencias son realmente sustantivas.[3]

El acuerdo final alcanzado adopta como uno de los principios generales para la implementación el enfoque de género, definido como "el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional", explicitando también la importancia de adoptar medidas afirmativas para lograr la igualdad y la participación de las mujeres.[4] A lo largo de los diferentes puntos que componen el acuerdo –reforma rural integral; participación política; fin del conflicto; drogas ilícitas; víctimas; e implementación, refrendación y verificación– se recogen aspectos más específicos acerca de cómo aplicar dicho enfoque de género a los diferentes elementos contemplados por el acuerdo. En varios momentos del acuerdo se hacen referencias explícitas a la población LGTBI. Aunque la conceptualización del enfoque de género no incluye ninguna mención a la población LGTBI, sí lo hace en otro de los principios generales para la implementación, el de respeto a la igualdad y no discriminación. Este principio señala que "ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGTBI, o por cualquier otra razón".

Se trata por tanto, de un acuerdo ambicioso en lo que respecta a la inclusión de la perspectiva de género sobre todo en términos comparativos, ya que hasta el momento ningún acuerdo de paz alcanzado había logrado una inclusión del género de manera tan exhaustiva y otros acuerdos en los que se había hecho referencia a la orientación sexual (Burundi, 2005; RDC, 2003; y Zimbabwe, 2013), lo

1. Mariano Aguirre, "Un acuerdo de paz innovador", *El País*, 27 de septiembre de 2016; Kristian Herbolzheimer, *Innovations in the Colombian peace process*, NOREF, 27 de junio de 2016.
2. Radhika Coomaraswamy, *Prevenir los conflictos. Transformar la justícia. Garantizar la paz. Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,* ONU Mujeres, 2015.
3. Christine Bell, *Text and Context. Evaluating Peace Agreements for their "Gender Perspective",* Report 1, Political Settlements Research Programme, 2015.
4. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 24 de noviembre de 2016.
5. Christine Bell, "Lex Pacificatoria Colombiana: Colombia's Peace Accord in Comparative Perspective", 110 *AJIL Unbound* 165, 2016.

hacían en un sentido negativo.[5] No obstante, cabe señalar que en el primer acuerdo final alcanzado por el Gobierno de Colombia y las FARC, el lenguaje relativo al género era más robusto y tenía un carácter más inclusivo, al vincular de forma mucho más estrecha el enfoque de género no solo a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y al reconocimiento específico de los impactos del conflicto en las mujeres, sino también a la población LGTBI.

La revisión del enfoque de género en el nuevo acuerdo de paz obedeció a las presiones por parte de los sectores conservadores y religiosos que en su campaña en contra del apoyo al acuerdo de paz en el plebiscito esgrimieron de forma recurrente argumentos sobre la supuesta "ideología de género" defendida por el acuerdo.[6] Este término, acuñado por sectores religiosos, es utilizado internacionalmente para oponerse a los avances legales en el reconocimiento a los derechos de las mujeres y de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, en especial en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos. No obstante, el acuerdo de paz adoptaba un enfoque de género de acuerdo con los estándares internacionales en materia de igualdad recogidos por la legislación y la jurisprudencia internacional, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como otras herramientas normativas como la ya mencionada agenda mujeres, paz y seguridad. La presión de estos sectores religiosos y conservadores llevó, por tanto, a una definición de enfoque de género en el acuerdo en la que género se convierte en equivalente a mujeres en consonancia con las interpretaciones más restrictivas, pero al mismo tiempo dominantes, del discurso sobre género a nivel internacional.[7] En el texto del acuerdo las menciones a la población LGTBI se acompañan constantemente de referencias a las condiciones de exclusión, vulnerabilidad y discriminación histórica de esta población.

El acuerdo final alcanzado en Colombia adopta como principios generales para la implementación el enfoque de género y el respeto a la igualdad y no discriminación

Así pues, el acuerdo alcanzado en Colombia y el complejo proceso de negociaciones tanto entre las partes en conflicto, como posteriormente con los sectores sociales y políticos contrarios al acuerdo de paz, han evidenciado las enormes dificultades que persisten para la plena implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad y la igualdad de género. Si bien es cierto que los derechos de las mujeres han merecido un mayor reconocimiento en este proceso, el logro de la igualdad de género desde una perspectiva más amplia que incluya las diferentes identidades y orientaciones sexuales y de género es un reto plagado de numerosos obstáculos.

A pesar de estos obstáculos y restricciones, las organizaciones de mujeres y LGTBI que impulsaron este proceso desde el inicio de las negociaciones de paz recibieron con satisfacción y celebraron la firma del nuevo acuerdo de paz. Cabe señalar que a lo largo de todo el proceso de paz las reivindicaciones de estos grupos no solo contemplaban la inclusión y participación significativa de las mujeres y población LGTBI. Desde el inicio de las negociaciones formales en La Habana estas organizaciones señalaron que el proceso constituía la máxima prioridad del país y reclamaban a las partes negociadoras alcanzar un acuerdo y no abandonar el proceso negociador hasta lograrlo. Además, en el marco de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz celebrada en 2013, presentaron una extensa lista con propuestas sobre todos los temas incluidos en la agenda negociadora, con la intención de contribuir a enriquecer el acuerdo de paz que se lograra fruto de estas negociaciones.[8] De hecho, fueron las exigencias planteadas por las mujeres en la Cumbre las que derivaron en la inclusión del género en el proceso. Tras la celebración de la Cumbre, tanto Gobierno como FARC se hicieron eco de estas exigencias y suscribieron un acuerdo sobre representación política que incluía un punto en el que se señalaba que todo el contenido del acuerdo se implementaría con "un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer".

A este acuerdo le siguió la entrada de dos mujeres en el equipo negociador gubernamental, una de cuyas funciones era la de establecer un canal de comunicación con las organizaciones de mujeres para recoger sus aportaciones al proceso de paz. En 2014 se logró un acuerdo entre las partes negociadoras para el establecimiento de una subcomisión de género con el mandato de integrar las voces de las mujeres y la perspectiva de género en todos los acuerdos alcanzados, tanto parciales como en un eventual acuerdo final, en la mesa de negociaciones. La subcomisión, integrada por cinco representantes de cada una de las partes, contó con el asesoramiento de personas expertas nacionales e internacionales, incluyendo representantes de los países garantes, Cuba y Noruega. Numerosas organizaciones de mujeres y LGTBI viajaron a La Habana para participar en diferentes sesiones de la subcomisión de género y aportar sus propuestas y conocimiento tanto sobre los impactos específicos de género del conflicto armado como sobre el papel de las organizaciones de mujeres y LGTBI en la construcción de la paz. Así pues, la participación de las mujeres y la población LGTBI fue un aspecto decisivo para la consecución de un acuerdo de paz que incluyera la perspectiva de género, ya que hasta el momento en el que esta participación no se produjo, el proceso había obviado cualquier referencia a la importancia del género para la construcción de la paz en Colombia.

En conclusión, a pesar de que el acuerdo definitivo no logró mantener el grado de exhaustividad con el que se abordó el enfoque de género en el primer acuerdo final, éste sigue representando un avance enormemente importante en materia de integración de la perspectiva de género en un acuerdo de paz. El proceso colombiano muestra cómo la participación de la sociedad civil organizada y del movimiento de mujeres en sinergia con otros actores implicados, como los facilitadores formales del proceso o Naciones Unidas, representa una estrategia exitosa para lograr la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad en un proceso de paz.

6. Lina M. Céspedes-Báez, "Gender Panic and the Failure of a Peace Agreement", 110 *AJIL Unbound* 183, 2016.
7. Ibid.
8. *Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Bogotá, Colombia. Octubre 23 al 25 de 2013. Sistematización.*

5.2. La reanudación de las conversaciones de paz entre el Gobierno de Filipinas y el NDF

Poco después de la victoria de Rodrigo Duterte en las elecciones presidenciales que se celebraron en mayo de 2016 se reanudaron las conversaciones de paz entre el Gobierno y el National Democratic Front (NDF), organización que agrupa a distintos colectivos de inspiración comunista y que negocia con Manila en representación del Partido Comunista de Filipinas (PCF) y de su brazo armado, el New People's Army (NPA), una guerrilla que empezó a operar en 1969 y que se cuenta entre las insurgencias armadas más antiguas de Asia. Tanto ambas partes como algunos analistas consideran que los avances que se han registrado durante el 2016 permiten ser optimistas respecto del desenlace del proceso de paz, que estaba estancado desde hacía alrededor de cuatro años. De hecho, ambas partes incluso se comprometieron a firmar un acuerdo de paz para mediados de 2017. Para dicha fecha, hará 30 años que se iniciaron las conversaciones de paz, lo que las convierte en uno de los procesos de paz más longevos de todo el mundo. En este periodo se han sucedido cinco administraciones distintas (Corazón Aquino, Fidel Ramos, José Estrada, Gloria Macapagal Arroyo y Benigno Aquino), se han llevado a cabo más de 40 rondas de negociación y se han firmado más de 20 acuerdos parciales de distinto alcance e importancia. Por tanto, aunque existen riesgos, dificultades e incertidumbres, ambas partes se han mostrado esperanzadas respecto de la posibilidad de lograr a medio plazo un acuerdo de paz que, a juzgar por la duración e impacto del conflicto, sería histórico.

A pesar de las dificultades, el Gobierno filipino y el NDF han reanudado las conversaciones tras varios años de impasse y se han comprometido a firmar un acuerdo de paz para mediados de 2017

Según algunos analistas, el factor más decisivo que explica el nuevo escenario de las negociaciones entre el Gobierno y el NDF es la elección de Rodrigo Duterte como presidente, tanto por la voluntad política que hasta el momento está demostrando respecto del diálogo con los distintos grupos armados que operan en el país como por su cercanía personal e ideológica con la cúpula del NDF. Duterte, que en alguna ocasión se ha declarado socialista, había sido alumno en la universidad de Jose Maria Sison, el fundador del PCF y el NPA, y durante su período como alcalde de Davao (durante unos 20 años) había facilitado en varias ocasiones la liberación de rehenes y prisioneros por parte del NPA. Pocas horas después de su victoria en las elecciones presidenciales, Duterte hizo pública su disposición a iniciar un diálogo con Sison, garantizando su seguridad e inmunidad en un eventual regreso a Filipinas, o incluso viajando él personalmente a Utrecht, donde la cúpula de la organización reside desde mediados de los años 80. Además, como gesto de buena voluntad, ofreció al NDF cuatro ministerios en su Gobierno (Medio Ambiente y Recursos Naturales; Reforma Agraria; Bienestar Social y Trabajo y Empleo). El NDF agradeció pero declinó dicha propuesta, pero propuso varios nombres afines a la organización que finalmente fueron nombrados para el cargo. Días más tarde, tanto el Gobierno como el NDF mostraron su optimismo respecto del futuro del proceso de paz después de que Duterte se reuniera personalmente en Davao con uno de los máximos líderes del NDF, Fidel Agcaoli, para abordar la reanudación de las conversaciones de paz.

Otro de los factores que refleja la voluntad de las partes de encarar una nueva fase en el proceso de paz son los cambios de ambas partes en sus respectivos equipos de negociación. Por parte del NDF, que no había llevado a cabo ningún cambio en su panel negociador desde su constitución en 1992, cabe destacar el nombramiento de Fidel Agcaoli como jefe del panel en sustitución de Luis Jalandoni, así como la incorporación al panel de Benito Tiamzon, presidente del Partido Comunista de Filipinas y del NPA. Tanto Benito Tiamzon como Wilma Austria, secretaria general del partido, fueron detenidos en 2014 y liberados temporalmente para poder participar en las negociaciones de paz que se reanudaron en agosto de 2016. En este sentido, en los últimos tiempos varios medios de comunicación habían especulado sobre un posible distanciamiento entre la cúpula del NDF, que reside en Utrecht desde hace 30 años, y los máximos responsables del PCF y del NPA en Filipinas. Algunos analistas sostienen que el propio Duterte habría reconocido que la capacidad de influencia de Sison había disminuido en los últimos tiempos y que actualmente Benito Tiamzon y Wilma Austria eran las personas clave en la toma de decisiones. Por su parte, tras una época en la que las relaciones del NDF con el panel negociador del Gobierno y especialmente con la Consejera Presidencial para el Proceso de Paz, Teresita Quintos-Deles, habían sido tensas y con varios malentendidos y acusaciones cruzadas, el Gobierno nombró a un nuevo Consejero Presidencial –Jesus Dureza, que ya había ocupado el cargo bajo la administración de Gloria Macapagal Arroyo– y estableció un nuevo panel negociador liderado por Silvestre Bello –que ya lo había presidido entre 2001 y 20014–, e integrado por figuras como Hernani Braganza, cercana al grupo y que había llevado a cabo numerosas negociaciones y gestiones discretas con el NDF. Estos nombramientos fueron bien recibidos por parte del NDF, que puso en valor la experiencia y talante dialogante de Dureza y Bello. El nombramiento de ambas figuras se enmarca en la nueva hoja de ruta de paz del Gobierno, que entre otras cuestiones prioriza el relanzamiento del diálogo con varios de los grupos armados que operan en el país, como el MILF o el MNLF. En este sentido, el Gobierno de Noruega, que lleva a cabo las tareas de facilitación del diálogo a través de Elisabeth Slattum, ha destacado en varias ocasiones la buena sintonía entre ambas partes y su predisposición a alcanzar acuerdos durante las tres rondas de negociación (una exploratoria y otras dos formales) que durante la segunda mitad de 2016 se llevaron a cabo

en Oslo. Finalmente, cabe destacar que una delegación de seis miembros de la Cámara de Representantes asistió a las reuniones entre el Gobierno y el NDF en calidad de tercera parte observadora.

Todas las medidas de fomento de la confianza que se han enumerado anteriormente desembocaron en varias decisiones y acuerdos importantes, algunos de los cuales muestran una mayor capacidad de cesión de ambas partes en los aspectos que tradicionalmente habían bloqueado la negociación. Por parte del NDF, cabe destacar la firma de una tregua unilateral indefinida tras la primera ronda de negociaciones oficiales que se llevó a cabo en Oslo a finales de agosto. Hasta el momento, el NDF siempre había sostenido que una decisión de este tipo solamente se llevaría a cabo después de que el Gobierno demostrara su compromiso para con el proceso de paz a través de la implementación de varias reformas clave a ojos de la insurgencia y, por tanto, solamente había declarado treguas parciales y limitadas en el tiempo (históricamente coincidiendo con fechas navideñas). Por su parte, el Gobierno demostró mayor voluntad política que anteriores gobiernos en la cuestión que precisamente había comportado el bloqueo de las negociaciones en los últimos años, especialmente durante el mandato de Benigno Aquino: la liberación de presos vinculados a la insurgencia. Así, días antes de la reanudación de las conversaciones oficiales a finales de agosto, el Gobierno y la Corte Suprema autorizaron la liberación temporal de 20 prisioneros del NDF para que formaran parte de la delegación que viajó a Oslo. Entre las personas que obtuvieron dicha liberación temporal se encontraban Benito Tiamzon y Wilma Austria. Más adelante, el Gobierno declaró tener listo un borrador de amnistía que incluiría a unas 400 personas –una cifra ligeramente inferior a las más de 500 personas que pide el NDF– y declaró estar trabajando intensamente en la liberación de decenas de prisioneros políticos por razones humanitarias. Sin embargo, Manila sostiene que ello no depende del Gobierno y requiere de la aprobación del Congreso, por lo que pidió tiempo y paciencia al NDF.

Además de los avances en dos cuestiones política y simbólicamente tan importantes como el cese de hostilidades y la liberación de presos políticos, las buenas perspectivas sobre el proceso de paz se sustentan también en otros acuerdos importantes. En primer lugar, la ratificación de los más de 20 acuerdos firmados hasta el momento entre ambas partes, que incluye documentos tan importantes como el Acuerdo Global sobre el Respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario o el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad, el alcance del cual se convirtió en el principal escollo en las negociaciones entre el NDF y el Gobierno de Benigno Aquino. En segundo lugar, la ratificación de los tres grandes puntos de la agenda sustantiva de las negociaciones: reformas económicas y sociales; reformas políticas y constitucionales; y fin del conflicto. En tercer lugar, y más importante, el compromiso de ambas partes de acelerar el ritmo de las negociaciones con el objetivo de haber firmado un acuerdo de paz para agosto de 2017, lo que otorgaría al Gobierno de Duterte un plazo de cinco años para implementar dicho acuerdo. El Gobierno y el NDF también acordaron firmar a principios del 2017 el acuerdo sobre reformas económicas y sociales, considerado por muchos analistas como el punto más importante de la agenda sustantiva.

A pesar de las expectativas positivas que han generado los acontecimientos en la segunda mitad del año 2016, también existen algunas incertidumbres y dificultades. En primer lugar, ya durante el 2016 ha habido algunos enfentramientos y cruces de acusaciones entre las partes. En el mes de julio, en su primer discurso tras ser elegido presidente, Duterte decretó un alto el fuego unilateral que tuvo que retirar pocos días después, tras acusar al NDF de no haber replicado la medida del Gobierno y haber llevado a cabo varias acciones ofensivas durante la tregua gubernamental. Más tarde, la tensión entre las partes alcanzó el momento más álgido del año cuando se retrasó en varios meses y en diversas ocasiones la firma –prevista inicialmente para finales de octubre– de un acuerdo de alto el fuego bilateral y permanente, que sería el primero de estas características en toda la historia del conflicto. El NDF se mostró reacio a firmar dicho acuerdo –e incluso amenazó en una ocasión con reanudar la guerra- por considerar que el Gobierno había faltado a su palabra de impulsar la liberación de presos políticos y avanzar en la proclamación de una amnistía, mientras que el Gobierno, que considera que hasta el momento ha demostrado mucha voluntad política y que ha hecho la mayor parte de las concesiones, sostiene que no pueden darse nuevas liberaciones hasta que el NDF demuestre su voluntad política hacia el proceso de paz accediendo a firmar el mencionado cese de hostilidades. Por otra parte, algunas voces han criticado el estilo demasiado personalista utilizado por Duterte en estas negociaciones, aludiendo tanto a su intervencionismo y carisma como a la puesta en valor de sus contactos y simpatías personales. Otras voces críticas temen que Duterte quiera utilizar a determinadas insurgencias, como la comunista o la moro, para lograr mayor apoyo a su agenda política, en especial la transformación de Filipinas en un estado federal. Otras voces, por el contrario, se muestran más escépticas respecto del NDF y ponen el acento en el historial de incumplimientos e interrupciones del diálogo por parte del grupo, incluso en aquellas etapas negociadoras del proceso de paz en las que el NDF y el Gobierno parecían haber logrado buenas dosis de empatía y confianza, como en la actualidad y previamente en los casos de Corazón Aquino, Fidel Ramos, Gloria Macapagal Arroyo o incluso Benigno Aquino.

En cualquier caso, a pesar de estos desencuentros, ambas partes en todo momento han mantenido su compromiso de seguir dialogando y han expresado en varias ocasiones su convicción de que en la actual legislatura se logrará un acuerdo de paz a un conflicto armado que se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y que sigue obstaculizando la seguridad humana y el desarrollo de millones de personas en partes significativas de Filipinas.

5.3. Un proceso de paz inclusivo en Myanmar

Desde que se inició el proceso de transición a la democracia en Myanmar se han producido también importantes avances para lograr el fin del conflicto armado que ha afectado al país desde finales de la década de 1940 y que enfrenta a los grupos armados de adscripción étnica con las fuerzas de seguridad.[1] Los avances que han tenido lugar en 2015 y 2016 en términos de democratización y construcción de paz apuntan a la posibilidad de que en 2017 se profundice de forma importante en estos dos procesos y se avance de forma significativa hacia la terminación del conflicto armado mediante un proceso de diálogo político con la insurgencia armada. En 2015 el Gobierno logró la firma del Acuerdo de Alto el Fuego Nacional (NCA, por sus siglas en inglés) con ocho insurgencias, lo que representó un avance significativo hacia la paz, puesto que se superaba la lógica de los acuerdos de alto el fuego de carácter bilateral que se había logrado alcanzar hasta ese momento con los grupos armados. No obstante, el proceso también mostró importantes limitaciones, puesto que una decena de grupos quedaron fuera del acuerdo. En paralelo, las elecciones generales de 2015 otorgaron una importante mayoría al hasta ese momento principal partido de la oposición, la NLD liderado por Aung San Suu Kyi, propiciando un cambio de Gobierno y el establecimiento de la primera administración de carácter civil en el país en décadas.

Con anterioridad a su abrumadora victoria electoral, la NLD había expresado un apoyo titubeante al proceso de paz con las insurgencias étnicas. El entonces partido opositor había apuntado constantemente a la falta de inclusividad del proceso de paz, que había dejado fuera de la negociación, y posteriormente del acuerdo, a importantes grupos armados de oposición. Sin embargo después de que su triunfo en las urnas le llevara a formar un nuevo Gobierno, la NLD, y de manera personal la propia Aung San Suu Kyi, afirmaron su compromiso con la construcción de la paz en el país, adoptando varias medidas para ello. El paso más significativo fue la convocatoria de una Conferencia de Paz, "Union Peace Conference – 21st Century Panglong", que se llevó a cabo entre el 31 agosto y el 4 de septiembre en Naypitaw, capital del país, en la que participaron la práctica totalidad de las insurgencias del país, incluyendo aquellas que no eran partícipes del Acuerdo de Alto el Fuego Nacional, además de otros actores significativos como Naciones Unidas o China –país con un importante ascendente y capacidad de influencia sobre varios grupos armados–. Además de los grupos firmantes del NCA, la United Nationalities Federal Council – que agrupa a la mayoría de insurgencias que quedaron fuera de dicho acuerdo– accedió a participar. Algunos análisis apuntan a que el Gobierno estaría ante la mejor oportunidad para negociar un acuerdo político que ponga fin a casi setenta años de conflicto armado.[2]

El acuerdo de alto el fuego de 2015 contemplaba el establecimiento de un proceso político en el que discutir sobre un acuerdo de paz de carácter global que sentara las bases para llevar a cabo reformas constitucionales que permitieran acomodar el marco legislativo y político del país a la diversidad étnica. Además, el futuro acuerdo de paz debía guiar también los procesos de desarme y de reforma del sector de la seguridad. Este acuerdo al que teóricamente se llegará tras el proceso de diálogo político, partirá del marco pactado en el acuerdo de alto el fuego, que se compromete con los principios de la democracia y el federalismo, reconociendo la integridad territorial del Estado.

Con este marco ya acordado, el partido de Aung San Suu Kyi accedió al Gobierno con el firme compromiso adquirido durante la campaña electoral de hacer del proceso de paz una de las principales prioridades de gobierno. En el mes de abril, en el marco de una reunión del Comité Conjunto de Supervisión del acuerdo de alto el fuego, Aung San Suu Kyi anunció la celebración de una Conferencia Panglong del siglo XXI. Este anuncio tuvo un carácter especialmente simbólico, puesto que la Conferencia Panglong originaria tuvo lugar en 1947, auspiciada por el líder de la independencia del país y padre de Aung San Suu Kyi, el General Aung San, y en ella se acordó el establecimiento de un Estado federal con amplia autonomía para las diferentes entidades étnicas. No obstante la posterior Constitución recortó ampliamente lo acordado. La Conferencia Panglong convocada por Aung San Suu Kyi tuvo como principal virtud el haber logrado reunir a la práctica totalidad de la insurgencia armada del país, a pesar de que el anuncio inicial fue recibido con gran cautela por parte de los grupos armados. Sólo quedaron fuera de la Conferencia cuatro insurgencias, AA, TNLA, MNDAA y NSCN-K.[3] La Conferencia no estuvo exenta de tensiones, incluyendo el hecho de que finalmente no se lograra un acuerdo con los grupos anteriormente mencionados, o de que el grupo UWSP la abandonara en el segundo día, pero más allá de que no se lograra ningún resultado significativo, su propia celebración ha tenido un importante impacto de carácter simbólico. Aung San Suu Kyi cuenta con un amplio respaldo popular, como los resultados electorales pusieron en evi-

1. Véase Escola de Cultura de Pau, "La transición a la democracia y la paz en Myanmar", *Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria Editorial, 2016, p. 208.
2. International Crisis Group, *Myanmar's Peace Process: Getting to a Political Dialogue*, Crisis Group Asia Briefing Nº 149, Yangon/Bruselas, 19 de octubre de 2016.
3. Las tres primeras insurgencias no fueron invitadas a asistir y en el caso del NSCN-K, que opera principalmente en el estado indio de Nagalandia, el grupo decidió no participar puesto que su reivindicación de creación de la "Gran Nagalandia" implica territorios actualmente bajo control de India y de Myanmar lo que es incompatible con lo establecido por el Acuerdo de Alto el Fuego Nacional. International Crisis Group, op. cit.
4. El partido de Aung San Suu Kyi, NLD, obtuvo el 79% de los escaños electos.

dencia.[4] Esta popularidad que trasciende las fronteras del país y que comporta también un importante apoyo internacional, es uno de los principales activos con los que cuenta el proceso de paz en la actualidad y que debería ser aprovechado, puesto que conforme se extienda la acción de gobierno probablemente aumentará el desencanto entre algunos sectores de la población.

A pesar de los importantes avances que se han dado en el proceso de paz y que transcurren paralelos a la transición política hacia la democracia, también persisten retos de enorme importancia que podrían ensombrecer los logros alcanzados. La primera de las dificultades es la persistencia de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y algunas insurgencias. La escalada de la violencia en diferentes momentos del año pone de manifiesto las enormes dificultades para que determinados grupos no solo abandonen la violencia, sino también accedan a desarmarse, así como el papel todavía preponderante que el Ejército sigue desempeñando en Myanmar. La violencia sigue teniendo un grave impacto en la población civil de las zonas afectadas por el conflicto armado, y el apoyo electoral que la NLD ha tenido en estas zonas podría disminuir si la población no percibe una mejora en la situación de seguridad en el terreno. Además, sin que se ponga fin al conflicto armado la crisis de desplazamiento que se viven en las zonas de conflicto tampoco se resolverá.[5]

El Gobierno de Myanmar podría estar ante la mejor oportunidad para negociar un acuerdo político que ponga fin a casi setenta años de conflicto armado

Uno de los retos de mayor importancia viene dado por el hecho de que continúa siendo una exigencia para participar en cualquier proceso de diálogo político la firma del NCA, que a su vez requiere de la rúbrica de un acuerdo de alto el fuego bilateral. Así pues, por una parte es necesario que aquellos grupos que ya mantienen altos el fuego con carácter bilateral accedan a las condiciones establecidas en el NCA y, por otro lado, que los grupos con los que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo inicien un proceso bilateral. Ninguno de estos dos procesos será fácil, aunque la voluntad del Gobierno de la NLD de que todos los grupos armados participaran en la Conferencia de Panglong muestra que no es un reto imposible.

Por otro lado, son múltiples las voces que han destacado la importancia de que cualquier proceso de diálogo político no solo tenga en cuenta la importancia de incluir a todos los grupos insurgentes, sino también a otros sectores de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de mujeres, que hasta el momento han sido excluidas. La actual sintonía de las organizaciones de la sociedad civil con el nuevo Gobierno, fruto del papel crucial de la NLD en la oposición durante décadas de dictadura, así como el ascendente simbólico de Aung San Suu Kyi entre estas organizaciones, podría diluirse si estos grupos no perciben que se les considera interlocutores importantes en el proceso.

En paralelo a todos estos retos, será necesario que el Gobierno fortalezca la estructura institucional de acompañamiento a los procesos de negociación con las diferentes insurgencias así como al proceso político.[6] Sin que se produzca un fortalecimiento de las capacidades en materia de construcción de paz, el Gobierno podría no ser capaz de afrontar los obstáculos que aparezcan en el futuro. No obstante, a pesar de todos estos retos y dificultades, Myanmar se encuentra en un momento clave para el proceso de paz, que de ser aprovechado adecuadamente podría llevar a un acuerdo de alto el fuego inclusivo con todas las insurgencias, así como un acuerdo de carácter político que dé respuesta a las aspiraciones de los diferentes grupos sociales y políticos que conforman el país.

5. Ashley South y Kim Jolliffe, "Forced Migration and the Myanmar Peace Process", *New Issues in Refugee Research*, Research Paper No. 274, ACNUR, febrero de 2015.
6. International Crisis Group, op. cit.

5.4. ¿Una oportunidad para la construcción de confianza multinivel en Georgia? Mecanismos de prevención de incidentes y perspectiva de género

Georgia continúa afectada por los conflictos no resueltos en torno al estatus de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, escenarios de guerra en los años noventa, a los que se sumó la guerra ruso-georgiana de 2008.[1] El año 2016 Georgia asistió a dos procesos de poca trascendencia mediática, pero de importancia para la construcción de confianza y la seguridad humana en relación a los conflictos que afectan al país. Por una parte, la reanudación de uno de los mecanismos del proceso de paz, el Mecanismo de Prevención y Respuesta a Incidentes en torno a Abjasia (IPRM, por sus siglas en inglés), tras cuatro años paralizado, y, por otra parte, la institucionalización de las consultas entre representantes georgianos involucrados en el proceso negociador formal y organizaciones locales de mujeres. Se abre así la oportunidad de avanzar en la resolución de cuestiones conflictivas que afectan a la seguridad humana de la población de Abjasia y Georgia, especialmente en el ámbito competencial de los IPRM; así como de profundizar en la dimensión de género del conflicto y del proceso de paz, ampliando la apropiación local con perspectiva de género. No obstante, se trata de oportunidades que afrontan enormes limitaciones, ante los obstáculos políticos y geoestratégicos que rodean a los conflictos, así como el sesgo de género del proceso de paz.

En medio de la situación de estancamiento negociador y fragilidad en el terreno en los últimos años, la reanudación del llamado IPRM relativo a Abjasia, en mayo de 2016, supone un avance relevante, aunque a pequeña escala, en el complejo tablero del sur del Cáucaso. Los IPRM se establecieron en febrero de 2009, por acuerdo en las Discusiones Internacionales de Ginebra (GID, por sus siglas en inglés).[2] Existen dos mecanismos IPRM: el de Gali, que reúne a representantes de Georgia, Abjasia, así como de las tropas rusas presentes en Abjasia, y su equivalente de Ergneti (Osetia del Sur), facilitados por la Misión de Observación de la UE (EUMM), la OSCE y la ONU. Actúan de plataforma de intercambio de información, prevención de riesgos, de resolución de incidentes de seguridad y de diálogo sobre cuestiones que afectan a la vida diaria de las comunidades de las poblaciones (entre ellas, detenciones de civiles que cruzan la línea fronteriza y problemas de libertad de movimiento para fines agrícolas, humanitarios, educativos o religiosos, entre otros). Tienen, por tanto, un vínculo e impacto directo en la seguridad humana. El IPRM de Gali quedó suspendido en marzo de 2012, tras ser rechazado por los representantes de Abjasia. Después de años de incidentes de baja intensidad y de dificultades, finalmente las partes en conflicto acordaron en la ronda de las GID de marzo de 2016 la reanudación del IPRM de Gali, que se hizo efectiva en mayo. Estuvo precedida de un incidente mortal en torno a la línea fronteriza, en el que tropas abjasias mataron a un civil georgiano cerca de un paso fronterizo. La reanudación del IPRM conllevó la reactivación de los elementos asociados, como la línea telefónica directa, facilitada por la EUMM, y las rondas periódicas. La decisión de reactivación fue respaldada por todas las partes. Además, era una demanda de sectores de población local, como las organizaciones de mujeres georgianas. Las rondas celebradas en 2016, facilitadas por la ONU y con presencia de la EUMM, transcurrieron en un clima constructivo. A la reactivación del IRPM se añadieron también en 2016 otros hechos positivos, como la consecución de un acuerdo trilateral de intercambio de 16 prisioneros entre Georgia, Abjasia y Osetia del Sur. Si bien el pacto comenzó a gestarse en el marco de las GID, resulta significativo que se terminó de abordar y acordar en contactos directos entre las partes. También cabe destacar el hecho de que en el marco del acuerdo, Abjasia liberó a ocho personas sin pedir a cambio liberación de prisioneros abjasios, facilitando la consecución del pacto.[3] Además, el Gobierno georgiano agradeció explícitamente al régimen abjasio la cooperación emprendida. Se añade también el énfasis de Georgia sobre su voluntad de iniciar una nueva etapa en sus relaciones con ambas regiones, otorgando un lugar principal a las cuestiones humanitarias.

El IPRM de Gali y los avances humanitarios durante 2016 apuntan a una cierta oportunidad de construcción de confianza directa entre Georgia y los regímenes de Abjasia y Osetia del Sur. Se enmarca en la aproximación dual de Georgia al conflicto. Por una parte, de afirmación de un marco general del conflicto en el que Rusia continúa siendo considerada la principal contendiente y potencia agresora y ocupante de los territorios de Abjasia y Osetia del Sur, y éstos como regímenes supeditados a Rusia. Y por otra parte, una creciente posición de *soft power* que busca atraer a las poblaciones abjasia y osetia a través de la provisión de servicios,[4] y que aspira a la reunificación priorizando la reconciliación mediante el diálogo con Abjasia y Osetia del Sur, si bien subrayando siempre la necesidad del fin de la ocupación rusa.

Entre esa dualidad, y principalmente a través del énfasis en cuestiones humanitarias y de seguridad humana, se

1. Para más información sobre los orígenes y desarrollo de los conflictos en Georgia, véase la Base de Datos de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau. http://escolapau.uab.cat/conflictosypaz/index.php
2. Las GID constituyen el nivel más elevado de la arquitectura negociadora creada en torno a los conflictos de Abjasia y Osetia del Sur tras la guerra de 2008 entre Rusia y Georgia, que desmanteló las arquitecturas negociadoras anteriores. Las GID incluyen dos grupos de trabajo, uno sobre cuestiones de seguridad y otro sobre cuestiones humanitarias.
3. A través del pacto Georgia liberó a cuatro prisioneros de Osetia del Sur; Osetia del Sur liberó a cuatro detenidos georgianos; y Abjasia liberó a ocho personas.
4. Entre otros servicios, Georgia asume a través de su presupuesto anual la provisión de atención médica a población de Abjasia y Osetia del Sur en centros médicos en territorio bajo control de Georgia, sin necesidad de tener que disponer de documentos de identidad georgianos. Giorgi Menabde, "Why are Ossetians and Abkhazians Coming to Georgia for Medical Treatment", *Eurasia Daily Monitor*, Vol. 12, n.º 43, 9 de marzo de 2015.

intuyen espacios de oportunidad para la construcción de confianza, pese a los numerosos límites. Entre los obstáculos, los constreñimientos de la política de hechos consumados y "reglas del juego" impuestas por Rusia y ligadas a los intereses estratégicos y de afirmación nacional de Rusia en su aproximación a la órbita ex soviética y a Occidente.[5] En ese sentido, no ha habido avances sustantivos en el proceso de paz en todos estos años, sino más bien una consolidación de la independencia *de facto* de Abjasia y Osetia del Sur dependiente de Moscú.

Desde un enfoque de seguridad humana, otro factor positivo de construcción de confianza y apropiación, lo constituyen las consultas entre el Gobierno de Georgia y las organizaciones de mujeres así como mujeres afectadas por el conflicto. En medio de un contexto de proceso negociador con sesgo de género, en el que predomina la ausencia de la integración de la dimensión de género y la falta de participación de mujeres en las GID, desde 2014 se asiste a un proceso de consultas periódicas entre representantes del Gobierno georgiano que participan en el proceso de paz y organizaciones locales de mujeres, organizadas por ONU Mujeres. Asimismo, participan otros actores internacionales, involucrados en las dinámicas de construcción de paz, como la EUMM. El mecanismo de consultas incluye reuniones en dos niveles, relativas a las GID por un parte, y a los IPRM por otra. Suelen celebrarse dos consultas de cada tipo al año –frecuencia considerada acorde a los ritmos del proceso negociador formal–. En 2016 se asistió a la institucionalización y traspaso de competencias sobre la organización de estas reuniones, de forma que el Gobierno de Georgia pasó a adoptar el liderazgo en la organización de las consultas, manteniendo el apoyo técnico y logístico de la agencia de la ONU.

El reinicio en 2016 del mecanismo de prevención de incidentes entre Georgia y Abjasia, paralizado desde 2012, supone un avance para la seguridad humana de ambas poblaciones

El formato de consultas genera ventanas de oportunidad para el empoderamiento local, la integración de la perspectiva de género en el proceso de paz y la participación de mujeres en la construcción de paz. Así, las reuniones actúan como mecanismo de intercambio de información sobre las rondas de los IPRM o de las GID y de foro donde poder presentar demandas y aproximaciones para las rondas siguientes. Se trata de un mecanismo que ha revertido la falta de información previa sobre el proceso entre las organizaciones locales y que actúa como motor de empoderamiento y de movilización de las mujeres, con la celebración de reuniones propias y de interacción entre las organizaciones de mujeres previas a sus reuniones con los representantes gubernamentales. Entre las demandas recientes de las mujeres se incluía, entre otras, la reanudación del IPRM de Gali, contribuyendo con su aproximación a la reactivación final del mecanismo. Al mismo tiempo, se identifican obstáculos a su participación, entre ellos, la limitada capacidad de impacto en las negociaciones de alto nivel, marcadas por el antagonismo político local, regional e internacional y la consiguiente politización de la gran mayoría de asuntos. El proceso negociador padece aún de un elevado sesgo de género y de la ausencia de figuras o mecanismos de género directos, así como una muy escasa participación de mujeres por la mayoría de actores, incluyendo partes en conflicto y mediadores.[6] Otra limitación es que los mecanismos de consultas abarcan solo a las mujeres residentes en territorio controlado por Georgia, incluyendo mujeres georgianas desplazadas de Abjasia y Osetia del Sur, pero no a organizaciones de Abjasia y Osetia del Sur, en un contexto de elevada politización.

Cabe destacar que durante 2016 Georgia aprobó su nuevo plan de acción (NAP) sobre las resoluciones de mujeres, paz y seguridad para 2016-2017,[7] en el que uno de los objetivos es alcanzar una mayor participación de las mujeres afectadas por los conflictos, mujeres desplazadas y otras organizaciones de la sociedad civil en la prevención y resolución del conflicto. El NAP aspira a lograr que tome en consideración y se aborde en las negociaciones oficiales las necesidades, prioridades y recomendaciones de las mujeres desplazadas y mujeres afectadas por el conflicto. Para ello se incluye el compromiso de implementar un mecanismo de diálogo regular entre los participantes gubernamentales en las GID y los IPRM y las organizaciones de mujeres y mujeres IDP y afectadas por los conflictos. En 2016 el Ministerio georgiano para los Desplazados internos aprobó también una estrategia de igualdad y un plan de acción 2016-2017, con presupuesto asignado, que contempla entre otros objetivos dar apoyo a la implementación de las resoluciones de la agenda de mujeres, paz y seguridad. Todo ello puede contribuir a un mayor énfasis en Georgia en torno a la integración de la dimensión de género en los esfuerzos de resolución del conflicto y la participación de las mujeres, pese a las limitaciones mencionadas.

En definitiva, pese a la persistente falta de avances en el proceso formal de negociaciones y la persistente confrontación y antagonismo local, regional e internacional en torno a los temas de fondo del conflicto, existen ventanas de oportunidad de construcción de confianza e impactos positivos en seguridad humana, a una escala más próxima a las realidades de las poblaciones afectadas por el conflicto, incluyendo las mujeres. Si bien la politización y confrontación a menudo alcanza también a las cuestiones de seguridad humana de las realidades diarias, los pasos positivos dados durante 2016 constituyen elementos positivos sobre los que seguir construyendo en próximos años. Todo ello no resta peso a las profundas dificultades que entraña la resolución global del conflicto en todas sus dimensiones.

5. Vasili Rukhadze, "Is Georgian-Abkhaz and Georgian-Ossetian Reconciliation Possible?", *Eurasia Daily Monitor,* Vol. 13, n.º 54, 18 de marzo de 2016.
6. En contraste con el resto de delegaciones negociadoras en las GID, la georgiana tiene un 30% de mujeres.
7. El anterior NAP abarcó el periodo 2012-2015. Para más información, véase http://www.peacewomen.org/nap-georgia.

5.5. Las negociaciones internacionales en 2017 sobre la prohibición de las armas nucleares: oportunidad histórica para un tratado

Las armas nucleares constituyen el único tipo de armamento de destrucción masiva que no está prohibido por ningún acuerdo legal internacional –solo existen prohibiciones parciales–, pese a los efectos devastadores que tienen estas armas para la vida humana, el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico, entre otras consecuencias,[1] incluyendo con dimensión de género.[2] Nueve países poseen armamento nuclear propio, siendo la mayor parte de las armas posesión de EEUU y Rusia.[3] Pese a que el Tratado de No Proliferación (TNP) (1968) obliga a negociaciones para el desarme nuclear (artículo VI), los avances han sido muy limitados, en contraste con el gasto masivo y los actuales programas de modernización nuclear. No obstante, se ha asistido recientemente a diversos pasos significativos encaminados a relanzar la agenda sobre el desarme nuclear, que han culminado durante 2016 en el compromiso de negociaciones en 2017 para lograr un tratado de prohibición de las armas nucleares. Pese a la negativa de los estados nucleares y de varias decenas de países más, y las presiones de las grandes potencias, se abre una oportunidad histórica para un instrumento legal vinculante, de la mano del amplio respaldo de estados y de otros actores políticos y sociales movilizados.

Los factores que explican la oportunidad creada son varios. Por una parte, el reciente *momentum* y expectativas sobre la necesidad de reimpulsar la agenda del desarme nuclear, de la mano de tres grandes cumbres celebradas en 2013 y 2014 (Noruega, México y Austria), centradas en los impactos humanitarios de las armas nucleares.[4] Por otra parte, la creciente preocupación de un amplio grupo de países y actores políticos y sociales ante la lentitud o escasez de avances en el desarme nuclear multilateral, mientras continúa el riesgo que suponen las armas nucleares. Así, por ejemplo la Conferencia de Revisión del TNP de 2015 terminó sin acuerdo para el documento final y fue considerada como un fracaso significativo. De fondo se reflejaba la división entre quienes defienden avanzar de manera tangible hacia un instrumento legal de prohibición de las nucleares y quienes defienden la vía de "paso a paso" o "progresiva", con flexibilidad y atención a las preocupaciones de los diferentes países y sin necesariamente calendarios, considerada una vía dilatoria y poco efectiva por parte de sectores pro-tratado. En esa cumbre, además de los fallidos resultados en el impulso a la agenda del desarme, se tumbó la iniciativa para avanzar en la declaración de Oriente Medio como zona libre de armas nucleares, reflejo de la geoestrategia y hegemonía de poder que rodea al debate.[5]

Ante el impulso del enfoque humanitario y la constatación de los fracasos multilaterales, en 2016 se produjeron avances tangibles de la mano del Grupo de Trabajo de la ONU de composición abierta para hacer avanzar las negociaciones multilaterales de desarme nuclear, establecido como resultado de la resolución 70/33 de la Asamblea General de diciembre de 2015).[6] Tras sus reuniones de febrero, mayo y agosto, su informe final recogió el apoyo de una "mayoría de estados" al "inicio de negociaciones en la Asamblea General en 2017, abiertas a todos los países, organizaciones internacionales y sociedad civil, que lleve a su eliminación total". 68 gobiernos participantes votaron a favor, 22 en contra y 13 se abstuvieron.[7] Estos 25 votos de rechazo o abstención correspondieron a países defensores de la vía gradual, y que fueron acusados por algunos países no nucleares de obstaculizar la consecución de un informe equilibrado.[8] Semanas después, el Primer Comité de la Asamblea General de la ONU –encargado de cuestiones relativas al desarme y la seguridad internacional– aprobó la resolución L.41, del 14 de octubre, que convoca una conferencia de Naciones Unidas en 2017 para negociar un instrumento legalmente vinculante para prohibir las armas nucleares y llevar a su eliminación total. En concreto, la resolución señala que la cumbre se celebrará del 27 al 31 de marzo y del 15 de junio al 7 de julio. Entre otros elementos, la resolución también aplaude el informe del Grupo de Trabajo y reconoce el valor de las contribuciones de las organizaciones internacionales y de sociedad civil en las negociaciones para el desarme nuclear. El texto llama a los estados a concluir lo antes posible el instrumento

1. Centre Delàs, "Por un tratado de prohibición de las armas nucleares", *Centre Delàs*, 20 de diciembre de 2013.
2. Para más información, véase la web del proyecto "Reaching Critical Will", de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF).
3. Los países con armas nucleares propias son: China, Corea del Norte, EEUU, Francia, India, Israel, Pakistán, Reino Unido y Rusia. Además, otros cinco acogen armas nucleares estadounidenses, y más de una veintena forman parte de alianzas con componente nuclear (principalmente, de la OTAN).
4. Entre otros resultados, en la Conferencia de Viena sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, de diciembre de 2014, se presentó el documento "Compromiso Humanitario", promovido por Austria, anfitriona de la cumbre. En enero de 2016 había recibido el apoyo de 127 países. En la cumbre, con expertos de diversos ámbitos, se subrayó que las consecuencias humanitarias de las armas nucleares eran mucho más graves de lo que hasta entonces se asumía
5. Las zonas libres de armas nucleares (ZLAN) son regiones en que los estados adoptan el compromiso de prohibir prohibir en sus respectivos territorios la investigación, diseño, desarrollo, ensayo, adquisición, emplazamiento y posesión de armas nucleares. Existen cinco ZLAN: América Latina (Tratado de Tlatelolco de 1967), Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga de 1985), Asia sudoriental (Tratado de Bangkok de 1995), África (Tratado de 1996 de Pelindaba) y Asia Central (zona libre de armas nucleares de Asia Central de 2006). A ello se añaden otros territorios libres de armas nucleares, incluyendo Antártida, el fondo del mar y el espacio exterior). Pese a las dificultades para aprobar una ZLAN en Oriente Medio, varias decenas de países de Oriente Medio han dado apoyo a la resolución 76/28 de la AGNU en que se invita a los países de la región a apoyar la creación de una ZLAN.
6. El trabajo del Grupo de Trabajo de la ONU de composición abierta para hacer avanzar las negociaciones multilaterales de desarme nuclear se ha apoyado también en trabajo realizado por mecanismos anteriores, como el Grupo de Trabajo para grupo de trabajo de composición abierta para desarrollar propuestas enfocadas al avance de las negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear con el objetivo de lograr y mantener un mundo sin armas nucleares (2013).
7. Asamblea General de la ONU, "Taking Forward multilateral nuclear disarmament negotiations". Nota del Secretario General, A/71/371, 1 de septiembre de 2016.
8. Melissa Hanham, 2016 "Open ended working group: towards 2017 nuclear weapon ban negotiations?", *Arms Control Wonk*, 13 de septiembre de 2016.

legalmente vinculante de prohibición de las armas nucleares y adopta el compromiso de que la conferencia presente un informe sobre los avances logrados en la 71ª sesión de la Asamblea General, que evaluará la situación y decidirá el camino a seguir. 123 países votaron a favor de la L.41 en el Primer Comité, 38 en contra y 16 se abstuvieron. Así, está prevista la aprobación de la resolución en sesión plenaria de la Asamblea General a finales de diciembre de 2016, lo que supone un hito histórico.

El informe del Grupo de Trabajo, que la L.41 respalda, planteaba como posibles elementos a contener en un instrumento vinculante: a) la prohibición de la adquisición, posesión, almacenamiento, desarrollo, pruebas y producción de armas nucleares; b) la prohibición de de participación en cualquier uso de armas nucleares, incluyendo a través de la participación en planificación sobre guerras nucleares, participación dirigida a armas nucleares y a formación de personal para controlar armamento nuclear; c) prohibición de permitir armas nucleares en territorio nacional, incluyendo barcos con armas nucleares en puertos y aguas territoriales, aviones con armas nucleares que entren en el espacio aéreo nacional, o armas nucleares que transiten por el territorio nuclear, o que sean estacionadas o desplegadas en territorio nacional; d) prohibición de financiar actividades de armamento nuclear o de proveer material especial de fisión a cualquier país que no aplique las medidas de seguridad de la OIEA; e) prohibición de asistir, promover o inducir, directa o indirectamente, cualquier actividad prohibida en el tratado; y f) reconocimiento de los derechos de las víctimas del uso y pruebas con armas nucleares y el compromiso de proporcionar asistencia a las víctimas y de reparación medioambiental.[9]

La propuesta mayoritaria para un tratado vinculante contenida en el informe del Grupo de Trabajo así como en la L.41 concibe la opción de un instrumento legalmente vinculante como una vía compatible con el TNP, aspirando a complementarlo, en aplicación del artículo VI del TNP. Así, busca desmontar la posición de los estados nucleares y de todos aquellos de la vía "paso a paso", que rechazan la opción de un tratado alegando que éste supondría un paso atrás al poner en peligro el TNP y otros mecanismos. Así, la L.41 reafirma la importancia del TNP y los compromisos que se derivan de éste.

Otro aspecto destacado de la vía que se abre hacia el horizonte de un tratado es que se plantea la estrategia de avanzar con una amplio respaldo de países aún sin consenso, dada la dificultad del apoyo inicial de los países nucleares y otros aliados de los nucleares. Al mismo tiempo se reconoce que un tratado solo sería efectivo con la participación de los estados con armas nucleares, y se aspira a que la estrategia de señalar y estigmatizar el uso y posesión de armas nucleares suponga un incentivo para que los países nucleares se unan en fases posteriores. En ese sentido, las propuestas del Grupo de Trabajo y actores de la sociedad civil dejan la puerta abierta a que las disposiciones sobre eliminación verificable del armamento nuclear pudieran acordarse en una etapa posterior con los estados con armas nucleares, sin que ello reste argumentos sobre la necesidad y oportunidad creada para impulsar negociaciones para un tratado y que éstas incluyan un programa gradual para la eliminación total de las armas nucleares dentro de un plazo específico.

Entre los obstáculos, las presiones ejercidas por los países nucleares, que ven amenazada su posición en un orden global cuestionado por los países no nucleares. Entre ellas, han trascendido las presiones diplomáticas de EEUU a sus aliados de la OTAN para que votasen en contra de la L.41., y no optasen meramente por la abstención, alegando que el impulso a las negociaciones para un tratado de eliminación de las armas nucleares entra en conflicto con las políticas de disuasión de la alianza militar.[10] Para los detractores, la disuasión nuclear constituye en sí un riesgo para la propia seguridad nacional de quienes la practican, por los riesgos devastadores que implican las armas nucleares. Entre los obstáculos, se señala también el amplio abanico de medidas de presión que países nucleares y aliados podrían desplegar contra los países favorables a un tratado, incluyendo medidas de presión económica.

Pese a las presiones contra un tratado, han aumentado también presiones parlamentarias y ciudadanas en sentido favorable o no obstruccionista, como en Holanda, Bélgica y Alemania, países en que hay desplegadas armas nucleares estadounidenses.[11] Y la perspectiva de negociaciones en 2017 puede ver ampliada por la movilización de la sociedad civil global organizada hacia una mayor presión local e internacional, canalizadas a través de actores como la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN). En ese sentido, organizaciones de todo el mundo continúan movilizadas y se prevé un incremento de la presión social en 2017.

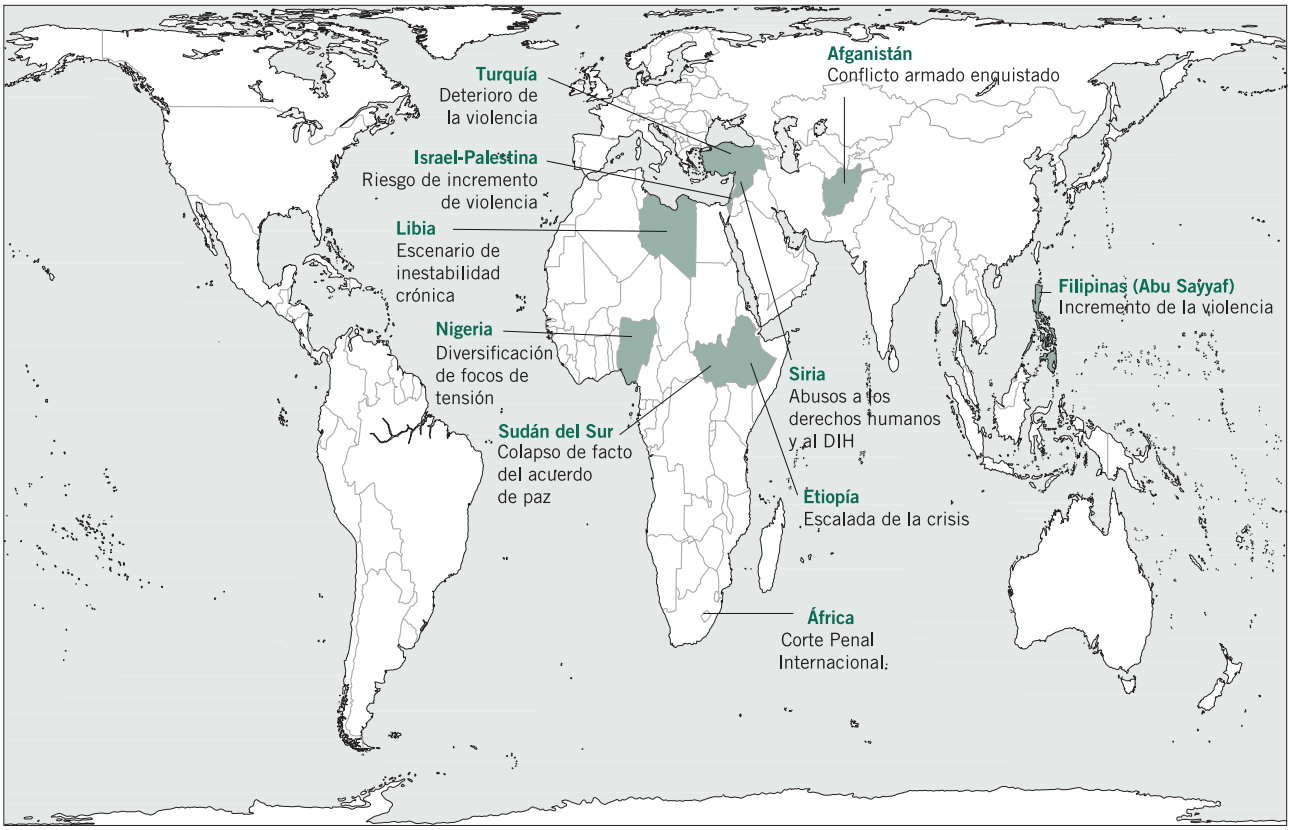
En definitiva, se abre una oportunidad histórica para avanzar hacia un tratado de eliminación de las armas nucleares, con la celebración en 2017 de una conferencia internacional, precedida por el respaldo de más de un centenar de países a una resolución en ese sentido del Primer Comité de la Asamblea General de la ONU, así como por el desencanto global con la falta de avances en el desarme multilateral hasta ahora, y la movilización de actores políticos y no gubernamentales. Las presiones de los países nucleares o su propio desentendimiento del proceso en marcha pueden restar eficacia a un instrumento legalmente vinculante, pero la presión global para la eliminación verificada de las armas nucleares –a favor de un mundo, por tanto, más seguro para todos los actores, desde todos los puntos de vista, de seguridad nacional y de seguridad humana– puede convertir la oportunidad creada en un escenario alcanzable.

9. Asamblea General de la ONU, "Taking Forward multilateral nuclear disarmament negotiations", Nota del Secretario General, A/71/371, 1 de septiembre de 2016.
10. ICAN, "US pressured NATO states to vote no to a ban", International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 1 de noviembre de 2016.
11. Xanthe Hall, "Under Pressure", *IPPNW Peace and Health Blog*, 3 de noviembre de 2016.

6. Escenarios de riesgo para 2017

A partir del análisis del año 2016 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial, la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo diez contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2017. Los escenarios de alerta de cara al año 2017 hacen referencia al incremento de la tensión en Etiopía, a la inestabilidad crónica en Libia que ha agravado la situación en el país, a los múltiples frente violentos que afectan a Nigeria, a las consecuencias del colapso de facto del acuerdo de paz en Sudán del Sur, al conflicto enquistado en Afganistán y sus graves impactos en la población civil, al incremento de la violencia y la creciente presencia de ISIS en la región filipina de Mindanao, al deterioro de la cuestión kurda en Turquía y la multiplicación de los frentes de guerra, a la agonía de la solución de dos Estados para el conflicto palestino israelí y el riesgo de mayor violencia cuando se cumplen 50 años de la ocupación de Gaza y Cisjordania, a la retirada de países africanos de la Corte Penal Internacional y a Siria como ejemplo del fracaso en la protección de civiles en contextos de conflicto armado.

Mapa 6.1. Escenarios de riesgo para 2017



6.1. El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias

El milagro económico de Etiopía durante la última década se está viendo oscurecido por la peor crisis política y social de los últimos años. El país ha sufrido una oleada de protestas contra el régimen que han sido reprimidas con extrema dureza por parte de los cuerpos de seguridad y que podría haber causado un millar de víctimas mortales durante el último año.[1] El decreto en octubre del estado de emergencia por un periodo de seis meses para intentar aplacar las protestas en un inicio limitadas a la región de Oromiya y, posteriormente, ampliadas al conjunto del país, pone de manifiesto esta situación de grave crisis. El Gobierno está incentivando el deterioro de la situación con la represión de las protestas, que contribuyen al estallido de los agravios acumulados entre las diferentes comunidades del país y que tienen sus raíces en el devenir autoritario del Estado desde 1991 y la preeminencia del partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF).

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 enfrenta a una serie movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, el respeto por las minorías religiosas, el fin de la pobreza y la corrupción, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido TPLF de la minoría tigray, que rige el país con un creciente autoritarismo y hasta ahora con el beneplácito de las élites amhara. Así, existen importantes grupos sociales críticos con la evolución del Gobierno que exigen la apertura del espacio político y avances en la democracia en el país, y también críticos con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional. El mapa político del país no refleja la diversidad y la importancia de las más de 80 etnias que forman el país, ya que Etiopía está dividida en nueve regiones administrativas de base étnica y dos ciudades con estatuto especial (la capital, Addis Abeba, y Dire Dawa). Todo ello ha contribuido a alimentar la consolidación de una fuerte oposición política y social. Además, hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales, como los movimientos insurgentes de la región de Oromiya y de Ogadén, mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico como un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones.

Las elecciones de 2005 supusieron un reto para el EPRDF, renuente a la competencia multipartidista, ya que reprimió con dureza las protestas postelectorales ante unos resultados cuestionados por la oposición política, que fue perseguida y encarcelada, lo que prácticamente cerró las puertas a la apertura del sistema político del país hacia una democracia plural. El cierre de esta ventana de esperanza en 2005 se consolidó en las siguientes elecciones (un escaño para la oposición en 2010 y ninguno en 2015, frente a los 172 obtenidos en 2005), incrementando el control y la presión sobre los medios de comunicación y la verticalidad del régimen, y utilizando la ley antiterrorista de 2009 para diezmar a la oposición política. En este sentido, las elecciones parlamentarias de mayo de 2015 ratificaron esta evolución. Fueron los quintos comicios desde la caída de Mengistu Haile Mariam en 1991 y los primeros desde la muerte del histórico líder y primer ministro del país en 2012, Meles Zenawi, tras la cual se habían abierto interrogantes sobre la evolución política del país. Sin embargo, el EPRDF y sus aliados acabaron con cualquier esperanza, al obtener todos los escaños del Parlamento, incluyendo el único escaño que obtuvo la oposición en 2010, del partido Unidad por la Democracia y la Justicia (UJD), que en las actuales elecciones se integró en la coalición Medrek. 58 partidos se habían registrado para participar en estas elecciones, de los que realmente sólo Medrek y Semawayi (Partido Azul) representaban una oposición real. Aunque la UA declaró que las elecciones eran creíbles, la oposición y organizaciones de derechos humanos constataron que decenas de políticos y simpatizantes de partidos opositores habrían sido amenazados, agredidos y detenidos por la Policía, lo que contribuyó a incrementar el rechazo hacia el Gobierno.

En paralelo, en abril de 2014 se hizo público el Plan de Desarrollo Integrado de Addis Abeba y de la Zona Colindante Especial de Oromiya (Addis Abeba Master Plan), que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, que pasarían a formar parte de ella. La capital etíope está situada en la región de Oromiya, que también aloja la sede del gobierno regional. El Master Plan pretendía atraer nuevas industrias, conducir el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad, consolidarla como centro económico y político, y hacerla internacionalmente competitiva. Sin embargo, el proyecto provocó numerosas críticas por su impacto en la región de Oromiya, porque marginaba al pueblo oromo en la participación y diseño del plan y porque numerosas localidades de los alrededores de Addis se habrían visto afectadas sin ser compensadas. Ya desde un primer momento generó importantes protestas, coincidiendo con la visita del por entonces secretario de Estado de EEUU John Kerry, que fueron reprimidas con un saldo de una decena de muertes. En noviembre de 2015 las protestas iniciadas por estudiantes y agricultores se reavivaron y la represión policial causó la muerte de 75 personas. Como consecuencia de ello, en enero de 2016 la filial política en la región de la coalición EPRDF anunció el abandono del Master Plan[2] tras haber mantenido conversaciones con la población local, argumentando que sentía un gran respeto por la población oromo opuesta al plan, la existencia de un malentendido como consecuencia de la ausencia de transparencia y minimizando las razones de la oposición. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales ya ascendía a 140, según señaló Human Rights Watch, organización que en junio de 2016 elevó a 400 las víctimas mortales de la represión gubernamental.[3]

1. Véase Armed Conflict Location & Event Dataset (ACLED), Ethiopia – November 2016 Update.
2. Endalk Chala, "Ethiopia scraps Addis Ababa 'master plan' after protests kill 140", *The Guardian*, 14 de enero de 2016.
3. Human Rights Watch, "Such a Brutal Crackdown:" Killings and Arrests in Response to Ethiopia's Oromo Protests", *Human Rights Watch*, junio de 2016.

Por otra parte, en los últimos tiempos se han producido movimientos para forjar alianzas por parte de algunos grupos insurgentes activos desde hace décadas en sus respectivas regiones (como la insurgencia ogadeni del ONLF o la oromo del OLF, principalmente). Así, en 2015 se creó un movimiento unitario de fuerzas con presencia dentro y fuera de Etiopía con el objetivo de coordinar sus actividades político-militares para poner fin al régimen etíope y garantizar el derecho a la autodeterminación. El 23 de octubre de 2015 cinco movimientos político-militares opuestos al Gobierno anunciaron la formación de la People's Alliance for Freedom and Democracy (PAFD). Esta coalición engloba el Gambella People Liberation Movement (GPLM), el Ogaden National Liberation Front (ONLF), el Oromo Liberation Front (OLF), el Benshangul People Liberation Movement (BPLM) y el Sidama National Liberation Front (SNLF). En marzo de 2016 el PAFD celebró su primer congreso en Asmara (Eritrea),[4] aunque por el momento no hay constancia de que se hayan llevado a cabo acciones militares conjuntas y se desconoce el alcance real de estas confluencias. No obstante, como muestra de este clima de creciente tensión, durante 2016 también se configuró un nuevo grupo armado, el Arbegnoch Ginbot 7 for Unity and Democratic Movement (AGUDM), que en julio cometió su primera acción bélica en el estado de Tigray, causando la muerte de 50 personas, confirmadas por el propio Gobierno. El AGUDM tiene sus raíces en el partido político Ginbot 7, declarado grupo terrorista en junio de 2011 junto al ONLF y al OLF, en el marco de la cuestionada ley antiterrorista.

A este clima de tensión se añadió durante el 2016 la extensión de las protestas a otras regiones del país, principalmente a la región de Amhara, y posteriormente la comunidad afar. El detonante tuvo lugar en la localidad de Gondar (noroeste), en julio, como consecuencia de la decisión del Gobierno de intentar detener al líder de la comunidad wolkayit (región de Tigray) acusado de asesinato, secuestro y colaboración con el régimen eritreo. La comunidad wolkayit pretendía que el distrito Wolkayit pasara a formar parte de la región de Amhara, ya que en 1994 este distrito fue transferido a la región de Tigray. Esta decisión gubernamental desencadenó importantes protestas en la vecina región de Amhara que se ampliaron y se sumaron a las de otras zonas, como Oromiya y Ogadén. Las protestas y el estallido de violencia se focalizó en parte hacia la comunidad tigray, que a pesar de ser minoritaria, controla el Gobierno y las Fuerzas Armadas. El partido TPLF es el núcleo de la coalición en el poder, desde donde ha favorecido a la comunidad tigray en detrimento del resto.

Por otra parte, el Gobierno, en una decisión sin precedentes desde 1991 y que pone de manifiesto la gravedad de la situación y la voluntad de mantener un férreo control en el país, decretó en octubre el estado de emergencia por un periodo de seis meses para intentar aplacar las protestas. No obstante, lejos de reducirse, la violencia ha aumentado, ya que el mes de octubre ha sido el más violento desde que se iniciaran las protestas en Oromiya en noviembre de 2015. Además, el Gobierno ha interrumpido en diversas ocasiones durante el año el acceso a internet, por ser uno de los motores de difusión de los movimientos sociales de las actividades e informaciones antigubernamentales a través de las redes sociales. Aunque la mayoría de protestas durante el año han sido pacíficas, la represión indiscriminada, el cierre de medios de comunicación, la presión y detención de periodistas y opositores políticos puede contribuir a un incremento de la violencia y a una respuesta armada por parte de la población civil. A todo esto se añade la retirada de parte de las tropas etíopes presentes en Somalia, cuestión que diversos analistas han achacado a un intento de reforzar las acciones para sofocar la crisis interna, a lo que Etiopía ha aducido que se debía a la falta de apoyo internacional.

Según la organización Committee to Protect Journalists (CPJ), Etiopía ha ocupado en 2014 y 2015 el cuarto lugar a nivel mundial –el segundo país africano tras Eritrea– como país más represor de los medios de comunicación.[5] A mediados de noviembre fuentes gubernamentales anunciaron que 11.607 personas habían sido detenidas desde el establecimiento del estado de emergencia,[6] e incluso se impuso la prohibición de viajar fuera de la capital a las delegaciones diplomáticas presentes en el país, medida que a principios de noviembre fue retirada argumentando la mejora de la situación.[7] La preocupación de organizaciones no gubernamentales y de instituciones internacionales ante la situación y las presiones de la comunidad internacional y de inversores extranjeros han contribuido a que el Gobierno haya llevado a cabo algunas limitadas concesiones a la oposición, como la remodelación del Gobierno sustituyendo a algunos de los más impopulares ministros y asignando a miembros de la comunidad oromo algunos puestos relevantes como el Ministerio de Exteriores y el de Comunicación.

El Gobierno etíope decretó en octubre el estado de emergencia, en una decisión sin precedentes desde 1991 y que pone de manifiesto la gravedad de la situación en el país

Sin embargo, estas limitadas concesiones podrían no tener ningún efecto sobre las protestas, ya que se ha implantado un clima de rechazo e incluso racismo hacia la comunidad tigray, vista como responsable de la represión por su vinculación con el TPLF. Las graves protestas ponen de manifiesto la fragilidad del contrato social entre las élites y la población del país, descontenta con años de corrupción, con un sistema político autoritario, por la exclusión de amplios franjas de población del supuesto milagro económico etíope, por lo que las ansiadas reformas políticas puede que sean insuficientes y que estén llegando demasiado tarde.

4. Oromo Liberation Front, "Resolution of the first Congress of Peoples' Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)", *Oromo Liberation Front,* 25 de marzo de 2016.
5. Committee to Protect Journalists, "Ethiopian newspaper editor, bloggers caught in worsening crackdown", *Committee to Protect Journalists,* 17 de noviembre de 2016.
6. Al-Jazeera and Agencies, "Ethiopia state of emergency arrests top 11,000", *Al-Jazeera*, 13 de noviembre de 2016.
7. BBC News, "Ethiopia's diplomatic travel ban ends as 'peace restored'", *BBC*, 8 de noviembre de 2016.

6.2. Libia ante un escenario de inestabilidad crónica

Libia inició 2016 con un nuevo marco político. El acuerdo suscrito en Skhirat (Marruecos) en diciembre de 2015 bajo los auspicios de la ONU pretendía abordar la situación de fragmentación institucional y violencia en el país norteafricano, escenario de una accidentada transición desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi (2011) y de una creciente confrontación entre polos de poder, en especial desde mediados de 2014. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos en 2016 ha confirmado las dudas expresadas por los más escépticos sobre la fragilidad del acuerdo y ha puesto de relieve los complejos retos que debe afrontar Libia para avanzar hacia un futuro de paz y estabilidad. Un desafío en el que confluyen una persistente polarización política, un explosivo panorama de seguridad producto de un atomizado y activo abanico de actores armados –entre ellos ISIS–, una aproximación internacional condicionada por intereses y prioridades a menudo disonantes, y una situación de deterioro económico, humanitario y de crónicas violaciones a los derechos humanos. Este conjunto de factores puede derivar en un agravamiento de la situación en el país en 2017 con serias repercusiones a nivel interno y regional, confirmando la etiqueta que en los últimos años ha señalado a Libia como epicentro de inestabilidad en el norte de África.

Desde un principio, el acuerdo de Skhirat despertó interrogantes sobre su viabilidad y capacidad para revertir las dinámicas de división instaladas en el país. En un contexto de preocupación occidental por el fortalecimiento de ISIS en Libia y por los flujos de personas refugiadas hacia Europa, a finales de 2015 se intensificaron las presiones internacionales para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el pacto resultante fue considerado como apresurado y falto de un consenso sólido –actores clave no dieron su apoyo a la iniciativa– y diversas voces alertaron sobre el riesgo de que configurara un tercer polo de poder, en un contexto ya caracterizado por la pugna de legitimidades entre instituciones establecidas en Trípoli y Tobruk/Al-Bayda (este). El acuerdo definió la creación de un Consejo Presidencial de nueve miembros –encabezado por Fajez Sarraj, considerado como el futuro primer ministro– y responsable de la conformación de un Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN). El acuerdo y este gobierno de unidad debían ser aprobados –en teoría en el plazo de un mes– por la Cámara de Representantes (CdR) con sede en Tobruk, considerada como el único cuerpo legislativo válido. Hasta entonces, esta cámara y su gobierno asociado habían sido reconocidos a nivel internacional, al menos formalmente, como las autoridades legítimas de Libia. Adicionalmente, el acuerdo de Skhirat dispuso la creación de un Alto Consejo de Estado, de carácter consultivo, integrado en su mayoría por ex integrantes del Congreso Nacional General (CNG), el legislativo que precedió a la CdR y que se mantuvo operativo en Trípoli en medio de la disputa de legitimidad entre ambas instituciones tras las elecciones de junio de 2014.

En la práctica, sin embargo, el acuerdo ha enfrentado un sinnúmero de dificultades para su implementación, fruto de diferencias de fondo –en especial en materia de seguridad, competencias institucionales y designación de altos cargos– y de procedimiento, en un trasfondo de desconfianzas, luchas de poder y pugnas tribales. Así, en los primeros meses de 2016 Sarraj ni siquiera pudo establecerse en Libia ante la inseguridad y amenazas de diversos actores. No fue hasta finales de marzo que el líder del Consejo Presidencial y varios de sus integrantes llegaron a Trípoli por mar y se instalaron en una base naval con la intención de desarrollar sus funciones y consolidarse como autoridad desde la capital del país. Un propósito que a finales de 2016 el Consejo no había conseguido dada su limitada capacidad para controlar el territorio y las escasas fuerzas de seguridad bajo su mando, lo que le ha obligado a confiar en la colaboración de algunas milicias. La CdR, en tanto, se ha negado a aprobar el gabinete propuesto por Sarraj y en agosto emitió un voto de no confianza al gobierno de unidad. Desde el este del país han observado con desconfianza la aproximación del Consejo Presidencial a algunos grupos armados, como los de Misrata, y recelan de la instalación de un gobierno que vuelva a controlar los destinos del país desde Trípoli sin tener en cuenta sus aspiraciones de descentralización.[1] A esto se suma el factor Khalifa Hifter. El ex general, líder del llamado Ejército Nacional de Libia y actor clave en la provincia de Cirenaica (este) se ha posicionado en contra del pacto de Skhirat al verse marginado de los acuerdos de seguridad y ha utilizado sus influencias para alimentar la posición reticente de la CdR. Así, a finales de 2016 el panorama en Libia se caracterizaba por la duplicación de estructuras institucionales y múltiples disfuncionalidades. Ante el bloqueo por la falta de apoyo de la CdR, Sarraj ha promovido que el gobierno de unidad opere de facto en una situación de provisionalidad, mientras que el "gobierno interino" próximo a la CdR instalado en Al-Bayda ha seguido ejerciendo su autoridad en la zona este del país. En Trípoli sectores del GNC aceptaron reconvertirse en el Alto Consejo de Estado, pero otros miembros del llamado "gobierno de salvación nacional" pretendían seguir manteniendo su influencia. El propio Consejo Presidencial funcionó durante 2016 de manera parcial ante el boicot de algunos de sus integrantes. La pugna es ahora, destacan algunos analistas, no entre dos campos o gobiernos sino entre decenas de rivales políticos.[2]

Paralelamente, no se pusieron en marcha acuerdos de seguridad y la situación continuaba siendo extremadamente frágil. En un país donde el número de armas triplica al de habitantes (según estimaciones, existen en Libia 20 millones de armas para una población de 6,5 millones de habitantes), una miríada de grupos armados y milicias con diversidad de lealtades e intereses continuó protagonizando enfrentamientos y disputas en todo el territorio, en especial en Trípoli, Bengazi y Sirte, apostando por asentar su poderío por la fuerza. Así, por ejemplo, en septiembre las fuerzas del general Hifter avanzaron posiciones en el "creciente petrolero" y tomaron el control de varios puertos, hasta entonces en manos de una milicia (Petroleum Facilities Guard) que tan solo meses antes había llegado a un acuerdo con el Consejo Presidencial. En este contexto, no se descartaban nuevos enfrentamientos en esta zona; en caso de que las fuerzas de Hifter avancen hacia el oeste o sur del país; o si los actores armados empoderados en el marco de la

1. International Crisis Group, *The Libyan Political Agreement: Time for a Reset*, Middle East and North Africa Report no.170, 4 de noviembre de 2016.
2. Arturo Varvelli, "Is International Diplomacy Overcoming the Deadlock in Libya? Future Scenarios", *IEMed Mediterranean Yearbook,* 2016.

campaña contra ISIS en Sirte deciden avanzar hacia el este.

Y es que la situación de seguridad en 2016 también ha estado marcada por los intentos de erradicar a ISIS, que registra una mayor presencia en el territorio libio desde mediados de 2015. Un conjunto de grupos armados presuntamente leales al gobierno de unidad lanzó la operación Bunyan Marsus, con apoyo de EEUU y otros países occidentales y hacia finales de año se anunciaba la expulsión de ISIS de su principal bastión, Sirte. Este hecho supuso un evidente golpe al grupo armado y sus ambiciones de expandir el "califato" en el norte de África, más allá de las posiciones del grupo armado en Iraq y Siria. No obstante, voces expertas han coincidido en advertir que la caída de ISIS en Sirte no equivale al fin del grupo armado en Libia, ya que combatientes del grupo pueden continuar aprovechando el vacío político y la inestabilidad para reorganizarse y volver a operar en células más reducidas desde otros puntos del país o desde países vecinos.[3] Más aun teniendo en cuenta que ISIS en Libia ha actuado como base de apoyo de filiales de ISIS en el norte de África como el ex Ansar Beit al-Maqdis (Egipto) o Jund al-Khilafa (Túnez). Según estimaciones a diciembre de 2016, centenares de miembros de ISIS permanecían en distintos puntos de Libia y podían sacar provecho de las redes de apoyo de otros grupos yihadistas como Ansar al-Sharia o AQMI. Además, según informes recientes de la ONU, AQMI –y sus grupos afiliados– también ha conseguido consolidar su presencia en el sur de Libia, continuaba usando el país como base logística para procurarse armas y municiones y ha asumido una posición más activa de propaganda de sus acciones y mensajes en toda la región, incluyendo en Libia.

Si bien la actuación de actores foráneos en Libia no es un fenómeno nuevo, la implicación de potencias externas se hizo más explícita en 2016. Esto fue patente en la presencia de fuerzas especiales de países como Reino Unido, Francia y también de EEUU, que inició una campaña aérea contra ISIS con la anuencia del gobierno de unidad en funciones. Esta intervención ha estado directamente vinculada con las prioridades de Occidente en materia de lucha antiterrorista y control de flujos migratorios, y ha supuesto también un respaldo al gobierno promovido por Serraj a pesar de su falta de ratificación por la CdR, ante la necesidad de contar con una autoridad local que dé luz verde a la intervención. Países como Egipto, EAU y Rusia, en cambio, han asumido una posición más próxima a Hifter –también apoyado por Francia–, subrayando la necesidad de respetar los procedimientos establecidos en el acuerdo (como la ratificación del gobierno por la CdR) y mostrándose preocupados por la posible influencia de sectores islamistas en el entorno de Sarraj.[4] Hifter, de hecho, ha sido crecientemente retratado como el "hombre de Moscú" en Libia, en el marco de una posible alianza de largo plazo que permitiría a Rusia situarse de manera estratégica en el Mediterráneo central y asegurar contratos en el sector petrolero y de armas.[5] Tanto Rusia como Egipto y EAU se han mostrado partidarios de permitir la provisión de armas a las fuerzas de Hifter a través de una flexibilización del embargo de armas (un embargo que, según la ONU, ha sido transgredido por diversos países, entre ellos EAU, Turquía, Egipto y compañías estadounidenses). En este escenario de prioridades e intereses diversos, existe el riesgo de que por un lado los actores libios se muestren menos dispuestos a hacer concesiones por tener la sensación de contar con apoyos externos y, por otro, de que las tensiones geoestratégicas internacionales se proyecten aún más en Libia. Teniendo en cuenta los precedentes de la OTAN en Libia –su intervención en 2011 excedió el mandato de la ONU y derivó en un apoyo a la campaña contra el régimen de Gaddafi– y en un contexto de tensiones por Ucrania y Siria, Moscú ya se ha mostrado contrario a que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice una nueva intervención de la organización atlántica en el país norteafricano.[6]

Las dinámicas de violencia y fragmentación amenazan con consolidar a Libia como foco de inestabilidad en el Mediterráneo central

A toda esta complejidad en el ámbito político y de seguridad se suma el deterioro de la situación económica, humanitaria y de derechos humanos en el país, que podría seguir agravándose en 2017. Según datos de la misión de la ONU en Libia (UNSMIL), se esperaba que el déficit fiscal alcanzara el 69%. La falta de acceso del Consejo Presidencial a recursos financieros también limitó su capacidad de proveer servicios básicos, generando malestar y protestas. El número de personas desplazadas internas seguía siendo elevado, con más de 300.000 personas. Adicionalmente, los diversos actores armados continuaron perpetrando numerosos abusos con total impunidad, incluyendo asesinatos, ataques indiscriminados en zonas civiles, secuestros, torturas y detenciones arbitrarias. Entre las víctimas también se contabilizaron personas migrantes y refugiadas, retenidas arbitrariamente en centros controlados por las autoridades, grupos armados o redes de trata y sometidas a múltiples abusos, incluyendo violencia sexual. Pese a los riesgos y ante el bloqueo de la ruta oriental debido a las políticas de cierre de fronteras de la Unión Europea, miles de personas han seguido optando por la ruta central del Mediterráneo. En 2016 más de 100.000 personas habían llegado a las costas de Italia, en su mayoría desde las costas de Libia, y hasta diciembre más de 3.000 habían muerto en el intento de cruzar por esta vía central (es decir, la gran mayoría de las más de 4.000 que se estimaba fallecieron en el Mediterráneo en 2016).

Este conjunto de factores, por tanto, deja patente la urgencia de que los actores locales e internacionales multipliquen los esfuerzos para favorecer la reducción de la violencia en Libia. En esta línea, algunos análisis han sugerido la necesidad de revisar el acuerdo de Skhirat para garantizar la implicación de actores clave y han resaltado la necesidad de no subestimar el potencial papel de las tribus para contribuir a resolver la crisis política y de seguridad. La tarea es sin duda ingente, pero la alternativa es que continúen las dinámicas de inestabilidad y fragmentación que amenazan con consolidar a Libia como foco de inestabilidad en el Mediterráneo central.

3. Eric Schmitt, "ISIS Remains Threat in Libya Despite Defeat in Surt", *The New York Times*, 8 de diciembre de 2016, Sudarsan Raghavan, "Islamic State loses its stronghold in Libya, but more chaos could soon follow", *The Washington Post*, 7 de diciembre de 2016.
4. International Crisis Group, op.cit.
5. Tarek Megeresi y Mattia Toaldo, "Russia in Libya, A Driver of Escalation?", *Sada*, 8 de diciembre de 2016.
6. Moncef Djaziri, "La nueva estrategia de la OTAN en Libia", *Afkar/Ideas*, otoño de 2016.

6.3. Los múltiples frentes violentos y el aumento de la desestabilización en Nigeria

La proliferación de tensiones políticas, de movimientos armados y de la violencia intercomunitaria en varias regiones del país (norte, centro y sur) está generando una situación de grave deterioro de la seguridad en Nigeria que amenaza su estabilidad. Desde mayo de 2011 y hasta noviembre de 2016, según datos registrados por el Nigeria Security Tracker (NST)[1], en el país se habían registrado un total de 49.261 muertes violentas, de las cuales, 5.838 corresponden a muertes producidas durante el año 2016 (sin contabilizar diciembre). Si bien las muertes violentas ocasionadas durante el presente año han sido inferiores que las contabilizadas en cada uno de los tres años anteriores, éstas han sido generadas por un mayor número de situaciones de conflictividad, no concentrándose principalmente –como ocurría en años previos– en la violencia ejercida por el grupo armado Boko Haram en el norte del país. Durante este último año, Nigeria ha visto como otras crisis han vuelto a emerger en el país, diversificando los focos de inestabilidad: la intensificación de los enfrentamientos intercomunitarios entre grupos pastoralistas y agricultores en la región central del país; el reinicio de la violencia armada en la región petrolífera del Delta del Níger; el aumento de las tensiones políticas generadas en la histórica región sureña de Biafra; o el incremento de la tensión entre el Estado nigeriano y el Movimiento Islámico de Nigeria (IMN, por sus siglas en inglés), de orientación chií, en los estados norteños de Kaduna, Kano y Bauchi.

La llegada del presidente Muhammadu Buhari, tras su victoria electoral en marzo de 2015, significó la derrota del partido Peoples Democratic Party, en el poder durante 16 años, y sirvió para focalizar los esfuerzos gubernamentales en la implementación de reformas para aumentar la efectividad militar en sus esfuerzos de contrainsurgencia contra Boko Haram, quien durante los años 2014 y 2015 desarrolló una intensa actividad militar que puso en jaque a las fuerzas de seguridad. Esta estrategia de contención de la insurgencia ha dado sus frutos durante el 2016, donde el Estado nigeriano, junto a los países vecinos (Benín, Níger, Chad y Camerún) a través de la implementación de la fuerza militar conjunta regional (MNJTF), han logrado arrebatar importantes franjas de territorio a la insurgencia dirigida por Abubakar Sekau y reducir significativamente su capacidad e impacto en la región. En el año 2014, según el informe del Institute for Economics and Peace, 2015 Global Terrorism Index, Boko Haram se erigía como el grupo armado más letal, con un balance de 6.644 muertes –superando las 6.073 registradas por parte de ISIS–.[2] En el 2015, y según el NST, se documentaron un total de 4.440 muertes directas producidas por Boko Haram, además de 3.970 generadas en enfrentamientos directos entre la milicia y las Fuerzas Armadas. Estas cifras se redujeron aún más en 2016, con un balance hasta el mes de diciembre de 549 muertes, a las que habría que añadir 1.004 muertes en enfrentamientos directos. La estrategia militar también ha logrado generar divisiones en el movimiento, que lo ha llevado a pugnas internas por el liderazgo entre Sekau y el jeque Abu Musab al-Barnawi.

Ahora bien, el éxito obtenido hasta la fecha con el despliegue de la MNJTF, se ha visto ensombrecido por los datos sobre la situación humanitaria en las regiones del conflicto, en donde según declaraciones de la ONU realizadas en el mes de septiembre, existe un elevado riesgo de que la región del Lago Chad afectada por la violencia se convirtiese en una de las peores crisis humanitarias del mundo si no recibía ayuda de manera urgente, existiendo en la actualidad más de seis millones de personas en graves condiciones de inseguridad alimentaria, de las cuales 568.000 se hayan gravemente desnutridas. A su vez, otros dos aspectos ensombrecen los avances logrados en el combate a Boko Haram: por un lado, el estallido o incremento de diversos frentes de inestabilidad en varias partes del país; y por otro, las constantes denuncias de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad nigerianas. De hecho, una gran parte de la violencia que se extiende en la actualidad por el país, deviene de manera directa como respuesta a la violencia ejercida por el Estado nigeriano durante décadas y que persiste hoy en día.

Tras más de 33 años de dictaduras militares, la vuelta en 1999 del poder a manos civiles no ha logrado contener los abusos de las fuerzas de seguridad ni mejorar la situación de exclusión social, marginación y agravios generados en varias partes del país, lo que ha conducido a un aumento de las tensiones y de las disputas que se ha traducido en la diversificación actual de los focos de violencia. El papel de las Fuerzas Armadas y policiales en la represión de grupos y comunidades opositoras y disidentes, mediante asesinatos masivos, detenciones indiscriminadas, vulneración de derechos o ejecuciones extrajudiciales, ha sido uno de los elementos que ha contribuido significativamente a detonar el estallido de la violencia en varios puntos del país, contribuyendo a la radicalización de diferentes movimientos. Según datos del NST, desde mayo de 2011, las fuerzas de seguridad del Estado han sido responsables de 6.749 muertes, la mayoría de ellas civiles, sin contabilizar las muertes causadas por enfrentamientos directos con Boko Haram, los cuales suman otras 13.477 víctimas mortales. La ONG Amnistía Internacional ha denunciado al respecto y en diferentes ocasiones, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en diferentes regiones del país. En 2015 Amnistía Internacional denunció que las fuerzas armadas cometieron crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad en su respuesta a la insurgencia de Boko Haram entre los años 2011 y 2015, periodo en el cual alrededor de 7.000 hombres y menores habrían resultado muertos cuando se encontraban bajo detención militar.[3] Durante

1. Council on Foreign Relations, "*The Nigeria Security Tracker*", diciembre 2016
2. The Institute for Economics and Peace, *2015 Global Terrorism Index*, noviembre de 2015.
3. Amnesty International, *Stars on their shoulders. Blood on their hands. War crimes committed by the Nigerian military*, junio de 2015.

el año 2016, Amnistía Internacional volvía a denunciar que las fuerzas de seguridad habían sido responsables del desarrollo de una escalofriante campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales contra el movimiento pro-Biafra IPOB (Indigenous People of Biafra), que costó la vida de al menos 150 manifestantes pacíficos en la parte sureste del país, quienes reivindicaban el día de Biafra y exigían al Gobierno federal la liberación de su líder Nnamdi Kanu, detenido desde el 14 de octubre de 2015.[4] Diferentes grupos locales e internacionales de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch, también han denunciado los abusos cometidos por el Ejército nigeriano contra musulmanes chiitas, vinculados al IMN, en Zaria, estado de Kaduna, donde en el mes de diciembre de 2015, perdieron la vida alrededor de 300 personas. En estos hechos, producidos durante los días 12 y 14 como consecuencia de un supuesto intento de asesinato del jefe del Ejército nigeriano, General Tukur Buratai, fue arrestado el líder del IMN, Shaykh Ibrahim El-Zakzaky, quien se mantiene en prisión.

La actual situación de violencia y represión del aparato del Estado frente a miembros del IMN o de los movimientos biafreños, así como la detención de sus líderes, se asemeja bastante a lo acontecido en el norte de Nigeria en 2009, que dio como resultado la radicalización de Boko Haram. La violencia en los estados norteños emergió de manera extrema luego de la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad contra el movimiento de Boko Haram en julio del 2009, que se saldó con la muerte de entre 400 y 800 personas en una semana de enfrentamientos en los estados de Borno, Yobe y Kano, y la detención y posterior ejecución en dependencias policiales de Mohammed Yussuf, el entonces líder de Boko Haram. El líder espiritual islámico de Nigeria, el sultán de Sokoto, y a raíz de la violencia contra miembros del IMN y de la detención de Zakzaky, advirtió que las acciones del Ejército podrían provocar una nueva insurgencia en el país. De hecho, a principios de diciembre de 2016, ha sido el propio gobernador del estado norteño de Kaduna, Nasiru El-Rufa'i, quien ha declarado oficialmente al IMN como grupo insurgente. Ello ha conllevado la condena de la organización nigeriana Muslim Rights Concern, advirtiendo que la declaración entra en una peligrosa dimensión y que la criminalización del IMN puede llevar a una espiral de radicalización similar a la acontecida con Boko Haram.[5]

A su vez, también las políticas de exclusión, marginación y agravios han acentuado otras tensiones y disputas ya existentes en el país. En el caso del reinicio de la lucha armada en el Delta del Níger, que había logrado una reducción muy significativa de la violencia desde el decreto de la ley de amnistía en 2009 y la aplicación de los programas de DDR, la llegada de Buhari al poder y el anuncio del fin de los programas, ha traído como consecuencia la vuelta de la violencia y los sabotajes contra intereses petrolíferos. Durante junio, el impacto de las acciones perpetradas por parte de los diferentes grupos armados que operan en la zona –el más importante de ellos los Vengadores del Delta del Níger (Niger Delta Avengers -NDA) – redujeron la producción de crudo y de energía eléctrica a la mitad, afectando gravemente a la economía nacional y dando una muestra del impacto de la rebelión en el país. A su vez, y además del rebrote de la violencia en el Delta, las fricciones intercomunitarias en las regiones centrales del país –alimentadas a razón del llamado derecho a la indigenidad[6] entre etnias consideradas autóctonas frente a las foráneas (hausa-fulani) – han estallado de manera dramática a partir del 2014, año en el cual los ataques de militantes fulani se saldaron con 1.229 víctimas mortales, en comparación con las 63 registradas un año antes. A partir del 2015 la violencia ha disminuido, pero se mantiene presente en el llamado "Middle Belt".

El papel de las fuerzas de seguridad en la represión de grupos y comunidades opositoras y disidentes ha sido un factor clave que ha contribuido significativamente al estallido de la violencia en varios puntos de Nigeria, favoreciendo a la radicalización de diferentes movimientos

Si bien Nigeria ha logrado importantes avances en su lucha contra la insurgencia de Boko Haram en el norte del país, otros importantes retos de seguridad se han intensificado sobre todo en el sureste, el cinturón medio y el Delta de Níger. En la raíz de los orígenes de la violencia subyace la falta de legitimidad del Estado y los profundos problemas estructurales: corrupción, inequidades regionales, federalismo disfuncional, mala gobernanza, pobreza, etc. Además, la inseguridad se ha agravado debido a la mala situación económica del país, motivada por la caída del precio del petróleo, la reducción de su producción por la inestabilidad en el Delta, y la depreciación de su moneda nacional. Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad nigerianas han incrementado la respuesta violenta y han reducido el apoyo y la colaboración ciudadana con las fuerzas de seguridad, lo cual puede resultar crucial para afrontar los retos de seguridad futuros. Ante ello, uno de los mayores desafíos del país reside en la realización de una reforma integral del sector de seguridad que incida en su profesionalización, eficacia, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos, que reduzca el factor de riesgo que hoy en día representa la mala praxis de los cuerpos de seguridad.[7] A menos que el Gobierno logre reformas estructurales, el país podría entrar en una mayor espiral de violencia.

4. Amnesty International, *Nigeria: 'Bullets were raining everywhere*, noviembre de 2016
5. Muslim Rights Concern, "Press release : INM is not an insurgent group", INM offical website,16 de diciembre de 2016
6. Para mayor información véase Escola de Cultura de Pau, "Nigeria" en Base de Datos sobre Conflictos y Construcción de paz.
7. International Crisis Group, *Nigeria: The challenge of Military Reform*, Africa Report nº 237, junio de 2016

6.4. Colapso *de facto* del Acuerdo de Paz en Sudán del Sur

Un año después de la firma del Acuerdo de Paz en Sudán del Sur, el futuro del proceso de paz se presenta más incierto y precario que nunca. El fracaso de la implementación de las cláusulas del acuerdo, las violaciones sistemáticas al alto el fuego, el incremento de la violencia contra la población civil y el colapso de facto del Gobierno de Transición a los pocos meses de su nacimiento ponen de relieve los grandes retos que afronta el futuro inmediato del país.

En agosto de 2015 se firmaba, tras más de veinte meses de dura guerra civil y, en gran parte, como consecuencia de las fuertes presiones internacionales, el acuerdo de paz entre el Gobierno presidido por Salva Kiir y los diferentes grupos opositores, principalmente el SPLA-IO dirigido por Riek Machar, y el grupo de ex detenidos del SPLM, encabezado por Pagan Amum. Ya en aquel momento, el acuerdo nacía con muchas incertidumbres sobre las posibilidades reales de recorrido, sobre todo, a raíz de la lista de 16 reservas al mismo incluidas a la hora de la firma por parte del Gobierno, que ponían en entredicho aspectos centrales del pacto. Sólo dos meses después de la firma, el Gobierno de Kiir dejaba patente que no respetaría la hoja de ruta acordada, decretando el 2 de octubre una nueva fórmula de Estado federal para el país sin tomar en consideración a los grupos opositores. Este hecho, por el cual Sudán del Sur pasaría a modificar su división administrativa, pasando de los diez estados existentes a 28 nuevas fronteras basadas en características étnicas, representó la primera grave violación del acuerdo de paz y fue denunciado tanto por la oposición sur sudanesa, como por la comunidad internacional implicada en las negociaciones de paz. Durante el 2016, el rumbo se mantuvo en esta línea y prácticamente no se avanzó en la implementación efectiva de ninguno de los siete capítulos que conforman el Acuerdo de Paz.

El incremento de la polarización étnica en Sudán del Sur ha generado un aumento de la violencia contra la población civil que ha alertado sobre la posibilidad de que se produzca un genocidio

En lo relativo al capítulo 1, referente a la creación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional (TGoNU), el acuerdo dio una de cal y otra de arena. Por un lado, Riek Machar fue designado Primer Vicepresidente del país durante febrero, y dos meses después (28 de abril) y tras su retorno a la capital, Juba, fue constituido el TGoNU. Sin embargo, el estallido de la violencia durante el mes de julio en Juba –que enfrentó a las fuerzas del Gobierno con las de la oposición, dejando un balance oficial de 270 muertos, aunque fuentes extraoficiales lo cifraron en al menos medio millar– trajo como consecuencia la huida de Machar y sus tropas de la capital y su posterior destitución por Salva Kiir en julio, quien lo sustituyó por el hasta el momento Ministro de Minería, Taban Deng Gai. Kiir también expulsó a seis de los diez ministros del SPLA-IO leales a Machar del TGoNU, sustituyéndolos por cargos afines a Gai. La Comisión de Monitoreo y Evaluación (JMEC), la ONU, la IGAD o el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (PSC) criticaron el reemplazo de Machar, afirmando que suponía una violación del Acuerdo de Paz. Esta crisis, que dividió y fragmentó al SPLA-IO en bandos pro Machar y pro Gai, se saldó finalmente con el anuncio en septiembre de Machar, afirmando el colapso del TGoNU y del acuerdo de paz, e instando a sus seguidores a retomar la guerra contra el Gobierno.

Sobre el capítulo 2, relativo al cese al fuego permanente y mecanismos de seguridad, que debería de haberse implementado 72 horas después de la firma de la paz, éste en ningún momento ha sido efectivo. Ni los actores armados no estatales se han desarmado, desmovilizado o repatriado; ni las fuerzas militares se han replegado completamente de la capital; ni tampoco se ha avanzado en la unificación de las Fuerzas Armadas nacionales. A su vez, y en cuanto al cese de hostilidades directas, tampoco ha habido avances, produciéndose enfrentamientos armados y violaciones al alto el fuego de manera constante. Los peores acontecimientos del año se registraron en el ataque a un campamento de refugiados de la ONU en Malakal (febrero), la captura rebelde de la ciudad de Wau (junio), los enfrentamientos armados directos entre el SPLA y el SPLA-IO en Juba (julio) o el deterioro de la situación de seguridad en la región de Ecuatoria. El Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia del Cese al Fuego y Acuerdos de Transición sobre Seguridad (CTSAMM) acusó en diferentes ocasiones a las fuerzas del SPLA, de no cooperar y bloquear a los equipos encargados de monitorear el cumplimiento del cese al fuego y la implementación de las medidas de seguridad.

Por otro lado, los datos referentes a la situación de crisis humanitaria en el país a finales del 2016 ponen de relieve los pocos avances en el capítulo 3, alusivo a la Asistencia humanitaria y la reconstrucción. Según estadísticas registradas por la OCHA y UNICEF, más de 5,1 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria durante el 2016 –lo que representa cerca del 40% de la población–; alrededor de 1,8 millones de personas fueron desplazadas internamente y más de un millón están refugiadas en los países vecinos. La agencia de la ONU para refugiados, ACNUR, denunció que el conflicto sur sudanés se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo.[1]

Otro de los capítulos fundamentales del pacto, el quinto, dedicado a los mecanismos de justicia transicional, rendición de cuentas, reconciliación y restitución, que prevé la creación de tres instituciones de justicia transicional (Comisión de la Verdad, la Reconciliación y Sanación; Tribunal Híbrido para Sudan del Sur; y Autoridad para la

1. Panel of Experts on South Sudan, *Interim report of the Panel of Experts on South Sudan established pursuant to Security Council resolution 2206 (2015)*, UN SC, S/2016/963, 15 de noviembre de 2016.

Compensación y la Reparación) tampoco se han empezado a implementar. De hecho, durante el mes de junio, en un artículo conjunto publicado en The New York Times, firmado por Kiir y Machar –aunque Machar se desmarcaría posteriormente–, se solicitaba a la comunidad internacional reconsiderar la aplicación del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, arguyendo que éste sería un impedimento para la construcción de la paz en el país.[2] Al respecto, la Comisión de la Unión Africana presidida por el ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, creada para determinar lo sucedido en la guerra civil sur sudanesa en 2013, comprobó que tanto las tropas comandadas por Kiir como por Machar habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.[3]

A este frágil contexto, se le añade la creciente división interna en el país que ha dado pie a la proliferación de actores armados que han renegado del proceso de paz. Algunos de ellos, como el Revolutionary Movement For National Salvation (REMNASA) o el South Sudan National Liberation Movement (SSNLM), no se adhirieron a la firma de la paz en agosto de 2015; otros como el South Sudan People's Patriotic Front (SSPPF) en la región de Ecuatoria o el Tiger Faction New Forces (TFNF) conformado por shilluks en la región del Alto Nilo, se alzaron en armas como reacción a la división administrativa decretada por el Gobierno. En el 2016, y tras la declaración de guerra decretada por Machar el 25 septiembre, Lam Akol, veterano disidente sur sudanés, también declaró la guerra al Gobierno a través de su organización National Democratic Movement. El South Sudan Democratic Movement-Cobra Faction (SSDM-CF), originario de la región de Greater Upper Nile, que había firmado un acuerdo de paz con el Gobierno durante el 2015, anunció la vuelta a la lucha armada, lo que motivó que más de 5.000 soldados desertasen de las filas del Ejército nacional (SPLA) y se unieran a la insurgencia. A finales de octubre, un nuevo grupo de la región de Ecuatoria, denominado South Sudan Democratic Front (SSDF), declaró a su vez la guerra al Gobierno, haciendo hincapié en la importancia de forjar una alianza conjunta de todas las fuerzas rebeldes.

La proliferación de grupos armados y el deterioro del proceso de paz se ha traducido en un incremento de la polarización étnica en el país y en un aumento de la violencia perpetrada por todos los grupos contra la población civil. La manipulación de las identidades y la movilización de los miembros de los diferentes grupos étnicos que apoyan a una u otra facción, ha incidido en aumentar el conflicto etno-político entre la comunidad mayoritaria dinka, aliada de Kiir, frente a otros grupos étnicos menores (nuer, shilluk, murle, equatoria), aliados de Machar, generando la alarma sobre la posibilidad de genocidio inminente debido al ciclo de venganzas y ataques generalizados y sistemáticos contra civiles pertenecientes a diferentes comunidades. Así lo reconoció Adama Dieng, asesor especial del secretario general de la ONU para la Prevención del Genocidio, advirtiendo en noviembre, a raíz de los incidentes contra civiles registrados a final de año en la región de Ecuatoria, que el clima de violencia e intolerancia puede desencadenar un genocidio.

En este ambiente caracterizado por los graves incidentes violentos en diferentes regiones del país (Wao, Ecuatorias) el 12 de agosto el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una fuerza regional de 4.000 unidades que se unirán a la misión de la UNMISS, pudiendo hacer uso de la fuerza para la protección de la población civil en Juba. Esta medida, que sin duda puede significar un avance en la protección de civiles en el país –luego de las duras críticas realizadas a la misión de la ONU (UNMISS) por su papel en la falta de protección de civiles en los campos de desplazados bajo su jurisdicción en las crisis de Malakal y Juba– resulta insuficiente para garantizar la estabilidad. El Consejo de Seguridad, a quien diferentes organismos internacionales han solicitado el establecimiento de un embargo de armas, no ha aprobado aún la medida, aunque ha advertido que la considerará si la situación no se estabiliza.

El Gobierno de Transición y Unidad Nacional colapsó de facto a los pocos meses de su establecimiento, incrementando las incertidumbres sobre el futuro del Acuerdo de Paz en el país

En este difícil escenario, se empiezan a escuchar cada vez más las voces que proponen, viendo el fracaso en la implementación del Acuerdo de Paz y las pocas posibilidades de generar una transición efectiva bajo la dirección de Kiir y Machar, así como de sus círculos más cercanos, la imposición por parte de la ONU y la UA de una tutela internacional en el país por un periodo de entre diez y quince años. En este modelo de transición, las figuras de Kiir y Machar –señalados como los principales responsables del deterioro de la gobernabilidad en el país– serían excluidos de cualquier fórmula presente y futura de gobernabilidad. Pagan Amum, anterior secretario general del SPLM, ha sido una de las personas que han solicitado el establecimiento de esta autoridad de transición como única solución viable para detener la violencia y reconstruir el Estado.[4] Esta solución extrema de administración internacional ya se ha aplicado por parte de la ONU en casos como Timor Leste, Kosovo o Liberia, con buenos resultados.[5] Sin embargo, no parece fácil la aplicación de esta fórmula en Sudán del Sur, ya que ni Kiir ni Machar, ni sus grupos más afines permitirán su exclusión en el reparto de poder, lo que conllevaría su aplicación por medio de la fuerza, una medida que hasta la fecha, la comunidad internacional no ha hecho ningún amago por emplear para reducir la inestabilidad y proteger a la población civil en el país.

2. Salva Kiir y Riek Machar, "South Sudan Needs Truth, Not Trials", *The New Tork Times*, 7 de junio de 2016
3. AU Commission of Inquiry on South Sudan, *Final Report of the African Union Commission of Inquiry on South Sudan*, 15 de octubre de 2014, Crisis States Research Centre (CSRC), 2010.
4. South Sudan Reborn, "United Nations temporary administration for South Sudan", 1 de agosto de 2016.
5. Kate Almquist Knopf, "Ending South Sudan´s Civil War", *Council on Foreign Relations, Center for Preventive Action,* Special Report Nº. 77, noviembre de 2016.

6.5. Afganistán, un conflicto enquistado

Quince años después del inicio de la actual fase del conflicto armado de Afganistán con la invasión de las tropas estadounidenses y el despliegue de la misión militar internacional ISAF, la situación de violencia armada está profundamente enquistada en el país sin que se produzcan avances que permitan intuir el fin de una guerra que asola el territorio afgano desde 1979 de forma prácticamente ininterrumpida. Tras la retirada de gran parte de las tropas internacionales desplegadas en misión de combate a finales de 2014, en 2015 el conflicto armado sufrió un grave repunte que se consolidó en 2016. El país atraviesa una importante crisis tanto en términos de seguridad como políticos. Varios factores podrían llevar a que el conflicto armado se prolongue de forma indefinida y a que la crisis política se agrave, haciéndose más difícil la búsqueda de una salida negociada a la violencia y bloqueando las necesarias reformas políticas para la construcción de la paz en el país.

Durante todo el año 2016 se registraron graves enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad afganas y la insurgencia talibán, con algunos momentos álgidos de violencia. La insurgencia talibán hizo varias demostraciones de fuerza en diferentes momentos del año, logrando el control de algunos enclaves estratégicos de forma temporal, poniendo en jaque a las fuerzas de seguridad afganas y evidenciando la fragilidad gubernamental para extender su control a todo el territorio afgano. Así, zonas de la provincia de Kunduz, incluyendo la propia ciudad de Kunduz, estuvieron brevemente bajo control talibán en momentos del año, así como otros emplazamientos en la provincia de Faryab, Paktia o Helmand, por ejemplo. Por otro lado, se produjeron importantes atentados contra instalaciones extranjeras en el país, como embajadas y consulados, así como contra sedes de ONG internacionales. Especialmente significativo fue el atentado que tuvo lugar en el mes de julio en Kabul en el que murieron 85 personas, todas civiles y mayoritariamente hombres hazara, en un ataque reivindicado por ISIS y condenado por los talibanes. La presencia de ISIS en Afganistán añade más complejidad al conflicto armado. En abril, un ataque con un avión no tripulado estadounidense causó la muerte del líder de ISIS en Afganistán y Pakistán en la provincia de Nangarhar, en la que la organización podría haber logrado una cierta presencia en algunos distritos. Además, se registraron algunos enfrentamientos entre la insurgencia talibán y grupos vinculados a ISIS en esta misma provincia. Si bien no está claro el grado de implantación de esta organización en el territorio afgano –más allá de esta presencia en Nangarhar– ni su capacidad para operar en el conflicto, varios ataques en el país han sido reivindicados por grupos que han afirmado lealtad a ISIS, lo que pone en evidencia un cierto grado de penetración en el conflicto armado.

En lo que respecta a la presencia internacional en el país, especialmente de tropas extranjeras, cabe destacar que EEUU no llevó a cabo la reducción de tropas desplegadas inicialmente prevista tras la retirada de 2014, y al finalizar 2016 el número de soldados internacionales en el país como parte de la misión de la OTAN "Apoyo Decidido" seguía siendo el mismo que en 2015. Además, el Gobierno de EEUU cambió las reglas para entablar combate para sus tropas en el país, permitiendo enfrentamientos directos con la insurgencia talibán, así como más ataques aéreos contra esta insurgencia. Así pues, la presencia militar extranjera en el país no se reducirá en el futuro cercano y presumiblemente se prolongará más allá de 2017, puesto que no es previsible que se produzcan mejoras en la situación de seguridad a corto o medio plazo.

La presencia militar extranjera en Afganistán presumiblemente se prolongará más allá de 2017

El impacto del conflicto armado está siendo especialmente grave en la población civil, quien de manera creciente sufre de forma desproporcionada las consecuencias de la violencia y de las violaciones de derechos humanos. De acuerdo con las cifras recopiladas por la misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA, se consolida la tendencia de aumento en el número de víctimas civiles del conflicto armado.[1] Durante los seis primeros meses de 2016 se produjo un ligero aumento en el número de víctimas civiles con respecto a estas mismas fechas en años anteriores. El número total de víctimas fue de 5.166 (1.601 muertes y 3.565 heridos) frente a 4.982 en 2015 (1.615 muertes y 3.367 heridos). Pero más allá de las cifras concretas de victimización, graves de por sí, se constatan algunas tendencias preocupantes en la dinámica del conflicto armado que podrían tener derivas enormemente negativas en 2017. Si bien la mayoría de víctimas civiles fueron ocasionadas por la insurgencia talibán, cabe destacar que se produjo un aumento en el número de víctimas civiles causadas por la acción de las fuerzas de seguridad afganas. Especialmente importante es el incremento de víctimas fruto de los ataques aéreos gubernamentales. El aumento de las operaciones aéreas tendrá un impacto muy negativo sobre la seguridad humana en Afganistán, dado lo indiscriminado de los efectos de este tipo de acción armada. Además, persistieron los ataques específicamente dirigidos contra mujeres en espacios públicos. Estos ataques con víctimas civiles, así como la persecución específica de las mujeres, sin duda generan consecuencias a largo plazo en términos de destrucción del tejido social afgano con graves impactos en la democratización del país y en la situación de

1. UNAMA, *Afghanistan Midyear Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2016*, julio de 2016.

derechos humanos, mermando las posibilidades de participación de la población en el ámbito público e hipotecando el futuro político y social de Afganistán.

La crisis de desplazamiento forzado en el país es otro de los factores que podrían agravarse durante 2017, lo que evidencia, por una parte, la frágil situación en términos de derechos humanos y seguridad –que sigue forzando a miles de personas a huir de sus hogares–, y por otra, la incapacidad gubernamental para garantizar unas mínimas condiciones de bienestar a la ciudadanía afgana. Naciones Unidas señaló que durante los primeros seis meses de 2016 se produjo un aumento del 10% en el número de personas desplazadas internas en el país con respecto a las mismas fechas en el año anterior. En paralelo a estos nuevos desplazamientos en 2016 se ha asistido a un importante proceso de retorno forzado de centenares de miles de personas refugiadas en países vecinos como Pakistán o en países de la UE. Más de 200.000 personas retornaron a Afganistán procedentes de Pakistán y decenas de miles lo hicieron procedentes de diferentes países de la UE. A pesar de que Pakistán, Afganistán y ACNUR habían firmado un acuerdo para la repatriación voluntaria de las personas refugiadas en 2002, hasta 2015, y especialmente 2016, el Gobierno pakistaní no presionó para que este retorno tuviera lugar. Sin embargo, en los últimos meses se ha incrementado la presión sobre la población afgana residente en Pakistán para que regrese a su país, y durante 2017 este proceso de retorno podría acelerarse todavía más. En el caso de la UE, el acuerdo de finales de 2016 con el Gobierno afgano para la repatriación de las personas cuyas solicitudes de asilo no sean aceptadas llevó a un incrementó en las repatriaciones forzadas en los últimos meses de 2016, fenómeno que sin duda se incrementará en 2017 dada la restrictiva política migratoria y de refugio de la UE. El regreso de estas personas se produce sin que el Gobierno afgano tenga la capacidad de acompañar estos retornos y en condiciones de enorme precariedad e inseguridad para las personas retornadas. La tendencia al aumento en los retornos en la segunda mitad de 2016 continuará con toda probabilidad en 2017 sin que se prevea una mejora en la acogida.

La crisis de desplazamiento forzado en el país podría agravarse durante 2017

En paralelo a la situación de seguridad, el país atraviesa una grave crisis política cuyo epicentro es el Gobierno de Unidad Nacional. Este Gobierno, integrado por el presidente, Ashraf Ghani, y el jefe ejecutivo, Abdullah Abdullah, se formó en 2014 para superar la crisis institucional generada durante las elecciones presidenciales. El propio Secretario General de la ONU, en su informe sobre Afganistán de septiembre de 2016, reconocía que "el aumento de las tensiones entre el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y el jefe ejecutivo, Abdullah Abdullah, la persistencia de los problemas de seguridad y el aumento de la presión de los grupos políticos de la oposición contribuyeron a una creciente inestabilidad".[2] El acuerdo que llevó a la formación del Gobierno de Unidad Nacional establecía que este debía prolongarse hasta septiembre de 2016, pero el jefe ejecutivo anunció que el Gobierno completaría el mandato presidencial de cinco años. En los meses previos a este anuncio, la tensión entre Ghani y Abdullah se había incrementado notoriamente con acusaciones mutuas de falta de colaboración así como de incumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo, en especial los relativos a la reforma de la legislación electoral y al establecimiento de la figura del primer ministro. Además, también aumentó de forma notable el descontento entre otras fuerzas y líderes políticos, que exigían la celebración de una Loya Jirga en la que dirimir el futuro del Gobierno. Entre quienes exigían esta convocatoria está el ex presidente Hamid Karzai, cuya posición política ha debilitado al actual Gobierno.[3] Diversos nombramientos políticos y administrativos de alto nivel por parte del presidente llevaron al jefe ejecutivo a acusar al primero de operar a sus espaldas. En el mes de noviembre la crisis política se acentuó con el cese de varios ministros por parte del Parlamento. Estos ceses habrían afectado fundamentalmente a aliados de Abdullah Abdullah, lo que incrementó notablemente los rumores sobre una operación política orquestada por Ghani para debilitar al jefe ejecutivo.[4] Por otra parte, las elecciones parlamentarias que tendrían que haberse celebrado en octubre de 2016 fueron pospuestas ante la imposibilidad por parte del Gobierno de aprobar las reformas legislativas electorales necesarias.

Así pues, Afganistán afronta un año 2017 en medio de una situación de seguridad tremendamente inestable y de una situación política de gran fragilidad. El grave impacto del conflicto armado en la población civil, la aparición de ISIS en el tablero afgano, las enormes dificultades para la actividad política en el país y la grave crisis gubernamental auguran un 2017 plagado de dificultades. Si bien el proceso de paz entre el Gobierno afgano y la insurgencia talibán, con participación directa de la diplomacia estadounidense, se habría reactivado en los últimos meses de 2016, se trata de unas negociaciones que no tienen carácter oficial y con un amplio historial de fracaso en el pasado reciente. Las partes no han expresado un compromiso suficientemente claro y contundente con un proceso negociado que permita aseverar que éste tendrá continuidad y capacidad de obtener resultados próximamente.

2. La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. Informe del Secretario General. A/71/616–S/2016/768, 7 de septiembre de 2016.
3. Ali Yawar Adili, *Post-Presidential Karzai: Still a challenge to the NUG?,* Afghanistan Analysts Network, 21 de noviembre de 2016.
4. Thomas Ruttig, *Parliament Kicks Out Ministers Again: A multi-dimensional power struggle.* Afghanistan Analysts Network, 19 de noviembre de 2016.

6.6. El incremento de la violencia y la creciente presencia de ISIS en Mindanao

Tras varios años en los que los niveles de violencia se habían reducido en Mindanao, principalmente por el avance positivo del proceso de paz entre el Gobierno y el MILF –el mayor grupo armado que opera en el sur del país–, en 2016 varios analistas advirtieron sobre la proliferación y mayor coordinación de varios grupos islamistas, sobre la posibilidad de que ISIS esté extendiendo y consolidando su presencia en Mindanao como epicentro de sus actividades y proyecto en el Sudeste Asiático y sobre el sustancial incremento de las acciones armadas por parte de grupos que declaran su sintonía e incluso pertenencia a ISIS, como Abu Sayyaf o Estado Islámico de Lanao. A pesar de que algunas voces expertas ponen en duda la solidez de los vínculos entre ISIS y varios grupos locales y de que hasta la fecha el Gobierno filipino había minimizado o ignorado la colaboración entre grupos armados filipinos y organizaciones o redes regionales o transnacionales, a finales de 2016 el propio presidente filipino, Rodrigo Duterte, reconoció la presencia de ISIS y de grupos y combatientes foráneos en su territorio. La preocupación de la comunidad internacional por el posible incremento de organizaciones yihadistas en Mindanao incluye la posible afectación al proceso de paz con el MILF, el aumento de la inseguridad en la región, el incremento de los riesgos de navegación en la zona comprendida entre Filipinas, Indonesia y Malasia por la actuación de grupos como Abu Sayyaf, o la posibilidad de que se produzcan atentados en algunas ciudades filipinas.

Aunque ya hace tiempo que informes de inteligencia advierten sobre una mayor articulación entre grupos yihadistas en Mindanao y sobre las intenciones de ISIS de tener una presencia estable en dicha región, durante 2016, por primera vez, ISIS reivindicó un atentado de envergadura; advirtió sobre su intención de incrementar su presencia y ataques en Filipinas; reconoció oficialmente la lealtad y obediencia hecha pública por numerosos grupos en Filipinas; designó a un líder en la región; y anunció su intención de crear una provincia (*wilayat*) del Califato en la región, aunque no está claro si ésta incluiría solamente Filipinas o bien otras regiones o países del Sudeste Asiático. Efectivamente, a mediados de abril ISIS reivindicó por primera vez una acción armada en Filipinas en la que 18 soldados murieron y más de 50 resultaron heridos en la región de Basilan, lo que significó el incidente armado más letal para el Ejército desde 2011. Más tarde, ISIS declaró disponer de 10 batallones de combatientes en cinco localizaciones diferentes del país y aseguró haber provocado la muerte de 289 personas desde abril de 2015. Pocos meses antes, ISIS había designado máximo líder en la región o emir de los soldados del Califato en Filipinas a Isnilon Hapilon, un dirigente histórico de Abu Sayyaf que lideraba la facción del grupo en Basilan pero que en 2014 juró lealtad a ISIS y a finales de 2015 se escindió de Abu Sayyaf para crear o fortalecer la estructura de ISIS en Filipinas. ISIS también anunció que cuatro organizaciones armadas de Mindanao –Ansar al Shariah, Marakah al Ansar; Ansar al Kilafah y al Harakatul al Islamiyah– habían convergido bajo la autoridad de Hapilon, también conocido como Sheik Mujahid Abu Abdullah al-Filipini, lo que hizo temer a algunos analistas no solamente que ISIS podría declarar en breve una nueva provincia del Califato en la región, sino también que en un futuro cercano podría buscar la adhesión o colaboración de los numerosos grupos –hasta 16, según algunas voces– que en los últimos años le han jurado lealtad y obediencia, como el Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), Abu Sayyaff, Jamaal al Tawhid Wal Jihad, Khilafah Islamiyah Mindanao, o Dawlah Islamiyah.

En paralelo al incremento de la presencia de ISIS en Mindanao, algunos de estos grupos cercanos o pertenecientes a la organización incrementaron sustancialmente su actividad armada, hasta el punto de que el Gobierno reconoció haber desplegado miles de efectivos militares y policiales adicionales y declaró que aproximadamente la mitad de sus capacidades militares aéreas y navales estaban destinadas a tareas de contrainsurgencia y contraterrorismo en Mindanao. En el caso del BIFF –una escisión del MILF opuesta al proceso de paz que juró lealtad a ISIS en 2014– como mínimo 70 combatientes murieron durante el año. El Gobierno señaló que esta organización seguía albergando en su seno a varios combatientes extranjeros y advirtió sobre la posibilidad de que cada vez incurriera en atentados considerados terroristas. En el mes de febrero, por ejemplo, el Gobierno declaró que, según sus fuentes de inteligencia, unos 100 miembros del BIFF habrían participado durante un mes y medio en un curso de fabricación y manipulación de artefactos explosivos. Por otra parte, a finales de julio, una facción del BIFF declaró haber asumido el control del grupo en detrimento del actual líder, Ismael Abubakar (alias Imam Bongos), por considerar que la actual cúpula se hallaba demasiado cercana a los postulados de ISIS. Sin embargo, el portavoz oficial del BIFF negó que dicha facción se hubiera hecho con el control de grupo, que se estima tiene unos 500 combatientes, un importante equipamiento militar e incluso un cierto control territorial en bastiones históricos del MILF.

El grupo armado que seguramente provocó mayor sorpresa y preocupación durante 2016 fue el autodenominado Estado Islámico Lanao o Dawlah Islamiyah, al que el Gobierno se refiere como grupo Maute, por estar liderado por los hermanos Abdullah y Omar Maute. A pesar de que este grupo fue creado unos años atrás e incluso había jurado su lealtad a ISIS, en 2016 cobró cierta notoriedad por su gran actividad armada (al finalizar el año el Gobierno declaró que más de 160 combatientes habían sido abatidos durante 2016); por utilizar de manera asidua la simbología y terminología propia de ISIS; por haber ocupado temporalmente la ciudad de Butig (Lanao del Sur) y haber colgado la bandera de ISIS en varios edificios, entre ellos el antiguo ayuntamiento; por haber tenido la capacidad de irrumpir en la cárcel provincial de Lanao y liberar a varios combatientes suyos; y por las declaraciones del propio Duterte en las que reconocía abiertamente los vínculos entre Estado Islámico de Lanao e ISIS. Además de los numerosos enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas

Armadas en la región de Butig (Lanao el Sur, en Mindanao) que provocaron la muerte a un número significativo de soldados, el Gobierno advirtió sobre el riesgo de que Estado Islámico en Lanao llevara a cabo una campaña de atentados en varias partes de Mindanao e incluso, como trascendió en el mes de mayo, que intentara un atentado de envergadura en la región metropolitana de Manila. En este sentido, en diciembre el Gobierno responsabilizó al grupo por haber puesto un artefacto explosivo (que finalmente no estalló) en las cercanías de la embajada estadounidense en Manila. Poco antes, tres personas vinculadas a Estado Islámico de Lanao habían sido detenidas por su participación en un atentado en un mercado de la ciudad de Davao (Mindanao) en diciembre en el que 15 personas murieron y otras 70 resultaron heridas.

En varias ocasiones el Gobierno filipino expresó su enorme preocupación tanto por el incremento de la actividad armada de Abu Sayyaf como por su creciente capacidad para financiarse a través del secuestro y de poner en riesgo la seguridad y la navegación en el Sudeste Asiático. El Gobierno reconoció que la actividad armada de Abu Sayyaf se había incrementado drásticamente en los últimos dos años, especialmente en 2016. A modo de ejemplo, a mediados de noviembre, el Gobierno declaró que casi 130 combatientes de Abu Sayyaf habían muerto y más de 100 habían sido detenidos desde principios de julio. Manila reconoció que solamente en los 100 primeros días de gobierno de Duterte había llevado a cabo 579 operaciones militares en Sulu y había librado 54 enfrentamientos directos con Abu Sayyaf. Sin duda uno de los factores que explica el notable incremento de los esfuerzos de contrainsurgencia por parte del Gobierno es el incremento en el número de secuestros por parte del grupo. Según el Gobierno, solamente en los primeros seis meses del año Abu Sayyaf habría obtenido 7,3 millones de dólares en concepto de rescates por la liberación de personas secuestradas. A pesar de todas las personas que fueron liberadas durante el año, a finales de 2016 Abu Sayyaf tenía en su haber a 23 personas, 18 de las cuales extranjeras. Además, Abu Sayyaf cada vez demostró una mayor capacidad para secuestrar a personas y navíos más lejos de su área histórica de operaciones, por lo que a finales de año los Gobiernos de Filipinas, Malasia e Indonesia firmaron un acuerdo para prevenir la piratería y garantizar la seguridad en la región, especialmente en los mares de Sulu y de Célebes.

Además de todos estos acontecimientos que ya se han registrado en 2016, algunas voces consideran que la situación de inseguridad puede agudizarse por distintos motivos, y no solamente por la posibilidad de que la capacidad contrainsurgente de Filipinas se vea seriamente diezmada por una hipotética reducción sustancial del apoyo militar y de inteligencia que EEUU ha brindado en los últimos años a Manila a raíz de sus críticas a la denominada guerra contra las drogas emprendida por el nuevo Gobierno filipino, que a finales de año había provocado la muerte de más de 6.000 personas. En primer lugar, la parálisis del proceso de paz entre el Gobierno y el MILF podría provocar que una parte de los simpatizantes o incluso combatientes de este grupo (que algunas fuentes estiman en 12.000) se enrolen en alguno de los muchos grupos armados que actualmente están activos en Mindanao. De hecho, es ciertamente plausible considerar que muchos de estos grupos se han fortalecido en los últimos años precisamente por los desengaños e indignación que ha provocado entre buena parte de la población moro la anulación de un acuerdo de paz de 2008 por parte de la Corte Suprema (y que propició la escisión del BIFF del MILF) o la falta de implementación del Acuerdo Marco sobre Bangsamoro (2012) y el Acuerdo Global sobre Bangsamoro (2014). Cabe recordar que el MNLF, tras comprobar la escasa disposición del Gobierno a implementar el acuerdo de paz de 1996, ha protagonizado numerosos episodios de violencia en los últimos 20 años y a día de hoy no es un grupo armado plenamente desmovilizado. También cabe recordar que históricamente los grupos armados que estaban en plena negociación de paz con el Gobierno han tendido a sufrir escisiones y facciones, como así lo atestiguan el surgimiento del MILF, Abu Sayyaf, o el propio BIFF.

En segundo lugar, la proclamación de Filipinas como una nueva provincia o como el epicentro de facto de las actividades de ISIS en el Sudeste Asiático podría comportar una mayor vinculación entre los grupos que actualmente ya operan en Mindanao y algunas de las principales organizaciones yihadistas en la región del Sudeste Asiático que también han proclamado su lealtad a ISIS, como Mujahidin Indonesia Timur, Jemaah Ansharaut Tauhid o Darul Islam Sabah. En este sentido, cabe destacar que a finales de año el propio Gobierno reconoció la existencia de numerosos combatientes foráneos en las filas de algunos grupos de Mindanao. Así, algunas voces consideran que en un futuro cercano Mindanao podría erigirse en un centro de entrenamiento y formación para combatientes asiáticos que tuvieran como destino final países como Iraq o Siria. Del mismo modo, la inseguridad y la violencia en Mindanao podría incrementarse notablemente con el regreso de los aproximadamente 1.200 combatientes de la región que se estima han viajado a Siria e Iraq para enrolarse en las filas de ISIS. De hecho, existe una facción dentro de ISIS, denominada Katibah Nasuntara, formada íntegramente por combatientes del Sudeste Asiático y a la que se vincula con el atentado de enero de 2016 en Yakarta. Cabe añadir, además, que actualmente unos 2,5 millones de personas filipinas residen en países de Oriente Medio.

A pesar de todos estos factores, algunas voces sostienen que hasta el momento no se han podido comprobar los vínculos operativos o económicos entre ISIS y varios grupos que actúan en Mindanao. Según estas voces, dichos grupos tratarían de utilizar sus presuntos vínculos con ISIS para ganar visibilidad o para incrementar el perfil político de sus demandas o incluso el precio de los rescates de las personas secuestradas. Por su parte, ISIS estaría interesado en capitalizar y promover incidentes violentos e inestabilidad en varias partes del mundo, incluyendo el Sudeste Asiático, para desviar la atención de los reveses militares que está sufriendo últimamente en Siria e Iraq. Por otra parte, hasta el momento el MILF se ha mostrado tajantemente contrario a ISIS y ha manifestado su disposición a ayudar a combatir a los grupos yihadistas, varios de los cuales operan en sus bastiones tradicionales.

6.7. La cuestión kurda en Turquía y la multiplicación de los frentes de guerra

La cuestión kurda de Turquía, una de cuyas manifestaciones es el conflicto armado que desde los años 80 enfrenta al Estado turco y el PKK, asiste a una de las etapas más delicadas de su historia. Enterrado el reciente proceso de paz (2012-2015) y en medio de una intensificación del conflicto en los planos bélico, político-social y regional, así como de un escenario general en Turquía mucho más complejo –marcado por los retos y consecuencias del intento fallido de golpe de Estado en julio de 2016, entre otros factores–, el panorama no invita al optimismo. Al contrario, las dinámicas en marcha apuntan a los riesgos de un escenario de total antagonismo, de deterioro de la violencia y mayor militarización y de una brecha cada vez más insalvable entre las partes contendientes, así como entre el Estado y el movimiento kurdo en su conjunto.

El grave deterioro del conflicto se produce en un contexto histórico marcado por el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016, protagonizado por un sector del Ejército, supuestamente infiltrado por el movimiento religioso Gülen, antiguo aliado del partido oficialista AKP, ferviente opositor a cualquier diálogo con el PKK y calificado de organización terrorista por el Estado, bajo las siglas FETÖ. El intento de golpe causó profunda conmoción –y al menos 265 víctimas mortales y más de 1.400 heridos– en un país marcado por el papel de Ejército, y fue condenado unánimemente por toda la clase política –incluyendo el pro-kurdo HDP–, generando lo que se identificó como una oportunidad de unidad política y de democracia parlamentaria para hacer frente a los diversos retos del país. Añadiendo elementos a esa oportunidad, el PKK cesó en gran medida sus actividades armadas en los días posteriores, como medida intencionada, según afirmó el partido pro-kurdo HDP.

No obstante, siguió una etapa de suma complejidad, con varias tendencias preocupantes, relevantes también para la cuestión kurda. Entre ellas, la configuración de un marco político de nuevos frentes –protagonizado por el llamado frente nacional entre el partido oficialista AKP y el opositor nacionalista MHP–, que interactúa en mayor o menor grado con el CHP, pero que excluye al pro-kurdo HDP (tercer partido de Turquía) de las negociaciones de alto nivel post 15 de julio. Este factor es sumamente relevante en el contexto post-golpe fallido, en que se está abordando la reforma constitucional (y un futuro cambio a régimen presidencialista), entre otros temas con repercusiones para la cuestión kurda. En ese sentido, el paraguas de una reforma constitucional democrática resultante de un proceso inclusivo había sido visto históricamente como una oportunidad –no sin dificultades– de abordar al menos en parte la cuestión kurda. El nuevo escenario de exclusión del HDP aleja esa opción.

Por otra parte, en ese contexto post 15 de julio se asiste a purgas masivas, incluyendo de sectores sin vínculos con la violencia o con el intento de golpe, a los que se atribuye apoyo a FETÖ, PKK e ISIS desde definiciones a menudo vagas y problemáticas de "terrorismo". Se asienta así el paradigma de "con nosotros o con el terrorismo", reduciendo el espacio político y social para la crítica democrática y la disidencia, la independencia política (o de gremios profesionales) o la construcción de puentes para la búsqueda de salidas dialogadas. Al mismo tiempo, al amparo de la legislación antiterrorista previa y de la legislación de emergencia, se avanza hacia la judicialización de la dimensión política y social de conflictos en marcha, como –al menos en parte– la cuestión kurda. Asimismo, otra tendencia preocupante post-15 de julio ha sido el marcado incremento de los ataques del PKK, pauta atribuida a la percepción en el grupo de debilidad en el aparato de seguridad tras el golpe fallido.[1] En ese sentido, se asistió a purgas masivas en el Ejército, incluyendo al menos la mitad de los generales y almirantes, y personal con papel central en las operaciones contra el PKK.[2] A este marco general de exclusión política y del paradigma de "con nosotros o contra nosotros" se añade de manera más específica la intensificación de los diversos frentes de conflicto en torno a la cuestión kurda. Así, en línea con esa exclusión del HDP de los grandes asuntos políticos de Estado, se está ante un escenario de grave reducción del espacio político y social legal del movimiento nacionalista kurdo, principal actor en la cuestión kurda. Así, durante 2016 y bajo la premisa de acusaciones de apoyo al PKK se incrementaron las detenciones de representantes políticos kurdos (entre ellos, co-líderes del partido, diputados, y otros representantes electos y figuras políticas de gran simbolismo para la población kurda, como los co-alcaldes de Diyarbakir o el histórico dirigente kurdo Ahmet Turk, acusados de vínculos con el terrorismo), se reemplazó a alcaldes electos por funcionarios, se cerraron medios de comunicación y cerca de 200 asociaciones, y se expulsó temporalmente de su cargo a 11.000 profesores, entre otras medidas. Se asiste así a un escenario de grave polarización y brecha política y social entre el Estado y el movimiento kurdo, en el que Ankara vuelve a su posición pre-2005 de negación de la cuestión kurda, de negativa a cualquier aproximación con este actor, de guerra total contra el PKK, y de aproximación económica y búsqueda de voces alternativas en el sudeste.

A su vez, la situación del movimiento kurdo resulta enormemente delicada, marcada por su limitada capacidad de influencia en el nuevo frente nacional AKP-MHP y en el PKK para avanzar hacia el silencio de las armas –pese a sus llamamientos durante 2016–; las consecuencias aún inciertas de la intensificación de la persecución contra sus cuadros políticos; la mayor alienación hacia el Estado por parte de sectores de población del sudeste, aunque también de críticas de otros sectores locales hacia las estrategias de guerra urbana del PKK en 2015-2016; y el complicado equilibrio de un actor, el movimiento kurdo, en un escenario marcado por el peso del grupo armado y de la violencia.

Entre los factores de preocupación sobresale el grave deterioro en el frente bélico desde el reinicio de la guerra abierta a mediados de 2015, con varios elementos a los que prestar atención: impactos de la violencia, estrategias, actores, recursos, posiciones. No es la primera vez que tras un fracaso en la vía del diálogo se asiste a un fuerte reinicio de la violencia, como sucedió entre 2011 y 2012 tras el fracaso del diálogo de Oslo en 2011. No obstante, respecto a crisis anteriores, en esta nueva deriva se ha incrementado significativamente el

1. Berkay Mandiraci, *Turkey's PKK Conflict Veers onto a More Violent Path*, ICG, 10 de noviembre de 2016.
2. Lars Haugom, "The Turkish Armed Forces Restructured", *The Turkey Analyst*, 30 de septiembre de 2016.

impacto en mortalidad, así como en seguridad humana de la población civil, en buena parte por la guerra urbana entre mediados de 2015 y de 2016 (desplazamiento forzado; destrucción total de zonas urbanas civiles; ataques contra objetivos civiles por parte de las fuerzas de seguridad en sus operaciones de asedio y de toques de queda; militarización de un sector amplio de la juventud kurda, a través de las Unidades de Protección Civil – YPS – y de las áreas civiles bajo su control).

La vuelta a partir de mediados de 2016 a una guerra predominantemente librada en áreas rurales –si bien han continuado parcialmente las operaciones en núcleos urbanos– ha reducido las muertes de civiles, pero ha ido acompañada de elementos de riesgo como numerosos ataques y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las guerrillas; una creciente intervención del grupo armado TAK,[3] mediante atentados suicidas en espacios urbanos y/o concurridos con grave riesgo para civiles y con balances elevados de víctimas mortales y heridos, incluyendo civiles; y un incremento de ataques del PKK contra objetivos políticos, entre otros hechos. A su vez, pese a las purgas masivas en el Ejército tras el intento fallido, Ankara puso en marcha una reestructuración profunda de las fuerzas armadas, a la que algunos análisis atribuyen riesgo de politización, a lo que se unen reformas encaminadas a reforzar la inmunidad de las fuerzas de seguridad frente a acusaciones de abusos. A ello se añade, a su vez, una reorganización en la Policía encaminada a una intensificación de la lucha contra el PKK.

Además, en el marco de la guerra, se asiste a una mayor presión en torno a los recursos. El Estado estaría tratando de golpear estratégicamente al PKK, centrándose militarmente en dos provincias relevantes para el grupo desde el punto de vista de tránsito de recursos militares y humanos: Hakkari y Sirnak.[4] Asimismo, la estrategia de intervenir decenas de ayuntamientos kurdos –acusados de financiar al PKK– se enmarca también en esta lógica de guerra.

Se identifica también una escalada belicosa en sus posiciones y retórica, reafirmándose en la opción de la guerra y en su intensificación. Ambos se han acusado del fracaso del proceso de paz de Imrali (finales 2012-2015). Además, Ankara ha amenazado al PKK con su destrucción total, descartando toda opción de diálogo con el grupo y con el movimiento nacionalista kurdo (incluyendo el HDP), exigiendo al PKK su desarme y desaparición (advirtiéndole con su destrucción) y exigiéndole al HDP su condena al grupo y cortar todos sus vínculos con éste. El PKK, por su parte, ha amenazado durante el año 2016 con una extensión de la guerra, llevándola a toda Turquía y a núcleos urbanos, y ha llamado a la "resistencia". Y si bien en 2016 señaló de nuevo su preferencia por una salida negociada, descartó que se dieran las condiciones para el diálogo, reclamando como condición para las negociaciones un cambio de política de Estado hacia los kurdos. En ese sentido, el HDP a principios de año había afirmado haber persuadido al PKK de la necesidad de volver al diálogo, con conocimiento del Gobierno, pero el partido señaló que el Gobierno rechazó totalmente un retorno a las negociaciones. Así, en las circunstancias actuales ambas partes parecen dispuestas a forzar al máximo el pulso militar entre ellas. El Gobierno se siente respaldado popularmente en su opción militarista de amplio alcance, tras su victoria electoral en noviembre de 2015 y las encuestas a su favor durante 2016, incluyendo en la etapa posterior al intento de golpe. Y el PKK parece decidido a mostrar músculo militar y a defender su agenda local y regional.

El conflicto Turquía–PKK siempre ha tenido un componente regional, si bien la actual guerra en Siria añade enorme presión y retos al respecto. En 2016 se puso a prueba una línea roja para Turquía: los actores armados kurdos (guerrillas YPG/YPJ/YPS y las fuerzas SDF, con vínculos con el PKK) avanzaron territorialmente de manera significativa, cruzando el Eúfrates y abriendo las puertas a la posibilidad de una franja territorialmente continuada bajo control kurdo –vinculado al PKK– en el lado sirio de la frontera turco-siriana. Así, Turquía lanzó la operación Escudo del Eúfrates en agosto, enviando tropas propias a Siria y apoyo al Ejército Libre Sirio (ELS), con el fin de combatir a ISIS pero, también y principalmente, de evitar una franja continuada bajo control de las YPG. En ese contexto de fuerte tensión, EEUU mantuvo un frágil equilibrio entre continuar con su apoyo a los actores kurdos –convertidos en aliado crucial en el terreno– y exigirles su retorno al este del Eúfrates. También la posición de Rusia o del propio régimen sirio ha sido ambivalente con respecto a los actores kurdos, marcada por sus agendas estratégicas respectivas.

El conflicto Turquía-PKK asiste a una intensificación del conflicto en los planos bélico, político-social y regional

Está por ver cómo las diversas dinámicas con influencia sobre el tablero sirio y regional (entre ellas, relanzamiento parcial de relaciones entre Turquía y Rusia, aunque marcadas aún por la desconfianza; política del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, hacia los kurdos; evolución de la situación en Iraq) afectarán al conflicto kurdo entre Turquía y PKK. Al mismo tiempo, para el movimiento kurdo en Turquía y Siria, la consolidación del autogobierno kurdo en Siria se ha convertido en un elemento regional crucial, apoyándose para ello en alianzas ad hoc, acompañadas de incertezas futuras, dada su dependencia externa. A todo ello se añade la violencia de ISIS dentro de Turquía. En 2016 se le atribuyeron diversos atentados de gran alcance, como el cometido en el aeropuerto de Estambul, o el atentado contra una boda kurda en el sudeste de Turquía, con medio centenar de víctimas mortales y varios cientos de heridos en cada uno de esos ataques. Asimismo, el asesinato en Ankara del embajador ruso en Turquía podría tener consecuencias de calado. Por el momento, los frentes de violencia en Turquía no han dejado de aumentar.

En definitiva, se asiste a graves dificultades para salir del círculo vicioso de la violencia y de las lógicas de suma cero y avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto. De fondo, continúa habiendo cierto espacio y oportunidades para reconducir la situación, que requerirían de diálogo con los actores kurdos de Turquía y de la región y de compromiso de silencio mutuo de las armas y de construcción de confianza para avanzar hacia los temas de fondo de conflicto. No obstante, el escenario a corto y medio plazo parece apuntar a dinámicas de violencia y exclusión política, con la incertidumbre de si está en una fase transitoria de musculatura militar o de antesala hacia un conflicto más virulento e irresoluble.

3. El grupo armado TAK es considerado por algunos analistas como una escisión autónoma del PKK; y por otros, como un grupo pantalla instrumental del PKK, con el que cometer atentados que no son reivindicados como PKK sino como TAK, entre otras interpretaciones.
4. Berkay Mandiraci, op.cit.

6.8. Israel-Palestina: la agonía de la solución de dos Estados y el riesgo de mayor violencia a 50 años de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania

En junio de 2017 se cumplirán 50 años de la guerra árabe-israelí que marcó un punto de inflexión en la historia de Oriente Medio y derivó en la ocupación de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania (además del Sinaí y de los Altos del Golán). A cinco décadas de la Guerra de los Seis Días, según la denominación israelí, o Naksa ("retroceso") para los palestinos, y a 24 años de la firma de los Acuerdos de Oslo (1993), las perspectivas de solución del conflicto se encuentran estancadas y se extiende el escepticismo sobre la viabilidad de la fórmula de dos Estados. Una opción que para muchos ya parece imposible de concretar. Después de diversos fracasos en los años previos, las negociaciones entre las partes se encuentran bloqueadas desde abril de 2014. Israel mantiene su política de hechos consumados en los territorios ocupados y su férreo bloqueo a Gaza, las fuerzas políticas palestinas continúan divididas, las múltiples violencias que caracterizan al conflicto persisten y escalan periódicamente, y los esfuerzos internacionales para resucitar el proceso de paz generan escasas expectativas. Bajo este trasfondo, las señales de creciente frustración en la población palestina con la ocupación israelí y con el liderazgo político palestino, la ultra-derechización del Gobierno israelí y las escasas expectativas de que iniciativas internacionales reactiven el proceso de paz permiten augurar que el conflicto palestino-israelí seguramente estará en el foco de atención en 2017 no sólo por la coincidencia con un hito histórico, sino también por la posibilidad de nuevos brotes de tensión y violencia.

Tras la operación israelí sobre Gaza en el verano de 2014, el conflicto palestino-israelí registró una nueva escalada de violencia a partir del último trimestre de 2015, principalmente en Cisjordania. La serie de ataques palestinos con armas blancas o atropellos deliberados de ciudadanos israelíes que continuó a lo largo de 2016 fue catalogada como una nueva intifada, aunque de una naturaleza diferente a las dos anteriores. La llamada "intifada de los cuchillos" se ha caracterizado por actos individuales de violencia protagonizados en la mayoría de las ocasiones por jóvenes, incluso menores de edad, con armas poco sofisticadas y en acciones de tipo "lobo solitario", sin estar vinculadas a grupos armados. Estas ofensivas han sido vinculadas al clima de frustración entre la población palestina por la ocupación y la falta de perspectivas de paz, y han sido consideradas en la práctica como acciones suicidas, ya que las fuerzas israelíes tienen de facto licencia para matar a los presuntos agresores y han actuado en consecuencia, a pesar de que muchos estaban neutralizados y no suponían una amenaza.[1] Así, desde octubre de 2015 y hasta marzo de 2016 una treintena de israelíes, dos extranjeros y más de 200 palestinos y palestinas había muerto en más de 300 incidentes de este tipo, episodios que se fueron reduciendo en los siguientes meses de 2016 en parte por una mayor intervención de las fuerzas de seguridad palestinas. Este tipo de acciones han contado con el apoyo de una parte importante de la opinión pública palestina: 58% en marzo de 2016, según un estudio del Palestinian Centre for Policy and Survey Research.[2] Este centro de estudios ha identificado un incremento en el respaldo al uso de la violencia entre la opinión pública palestina –40% en 2010, 57% en septiembre de 2015, y 67% en diciembre de 2015– y ha llamado la atención sobre el fenómeno de la llamada "generación Oslo", un sector de la población joven nacida en la época de la firma del proceso de paz, desencantada con el proceso político, opuesta a la solución de dos Estados y, en el caso de muchos hombres jóvenes, favorables a la vía armada. La frustración de la población palestina se atribuye a múltiples factores, entre ellos –como apunta el analista palestino Khalil Shikaki– a la convicción de que Israel no tiene ninguna intención de poner fin a la ocupación (en parte porque el statu quo no le supone costes), al convencimiento de que la comunidad internacional no está dispuesta a ejercer presión efectiva sobre Israel para que cumpla el derecho internacional, y a la negativa valoración del liderazgo palestino y sus estrategias. Respecto a esto último, según encuestas de septiembre de 2015, y por primera vez desde la creación de la Autoridad Palestina (AP) en 1994, el 51% de la población palestina consultada apostaba por su disolución y dos tercios opinaban que Mahmoud Abbas debía renunciar a la presidencia.

En este sentido, diversas voces han llamado la atención sobre las debilidades institucionales y económicas de la AP y la crisis de legitimidad de su dirigencia. Abbas, que nunca ha tenido el carisma de su predecesor, Yasser Arafat, es criticado por sus políticas hacia Israel, incluyendo la cooperación en seguridad. Aunque su mandato inicial era de cuatro años, lleva 12 años en el poder y pese a su edad (82) y a las recurrentes especulaciones sobre su sucesor, retiene los cargos de presidente de la AP, líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y líder de Fatah. Su gestión es percibida como crecientemente intolerante con la disidencia y es objeto de críticas por corrupción y no rendición de cuentas.[3] La población palestina, de hecho, no ha vuelto a votar desde las elecciones de 2006 –en las que venció el grupo islamista Hamas– y las elecciones municipales de octubre de 2016 que podrían haber revertido esta tendencia fueron postergadas *sine die* a última hora por la AP. A esto se suma la ausencia de un liderazgo palestino unificado debido a la crónica división entre Fatah y Hamas, que no han logrado consolidar un acercamiento pese a los numerosos acuerdos de reconciliación anunciados en la última década. El grupo islamista, por su parte, también es objeto de críticas, tiene escaso margen para lidiar con la situación de bloqueo y crisis humanitaria en Gaza y se encuentra en una posición de poder más vulnerable después de que dos de los países de la región en los que se ha apoyado, Egipto y Turquía, adoptaran una política de aproximación y entendimiento con Israel en los últimos años. A este escenario se añade la progresiva derechización del Gobierno israelí, que bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu ha acentuado unas políticas que desde la suscripción de los Acuerdos de Oslo no han hecho más que minar la posible

1. Lev Luis Gringberg, "Political Crisis in Israel: a Military Regime within a Democratic State?", *IEMed Mediterranean Yearbook*, 2016.
2. Khalil Shikaki, *Changing the Status Quo: What Directions for Palestinians?,* Palestinian Center for Policy and Survey Research, mayo de 2016.
3. Khaled Elgindy, *The Palestinian leadership crisis*, Brookings, 5 de enero de 2016.

emergencia de un Estado palestino. Un informe del Cuarteto para Oriente Medio –EEUU, Rusia, ONU y UE– alertó a mediados de 2016 que una de las principales amenazas a la solución de dos Estados era la incesante política de construcción de asentamientos. Desde 1993 las colonias israelíes en los territorios ocupados se han más que duplicado, alcanzando una cifra de 570.000 personas en Cisjordania y Jerusalén. A esto se suma la apropiación unilateral del territorio de Cisjordania –70% del área C ha sido designada de uso exclusivo de Israel– y otras políticas como el muro, los puestos de control, la segregación de la población palestina que profundizan la fragmentación del territorio y hacen prácticamente inviable un Estado palestino. En la campaña electoral que le llevó a la reelección como primer ministro en 2015, Netanyahu aseguró que no permitiría que un Estado palestino viera la luz durante su mandato. Aunque luego se vio obligado a retractarse, su administración se ha mantenido, en la práctica, en esta línea de acción y ha exhibido una mayor radicalización. De hecho, tras el cambio en la composición de la coalición gobernante en mayo de 2016 y la designación como ministro de Defensa del ultraderechista Avigdor Lieberman –líder del partido Yisrael Beitenu (Israel es Nuestro Hogar) y quien en el pasado se ha mostrado partidario de reocupar Gaza–, el Gobierno de Netanyahu ha sido calificado como el más derechista de la historia de Israel. Y sus políticas y discursos lo confirman. A finales de 2016 se estimaba que las demoliciones de casas palestinas se habían duplicado respecto al año anterior y la decisión de impulsar una norma para legalizar retroactivamente 4.000 viviendas construidas en territorios privados palestinos en Cisjordania despertaba una nueva polémica y críticas de la ONU.[4] Alentado por el triunfo de Donald Trump en EEUU, el ministro Naftali Bennet –líder del partido ultraderechista Jewish Home (Hogar Judío) y partidario de anexar a Israel la mayor parte de Cisjordania– declaraba a finales de 2016 que la era del Estado palestino estaba acabada y que el nuevo escenario ofrecía una oportunidad única a Israel para repensar todo.

El contexto internacional tampoco ofrece perspectivas alentadoras sobre la posibilidad de reactivar un desacreditado proceso de paz, a pesar de que durante 2016 se pusieron en marcha o se insinuaron diversas iniciativas. Francia promovió un proceso –que ha contado con el apoyo de la UE– basado en la creación de un grupo internacional de apoyo y el impulso a una conferencia internacional para reactivar el diálogo y evitar la defunción de la fórmula de dos Estados. La iniciativa tuvo una buena recepción en el liderazgo palestino, que en los últimos años ha apostado por una estrategia de internacionalización en un intento por reducir la asimetría entre los actores del conflicto, y ha contado con un repetido rechazo por parte del Gobierno israelí, partidario de circunscribir las negociaciones a nivel bilateral. Ante las reticencias de Israel y EEUU, Francia ha ido rebajando sus ambiciones de definir parámetros, mecanismos, un calendario y de que todo quedara plasmado en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Así, si bien se celebró una reunión internacional en París en junio, en la que participaron 29 países y organizaciones internacionales, el comunicado conjunto reflejó el mínimo común denominador y la segunda edición de la cumbre, que debía celebrarse a finales de 2016, parecía postergarse a 2017. Incluso la advertencia de París de que reconocería a un Estado palestino en caso de fracasar las negociaciones parecía haberse diluido.[5] El Cuarteto para Oriente Medio, en tanto, alertó sobre la insostenibilidad del statu quo y en julio presentó su primer informe diagnóstico sobre las amenazas a la solución de dos Estados y una decena de recomendaciones. El Gobierno israelí presionó para obtener cambios en el redactado y, pese a las críticas, habría quedado conforme con el resultado ya que el texto no incluye un mandato ni es percibido como un documento vinculante.[6] Las autoridades palestinas, en cambio, expresaron su decepción y se mostraron más partidarias de la iniciativa francesa. Paralelamente, durante 2016 se informó sobre la intención de Egipto de avanzar su propia propuesta, tras una aproximación entre el régimen de Abdel Fatah al-Sisi e Israel, que se ha concretado también en una cooperación en la lucha contra ISIS en la Península de Sinaí y que ha causado especial preocupación en Hamas.[7] El plan, que involucraría la adopción de medidas de confianza, ha sido señalado como una iniciativa israelí en la trastienda para contrarrestar las iniciativas internacionales.[8] Hasta finales de 2016, se especulaba sobre la posibilidad de que el Gobierno de Barack Obama presentase sus propios parámetros para la resolución del conflicto antes del fin de su mandato, en enero de 2017. Pese a ello, la atención estaba centrada en los efectos de la victoria de Trump, celebrada efusivamente por la derecha israelí. Durante la campaña, el magnate lanzó mensajes contradictorios sobre su futura política hacia Oriente Medio, pero hizo declaraciones favorables al Gobierno de Israel al anunciar que reconocería a Jerusalén como su capital y que asumiría una aproximación diferente –menos crítica– a la construcción de asentamientos en los territorios ocupados. Trump también ha sugerido que su yerno Jared Kushner –judío ortodoxo, pro-israelí– podría jugar un papel clave en los esfuerzos para llevar la paz a Oriente Medio y designó a David Friedman, un abogado alineado con las posiciones de la ultraderecha israelí como nuevo embajador en Israel.

Estudios de opinión indicaban, a mediados de 2016, que una ligera mayoría entre la población palestina e israelí –51% y 59%, respectivamente– seguía siendo partidaria de un acuerdo conducente al establecimiento de dos Estados. Paralelamente, sin embargo, hay quienes consideran la opción de reorientar la estrategia hacia un solo Estado binacional, con igualdad de derechos para israelíes y palestinos, ante la evidencia de que las políticas israelíes hacen imposible el establecimiento de un Estado palestino. La evidencia indica, en todo caso, que las tendencias del lado palestino e israelí junto a la crónica falta de voluntad política para impulsar iniciativas de paz sustantivas están configurando un escenario crecientemente preocupante. En este contexto, la coincidencia con los 50 años de la ocupación de Gaza y Cisjordania puede enrarecer aún más el ambiente. La conmemoración sin duda, extremará sensibilidades, generará pugnas de narrativas y volverá a situar en primer plano a un conflicto clave para la región, desplazado del interés mediático en los últimos años en parte a causa de las revueltas y la emergencia de otras crisis.

4. Todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional, pero Israel diferencia entre los autorizados y los que no, según su propia ley.
5. International Crisis Group, *Israel/Palestine: Parameters for a Two State Settlement*, Middle East Report no.172, ICG, 28 de novembre de 2016.
6. Uri Savir, "EU to push Israel-Palestine peace process as Quartet report flops", *Al-Monitor*, 17 de julio de 2016.
7. Shlomi Eldar, "What do Palestinians think about Egypt's Peace initiative?", *Al-Monitor*, 12 de julio de 2016.
8. International Crisis Group, op.cit.

6.9. La retirada de países africanos de la CPI: retroceso en términos de protección de los derechos humanos

La Corte Penal Internacional, el tribunal de justicia internacional de carácter permanente e independiente de la ONU cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad que escapan a los sistemas de justicia locales, se ha visto sometido a importantes presiones ya antes de su nacimiento en 2002. En los últimos años estas críticas han arreciado en el continente africano entre quienes lo ven como una institución que se ha centrado en perseguir delitos en África en detrimento de otros criminales y conflictos de otras partes del mundo. A pesar del aumento de juicios y la expansión geográfica y temática hacia nuevos tipos de crímenes que está llevando a cabo la CPI en los últimos años, el tribunal se enfrenta a uno de los principales retos desde el inicio de su andadura: tres países africanos, Sudáfrica, Burundi y Gambia, han anunciado su retirada de la Corte.[1] Además, Kenya, Namibia y Uganda, entre otros, sopesan tomar la misma decisión.[2] La culminación de estos pasos y su efecto dominó puede suponer un debilitamiento de la institución y un retroceso en términos de protección de los derechos humanos en el continente africano y a escala internacional.

Existen numerosas críticas y retos a los que debe hacer frente la CPI, que se agrupan en tres grandes temas, según han señalado diversos autores e instituciones. En primer lugar, la cuestión de credibilidad y eficiencia de la misma institución, evidenciada en 2012 después de la culminación del primer juicio de la CPI contra Thomas Lubanga, el líder de un grupo armado congolés declarado culpable por crímenes de guerra. En sus primeros 10 años de existencia la Corte gastó casi mil millones de dólares y solo resultó un veredicto, aunque las tareas para ponerla en marcha fueron arduas y poco visibles. Sin embargo, en los años siguientes (2012-2016), la Corte ha estado en plena efervescencia. En total, 13 casos se encuentran en diferentes grados de ejecución a finales de 2016. Además, 10 situaciones estaban sometidas a investigación y otras 10 se encontraban en examen preliminar. Existen tres veredictos de culpabilidad pendientes de ejercer reparaciones a las víctimas (el caso de Ahmad al-Faqi al-Mahdi, líder del grupo maliense Ansar Dine, por la destrucción de patrimonio de la humanidad en el conflicto del norte de Malí; el caso de Germain Katanga, líder insurgente congolés por haber cometido crímenes de guerra en el este de RDC; y el caso Thomas Lubanga); un juicio pendiente de apelación (el caso del líder insurgente y político congolés Jean-Pierre Bemba); otros cinco juicios cerrados (cargos retirados al presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta; cargos anulados al vicepresidente keniano William Ruto y al periodista Joshua Arap Sang; cargos no confirmados para el líder del JEM, Bahar Idriss Abu Garda, de la región sudanesa de Darfur; la absolución del líder insurgente congolés Mathieu Ngudjolo Chui; y por último, la no confirmación de los cargos contra el rwandés Callixte Mbarushimana, acusado de haber participado en el genocidio de Rwanda); otros cinco juicios en marcha (el caso del líder del grupo guerrillero JEM, Abdallah Banda; uno de los comandantes del LRA ugandés, Dominic Ongwen; los casos de Côte d'Ivoire relativos al ex presidente Laurent Gbagbo y al líder de la mílicia Jeunes Patriotes Ble Goudé; el líder del M23 congolés, Bosco Ntaganda; y el juicio al líder congolés Jean-Pierre Bemba, antes citado). Sin embargo, tal y como ha señalado la presidenta de la CPI, Silvia Fernández de Gurmendi, hace falta acelerar los juicios, que nuevos Estados se conviertan en miembros de la CPI (por ahora, 124 son los Estados parte del Estatuto de Roma) y garantizar el presupuesto (que asciende a 150 millones de dólares en la actualidad), entre otras cuestiones pendientes. En segundo lugar, cabe destacar la cuestión de las expectativas generadas por la Corte en términos de supervisión de la situación de los derechos humanos en el mundo. La CPI se ve sometida a un escrutinio permanente que puede ser motivo de frustración, ya que las expectativas que se esperan de la CPI son altas y es inevitable que se vean afectadas por diferentes cuestiones, como por ejemplo el papel que juega el Consejo de Seguridad de la ONU, las trabas y acuerdos que algunos Estados como EEUU han establecido para evitar que sus ciudadanos sean juzgados en otros países miembros, las limitaciones que impone el presupuesto y los retrasos de las contribuciones de los Estados, las presiones que sufre por parte de Estados y organismos regionales e internacionales en función de sus intereses, entre múltiples aspectos difíciles de lidiar en la arena de las relaciones internacionales.

El tercer gran reto es la cuestión de la legitimidad. La Oficina del Fiscal (OTP) se ha visto sometida a fuertes críticas en lo relativo a la selección de casos, acusada de tener un sesgo hacia el continente africano. A pesar de que la OTP ha iniciado en la actualidad investigaciones preliminares (exámenes, en la jerga de la CPI) para determinar la existencia de pruebas en una decena de países, entre los cuales destacan casos como Afganistán, Colombia, Iraq, Palestina o Ucrania,[3] por el momento sólo uno de los 10 casos que está siendo actualmente investigado no corresponde a un país africano. Es el caso de la investigación por crímenes de guerra en Georgia, iniciada en 2016.[4] El resto corresponden a países africanos: RDC, Uganda, dos casos que afectan a RCA, Sudán (Darfur), Kenya, Libia, Costa de Marfil y Malí. Por el contrario, los casos que han sido rechazados tras los exámenes preliminares corresponden a países no africanos: Venezuela, la República de Corea y Honduras.

Aunque aparentemente las cifras revelan un evidente sesgo, los defensores de la imparcialidad del tribunal argumentan que la mayoría de estas investigaciones han surgido de los propios Estados africanos, por peticiones explícitas o cesiones de jurisdicción, que han visto en la CPI una oportunidad para perseguir a criminales de guerra y buscar una fuente de legitimación interna e internacional a través del respeto por los derechos humanos. Otras han intentado utilizarla para perseguir a adver-

1. Isabel Ferrer, "África rompe con La Haya", *El País,* 26 de octubre de 2016.
2. Kevin Sief, "Gambia is the latest African country deciding to pull out of International Criminal Court", *The Washington Post,* 26 de octubre de 2016.
3. ICC, Preliminary Examinations.
4. Fatou Bensouda, "The Russia-Georgia war: why the ICC is launching war crimes probe", *The Guardian*, 24 de marzo de 2016.

sarios políticos. En otros casos, cuando Estados no miembros como Côte d'Ivoire (en el momento de solicitar la intervención de la CPI) y Ucrania han aceptado la jurisdicción ad hoc de la Corte. Finalmente, solo dos situaciones fueron remitidas al Fiscal por el Consejo de Seguridad de la ONU (Libia y Sudán). Únicamente el caso de Kenya fue iniciado proactivamente por la OTP, y además solo después de que la CPI dictaminara que la acción interna de las autoridades del país era insuficiente.[5] En paralelo, el rol de los Estados es clave de cara a superar las cuestiones relacionadas con la legitimidad de la CPI, ya que su papel se ve debilitado por el hecho de que solo dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son miembros de la Corte (Francia y Reino Unido).

El estatuto de la Corte determina que solo los ciudadanos de un Estado parte o los crímenes cometidos en los Estados parte, además de los designados por el Consejo de Seguridad, pueden ser investigados y juzgados por la Corte. Incluso en estos casos, la CPI no puede ejercer su jurisdicción si la justicia nacional está realizando investigaciones creíbles. En consecuencia, el hecho de que EEUU, Rusia y China no sean Estados parte significa que sus ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de la Corte sin la aprobación del Consejo de Seguridad, circunstancia que limita enormemente la acción de la CPI hacia estos países y sus aliados. Un ejemplo de esta situación sería Siria, ya que algunos miembros del Consejo han vetado su remisión a la CPI cuando se están produciendo clamorosos crímenes de guerra y contra la humanidad.[6] De los 124 miembros de la CPI, la mayoría corresponden a países europeos y latinoamericanos, 34 son africanos (de 54), mientras que la mayoría de países árabes y de Oriente Medio (a excepción de Jordania y Túnez) no son miembros de la Corte, y solo 18 de 50 países asiáticos forman parte. Entre los ausentes destacan China, Iraq, Israel, Libia, India, Irán, EEUU, Pakistán, Rusia[7] y Turquía, entre otros. Como muestra de la notable influencia de la CPI, el 30 de noviembre de 2016 Rusia también retiró su firma del Estatuto de Roma, un día después de que la CPI publicara un informe en el que clasificaba la anexión rusa de Crimea como una ocupación.

El hecho de que un importante número de conflictos se sitúen en el continente africano y en países miembros de la CPI (susceptibles de ser sometidos a investigación, por tanto), junto al incremento de los conflictos fuera del continente africano, sobre todo en Oriente Medio, con una importante participación de potencias occidentales y en los que podrían estarse cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad, ha visibilizado todavía más este sesgo.[8] No obstante, tal y como otros autores señalan,[9] han sido los propios países africanos los que han promovido y facilitado estas investigaciones en el continente, algunas de las más graves de la actualidad. La cuestión que más rechazo ha generado entre los líderes africanos ha sido el intento de juzgar a dos jefes de Estado en activo, el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, y el de Sudán, Omar al-Bashir. Las presiones de la CPI para que los Estados parte ejerzan sus obligaciones y capturen a al-Bashir, que se ha desplazado por diversos países africanos y de Oriente Medio con total impunidad, es una cuestión que ha enfrentado la UA y la CPI, por el hecho de que la UA se ha manifestado reiteradamente en contra de que sus jefes de Estado en activo puedan ser juzgados por el tribunal.[10] En paralelo también se ha generado un clima de tensión en el continente entre los partidarios de la CPI, entre los que destacan países como Nigeria, Senegal o Tanzania, entre otros, y sus detractores. Entre los detractores, diversos países han señalado que la creación de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos haría innecesaria la existencia de la CPI, aunque estos países han determinado que la Corte no podría sentar a ningún presidente en activo.

No obstante, a pesar del anuncio de Sudáfrica, Gambia y Burundi relativo a su retirada de la Corte en octubre de 2016, que activó todas las alarmas, finalmente podría suceder que ninguno se marchara, lo que implicara un balón de oxígeno para la cuestionada CPI. El presidente electo de Gambia, Adama Barrow, que venció al líder autoritario Yahya Jammeh en las elecciones del 1 de diciembre, destacó que seguiría comprometido con la CPI, al contrario que su predecesor, que había denunciado el sesgo africano. Burundi anunció su retirada de la CPI al revelarse el inicio de investigaciones por crímenes cometidos en el país por parte del organismo, al igual que en el caso de Rusia. En paralelo, se ha producido un clamor en Sudáfrica respecto a la posible retirada, y el principal partido de la oposición sudafricana presentó una demanda para bloquear los planes del Gobierno, alegando que sería inconstitucional. Además, muchos activistas africanos, incluidos sudafricanos, han destacado que su retirada podría resultar en un aumento de la impunidad, y la organización The Elders,[11] con líderes como Desmond Tutu a la cabeza, han destacado que la decisión de Sudáfrica sería una traición a la lucha por la promoción de la paz y los derechos humanos que encarnó Nelson Mandela.[12] Uno de los argumentos utilizados por Sudáfrica ha sido su compromiso por la construcción de la paz en el continente y el dilema e incluso la incompatibilidad que supone en algunos contextos la defensa de los derechos humanos versus la facilitación de procesos de diálogo con actores responsables de violaciones de los derechos humanos.

La permanencia o retirada de países suponen decisiones políticas que tienen que dirimirse en el ámbito político y ciertamente la retirada de un país de la importancia de Sudáfrica puede suponer un pésimo ejemplo a nivel regional y un retroceso en la protección de los derechos humanos, a la vez que otros países pueden llevar a cabo la dirección contraria, como la incorporación de El Salvador en 2016. El hecho de que estos y otros países le den tanta importancia a las decisiones de la CPI es lo que le acaba dando más sentido a su existencia. La CPI representa la última esperanza para las víctimas de atrocidades y envía el mensaje inequívoco de que nadie está por encima de la ley.

5. Charles C. Jalloh, *"Kenya's* Dangerous Dance with Impunity", *Jurist,* 18 de agosto de 2009.
6. UN News, "Russia, China block Security Council referral of Syria to International Criminal Court", *UN,* 27 de mayo de 2014.
7. Shaun Walker y Owen Bowcott, "Russia withdraws signature from international criminal court statute", *The Guardian,* 30 de noviembre de 2016.
8. Somini Sengupta, "As 3 African Nations Vow to Exit, International Court Faces Its Own Trial", *The New York Times,* 26 de octubre de 2016.
9. Office of the Prosecutor, "Is the International Criminal Court (ICC) targeting Africa inappropriately?".
10. BBC News, "Omar al-Bashir: ICC urges S Africa to arrest Sudan leader", *BBC*, 14 junio de 2015.
11. The Elders, "The Elders urge all states to commit to universal, impartial International Criminal Court", 26 de octubre de 2016.
12. Somini Sengupta, op. cit.

6.10. Siria y el fracaso en la protección de civiles en contextos de conflicto armado

Coincidiendo con la intensificación de la campaña del Gobierno sirio y sus aliados en el este de Alepo, un superviviente de la masacre de Srebrenica de 1995 –en la que murieron más de 8.000 musulmanes bosnios– interpelaba a la opinión pública internacional para recordar las promesas que se hicieron entonces respecto a que "nunca más" se permitiría la repetición de este tipo de atrocidades.[1] Sin embargo, dos décadas más tarde, Alepo y Siria se han convertido en escenario de un conflicto armado caracterizado por brutales niveles de violencia contra la población civil, sistemáticas violaciones a los derechos humanos y continuas vulneraciones del derecho internacional humanitario, en un contexto de total impunidad y ante la indiferencia –si no complicidad– de la comunidad internacional. Con más de medio millón de víctimas mortales desde el inicio del conflicto en 2011 y más de la mitad de la población desplazada dentro y fuera del país a causa de las hostilidades, la guerra de Siria no sólo se ha erigido en la peor crisis humanitaria de en la actualidad. Aunque no es el único caso, Siria también está sentando un simbólico y peligroso precedente sobre el uso de la violencia en los conflictos actuales y ha expuesto de manera descarnada las debilidades del marco internacional para la protección de civiles en contextos de conflicto armado.

En Siria las normas y principios del derecho internacional humanitario (DIH) han sido desafiadas una y otra vez. Diseñadas para limitar los efectos de los conflictos, las llamadas "leyes de la guerra" pretenden regular los métodos y prácticas utilizados en conflictos armados y garantizar la protección de quienes no participan en las hostilidades. La necesaria distinción entre civiles y combatientes a la hora de llevar a cabo las operaciones bélicas es una de las normas más básicas del DIH, que ha sido transgredida de manera flagrante en Siria. En los últimos años, el Gobierno de Bashar al-Assad y sus aliados –responsables de la mayor parte de los abusos cometidos en el marco de la guerra– han sido continuamente denunciados por perpetrar ataques indiscriminados y deliberados contra población civil, a través de ataques aéreos, el uso de barriles bomba e incluso de armas químicas y ofensivas en zonas densamente pobladas, escuelas y mercados. Milicias progubernamentales han perpetrado asesinatos de civiles desarmados, como recientemente en Alepo o en la emblemática masacre de Houla (2012), donde familias enteras fueron ejecutadas por su vinculación con uno de los grupos armados de la oposición. Grupos armados de la oposición también han sido responsabilizados de la muerte de población civil, ya sea a través de ataques indiscriminados o de acciones que han tenido como objetivo a civiles en represalia por su presunta filiación religiosa o lealtad política, como por ejemplo en las campañas contra comunidades alauitas en Latakia.

Numerosos informes de organismos de la ONU y de ONG internacionales de derechos humanos han denunciado otros múltiples abusos perpetrados a gran escala en Siria, constitutivos de crímenes de guerra y/o contra la humanidad. Las fuerzas gubernamentales han estado involucradas en el asesinato de combatientes y civiles que se encontraban heridos y existen evidencias de un sistemático uso de torturas y abusos contra miles de personas que se encuentran detenidas en las cárceles del régimen hacinadas en condiciones deplorables. Según una investigación de Amnistía Internacional publicada en 2016, casi 18.000 personas habrían muerto en custodia en centros de detención gubernamentales desde 2011, un promedio de 300 personas cada mes.[2] Otras miles de personas –más de 65.000, según estimaciones del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos– se encontraban desaparecidas, entre ellas opositores, activistas, periodistas, funcionarios y soldados sospechosos de deserción o personas percibidas como no suficientemente leales al Gobierno. Grupos armados opositores también han sido acusados de cometer ejecuciones sumarias, secuestros y torturas, incluyendo ISIS, que ha perpetrado ejecuciones públicas y mutilaciones en las áreas bajo su control en Siria. La violencia sexual también ha sido identificada como un rasgo característico del conflicto, utilizada en ocasiones como forma de tortura contra hombres y mujeres o en forma de esclavitud sexual, como en el caso ISIS. Paralelamente, han continuado los bloqueos a los convoyes de ayuda humanitaria, a pesar de la aprobación en 2015 de una resolución de la ONU (2258) que pretendía servir para sortear estos obstáculos.

En esta línea, a lo largo de 2016 se intensificaron otras dos prácticas bélicas especialmente lesivas para la población civil. Por un lado, los asedios. Según estimaciones de la ONU, a finales de 2016 la cifra de personas viviendo en localidades asediadas en Siria se había más que duplicado, en el marco de una estrategia utilizada principalmente –aunque no exclusivamente– por las fuerzas de Bashar al-Assad. Más de un millón de personas se encontraban viviendo bajo asedio, en situación de aislamiento, falta de alimentos y asistencia sanitaria, de las cuales unas 250.000 se encontraban en la zona este de Alepo controlada por fuerzas rebeldes hasta la caída de la ciudad a finales de año. El hambre y el bloqueo de suministros básicos, como el agua potable o la electricidad, han sido utilizadas como tácticas de guerra en Siria en violación del derecho internacional. Los efectos en la población civil han sido dramáticos, como ilustró también el caso de Madaya, localidad asediada por fuerzas pro-gubernamentales, donde se registraron severos casos de desnutrición y muertes de habitantes que intentaban huir o acceder a zonas cercanas en busca de alimentos.

Una segunda estrategia que se hizo más recurrente el último año fue el ataque deliberado de infraestructuras de salud y personal médico, mayoritariamente a manos del régimen. En 2014, un informe de Physicians for Human Rights ya advertía que el Gobierno sirio era responsable del 90% de los 150 ataques contra instalaciones de salud en los que habían muerto más de 460 profesionales de la salud y en 2016 Amnistía Internacional denunciaba que Rusia y Damasco estaban utilizando la destrucción de hospitales como parte de una estrategia de guerra, en el marco de su campaña para Alepo. Según datos de la ONU, entre enero y agosto de 2016 una veintena de hospitales y clínicas fueron destruidos en Alepo y sus alrededores.

1. Nedzad Avdic, "Aleppo's people are being slaughtered. Did we learn nothing from Srebrenica?", *The Guardian*, 13 de diciembre de 2016.
2. Amnesty International, *'It breaks the human': Torture, disease and death in Syria's prisons*, Amnesty International, 18 de agosto de 2016.
3. Human Rights Council, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, A/HRC/33/55, 11 de agosto de 2016.

Ninguno de ellos estaba próximo a objetivos militares.[3] En este contexto, en mayo de 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2286 que condena de manera contundente los ataques a personal e instalaciones médicas en contextos de conflicto armado y recuerda a las partes en conflicto que están obligadas a respetar el DIH y a garantizar la seguridad y el acceso de personal médico y humanitario porque "incluso las guerras tienen normas", como apuntó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.[4] La alusión no era válida solo para Siria. La Cruz Roja ha contabilizado 2.400 ataques en los últimos tres años en 11 países. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado continuos ataques a hospitales en Afganistán, RCA, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen, y ha alertado que cuatro de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU están involucrados en coaliciones militares que han sido responsables de este tipo de ataques. En Siria, en todo caso, la resolución no sirvió para disuadir del uso de esta estrategia. Las ofensivas continuaron, incluyendo una que destruyó un convoy y mató a 18 funcionarios de la Media Luna Roja en octubre de 2016.

Siria ha sido escenario de masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sentando un peligroso precedente

En este escenario, la guerra en Siria, pero también las dinámicas de violencia en otros contextos, han encendido alertas sobre el riesgo de que después de 150 años de desarrollo del DIH el sistema de protección de civiles en zonas de conflicto se esté desmoronando.[5] La ONU ha advertido sobre los peligros de "contagio" que tiene el no respetar o minar el DIH y los derechos humanos, al alentar a otros Estados y/o actores armados a seguir esta vía. El problema clave sigue siendo cómo conseguir que las partes se atengan al marco de DIH y derechos humanos, ya sea por convicción o por temor a las consecuencias. En una reflexión sobre Siria, pero aplicable a otros contextos, Carla del Ponte –integrante de la Comisión Internacional de Investigación sobre la guerra en el país– ha insistido en la obligación de influir por parte de las potencias foráneas que tienen ascendencia sobre las partes en conflicto y en la responsabilidad que tienen por continuar con la provisión de armas que han alimentado el ciclo de violencia, ante el evidente riesgo de que sean utilizadas para la comisión de abusos.[6] En la práctica, sin embargo, las aproximaciones a la crisis siria han estado condicionadas por los intereses dispares de las potencias regionales e internacionales implicadas en la disputa. En un contexto de divisiones y bloqueo en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, eso ha derivado, por ejemplo, en un persistente veto por parte de Rusia y China a que el Gobierno sirio sea condenado por las atrocidades perpetradas y a que el caso de Siria sea investigado en la Corte Penal Internacional.

La situación de Siria también ha puesto en entredicho la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P). Adoptada por la ONU en 2005 con la intención de evitar episodios como el genocidio de Rwanda o la masacre de Srebrenica, la R2P plantea que los Estados son los primeros responsables de la protección de sus ciudadanos en casos de crímenes de guerra, contra la humanidad, genocidios o limpieza étnica pero, en caso de que los Estados fallen o no estén dispuestos a hacerlo –en parte por la posibilidad de que sean los perpetradores de esta violencia–, la responsabilidad de proteger se transfiere a la comunidad internacional. De uso limitado, se considera que esta doctrina no ha sido aplicada en Siria, en parte como consecuencia de la experiencia libia. En el país norteafricano, una resolución de la ONU que aludía –aunque de manera parcial– a los principios de la R2P y que autorizaba el uso de la fuerza acabó siendo utilizada por una coalición militar occidental para favorecer el cambio de régimen. Sin embargo, los defensores de la R2P recuerdan que la posibilidad de una intervención es la alternativa más extrema de aplicación de la doctrina, que también contempla que la comunidad internacional debe ejercer su deber de protección de civiles a través de medios diplomáticos y humanitarios. En este contexto, cabe destacar que uno de los pocos consensos en el Consejo de Seguridad de la ONU se produjo tras el ataque con armas químicas que causó más de 1.400 víctimas mortales en 2013, una agresión eminentemente indiscriminada y brutal de la que fue responsabilizado el régimen y que derivó en un plan para la destrucción de sus arsenales químicos. Si bien se llegó a un acuerdo unánime en este tema, no se adoptaron medidas para evitar el impacto del resto de armas convencionales responsables de la mayor parte de víctimas del conflicto. Y pese a las medidas adoptadas, se han vuelto a denunciar episodios de ataques químicos. En este sentido, expertos han subrayado que la ausencia de rendición de cuentas está alentando formas más extremas de violencia y destrucción.[7] Ante la constatación de que el Consejo de Seguridad de la ONU está fallando no sólo en la aplicación de la R2P y en su deber más básico de promover la paz y seguridad, algunos análisis advierten sobre la agudización de las críticas a las dinámicas del propio Consejo y su arquitectura de poder asimétrico, y subrayan que se han activado algunas iniciativas que buscan fijar un código de conducta para que el veto no pueda ser ejercido en casos de crímenes masivos.

Por último, cabe destacar que el caso de Siria, que en los últimos años se ha convertido en el principal país emisor de población refugiada, también ha dejado en evidencia la erosión del marco de derechos humanos y el no respeto a la convención sobre los refugiados por parte de numerosos Estados suscriptores de este tratado. El ejemplo de Europa, que se ha decantado por respuestas securitarias, la externalización de fronteras y las políticas de devolución, es ilustrativo sobre la situación de extrema vulnerabilidad que enfrenta la población civil que huye de conflictos como el de Siria y de tantos otros. Ante este conjunto de tendencias, se deberían redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de civiles de acuerdo a los principios del DIH y de la ley internacional de derechos humanos, insistir en la búsqueda de fórmulas que permitan frenar la violencia, y activar mecanismos de rendición de cuentas para que los crímenes y atrocidades perpetradas en el marco del conflicto armado en Siria, y en otros, no queden en la impunidad.

4. United Nations, *Security Council Adopts Resolution 2286 (2016) Strongly Condemning Attack against Medical Facilites, Personnel in Conflict Situations*, Meetings Coverage, SC/12347, 3 de mayo de 2016.
5. Jan Egeland y Stephen Obrian, "International humanitarian law is unravelling before our eyes", *The Guardian*, 25 de marzo de 2016.
6. Carla Del Ponte, "The Case of Syria", *Respecting IHL: Challenges and responses*, IIHL, 2015.
7. Simon Adams, *Failure to Protect: Syria and the UN Security Council, Global Centre for Responsibility to Protect,* Ocasional Paper Series no.5, marzo de 2015.

Glosario

AA: Arakan Army (Ejército de Arakan)
ABSDF: All Burma Students' Democratic Front (Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania)
ABM: Ansar Beit al-Maqdis
ACNUDH: Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ADF: Allied Democratic Forces
ADF-NALU: Allied Defence Forces - National Army for the Liberation of Uganda (Fuerzas de Defensa Aliadas – Ejército Nacional para la Liberación de Uganda)
ADSC: All Darfur Stakeholders Conference (Conferencia de Actores de Darfur)
AFISMA: Misión Internacional de Apoyo a Malí bajo Liderazgo Africano
AIEA: Agencia Internacional de la Energía Atómica
AKP: Adalet ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
AKR: Nueva Alianza de Kosovo
ALBA: Alianza Bolivariana para las Américas
ALP: Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
AMISOM: Misión de la Unión Africana en Somalia
ANSIPRJ: Alliance Nationale pour la Souvegarde de l'Identité Peule et la Restauration de la Justice (Alianza Nacional para la Protección de la Identidad Peul y la Restauración de la Justicia)
AP: Autoridad Palestina
APCLS: Alliance de Patriots pour un Congo Libre et Souverain
APHC: All Parties Hurriyat Conference
APRD: Armée Populaire pour la Réstauration de la République et de la Démocratie (Ejército Popular para el Restablecimiento de la República y la Democracia)
AQMI: Al-Qaeda en el Magreb Islámico
AQPA: Al-Qaeda en la Península Arábiga
ARS: Alianza para la Reliberación de Somalia
ASEAN: Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
ASWJ: Ahlu Sunna Wal Jama'a
ATLF: All Terai Liberation Front (Frente de Liberación de Todo Terai)
ATMM: Akhil Tarai Mukti Morcha
ATTF: All Tripura Tiger Force (Fuerza de los Tigres de Todo Tripura)
AUBP: Programa de fronteras de la Unión Africana
BDP: Partido de la Paz y la Democracia
BH: Boko Haram
BIFF: Bangsamoro Islamic Freedom Fighters
BIFM: Bangsamoro Islamic Freedom Movement
BINUCA: Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en R. Centroafricana
BLA: Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
BLF: Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
BNUB: Oficina de las Naciones Unidas en Burundi
BLT: Baloch Liberation Tigers
BM: Banco Mundial
BRA: Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
BRP: Baloch Republican Party (Partido Republicano Baluchi)
CAP: Consolidated Appeal Process (Proceso de Llamamientos Consolidados)
CARICOM: Comunidad del Caribe
CDH: Consejo de Derechos Humanos
CEEAC: Comunidad Económica de los Estados de África Central
CEMAC: Comunidad Económica y Monetaria de África Central
CENCO: Conferencia Episcopal Congolesa
CIA: Central Intelligence Agency
CHD: Centre for Humanitarian Dialogue
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
CMA: Coordinadora de Movimientos de Azawad
CMPFPR: Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
CNDD-FDD: Congrès National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
CNDP: Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
CNF: Chin National Front (Frente Nacional Chin)
CNT: Consejo Nacional de Transición de Libia
CPA: Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
CPI: Corte Penal Internacional
CPI-M: Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)
CPJP: Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz)
CPN-UML: Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist) (Partido Comunista de Nepal [Marxista Leninista])
DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración
DHD: Dima Halim Daogah
DHD (J): Dima Halim Daogah, Black Widow faction (Dima Halim Daogah, facción Viuda Negra)
DHD (Nunisa): Dima Halim Daogah, Nunisa faction (Dima Halim Daogah, facción Nunisa)
DIH: Derecho Internacional Humanitario
DKBA: Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)
DMLEK: Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)
DPA: Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)
EA: Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca)
EAC: East African Community (Comunidad de Estados de África del Este)
EAU: Emiratos Árabes Unidos
ECOMIB: Misión de ECOWAS en Guinea Bissau
ECOWAS: Economic Comunity Of West African States (Comunidad Económica de Estados de África Occidental)
EDA: Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)
EEBC: Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía
EEUU: Estados Unidos de América
EFDM: Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)

EIC: Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)
EIPJD: Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)
ELF: Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)
ELK: Ejército de Liberación de Kosovo
ELN: Ejército de Liberación Nacional
ENSF: Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)
EPC: Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)
EPL: Ejército Popular de Liberación
EPDF: Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)
EPP: Ejército del Pueblo Paraguayo
EPPF: Ethiopian People's Patriotic Front (Frente Patriótico Popular Etíope)
EPR: Ejército Popular Revolucionario
EPRDF: Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Eritreo)
ESL: Ejército Sirio Libre
ETA: Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)
ETIM: East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)
ETLO: East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)
EUAM Ukraine: Misión de Apoyo de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad Civil en Ucrania
EUAVSEC South Sudan: Misión de la Unión Europea en materia de seguridad de la aviación en Sudán del Sur
EUBAM: Misión de Asistencia Fronteriza de la UE a Moldova y Ucrania
EUBAM Libia: Misión de la Unión Europea de Asistencia y Gestión Integrada de Fronteras en Libia
EUBAM Rafah: Misión de Asistencia Fronteriza en el Paso Fronterizo de Rafah
EUCAP NESTOR: Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África
EUCAP SAHEL Mali: Misión de Naciones Unidas en el Sahel – Malí
EUCAP SAHEL Niger: Misión de Naciones Unidas en el Sahel - Níger
EUFOR ALTHEA: Operación Militar de la UE en Bosnia y Herzegovina
EUFOR RCA: Misión de mantenimiento de la paz de la UE en RCA
EUJUST LEX: Misión Integrada de la UE por el Estado de Derecho en Iraq
EULEX Kosovo: Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo
EUMM: Misión de Observación de la UE en Georgia
EUNAVOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta
EUPOL Afghanistan: Misión de Policía de la UE en Afganistán
EUPOL COPPS: Misión de Policía de la UE para los Territorios Palestinos
EUPOL RDC: Misión de Policía de la UE en RD Congo
EUSEC RDC: Misión de Asistencia de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad en RD Congo
EUTM Mali: Misión de la UE para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí.
EUTM Somalia: Misión Militar de la UE para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia
EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAR-LP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal
FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina
FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)
FDPC: Front Démocratique du Peuple Centrafricain (Frente Democrático del Pueblo Centroafricano)
FEWS NET: Red de Sistemas de Alerta Temprana Contra la Hambruna de USAID
FFR: Front des Forces de Redressement (Frente de Fuerzas de Reorganización)
FIS: Frente Islámico de Salvación
FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)
FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)
FOMUC: Force Multinationale en Centrafrique (Fuerza Multinacional de la CEMAC en RCA)
FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina
FPI: Front Populaire Ivoirien (Frente Popular Marfileño)
FPR : Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)
FPRC: Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique
Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro
FRF: Forces Republicaines et Federalistes (Fuerzas Republicanas y Federalistas)
FRODEBU: Front pour la Démocratie au Burundi (Frente para la Democracia en Burundi)
FRUD: Front pour la Restauration de l'Unité et la Démocratie (Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia)
FSN: Frente de Salvación Nacional
FUC: Front Uni pour le Changement Démocratique (Frente Unido para el Cambio Democrático)
FUDD: Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura
FURCA: Force de l'Union en République Centrafricaine (Fuerza de la Unión en la R. Centroafricana)
GAI: Global Acceleration Instrument (Instrumento de Aceleración Global)
GAM: Gerakin Aceh Merdeka (Movimiento de Aceh Libre)
GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados
GFT: Gobierno Federal de Transición
GIA: Grupo Islámico Armado
GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
HAK: Congreso Nacional Armenio
HaY: Harakah al-Yaqin (Movimiento de la Fe)
HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad
HDZ: Unión Democrática Croata
HDZ 1990: Unión Democrática Croata 1990

HM: Hermanos Musulmanes
HPG: Humanitarian Policy Group
HRW: Human Rights Watch
HUM: India Assam
IBC: Iraq Body Count
ICG: International Crisis Group
ICR/LA: Iniciativa de Cooperación Regional contra el LRA
IDG: Índice de Desigualdad de Género
IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre
IDP: Internally Displaced Person (Persona Desplazada Interna)
IEG: Índice de Equidad de Género
IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)
IGAD: Intergovernmental Authority on Development (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo)
IISS: International Institute for Strategic Studies
IMU: Islamic Movement of Uzbekistan (Movimiento Islámico de Uzbekistán)
INLA: Irish National Liberation Army (Ejército Irlandés de Liberación Nacional)
IRA: Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés)
ISAF: International Security Assistance Force (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad)
ISF: Misión de Estabilización Internacional en Timor-Leste
ISIS: Estado Islámico
IWF: Iduwini Volunteers Force
JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)
JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)
JMB: Jamaat-ul-Mujahideen (Asamblea de Muyahidines)
JTMM: Janatantrik Terai Mukti Morcha (Frente de Liberación del Pueblo de Terai)
KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenya)
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Unión de las Comunidades en Kurdistán)
KCP: Kangleipak Communist Party (Partido Comunista Kangleipak)
KDP: Partido Democrático de Kurdistán
KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo
KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)
KIO: Kachin Independence Organization (Organización para la Independencia Kachin)
KLNLF: Karbi Longri National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional Karbi Longri)
KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)
KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)
KNPP: Karenni National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)
KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)
KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)
KPF: Karen Peace Force (Fuerza de Paz Karen)
KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)
KRG: Gobierno Regional del Kurdistán
KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)
LeJ: Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi)
LeT: Lashkar-e-Toiba
LJM: Liberation and Justice Movement (Movimiento para la Liberación y la Justicia)
LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)
LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)
M23: Movimiento 23 de Marzo
MAA: Movimiento Árabe de Azawad
MAPP-OEA: Misión de la OEA de apoyo al proceso de paz en Colombia
MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra)
MDC: Movement for Democratic Change (Movimiento para el Cambio Democrático)
MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)
MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)
MFO: Fuerza Multinacional de Observadores para la supervisión del tratado de paz entre Egipto e Israel
MIB OEA: Misión de la OEA de Buenos Oficios en Ecuador y Colombia
MICOPAX: Mission de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (Misión de Consolidación de la Paz en R. Centroafricana de la CEEAC)
MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)
MINURCA: Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana
MINURCAT: Misión de Naciones Unidas para la República Centroafricana y Chad
MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en RCA
MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí
MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
MISCA: Misión de Apoyo a Rep. Centroafricana bajo Liderazgo Africano
MISMA: Misión Internacional de Asistencia a Malí
MIT: Organización Nacional de Inteligencia de Turquía
MJLC: Mouvement des Jeunes Libérateurs Centrafricains (Movimiento de los Jóvenes Libertadores Centroafricanos)
MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)
MLF: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)
MMT: Madhesi Mukti Tigers (Tigres Mukti Madhesi)
MNJTF: Multinational Joint Task Force (Fuerza Regional de Tarea Conjunta)
MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad
MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)

MONUC: Misión de las Naciones Unidas en la RD Congo
MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo
MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Superviviencia del Pueblo Ogoni)
MOVADEF: Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales
MPC: Mouvement Patriotique por la Centrafrique
MPRF: Madhesi People's Right Forum (Foro de los Derechos del Pueblo Madhesi)
MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)
MQM: Muttahida Qaumi Movement (Movimiento Nacional Unido)
MSF: Médicos Sin Fronteras
MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental
MVK: Madhesi Virus Killers (Asesinos de Virus Madhesi)
NC: Nepali Congress Party (Partido del Congreso Nepalí)
NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)
NDA: Niger Delta Avengers (Vengadores del Delta del Níger)
NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)
NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)
NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate
NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)
NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)
NLD: National League for Democracy (Liga Nacional por la Democracia)
NLFT: National Liberation Front of Tripura (Frente de Liberación Nacional de Tripura)
NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)
NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)
NNSC: Neutral Nations Supervisory Commission (Comisión de Supervisión de Naciones Neutrales)
NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)
NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)
NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia- Khaplang)
NSCN (K-K): National Socialist Council of Nagaland (Kole-Kitovi) (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia (Kole-Kitovi))
NSCN-R: National Socialist Council of Nagaland-Reformation (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Reforma)
NSLA: National Santhal Liberation Army) Ejército Nacional Santhal
OAS/AZ: Oficina de la OEA en Belice - Guatemala
OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas
OCI: Organización para la Cooperación Islámica
OEA: Organización de los Estados Americanos
OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)
OMC: Organización Mundial del Comercio
OMIK: Misión de la OSCE en Kosovo
ONG: Organización No Gubernamental
ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)
ONU: Organización de las Naciones Unidas
ONUCI: Operación de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire
OPC: Etiopía Oromiya
OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)
OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte
OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief
PALU: Parti Lumumbiste Unifié (Partido Lumumbista Unificado)
PARECO: Patriotes Résistants Congolais (Patriotas Resistentes Congoleses)
PCP: Partido Comunista del Perú
PCP: India Manipur
PDKI: Partido Democrático Kurdo
PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán
PLJ: Partido Libertad y Justicia
PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán
PLA: People's Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional)
PLJ: Partido Libertad y Justicia
PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PPP: Pakistan People's Party (Partido del Pueblo de Pakistán)
PPRD: Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia)
PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)
PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)
PYD : Democratic Union Party (Partido Unión Democrática de kurdos en Siria)
RAMM: Región Autónoma del Mindanao Musulmán.
RAMSI: Regional Assistance Mission to Solomon Islands (Misión Regional de Asistencia a las Islas Salomón)
RASD: República Árabe Saharaui Democrática
RCA: República Centroafricana
RDC: República Democrática del Congo
RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña
REWL: Red Egbesu Water Lions
RFC: Rassemblement des Forces pour le Changement (Coalición de las Fuerzas para el Cambio)
RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)
RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)
RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)
RSF: Rapid Support Forces
RTF: Regional Task Force (Grupo de Trabajo Regional)
SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)
SAF: Sudanese Armed Forces (Fuerzas Armadas de Sudán)
SCUD: Socle pour le Changement, l'Unité Nationale et la Démocratie (Plataforma para el Cambio, la Unidad Nacional y la Democracia)
SFOR: Fuerza de Estabilización de la OTAN en Bosnia y Herzegovina
SIGI: Índice de Instituciones Sociales y Género

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)
SLA: Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán)
SLA-Nur: Sudan Liberation Army-Nur (Ejército para la Liberación de Sudán, facción Nur)
SLDF: Sabaot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot)
SNNPR: Southern Nations, Nationalities, and People's Region (Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos Meridionales)
SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, Fuerzas Armadas de Sudán del Sur)
SPLA-IO: SPLA in Opposition
SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)
SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)
SSA-S: Shan State Army-South (Ejército del Estado Shan-Sur)
SSC: Sool, Saanag y Cayn
SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)
SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)
SSNPLO: Shan State Nationalities People's Liberation Organization (Organización Popular para la Liberación del Estado de las Nacionalidades Shan)
TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistán
TIPH: Presencia Internacional Temporal en Hebrón
TMLP: Terai Madhesh Loktantrik Party
TNLA: Ta-ang National Liberation Army (Ejército Nacional de Liberación Ta-ang)
TPIR: Tribunal Penal Internacional para Rwanda
TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigrayan)
TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan
UA: Unión Africana
UAD: Union pour l'Alternance Démocratique (Unión por la Alternancia Democrática)
UCPN-M: Unified Communist Party of Nepal (Maoist) (Partido Comunista Unificado de Nepal) [Maoísta]
UE: Unión Europea
UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)
UFDG: Union des Forces Démocratiques de *Guinée* (Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea)
UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de Fuerzas Democráticas para la Coalición)
UFF: Ulster Freedom Fighters (Luchadores por la Libertad del Ulster)
UFR: Union des Forces de la Résistance (Unión de las Fuerzas de la Resistencia)
UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de las Fuerzas Democráticas por la Unidad)
ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)
ULFA-I: United Liberation Front of Asssam-Independent (Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente
UNAMA: Misión de asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán
UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq
UNAMID: United Nations and African Union Mission in Darfur (Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur)
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas
UNDOF: Fuerza de Observación de la Separación de Naciones Unidas
UNEF: Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
UNFICYP: Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre
UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (o FPNUL)
UNIOGBIS: Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en Guinea Bissau
UNIPSIL: Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona
UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei
UNITAF: Unified Task Force (Fuerza de Tareas Unificadas)
UNLF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)
UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia
UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur
UNMIT: Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste
UNMOGIP: Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en la India y Pakistán
UNOCA: Oficina Regional de Naciones Unidas en África Central
UNOGBIS: Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau
UNOWA: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental
UNPOS: Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia
UNRCCA: Centro Regional de Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central
UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo
UNSCO: Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio
UNSCOL: Oficina del Coordinador Especial de Naciones Unidas para Líbano
UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia
UNMIT: Misión integrada de Naciones Unidas en Timor Leste
UNSOM: Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Somalia
UNTSO: Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua

UPC: Union pour la Paix en Centrafrique
UPDS: United People's Democratic Solidarity (Solidaridad Democrática del Pueblo Unido)
UPLA: United People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Unido)
UPPK: United People's Party of Kangleipak (Partido Unido Popular de Kangleipak)
UPRONA: Union pour le Progrès National (Unión para el Progreso Nacional)
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USAID: United States Agency for International Development (Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU)
USN: Union pour la Salut National
UTI: Unión de Tribunales Islámicos
UVF: Ulster Volunteer Force (Fuerza de Voluntarios del Ulster)
UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)
VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
VRAE: Valle entre los Ríos Apurímac y Ene
WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad
WPNLC: West Papua National Coalition for Liberation
YPG: People's Protection Unit (Unidad de Protección del Pueblo)
YPJ: Women's Protection Units (Unidades de Protección de Mujeres)
ZANU-PF: Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico)
ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización.

Los principales ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- Investigación. Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, los derechos humanos y la justicia transicional, la dimensión de género y la educación para la paz.

- Educación y formación. El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.

- Diplomacia paralela. La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, con diferentes actores y en diversos ámbitos de acción.

- Servicios de consultoría. La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.

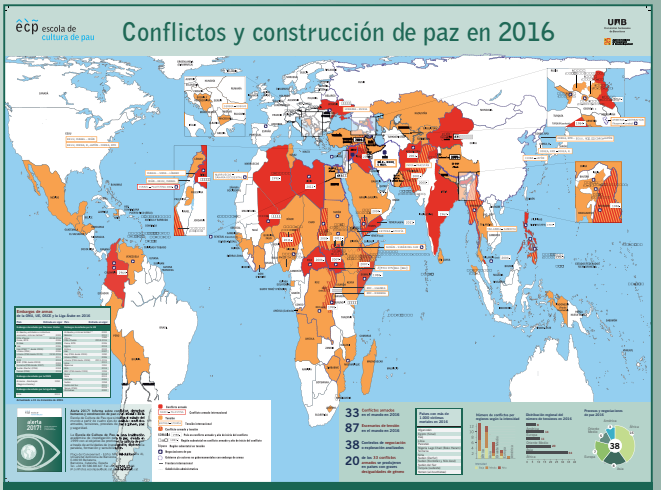
- Sensibilización. Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau
Parc de Recerca, Edifici MRA, Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (España)
Tel: +34 93 586 88 42; Fax: +34 93 581 32 94
Email: pr.conflictes.escolapau@uab.cat / Website: http://escolapau.uab.cat

Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de cuatro ejes: conflictos armados, tensiones, procesos de paz, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2016 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

Prefacio de Margarita Arboix
Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona

Prólogo de Tom Woodhouse
Profesor Emérito de resolución de conflictos,
Universidad de Bradford



MAPA de conflictos y construcción de paz desplegable en el interior

Quienes estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones a largo plazo a las crisis y convulsiones que afectan a tantas sociedades en ocasiones podemos estar tentados a adoptar las interpretaciones superficiales que presentan los medios de comunicación convencionales. El anuario *Alerta!* proporciona un antídoto ideal contra esas tentaciones, puesto que ofrece análisis profundos y diversos de todas las principales zonas en conflicto. Es más, propone caminos para avanzar para que todos los actores consideren cuando evalúan cómo transformar de la mejor manera esas hostilidades. Sería difícil encontrar una caja de herramientas más útil o exhaustiva para la construcción de la paz.

Colin Archer,
(ex) Secretario General, International Peace Bureau

Alerta 2017! es una obra de referencia fundamental para visibilizar el estado actual del mundo en relación a los conflictos armados, los derechos humanos y la construcción de paz. Ofrece un análisis global, profundo y riguroso de las causas y dinámicas de los conflictos, así como de la situación y evolución de los procesos de paz. Y contribuye a ampliar la mirada identificando oportunidades para la prevención, la gestión, la resolución y la paz. El anuario *Alerta!* de la Escola de Cultura de Pau es una fuente de información valiosísima e innovadora, imprescindible para los investigadores y trabajadores por la paz.

Ana Barrero Tiscar,
Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)

Alerta 2017! es una publicación de referencia obligada en el campo del análisis de conflictos, crisis y procesos de paz en el mundo. Aporta una visión global de los conflictos existentes y la construcción de paz a nivel internacional, señalando desde los escenarios de riesgo para el año en curso hasta las oportunidades de paz que se identifican. Cataluña, como país con una histórica vocación internacionalista y solidaria, necesita de publicaciones de la calidad de *Alerta 2017!*, un documento que es a la vez una aportación catalana a los esfuerzos globales para construir un mundo más justo, pacífico, democrático y sostenible.

Albert Royo Mariné,
Secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat)

Con el apoyo de:

UAB Universitat Autònoma de Barcelona

Generalitat de Catalunya

ACCD Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

9 788498 887877